

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
FACULTAT DE DRET

**EL COLEGIO DE ABOGADOS DE
VALENCIA.**

Del Antiguo Régimen al Liberalismo

Tesis doctoral presentada por:

D. Carlos Tormo Camallonga

Dirigida por:

Dr. Dn. Mariano Peset Reig

Dr. D. Jorge Correa Ballester

Valencia, 1998

UMI Number: U607486

All rights reserved

INFORMATION TO ALL USERS

The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted.

In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion.



UMI U607486

Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author.
Microform Edition © ProQuest LLC.

All rights reserved. This work is protected against
unauthorized copying under Title 17, United States Code.



ProQuest LLC
789 East Eisenhower Parkway
P.O. Box 1346
Ann Arbor, MI 48106-1346

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	
CC. SOCIALS	
BIBLIOTECA	
Nº Registre	26415
DATA	09/04/2001
SIGNATURA	BID.T 4438
Nº LIBIS:	1036390

Nº DOBIS 1036372

AGRAÏMENTS

Des d'aquesta pàgina vull expressar el més sincer agraïment a totes aquelles persones que m'han ajudat en la realització d'aquesta tesi.

En primer lloc, i molt especialment, als meus codirectors Dr. En Mariano Peset Reig i Dr. En Jorge Correa Ballester, catedràtics d'Història del Dret de la Universitat de València, ja que amb la seua orientació han sabut canalitzar els meus treballs.

També em naix un espontani agraïment a la resta de professors i companys de departament, per la seua ajuda desinteresada i per la gran paciència que han tingut amb mi.

I, com no, a tot el personal de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València i del Torn d'Ofici, que han posat totes les facilitats al meu abast.

A tots ells, moltes gràcies.

EL COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA.

Del Antiguo Régimen al Liberalismo

ÍNDICE

Abreviaturas	13
INTRODUCCIÓN	15
PRIMERA PARTE: EL COLEGIO DE ABOGADOS	
CAPÍTULO I: FUNDACIÓN Y ESTATUTOS	27
CAPÍTULO II: LA JUNTA Y SUS CARGOS	43
Tipos de juntas y lugar donde se celebraban	43
Cargos de la Junta	49
<i>Decano. Diputados. Maestro de ceremonias. Tesorero. Secretario</i>	
Elección de cargos	56
<i>Procedimiento y condiciones de la elección. Ausencia, enfermedad, muerte, promoción y renuncia de un oficio. Otros supuestos. El acto de posesión</i>	
Otros cargos	70
<i>Abogados de pobres. Consiliarios. Examinadores. Comisarios para la fiesta de la Asunción y de la Concepción. Prefecto. Otros</i>	
CAPÍTULO III: CORPORATIVISMO	89
Defensa del colegio y de sus individuos	90
<i>Defensa de la nobleza de la abogacía. Intrusismo. La mitad de las plazas nacionales. Defensa de los colegiados en su trato con la Audiencia. Colaboración con la Audiencia. Relación del colegio con otras instancias. El colegio de Valencia y los otros colegios</i>	
Sanciones y apercibimientos	137
<i>Actos contra el orden y el honor. Impago de cuotas. Decadencias</i>	
CAPÍTULO IV: CUENTAS DEL COLEGIO	151
Tesorero y contador	151

Legajo de cuentas	153
<i>Sumario. Recibos</i>	
Cuadro de cuentas	171
CAPÍTULO V: EL MONTEPÍO	177
Fundación del montepío y su primer reglamento	177
Ingreso	184
Riesgos	189
<i>Supervivencia. Accidente continuo o enfermedad habitual. Accidente repentino o enfermedad temporal. Muerte. Vejez</i>	
La Junta del montepío y sus cargos	200
<i>La Junta. Secretario. Contador. Tesorero. Protectores de viudas y pupilos</i>	
Finanzas	207
<i>Activo. Pasivo. Morosidad y expulsión de individuos</i>	
Limosnas del colegio	227
El nuevo reglamento de 1825	230
Cuadro de cuentas	234
 SEGUNDA PARTE: LOS COLEGIADOS	
CAPÍTULO VI: INGRESO DE LOS ABOGADOS EN EL COLEGIO	241
Graduación y pasantía	242
<i>Situación en 1762. Real cédula de 24 de enero de 1770 y plan de 1786. Reales órdenes del marqués de Caballero de 1802. El plan del Marqués de Caballero de 1807. Las Cortes de Cádiz. Circular del Consejo Real de 27 de octubre de 1818. Trienio liberal. Plan de 14 de octubre de 1824 y disposiciones posteriores. Plan de 4 de agosto de 1836. Arreglo provisional de 29 de octubre de 1836. Consideraciones finales</i>	
Recibimiento de abogado en el Real Acuerdo de Valencia	322
<i>Incapacidades. Procedimiento: examen de recibimiento. Incidencias políticas</i>	
Ingreso en el colegio	342
<i>Requisitos. Calidades. Procedimiento. Otros procedimientos de ingreso. Libro de matriculas y listas</i>	

Tres grandes etapas de incorporación	363
<i>Primera etapa: libre incorporación (1762-1794). Segunda etapa: exceso de abogados (1795-1811). Tercera etapa: aperturas y cierres (1811-1838)</i>	
CAPÍTULO VII: PERFIL DE LOS COLEGIADOS	415
Edad	415
Procedencia geográfica	421
Extracción social	430
<i>Profesiones. Cargos. Títulos</i>	
Los abogados y el ayuntamiento de Valencia	437
<i>Regidor. Diputado del común. Síndico personero. Síndico procurador general</i>	
Patrimonio de los abogados según el <i>Libro Padrón</i> de Valencia	443
 TERCERA PARTE: PLEITOS Y ALEGACIONES	
CAPÍTULO VIII: DESARROLLO DEL PLEITO	459
Poderes del procurador. Bastanteo	459
Abogados	465
Escritos de las partes	471
CAPÍTULO IX: UN ESTUDIO SOBRE LAS ALEGACIONES JURÍDICAS EN EL SIGLO XVIII	483
Objeto de las alegaciones	484
Forma de las alegaciones	495
Fundamentos jurídicos	500
<i>Doctrina. Derecho romano y canónico. Derecho real. Sentencias judiciales. Costumbre</i>	
Estilo y método del discurso	536
<i>Argumentación fáctica. Argumentación jurídica. Consideraciones finales</i>	
 CONCLUSIONES	 571
 FUENTES Y BIBLIOGRAFIA	 581

APÉNDICES	601
— Real provisión de Carlos III de 6 de febrero de 1762 por la que se aprueban los estatutos del colegio de abogados de Valencia	603
— Real provisión de Carlos III de 20 de marzo de 1778 por la que se aprueba el reglamento del montepío del colegio de abogados	623
— Relación de colegiados	645
— Relación de decanos	665
— Relación de diputados	667
— Relación de maestros de ceremonias	675
— Relación de tesoreros	677
— Relación de secretarios del colegio	679
— Relación de secretarios del montepío	681
— Procedencia geográfica de los colegiados	683
— Recibos del colegio	691
— Lista de colegiados del año 1794	699
— Mapas	707

ABREVIATURAS

A.I.C.A.V.:	Archivo del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.
A.H.N.:	Archivo Histórico Nacional.
A.M.V.:	Archivo Municipal de Valencia.
A.R.V.:	Archivo del Reino de Valencia.
A.U.V.:	Archivo de la Universidad de Valencia.
B.U.V.:	Biblioteca universitaria de Valencia.

INTRODUCCIÓN

La real provisión de Carlos III de 6 de febrero de 1762 sancionaba la fundación del colegio de abogados de Valencia y su incorporación por filiación al de Madrid. Al mismo tiempo le dotaba de unas constituciones que organizarían su vida corporativa hasta la publicación de los nuevos estatutos de 1838. Estas constituciones eran las del colegio de Madrid de 1732, ligeramente arregladas a las circunstancias de la audiencia de Valencia y su ciudad. Por lo tanto, los primitivos estatutos estarán vigentes durante 76 años, período en el cual la sociedad española sufrirá grandes transformaciones — especialmente en lo que al mundo del Derecho se refiere—, desde el Antiguo Régimen al Liberalismo.

El decano de los colegios de abogados españoles es el de Zaragoza, con unas primitivas ordenanzas que se remontan a 1578. Parece ser, incluso, que se trata del primer colegio de abogados del mundo. A él le siguieron los de Valladolid y Madrid, cuyas primeras constituciones datan de 1592 y 1596, respectivamente. No obstante, es posible que las primeras medidas sobre colegiación se otorgaran en Barcelona, en 1333. Todos los demás colegios, incluido el de Valencia, se fundaron en el siglo XVIII, sobre todo en su segunda mitad, y ya con un espíritu ilustrado y corporativo más propio de nuestro tiempo.

El hecho de haber escogido el colegio de abogados de Valencia como tema de mi tesis, obedece a la necesidad que había de realizar un estudio profundo sobre esta institución, tomando como base, fundamentalmente, las fuentes existentes. También obedece al interés que tiene el comprobar de qué manera las transformaciones y cambios que se produjeron durante estos decisivos y conflictivos años afectaron a una corporación como ésta, a caballo entre dos épocas. Nos situamos en un período de transición, de la Edad Moderna a la Contemporánea, de la monarquía absoluta a las cortes liberales, de una sociedad gremial a otra en la que terminará primando la voluntad individual y la libertad de ejercicio profesional. Se extinguen los gremios, según su concepción tradicional, pero no los colegios. Se trata de averiguar las

consecuencias que tuvo en el colegio el cambio de legislación que en estos momentos se estaba produciendo.

Por todo lo dicho, el estudio de la vida y del funcionamiento del colegio de abogados de Valencia a lo largo de todos estos años, no sólo se va a hacer desde un punto de vista estrictamente interno y colegial, sino intentando indagar, además, en la comunicación y relaciones que se dieron entre el mismo colegio y los demás organismos y entidades con los que estaba relacionado y compartía intereses, comunes o encontrados: fundamentalmente Universidad y Real Audiencia. Con aquélla porque, obviamente, el paso por las aulas era requisito indispensable para recibirse de abogado, y el recibimiento requisito también indispensable para colegiarse. Con la Audiencia estuvo relacionado por otras tres razones: en primer lugar, porque, como he dicho, todo graduado tenía que recibirse como abogado en el Real Acuerdo; en segundo lugar, porque la actuación del colegio estaba fuertemente condicionada por las decisiones de este tribunal y del Supremo Consejo; y, en tercer lugar, porque era en los tribunales, y especialmente en la Audiencia, donde ejercían su profesión los abogados colegiados.

Este trabajo se divide en tres partes o capítulos. La primera está dedicada al colegio en sí, a su funcionamiento a través de la Junta como órgano de dirección, y al estudio de los distintos cargos que la componían. También se incluye en esta parte, además de las cuentas del colegio, un estudio sobre el corporativismo en sentido amplio, esto es, la defensa que este organismo hacía de los derechos profesionales y privilegios personales de los abogados. Finalmente, el último apartado estaría dedicado al montepío y a la función mutualista que intentaba llevar a cabo. Se trata, en definitiva, de estudiar el colegio como entidad, al margen —en principio—, de las relaciones entre sus individuos. Y digo en principio, porque la defensa o proceder del colegio como corporación vendría condicionada en muchas ocasiones por el parecer de los miembros de la Junta; en otras ocasiones, será la actuación de algún individuo en su ejercicio profesional lo que determinará este proceder. Es decir, que las decisiones que se adoptan para el común de los abogados suelen tener su origen en actos particulares.

La segunda parte de la tesis se centra en el análisis de los colegiales. En primer lugar trataremos los requisitos que todo individuo debía reunir para

colegiarse: graduación, pasantía, recibimiento en los tribunales, y pruebas de ingreso. Aunque las decisiones que adoptó el colegio en la admisión de algunos abogados se pueden hacer extensibles a los demás, será un capítulo en el que no primará la capacidad de actuación del colegio, sino la aplicación que éste hace de las normas que se le imponen desde fuera, desde la Audiencia y, sobre todo, desde el Supremo Consejo. Se trata de mostrar las incidencias que en la colegiación tuvieron, por ejemplo, los sucesivos planes de estudio o las reformas en el recibimiento de abogado. Especial mención merecen las consecuencias que tuvo el establecimiento desde el Supremo Consejo de un *numerus clausus*; es decir, la prohibición de que los abogados en ejercicio de la ciudad de Valencia superase la cifra de cien. Medida con la que se pretendía evitar los males que según muchos autores ocasionaba a la nación el exceso de abogados. Se trata de un tema que condicionará en gran medida la vida del colegio durante muchos años, hasta el punto de hacer inaplicables muchos de sus estatutos, de ahí que le dedique una parte importante de la tesis. En segundo lugar, en este capítulo también estudiaremos las características personales de los colegiados: su perfil, desde su procedencia geográfica a sus riquezas personales. Los resultados nos permitirán averiguar el papel que desempeñaba el colegio y el ejercicio en la capital dentro de la abogacía de todo el reino de Valencia, así como su relación y la de sus individuos con el ayuntamiento de Valencia.

Finalmente, en la tercera parte estudiaremos las alegaciones jurídicas, es decir, el discurso de los letrados en la defensa de las causas, su forma de argumentar y defender posiciones ante los tribunales. Para ello previamente haremos un breve estudio de los pleitos y los escritos de las partes. Es interesante comprobar cómo en los escritos de los pleitos solían aparecer las firmas de varios abogados. Aunque esta tercera parte no se refiere ni afecta directamente al colegio ni a los colegiales, he considerado oportuno incluirla en la tesis como una forma de aproximarnos al método y estilo de trabajo de los abogados en su medio.

Como en cualquier investigación histórica, la primera tarea ineludible ha sido acudir a las fuentes: archivos y, en segundo lugar, bibliografía de la época. Además, y por tratarse de un estudio jurídico, los cuerpos legales

también revisten una gran importancia. Posteriormente, he completado la información con la bibliografía actual.

En cuanto a los archivos, el del colegio de abogados ha sido el punto de partida. Al contrario de lo que ocurre con los de otros colegios, el archivo de Valencia dispone de unos fondos bastante completos. En primer lugar, los libros de deliberaciones; a través de sus actas conocemos los asuntos que trataba la Junta y los problemas a los que se tenía que enfrentar. Además, se trata de unos libros completos, bien conservados y de fácil consulta, ya que su estructura es básica: cada acta viene encabezada por la fecha en que se celebra, lo que facilita la localización en el tiempo de las resoluciones. Todo ello hace que estos libros hayan sido la fuente básica y constante de referencia. Lo mismo cabe decir respecto de los libros de deliberaciones del montepío. En segundo lugar están los expedientes de incorporación. Si la vida colegial se representa en las actas de las deliberaciones, los expedientes de incorporación, y las pruebas de ingreso que en ellos se contenían, nos sirven de sólida base sobre la cual construir un estudio más detallado acerca de los propios colegiados: desde su edad hasta la familia y clase social a la que pertenecían. Pero sobre la naturaleza y estado de los abogados ha sido necesario acudir a otras fuentes, especialmente al Archivo Municipal de Valencia.

Por contra, la cuestión de las cuentas, tanto del colegio como del montepío, ha sido la más difícil de interpretar. Los fondos del colegio no son aquí tan completos.

El Archivo Municipal de Valencia y sus fondos sobre *Contribuciones Particulares* y, especialmente, el *Libro Padrón*, me han ayudado a reconstruir el patrimonio y la riqueza de los abogados en los primeros años del siglo XIX, en concreto en 1813. Hay que decir que son unos documentos difíciles de consultar, ya que están llenos de tachaduras y borrones. Por ello, cualquier análisis sobre los mismos tiene que ser hecho con cautela. Además, en la interpretación de las anotaciones he tenido que utilizar unas reglas propias, con lo que los datos pueden ser provisionales. Tanto en este estudio como en otros, siempre he intentado explicar el método que he seguido.

En el estudio sobre las universidades he distinguido dos apartados. Por una parte los grados de los colegiados, y por otra los planes de estudio de las

facultades de Leyes y Cánones. En cuanto a los grados en cada uno de estos derechos los he obtenido de los libros priorales y de grados del Archivo de la Universidad de Valencia, respecto a los graduados en esta universidad. Respecto a los graduados en la universidad jesuita de Gandía, he consultado los libros de grados de dicha universidad, que se encuentran en el Archivo Municipal de Valencia. Sobre estos últimos grados también me ha sido de gran ayuda el recuento de datos realizado por la doctora Pilar García Trobat. La razón de acudir a la universidad de Gandía es que hasta su clausura la mayoría de los colegiados se habían graduado en ella. En cuanto al análisis de los diferentes planes de estudios y su aplicación, me he servido fundamentalmente de la obra del profesor Mariano Peset Reig, muy abundante y completa. Por contra, el tema de las pasantías sigue siendo un campo de difícil acceso por, entre otras cosas, su escasa regulación jurídica y su dudosa vigencia en el siglo XIX, además de la poca bibliografía que existe.

Los fondos del Archivo del Reino de Valencia los he tenido que consultar para tres asuntos diferentes. En primer lugar, para el estudio de los abogados recibidos en su Real Acuerdo, su número y los trámites por los que tenían que pasar. En segundo lugar, para el estudio de las normas que se dictaban sobre abogados y sus colegios. Y en tercer lugar, para el estudio de los pleitos, como introducción de las alegaciones jurídicas. Los dos primeros han sido consultados en la sección del *Real Audiencia*, y el tercero en la sección de *Escribanías de Cámara*.

En el campo de la legislación, el Real Acuerdo actúa como mero intermediario entre el Supremo Consejo y el colegio, de forma que se limita a trasladar las resoluciones de aquél que afectan a éste, o a los abogados en general. Sin embargo, hay multitud de ocasiones en las que el Real Acuerdo adopta decisiones sobre casos particulares, a petición tanto del colegio como de individuos particulares. Normalmente son asuntos que previamente se han resuelto por la Junta del colegio y cuya decisión se ha recurrido. Y es aquí donde he encontrado uno de los mayores obstáculos en la reconstrucción de las situaciones. Son multitud los casos en que las actas de los libros de deliberaciones del colegio recogen la fecha de supuestos decretos que emanan del Acuerdo, sin que en sus libros conste que se hayan tratado dichos asuntos. En otros casos ni siquiera consta que se haya celebrado reunión en

ese día. Tampoco consta en los apéndices que se encuentran al final de los libros. Puesto que en el archivo del colegio apenas se conservan las comunicaciones o documentos remitidos por los otros organismos, no podemos conocer el contenido exacto de estas decisiones del Real Acuerdo.

Las alegaciones jurídicas proceden todas de la Biblioteca Universitaria de Valencia. Por su elevado número y la conveniencia de limitarme a un aspecto concreto de la realidad jurídica, con el fin de facilitar la exposición y la claridad de los resultados, me he centrado en las alegaciones cuyo tema central se refería a herencias o sucesiones.

Debo decir que no me ha sido necesario acudir en gran medida a los cuerpos legales anteriores a la *Novísima*, ya que la regulación de la abogacía en ellos es escasa. Más que nada los he consultado en cuanto a la prelación de fuentes dentro de la alegación de los distintos tipos de derechos en las alegaciones jurídicas, y en cuanto a los requisitos e incapacidades para abogar. Por contra, la *Colección Legislativa* del XIX ha sido objeto de consulta continua, ya que en estos momentos son muchas las disposiciones que nos interesan, especialmente por lo que respecta a los diferentes planes de estudio y a las modificaciones en el proceso de recibimiento.

Ya he dicho que la bibliografía sobre universidades es extensa. Pero no así la de colegios de abogados. Con motivo de la celebración del segundo centenario de muchos de ellos, algunos colegios han publicado una breve historia del suyo. Otros, están en la labor. No obstante, se trata de una bibliografía exigua, y a menudo muy descriptiva, en donde las alusiones a otros colegios no siempre son certeras. Tampoco ha sido fácil localizar ni conseguir estos libros, en unas ocasiones por su antigüedad, y en otras por su limitada edición —circunscrita casi siempre a sólo los individuos de cada colegio—. Algunos de ellos me los han remitido los propios colegios, lo cual desde aquí agradezco. Estos libros son de utilidad en cuanto que a través de ellos conocemos las medidas que otros colegios adoptaron ante problemas similares al de Valencia. Aun así, no son siempre situaciones trasladables, ya que los estatutos no siempre serán los mismos. Para el caso del colegio de Valencia, y como motivo del bicentenario de su fundación, Pedro Nácher Hernández escribió la obra, de referencia continua, *Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia*. La *Historia del Ilustre Colegio de Abogados de*

de Pedro Barbadillo Delgado es, como no, otro punto de referencia indudable. Su estudio es necesario por ser el colegio de la corte, y porque la filiación del colegio de Valencia suponía que sus decisiones se hacían extensibles a éste.

En cuando a la bibliografía de la época la he consultado especialmente para el tema de los pleitos y alegaciones jurídicas. Y, como no, los tratados sobre la abogacía y el discutido exceso de sus individuos.

Los apartados más laboriosos han sido, posiblemente, los que contienen tablas numéricas, listas o relaciones, especialmente el de *Perfil de los colegiados*. La razón fundamental es que los datos sobre los que he trabajado son limitados. En unas ocasiones, como en la *Edad*, he tenido que acudir a otros datos de referencia, como las partidas de bautismo. En otras ocasiones he tenido que adaptar situaciones de la época a la actual, como en la *Procedencia geográfica*. Y en otras ocasiones, como en el *Patrimonio según el Libro Padrón*, la localización de los abogados ha sido complicada por que las referencias que constaban de ellos no eran seguras. Además, las fuentes no son completas, por lo que los resultados no han podido extraerse sobre la totalidad de abogados. De todas maneras, he intentando generalizarlos.

Se trata, en definitiva, de estudiar cómo una corporación nacida en las postrimerías del Antiguo Régimen —con ciertos caracteres gremiales por lo que de excluyente comportaba—, trata de abrirse paso en un nuevo sistema que pretende la renovación de las estructuras sociales y jurídicas heredadas. Se buscará ahora desde la libertad de ejercicio, hasta la definitiva aplicación del Derecho patrio, pasando por la extinción de los privilegios de clase. El reflejo de estos temas en el funcionamiento del colegio es claro: desde la imposición de unos *numerus clausus* hasta la exigencia de las pruebas de limpieza de sangre o la lucha por el mantenimiento de las prerrogativas de los abogados. En este período de cambios, el colegio verá cómo las principales decisiones sobre la abogacía se adoptan desde los tribunales, vaciándose de contenido las facultades de su Junta. Hasta el punto de que en algún momento se pondrá en entredicho, incluso, la propia razón de ser del colegio.

PRIMERA PARTE:
EL COLEGIO DE ABOGADOS

CAPÍTULO I: FUNDACIÓN Y ESTATUTOS

El proceso de fundación del colegio de abogados de Valencia se inicia en 1748. Al menos de esta fecha datan las primeras noticias que conocemos. El día 30 de enero, y ante el escribano del rey Matías Gil, 38 abogados valencianos otorgaron poder a José Berní y Catalá para que instase las medidas convenientes, a fin de conseguir para Valencia un colegio de abogados, a imitación de los que ya existían en Madrid y Granada.¹ Estos 38 abogados, como veremos, son los que con mayor asiduidad desempeñarán los cargos de la Junta durante los primeros años de vida de la corporación.

El jurisconsulto valenciano Berní y Catalá (Valencia 1712-1787) se nos presenta, por manifestaciones propias, como el fundador del colegio. Su vastísima erudición y su extensa producción literaria, especialmente en lo que se refiere a la depuración de los textos de los códigos jurídicos españoles, le convierten, según palabras de Vicente Castañeda, en uno de los primeros intentos de crítica jurídica histórica.² De familia de antiguos ciudadanos del reino de Valencia, se doctoró en Leyes en la universidad de Gandía el 30 de junio de 1731,³ y se recibió de abogado en el Real Acuerdo de Valencia el 2 de septiembre de 1735,⁴ compaginando desde entonces la abogacía con las tareas literarias. Según manifestaciones propias, ingresó en el colegio de abogados de Madrid en 1747,⁵ e impresionado por los beneficios que esta institución reportaba para los abogados madrileños, dedicó todos sus empeños

¹ Archivo del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, caja 1, Documentos Fundacionales, 1748-1776, expediente 1, pág. 1. Véase también P. Nácher Hernández, *Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia*, Valencia, 1962, págs. 33 y sigs. Aunque en la mayoría de los documentos se haga referencia a 38 abogados, y en uno de ellos a 37, lo cierto es que son 39 las firmas que aparecen en este primer documento, además de la del escribano, que, por cierto, también habla de 38 abogados.

² V. Castañeda, "El doctor D. José Berní y Catalá, jurisconsulto valenciano", *Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales* 1 (1918) 187-235, pág. 188. Véase también págs. 353-437 y 548-596; y tomo 2 (1919) 101-144.

³ Archivo del Reino de Valencia, *Real Acuerdo*, libro 30, folio 35.

⁴ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 30, folio 39 B.

⁵ No obstante sus manifestaciones, Berní y Catalá no aparece en el libro de recibimientos del colegio de Madrid, si bien, parece ser que este registro no se llevaba con gran rigor. Véase P. Barbadillo Delgado, *Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, 3 vols., Madrid, 1956-1960, I, pág. 178; y II, págs. 231-283.

a la fundación de uno similar en Valencia. Es de destacar, también, la estrecha amistad que le unió con el otro gran jurista valenciano del siglo XVIII, Gregorio Mayans, con el que mantuvo una interesante y sustanciosa correspondencia.⁶

Dos son, a mi parecer, los centros de gravitación de la obra de Berní.

El primero es su interés por la correcta aplicación del Derecho real y su certero conocimiento, con el objetivo de subsanar las grandes diferencias que existían entre la teoría de este derecho y su aplicación en los tribunales. Interés que le llevó, en 1785, a denunciar ante el Supremo Consejo al claustro de Leyes de la universidad de Valencia por no enseñar las leyes de España. Esta actitud no fue sino el colofón a una carrera repleta de enemistades y sinsabores, fruto de la frustración por no conseguir ningún oficio público, largamente perseguido e igualmente denegado, en favor, al parecer, de otros pretendientes menos capacitados. En este sentido destacan obras como el *Manual de testar, dividir y partir, y Discurso contra la Instrucción de Escribanos de Joseph Juan y Colom*, de 1739; *El abogado instruido en la práctica civil de España*, de 1738; la *Práctica criminal*, de 1749, los *Apuntamientos sobre las Leyes de Recopilación de Castilla*, de 1760; o la *Disertación sobre la llave de la jurisprudencia española que escribe a sus pasantes*, de 1774.

En segundo lugar, y en estrecha relación con su interés por el Derecho patrio, se observa en su obra una constante preocupación por la formación y el prestigio de los abogados. Destacan aquí sus obras *El abogado penitente y el pleyto más importante*, de 1747; la *Carta que el Dr. D. José Berní y Catalá escribe a sus Pasantes*, de 1772; y, sobre todo, su *Resumen de los privilegios, gracias y prerogativas de los abogados españoles*, de 1764.

Sin embargo, son otras producciones suyas las que alcanzaron mayor éxito en su época: la *Instituta civil y real*, de 1745; y, sobre todo, su edición de las *Partidas* de 1767, movido en ambos casos por su destacable celo depurador sobre los errores en que, a su entender, incurrían la mayoría de los juristas a la hora de comentar los textos jurídicos.⁷

⁶ V. Castañeda, "El doctor D. José Berní y Catalá...", I, págs. 570-596, y II, págs. 101-144.

⁷ Para un completo estudio sobre la obra de Berní y Catalá véase V. Castañeda en "El doctor D. José Berní y Catalá... Se trata de un examen cronológico de todas sus producciones dividido en cuatro grupos: obras impresas, obras manuscritas, obras de las que únicamente se conoce su enunciado, y cartas. Véase también P. Nácher Hernández, *El Doctor José Berní y Catalá, su*

Como venía diciendo, Berní y Catalá averiguó en la corte, que para la fundación en Valencia de un colegio de abogados se requería, en primer lugar, la redacción de sus ordenanzas o estatutos y su aprobación por el Consejo de Castilla, y, en segundo lugar, la incorporación del colegio de Valencia al de Madrid. Por ello, y a instancias suyas, Juan Luis de Novela y Spinola, del Consejo de Su Majestad, convocó a todos los abogados de la ciudad —y no sólo a los otorgantes del poder anterior— para tratar sobre este asunto. Esta junta se celebraría el 16 de julio de 1755 en la sala de la congregación de nobles de la casa profesa de la Compañía de Jesús.⁸

En esta junta se encargó a los abogados Juan Bautista Monseny, Benito Delfi, Teodoro Martí, Antonio Puchaor y Jaime Lloris de la Torreta, que redactasen las ordenanzas. Pero el fallecimiento de los tres últimos y las enfermedades y ocupaciones de los otros dos impidieron un pronto resultado. Ante este retraso, se consideró que lo más sencillo sería adoptar para el futuro colegio las mismas ordenanzas que las que existían para el de la corte, para lo que se remitieron de nuevo poderes al doctor Berní. Éste ordenó convocar nueva junta general de todos los abogados de la ciudad, "para dar satisfacción de mi encargo y continuarse las diligencias para conseguir el fin".

A esta otra junta, que se celebró el día 22 de enero de 1759 en el mismo lugar que la anterior, sólo asistieron 31 abogados.⁹ Fue presidida, ante la ausencia de Luis de Novela, por Juan Antonio de Losada y Temes, también del Consejo de Su Majestad. En ella se eligió a los abogados Teodoro Botella, Tomás Salelles, Juan Bautista Navarro y José Berní, para que, en vista de las ordenanzas del colegio de la corte, adoptasen las medidas necesarias para la fundación del colegio de Valencia a imitación de aquél. Asimismo, se acordó que, efectuado, se diera de nuevo cuenta a la junta general para el otorgamiento de las correspondientes escrituras, y para suplicar la filiación al de Madrid y la aprobación del Real Consejo. Cuando hablamos de filiación nos

vida y su obra, Valencia, 1961; y F. de P. Momblanch y Gonzálbez, *Cien abogados ilustres del Colegio de Valencia*, Valencia, 1961, págs. 21-27.

⁸ Lo que conocemos de esta junta es por referencia en escritos posteriores, en donde no se especifican los abogados que asistieron. Véase, por ejemplo, A.I.C.A.V., caja 1, expediente 1, págs. 3-4.

⁹ A.I.C.A.V., caja 1, expediente 1, págs. 7 B-9 B. Llama la atención que de estos 31 abogados sólo 8 coinciden con aquellos 38 ó 39 que otorgaron los primeros poderes a Berní; los 23 restantes eran otros abogados distintos.

referimos a la pretensión de los abogados valencianos de hacer extensible a su colegio y a sus colegiados la normativa dada al de Madrid por el Supremo Consejo.

Para esta nueva junta general, el Dr. Berní dispuso convocar de nuevo a todos los abogados de la ciudad, con el apercibimiento de que, al que no asistiera se le tendría como si hubiera estado presente, y tendría que acatar lo acordado por el mayor número de los presentes. Se celebró en la iglesia de Calatrava el día 21 de marzo de 1759, y a ella convocó, el escribano Jcsé Gil, a 103 abogados, de los que sólo asistieron 61.¹⁰ Fue presidida por Juan Andrés de Losada, alcalde en la sala del crimen de la Audiencia de Valencia. El escribano que asistió a la junta, Vicente Albiñana, autorizó tres escrituras que los abogados presentes otorgaron: la primera, de fundación del colegio de abogados bajo los mismos estatutos que los del colegio de la corte; la segunda, de nombramiento de empleos; y la tercera, de otorgamiento de poderes en favor de estos cargos —o como ellos decían “oficiales”—.¹¹ De estas tres, la tercera no ha llegado hasta nosotros.

Según la primera escritura,¹² la "comunidad de abogados de esta ciudad" acordaba, por unanimidad y aclamación, constituirse como colegio de abogados y gobernarse por los estatutos del colegio de abogados de la corte, publicados en Madrid el 12 de agosto de 1732. También solicitaba del mismo colegio que le dispensara "el honor de la filiación, y quantos estatutos y decretos sean del asunto, para que les obedezcamos con la más profunda veneración",¹³ tal y como lo habían conseguido los colegios de Valladolid y Granada. Asimismo, se acordó en la misma escritura solicitar la aprobación del monarca y del Consejo de Castilla.

En junta particular del colegio —es decir, en junta a la que sólo asistían los cargos—, celebrada el 9 de abril, se otorgaron poderes en favor del procurador Pedro de Rueda y Osorio, para suplicar tanto la filiación como la real aprobación. También se acordó en la misma junta, que los ya decano y diputado segundo pasaran, en nombre del colegio, a dar cuenta de su

¹⁰ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 1.

¹¹ A.I.C.A.V., caja 1, expediente 1, pág. 12.

¹² A.I.C.A.V., caja 1, expediente 2.

¹³ A.I.C.A.V., caja 1, expediente 4, págs. 2-2 B.

formación a los señores presidente y regente de la Real Audiencia, y “demás a quienes sea necesario”.¹⁴

Según la segunda escritura, “y para en el caso de obtener la real aprobación, desde ahora para entonzes, y por mayoría de votos eligimos”¹⁵ como decano, a Juan Bautista Monseny; como diputado primero, a Benito Delfí; diputado segundo, a Francisco de Saboya; diputado tercero, a Pascual Yanes; diputado cuarto, a Tomás Salelles; maestro de ceremonias, a Pedro Abaás; tesorero, a Vicente Salvachuna; y como secretario, y por aclamación, a José Berní.

Los 61 abogados reunidos concedieron a los cargos elegidos las mismas prerrogativas que las establecidas en los estatutos del colegio de Madrid, para que pudieran disponer de la puntual observancia de todo lo conveniente en el de Valencia. Igualmente, manifestaron que quedaban sometidos a lo que estos elegidos determinaran.

En esta segunda escritura, y de forma similar en la anterior, la comunidad de abogados que intervino realizó la siguiente manifestación:

...prometemos que la presente escritura será cierta, válida y segura en todo tiempo bajo la obligación que hacemos de nuestros bienes y derechos y los de nuestro colegio havidos y por haver. Y damos poder a los jueces y justicias de Su Magestad y en especial a los de esta dicha ciudad que de todas nuestras causas pueden y deven conozer, a cuya jurisdicción nos sometemos a nuestros respective bienes, y para que al cumplimiento de todo lo preincerto nos apremien como por sentencia difinitiva dada por juez competente por nos pedida y consentida y pasada en authoridad de cosa juzada. Sobre que renunciamos las leyes, fueros y drechos de nuestro favor y la general en forma.¹⁶

Volviendo a los trámites de fundación del colegio, en la junta particular celebrada el 6 de noviembre de 1759 se leyó una carta del decano de Madrid, por la que se comunicaba que este colegio había admitido al de Valencia como filial, en la junta de 31 de julio de 1759,¹⁷ con la condición de que previamente obtuviera licencia y aprobación del Consejo de Castilla, por estar el colegio de

¹⁴ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 2.

¹⁵ A.I.C.A.V., caja 1, expediente 3, págs. 2-2 B.

¹⁶ A.I.C.A.V., caja 1, expediente 3, págs. 3-3 B, y expediente 4, págs. 3 y 4.

¹⁷ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 3.

Madrid sujeto a él. Por ello, el colegio de Valencia acudió al Supremo Consejo el 4 de septiembre del mismo año, con la pretensión de que le fuera aprobada dicha incorporación por filiación y, en su consecuencia, declarara que todos los decretos, autos acordados y providencias promulgadas y expedidas a favor del colegio de la corte se entendiesen extensivos al de Valencia, su decano y demás colegiales, aplicándose igualmente en la Real Audiencia de Valencia y su jurisdicción.¹⁸

El Consejo remitió real despacho a la Audiencia de Valencia, solicitando informe y opinión sobre la incorporación pretendida.¹⁹ Por lo que por junta particular de 2 de noviembre de 1759 se acordó que el decano, el diputado segundo y el secretario suplicasen al regente y demás señores la mayor prontitud en el informe.²⁰ A pesar de la insistencia de los abogados valencianos en la redacción y libramiento de dicho informe,²¹ éste data del 5 de octubre de 1761. Habían transcurrido cerca de dos años desde su primera solicitud. No obstante, no hay motivos para pensar que este retraso fuera intencionado, más bien lo que muestra es la lentitud que caracterizaba el funcionamiento de las instituciones del Antiguo Régimen. Y así, definitivamente, el Consejo, a la vista del informe del fiscal, accedió a la pretensión de los abogados por auto de 14 de diciembre de 1761, en el que se decía así:

...emos tenido por bien de dar al referido Colegio de Abogados de la Ciudad de Valencia la incorporación que ha solicitado por filiación del de esta Corte; y declarar que todos los decretos, autos acordados y providencias promulgadas y expedidas a su favor, sean y se entiendan comprehensivas a el de Valencia, su decano e individuos, de el mismo modo que si para él se hubiesen librado, obrando igual efecto en la referida nuestra Audiencia de Valencia y su jurisdicción sin diferencia alguna, gobernándose, como mandamos se gobiernen, por los estatutos del de esta Corte, que hemos tenido por bien de corregir y limitar, arreglándolos, como corresponde, a las circunstancias y estado de dicha ciudad, la nuestra audiencia y sus abogados...²²

¹⁸ A.I.C.A.V., caja 1, expediente 7, pág. 2.

¹⁹ A.I.C.A.V., junta particular de 2 de noviembre de 1759 y caja 1, expediente 4, pág. 6.

²⁰ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 2 B.

²¹ A.I.C.A.V., junta particular de 13 de febrero de 1760, libro 4, pág. 4 B.

²² A.I.C.A.V., caja 1, expediente 4, folio 4.

La real provisión de 6 de febrero de 1762, de Carlos III, vista en el Real Acuerdo de Valencia el 15 de febrero,²³ sancionaba este auto. En ella se incluían los 38 estatutos por los que el colegio de Valencia se regiría, en adelante y hasta la entrada en vigor de los estatutos de 1838.²⁴

En ningún momento los estatutos especifican los objetivos para los que fue erigido el colegio. Desde una primera lectura, se diría que el motivo principal fue "procurar la salud espiritual de los presentes" y la invocación y culto a la Virgen María de la Asunción, puesto que además de un colegio, se fundaba una congregación. Pero esto no debe hacernos olvidar que, aunque nada de ello constara por escrito, lo que movía principalmente a los abogados valencianos era, sin duda, la defensa conjunta de sus intereses como colectividad, especialmente —y como iremos comprobando— frente a la Real Audiencia. De cualquier manera, se trata de unos estatutos exigüos en su contenido, y en cierta medida preocupados por la imagen que podía ofrecer el colegio y sus individuos hacia el exterior. Tan sólo alcanzan un cierto desarrollo en la regulación de las "calidades" que se exigían de todo abogado que pretendía la incorporación. También se extienden, aunque menos, en las funciones del maestro de ceremonias, oficio de cometidos esencialmente formales.

Por su contenido, podemos agrupar los 38 estatutos en los siguientes apartados:

- Estatutos I a V: De la patrona y las fiestas religiosas del colegio.
- Estatutos VI a XII: De los oficios de la Junta del colegio, su elección, ausencias y promociones.
- Estatuto XIII: De los abogados de pobres.
- Estatutos XIV a XV: Del orden y funcionamiento de las juntas.
- Estatutos XVII a XXIV: De la incorporación de abogados, calidades que debían reunir, y pruebas de ingreso.

²³ Archivo del Reino de Valencia, libro 57, págs. 10 B y 242-267 B.

²⁴ Podemos encontrar un ejemplar impreso de estos estatutos, que data del mismo año 1762, en la Biblioteca Universitaria de Valencia, *Varios* 298, número 12. El ejemplar original manuscrito, en el que al final se ordena su impresión, se encuentra en el A.I.C.A.V., caja 1, expediente 7. En este archivo también encontramos una nueva impresión, ordenada por la

— Estatutos XXV y XXVI: Del intrusismo y los abogados de otros colegios.

— Estatutos XXVII a XXXIII: Del entierro, misas y socorros de los colegiados fallecidos y sus viudas.

— Estatutos XXXIV y XXXV: De los caudales.

— Estatuto XXXVI: Del archivo.

— Estatuto XXXVII: De las modificaciones de los estatutos.

— Estatuto XXXVIII: De la filiación.

El auto de 14 de diciembre y la posterior real provisión de 6 de febrero de 1762 disponían que el colegio de Valencia se rigiera por los estatutos del colegio de la corte de 1732 —cuarenta en total—, pero corregidos y limitados a las circunstancias y estado de aquella ciudad, su audiencia y sus abogados. Las diferencias de contenido son muy pocas, aparte de las referencias que los estatutos de Madrid hacen a decisiones de su Junta anteriores a aquel año, y a sus estatutos precedentes de 1596.²⁵ En este sentido, se reduce el número de abogados de pobres. Mientras que en Madrid eran cuatro, en Valencia sólo dos. Por lo que se refiere a la acreditación de las calidades que debía reunir el aspirante a colegial, mientras que en Madrid debían ser justificadas por doce testigos, en Valencia sólo se requerían seis, y mientras que allí se requerían las fes de bautismo del pretendiente, sus padres y abuelos —paternos y maternos—, aquí no se requerían estas cuatro últimas.

Hay otras cuestiones en los estatutos de Valencia que no encuentran su correlativo en los de Madrid. El estatuto XIX de los de Valencia contemplaba

Junta del colegio el 16 de abril de 1791, en la que tan sólo se observan algunas modificaciones ortográficas con respecto al anterior.

²⁵ Véanse los estatutos de Madrid de 1596 y 1732 en R. Pérez Bustamante e Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, *El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 1596-1996* (IV Centenario), Madrid, 1996, págs. 136-140 y 216-223. Sobre los estatutos de 1732 también puede verse una copia impresa de 1761 en: Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, *Segundo Centenario de su Fundación 1776-1976*, Málaga, 1983, págs. XLI-XCI. Los estatutos de 1732 “tenían la novedad sobre los Estatutos anteriores de la injerencia del poder público en la afiliación de los colegiados, mediante la fiscalización que el Consejo de Castilla a través de sus órganos se reservaba en los informes que previos a la incorporación debía dar. Aparte el expediente de limpieza de sangre, la investigación genealógica y la farragosa información testifical, el Consejo exigió y obtuvo fuera obligatorio el informe de la Autoridad acerca de los solicitantes.” Véase J. Santos Torres, *Apuntes para la Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla*, Sevilla, 1994, pág. 36, en donde cita a M. García Venero, *Orígenes y Vida del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, Madrid, 1971, pág. 135.

la dispensa de las pruebas de ingreso para todos aquellos abogados que hubieran sido recibidos con anterioridad al día de la expedición de la real provisión. Por providencia del Consejo de 28 de junio de 1765 esta exención se amplió a todos aquellos graduados, en Leyes o Cánones, que en aquel momento estuvieran ejerciendo la abogacía en sus pasantías, o tribunales eclesiásticos y otros no dependientes de la Real Audiencia.²⁶

Igualmente, también hay una serie de estatutos de los de Madrid sin su equivalente en Valencia: el XXXV, sobre sus caudales propios al margen de las propinas de entrada; el XXXVII, sobre las imágenes y alhajas; y el XXXVIII, sobre la ubicación del colegio.

El estatuto XXXVII de los de Valencia permitía modificar, “añadir o quitar algo” de los estatutos “si por la variedad de los tiempos pareciere”. En base a esta posibilidad se produjo la única modificación formal que se llevó a cabo en los 76 años en que estuvieron vigentes las primeras constituciones. Fue en 1836, y se refería a las calidades que se exigían de los abogados que pretendían la incorporación. No obstante, con los años se fueron cambiando algunas prácticas e introduciendo nuevos actos que los estatutos no contemplaban.

Otros colegios de abogados

La fundación del colegio de Valencia no constituye un hecho aislado en el corporativismo de los abogados españoles del siglo XVIII. A lo largo de esta centuria, abogados de diferentes ciudades españolas deciden hacer lo propio, al valorar los beneficios y ventajas que los abogados madrileños habían conseguido con su colegio. Por ello, en la mayoría de las ocasiones, estos nuevos colegios se constituyeron como filiales del de Madrid. Los logros que había obtenido el colegio de la corte en su lucha contra el intrusismo, en pro de la dignificación de la profesión, de la capacitación de los futuros abogados, o, incluso, en materia de beneficencia, determinaron que incluso los colegios fundados con anterioridad al de Madrid, y con sus propias ordenanzas, también solicitaran y consiguieran más tarde su filiación y la extensión de los

²⁶ Otro punto no tratado en los estatutos de Madrid era la propina de entrada, que en Valencia quedaba fijada en cuatro pesos (estatuto XXIII).

estatutos de la corte.²⁷ Se trata de los colegios de Zaragoza, en 1744, y de Valladolid, en 1758.²⁸

La mayoría de los restantes colegios se establecieron directamente como filiales del de Madrid. Son los casos de los colegios de Sevilla, fundado en 1706, y de Granada, que ya existía en 1726, a los que se les aplicarían todavía los estatutos de Madrid de 1596. Posteriormente se observarían en ellos los estatutos de 1732, como así recogía el XXV de estos últimos.²⁹ En estos casos los estatutos de Madrid se trasladaron en su integridad, sin *corregir* ni *limitar*, ni *arregándolos* a las circunstancias y estado de aquellas ciudades y sus chancillerías, como ocurrió en el caso de Valencia. Al parecer, los estatutos de Valencia, son, junto con los de Zaragoza,³⁰ los únicos que se presentan como una adaptación de los de Madrid.

Bajo la vigencia de las nuevas ordenaciones de Madrid de 1732 aumentaron las filiaciones de otros colegios: La Coruña, en 1761; Valencia, en 1762; México, en 1766; Málaga, en 1776; Oviedo, en 1777; Córdoba, en 1778;

²⁷ P. Barbadillo Delgado, *Historia del Ilustre...*, II, págs. 133-148.

²⁸ Del *Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza* datan sus primeras ordenanzas de 15 de mayo de 1578, aunque su libro de matrículas comenzaba en 1546. A su vez, este colegio tenía como antecedente a la *Cofradía de Letrados del Señor San Ivo*, cuya existencia se remota, al menos, hasta 1546 y que, según algunos, se constituye como la congregación de abogados más antigua de España. Véase L. del Campo Armijo, *El Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (1546-1952)*, Zaragoza, 1952, pág. 13. En cuanto al de Valladolid, sus ordenanzas datan de 1592; F. García Marroquín, *Reseña histórica del ilustre Colegio de Abogados de Valladolid*, Valladolid, 1881, págs. 18 y sigs. En 1598 Felipe III autoriza algunas reformas (pág. 26). Véase también P. Barbadillo Delgado, *Historia del Ilustre...*, I, pág. 31, y II, pág. 200.

²⁹ Para el colegio de Sevilla véanse los estatutos de 1832 en J. Santos Torres, *Apuntes para la Historia...*, págs. 195-219. Parece ser que desde la real provisión del Consejo de 18 de noviembre de 1706, en que se aprueba la incorporación por filiación de este colegio al de la corte, hasta la primera junta —que fue general—, celebrada el 20 de septiembre de 1732, no existieron decanos ni juntas de gobierno, ni nada que se pareciera a la vida corporativa, que, como tal, se inició realmente con los nuevos estatutos (págs. 28 y sigs.). Véase también E. Llach y Costa, *Reseña Histórica del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla*, 2 vols., Sevilla, 1928, I, págs. 59 y sigs. Respecto al colegio de Granada, las primeras noticias que de él se tienen datan de 1692. No obstante, parece que no se trataba más que de una devota congregación de abogados. En 8 de mayo de 1726 el decano de Madrid convoca a los diputados para tratar sobre la incorporación y extensión de estatutos solicitada por los abogados de la chancillería de Granada, lo que se aprueba en junta de 19 de julio. Finalmente, se confirma la aprobación por auto del Consejo de Castilla de 14 de agosto. Véase E. De Lapresa Molina, *Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Granada 1726-1850*, Granada, 1976, págs. 56 y sigs.

³⁰ El que los estatutos de Zaragoza sean una adaptación de los de Madrid, y no los mismos, lo sustento en el hecho de que existiera, por ejemplo, un decano segundo junto con el primero, además de los cuatro diputados. Así fue al menos hasta 1777, en que se decidió suprimir este segundo cargo, siguiendo el modelo —según el acta de 26 de mayo— de otros colegios; entre

Palma de Mallorca, en 1787; y Cádiz, en 1797.³¹ En 1764 solicitaron fundar colegio y su filiación los abogados de Jerez de la Frontera, sin que, al parecer, lo consiguieran durante este siglo. Ya en el siglo XIX tan sólo lo intentó el de Toledo.³²

Según Santos Torres, en su estudio sobre el colegio de Sevilla:

Los recién aprobados estatutos de 1732 del Colegio de Madrid presentaban para los Colegios que se afiliaban al de la Corte, primeramente, la pertenencia al citado Colegio de Madrid, después ganar la antigüedad de la fecha de ingreso en el Colegio madrileño, y la facultad para los Abogados que se trasladaran a la Corte en defensa de algún asunto profesional, de ser habilitados en el ejercicio simplemente con una autorización del Decano.³³

En mi opinión, este autor sobrevalora las pretensiones que los abogados de los nuevos colegios pudieran esperar como posibles ejercientes en Madrid. Más bien entiendo que lo único que buscaban era su mejora profesional en su propia ciudad, para lo que les ayudaría en gran medida la filiación y, por consiguiente, la extensión de las prerrogativas de los abogados de la corte.

ellos el de Madrid. Entre los años 1830 y 1839 se retoma la costumbre de nombrar un segundo decano. L. del Campo Armijo, *El Real e Ilustre...*, pág. 25.

³¹ P. Barbadillo Delgado, *Historia del Ilustre...*, II, págs. 195-201. Aunque este autor afirma que el colegio de Cartagena también se incorporó por filiación al de Madrid el 28 de febrero de 1773 —pág. 200—, no he podido comprobar este extremo. Es más, su fundación data, según Agulló Benedi, de 16 de noviembre de 1849. Véase C. Agulló Benedi, *Pequeña y verídica historia del Colegio de Abogados de Cartagena*, Cartagena, 1986, pág. 15. El colegio de La Coruña se funda con los mismos estatutos que el de Madrid por real cédula de 1 de febrero de 1761. Véase C. Martínez-Barbeito y Morás, *La Fundación del Ilustre Colegio de Abogados de La Coruña*, La Coruña, 1974, pág. 13. El colegio de Málaga quedó afiliado al de Madrid por real provisión de 7 de agosto de 1776, que, al mismo tiempo, le dotaba de sus mismos estatutos. Véase Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, "Expediente de constitución del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga" y "Primeros estatutos del Ilustre colegio de Abogados de Málaga", *Segundo Centenario...*, págs. I-XXXVIII y XXXIX-XCII. El colegio de Palma de Mallorca fue fundado por real cédula de Carlos III de 23 de octubre de 1779, que le dotaba de unos estatutos copia de los de Madrid. Sin embargo, Barbadillo Delgado retrasa hasta 1787 su filiación al de la corte; filiación que no parece estar del todo clara. Ya en 1767 un grupo de abogados de la ciudad se había reunido con el objeto de constituirse en colegio, redactando un proyecto de estatutos que no llegaron a ser aprobados. Véase A. Verd Noguera, "Notas históricas de la fundación del Colegio de Abogados", *Revista Missèr Tribuna* (publicada por este colegio). Según Antonio Fernández, en *La abogacía en España y en el mundo*, 3 vols., Madrid, 1955, III, págs. 58-61., el colegio de abogados de Santiago de Compostela se fundó en 1798, lo que no he podido comprobar. Más bien parece que data de 16 de noviembre de 1844. Hay una creencia extendida de que ya existía con anterioridad, al menos como gremio, si bien este extremo no se ha podido confirmar Véase B. Cores Trasmonte, *Historia do Colexio de Avogados de Santiago*, Santiago de Compostela, 1990, pág. 73.

³² P. Barbadillo Delgado, *Historia del Ilustre...*, II, pág. 201, y III, pág. 146.

Otros colegios que se fundaron en la misma época, pero sin afiliarse al de Madrid, fueron el de Canarias, en 1768; el de Oviedo, en 1775 —que se afilió dos años después—; el de Cáceres, en 1799; o el de Pamplona, —algo posterior—, en 1818.

El colegio de Canarias tenía sus propios estatutos. Además, ni en la voluntad de sus colegiados ni en la real cédula de 28 de abril de 1768, por la que se aprueban las ordenanzas, observamos indicio alguno sobre su filiación al de Madrid, que, al parecer, no existió en ningún momento. De hecho, son numerosas las diferencias con respecto a los estatutos de la corte. Destaca la decisión del Consejo de suprimir el capítulo sexto de los presentados por los abogados canarios, en el que se regulaba la elección del prefecto. Hay que tener en cuenta que recientemente se había procedido a la expulsión de los jesuitas, a cuyo cargo quedaba este oficio en los colegios ya fundados. De esta forma el colegio adquiriría un carácter más secular, poco habitual en la época. El número de individuos de la Junta dependería del número de colegiados que existiera. En el caso de ser superior a doce, los miembros de la Junta serían los ocho más antiguos, contándose entre ellos al decano —el más antiguo de todos—, al maestro de ceremonias, al diputado de fiestas, tesorero y secretario. También destaca la obligatoriedad de celebrar al menos una junta ordinaria al principio de cada mes y otra general cada seis.³⁴

El colegio de Oviedo, sin embargo, sí se afilió al de Madrid, pero después de conseguir la aprobación de sus propios estatutos como colegio autónomo. En 1772, catorce de los 16 ó 17 abogados que ejercían en esta ciudad redactan y envían al Supremo Consejo un proyecto de estatutos que, tras el informe favorable del fiscal y de la Real Audiencia de Asturias, es aprobado por auto del Consejo de 18 de julio de 1775 y sancionado por real provisión de 29 de agosto, sin apenas modificación con respecto al proyecto inicial. Pero estos estatutos eran muy similares a los de los otros colegios. Con respecto a los de Valencia sólo se diferenciaban en que en su Junta no

³³ J. Santos Torres, *Apuntes para la Historia...*, pág. 14.

³⁴ M. A. Alzola González, *Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas*, Las Palmas de Gran Canaria, 1786, págs. 96 y sigs. Es de destacar el olvido de los redactores de las ordenanzas de incluir en ellas la prohibición expresa del ejercicio para los no colegiados. Para remediar esta falta se suplicó del Consejo Real despacho aclaratorio, que se concedió el 28 de

existían los oficios de diputado tercero y cuarto, y los abogados de pobres eran cuatro y no dos. No obstante, apenas transcurrido medio año, el colegio de Oviedo acuerda en junta general de 19 de febrero de 1776 solicitar su filiación al de Madrid, que no opone reparo alguno, siempre que se concediera dicha filiación por el Consejo, y se conformaran sus estatutos y la formalidad de las pruebas a los suyos. Finalmente, por auto del Supremo Consejo de 7 de marzo de 1777 y real provisión de 11 de marzo, se concede la incorporación por filiación “con la calidad que a los demás colegios de Sevilla, Granada y otros por vía de filiación, y conformando sus estatutos y la formalidad de las pruebas con los del expresado colegio de esta corte”.³⁵ Por lo tanto, Oviedo continuaría con sus propios estatutos, pero modelados en su aplicación por lo dispuesto en los de Madrid.³⁶

Los abogados de Cáceres tan pronto consiguieron el establecimiento de la audiencia de Extremadura se afanaron por conseguir también su propia corporación. En 29 de marzo de 1794 obtuvieron autorización del Real Acuerdo para colegiarse, previa aprobación de los correspondientes estatutos, lo que no se consiguió hasta la provisión del Supremo Consejo de 19 de febrero de 1799. En cuanto a las diferencias con los estatutos de otros colegios, destaca que los diputados fueran sólo dos, y que el prefecto fuera miembro de la junta de gobierno, posiblemente en substitución del maestro de ceremonias.³⁷

Otra fundación singular es la del colegio de Pamplona, cuyos estatutos fueron aprobados por la ley 104 de las cortes de Navarra de 1818 — sancionada por decreto del virrey de 13 de agosto—, y que fue admitido bajo la protección del Real y Supremo Consejo de Navarra por decreto de 10 de diciembre del año siguiente. Pero tampoco parece que sus estatutos fueran muy diferentes a los de Madrid o Valencia; en concreto, la Junta se componía de los mismos cargos. Destaca, no obstante, la detallada regulación de las

junio de 1771, y por el que se les impedía abogar en la audiencia y demás tribunales de la ciudad, pero no en los de los demás pueblos de las islas.

³⁵ M. Corripio Rivero, *Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo*, Oviedo, 1974, págs. 5 y sigs., en concreto pág. 9.

³⁶ De hecho, la elección de los cargos de la Junta en 1815 reviste cierta importancia por cuanto se busca en ella una fórmula de transacción entre lo ordenado por los estatutos y la práctica que se observaba desde la incorporación en el de Madrid. Asimismo, en la junta general de 12 de julio de 1830 se exponen las diferencias que existían entre ambas ordenanzas. Véase M. Corripio Rivero, *Historia del Ilustre...*, págs. 14 y 15.

³⁷ P. Hurtado, *Tribunales y abogados cacereños*, Cáceres, 1910, págs. 44-45.

multas y sanciones que el decano estaba capacitado para imponer a los que contravinieran las constituciones y los acuerdos de la Junta, así como a los que llevaran a cabo prácticas contrarias a la ética profesional. También destaca la intención de establecer una academia de Jurisprudencia práctica.³⁸

Respecto al colegio de Barcelona, parece ser que ya existía mucho antes de que la real cédula de 27 de noviembre de 1832 ordenara la creación de colegios en todas las capitales “donde haya suficiente número de abogados”.³⁹ En 1333 Alfonso III concedió privilegio a los abogados de Barcelona para constituirse en colegio —que no cofradía— durante diez años. El colegio estaría regido por un rector o prior y cuatro consejeros, elegidos todos ellos anualmente por los propios abogados, cuya incorporación en la corporación sería imprescindible para ejercer en su demarcación. El rector, asesorado por los consejeros, conocería de los honorarios excesivos, dilaciones inútiles en los pleitos y demás abusos de los abogados. Además, podría dictar las ordenanzas convenientes para el ejercicio de la abogacía e, incluso, podría apartar definitivamente del oficio al letrado incorregible. En 1343 los abogados de la ciudad solicitaron la reiteración del privilegio, pero Pedro III lo anuló ante las presiones del municipio por ser él mismo quien regulara la abogacía. En unas ordenanzas del municipio de 1399, aprobadas por el rey Martín, se creó el cargo de prior de juristas, que, asistido de dos consejeros, controlaría mediante un libro de matrículas tanto a los abogados como a los jueces que ejercían en la ciudad, y les recibiría los oportunos juramentos. Además, les reuniría al menos una vez al mes para recibir las quejas, tanto suyas como las que se presentaban contra ellos, así como para corregirlos. Los cargos de prior y consejeros serían elegidos por el *veguer*, el baile, los *consellers* de Barcelona y los juristas que para este efecto designaban estos cargos. Todos estos cargos juntos podían dictar estatutos y ordenanzas para el buen hacer de la abogacía y la judicatura. En 1444 la

³⁸ F. Salinas Quijada, “La abogacía foral”, *Navarra. Temas de cultura popular* 54 (1981), págs. 22-29. Este autor hace referencia a que varios abogados ya habían intentado erigir un colegio en el siglo pasado, obteniendo real cédula de 18 de noviembre de 1790. Véase también J. Yanguas y Miranda, *Diccionarios de los fueros del Reino de Navarra, y de las leyes vigentes promulgadas hasta las cortes de los años 1817 y 18 inclusive*, San Sebastián, 1828.

³⁹ *Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII, y de la Reina su Augusta Esposa*, XVII, págs. 272-275.

facultad de corregir a los juristas pasaría a ejercerse por los *consellers* de la ciudad.⁴⁰

⁴⁰ F. Valls-Taberner, "Los abogados en Cataluña durante la Edad Media", *Obras selectas*, 4 vols., Madrid-Barcelona, 1954-1961, II, págs. 281-318, en concreto págs. 295-301. Aunque este autor utiliza continuamente el término colegio, no sabemos hasta qué punto la corporación de abogados de Barcelona constituía un colegio en sí, al menos tal y como lo entendemos para los otros colegios de abogados. Hay que tener en cuenta que el mismo término colegio no es unívoco. Desde el punto de vista organizativo, si con el privilegio de Alfonso III se fundó una asociación autónoma, por cuanto sus cargos eran elegidos por sus propios individuos, las ordenanzas de 1399 y más aún las de 1444 insistieron en las potestades del municipio. Desde el punto de vista funcional, no sabemos en qué medida la defensa de los intereses de los abogados aparecía como meta de la corporación. La falta de estudios sobre este colegio nos impide aventurar cualquier tipo de conclusión en este sentido, que, por otra parte, no tendría mayor importancia.

CAPÍTULO II: LA JUNTA Y SUS CARGOS

La Junta del colegio de abogados de Valencia era el órgano central de la corporación.⁴¹ Era un órgano eminentemente gubernativo, y tenía por finalidad principal la adopción de las decisiones encaminadas a la consecución de los fines para los que fue fundado el colegio. Por lo que se deduce de las actas de las reuniones y de sus decisiones en general, estos fines serían la organización de la abogacía en la ciudad de Valencia, y la defensa de los intereses personales y profesionales de sus individuos.

Podemos entender el significado y el funcionamiento de la Junta analizando los diferentes cargos que la componen, no sólo desde su regulación en los estatutos del colegio, sino también a través de su participación en la toma de decisiones, tal y como se refleja en los libros de deliberaciones.⁴² Otros aspectos, como los tipos y el lugar en que se celebraban, u otros oficios que, sin formar parte de la misma Junta, también eran nombrados por ésta y participaban de la vida colegial, nos ayudarán a completar este estudio.

Tipos de juntas y lugar donde se celebraban

Aunque el cuerpo del colegio lo formaban la totalidad de sus individuos, su gobierno y administración estaba en manos del decano y demás cargos que componían la Junta. Dos son los tipos de juntas que encontramos a lo largo de los libros de deliberaciones: la *junta general* y la *junta particular*. En cuanto a la *junta de elección de cargos* hablaremos más adelante, pero vaya por delante que, *strictu sensu*, era una junta particular y que, como su

⁴¹ Escribiré Junta —en mayúscula— para referirme al órgano colegial, y junta —en minúscula— para referirme a la reunión de los miembros de dicho órgano.

⁴² A.I.C.A.V., libros 4 a 7.

nombre indica, se celebrara anualmente con el objeto de renovar los cargos de la Junta.⁴³ Veamos ahora las otras dos.

La junta general era la reunión de todos los colegiales, y la junta particular aquélla celebrada por sólo los que tenían oficios o cargos: decano, diputados, maestro de ceremonias, tesorero y secretario. Pero esta sencilla distinción, extraída de la práctica, no aparece tan claramente formulada en las ordenanzas, si bien sí parece que estaba presente en la mente de los oficiales, especialmente durante los primeros años de la vida del colegio, que es de cuando datan la mayoría de las escasas juntas generales que se celebraron. Tan sólo el estatuto VI se refiere a esta distinción, al establecer escuetamente que el secretario "escriba todo lo que en juntas generales y particulares se acordare". También parece que se refiere a esta distinción el estatuto XVI, cuando ordena "que assí los oficiales como todos los abogados del Colegio ... asistiendo a las juntas ... a que [el decano] convocare". O el XXXVII, cuando ordena que, en caso de modificación de los estatutos, sean todos los individuos de la congregación los que la efectuasen.⁴⁴ Y de ahí que por contraposición a estas últimas juntas las demás, a excepción de las de elección de cargos, reciban el nombre de juntas particulares, de gobierno,⁴⁵ particulares de gobierno, de gobierno económico, etc., o simplemente juntas, y más adelante ordinarias. Si bien, esta última denominación tal vez apareció para diferenciar las juntas particulares de las de elección, puesto que las generales prácticamente dejaron de celebrarse con el tiempo.

Así es que las juntas, tanto particulares como generales, se celebrarían, según establece el estatuto XVI, cuando las convocare el decano, de forma que, como se manifestó el 7 de junio de 1814, no había día señalado para las mismas, pues éstas dependían de la voluntad del decano y de la

⁴³ Entendemos por junta, en minúscula, toda aquella reunión de colegiados —oficiales o no— con la finalidad de tomar decisiones sobre algún asunto colegial. Por ello no he creído oportuno considerar como junta el acto de posesión en sí.

⁴⁴ Por contra, en el colegio de Zaragoza, según L. del Campo Armiño, la junta general se reunía con inusitada frecuencia —incluso varias en un mismo mes—, y en ellas se adoptaban la mayoría de las decisiones. Las juntas particulares se limitaban de ordinario a dar cumplimiento a estas decisiones. Véase *El Real e Ilustre...*, pág. 16.

⁴⁵ Así se designaron, partir de 1778, en el colegio de Madrid. P. Baratillo Delgado, *Historia del Ilustre...*, II, pág. 31.

necesidad de los negocios.⁴⁶ El 5 de enero de 1828 se acordó que, "en lo sucesivo, se principien las sesiones por requerir al asistente de haber hecho la convocación, pasando a cada uno de los componentes de la misma la correspondiente esquila de aviso."⁴⁷ Ni hasta este momento ni posteriormente, los libros de deliberaciones dejan constancia de la forma en que el decano convocaba las juntas.

Sobre si se requería un determinado *quorum* para la celebración de las juntas particulares nada dicen los estatutos. Algunas anotaciones en los libros de deliberaciones nos dan a entender que, por lo general, se requería la asistencia de, al menos, cinco de los ocho cargos. El 19 de junio de 1785, por ejemplo, no se pudo celebrar junta por no haber concurrido a la convocatoria más que cuatro vocales. Pero sí pudo celebrarse a continuación junta del montepío, por hallarse presente su secretario.⁴⁸ El 22 de diciembre de 1808, el secretario anota no poderse celebrar junta por haber comparecido en casa del decano sólo el diputado tercero y el tesorero (se entiende además del decano).⁴⁹ No obstante, tengo conocimiento de al menos seis juntas que se celebraron con la sola asistencia de cuatro vocales.⁵⁰ Algunas de ellas cercanas en el tiempo a la de 19 de junio de 1785. Podríamos pensar que estas juntas se celebraron por no tenerse que tratar en ellas asuntos especialmente relevantes, pero no es así. De hecho, en una de ellas se aprobaron las cuentas del tesorero saliente. En la junta de 12 de septiembre de 1820 parece que se deja aclarado este asunto, al decirse lo siguiente:

...se trató de la falta de los quatro restantes señores oficiales motivada por su respectiva indisposición, ausencia y enfermedad, y de que por no existir la mayor parte mediaba una imposibilidad de celebrar las juntas que son necesarias hasta conferir la posesión a los señores electos para el año próximo...⁵¹

⁴⁶ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 205-206.

⁴⁷ A.I.C.A.V., libro 7, pág. 65 B.

⁴⁸ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 209 B. Sobre esta institución y sus juntas véase apartado *Socorro mutuo. El montepío*.

⁴⁹ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 100 B.

⁵⁰ A.I.C.A.V., libro 4, juntas de 3 de diciembre de 1771 (págs. 118-118 B), 24 de abril de 1783 (págs. 192 B-193), 18 de mayo de 1786 (págs. 218 B-219 B), 16 de septiembre de 1787 (págs. 237-238), 6 de mayo de 1788 (págs. 246-246 B), y 24 de mayo de 1792 (págs. 287 B-288).

⁵¹ A.I.C.A.V., libro 6, junta particular de 12 de septiembre de 1820, pág. 18.

En virtud del estatuto XI fue designado un nuevo tesorero para así poder celebrar las juntas siguientes.

Por otra parte, la frecuencia con que se celebraban las juntas particulares es muy irregular. Así por ejemplo, mientras que en 1811 se reunieron en 22 ocasiones, en 1770 sólo lo hicieron en 6. Es más, desde la junta de elección de cargos de 25 de septiembre de 1802 a la de 31 de agosto de 1803, sólo se celebraron cuatro juntas particulares.⁵²

Por carecer el colegio de sede oficial, las juntas particulares y los actos de posesión —que en su momento veremos— tenían lugar en casa del decano, salvo aquellas juntas que por un motivo especial se celebraban en un lugar distinto. Es el caso de la junta particular de 21 de septiembre de 1762, que se celebró en casa del diputado primero por ausencia del decano, lo cual podría indicarnos que era posible la celebración de juntas sin su presencia. O el caso de las juntas particulares de 11 de diciembre de 1813 y de 6 de febrero de 1814, en las que, por tenerse que tratar en ellas de asunto relacionado con la improcedente actuación del decano, Vicente Martínez Bonet, en el desempeño de su cargo, se celebraron en casa de José Soriano y Nieto, diputado primero en ausencia de Antonio Sombiola. Por otros motivos, la junta de 27 de mayo de 1830 se celebró también en casa del diputado primero, Joaquín Font. En este caso se debatía sobre el oficio remitido por la Real Audiencia, en el que se pedía al colegio que informara lo que le pareciera oportuno sobre el memorial presentado por el decano, en el que solicitaba que se le dispensase de informar en estrados a causa de los achaques propios de su avanzada edad. En definitiva, era la casa del decano, o la de quien cumpliera sus veces, la que, de hecho, pasaba por ser la sede del colegio.

⁵² De estas cuatro una se constituyó al mismo tiempo como acto de posesión. Otros ejemplos: en 1765 se reunieron en 18 ocasiones; en 1775, en 11; en 1780, en 9; en 1785, en 11; en 1790, en otras 11 ocasiones; en 1795, en 10; en 1800, en sólo 7 ocasiones; en 1805, en 8; en 1810, en 20; en 1815, en 19; en 1820, en 18; en 1825, en 17; en 1830, en 12; y en 1835, en 16 ocasiones. Evidentemente, había meses en que se celebraban varias juntas (en septiembre de 1825, 5), mientras que en otras ocasiones podían transcurrir varios meses sin celebrarse ninguna (del 22 de diciembre de 1789 al 11 de abril del año siguiente). He incluido en la contabilización de juntas tanto las de elección de cargos, como los actos de posesión; para estos últimos si en ellos, además, se trataba de asuntos ordinarios. En algunas ocasiones se celebraban dos juntas distintas el mismo día; normalmente una de ellas era la de aprobación de cuentas o el acto de posesión. Aunque pudiera pensarse que en los años de la guerra de la Independencia la Junta se reunió en menos ocasiones, no fue así; en 1811 se reunió en 22 ocasiones, en 1812 en 7, y en 1813 en 11 ocasiones.

El día 19 de marzo de 1763 se acuerda que todos los colegiales presentaran el duplicado de sus pleitos terminados para formar una biblioteca —junto con la del arzobispo—, con la que mejorar el trabajo de los abogados futuros.⁵³ Por carecer el colegio de domicilio fijo se entiende que su sede sería la biblioteca del arzobispo.⁵⁴

Por su parte, la junta de elección de cargos, que era aquella junta particular en la que se elegían los miembros de la Junta para el año siguiente, se celebraba, como venía dispuesto en el estatuto IX, en la librería de la casa profesa de la Compañía de Jesús. Pero, por la expulsión de la Compañía, sólo sucedió así hasta el año 1766 y de 1816 a 1820, celebrándose los otros años en el oratorio parvo de la Real Casa Congregación de San Felipe Neri.⁵⁵ No obstante, las elecciones de los años 1827 y 1835-37 tuvieron lugar en casa del decano; la primera de ellas por enfermedad del mismo, y las segundas por hallarse disueltas las órdenes religiosas. La de 1834 no se celebró en el oratorio parvo, sino en el cuarto del padre prefecto, Miguel Jordán, por encontrarse enfermo del cólera.⁵⁶ Téngase en cuenta que su asistencia era preceptiva según el estatuto IX.

En el mismo lugar se celebraban aquellas juntas en las que sólo se elegía un oficial, bien por haberse excusado el electo a su aceptación, o bien por haber renunciado o fallecido el individuo que ocupaba el cargo hasta ese momento. Es el caso de la junta de 31 de mayo de 1766, en la que se eligió como nuevo maestro de ceremonias a Vicente Ferrer, ante la renuncia por justos motivos del anterior, Juan Bautista Monseny. O la de 7 de enero de 1769, en que se eligió como diputado segundo a Pedro Vicente Traver, por fallecimiento del anterior, Vicente Rius. O la de 20 de septiembre de 1787, en que por justa excusa del secretario electo, Vicente Alagón, se nombró en su

⁵³ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 45.

⁵⁴ Es posible que la Junta se refiriera a las alegaciones jurídicas, es decir, a los memoriales en *Hecho y Derecho* que los abogados redactaban al final de cada pleito. Véase de este trabajo el apartado tercero *Pleitos y Alegaciones*.

⁵⁵ El 31 de marzo de 1767 se produjo la expulsión de los jesuitas; A.I.C.A.V., juntas de 23 de mayo del mismo año y de 23 de julio de 1816. En esta última, aunque tan sólo se hace referencia al traslado al nuevo destino de las fiestas de la Asunción y Concepción, por extensión entiendo comprendida también la junta de elección de cargos. Sobre la vuelta a la casa congregación de San Felipe Neri no hay constancia de junta alguna que decidiese nada al respecto.

⁵⁶ A.I.C.A.V., libro 6, pág. 170.

lugar a Bernardo Sulroca, que también se excusó, nombrándose en la junta de 10 de octubre del mismo año a Juan Bautista Adell y Puig.⁵⁷ Pero esto ocurrió durante los primeros años de vida del colegio, pues posteriormente estas juntas de elección de algún cargo en particular se celebraron en casa del decano, y ya sin la asistencia del padre prefecto. Es el caso de la junta celebrada el 10 de septiembre de 1807, de elección de nuevo decano en favor de Andrés Feliciano Blat, por no haber aceptado el cargo el electo Juan Antonio Pérez Clemente. También la de 5 de noviembre de 1806, en que se exoneró del empleo de tesorero, para el que fue elegido, a Cristóbal Ojalde, por haber sido excluido del montepío el dos de abril de 1785. En la misma junta se acordó que continuara en el oficio Alonso Cabrera, que ya había ocupado el cargo durante el año anterior. Otro caso es el de la junta de 12 de agosto de 1812, en la que se eligió para el cargo de diputado segundo a Andreu Blat, y para el de maestro de ceremonias a Juan Bautista Adell, por haber fallecido los dos anteriores. Destaca también de esta última junta, el hecho de que el decano no propusiera para la elección de cada uno de estos cargos a tres individuos, tal y como ordenaba el estatuto X, sino que sólo propusiera uno para cada oficio, que fueron los que al final se designaron por la Junta. De igual manera, e incumpliendo en este sentido el tenor literal de los estatutos, se designaron otros oficios en juntas posteriores.

En cuanto a las juntas generales —28 de febrero y 5 de agosto de 1762, 14 y 17 de marzo y 6 de agosto de 1763, y 30 de diciembre de 1810—, se celebraron en la bóveda de la casa profesa de la Compañía de Jesús, salvo la última, que tuvo lugar en el oratorio parvo de la Real Casa Congregación de San Felipe Neri.⁵⁸ De las tres juntas generales que tuvieron lugar con anterioridad a la aprobación real de la fundación del colegio, las dos primeras, es decir, las de 16 de julio de 1755 y 22 de enero de 1759, se celebraron en la sala de la congregación de nobles de la casa profesa, mientras que la tercera, de 21 de marzo de 1759, se celebró en la iglesia de Calatrava.

⁵⁷ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 92 B-93, 105 B-106, 238 B-239 B.

⁵⁸ Estaba previsto que la junta de 17 de marzo de 1763 se celebrara el día 14, si bien, por no llegar el número de colegiales reunidos a la mitad fue prorrogada hasta el 17; A.I.C.A.V., libro 4, págs. 6-8, 26-29, 41 B-42 B, 43-44 B, 57-57 B.

En resumen, vemos cómo la celebración de las juntas estaba condicionada en todos los sentidos por dos factores: su oportunidad, según entendimiento del decano, y la falta de un domicilio fijo y propio del colegio.

Cargos de la Junta

Del contenido de las ordenanzas del colegio, observamos que una de sus intenciones primordiales era determinar y organizar las tareas o funciones que iban a tener cada uno de los diferentes cargos u oficios de que se compondría la Junta. Al menos así se desprende del número de estatutos que regulan esta materia, con respecto a los demás, y de la extensión y detalle con que aparecen redactados. Estos cargos debían recaer necesariamente en uno de los abogados congregantes (estatuto VI), sin que se les exigiera ningún requisito personal especial para ocupar el puesto, y sin que, evidentemente, tuvieran derecho a retribución alguna, más que el prestigio que su desempeño pudiera conferirles. Según los estatutos, estos oficios y sus cometidos eran los siguientes:

Decano

El decano, como cabeza y superior de la corporación de abogados que era, según el estatuto XVI, representaba al colegio allí donde éste se encontrara. La junta de 19 de abril de 1820 se reafirmaba en esta postura, al expresar sobre este particular lo siguiente:

...se hizo presente por el dicho decano que a instancia de algunos pretendientes que solicitan la incorporación, había sido citado para concurrir a un acto de conciliación, y en su virtud se deliberó que, como cabeza de la corporación, quedaba autorizado para representar al Colegio en la defensa de sus *derechos*, tanto en este negocio como en cualesquiera otros que ocurriesen en lo sucesivo, a cuyo efecto se le conferían las facultades en *derecho* necesarias, librándosele la oportuna certificación por el secretario, para hacer constar de su representación donde convenga.⁵⁹

⁵⁹ A.I.C.A.V., libro 6, pág. 12 B.

Su misión principal, pues, era la defensa de los intereses del colegio; para ello debía convocar a la Junta, cuando la necesidad de los negocios lo exigía, y dar órdenes en general. De la redacción literal del estatuto XVI interpreto que los sometidos al cumplimiento de dichas órdenes, así como los convocados a Junta, serían tanto los oficiales como el resto de los abogados del colegio.

Veamos otras de las obligaciones específicas que debía asumir el decano, según aparecen detalladas en los estatutos:

— Costear la fiesta principal de Nuestra Señora de la Asunción, así como también la de la Concepción, eligiendo, con el acuerdo del padre prefecto, al predicador de la misa mayor cuando no fuese este último (estatutos III y V). Si bien, según reflejan los legajos de cuentas —que más adelante veremos—, estos gastos siempre eran costeados de los fondos del colegio.

— Proponer, en la junta de elección de cargos, tres sujetos para sucederle en el puesto, así como otros tres más para cada uno de los cargos sometidos a elección, gozando de voto de calidad en caso de empate (estatutos IX y X).

— Otorgaba permiso para hablar a los oficiales que quisieran decir algo antes de emitir el voto en cualquier junta, sea de elección o no (estatuto XIV).

— En la admisión de nuevos abogados les recibía el juramento, que, de su orden, también podía ser recibido por el secretario (estatuto XXIII).

— Apercibía y multaba a todos aquellos abogados que, contraviniendo el estatuto XXV, no pidieran, por medio de otrosí del alegato que hiciesen en pleito, la no admisión del pedimento y la paralización en su defensa del abogado que no estuviese colegiado.

— Concedía licencia a aquellos abogados individuos del colegio de Madrid o de alguno de sus filiales —Sevilla, Valladolid o Granada, en un principio—, que viniesen a Valencia a defender algún pleito (estatuto XXVI).

— En cuanto a la defensa de pobres, era el encargado de repartir los asuntos entre los dos abogados de pobres que se designaban, y de velar especialmente por el buen desempeño de su defensa (estatuto XIII).

— Con respecto a los entierros de los colegiales, el decano designaba a aquellos que debían portar el cuerpo del fallecido desde su casa hasta la bóveda o sepultura donde se hubiere de enterrar. En el mismo orden de cosas, procuraba el entierro decente de los abogados colegiales, costearlo sus gastos si la pobreza del fallecido y su familia no pudiese hacer frente a los mismos (estatutos XXVII y XXVIII).

— Ordenaba todos los años cien misas rezadas por los abogados difuntos, costeadas de su propio dinero, mientras el colegio no tuviese caudales o rentas suficientes (estatuto XXX).

— En materia de socorros, el decano disponía, si lo consideraba oportuno, que se visitase y ayudase en sus asuntos a los colegiales enfermos o presos, así como que se les auxiliase económicamente. En cuanto a sus viudas y huérfanos, también les ofrecía el patrocinio de los abogados que designase para defenderles en los posibles pleitos en que se vieses involucrados y, en su caso, la ayuda económica que estimase conveniente (estatutos XXXI y XXXII).

— Por lo que a la tesorería se refiere tomaba, junto con los diputados, las cuentas al tesorero, libraba órdenes de pago y distribuía limosnas (estatutos XXXIV y XXXV).

Con la fundación del montepío, en 1778, el decano del colegio también ocupará el cargo de decano en la Junta del montepío.

Por todo ello, el decano era, sin lugar a dudas, la figura más importante de la Junta, y así se veía de puertas del colegio hacia afuera. Entre otras cosas porque de él dependía la celebración de las reuniones y los asuntos que en ellas se trataban, así como por el lugar preeminente que ocupaba en el protocolo de los actos a los que acudía el colegio, tan importante en estos momentos. Al menos esto es lo que se deduce del examen de los estatutos. Sin embargo, no hay indicio alguno que nos haga pensar que su opinión tuviese especial relevancia en la adopción de las decisiones. Más bien da la impresión de que toda resolución se adoptaba por mayorías o consenso, como parece decir el estatuto XIV, a pesar de que el estatuto IX le concedía al decano voto de calidad “en todas las elecciones de oficios y casos que ocurran”.

Diputados

El cometido principal y general de los cuatro diputados que integraban la Junta era el de asistir al decano en sus funciones, y por ello siempre les veremos desarrollar su actividad conjuntamente con éste. Así por ejemplo, y según los mismos estatutos que regulaban la figura del decano, reciben y revisan las cuentas del tesorero, autorizan las partidas en *data* libradas por el decano, procuran el decente entierro de los abogados que mueren pobres, socorren a sus viudas y huérfanos, etc. En todas estas funciones, que estudiaremos en sus apartados respectivos, son los diputados primeros, es decir, el primero y el segundo, los que tienen un papel más destacado.

El 15 de septiembre de 1808, ante la renuncia por parte de José Martínez al cargo de diputado tercero, para el que había sido nombrado, la Junta no admite dicha negativa manifestando:

...que siendo dicho empleo uno de aquellos que no tienen cargo anexo, ni ocupación particular, si sólo la asistencia a las juntas para dar su dictamen en las resoluciones que se acuerdan, a que pueden contribuir mucho las superiores luces del Sor. Dn. Joseph Martínez, como lo tiene acreditado la experiencia; y que la misma Junta haciéndose cargo de las obligaciones de dicho Sor. no le estrechará a la asistencia, sino en los casos muy urgentes...⁶⁰

A partir de 1778 los diputados de la Junta del colegio también lo serán del montepío.

Maestro de ceremonias

Se trata del oficio cuyas funciones aparecen más detenidamente reguladas en las ordenanzas, lo que nos da a entender la importancia que en estos tiempos se daba a la organización y a la preparación de las celebraciones en general, así como a la observancia de las normas de protocolo en los actos públicos. Cuando hablamos de celebraciones nos referimos, fundamentalmente, a las festividades de la primera patrona del colegio, Nuestra Señora de la Asunción, y a la de la Concepción.

Resumiendo, y a tenor de lo establecido en el estatuto VII, el maestro de ceremonias se encargaba de cuidar de que en todos estos actos se

respetase el orden y la preferencia en los asientos entre los abogados colegiales; también vigilaba el uso de las vestimentas adecuadas, el convite a las fiestas de los miembros de otras corporaciones o tribunales y, en general, la observancia de todo lo que fuese ceremonial.

Igualmente, también será el maestro de ceremonias en la Junta del montepío.

Tesorero

Según el estatuto VI, el tesorero quedaba encargado de las cuentas del colegio, "en cuio poder entre todo el dinero, así de lo que se mande por los abogados congregantes, como todo lo demás que en qualquiera manera le pertenezca".

Al final de cada ejercicio el tesorero presentaba las cuentas a la Junta, que a su vez las trasladaba al secretario —que también era contador—, para que las contrastara con los libros de contaduría. Manifestando este último la correspondencia entre ambos registros, las cuentas eran aprobadas.

Con la fundación del montepío su tesorería también estará a cargo de este tesorero.

Secretario

La función de este oficio era dar fe de todo aquello que acontecía en las juntas, dejando constancia por escrito en el libro de deliberaciones que obraba bajo su poder. Daba crédito de los asientos y certificaciones que expedía, en virtud de decreto de la Junta o del decano, mediante sello que también tenía en su poder (estatuto VI).

El secretario, además, era el encargado de dirigir el procedimiento de admisión de nuevos abogados, y así por ejemplo, recibía las solicitudes de incorporación de los pretendientes o, por delegación del decano, les recibía el juramento de ingreso (estatutos XX a XXIII).

Otras funciones que tenía eran la de comunicar a los colegiales el cargo para el que la Junta les había nombrado (estatuto X); avisar a los oficiales para las juntas, o a todos los individuos del colegio para que asistieran

⁶⁰ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 96 B.

a los funerales de los colegiales difuntos (estatutos XXVII y XXXIII); recibir de aquéllos las limosnas para las misas de éstos (estatuto XXIX); confeccionar la lista anual de los colegiados (estatuto XXV), etc. Encargos todos para los que se valía del asistente o monitor, aunque los estatutos no lo contemplasen.

A partir de 1778, el secretario del colegio ocupará al mismo tiempo el cargo de contador del montepío, que dejará de desempeñar en 1828, al adquirir este último cargo autonomía propia. A partir de este año, el secretario del colegio aparecerá nombrado formalmente en los libros de deliberaciones también como contador del colegio. Cargo que, de hecho, desempeñaba desde el principio.

La mayor atención de los estatutos y las principales preocupaciones de la Junta giraban en torno a aspectos que en la actualidad nos parecerían meramente formales o protocolarios. Y, ciertamente, al principio las discusiones tales como la festividad de la Virgen, limosnas, asistencia a misas y entierros, orden de preferencia en los asientos, etc., ocupan la mayor parte de las juntas, pero, con el tiempo, veremos cómo aumentan en número e importancia el tratamiento y las decisiones sobre problemas estrictamente profesionales y corporativos.

Con la fundación del montepío dos nuevos oficios entraron en la dinámica de la Junta del colegio. Si bien no eran cargos de la misma, en numerosas ocasiones se reunirán con ella y participarán en la toma de decisiones, por lo que he creído interesante referirme a ellos, aunque sea brevemente.

En la junta de elección de cargos de 28 de agosto de 1778, además de elegirse a los cargos habituales, se nombró, de entre los tres individuos propuestos por el decano, a José María Alemany para el oficio de reciente creación de secretario del montepío, cuyo reglamento había sido aprobado por el Consejo de Castilla el 20 de marzo de ese mismo año. No obstante, el 11 de abril ya se había designado, por simple nominación, a José Villarroja para que desempeñara este cargo hasta la elección ordinaria.⁶¹

⁶¹ Véase apartado *Fundación del montepío y su reglamento*.

Este nuevo oficio de secretario del montepío no estaba previsto en los estatutos del colegio, y por ello tampoco se sometía a sus reglas de la misma forma que lo hacían los oficios de la Junta.

Así vemos cómo, a lo largo de los años, fueron varios los individuos que desempeñaron el cargo en diferentes e incluso seguidas ocasiones. Es el caso de Juan Antonio Pérez Clemente, que fue elegido trece veces: de 1787 a 1796, y de 1800 a 1802. O el caso de Manuel Román, que en 1781 fue propuesto y elegido por aclamación y no por votación; además, ya había ocupado el cargo durante el año anterior. También en las elecciones de 1798 y 1799 el cargo de secretario del montepío recayó en los diputados primero y segundo, respectivamente, que desempeñaron durante ese año los dos oficios al mismo tiempo. Si bien esto fue debido a que el oficial en cuestión se trataba del referido Juan Antonio Pérez Clemente.

En cuanto a su asistencia a las juntas del colegio, no observamos ninguna regla fija a través de los libros de deliberaciones. Hay secretarios que durante su mandato no asistieron a ninguna junta particular. Otros —los menos—, tenían una asistencia más o menos habitual, y otros únicamente asistían a algunas juntas. En este último caso tampoco conocemos el motivo concreto —si lo había—, por el que asistían a éstas y no a las otras. Tan sólo está claro que solían asistir a las juntas de elección de cargos y a los actos de posesión. Es posible que se le citara únicamente cuando el decano de turno lo consideraba oportuno. De cualquier forma, todo indica que este cargo no formaba parte de la Junta del colegio en sentido estricto. Así, por ejemplo, cuando a la junta de 12 de septiembre de 1820 sólo acuden cuatro oficiales se hace referencia a la ausencia de "los cuatro restantes señores oficiales". Se entiende que, de preverse su asistencia, los ausentes hubieran sido cinco.

A partir también de la elección de 1778, aparece el cargo de contador del montepío. En un principio será desempeñado por el secretario del colegio, hasta que en 1828, con los nuevos estatutos del montepío, se redefinan estos oficios. A partir de este año el oficio de contador del montepío adquirirá una total autonomía, consiguiéndose con ello una completa separación entre los

fondos del colegio y los del montepío. No obstante, su elección tendrá lugar, igualmente, en la junta de elección de cargos del colegio.

Elección de cargos

Procedimiento y condiciones de la elección

La elección de todos estos oficios, en la que vendría en llamarse *junta de elección de cargos*, aparece regulada en los estatutos nueve a doce.

Según el estatuto IX, debían reunirse al efecto cada año los ocho oficios de que constaba la Junta, junto con el padre prefecto, en la librería de la casa profesa de la ciudad de Valencia o en otra pieza a propósito, en el día de San Agustín, o en el día que el decano señalase antes del día de Nuestra Señora de septiembre. El estatuto XIV establecía la posibilidad de que todo miembro de la Junta advirtiera antes de votar lo que juzgase conveniente, tanto en la elección de cargos como en cualquier otra ocasión, pero previo permiso del decano, “pues quando llegare a votar podrá dezir todo lo que se le ofreciere”.

En junta de 28 de agosto de 1819, reunidos sus componentes para la elección, se acordó que en lo sucesivo se celebrara una misa del Espíritu Santo antes de cada elección, “a fin de que se digne inspirarles acierto en las propuestas y elecciones para todos los empleos”.⁶²

La elección transcurría del siguiente modo:

Reunidos los presentes se elegía por votos, en primer lugar, al nuevo decano, de entre los tres pretendientes que el decano cesante proponía, siguiendo en la votación el orden establecido en el mismo estatuto IX. Votaría en primer lugar el secretario, tras él el tesorero, después el diputado cuarto, el tercero, el maestro de ceremonias, el diputado segundo, el primero y, por último, el decano. Para el caso de igualdad de votos tendría el decano, en ésta y en las demás elecciones —y decisiones en general—, voto de calidad.

Una vez elegido el nuevo decano, y según el estatuto décimo, se produciría de forma automática la designación de los siguientes cargos: el de

⁶² A.I.C.A.V., libro 6, pág. 2 B.

diputado primero, que sería el decano cesante; el de diputado segundo, que sería quien hubiese sido el primero durante el año anterior; el de maestro de ceremonias, que sería el antiguo diputado segundo; y el de diputado cuarto, que sería el anterior secretario. Estos cuatro oficios eran designados por cooptación u "obción", tal y como dicen los estatutos, "para que assí esté siempre el gobierno entre sugetos de autoridad y prácticos en las cosas del Colegio" (estatuto X). Esto es, que quienes formaban la Junta eran los llamados a renovarla de forma parcial cada año, de manera que los nuevos electos pudieran ser aconsejados en su funcionamiento por los antiguos.

A continuación de esta *obción*, se pasaba por el decano y los oficiales a la elección de los cargos restantes de diputado tercero, tesorero y secretario. Elección que era por votos y se efectuaba de la misma forma que la utilizada para la del decano, "atendiendo siempre a la mayor antigüedad y a que con ella concurren, en los que se hayan de elegir, las demás circunstancias que aseguren el desempeño de sus oficios". Especial atención se ponía en la elección del diputado tercero ya que, según el mismo estatuto X, "éste ha de haver tenido el de tesorero o secretario, mediante, que para el año siguiente en que dexa de ser diputado tercero, puede nombrársele decano, como se acostumbra en esta Corte". Lo primero sí se observa, puesto que el diputado tercero siempre había sido previamente secretario o, sobre todo, tesorero, ya que el secretario pasaba al año siguiente a ser diputado cuarto. En cuanto a que el diputado tercero ocupara el cargo de decano el año siguiente, a pesar de no ser más que una recomendación, lo cierto es que se dio con bastante frecuencia. En otras ocasiones, ocupó el cargo al cabo de dos años.⁶³ A consulta del colegio de abogados de Valladolid, el de Valencia manifestó en este último sentido, en 1803, lo siguiente:

...este Colegio, en el que gobierna el Estatuto 10 del de Madrid como incorporado en él, ha entendido y considerado las palabras que con relación a la elección de diputado 3º dicen, mediante a que para el año siguiente en que dexa de ser diputado 3º se le suele nombrar por decano, como arbitrarias y no de precisa observancia, de forma que no son bastantes para atribuir al diputado 3 un *derecho nato* para ser propuesto por decano en el año siguiente, y en esta conformidad lo tiene adoptado este Colegio, como se desprende de

⁶³ Véase las listas correspondientes en los apéndices.

varias elecciones extendidas en los libros de deliveraciones que existen en el archivo de la secretaría de mi cargo, de las que, refiriéndome a las más modernas, consta que en los años de 1795=96=97=801= y 803 fue propuesto el diputado 3 para decano y no salió elegido, y que en los de 1794=98= y 800 no se le propuso para dicho empleo, sin que conste que en ninguno de dichos casos se haya reclamado ni formado sobre el particular expediente.⁶⁴

Una vez elegidos los oficios, el secretario era el encargado de poner en conocimiento de los electos no presentes la designación del cargo que había recaído sobre sus personas. Tras recibir al cabo de unos días la contestación, comunicaba a la Junta la aceptación o la excusa de los electos a ocupar dichos puestos. Este cruce de comunicaciones se efectuaba por escrito, y la negativa a la aceptación, que raramente ocurría, podía ser denegada o admitida por la Junta, pasándose en este último caso a una nueva elección. Pero, en última instancia, la Junta no tenía facultad para no admitir la renuncia, ni podía sancionarla. La nueva elección, que en su caso tenía lugar, no quedaba regulada por los estatutos, como más adelante veremos.

Ninguno de los oficios de la Junta, como dice el estatuto XII, podía ser ocupado por el oficial cesante, a no ser que hubiesen transcurrido seis años desde el fin de su mandato, o al menos dos en “caso preciso”. Ni los estatutos ni la Junta aclaran en ningún momento el alcance de esta última expresión. Sin embargo, este precepto fue reiteradamente incumplido por lo que se refiere al tesorero. Así, José Pinazo Gómez fue elegido tesorero el año 1791, y desde enero de 1793, por renuncia de Manuel Pro. A Pedro Sacristán se le eligió dos veces, mediando sólo un año entre ambas elecciones: 1807 y 1809, y otras dos veces consecutivas, 1819 y 1820. Vicente Iranzo desempeñó el cargo durante los años 1828 y 1829. Fermín Sanchis Ferris lo hizo incluso durante tres años consecutivos: 1830-32. Y, finalmente, Vicente Gil del Castillo también desempeñó este cargo tres y hasta cuatro veces consecutivas: 1825-27; y 1834-37.

⁶⁴ A.I.C.A.V., caja 1, expediente 4, p. 15. P. Barbadillo Delgado, *Historia del Ilustre...*, II, pág. 52. A pesar de la última afirmación, lo cierto es que hasta ese año en la mayoría de las ocasiones uno de los tres propuestos por el decano saliente para ocupar su cargo era el diputado tercero. Las elecciones en las que no fue así fueron las de los años 1763, 1775, 1782, 1783, 1789, 1790, 1792, 1794, 1798 y 1800. Posteriormente ocurrió con mayor frecuencia: 1804 a 1807, 1809, 1810, 1816, 1817, 1820, 1824, 1825, 1827 a 1829 y 1834.

Por lo que respecta al maestro de ceremonias, nos encontramos con tres casos que en principio también vulnerarían el estatuto XII. El primero es el protagonizado por Pedro Vicente Traver, que ocupará este cargo los años 1767 y 1769. El motivo es que al fallecer Vicente Rius —diputado segundo en 1768— se eligió en su lugar, en junta de 7 de enero de 1769, a Traver, quien por opción pasó a desempeñar este cargo durante el año siguiente. El segundo caso es prácticamente idéntico al anterior. José Marí Marín, que desempeñó este cargo en 1834, lo volvió a desempeñar al año siguiente porque en junta de 16 de marzo se le nombró diputado segundo, al haber aceptado el que ocupaba este cargo, Vicente Valor, la plaza de ministro de la Audiencia de Mallorca. El mismo día se eligió como nuevo maestro de ceremonias a Vicente Martínez Bonet. El tercer caso lo protagonizaría Andrés Blat, elegido en 1810 y en la primera elección de 1814, si bien en esta ocasión sólo se vulneraría lo dispuesto por los estatutos si consideráramos a los años como colegiales —es decir, de elección a elección— y no como naturales, ya que, como consecuencia de la Guerra de la Independencia, no hubo elecciones los años 1812 y 1813. El motivo de esta repetición vuelve a ser el mismo: en junta particular de 12 de agosto de 1812 se elige a Andrés Blat como diputado segundo por fallecimiento de Manuel Pro.

Aunque los estatutos nada dicen al respecto, todo parece indicar que no era posible que durante el mismo año colegial un mismo abogado desempeñara al tiempo dos cargos de la Junta. Por ello, no puede ser sino una excepción, el que en 1796 se eligiera como tesorero a Vicente Alagón, que ocupó también, y por opción, el cargo de diputado segundo, ya que el 3 de diciembre del año anterior se le había elegido como diputado primero por el fallecimiento del anterior, Joaquín Boil. Igualmente, se trata de otra excepción el que el 7 de agosto de 1793 se nombrara a Juan Andrés Ibáñez, diputado tercero, como maestro de ceremonias, por la avanzada edad de Francisco Bruno Sebastián.

Como resumen, podemos decir que, aunque la intención de los estatutos era que un abogado no ocupara el mismo cargo dos años consecutivos, no es menos cierto que se favorecía el inmovilismo en el seno de la Junta. Lejos de ser la Junta un organismo dinámico, los estatutos preveían la rotación de los mismos sujetos entre los distintos puestos. En mi opinión, si

por una parte lo que se pretendía era que al frente del gobierno del colegio estuvieran sujetos versados en su funcionamiento, por la otra, lo que se consiguió es que a lo largo de los años fueran sólo un reducido número de personajes los que monopolizaran los distintos cargos. De hecho, los únicos cargos cuyas designaciones no se hallaban condicionadas, y eran totalmente libres, eran los de tesorero y secretario. Es más, excepto para el puesto de tesorero, el desempeño de cualquiera de los otros aseguraba su continuación en la Junta, en mayor o menor medida. En este sentido, destacan los casos de Francisco Nadal, que fue miembro de la Junta durante 16 años entre 1765 y 1788; o de Vicente Ferrando Segura, que lo fue desde 1799 hasta 1802 y desde 1816 hasta 1829 —con la excepción de 1820—, en que falleció. En otras ocasiones vemos cómo el hijo continúa la trayectoria del padre. Caso de Vicente Alfonso (hijo de Ignacio Alfonso), o Joaquín Font (hijo de Pablo Font).

Ausencia, enfermedad, muerte, promoción y renuncia de un oficio

Todos estos supuestos —salvo el de renuncia— vienen regulados en el estatuto XI.

Para el caso del decano, era él mismo quien se encargaba de designar sustituto en los supuestos de ausencia y enfermedad, siempre que el elegido fuera un colegial que previamente hubiese sido también decano, o, en cualquier caso, hubiese ocupado otro cargo de la Junta.⁶⁵ Para los supuestos de muerte y promoción, se elegiría por los oficiales un nuevo decano para lo que restare de año. Esto último también se observaría cuando muriera o fuera promovido cualquier otro oficial, de forma que siempre estuviesen cubiertos todos los cargos. Es en estos casos cuando un mismo colegial puede ocupar simultáneamente dos cargos por lo que queda de año, o vuelve a ocupar el mismo que ya había desempeñado sin dejar transcurrir los dos años de intervalo. La ausencia o enfermedad de cualquiera de ellos no tenía más consecuencia. No obstante, en algún caso en que la ausencia fue larga o

⁶⁵ El 22 de abril de 1811, el decano, José Antonio Sombiola, con motivo de su marcha a las Cortes por haber sido nombrado diputado, designa para ocupar su puesto a José Soriano Nieto, quien, efectivamente, ya había sido decano en dos ocasiones anteriores. Éste no acepta el nombramiento, con lo que la Junta le remite nuevo oficio “para su absoluta aceptación”, que, finalmente, se produce. A.I.C.A.V., libro 5, págs. 152-153.

supuestamente definitiva, sí se procedió a una nueva elección.⁶⁶ Para el caso de ser el secretario el que estuviera ausente o enfermo, le substituiría el diputado cuarto, y si éste faltare lo haría quien lo hubiese sido durante el año antecedente. Y lo mismo se observaría con el tesorero.

La renuncia al cargo venía muy escuetamente contemplada en el estatuto décimo, al decir tan sólo que "si por justo motivo alguno no aceptare se elija otro en su lugar." Ante esta indeterminación de los términos *justo motivo*, iba a ser la Junta la que decidiría en cada caso concreto si rechazaba dicha negativa, o la aceptaba y nombraba un nuevo colegial, ateniéndose para ello a las razones alegadas por el renunciante y a la situación del colegio. De aceptarse la excusa se votaba entre los tres abogados nuevamente propuestos por el decano. En otras ocasiones se elegía a uno de los dos que quedaban de la primera terna.

En la elección de 1781 fue elegido como diputado tercero Joaquín Olano, quien se excusó alegando lo que la Junta reconocía como tal *justo motivo*, con lo que en la siguiente junta, admitida la excusa, se nombró para este cargo a Cristóbal Tarazona, que sí aceptó. En el mismo sentido, en el año 1785 fue elegido decano Pedro Salvador, quien tampoco aceptó el cargo, nombrándose en su lugar en la siguiente junta a Francisco Nadal. Sin embargo, y como ya hemos visto, en 1808 no se aceptó la excusa presentada por el diputado tercero, José Martínez, por considerar su cargo sin "ocupación particular, si sólo la asistencia a las juntas para dar su dictamen". No obstante, y ante su insistencia, se le dispensó del cargo en junta de 7 de octubre.⁶⁷ En

⁶⁶ A.I.C.A.V., libro 6, junta de 12 de julio de 1823.

⁶⁷ La primera excusa ya se presentó antes de aprobarse los estatutos. En 1759 Benito Delfi había renunciado al cargo de diputado primero para el que había sido elegido, alegando "edad, accidentes y ocupaciones". A.I.C.A.V., caja 4, exped. 1, cartas de aceptación de cargos, sin número. Otros casos en los que también se admitió la excusa fueron los siguientes: Vicente Alagón no aceptó en 1787 el cargo de secretario del colegio y contador del montepío por "dever cumplir con otros que se me han confiado judicialmente y cuyo desempeño me es preciso acreditar" (caja 4, exped. 1, sin núm.). En su lugar se designó a Bernardo Sulroca, que tampoco lo aceptó "por los muchos asuntos que tengo a mi cuidado y la precisión de hacer algunas ausencias por negocios propios" (caja 4, expe. 1, sin núm.). Finalmente, lo hizo Juan Bautista Adell Puig. En 1789 se excusaron Mariano Campos y José Miñana, para los cargos de tesorero y secretario respectivamente, nombrándose en su lugar a José Ribera y a José Pinazo. En la elección de 1791 José Miñana de nuevo rechaza el cargo de tesorero, nombrándose en su lugar a José Pinazo. En 1803 se le aceptó a Juan Bautista Calabuig la renuncia al cargo de secretario "por indisposición" (enfermedad y ocupación), y se nombró en su lugar a Juan Francisco Ramada. En 1807, Juan Antonio Pérez Clemente no aceptó el cargo de decano por "justas razones", nombrándose en su lugar a Andrés Feliciano Blat. Y, finalmente, Joaquín

sentido contrario, en 1806 no se aceptó la renuncia del tesorero, Cristóbal Ojalde; ni la de Antonio Casanovas Mayor, elegido secretario en 1816, por no parecerle a la Junta justos los motivos en ninguno de los dos casos. Pero aun así se exoneró posteriormente a Cristóbal Ojalde por hallarse excluido del montepío desde 1785.⁶⁸

Cosa diferente era la renuncia al cargo tras ser aceptado y por causas sobrevenidas. Ya en 1766, el maestro de ceremonias, Juan Bautista Monseny, manifestó no poder seguir cumpliendo con su oficio “por la floxedad de sus piernas”, solicitando se le relevase, como así se hizo, nombrándose en su lugar a Vicente Ferrer. En la elección de 1766 se dio el caso de que Francisco Jerónimo Saboya, diputado segundo durante el año anterior, suplicó de la Junta que se le excusara del oficio de maestro de ceremonias, que por opción le correspondía desempeñar, por su “abanzada edad” (próximo a cumplir 85 años) y sus “accidentes avituales bastante molestos”, a lo que la Junta también accedió.⁶⁹

No cabe duda de que en ambos casos, es decir, tanto en la excusa inicial como en la renuncia, la no aceptación del cargo se debía a cuestiones ajenas al colegio; fundamentalmente problemas de salud. La celebridad que debía conllevar el oficio queda patente en las muestras de gratitud que remitían los elegidos a la Junta en los recibos de aceptación.

Otros supuestos

Hasta aquí hemos visto la elección de cargos tal y como quedaba establecida en los estatutos. Pero la realidad era mucho más compleja. Frecuentemente —y especialmente durante los primeros años—, los componentes de la Junta se encontraban ante problemas que los mismos estatutos no resolvían, puesto que su redacción era tan escueta y ambigua que

Fuertes no aceptó el cargo de tesorero en 1818, nombrándose en su lugar a Vicente Martínez Bonet. Como vemos, es excepcional que conste el motivo de la excusa.

⁶⁸ José Marzal Marco también excusó aceptar el cargo de tesorero en 1772. Alegaba, genéricamente, que “mis ocurrencias absolutamente me impiden poder desempeñar y servir”. Sin embargo, no consta que la Junta aceptara la excusa, si bien su asistencia a las reuniones fue muy escasa. El mismo individuo se había negado a aceptar el cargo de abogado de pobres en 1769 por motivos que no quedan nada claros (A.I.C.A.V., caja 4, exped. 1, cartas de aceptación de cargos, sin número).

⁶⁹ A.I.C.A.V., caja 4, expediente 1, cartas de aceptación de cargos, sin número.

daba lugar a diferentes interpretaciones, o bien, ni siquiera contemplaba soluciones a estos nuevos supuestos. En este sentido, en la junta de elección de cargos de 1764 aparece en el margen la siguiente nota:

Seguidamente, el *señor* maestro de sermonias propuso por duda si podían ser reeligidos los que toman empleo según la ordenansa 12. Y todos fueron de dictamen que la reelección era de entender en el propio empleo y no en distinto.⁷⁰

De esta manera, y sobre todo en los primeros años de vida del colegio, solía elegirse para decano a un abogado que ya había desempeñado durante el año anterior uno de los cargos de la Junta, con lo que el puesto que éste debía ocupar por opción según el estatuto X se designaba también por elección. Así ocurrió, por ejemplo, en la primera elección de cargos tras la aprobación de los estatutos —la de 1763—,⁷¹ en que se votó el cargo de diputado segundo en Vicente Ruiz, puesto que el anterior diputado primero, Francisco Gerónimo de Saboya, había sido elegido para desempeñar durante ese año el de decano. En la elección para decano del año siguiente,⁷² dos de los tres colegiados propuestos por el todavía decano ocupaban en ese momento cargo en la Junta —José Teodoro Botella, como maestro de ceremonias, y Pedro Vicente Traver, como diputado tercero—, saliéndose de la sala en donde se realizaba la votación, para que ésta fuese más libre. Esta elección, por lo tanto, sólo se realizó por seis de los ocho oficios. En la misma junta el decano ya electo, Pedro Vicente Traver, propuso para diputado tercero, de entre los tres que debía proponer, a José Berní y Catalá, diputado cuarto, y a José Ignacio Alfonso, tesorero, que también se salieron de la sala para la votación.

En este mismo orden de cosas, no queda claro en la redacción de los estatutos, si es el decano saliente quien realizaba las proposiciones para los cargos de elección, o si bien esto ya era competencia del nuevo decano electo. Y así en junta de 5 de agosto de 1763 se ordenó

⁷⁰ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 77.

⁷¹ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 60.

⁷² A.I.C.A.V., libro 4, pág. 77.

Que se escriba al secretario del *Muy Ilustre* Colegio de Señores Abogados de la corte a fin de inquirir la práctica de las propuestas de empleos, y si el decano que entra nuevo tiene alguna intervención, ya votando, ya en la propuesta de los demás empleos que faltan nombrarse en el acto de tomarse la posesión.⁷³

De su contestación o del sentido de la misma nada ha quedado en los libros de deliberaciones. Pero según la práctica que se observaba, como ya hemos visto, era el nuevo decano el que realizaba las propuestas, si se hallaba presente por haber desempeñado cualquier oficio de la Junta durante el año anterior. Es decir, acto seguido a su elección ocupaba su nuevo asiento y tras las opciones previstas procedía a proponer individuos para los otros cargos de elección.⁷⁴ Por el contrario, en la elección del año 1765 fue elegido por decano a Pedro Abaás, que no se encontraba presente, por no desempeñar ningún oficio en la Junta saliente, con lo que fue el mismo decano saliente quien, “según estilo de la Corte”, como aparece redactado en estas ocasiones, propuso los individuos para los nuevos cargos de elección, como ocurría en iguales elecciones.

De la misma manera, no queda claro en los estatutos si en las elecciones a cargos que no fueran el de decano, debían intervenir los oficios de la junta saliente o los de la nueva electa, en la medida de lo posible. Es decir, si para la elección del secretario, por ejemplo, debían intervenir los antiguos diputados tercero y cuarto y el tesorero, aunque para sus puestos ya hubiesen sido designados otros individuos, o bien los nuevos, caso de estar presentes y ocupando su nuevo cargo, si éstos hubiesen desempeñado otro oficio en el ejercicio anterior. El desarrollo de la gran mayoría de las juntas de elección me hace decidir por la primera postura puesto que, a pesar de lo establecido en las ordenanzas, se realizaban todas las elecciones de cargos seguidas, quedando constancia de las opciones tan sólo al final del acta. Si bien, en la junta de elección de 1764, tras la elección del decano, se produjeron todas las traslaciones contempladas en el estatuto X, y a continuación las elecciones sobre las ternas propuestas por el nuevo decano,

⁷³ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 57.

⁷⁴ A.I.C.A.V., elecciones, por ejemplo, de 1767 y 1788.

Pedro Vicente Traver. Sea como fuere, los electores serían prácticamente los mismos, debido a la rotación de individuos entre los distintos oficios.

Otro ejemplo de la ambigüedad de las ordenanzas y de su continua interpretación por los oficiales lo tenemos, ya tardíamente, en el año 1823. En este caso el decano planteó ante la Junta y los consiliarios —cargo que a continuación estudiaremos—, la duda de si debería o no elegirse un diputado tercero, por la falta y ausencia notoria de Pedro Barreda Centelles.⁷⁵ Después de haber leído los estatutos que tenían relación con el asunto, se resolvió nombrar otro inmediatamente, para lo cual se retiraron los señores consiliarios, y, proponiendo el decano tres individuos, fue elegido Vicente Ferrando Segura. Por ocupar este individuo hasta ese momento la plaza de consiliario, el decano propuso tres sujetos más y fue votado José Antonio Sombiola. Acto continuo, el nuevo diputado tercero aceptó y tomó posesión del cargo, sentándose en la silla que como tal le correspondía.

Incluso, en junta de 30 de mayo de 1826, en la elección de nuevo diputado primero por fallecimiento del anterior, se manifestó que se debía

...nombrar otro en su lugar para que continúe lo restante del año, con arreglo a lo oncenso de los estatutos que gobiernan *nuestro Ilustre Colegio*, cuyo nombramiento debe recaer en uno de los *Señores exdecanos*.⁷⁶

En este caso recayó el nombramiento en Vicente Martínez Bonet. No parece desprenderse del tenor literal de este estatuto la supuesta primacía de los exdecanos en estas situaciones. Sin embargo, sí se induce del sistema de opciones y de la continuidad en el ejercicio de los cargos prevista en los estatutos.

Interesante fue la primera elección de cargos, por el procedimiento con que se llevó a cabo. Como ya sabemos, tuvo lugar el día 21 de marzo del año 1759 en la iglesia de Calatrava, ante el escribano Vicente Albiñana. Por no estar todavía el colegio constituido oficialmente, y no haber aprobado el monarca sus estatutos, en esta elección no se siguieron los pasos anteriormente señalados, sino que fueron los sesenta y un abogados reunidos

⁷⁵ A.I.C.A.V., libro 6, pág. 50 B.

⁷⁶ A.I.C.A.V., libro 7, pág. 32 B.

ese día los que eligieron por votación y aclamación los diferentes oficios, que recayeron en los siguientes abogados:

Decano: Juan Bautista Monseny.

Diputado 1º: Benito Delfí.

Diputado 2º: Franciso de Saboya.

Diputado 3º: Pascual Yáñez.

Diputado 4º: Tomás Salelles.

Maestro de ceremonias: Pedro Abaás.

Tesorero: Vicente Salvachuna.

Secretario: José Berní.

En junta general celebrada el 5 de agosto de 1762 se acordó, también por aclamación, que los mismos decano y oficiales lo fueran hasta el día de San Agustín del año siguiente, para que así pudieran acabar y perfeccionar la fundación del colegio.⁷⁷ De nuevo no se siguieron las pautas previstas en las ordenanzas. Puesto que la siguiente elección se realizó el 1 de septiembre de 1763, los primeros oficios estuvieron cuatro años y medio en sus puestos. Es posible que, como dice Nácher Hernández, esta aparente vulneración de lo dispuesto en los estatutos, obedecía a que la más elemental cautela aconsejaba conservar en sus puestos —y durante el tiempo que durasen las gestiones de fundación del colegio—, a los mismos oficiales concedores del proceso fundacional. Al parecer, era fundamentalmente a José Berní y Catalá a quien más interesaba conservar como vocal. No obstante, hay que tener en cuenta que, por distintos motivos, el 5 de agosto de 1762 los cargos de la Junta ya no eran los mismos que los que fueron elegidos el 21 de marzo de 1759.⁷⁸

También los oficiales designados en el año 1811 ocuparon ininterrumpidamente los mismos puestos hasta la primera elección del año 1814, celebrada el 22 de febrero, debido al estado de guerra en que se encontraba el país y a la decisión que adoptaron ellos mismos de continuar en

⁷⁷ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 26-29.

⁷⁸ P. Nácher Hernández, *Historia del Ilustre...*, pág. 278. Véase también apéndices.

sus cargos, dejando para mejor momento la elección de nuevos oficiales. Además, según se argumentó en la junta particular de 6 de diciembre de 1812, no mediaba estatuto que prohibiera su continuación.⁷⁹

Al margen de todo lo visto hasta ahora, destaca, por encima de cualquier otra posible irregularidad o anomalía en el proceder de la Junta o de sus componentes, y por lo que respecta a la elección de cargos, el incidente ocurrido a finales de 1813. Sucedió que el decano, Vicente Martínez Bonet, dirigió a la Audiencia de Valencia, por sí sólo y separadamente de la Junta, una exposición sobre nueva elección de oficios. Elección que, como hemos visto, estaba suspendida por la misma Junta a causa de la guerra. Ante esta exposición, la Audiencia remitió oficio al colegio ordenando que no se hiciese novedad al respecto hasta nueva providencia, que se dictaría tras el dictamen del fiscal. Enterados los oficiales por este oficio del proceder del decano, y ante la falta de explicación por parte de éste, se convocó junta para tratar el tema, con asistencia de consiliarios y exdecanos. En esta junta del colegio —y también del montepío—, y ante la consideración por parte de los oficiales de que la actuación del decano había constituido un acto voluntario, separado de toda la Junta y contrario a los estatutos, se acordó comparecer ante la Audiencia, donde se hallaba la exposición del decano, en defensa de la puntual observancia de los estatutos y de los intereses de las viudas de los abogados colegiales. Para ello se acordó que las siguientes juntas en que se tratara el tema se celebraran en casa y bajo la presidencia de José Soriano y Nieto, diputado primero por ausencia de José Antonio Sombiola. Como consecuencia de esta comparecencia, la Audiencia mandó a la Junta, por decreto de 3 de febrero de 1814, proceder inmediatamente al nombramiento de nuevos oficios, por el orden y método establecido en los estatutos.⁸⁰ Nombramiento que constituyó la primera elección de este año, que tuvo lugar el 22 de febrero.

⁷⁹ A.I.C.A.V., libro 5, págs. 177-178 B. Esta junta la convocó expresamente el decano con la intención de explicar el por qué no había convocado la junta de elección de cargos en su momento. A esta junta se convocaron, además, a los consiliarios y exdecanos. Discutido el asunto se aprobó, por siete votos contra dos, la continuación de los mismos oficiales por todo el siguiente año.

⁸⁰ A.I.C.A.V. libro 5, juntas de 24 de noviembre, 4, 11 y 16 de diciembre de 1813, y 6 y 20 de febrero de 1814, págs. 186-192.

Sin embargo, no terminaron aquí los problemas, ya que José Antonio Sombiola solicitó ante el Real Acuerdo, en agosto de 1814, la anulación de la elección de 22 de febrero. La Junta, ante el informe ordenado expedir por dicho Real Acuerdo, manifestó que se trataba de una pretensión improcedente y contraria a los estatutos del colegio, ya que en el estatuto IX no se decía que la elección se consideraría nula si no asistían los ocho oficiales —como parece ser que interpretaba el señor Sombiola—, sino que la práctica del colegio había sido desde siempre llevarla a cabo cuando se reunían la mayor parte de los vocales. Además, el doctor Sombiola había reconocido tácitamente la legitimidad de la elección, al desempeñar el destino de examinador de la terna tercera que ostentó como consecuencia de esta elección, e incluso al reconocer en su escrito que si faltaba alguno de los vocales por causa legítima no sería nula la elección. Según el acta de la junta de 17 de octubre de 1814, la pretensión de Sombiola era “emulativa fraguada para que no se realicen las cuentas y demás asuntos pendientes del colegio, naciendo de aquí que no puedan cobrar las viudas las pensiones del montepío”.⁸¹

Aunque nos encontramos ante unos hechos de difícil interpretación, especialmente por lo que respecta a las intenciones del decano, podemos inferir de ellos el arraigado carácter colegiado y consensual de las decisiones, en donde la opinión y actuación de cada uno de los oficiales como tales —incluidas las del decano—, debían estar supeditadas al beneplácito de la Junta. Y consecuentemente actuó ésta cuando prohibió al decano su asistencia a las reuniones hasta la resolución de la contienda, bien como medida de prevención, bien como muestra de reprobación.

El acto de posesión

Tras la elección de cargos de 1785 aparece por primera vez en los libros de deliberaciones lo que se llama el “Acto de Posesión”, que, sin estar recogido en los estatutos, se celebraría en adelante todos los años tras cada junta particular de elección.

Reunidos en casa del decano electo todos los cargos del colegio y montepío, tanto en funciones —que con el tiempo dejarían de asistir— como

⁸¹ A.I.C.A.V., libro 5, págs. 218-219.

los electos, esta reunión tenía como misión el que los referidos electos tomaran posesión de sus nuevos empleos, lo que quedaba verificado cuando ocupaban sus nuevos asientos.⁸² Los abogados de pobres electos también asistieron hasta el año 1798. A continuación de tomar nuevo asiento, el secretario en funciones y electo diputado cuarto entregaba al nuevo decano el sello del colegio, las dos llaves del archivo, el libro de deliberaciones y el de incorporaciones; todo lo cual el nuevo decano trasladaba al nuevo secretario para el uso de su oficio en el año colegial entrante. Mientras, los libros pertenecientes al montepío continuaban en manos del antiguo secretario hasta la celebración de la junta de cuentas de este ramo, en que se los remitiría a su sucesor. Hasta estos momentos no se entendía formalizado el traslado de oficios, puesto que a las juntas que se celebraban desde la junta de elección hasta el acto de posesión asistían los antiguos oficios, y sus actas eran firmadas por el antiguo secretario, que incluso daba fe del acto de posesión. Hay que tener en cuenta que entre ambas juntas podía pasar más de un mes.

Lo habitual era que los oficios se reunieran un día determinado expresamente para celebrar el acto de posesión, independientemente de cualquier junta, si bien en alguna ocasión, y a continuación del mismo acto, se celebró ya la primera junta particular del nuevo año colegial.⁸³

Parece ser, y así se desprende de lo acordado en junta de 12 de septiembre de 1820, que para celebrar el acto de posesión se requería la asistencia de la mayoría de los componentes de la nueva Junta. Ya hemos visto, que en este caso en concreto no se pudo conferir la posesión a los electos, debido a la asistencia de sólo cuatro.

Con anterioridad a 1785 no existía ningún acto parecido, salvo tras la primera elección de cargos en 1763, en que reunidos los cargos todavía vigentes y los nuevos electos se reafirman éstos en sus aceptaciones y toman las correspondientes posesiones.⁸⁴ Incluso posteriormente, se celebra junta *ex profeso* para que el tesorero José Ignacio Alfonso tomara posesión, al no

⁸² Como excepción, el acto de posesión de 1829 se celebró en casa del decano saliente, Joaquín Font.

⁸³ Caso de los actos de posesión de los años 1790, 1808, 1822, 1823, 1833, 1834 ó 1835.

⁸⁴ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 62 B.

haber podido hacerlo en su momento.⁸⁵ Podemos pensar, pues, que el acto de posesión ya se celebraba desde el principio, pero tan sólo a partir de 1785 adquirió autonomía propia y se convirtió en un ceremonial, al igual que en otros ámbitos de la justicia.

Otros cargos

Además de los cargos u oficios vistos hasta ahora, la Junta del colegio también designaba otros que no iban a formar parte de la propia Junta. Se trataba de los siguientes:

Abogados de pobres

Tres fueron los sistemas que, durante la vigencia de los primitivos estatutos, regularon el nombramiento y el proceder de este cargo o servicio.⁸⁶ Cada uno de ellos en su correspondiente período:

1. Años 1762-1798

Este primer sistema es el contemplado en el estatuto XIII. En él se preveía la elección anual, por parte del colegio y en la misma junta de elección de cargos, de dos de sus colegiales, uno moderno y otro antiguo —sin que sepamos qué criterio exacto los distinguía—, para que, sin salario y de modo alternativo, defendiesen los negocios y pleitos civiles y criminales de los litigantes declarados pobres. Estos dos abogados, que estaban al margen de los otros dos nombrados por el Real Acuerdo de Valencia, no podían excusarse sino por enfermedad, y estaban obligados a terminar hasta la última sentencia los pleitos que les quedasen pendientes al finalizar el año.

⁸⁵ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 64 B. Tan sólo tengo constancia de que se celebrara otro acto de posesión particular más: el de 26 de septiembre de 1835, para el cargo de secretario y contador del colegio en la persona de Mariano Parra. Pero en este caso el acta dice que se trata de una junta de gobierno.

⁸⁶ “El juez debe dar abogado a las personas pobres desvalidas que se lo pidieren, las cuales se concierten con él por un estipendio moderado si tuvieran con que pagarlo, y no teniendo mande el juez las defienda por amor de Dios”; *Partidas* 3, 6, 6. “Mandamos que los abogados legos sean tenudos de ayudar en las causas de los pobres de gracia, y por amor de Dios, en los lugares que no oviere abogados salariados para pobres, salvo si los tales no los pudieren ayudar por algún impedimento legítimo”; *Nueva Recopilación*, 2, 16, 16.

La primera elección de abogados de pobres se llevó a cabo, no obstante, el 23 de agosto de 1762, al margen de toda junta de elección de cargos, y con anterioridad a la primera que se hizo por el procedimiento establecido en las ordenanzas.

Durante la vigencia de este sistema fueron pocas las excusas presentadas para no desempeñar el cargo. La primera tuvo lugar en 1766, y la presentó José Antonio Vercher, quien alegó como motivos, simplemente, “mis ocupaciones y empleos”.⁸⁷ Debido a la novedad del asunto y a su falta de tratamiento por las ordenanzas, el colegio escribió al secretario del de Madrid para que informara sobre la práctica de éste ante semejante situación, sin que conociéramos el resultado de la consulta. De 1792 data la segunda y última excusa aceptada de este período.⁸⁸ Llama especialmente la atención este bajo número de excusas, si consideramos que otros colegios semejantes o incluso menores tenían cuatro abogados de pobres. Es el caso, por ejemplo, de Sevilla, cuyo *numerus clausus* de colegiados que se impuso en 1804 era de 75; o el caso de Oviedo, cuya Junta fijó en 24 el número de abogados necesarios en 1829.⁸⁹ Mientras, en Valencia se había establecido en 1795 un *numerus clausus* de 100 colegiados, y con sólo dos abogados de pobres.⁹⁰

2. Años 1798-1820

Durante este segundo período, y a propuesta del Real Acuerdo aceptada por el colegio, regirá en Valencia el sistema establecido para la corte.⁹¹ Por decreto del Acuerdo de 5 de julio de 1798 los ahora llamados *Abogados de Pobres Presos y no Presos* ya no serán sólo dos, sino doce, y serán todos ellos elegidos anualmente por el colegio en la junta de elección de cargos, dándose por finalizada la designación a cargo de la Audiencia.⁹²

⁸⁷ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 96; y caja 4, exped. 1, cartas de aceptación de cargos.

⁸⁸ Presentada por el abogado Joaquín Asensi. A.I.C.A.V., libro 4, pág. 291 B. En 1769 se había excusado José Marzal Marco (caja 4, exped. 1, sin núm.), quien finalmente aceptó (véase junta de 2 de septiembre de ese año, pág. 108 B).

⁸⁹ A. Fernández Serrano, *La abogacía en España y en el mundo*, 3 vols, Madrid, 1955, III, pág. 72; y M. Corripio Rivero, *Historia del Ilustre...*, pág. 17.

⁹⁰ Véase *Ingreso de abogados en el Colegio*.

⁹¹ P. Barbadillo Delgado, *Historia del Ilustre...*, II, pág. 181-189.

⁹² Como excepción, en octubre de 1810 el número de abogados de pobres quedó reducido a 10 por lo que quedaba de año, ya que Francisco Belloch Navarro se excusó por no tener fija

Además, en la junta de elección de cargos de 1798 se acuerda sobre el ejercicio de este cargo lo siguiente:

Que el Colegio *anualmente* en la junta de elección de oficios nombre los individuos *que* hayan de servir *dicha* abogacía por un año, como los demás empleos, pero *deverán* concluir las causas principiadas.

Que a las visitas de cárcel semanales asista uno de *dichos* abogados de pobres por su turno, y a las generales todos los *que* tuvieren causas de las *que* saliesen a visita, para lo qual se les dé aviso el día anterior por el oficial de sala de semana o portero de la Real Sala del Crimen.

Que los procuradores de pobres pasen los procesos al *Señor* decano del Colegio para *que* nombre el *que* deva encargarse, lo *que* practicará guardando turno entre los nombrados, según la calidad de causas, a no sea que tuviese por *conveniente* encargarla a alguno faltando al turno.

Que la dotación u honorario señalado a los abogados de pobres se libre a favor del tesorero del Colegio, *que* lo repartirá entre los nombrados para pago del *derecho* de escribir y papel.

Que por *quanto* la Real Sala del Crimen, en decreto de 12 de enero de 1797 por ante Dn. Thomás Aguilar, su *esscribano*, mandó entre otras cosas el señalamiento de días para la vista de causas, se solicite la continuación de esta práctica, a fin de *que* los letrados puedan desempeñar mejor su encargo en alivio de los pobres.

Que por *quanto* en virtud de este establecimiento queda acordada la práctica *que* ha regido hasta ahora, se haga presente al Real Acuerdo mande cesar a Dn. Antonio Llorente en el encargo de abogado de pobres para *que* fue nombrado.

Y habiendo, en virtud de lo deliberado en 24 de julio próximo pasado y en la presente, procedido al nombramiento de los individuos *que* han de servir *dichas* abogacías de pobres, quedaron electos los que constan del anterior estado.

Y que el presente secretario del Colegio libre certificación, con inserta de esta deliberación, *que* dirigirá el Sr. decano al del Real Acuerdo, para *que* se sirva éste aprobarla y mande pasar certificación a la Real Sala del Crimen, a fin de que se cumpla y haga saber a los procuradores de pobres y demás a quienes convenga...⁹³

Por decreto de 12 de noviembre del mismo año el Real Acuerdo aprobó las propuestas de la Junta.

Por lo que respecta a las excusas a desempeñar este servicio, este período destaca por el gran aumento que se produce en su frecuencia en relación con el anterior; fenómeno que no podemos atribuir exclusivamente a

residencia ni estudio abierto en esta ciudad, y de Joaquín Maldonado Maldonado se tenía noticias de que se había marchado.

que el número de abogados de pobres pasó de dos a doce. A partir de 1805 — hasta este año no se presenta ninguna—, la excusa se convierte en algo frecuente, para acabar siendo práctica habitual años después. Sin embargo, muy pocas de estas negativas son aceptadas. De las nueve presentadas entre los años 1805 a 1808, sólo una fue admitida.

La elección del año 1809 constituye fiel reflejo de hasta dónde había llegado esta situación. Por servir de botón de muestra he creído interesante relatarla detalladamente:

De los doce elegidos como abogados de pobres, sólo Pascual Haro Serrano, José Miele y Crisanto Sellés aceptaron tras la primera comunicación. De los restantes, Manuel Martínez Viciado, Vicente Armengol y Manuel Almela no contestaron —podemos entender de ello que aceptaron posteriormente—. José Cerbera, Pedro Miralles de Anglesola, Miguel Beltrán y Marcelo Sánchez presentaron excusas, Rafael Vicente Morón no recibió el oficio por estar ausente sirviendo de Alcalde Mayor, y Vicente Vives Crespo lo devolvió manifestando que, en el nombramiento de abogados de pobres, "se debía guardar lo mandado por el Real Acuerdo". Ante esta situación, la Junta sólo acepta la renuncia de Marcelo Sánchez, nombrando en su lugar a José Cabezas y a Estanislao Xavier Salazar para la vacante del ausente. A Vicente Vives Crespo decidió la Junta hacerle saber la desatención que había tenido para con ella, no habiendo recibido el oficio ni contestado con el respeto y estilo que guardaban los demás individuos del colegio. En la siguiente junta se da cuenta de que Miguel Beltrán acepta la abogacía de pobres para sólo lo civil, Estanislao Xavier Salazar se excusa por sus ocupaciones en su destino de ayudante del mayor general de la segunda y octava división del cuerpo miliciano, Vicente Vives se excusa de la propia abogacía, y José Cabezas la acepta para las causas que no penden en la Real Audiencia. Finalmente, la Junta acuerda no hacer mérito a estas contestaciones, declarando que subsisten los nombramientos. José Cerbera, por su parte, acude al Real Acuerdo solicitando se le exonere del cargo, lo que este tribunal acepta, comunicándoselo a la Junta, que nombra en su lugar, el 26 de diciembre, a José Aparici.

⁹³ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 51 B.

Ya dos años antes, el 2 de diciembre de 1807, el colegio había resuelto acudir al Supremo Consejo de Castilla solicitando se revocase el decreto del Real Acuerdo, por el que ordenaba a dicho colegio eximiese a Agustín Ramón de la abogacía de pobres, lo que por lo visto no consiguió.

Entre los años 1810 y 1820 fueron 29 los abogados que presentaron sus excusas. Sin embargo, la mayor parte no fueron aceptadas. Raramente aparecen en las actas sus motivos; siempre son las enfermedades que les imposibilitaban para el ejercicio de la profesión, según los mismos colegiados.⁹⁴ Para Santos Torres, este problema se agravó alarmantemente en Sevilla con las persecuciones de carácter político de Fernando VII, “en cuyo momento histórico la agudización de los procedimientos en su cuantía fue enorme a causa de las odiosas persecuciones, siendo a veces la tarea tan improba que no faltaría letrado que temiera por su bufete”.⁹⁵ Realmente, el trabajo debió ser agobiante, pues hay que contar, además, con las visitas de cárceles. Pero, en mi opinión, el problema en este caso no residiría tanto en el enorme trabajo que conllevaban el elevado número de depuraciones y persecuciones del régimen fernandino, sino, y sobre todo, en las implicaciones y compromisos personales en que podían verse los abogados. No obstante, no parece que la represión en Valencia fuera tan encarnizada como lo fue en Sevilla, al menos por lo que al colegio de abogados se refiere. Sobre ella, los libros de deliberaciones de Valencia no hacen comentario alguno.

El escrito que en 1815 presentó a la Junta el abogado Pedro Brugués nos proporciona la interpretación que pudiera ser más factible ante tanta excusa. Este individuo fue designado como abogado de pobres en 1810, cargo que sirvió no sólo hasta la elección de 1811, sino hasta la entrada de los franceses en la ciudad a principios de 1812. Según manifestaciones propias, en tiempo de la ocupación francesa sólo se designaron 6 abogados de pobres; de 1813 a 1814 se nombraron los 12 correspondientes, y otros tantos en el año siguiente. De esta forma, desde que se le designó por última vez para este

⁹⁴ Antonio M^a García de Alcaraz y Fermín Sánchez se excusaron en 1820; el primero por ser fiscal de hacienda pública y el segundo por marcharse pronto a la corte donde tenía solicitudes pendientes (caja 4, exped. 1, cartas de aceptación de cargos, sin números).

⁹⁵ J. Santos Torres, *Apuntes para la Historia...*, pág. 51. La situación era parecida en Granada, en donde el colegio se queja, en 1813, ante la frecuencia con la que los abogados acudían a la

cargo sólo habían sido abogados de pobres 30 de sus compañeros. Si en estos momentos el colegio se componía de 126 abogados, aunque sus dos terceras partes estuvieran inhabilitados, todavía no le correspondía el turno en 1815.⁹⁶ Lo cierto es que en ningún momento se especifica el criterio —si es que lo había— que debía seguir la Junta en la designación de estos individuos. De esta manera, cabía la posibilidad de ciertos tratos de favor que, difícilmente, podían plantearse ante la Junta. En los otros dos sistemas de designación de abogados de pobres igualmente podían darse irregularidades, si bien sus consecuencias serían menos gravosas. En el primer sistema, porque al haber sólo dos abogados la rotación en el turno era mucho más lenta. En el tercero, porque ya no sería tan gravoso su desempeño, ya que las causas de pobres se distribuirían entre todos los abogados en ejercicio.

Dentro de este segundo sistema, cada vez se hace más frecuente la práctica llevada a cabo por los nombrados como abogados de pobres de acudir al Real Acuerdo solicitando la exoneración del cargo, por no haberles admitido el colegio la excusa. De esta forma algunos de ellos consiguieron esta exoneración. Es el caso, por ejemplo, de Vicente Tomás Traver, del que en 1819 el Real Acuerdo solicitó al colegio informe sobre su pretensión. El colegio manifestó lo siguiente:

...sin entender causarle el menor agravio, según los antecedentes de la materia porque, si fue abogado de pobres en el año 1797, otros hay que posteriormente lo han sido 2 y más veces, y creyó asimismo [el Colegio] no servirle de impedimento el obtento de la cátedra para ejercer la abogacía, como no lo fue en los años anteriores, en que según es público y notorio era crecido el número de negocios judiciales que corrían baxo su dirección, de manera que, aunque en la actualidad haya abandonado muchos, se cree no lo haya hecho en el todo, y que más desembarazado que antes podrá desempeñar la referida confianza.⁹⁷

Finalmente, por decreto del Real Acuerdo se ordena al colegio que exonerase al referido Vicente Tomás Traver, siempre que hubiese abogado moderno que no hubiera ejercido este cargo. En virtud de ello fue nombrado en

audiencia alegando causas más o menos justas para que se les eximiese de tales cometidos. Véase E. De Lapresa Molina, *Historia del Ilustre...*, págs. 107 y 108.

⁹⁶ A.I.C.A.V., caja 9, expediente 2, hoja sin número.

⁹⁷ A.I.C.A.V., libro 6, pág. 5 B.

su lugar José Tomás Valentí, que también se excusó, y cuya excusa tampoco fue admitida por el colegio, acudiendo igualmente al Real Acuerdo, aunque en este caso todo indica que el tribunal no aceptó la solicitud.

También conocemos el caso de alguna excusa y exoneración parciales. Victoriano Morera, a pesar de su petición de exoneración total, sólo lo consiguió para las causas criminales y “entendiéndose todo en quanto al corriente año”.⁹⁸ A Vicente Irazo, por su calidad de presbítero, el Consejo de Castilla le había concedido facultad para intervenir únicamente en las causas civiles, negándosela por lo relativo a las criminales en virtud de decreto de 1 de octubre de 1814. La Junta, sopesando los inconvenientes que de ello se seguirían, nombró en su lugar a Pedro Boígues.⁹⁹

Por otra parte, destaca, cada vez más en estos últimos años, la práctica llevada a cabo por los elegidos de no contestar a la cédula por la que se les comunicaba su nombramiento, sin que sepamos ni sus causas ni sus consecuencias, ya que en los libros de deliberaciones no consta qué ocurría en estos casos.

En marzo de 1814, y ante el elevado número de excusas que se presentaban, se acuerda no admitir ninguna y acudir a las Cortes, a fin de que la Audiencia de Valencia observase la práctica que se seguía en Madrid —y que se había trasladado a Valencia por decreto de 5 de julio de 1798—, según la cual la designación de estos abogados correría exclusivamente a cargo del colegio. Incluso, tenemos el caso de que, en 1819, Pedro Fuster remitió oficio a la Junta, renunciando a la plaza que ocupaba en el colegio para ser relevado del cargo de abogado de pobres, deliberándose por la Junta que acudiese a donde tocase sobre la admisión de la renuncia propuesta.¹⁰⁰

A pesar de todo lo dicho hasta ahora, también tenemos algún caso esporádico de ejercicio voluntario del turno. Es el caso de Pascual Haro Serrano, que en 1810 presenta un memorial solicitando su reelección en la abogacía de pobres, como así se acordó.¹⁰¹ O los casos de Joaquín Fusell y Blas Gascó, que en los años 1818 y 1820, respectivamente, solicitan ocupar la

⁹⁸ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 166 B.

⁹⁹ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 264.

¹⁰⁰ A.I.C.A.V., libro 6, pág. 7.

¹⁰¹ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 125 B.

plaza en lugar de los abogados Manuel Chiva y Ramón Gilabert, en base a acuerdo con éstos, accediendo también la Junta.¹⁰²

Durante este segundo período tan sólo conocemos una ocasión en la que la Audiencia presentó sus quejas ante el colegio por

...el abandono con que más de una vez los abogados del Colegio de esta ciudad se han conducido en la defensa de los reos pobres que se les encarga, contra lo que dicta la humanidad y su primera obligación...¹⁰³

3. Años 1820-1838

Este nuevo sistema entró en vigor por decreto de la sala de gobierno de la Audiencia de Valencia de 25 de octubre de 1820, como consecuencia de una propuesta realizada por el colegio. Según esta propuesta, todos los individuos del colegio se turnarían en la defensa de los pobres, exceptuando a los exdecanos, componentes de la junta de gobierno durante sus empleos, relatores, escribanos de cámara y agentes fiscales.¹⁰⁴ Los abogados de pobres continuarían asimismo con las visitas de cárcel, en las que también se turnarían. Por cuanto el decreto de aprobación de este nuevo plan se recibió con posterioridad a los turnos repartidos, el colegio hizo saber a los abogados de pobres nombrados por la Junta que continuasen en la defensa de las causas repartidas, con el compromiso de que no se les repartiría otra hasta que, estando todos iguales en número, les tocase otro turno.

Posteriormente, en junta de 25 de enero de 1823, se modificó ligeramente este sistema y se añadieron a los cargos exceptuados hasta el momento de la defensa de pobres, los de examinador, juez de primera instancia y promotor fiscal.

Con este nuevo sistema las excusas al desempeño de la abogacía de pobres volvieron a ser escasas.

¹⁰² A.I.C.A.V., libro 5, pág. 183 y libro 6, pág. 10 B respectivamente.

¹⁰³ A.I.C.A.V., libro 5, junta particular de 20 de febrero de 1814. Véase asunto parecido en junta de 7 de febrero de 1816. Págs. 191-192 y 237 B-238, respectivamente. *Nov. Rec.*, 5, 23, 5.

¹⁰⁴ A.I.C.A.V., libro 6, pág. 22 B. Un sistema de reparto similar se retrasó para Zaragoza hasta el año 1839. Desde sus ordenanzas de 1578 hasta 1836 —sorprendentemente— sólo eran dos los abogados encargados del turno de oficio, que se renovaban anualmente. Desde 1836 a 1839 se designarían dos para las causas civiles y otros cuatro para las criminales. Véase L. del Campo Armijo, *El Real e Ilustre...*, pág. 48.

Pero lo que más destaca con respecto a los sistemas anteriores es que ahora la Junta del colegio ya no tendrá, como antes, competencia para conceder las exenciones solicitadas. Así se manifiesta en junta de 2 de noviembre de 1830, cuando el corregidor de esta ciudad solicita a la Junta que exonere del turno a Lorenzo Isern, por ser —según aquél— fiscal de las subdelegaciones de pósitos, montes y plantíos, y de mostrencos vacantes y abintestatos de este corregimiento.¹⁰⁵ De ahora en adelante las solicitudes de exoneración irán dirigidas directamente al Real Acuerdo, y se basarán en el desempeño de un cargo para el que pretenden equiparación con alguno de los exentos. Tal es el caso del director general de artillería, que en 1832 solicita se eximiesen de turnos a los fiscales de los juzgados privativos de esta arma; el de Pedro Torner de Torner, solicitando lo mismo en 1835, en base a ser empleado en el real servicio y estar agraciado con la plaza de abogado fiscal de la subdelegación de rentas; o el de Baltasar Reig, que en 1836 solicita la exoneración mientras permaneciese en la comisión de armamento y defensa de esta provincia.¹⁰⁶ Muchas —si no la mayor parte— de estas pretensiones son concedidas por la Audiencia Territorial, pese al informe en contra remitido por el colegio, que opinaba que

...[el servicio de la abogacía de pobres] no debe mirarse como un gravamen, sino como un encargo honorífico y que reporta utilidad, a la vez que el desempeño de dicho servicio dimana de la admisión voluntaria. Al contrario, la defensa de los pobres en todos sus negocios civiles o criminales se considera como un cargo, y de aquí es que, aunque honroso, pesa según las reglas de una justicia distributiva y debe pesar sobre los que reportan utilidad en el ejercicio de la abogacía. Si de tal cargo debieran exonerarse todos aquellos individuos colegiales que agregan a las utilidades eventuales de la facultad las que se miran como efectivas por los destinos que desempeñan, en virtud de su aceptación voluntaria, recaería entonces la defensa de las causas de pobres en un corto número de individuos, y que más necesitan de las utilidades de su profesión para proporcionarse con ellas su subsistencia, viéndose por lo mismo sobrecargados de un gravamen que no sufrirían los que cuentan con mayores emolumentos.¹⁰⁷

¹⁰⁵ A.I.C.A.V., libro 7, págs. 116-116 B.

¹⁰⁶ A.I.C.A.V., libro 7, juntas de 12 de noviembre de 1832, 16 de marzo de 1835, y 1 de octubre de 1836, págs. 145-145 B, 179-180 y 198 B-200, respectivamente.

¹⁰⁷ A.I.C.A.V., libro 7, junta de 11 de diciembre de 1830, págs. 119 B-120 B.

Por todo ello, durante este tiempo el colegio ya sólo recibe las correspondientes comunicaciones de exoneración del turno por parte de aquellos abogados que dejaban el ejercicio de la abogacía.

En este período nos encontramos con otras dos interesantes comunicaciones de la Audiencia relativas al ejercicio de la abogacía de pobres:

1. Según junta de gobierno de 11 de diciembre de 1830, la real sala del crimen acordó providencia por la que prohibía a los abogados del colegio que estuviesen encargados de la defensa de los reos pobres, ausentarse en lo sucesivo de la capital, sin dejar estas causas encargadas a otro compañero, y sin ponerlo en noticia de la misma sala, del decano del colegio y del procurador del reo.¹⁰⁸

2. Y por oficio de 16 de enero de 1836, la Audiencia hacía saber a la Junta que, de nuevo, se habían recibido quejas y reclamaciones sobre el descuido con que algunos colegiales despachaban las causas de pobres, y por la poca exactitud con que otros asistían a las cárceles para tratar con los presos. Con lo que mandaba al decano hiciese saber a los individuos del colegio que:

...el tribunal esperaba de su celo por el mejor servicio público y privado, mirase este negocio con la preferencia que requiere y es de esperar de su ilustración y consideración, evitando toda clase de quejas y reclamaciones de los presos cuyas causas tengan a su cuidado, procurando consolarles y viciarles siempre que sea necesario y les pueda convenir para el mejor y más pronto despacho de sus causas, dando con ello pruebas de su patriotismo y adhesión a las instituciones que felizmente nos rigen.¹⁰⁹

Consiliarios

Sin que este cargo viniese contemplado por los estatutos, la junta particular celebrada el primero de agosto de 1781 decidió que, en adelante, se designarían, todos los años, dos vocales o consiliarios para poder tratar con ellos asuntos de relevante entidad. En aquel mismo día ya se eligieron como tales a Francisco Nadal y a Cristóbal Tarazona.¹¹⁰

¹⁰⁸ A.I.C.A.V., libro 7, págs. 119 B-120 B.

¹⁰⁹ A.I.C.A.V., libro 7, pág. 189.

¹¹⁰ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 181-181 B.

Estos vocales, que eran propuestos por el decano, tenían que haber sido anteriormente decanos, y asistirían a las juntas que los oficiales y el decano estimasen oportunas, gozando de “voto consultivo”. De las actas de las juntas se desprende que tal facultad consistía en expresar sus opiniones cuando se les consultaba, sin que pudieran votar. En unas ocasiones, la Junta decidía tratar un tema concreto en la siguiente y para ello acordaba convocar a los consiliarios. En otras ocasiones, era el decano quien decidía personalmente convocarles, sin previa consulta de la Junta.

Si bien, durante los primeros años esta designación se realizaba normalmente en los meses de octubre o noviembre, en el siglo XIX prácticamente siempre tenía lugar en la junta de elección de cargos. Raramente asistían al acto de posesión, y durante todos estos años no conocemos ningún caso de renuncia al cargo, a pesar de que estos nombramientos solieron recaer en la misma persona durante varios años, alternados o incluso consecutivos.¹¹¹ En cierto modo podemos considerarlo como un cargo de honor que confería mayor prestigio al elegido, y que estaba exento de cualquier tipo de responsabilidad.

Con el tiempo se fue afianzando la costumbre de convocar a las juntas en que se iban a tratar asuntos de relevante importancia a todos los exdecanos que aún estuvieran en vida, además de a los consiliarios.

Examinadores

En 1770 el Real Acuerdo de Valencia ponía en conocimiento del colegio de abogados la provisión del Real Consejo de 21 de agosto de ese mismo año, según la cual el colegio debía nombrar nueve individuos para que examinasen a aquellos que quisieran recibirse como abogados en el Real Acuerdo.¹¹²

Estos examinadores, que se reunían alternativamente cada semana en ternas de tres, tenían como misión examinar a los aspirantes a abogados,

¹¹¹ Entre todos los consiliarios destaca Vicente Martínez Bonet. Fue elegido como decano en los años 1811 y 1820, y como consiliario en 11 ocasiones: en 1819, 1825, 1828, 1829 y 1831-1837. Otros que fueron designados como consiliarios varios años fueron: José Ignacio Alfonso, en 7 ocasiones; Pedro Sacristán, en 6, o Cristóbal Tarazona y Vicente Ximénez, en al menos 5 ocasiones cada uno.

¹¹² A.I.C.A.V., libro 4, junta de 7 de octubre de 1770, pág. 113 B.

después de que éstos presentasen en el Real Acuerdo los documentos y certificaciones necesarias. En concreto debían ser examinados

...acerca de las acciones, demandas y recursos, método y forma de libelar, introducir uno y otro contestar, deducir las excepciones, dirigir y substanciar toda clase de juicios, poner acusaciones en los criminales, y todo lo demás conducente a poder formar concepto de si se hallan instruidos en la práctica, de modo que puedan desempeñar la obligación del empleo...¹¹³

Una vez examinados, debían manifestar si los encontraban o no suficientemente instruidos en el ejercicio de la abogacía, para presentarse al examen de recibimiento de abogado en el referido tribunal.

Por lo tanto, la junta de elección designará a los dichos nueve colegiales examinadores en tres ternas, presididas la primera por el decano, y la segunda y tercera por los diputados primero y segundo, respectivamente, siendo el diputado cuarto el segundo vocal de la terna primera.¹¹⁴ Precisamente, eran el decano y los dos diputados primeros quienes proponían a la Junta el otro o los otros dos examinadores que iban a completar sus ternas. Estas propuestas eran siempre aceptadas por la Junta. Como excepción, en 1814 fue la Junta quien designó a los dos examinadores de la terna tercera por no haber propuesto ninguno el diputado segundo, Vicente Martínez Bonet, tras los dos oficios que se le remitieron para que procediese al efecto.

Nos consta que fueron escasísimas las excusas al desempeño de este cargo.¹¹⁵ Destaca la inicial excusa de José Berní y Catalá, en 1771. Pero al no

¹¹³ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 65, folios 391-394 B. Véase también más adelante *Recibimiento de abogado en el Real Acuerdo de Valencia*.

¹¹⁴ Realmente, esta composición data de la junta de elección de cargos de 1776. En los años anteriores ni el diputado primero ni el segundo eran examinadores. El colegio de Sevilla solicitó en este sentido información al de Madrid, que manifestó que uno de los examinadores debía ser el decano, y que las pruebas deberían practicarse en su casa o, por justo impedimento, en la del más antiguo de los examinadores. Véase J. Santos torres, *Apuntes para la Historia...*, pág. 26.

¹¹⁵ El 19 de noviembre de 1770 se eligió como examinador a Pedro Salvador, por haberse aceptado la renuncia de Pedro Abaás, quien alegó motivos de salud (A.I.C.A.V., caja 4, exped. 1, sin núm.). En 1772 también presentó su excusa Francisco Bruno Sebastián, por sus continuos accidentes, sin que conste su aceptación. En 28 de septiembre de 1774, al decano le parecieron suficientes y legítimos los motivos alegados por Juan Micó, nombrándose en su lugar a Antonio Salabert, quien también se excusó. Sin embargo, el 19 de octubre se acordó no aceptar la excusa de este último, que en su nombre había presentado Manuel Román, también

aceptarla la Junta, por no parecerle suficientes los motivos aducidos —“por hallarme notoriamente ocupado en la obra *Apuntamientos sobre leyes recopiladas*”—¹¹⁶, finalmente aceptó. Al parecer, y igual que ocurría con el de consiliario, el de examinador podía ser considerado como un cargo honorífico, en cuanto que demostraba la confianza que la Junta y sus oficiales depositaban en los designados. De hecho, la provisión del Real Consejo prevenía que los individuos fueran “de los de maior satisfacción y crédito”. No obstante, este cargo conllevaba más trabajo y dedicación que el de consiliario.

Es interesante destacar que, al menos en tres ocasiones, el Real Acuerdo presentó queja formal ante el colegio por haber aprobado los examinadores a sujetos “que no sólo resultan ignorantes de las leyes, si que hasta de los principios de jurisprudencia, y que esperaba que en su sucesibo procedería en ellos con más detención”.¹¹⁷ Se pretendía del colegio que procurara “que los sugetos que se presenten a examen en el tribunal superior reúnan los conocimientos prevenidos por las leyes”.¹¹⁸ En la primera de estas tres quejas, remitida al decano por carta orden de 15 de julio de 1786, se advertía que estos abogados no se hallaban instruidos conforme se prevenía en las reales provisiones del Consejo de 21 de agosto de 1770 y de 21 de abril de 1784.¹¹⁹

Comisarios para la fiesta de la Asunción y de la Concepción

Se trata de un cargo desempeñado por dos oficiales que la Junta designaba anualmente para cada una de estas fiestas. Su cometido era organizar y preparar los eventos. Así, por ejemplo, en junta de 6 de agosto de 1762 se designó para la primera fiesta de la Asunción a los comisarios Juan Bautista Navarro y Mariano Caller “para que, contando con el *padre* prepósito de la Compañía de Jesús, manden poner la vaya, arreglo de vancos y tablado para la música, si lo estimaren conveniente”.¹²⁰

examinador. En 1793 tampoco aceptó Francisco Reig, esta vez por tenerse que marchar de la ciudad.

¹¹⁶ A.I.C.A.V., caja 4, exped. 1, cartas de aceptación de cargos, sin número.

¹¹⁷ A.I.C.A.V., libro 6, junta de 19 de octubre de 1822, pág. 43 B.

¹¹⁸ A.I.C.A.V., libro 7, junta de 1 de mayo de 1837, pág. 210.

¹¹⁹ A.I.C.A.V., libro 4, junta de 22 de julio de 1786, pág. 222.

¹²⁰ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 29 B.

Estos oficios se designaban unos meses antes de la fiesta, y podían recaer en cualquiera de los componentes de la Junta, sin que en la designación se siguiera norma alguna conocida; si bien, es cierto que habitualmente uno de ellos era el maestro de ceremonias. No se tiene constancia de ninguna renuncia.

Prefecto

Se trata del único cargo recogido por los estatutos que no recaía en abogado colegial.¹²¹ Según el estatuto VIII, se establecía este oficio para "continuar el culto y alentar la devoción", para que predicase los sermones y pláticas, repartiese los ramilletes a los ministros de la Audiencia y abogados congregantes, y asistiese a las juntas de elecciones, "con quien comuniquen los oficiales para asegurar los aciertos". La intervención de este oficio finalizó en el año 1835, cuando fueron disueltas las órdenes religiosas. Según el mismo estatuto VIII, el prefecto debía ser "uno de los padres más graves que residan en la casa profesa de la Compañía de Jesús de la referida ciudad de Valencia".

Este padre era elegido mediante votación por la Junta, y dicha elección se remitía para su aprobación al padre provincial de la Compañía de Jesús, o al superior que fuere de la iglesia o convento donde se situare la congregación.

El primero de abril de 1762 se eligió con todos los votos como primer prefecto que tuvo el colegio al padre Sebastián Antón.¹²² Los siguientes prefectos fueron los siguientes: José Ferrando, elegido en 1767; Juan Bautista Sanz, en 1786; Antonio Más, en 1789; Martín Belda, en 1792; Gaspar Cabrera, en 1808, substituyéndolo en su prolongada ausencia Rafael Cabrera; Vicente Peris, en 1816; José Torres Jordá, en 1821; y Miguel Jordá, en 1823. Todos ellos de la congregación de San Felipe Neri, salvo Sebastián Antón y Vicente Peris, de la Compañía de Jesús.¹²³

¹²¹ P. Nácher Hernández, *Historia del Ilustre...*, págs. 153 y sigs.

¹²² A.I.C.A.V., libro 4, pág. 10 B-11 B.

Otros

Dentro de este apartado he querido incluir aquellos otros oficios o cargos designados por la Junta que reunían dos requisitos: que no eran desempeñados por colegiales y, en segundo lugar, que tampoco venían contemplados por las ordenanzas. Son fundamentalmente dos:

*Monitor, Asistente o Mancipe*¹²⁴

Este oficio, que vendría a ser una especie de alguacil u ordenanza, aparece regulado por primera vez en junta particular de 3 de marzo de 1762. En ella se trató de la necesidad de nombrar un monitor fijo, recayendo el cargo, a petición de parte, en la persona que hasta esos momentos lo había desempeñado interinamente, Francisco Quiles, y que había cobrado sólo por los trabajos hechos. En la misma junta se establecieron sus obligaciones, que eran las de efectuar las "convocatorias particulares y generales, citaciones, asistencias en los días de las fiestas del colegio, cobranzas y demás actos de comunidad, estando a la orden del señor decano, que ahora es y por tiempo fuere".¹²⁵

Su salario era el de veinticinco libras anuales, pagaderas por mitades en los días de San Juan y de Navidad de cada año. Además, según los legajos de cuentas, tenía derecho al cinco por ciento de lo recaudado de las anualidades a que estaban obligados los colegiales.

Con la creación del montepío pasará además a desempeñar los cargos de solicitador y recaudador del mismo. Y en junta particular de 25 de octubre de 1808, y por petición propia, se acuerda darle el mismo tratamiento que el que recibía su homónimo en el colegio de Madrid. A partir de ahora, su nombre y domicilio aparecerá en las listas de colegiados que se repartían anualmente, con el título de *asistente del colegio y recaudador del montepío*.

En 1823 se redefinen y detallan sus derechos y obligaciones que, transcritas literalmente, quedan de la siguiente manera:

¹²³ P. Nácher Hernández, *Historia del Ilustre...*, págs. 156 y 157.

¹²⁴ P. Nácher Hernández, *Historia del Ilustre...*, págs. 159 y sigs.

¹²⁵ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 8 B-9 B.

1ª. Primeramente tendrá la obligación de hacer todas las convocatorias, así las ordinarias para juntas, visitas de cárceles y entierros, como las extraordinarias, cualesquiera que sean.

2ª. También deberá asistir a todas las juntas a la hora señalada, permaneciendo en la antesala mientras duren aquéllas.

3ª. En el día de Concepción deberá concurrir un poco antes de la hora señalada al oratorio de la congregación, o iglesia en donde se celebre la misa de comunión, para repartir las velas a los abogados colegiales, y otro tanto hará en el día de la fiesta principal a los actos de comunión y misa solemne vestido de negro.

4ª. Sin perjuicio de acudir a la casa del S. decano siempre que éste le llame, deberá hacerlo los martes de cada semana a recibir las órdenes que tubiere que darle.

5ª. Deberá ser muy solícito en la recaudación de la contribución ordinaria de Colegio, monte pío y cualesquiera extraordinaria, recibiendo del tesorero las cautelas y cartas de pago que presentará al Sr. contador para la toma de razón, y dando al mismo tesorero una cuenta exacta y semanal de las cantidades que recoge y de los recibos que quedasen en su poder por no haberlas percibido.

6ª. También será de su cargo la recaudación de la limosna de misas quando falleciere algún abogado colegial. A este fin recogerá del Sr. secretario el dicho día los recibos de los contribuyentes, y dentro de los ocho siguientes difinirá su cuenta con el mismo, para que no quede retardado ni defraudado el sufragio y éste pueda practicarlo en la 1ª junta.

7ª. Por razón de salario percibirá de los fondos del Colegio 376 reales anuales por medias anualidades vencidas en el día de Sn. Juan y Navidad, y otra igual cantidad de los del monte pío. Y, además, el tres por ciento de las cantidades que cobraren pertenecientes al monte pío, y el quatro por ciento de los tocantes al Colegio.¹²⁶

8ª. Como no es de presumir que la Junta del Ilustre Colegio y Monte Pío trate de separar al asistente sin causa justa, a fin de evitar todo motivo de dudas o recomvenciones se declara que el nombramiento se entiende durante la voluntad de la Junta.

9ª. Dentro de ocho días deberá afianzar competentemente a contentamiento de la Junta en cantidad de dos mil reales de vellón, y no verificándolo se tendrá por no hecho el nombramiento que obtuviere, y la Junta quedará en libertad de nombrar otro en su lugar.¹²⁷

Esta redacción aparece en la junta particular de 19 de julio. El día 12 del mismo mes se había decidido cambiar de asistente por su "inutilidad".¹²⁸

¹²⁶ No obstante continuará cobrando en muchas ocasiones el cinco por ciento.

¹²⁷ A.I.C.A.V., libro 6, pág. 53.

Procurador

Tal y como vimos al principio, el 9 de abril de 1759 —cuando el colegio de abogados todavía no estaba constituido oficialmente—, se designó a Pedro de Rueda y Osorio, procurador del número de los reales consejos, para que suplicase la filiación del colegio de Valencia al de Madrid, solicitase los estatutos y reglas para su puntual observancia, y su real aprobación.

El 28 de agosto de 1763 se tuvo presente que el colegio de Valencia necesitaba de procurador en la corte para llevar los expedientes que se le encargasen, y teniendo entera confianza en don Antonio Gallego Santillana, *agente de negocios* y vecino de Madrid, le nombraron y le remitieron los poderes y encargos, con el acuerdo de gratificarle solamente por los trabajos que practicara.¹²⁹

En resumidas cuentas, el colegio designaba un procurador, tanto en la corte como en la Real Audiencia, para la tramitación de todos los asuntos con él relacionados que se estuvieran ventilando en estas instancias. Y así, la junta particular de 8 de abril de 1774 acordó designar como procuradores en la corte y en la Real Audiencia, respectivamente, y por haber fallecido los anteriores, a don Baltasar de la Peña y don Gerónimo Miguel Aparicio. Estos procuradores se fueron renovando con el paso de los años, sin perjuicio de que en asuntos concretos se designara procurador al efecto.¹³⁰

En realidad, no se trataba propiamente de ningún cargo del colegio, sino de un simple procurador de los tribunales que también trabajaba para el colegio, y que, además, podía desempeñar funciones de gestor o agente de negocios.

Otros oficios también prestaban sus servicios al colegio, sin estar a su completa disposición ni teniendo un salario determinado, sino cobrando sólo por los trabajos realizados. Se trata, por ejemplo, de los escribanos, de los amanuenses de la secretaría y de la tesorería, de los cereros, de los cocheros, de los porteros de la Real Audiencia y del cuarto que en la misma tenían a su

¹²⁸ A.I.C.A.V., libro 6, págs. 50 B-51 B.

¹²⁹ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 59 B.

¹³⁰ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 138-139. Asimismo véase, por ejemplo, juntas de 15 de octubre de 1784 ó de 4 de diciembre de 1813.

disposición los abogados, etc.¹³¹ También se incluye en este apartado al impresor quien, "siguiendo las reglas de los tribunales y cuerpos distinguidos", se encargaba de todas las impresiones del colegio mientras duraba su cargo.¹³²

¹³¹ Véase punto 7 del apartado *Data o Descargo en Cuentas del colegio*.

¹³² A.I.C.A.V., libro 4, pág. 9 B.

CAPÍTULO III: CORPORATIVISMO

El motivo fundamental por el que se fundó el colegio de abogados fue el de constituirse los letrados valencianos en una corporación que defendiera sus derechos profesionales y los hiciera valer, tanto ante la sociedad en general, como, y sobre todo, ante las instituciones, especialmente la Real Audiencia. De esta forma se intentaba reivindicar la nobleza y el prestigio de que la abogacía había gozado durante siglos. Prueba de ello es el *Resumen de los privilegios, gracias y prerogativas de los abogados españoles*, que en 1764 escribió Berní y Catalá. No obstante, el hecho de que se escribiera esta obra es una de las pruebas inequívocas de que, en estos momentos, continuamente se cuestionaba la pretendida consideración de la nobleza del abogado y de la abogacía.

Pero el colegio no sólo se erigió para mantener el lustre y privilegios de tan noble profesión. Su principal finalidad era mucho más práctica: la defensa de los intereses profesionales de sus colegiados en su trato con los tribunales.

Por todo ello, podemos observar cómo, a lo largo de los libros de deliberaciones, una gran parte de los temas tratados están relacionados con la defensa de estos intereses o derechos frente a terceros. A su vez, estos intereses y derechos podían ser, bien del colegio en sí como corporación, o bien de los mismos colegiados como profesionales, si es que el problema derivaba del ejercicio de la abogacía. E incluso si no tenían su origen en el foro, porque, en cualquier caso, el colegio entendía que cualquier agresión contra uno de sus miembros repercutía en todo el cuerpo de abogados, de ahí que cualquier asunto sería tratado como de interés general.¹³³

¹³³ Antes de entrar en materia debo hacer constar que algunos temas que en principio podrían haberse incluido en este apartado, o bien los trataré en un futuro próximo en otros trabajos, o bien los he incluido en otros apartados de la tesis, ya por claridad expositiva, ya porque he creído que gozaban de autonomía suficiente como para ser estudiados por separado.

Defensa del colegio y de sus individuos

El interés del colegio por velar por el honor, privilegios y derechos de los abogados se revela ya en sus primeras decisiones; en concreto, en la junta general de 5 de agosto del año 1762. El 31 de julio del año siguiente se eligieron delegados o comisarios para la negociación de las medidas adoptadas en esta junta. Para su tramitación en la corte se nombró como encargado, en junta general de 17 de marzo de 1763, al abogado Andrés Chornet, quien posteriormente fue substituido por Carlos Sacristán.¹³⁴ Estas medidas a que nos referimos fueron las siguientes:

1ª) En primer lugar, y estando el colegio de Valencia incorporado por filiación al de la corte, se ordenó imprimir y repartir entre sus colegiales un resumen de todos los privilegios, gracias y prerrogativas de éste, ya que, como decía la real provisión de aprobación de los estatutos, "todos los decretos, autos acordados y providencias promulgadas y expedidas a su favor, sean y se entiendan comprehensivas al de Valencia, su decano e individuos".

Con la misma finalidad de instruir a los colegiados en sus prerrogativas, en junta particular de 26 de marzo de 1763 se encargó a José Berní y Catalá, por aquel entonces secretario del colegio, que recogiese, arreglase y coordinase todas estas distinciones, lo que dio lugar a su obra aludida *Resumen de los Privilegios, Gracias y Prerogativas de los Abogados Españoles*.¹³⁵

2ª) En segundo lugar se trató de la falta de aranceles reales.

Hasta ahora, y ante la falta de un sistema oficial de aranceles, era un tasador quien tasaba los escritos de los abogados, bajo la supervisión final del juez de la causa. La tasación se practicaba habitualmente por el número de hojas, método que originaba gran número de abusos al propiciar los escritos largos y pesados, en defecto de su contenido y substancia. No obstante, parece ser que en la Audiencia de Valencia, al igual que en otras, se permitía que la tasación se practicara por abogado, siempre que lo solicitaran las partes. En esta junta de 5 de agosto se acordó practicar las diligencias

¹³⁴ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 26-29, 54 B-56 y 40 B, respectivamente, para cada una de las tres juntas.

oportunas para que las tasaciones se realizaran por el colegio, bajo las reglas y circunstancias que se acordaran, y sin coste para los litigantes. De esta manera se estimularía a los abogados a escribir pedimentos claros y concisos.¹³⁶ Para ello se designaron como comisarios a Francisco Nadal y José Ignacio Alfonso.

La siguiente noticia que tenemos sobre este asunto data de la junta de 22 de octubre de 1768, cuando se designó al colegiado Juan Bautista Navarro para que se enterase de las leyes y autos acordados que trataban sobre las tasaciones, a fin de que en junta inmediata se resolviera lo que pareciere conveniente.¹³⁷ Sin embargo, no consta en los libros de deliberaciones que tal junta tuviese lugar.

En 1785, el colegial Carlos Sacristán, que por aquel entonces era el nuevo apoderado o procurador del colegio en la corte, remitió al colegio de Valencia un extracto del expediente formado a consecuencia del memorial que dirigió al monarca la ciudad de Valencia, sobre la regulación de derechos de los relatores, escribanos de cámara, numerarios y de provincia. Expediente en el que Sacristán se había constituido como parte. Aprovechando este asunto, la Junta le ordenó que pusiera de manifiesto que en el memorial referido no se hablaba de los derechos de los abogados, y que solicitara del Supremo Consejo que nada se acordase sobre dicho punto sin su audiencia.¹³⁸

Lo último que se conoce sobre materia de aranceles u honorarios, es que en la junta de 18 de mayo del año siguiente se leyó una carta remitida por Carlos Sacristán, en la que exponía el estado en que se encontraba el expediente, las diligencias practicadas y los gastos ocasionados —320 reales de vellón—. ¹³⁹ Desafortunadamente, tampoco consta en los libros de deliberaciones el contenido de esta carta.¹⁴⁰

3ª) Se acordó, en tercer lugar, instar las diligencias oportunas conducentes a conseguir tasaciones de alquileres más baratos, ya que era

¹³⁵ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 48 B-49.

¹³⁶ *Resumen de los Privilegios...*, privilegio XXVIII, págs. 60-63.

¹³⁷ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 104-104 B.

¹³⁸ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 209 B.

¹³⁹ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 218 B-219 B.

¹⁴⁰ Mucho más tarde, en 1829, tenemos noticias sobre la regulación de los nuevos aranceles, derechos y honorarios de los abogados. A.I.C.A.V., libro 7, pág. 89 B y caja 10, expediente 7.

conveniente que las casas —entiéndase despachos— estuvieran cerca de la Audiencia, y los precios eran abusivos. En este sentido, Berní y Catalá consideraba que uno de los privilegios de los abogados era que, “por el tanto de alquiler, es preferido en la casa inmediata a la Audiencia, cómoda para el ejercicio, tassándose los alquileres”.¹⁴¹ Al efecto se designaron los mismos comisarios que para el punto anterior.

4ª) En cuarto lugar, la junta general de que hablamos trató de las cuatro examinaturas de Cánones y Leyes que, hasta 1717 —según sus manifestaciones—, regentaban cuatro abogados de plaza o *prácticos*, sin tener cátedra. Estas plazas, según el mismo colegio, eran proveídas por la ciudad como patrona. En 1717, el claustro mayor de la universidad decidió que dos de las referidas examinaturas se agregasen a las dos cátedras temporales de *Instituta* que se habían creado ese año, y que las otras dos se suprimieran, así como fallecieran sus poseedores.¹⁴² Dice Berní que estas dos últimas se aplicaron al Hospital de Pobres Estudiantes, “para que lucrarse el salario y propinas”.¹⁴³ Lo cierto es que una de ellas ya había vacado por muerte de José Llosá, mientras que la otra la poseía Cristóbal Monsoriu, decano del Consejo Real. La Junta consideraba que, existiendo colegio de abogados en la ciudad, se debía intentar que dichas examinaturas fuesen de nuevo ocupadas por abogados de plaza.

Hasta el plan de estudios del rector Blasco de 1786, en la universidad de Valencia enseñaban los catedráticos, pero de los grados y de sus exámenes quedaban encargados los examinadores. Aunque se trataba de cargos diferentes, buena parte de las examinaturas se asignaban a catedráticos, incluso había cátedras que las tenían anejas. Otras examinaturas, sin embargo, provenían de fuera de la universidad y se encomendaban a personas importantes: como a dignidades de las órdenes y conventos de

¹⁴¹ J. Berní y Catalá, *Resumen de los Privilegios...*, privilegio XXXII, págs. 70-73.

¹⁴² Hasta la recuperación del patronato de la universidad por el municipio, en 1720, y desde la Guerra de Sucesión, no se había reunido el claustro mayor, por lo que la fecha de 1717 debe obedecer a una equivocación de la Junta. Véase P. Marzal Rodríguez, “La organización claustral en la universidad de Valencia”, *V Congreso Internacional sobre las Universidades Hispánicas*, Salamanca (en prensa).

¹⁴³ J. Berní y Catalá, *Resumen de los Privilegios...*, privilegio XLIV, pág. 91. Finalmente, Berní decía que “y con efecto, vacó la tercera Examinatura, y se aplicó, y oy aún ay en ser la que posee el Ilmo. Señor Don Chistóval Monsoriu, Conde de la Villanueva, Camarista y Decano del Consejo Real”.

Valencia, en Teología y Filosofía, o a los abogados del ayuntamiento, en Derecho. A partir de 1786, "Los Examinadores para los grados, tanto de Bachiller, como de Maestro y Doctor, serán únicamente los Catedráticos perpetuos de la facultad de que sea el grado".¹⁴⁴ La decisión de 1717 parece ser una de las consecuencias de la pérdida del patronato de la universidad por parte de la ciudad, tras la decretos de Nueva Planta, que, no obstante, recuperó en 1720.¹⁴⁵

Los designados como comisarios para tratar este asunto fueron el decano, Juan Bautista Monseny, y el diputado tercero, José Teodoro Botella. Se les ordenó pasar a conferenciar con el arzobispo y el corregidor, por ser los principales votos en el claustro mayor, como órgano de gobierno de la universidad. Y para hablar con los demás señores del claustro se designó a Manuel Albert, Vicente Ruiz, Vicente Ferrer y Jacinto Xavier de Castro. Sobre la misma pretensión, el 9 de mayo de 1764 la Junta acordó remitir al secretario de la ciudad un memorial que el secretario del colegio, Vicente Traver, había formado para la Junta del Patronato de la universidad y claustro mayor. En la misma junta también se acordó, que dicho secretario y el diputado segundo, Vicente Ruiz, visitaran a los señores que componían la Junta del Patronato para suplicar que favoreciesen al colegio en su pretensión.¹⁴⁶

Tanto este punto como el anterior fueron incluidos por Berní y Catalá en las *decadencias* VI y VII, respectivamente, que, junto con las demás, presentó a la Junta del colegio en 1776, como queja ante la falta de integridad y honestidad profesional en que, según él, incurrían habitualmente los abogados en general, y los miembros de la Junta en particular.¹⁴⁷ Lo que

¹⁴⁴ Capítulo XVII del *Plan de estudios aprobado por S. M. y mandado observar en la Universidad de Valencia, Madrid. En la imprenta de la viuda de Ibarra. Año MDCCLXXXVII*. La última parte de este capítulo decía lo siguiente: "Los que actualmente son Examinadores sin ser Catedráticos, podrán continuar en serlo durante su vida, con las mismas preeminencias que gozan: pero en adelante no ha de haber otros sino los Catedráticos que formen el Claustro de la facultad. Solamente podrán ser Examinadores para los grados de Leyes y de Cánones aquellos Abogados de la Ciudad, que fueren de la nueva clase de Opositores: y de éstos ni en el asiento, ni en las presidencias ordinarias de los grados tendrán preeminencia alguna sobre los otros Examinadores".

¹⁴⁵ M. Peset y otros, *Bulas, constituciones y documentos de la Universidad de Valencia (1707-1724)*, Valencia, 1977, págs. 17 y sigs.

¹⁴⁶ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 73.

¹⁴⁷ A.I.C.A.V., caja 1, expediente 13.

quiere decir que, pasados trece años, todavía no se había logrado nada. Como dice Nácher Hernández, el colegio

...acabó perdiendo sus derechos, que en rigor sólo consistían en privilegios de carácter medieval, nacidos del advenimiento de Valencia a la categoría de ciudad de primer orden, bajo el signo de la creación de servicios e instituciones nuevas que hubo de servir, valiéndose ocasionalmente de los abogados, hasta que las magistraturas y las cátedras pudieron ser provistas con la debida adecuación.¹⁴⁸

5ª) Y, en último lugar, el 5 de agosto de 1762 también se acordó que si algún colegial estuviera enfermo para despachar los pleitos, así propios como de sus principales, se diera cuenta al decano, para que éste nombrara dos abogados que despacharan dichas causas. El estipendio sería para el abogado imposibilitado, una vez se descontaran los derechos de papel y escribir.

Otras fueron las materias en que el colegio también destacó en la defensa de los intereses de la corporación y de sus individuos:

Defensa de la nobleza de la abogacía

En la junta particular de 13 de septiembre de 1763 se tuvo presente el distintivo de DON que se debía dar a los abogados. Para ello se dio comisión a dos diputados, a fin de que pusieran el expediente que al efecto se había formado en conocimiento de los señores ministros togados, los que, según consta en la junta de 21 de septiembre, vieron conforme a justicia esta pretensión, si bien manifestaron que, antes de presentar el oportuno pedimento en el Real Acuerdo, el decano y el oficial elegido pasaran a tomar la venia al presidente y regente.¹⁴⁹

En estos momentos, la categoría de una profesión y de sus ejercientes se medía utilizando el patrón nobiliario, y en *Partidas* parece ser que se

¹⁴⁸ P. Nácher Hernández, *Historia del Ilustre...*, pág. 181.

¹⁴⁹ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 63-63 B. Estos diputados eran el segundo y el tercero, Vicente Ruiz y Pedro Vicente Traver, respectivamente.

concedía a la abogacía algunos de los privilegios de la nobleza.¹⁵⁰ A pesar de que ninguna norma hace referencia, de manera inequívoca, a la nobleza personal de los abogados, los defensores de esta postura basan sus argumentos en estas vagas disposiciones de *Partidas*. No obstante, siempre fue tema discutible en la práctica. Al menos, las instituciones lo solían poner en entredicho.

La consideración del abogado como noble impregna toda la obra de Berní y Catalá. Pero es en el *Resumen de los privilegios, gracias y prerrogativas de los abogados españoles*, de 1764, donde se desarrollan y explican detalladamente las 52 prerrogativas de que, según Berní, disfrutaban los abogados españoles. Privilegios a los que no podía renunciar el abogado, por ser propios de la abogacía.

En el primero de estos privilegios se intenta establecer una interesante distinción —que, por otra parte, no queda nada clara—, entre el abogado colegiado y el que no lo era. Berní y Catalá, citando a Melchor de Cabrera, consideraba que los privilegios de los abogados se entendían para sólo los del Consejo, chancillerías y audiencias, y no para los demás del Reino. Por consiguiente, existiendo en la ciudad de Valencia un colegio, cuya incorporación en el mismo era imprescindible para ejercer en su audiencia,¹⁵¹ estos privilegios no alcanzarían a los que no estuvieran incorporados en el mismo. Estos últimos se conformarían con los honores generales que los legisladores hubieran concedido a las universidades y a sus graduados, y que se detallaban en sus constituciones. Es posible, que por ser esta obra de Berní

¹⁵⁰ Según *Partidas* 2, 31, 8, "...e después que ayan veinte años tenido Escuelas de las Leyes, deuen auer honrra de Condes ... deven ser quitos de pecho; e non son tenidos de yr en hueste, nin en cavangada, nin de tomar oficio, sin su plazer". Además, establecía que "Ca assí como dixerón los Sabios antiguos, la sabiduría de los Derechos es otra manera de Cauallería..." (2, 10, 3); y que "...non deuen meter a tormento ... nin a Cauallero, nin a Maestro de las Leyes, o de otro saber..." (7, 30, 2). Véase *Los códigos españoles concordados y anotados*, 12 vols., Madrid, 1847-51, II, págs. 381 y 557, y IV, pág. 459. A su vez, las calidades que se exigían de todo aspirante a colegial no son sino una de las consecuencias de la consideración por el colegio de la nobleza de los abogados (estatuto XVII). Y el interrogatorio a que debía someterse todo pretendiente es muestra inequívoca de esta preocupación (estatuto XVIII). Todo ello lo que veremos detenidamente en el apartado *Ingreso en el colegio*

¹⁵¹ La obligatoriedad de la incorporación en el colegio para ejercer la abogacía en la ciudad de Valencia se recoge en el estatuto XXV. Además, es consecuencia de la filiación de este colegio al de Madrid, y de la aplicación a aquél de todas las normas dictadas para éste (estatuto XXXVIII). Véase en este sentido los decretos del Consejo de Castilla de 21 de mayo y 16 de julio de 1737, que se recogen en la *advertencia* que aparece al final de la lista de colegiados que se repartía anualmente.

un encargo del colegio, se intentara reforzar el papel de esta institución, así como empujar a los abogados a su colegiación. Pero, finalmente, la diferencia fundamental parece ser que se reduce "al honor de la familia y asuntos que miran a colegiales, quedando los que no lo son con los honores del grado y aprobaciones". De forma que "para el honor del grado y título de aprobación se admite a cualquiera que desempeña los actos", mientras que para ser colegial se requería la limpieza de sangre y demás requisitos detallados en el decreto de 14 de diciembre de 1761.

El segundo de los privilegios se refiere también a sólo los abogados colegiados. Más que un privilegio se trata de la prohibición que existía de ser colegial para los moros, judíos, herejes y sus descendientes, para los castigados por tribunal alguno que irroque infamia, y para los que hubieran ejercido oficio indecente, vil o mecánico opuesto al lustre de la abogacía, incluyéndose a los padres y abuelos paternos y maternos del pretendiente.

A lo largo de los 50 privilegios restantes, tan sólo en dos ocasiones se establece una cierta distinción, con efectos prácticos, entre los abogados colegiados y los que no lo son. Según el privilegio XVI, si un abogado colegial pasa a relator, deja de salir en la lista, y si al dejar este oficio quiere entrar de nuevo en el colegio, no se le negará el ingreso. Y en segundo lugar, a tenor del privilegio XXV, el catedrático en leyes es considerado caballero, si está aprobado tiene más privilegios, y si es colegial todavía muchos más, "según se manifiesta por los privilegios que se van notando".

Además, hay otros tres supuestos privilegios, que realmente no son tales, sino un realce de la condición de colegial. Según el XIV, los abogados colegiados poseen las circunstancias de doctos y experimentados, por tener probada su limpieza de sangre "sin mancha adquirida ni heredada", lo que supone un mérito que les facilita el ascenso en la carrera y el desempeño de las mejores plazas. En el privilegio XV se expone la necesidad de que el empleo de fiscal en el reino de Valencia recayese en sujeto valenciano —colegial—, por, entre otros motivos, la necesidad que existe de conocer el derecho foral y su práctica, por los que se tenían que substanciar tantas causas pendientes todavía. Necesidad que Berní la extendía a todos los abogados valencianos. Finalmente, en el privilegio XLIV se trataba de que "quatro abogados colegiales son compatronos de la universidad valenciana y

examinadores, a más de las quatro examinaturas de plaza". No obstante, estos dos últimos privilegios tienen su origen en una práctica anterior a la fundación del colegio, por lo que la pretendida intervención del mismo no puede darse por supuesta. Además, ya hemos visto que estas examinaturas estaban extinguidas.

La mayoría de los 45 privilegios restantes toman como punto de referencia la obra de Melchor de Cabrera *Idea de un abogado perfecto*.¹⁵² Muchos de ellos ni siquiera se comentan, sino que tan sólo enumeran los autores que previamente los han tratado. Unos privilegios destacan la categoría de que gozaban los abogados por el hecho de ser tales: el ser personas egregias, el tener consideración de dignidad, de llamarse sacerdotes en lo temporal o, sobre todo, el honor de ser considerados ciudadanos. También disfrutaban de los privilegios de los militares, de usar coche en tiempos en que sólo lo podía hacer la nobleza, de no poder ser preso por deuda civil,¹⁵³ de poder usar las armas permitidas a militares y nobles, de estar exentos de ir a la guerra, etc. Otros privilegios se referían a los beneficios de que el abogado gozaba en el desempeño de su profesión: el poder trabajar en día de fiesta, el poder impedir al vecino obrar en su casa si se le perjudica en la luz, el tener acción para instar el despojo de algún artífice que con el ruido le estorba en sus estudios, o su preferencia en el alquiler de casa cerca de la audiencia. Finalmente, otros números tratan de los privilegios de los catedráticos de Leyes, sin necesidad de que sean abogados en ejercicio. Además del XXV ya visto, tenían puerta abierta para hablar con príncipe y los consejos, lo que se reducía en la práctica a la facilidad con que se les concedía la licencia que pedían. Se les llaman condes a los maestros de jurisprudencia a los 20 años de enseñar, etc.

En cuanto a la exención de ir a la guerra, en las juntas de 10 y 23 de julio de 1762 se deja constancia de que los individuos del colegio quedaban exentos de la quinta, pero no así sus hijos, demás familiares, lacayos ni

¹⁵² M. de Cabrera y Núñez de Guzmán, *Idea de un Abogado Perfecto*, Madrid, 1683.

¹⁵³ Sobre el encarcelamiento de los abogados, el colegio de Palma de Mallorca reivindica en varias ocasiones el derecho a que tenga lugar en la cárcel de los nobles y no en la de los plebeyos, como había ocurrido, para lo que llegó a presentar sus quejas ante la Real Audiencia. Véase A. Verd Noguera, "Notas históricas del Colegio de Abogados. Una "noble" profesión", Revista *Missèr Tribuna* (editada por el colegio).

sirvientes. Sin embargo, el real decreto de 12 de junio del mismo año declaraba exentos a los hijos de los abogados que trabajaban como escribientes de sus padres.¹⁵⁴ De nuevo, por deliberación de 1 de abril de 1773, la Junta suplicaba del monarca la exención del servicio de quintas en favor de los hijos de los abogados colegiales, y en favor también de un escribiente de cada uno de ellos, ya que la ordenanza que desarrollaba la real orden de quinta no recogía esta expresa exención, y en esta capital, "no es posible por lo común, que los individuos de este colegio puedan estar asistidos de pasantes para el despacho de sus respectivos asuntos".¹⁵⁵ De nuevo, en 1818 solicita el colegio del rey que declarara exentos de quinta a los abogados colegiales en edad de servir. También se acude a la Junta Provincial de Agravios de esta capital, con el fin de que apoyase tal solicitud. Pero poco más tarde se recibió oficio del capitán general, en el que insertaba decreto del Supremo Consejo de Guerra, que decía que dicho superior tribunal no tenía arbitrio para poder alterar lo dispuesto por el monarca en la real instrucción de 26 de noviembre del año anterior.¹⁵⁶

Dentro de la preocupación del colegio por mantener el *status* de los colegiados, destaca el interés mostrado por hacer público entre sus individuos el real decreto de 17 de noviembre de 1765, emanado de la Real Cámara, a resultas del litigio mantenido por el abogado y regidor de la ciudad de San Felipe, Tomás Jacinto Aliaga, al que se le disputó por otros regidores nobles el asiento y la preferencia en la clase de éstos.¹⁵⁷ En este decreto se expresaba que:

Respecto a que por derecho común y leyes del reyno gozan los abogados, personalmente y por privilegio de su profesión, las mismas exenciones que competen, por su calidad y sangre, a los nobles y caballeros, y son exentos de tortura, pechos y demás a que están sujetos los del estado llano, por decreto de mi Consejo de la Cámara de 11 de este mes, he venido en declarar que dicho N., por razón de su profesión y de la nobleza personal que por ella adquiere, debe tener su asiento en la clase de regidores nobles, y preferir a

¹⁵⁴ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 15-16 y 21 B-22 B. J. Berní y Catalá, *Resumen de los Privilegios...*, privilegio XLI, pág. 86.

¹⁵⁵ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 15, 126 B y 128. Véase apartado *Graduación y Pasantía*.

¹⁵⁶ A.I.C.A.V., libro 5, juntas de 4 y 13 de marzo y 16 de abril de 1818.

¹⁵⁷ A este efecto, la junta de 27 de mayo de 1766 acuerda que se sacase copia de dicho decreto y se imprimiese; A.I.C.A.V., libro 4, pág. 92-92 B.

sus modernos sin que sea visto declararle nobleza alguna de sangre.¹⁵⁸

Por lo tanto, se reintegró al referido abogado en el lugar que había ocupado antes, y precediendo a Franciso Agulló, Ignacio de Claver y Pedro Ximeno, y a cualquiera otro regidor a quien se le hubiese despachado el título y toma de posesión después que a él.

Parecida situación fue la tratada en junta de 2 de abril de 1778, cuando el colegial Pascual Soler, vecino de Elche, manifestó que el ayuntamiento de dicha villa también se resistía a colocarle en la clase de nobles. Por ello suplicó al colegio que acordase providencia para defender su derecho. La Junta acordó hacer saber al interesado que el colegio entraría en su defensa siempre que se le hiciese la citación y el emplazamiento de rigor. Notificado posteriormente el emplazamiento por la Real Audiencia, la Junta acordó en 4 de mayo mostrarse parte en dichos autos, y encargar la defensa al decano.¹⁵⁹

En los dos siguientes ejemplos también se percibe cómo el colegio consideraba que sus individuos pertenecían a la clase de nobles:

En 1793, el colegio de abogados de Zaragoza preguntaba al de Valencia si a éste también le había dirigido oficio su ayuntamiento, conminando a los abogados a que hiciesen las mismas guardias con que debían cumplir los paisanos, en la defensa de la ciudad frente a las tropas francesas. En la contestación, el colegio de Valencia manifestó que su ayuntamiento no había tomado semejante determinación, sino que en el mismo caso había invitado a la nobleza y demás personas distinguidas de la ciudad para que se alistasen, a efecto de constituirse en jefes que dirigiesen las rondas. Por lo que a este servicio se prestaron voluntariamente diversos nobles titulados, ciudadanos, abogados y militares agregados a esta plaza, ya que la providencia no precisaba ningún cuerpo en concreto. Paralelamente, le hacía saber que se estaba formando un cuerpo de milicias urbanas para el resguardo de las costas, y que en nada se había contado con el colegio. Tampoco se le había tenido en cuenta en las últimas reales órdenes sobre alistamiento de voluntarios y aumento del ejército, a pesar de haberse pasado oficio a todos

¹⁵⁸ S. Aguirre, *Prontuario Alfabético y Cronológico por Orden de Materias*, 6 vols., Madrid, 1799-1802, I, pág. 8.

los colegios de artesanos y oficios de la ciudad. Así pues, estimando el colegio de Valencia poco decoroso al lustre de la facultad de la abogacía la precisión del servicio que exigía el ayuntamiento de Zaragoza a los individuos de su colegio, ya que no se había pasado igual oficio a los cuerpos de nobleza, ciudadanos y otros que se consideraban de igual clase, se ofreció el de Valencia a apoyar cualquier recurso que sobre ello se planteara.¹⁶⁰

El segundo ejemplo data de 1801. Por junta de 31 de enero se hizo presente que, por uno de los alcaldes de barrio de la ciudad de Valencia se había precisado a dos colegiales, Antonio Casanova y Camilo Matas, a que fuesen a hacer a las puertas de la ciudad las guardias que en ese tiempo se hacían para evitar que se propagase el contagio que se extendía por Andalucía. Considerando el colegio que a dichos abogados colegiales se les había tratado en calidad de vecinos particulares, y que sus individuos debían contribuir a dicho servicio alternando con los nobles que lo prestaban, se deliberó pasar oficio a los diputados de la Junta de Sanidad, a fin de que tomasen las providencias oportunas en el asunto, teniendo presentes las circunstancias y cualidades de los abogados y las prerrogativas de que gozaban.¹⁶¹

También destacaremos, a título de ejemplo, otros tres sucesos acontecidos como consecuencia de la importancia que en estos tiempos se daba —especialmente por parte del colegio—, a aspectos que, si bien eran formales, también eran indicativos de clase:

El primero sucedió en 1768, a propósito de los bolillos que el médico José Adalid llevaba en su traje. Por considerar la Junta que tal distintivo no le correspondía, sino que era propio de los señores ministros y abogados, se acudió al Real Acuerdo para que lo evitase. Instado proceso por el claustro de médicos, la Audiencia resolvió que el uso de bolillos también era propio de los catedráticos de medicina, por lo que la Junta del colegio acordó interponer recurso de suplicación.¹⁶²

¹⁵⁹ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 161 B y 162 B.

¹⁶⁰ A.I.C.A.V., libro 5, junta de 28 de agosto de 1793, págs. 10-10 B.

¹⁶¹ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 61 B.

¹⁶² A.I.C.A.V., libro 4, pág. 105 B.

El segundo suceso ocurrió en 1810, cuando la Junta defendió la preferencia de los abogados sobre los relatores, al pretender éstos preceder a aquéllos en las funciones públicas convocadas por la Real Audiencia.¹⁶³

Finalmente, el tercer suceso ocurrió en 1828, cuando el colegio comunicó a todos sus individuos la pertinencia de usar en el foro el traje de golilla. Esta comunicación tuvo su origen en un oficio que la Audiencia le había remitido a la Junta, en el que se hacía constar que los letrados asistían a prestar el juramento anual que tenía lugar al principio de cada año, cuando se leían las ordenanzas de la Real Audiencia, sin vestir dicho traje. Según la regencia, el traje de golilla distinguía a los colegiales de cualquier estudiante de la universidad, y les daba el decoro que merecían.¹⁶⁴

La preocupación del colegio por el honor y el prestigio de la corporación, se manifestó igualmente en la decisión, adoptada en junta de 25 de agosto de 1764, de escribir al colegio de Madrid para indagar lo que éste acordaba en situaciones similares a la causada por el colegial Luis Salazar, que hizo burla y expresó su menosprecio al colegio de Valencia.¹⁶⁵ La contestación, si tuvo lugar, no quedó reflejada en los libros de deliberaciones.

También tenemos la contestación que el colegio remitió por junta de 5 de noviembre de 1818 al Real Acuerdo, a instancias de éste, sobre la práctica de firmar algunos colegiales por otros que no lo eran:

De esta suerte se conseguía reparar la pública opinión, generalmente transcendental a todos, y nada favorable para la irregular inteligencia de algunos que no sostienen debidamente su decoro. Estas firmas, que podíamos llamar mercenarias, hacen desmerecer igualmente el decoro de una facultad distinguida, cuya reparación se considera indispensable por medio del más eficaz y riguroso decreto de esta superioridad.¹⁶⁶

En este sentido se entienden las decisiones que adoptó el colegio de excluir de su lista a los colegiales José Mariano Ramo y Pascual Gamborino. Al primero, por tener publicadas las amonestaciones para casarse con una actriz

¹⁶³ A.I.C.A.V., libro 5, juntas de 8, 13 y 23 de octubre de 1810 y 28 de octubre de 1813, págs. 132-133, 135, 136 y 185. J. Berní y Catalá, *Resumen de los Privilegios ...*, privilegio XVI.

¹⁶⁴ A.I.C.A.V., libro 7, pág. 65.

¹⁶⁵ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 76 B-77.

¹⁶⁶ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 285 B.

de ópera, que por aquel entonces representaba en Alicante; y al segundo, por tener una hija menor de edad de profesión cómica, que habitaba en su misma casa, y que, con su anuencia y consentimiento, estaba representando en un teatro de la ciudad de Valencia. En ambos supuestos se consideró que tales actividades no podían verse relacionadas con individuos que ejercieran la tan decorosa facultad de la abogacía, ni eran conformes al honor del ilustre colegio. Se decidió borrarlos de la matrícula y anotar tales exclusiones al margen de los decretos y deliberaciones en donde constaran sus admisiones.¹⁶⁷

Sin embargo, la Audiencia no era del mismo parecer que el colegio. Recurrida la expulsión por José Mariano Ramo, el Real Acuerdo ordenó su reposición en la lista, si bien eximiendo al colegio de la obligación de convocarlo para las funciones públicas a las que asistiesen los colegiales. Pero aun así, en junta particular de 29 de mayo de 1775 se consideró que tal inclusión atentaba contra el decoro de la corporación, por lo que se recurrió la resolución del alto tribunal.¹⁶⁸

A pesar de todas las previsiones de los estatutos del colegio y de las pretensiones de su Junta, la perspectiva del tiempo nos hace ver que la abogacía no dejaba de ser una profesión liberal a las postrimerías del Antiguo Régimen; la profesión liberal por excelencia. Así lo ve Domínguez Ortiz cuando afirma que

...las profesiones liberales no conferían un elevado rango social sino en cuanto encarnaban las supremas magistraturas del Estado, lo hemos visto en el caso de los legistas; la profesión privada de cualquier actividad jurídica estaba absolutamente desprovista de prestigio; la influencia que en el régimen liberal obtendría el abogado era entonces algo que ni remotamente podía sospecharse.¹⁶⁹

Para el mismo autor, uno de los factores decisivos del encumbramiento de esta profesión en estos momentos fue el favor que los letrados gozaron de los reyes, conscientes éstos del apoyo que podían recibir de unos juristas imbuidos del derecho justiniano, en su lucha con la nobleza. Ciertamente, los

¹⁶⁷ A.I.C.A.V., juntas de gobierno de 18 de diciembre de 1774 y 23 de febrero de 1799, respectivamente; libros 4, págs. 143-144, y libro 5, págs. 53-53 B.

¹⁶⁸ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 146 B-147.

altos cargos de la magistratura en audiencias, chancillerías y consejos estuvieron envueltos de prestigio y atribuciones extraordinarias, pero que de ninguna de las maneras alcanzaron a los letrados de a pie.

Intrusismo

No trataremos aquí del ejercicio de la abogacía por parte de supuestos abogados que en verdad no lo eran,¹⁷⁰ sino de la férrea defensa que el colegio ejercía sobre el mantenimiento de la exclusividad de sus colegiales, a la hora de ejercer la abogacía en los tribunales de la ciudad de Valencia, y especialmente en la Real Audiencia. Así se demuestra en junta de 16 de agosto de 1762, al acordar presentar pedimento en el Real Acuerdo, suplicando que en los títulos de aprobaciones que se diesen por su secretario se anotase la condición de no poder abogar en la jurisdicción de la Real Audiencia sin estar incorporado en el colegio, de conformidad con el decreto del Consejo de 14 de diciembre de 1761. Este decreto, por el que se aprobaba la incorporación del colegio de abogados de Valencia al de Madrid, declaraba:

...que todos los decretos, autos acordados y providencias promulgadas y expedidas a favor del Colegio de Abogados de la Corte, fuesen y se entendiesen comprensivas al colegio de esta ciudad, su decano e individuos del mismo modo que si para él se hubiesen librado, obrando igual efecto en la Real Audiencia de este reyno y su jurisdicción.

¹⁶⁹ A. Domínguez Ortiz, *La sociedad española en el siglo XVIII*, Madrid, 1955, pág. 182.

¹⁷⁰ *Nueva Recopilación* 2, 16, 1 y *Novísima Recopilación* 5, 22, 1. A.R.V., *Real Acuerdo*, año 1707, folio 112 B: "...mandaron no se admitiese a ninguno para abogado sin que se sujetase a examen. Y que no se admitiese petición sin que viniese con esta circunstancia, pena de cincuenta ducados al escrivano que la admitiese". Año 1733, folio 27 B: "...mandaron se haga saber a los escrivanos de cámara de esta dicha Real Audiencia, de provincia y número, no admitan petición alguna de abogado que no esté aprobado por el tribunal, ni eclesiástico, sino es en los casos que permite el derecho, baxo los apercibimientos que huviere lugar por derecho". Año 1742, folio 46 B: "...vista en él una carta orden del Consejo de fecha de dies y ocho de este mes, firmada por el Sr. Dn. Pedro Colón y Larreategui, su fiscal, dirigida a su *Excelencia*, y con ella una real provisión de S. M. y Sres. de su Real Consejo, por la que se manda no se permita el uso de la abogasía a persona alguna que no esté revalidada por el Real Consejo o por el Acuerdo de esta Audiencia, aunque sea doctor, ymponiendo las penas y apercibimientos convenientes para su cumplimiento, y que baxo de las mismas den las órdenes circulares correspondientes a todas las justicias de este reyno, para que lo hagan saber y no permitan en sus juzgados, ni admitan pedimento ni defenza alguna sin la expresada circunstancia."

Por ello se entendía que estaban vigentes para el colegio de Valencia el decreto del Consejo de Castilla de 21 de mayo de 1737, y el acuerdo del colegio de la corte de 16 de julio del mismo año.¹⁷¹

Según la primera de estas dos disposiciones:

...está mandado: que los escrivanos de cámara de los consejos, juntas y tribunales eclesiásticos y seculares, escrivanos de provincia, número y comisiones, no admitan en sus respectivos oficios, ni los procuradores firmen pedimento que no lo esté de alguno de los individuos del colegio de abogados de la villa y corte de Madrid, pena por la primera vez de 50 ducados, por la segunda de 6 meses de suspensión de oficio, y por la tercera de privación de él.

Y según la segunda disposición:

...se manda: que cada uno de los individuos del Colegio reconozca, si en los pleytos que despachare se halla algún pedimento firmado de abogado no comprendido en la lista que anualmente se reparte, y que, habiéndolo, tenga obligación de dar cuenta al secretario que fuere del Colegio, para que, haciéndolo presente a la Junta, ésta lo ponga en noticia del Consejo para la ejecución de las penas que sea servido imponer a los contraventores, con apercibimiento de que si no lo hicieren dará el Colegio cuenta al Consejo, para que tome la condigna providencia.

Las ordenanzas del colegio también recogieron estas normas. Así, el estatuto XXV establecía:

...que los abogados recibidos en dicho Colegio que se encontraren en pleytos con otros que no estén incorporados con él, pidan por un otrosí del alegato que hagan: que no se admita otro pedimento de aquel abogado, ni permita continuar en su defensa, por no estar rezibido en el Colegio. Y que de otra suerte no les despache, lo qual se execute sin disculpa ni respecto alguno por todos los abogados del referido Colegio, para cuio puntual cumplimiento tenga cada uno nómina de los rezividos en él, que se le dará por el secretario. Y que si algún abogado congregante no cumpliera con este estatuto, sea apercivido y multado por el decano, dando las demás providencias convenientes en caso de reincidencia.

¹⁷¹ Que se corresponden con los autos acordados 13, tít. 16, lib. 2, y 14, tít. 16, lib. 2, ambos de la *Novísima Recopilación*, y respectivamente.

Las tres disposiciones referidas eran incluidas al final de la lista de colegiales que anualmente se repartía entre los individuos del colegio, para su conocimiento y estricto cumplimiento.

El primer caso que conocemos de intrusismo según los libros de deliberaciones data ya de 1763, cuando, en junta particular de 13 de septiembre, se hace saber que algunos abogados firmaban pedimentos por otros que no lo eran. Se trataba de Mateo Fraylery y José Arambul, que ni siquiera estaban colegiados, y además ya habían sido amonestados en este sentido por el decano anterior, Juan Bautista Monseny. Consultado al regente sobre la providencia que debía tomarse, se acudió a Ignacio de Vargas, alcalde del crimen, para que les hiciese formal aprehensión de todos los procesos que les encontraren, de forma que, haciéndose por este medio la justificación correspondiente, se pudiera después proceder contra los que resultaren culpados.¹⁷²

Otro caso semejante aconteció en 1769, cuando al decano se le pone en conocimiento de que José Ximeno, sin ser abogado incorporado en el colegio ni aun aprobado por el Real Acuerdo, despachaba en su casa varios procesos. Por junta de 22 de febrero se acordó, como en el primer caso, proceder en los mismos términos al recogimiento de los referidos procesos. Y otro supuesto muy parecido es el que aparece recogido mucho más tarde, en junta de 16 de junio de 1817.¹⁷³

En 1764, el colegio, llevando a sus últimas consecuencias la defensa del derecho que tenían sus colegiales de ejercer con exclusividad la abogacía en la Real Audiencia, desestima la súplica presentada por el Sr. Beneito. En esta súplica, el Sr. Beneito solicitaba que se le concediese la indispensable licencia para poder firmar e informar en los procedimientos que tenía pendientes en una de las salas de lo civil del referido tribunal. Súplica a la que no hubo lugar, a pesar de encontrarse el referido abogado practicando las diligencias para las pruebas previas de incorporación en el colegio. Tal vez esta negativa se debió a que el referido letrado había engañado a la sala, al manifestarle que tenía el permiso del diputado primero, Francisco Jerónimo

¹⁷² A.I.C.A.V., libro 4, págs. 63 B y 65.

¹⁷³ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 105 B-106, y libro 5, págs. 258 B-259, respectivamente.

Saboya, en ausencia del decano, Vicente Pedro Traver y de su delegado, Juan Bautista Monseny; lo que fue desmentido por el primero. Además, era la Junta en pleno quien, en su caso, podía otorgar estos permisos, y sólo bajo determinadas circunstancias.¹⁷⁴

Caso parecido es el de Pascual Gamborino, que, ante el retraso en su incorporación a resultas de defectos en el expediente atribuibles a los comisarios, firma ciertos pedimentos, lo que provocó que el colegio diese cuenta de esta contravención al Real Acuerdo.¹⁷⁵

Pero en esta lucha el colegio no se enfrentaba solamente con los abogados intrusos, sino incluso también con la Real Audiencia. Así, en junta de 18 de diciembre de 1774 se acordó que el decano pasara a quejarse ante el regente, por haber nombrado dicho tribunal como abogado de pobres a Ignacio Llopis Ferris, a pesar de que no se hallaba inscrito en la matrícula del colegio, ni había practicado siquiera las diligencias que prevenía el estatuto XXVI, ya que este abogado tan sólo estaba incorporado en el colegio de la corte. A consecuencia de ello, vemos cómo en los meses siguientes efectúa su ingreso.

También entró en conflicto con la Real Audiencia a raíz de su decreto de 25 de septiembre de 1809, por el que habilitaba a Joaquín Maldonado Maldonado para ejercer en Valencia, y por el que ordenaba su admisión en el colegio. Admisión que se llevó a cabo, pero anotándosele en la lista con separación de los demás. Incluso se le nombró en 1810 abogado de pobres, pero sin que apareciera en la lista como tal. En 1813 el referido letrado asistió, junto con los demás abogados, a unas rogativas celebradas en la iglesia de los Desamparados, por lo que en la junta particular de 28 de octubre de ese año se acordó, que por el secretario se le pasara oficio para que se abstuviese de reunirse con dicho cuerpo del colegio en sus actos y concurrencias públicas, hasta que se verificara su incorporación con arreglo a los estatutos y decretos de las Cortes de 22 de abril de 1811 y 9 de octubre de 1812.¹⁷⁶ Cosa que se produjo en el año 1814, finalizado el período de *numerus clausus* que hasta entonces regía.

¹⁷⁴ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 79.

¹⁷⁵ A.I.C.A.V., libro 4, juntas de 28 de enero y 14 y 22 de agosto de 1777, págs. 154 B, 158-158 B y 158 B, respectivamente.

¹⁷⁶ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 185.

La misma junta protestó por el hecho de que, en las referidas rogativas, dos relatores de la Audiencia Territorial, sin ser abogados del colegio, se habían interpolado entre sus individuos, y ello "para que no pare perjuicio al colegio en el expediente que pende en dicha Audiencia sobre este particular con los relatores de la misma".

Pero el caso más importante —o al menos el que mayor constancia ha dejado en los libros de deliberaciones—, fue el motivado por Juan Bautista Genovés. Se trata de un caso semejante al de Joaquín Maldonado. Por real orden del Supremo Consejo de Regencia de 23 de diciembre de 1810 se mandaba habilitar a Juan Bautista, abogado de la Audiencia de Sevilla, para ejercer la abogacía en la de Valencia, aun sin necesidad de colegiarse.¹⁷⁷ Pero por junta de 17 de octubre de 1814 se acordó pasarle oficio para que cesase en el ejercicio que era propio de los colegiales, puesto que volvía a estar vigente el restrictivo decreto del Real Acuerdo de 14 de abril de 1795. Oficio que se le volvió a enviar en 1815 y de nuevo en 1816, ante la reiterada negativa del abogado a dejar de actuar.¹⁷⁸ En la última ocasión se le manifestó que dejase de firmar hasta que pudiera ser incorporado en el colegio en virtud de real orden, ya que su habilitación por la Regencia únicamente debía entenderse para el territorio de esta Real Audiencia, como lo estaba para el de Sevilla, pero no para la ciudad de Valencia, según interpretación de la Junta. Ante la negativa de su contestación,¹⁷⁹ en la junta de 9 de noviembre de 1816 se decide interponer recurso al Real Acuerdo para que le prohibiese ejercer la abogacía en la Audiencia y demás tribunales de la ciudad. Todo se soluciona, finalmente, cuando Juan Bautista Genovés es admitido en el colegio por al decreto del Real Acuerdo de 20 de febrero de 1817.

En la junta de 5 de noviembre de 1818 se da cuenta de un decreto del Real Acuerdo, por el que se mandaba a la Junta que expusiera cuanto estimara conveniente sobre la solicitud en alzada interpuesta por el tasador general de pleitos, Antonio Toral, por la que pretendía que se impidiera la tan frecuente práctica de los abogados del colegio de firmar pedimentos por otros, con el fin de evitar los perjuicios que se causaban a los litigantes por la

¹⁷⁷ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 146.

¹⁷⁸ A.I.C.A.V., libro 5, págs. 236 y 240 B.

duplicidad de derechos. En el informe remitido por la Junta al Real Acuerdo se expresaba su interés en la corrección de esta práctica, instándole al mismo tiempo a que dictara los más serios apercibimientos a los colegiales de ser excluidos del colegio si cometían tal abuso. Al parecer, estos abusos aludidos se referían a la práctica seguida por Domingo Hernández, que no estaba incorporado en el colegio, y por Alejo Chacarri, que ni siquiera era abogado. Por lo visto, estos individuos trabajaban públicamente, formando escritos indistintamente ante todas las autoridades y tribunales de esta capital, sin más arbitrio para la admisión de sus pedimentos que la recogida de firmas de algunos colegiales, de los que se sospechaba y a los que la Junta repetidamente había amonestado.

Pero al mismo tiempo, el colegio aclaraba al Real Acuerdo que existían varios despachos al mando de colegiales, en los que se aplicaban discípulos u otros abogados, los cuales, por indisposición, encargo u ausencia de los primeros, trabajaban y firmaban los pedimentos. Para estos casos, al colegio le parecía que no debía aplicarse la prohibición, por entender que se reputaba una misma firma. De hecho, y como veremos en su momento, hemos podido comprobar a través de los pleitos, cómo es habitual que en la tramitación de un mismo pleito, y en la misma instancia, aparezcan las firmas de varios letrados. En este sentido, el colegio instó del tribunal que ordenase a los procuradores no entregar proceso alguno sino en el despacho del abogado encargado de su defensa, con lo cual se conseguiría que no pudiera disculparse el abogado que contraviniese.¹⁸⁰

Finalmente, el Real Acuerdo emite un decreto de 24 de mayo de 1819, en el que se mandaba al colegio que recordase a sus colegiales no firmar unos por otros, apercibiéndoles de que, en caso de contradicción, serían excluidos de la lista. En el mismo decreto se mandaba a los procuradores de la Real Audiencia y juzgados inferiores que, sin orden expresa de los principales, no variasen de letrado en la dirección de los pleitos que estuviesen a su cargo, ni

¹⁷⁹ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 248 B.

¹⁸⁰ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 284 B. Véase *Pleitos y Alegaciones*.

pasasen los procesos a otro estudio, sino al del que subscribiese los escritos. Y todo bajo la multa de 50 libras de efectiva exacción.¹⁸¹

En 1837 la situación cambia por completo cuando el decreto de 11 de julio rehabilita el otro decreto de Cortes de 8 de junio de 1823, según el cual no era necesaria la colegiación para el ejercicio de la abogacía.¹⁸² En estos momentos la preocupación del colegio pasaría por formar un expediente o lista en el que constasen todos los abogados que iban a ejercer en la ciudad bajo estas circunstancias, al efecto de que se les repartieran los turnos de oficio como a los colegiales. Como consecuencia de esta nueva situación, parece que las irregularidades se produjeron con excesiva frecuencia. Por ello, y debido a que algunos abogados ejercían la facultad sin la oportuna habilitación, y por lo tanto sin soportar las cargas anejas —como era la defensa de pobres—, la Junta acordó recurrir a la Audiencia haciendo presente este abuso. Y ello a fin de que se sirviese mandar a los escribanos de juzgado de la ciudad, que no admitiesen escrito alguno de abogado que, no siendo del colegio, no hubiese obtenido la habilitación oportuna y la hubiese presentado al decano, para que la anotase en la lista de repartimiento de causas de pobres.

Finalmente, el tribunal pleno de la Audiencia hizo saber a los jueces de primera instancia de la ciudad, que no admitiesen ningún escrito de abogado que no reuniese estas condiciones.¹⁸³

La mitad de las plazas nacionales

Podemos decir que la genérica defensa de los privilegios y derechos de los abogados se convierte, en algunas ocasiones, de hecho, en una defensa de los intereses particulares de los propios individuos que integraban este cuerpo profesional. Es, posiblemente, el caso de la reivindicación por parte del colegio, ante el Consejo, de la mitad de las plazas nacionales.

El gran interés que tenía el colegio en este tema obedece a que los candidatos a ocupar estas plazas podían ser colegiados. O bien podían ser personas a ellos allegadas. Incluso, el que los componentes de la Real

¹⁸¹ A.I.C.A.V., libro 6, pág. 1 B.

¹⁸² A.I.C.A.V., libro 7, juntas de 28 de agosto y 23 de septiembre de 1837, págs. 214-215 B y 217-218, respectivamente.

¹⁸³ A.I.C.A.V., libro 7, pág. 221 B.

Audiencia fueran en gran parte valencianos, también favorecería la presencia de estos colegiados o allegados en plazas para cuyo nombramiento intervenía la Audiencia, o bien directamente, o bien mediante remisión al Consejo del oportuno informe. Prueba de esto es que el 26 de abril de 1765 se acuerda escribir a la Cámara, pidiéndole que tuviese en consideración a los individuos del colegio en la provisión de la plaza de la Audiencia que quedaba vacante por el fallecimiento del oidor Gaspar Cebrián. A este efecto se alegaba que tal fallecido era nacional, y que, además, entre los colegiados se encontraban muchos “proporcionados”, señalándose en concreto al alcalde mayor de Valencia Tomás Fernández de Messa.¹⁸⁴ Parecida petición se elevó en 1766. En este caso iba dirigida al secretario de Gracia y Justicia, Manuel de Roda, en referencia a la plaza de oidor dejada vacante por la promoción de Francisco Locella a regente de la audiencia de Zaragoza.¹⁸⁵

El origen de este tema hay que buscarlo en la transformación de la Audiencia de Valencia en chancillería, con los decretos de Nueva Planta de 1707,¹⁸⁶ y, especialmente, en la resolución de Felipe V de 30 de mayo de ese año, a consulta del Consejo de Aragón, por la que disponía la presencia en la Audiencia de Valencia de un regente y del 50 % de ministros o jueces castellanos. Hay que tener en cuenta que la Nueva Planta significó la abolición del derecho de extranjería, con lo que a partir de ahora será posible la admisión de funcionarios foráneos en la administración del reino de Valencia. La primitiva ordenación de la Chancillería de Valencia reservaba para los castellanos la mitad de las plazas civiles y criminales, además del puesto de regente. Sin embargo, según Molas, nunca hubo una normativa clara en este sentido, de forma que los dirigentes de cada país —esto es, no sólo de Valencia, sino también de Aragón, Cataluña y Mallorca—, nunca dejaron de reclamar una mayor participación de sus nacionales en su propio gobierno.¹⁸⁷ En nuestro caso, en 1724, por ejemplo, fueron rechazados José Borrull y Cristóbal de Monsoriu y Castellví a una plaza en la Audiencia por sus

¹⁸⁴ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 83.

¹⁸⁵ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 93 B.

¹⁸⁶ M. Peset, “La creación de la Chancillería en Valencia y su reducción a Audiencia en los años de la Nueva Planta”, *Estudios de Historia de Valencia*, Valencia, 1978, págs. 309-334.

¹⁸⁷ P. Molas Ribalta, “Las audiencias borbónicas de la Corona de Aragón. Aportación a su estudio”, *Estudis* 5 (1976) 59-124, págs. 74, 78 y 79.

condiciones de naturales del reino, “cuyas conexiones suelen tener menos buenas consecuencias en los ministros”.¹⁸⁸ De esta forma, los más destacados juristas valencianos de la época tuvieron vedado su acceso a la alta magistratura.

En el mismo sentido, ya hemos visto cómo Berní recogía en uno de sus privilegios, que el empleo de fiscal de la Audiencia de Valencia debía recaer en abogado valenciano. El motivo principal que aducía era obvio: casi todos los expedientes dimanaban de *Furs*. Además, la práctica valenciana también era diferente de la castellana. El capitán general de Valencia en estos momentos —y por lo tanto presidente de su Real Acuerdo—, el conde de Aranda, convenía con la opinión de Berní. De hecho, propuso al secretario de Gracia y Justicia, Roda y Arrieta, la supresión de la práctica borbónica en cuanto a la procedencia de los fiscales, por considerar que

Es mui arduo imponerse bien un forastero para cumplir plenamente con el empleo fiscal en las leyes municipales, y la particular regalía que por fueros no derogados corresponde a la Magestad en este Reyno, cuyo estudio, siendo totalmente diferente de los tribunales de Castilla, retrahe fácilmente a quien no se crió en él, en su escuela y práctica.¹⁸⁹

Para la tramitación de este asunto por el colegio de abogados, la Junta había designado como comisarios en 1763 a Francisco Jerónimo de Saboya, Pedro Vicente Traver, Juan Bautista Navarro, Joaquín Solsona y José Berní, a los que se añadió en 1768 Vicente Ferrer.¹⁹⁰ El hecho de que se designaran tantos encargados y no sólo dos, como solía suceder en la mayoría de los asuntos, podría indicar una especial atención del colegio hacia estas plazas. También es cierto que estos personajes, junto con otros, van turnándose en la redacción de memoriales y demás cometidos que implicaban este trabajo. No

¹⁸⁸ P. Molas Ribalta, “Las audiencias borbónicas...”, pág. 81. Según este estudio —págs. 84 y 85—, la conquista del Reino por Felipe V supuso la ocupación inmediata por castellanos de la mitad de las plazas. Además, las siguientes vacantes que se produjeron en jueces valencianos fueron ocupadas por foráneos. A partir de 1726, sólo uno de los cuatro alcaldes del crimen fue valenciano, y por lo general sólo dos o tres de los ocho oidores. Hasta 1808 sólo el 28 % de los alcaldes del crimen y el 33 % de los oidores habían sido valencianos. La situación de los oidores parece que cambió en favor de los regnícolas desde 1794, cuando contaron, de hecho, con la mitad de las plazas. En cuanto a los fiscales, la situación todavía fue más desfavorable; desde 1715 no se nombró ningún valenciano.

¹⁸⁹ P. Molas Ribalta, “Las audiencias borbónicas...”, pág. 83.

cabe duda de que Berní y Catalá estuvo especialmente interesado en el tema. Pero por algún motivo no se le convocó a la junta de 17 de julio de 1776, lo que debió influir decididamente en la presentación que hizo al colegio de sus quejas o *Decadencias*, entre las que se incluía la reivindicación de estas plazas.¹⁹¹ De hecho, se le volvió a convocar a las siguientes juntas, nombrándosele en febrero de 1777 como encargado, junto con Cristóbal Tarazona, de la redacción de un nuevo memorial. Pero, de nuevo, Berní tuvo que sentirse desplazado cuando la Junta eligió el memorial de Tarazona, y no el suyo.¹⁹² De cualquier manera, el colegio no consiguió nada en sus pretensiones. La última vez que se trata este asunto es el 19 de octubre de 1779, cuando el decano hace saber que el secretario de Gracia y Justicia había decidido no dar curso a esta pretensión, a no ser que fuera dirigida directamente por la ciudad, que era, según él, a quien le correspondía interponer el recurso. Por ello se decide exponer el caso a sus regidores, y también al capitán general.¹⁹³ Finalmente, en 1810 todavía se vuelve a hablar de las plazas nacionales. Pero en esta ocasión sólo se menciona como asunto pendiente a tratar con los consiliarios en la siguiente junta.¹⁹⁴

Ciertamente, Berní estaba muy interesado en estas plazas, ya que su consecución para los valencianos le podría allanar el camino para obtener una de ellas. Sabemos que en varias ocasiones aspiró a cargo público, convirtiéndose ésta en una de sus principales pretensiones. En 1735, y al tiempo que se recibía como abogado, ya lo encontramos opositando a una relatoría civil de la Audiencia.¹⁹⁵ En 1745 parece ser que lo vuelve a intentar, y en 1750 suplica del rey una plaza de oidor. Tampoco consigue la plaza de abogado de la villa de Oliva, en 1759, ni la de oidor en Valencia, a la que aspira en 1767. Al año siguiente, por orden de 15 de mayo, Carlos III mandó que se consideraran en la Cámara sus servicios, para que se le tuviera en

¹⁹⁰ A.I.C.A.V., libro 4, juntas de 31 de julio y 14 de enero, págs. 55 B y 99 B.

¹⁹¹ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 150 B. Véase *Decadencias* en el apartado *Sanciones y apercibimientos*.

¹⁹² A.I.C.A.V., libro 4, págs. 155 y 155 B.

¹⁹³ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 172-172 B.

¹⁹⁴ A.I.C.A.V., libro 5, junta particular de 21 de septiembre, págs. 128-129.

¹⁹⁵ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 30, folios 35 y 36-36 B.

cuenta en la adjudicación de plaza digna de sus méritos.¹⁹⁶ Parece ser que el Consejo de Castilla también le había prometido ascenso. En 1775 vemos cómo solicita del presidente de este Consejo una plaza en audiencia o chancillería, como premio a sus innumerables trabajos.¹⁹⁷ Sin embargo, y para su gran frustración, en ninguna de las ocasiones consiguió plaza alguna.

Defensa de los colegiados en su trato con la Audiencia

Conocidas eran las tensas relaciones entre el colegio y la Real Audiencia, derivadas, según Nácher Hernández, del lamentable concepto público en que secularmente se venía teniendo a los abogados.¹⁹⁸ De ahí que en numerosas ocasiones el colegio saliera en defensa de los derechos e intereses de sus individuos, ante su ignorancia o violación por este tribunal. Vaya por delante que estas disensiones no eran exclusivas de la audiencia de Valencia y su colegio. Por lo visto, se trata de un problema que compartían la mayoría de los colegios de abogados con sus audiencias o chancillerías respectivas.

Ya en junta de 29 de julio de 1774 se acordó acudir al rey ante el desaire sufrido por el colegial Luis Vicente Moyá, a quien la sala del crimen no le había dado lugar después de comunicarle que pasase a informar sobre cierto pedimento. En este incidente, la Junta consideraba que el desaire sufrido por este individuo repercutía en todo el cuerpo del colegio, que quedaría expuesto a otros iguales y acaso aún mayores. Se acordó dar a conocer el incidente previamente al regente y al colegio de la corte, para que, pareciéndole a éste conforme, coadyuvare el recurso y practicase los oficios que tuviere por más oportunos a su feliz éxito.¹⁹⁹

Tres años más tarde, y a instancia de los procuradores de la Audiencia, el Real Acuerdo ordena que los abogados restituyeran todos los procesos que tuvieran en su poder. En este caso el colegio puso pedimento

¹⁹⁶ V. Castañeda, "El Doctor D. José Berní y Catalá...", págs. 190-192.

¹⁹⁷ P. Nácher Hernández, *El Doctor José Berní...*, pág. 57.

¹⁹⁸ P. Nácher Hernández, *Historia del Ilustre...*, págs. 287 y ss.

¹⁹⁹ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 140-140 B.

ante el mismo Real Acuerdo, suplicando que declarase que tal medida se entendiera sólo por lo tocante a los procesos de Audiencia y provincia.²⁰⁰

En 1783 se inicia una de las batallas más importantes que el colegio tuvo que librar con la Real Audiencia. En junta de 8 de julio se trató de los graves inconvenientes que se experimentaban al no señalarse días, ni guardarse en la vista de los pleitos el correspondiente turno. Al parecer, la Audiencia seguía la inmemorial práctica de colocar en sus locales unas tablas en las que se anunciaban los pleitos que se encontraban pendientes de dicho trámite, sin que ello implicase su señalamiento, sino sólo la posibilidad de que a partir de dicha inserción podía celebrarse la vista cualquier día. De esta forma, cada día se juntaban cuarenta o cincuenta abogados en los pasillos de la Audiencia, a la espera de la celebración de su juicio que normalmente no tenía lugar, con la correspondiente pérdida de la mañana. Por todo ello se resolvió acudir al Real Acuerdo con la representación correspondiente, "y que antes se sirva el señor decano pasar con los señores ministros los oficios oportunos de atención para dicho efecto".²⁰¹

La contestación del Real Acuerdo consta en decreto de 22 de marzo de 1784 según el cual:

En conformidad de lo prevenido en las providencias de nueve y catorce de enero de mil setecientos cincuenta y uno, y mil setecientos cincuenta y ocho, en las leyes del reyno, y en las Ordenanzas de Granada y Valladolid, se manda:

Que todos los abogados del Colegio de esta ciudad acudan precisamente a jurar cada año las de esta Audiencia en el día que se leyeren, y hallándose algunos impedidos, en el inmediato bajo la pena de cincuenta ducados.

Que así mismo, asistan todos los días de audiencia las tres horas del despacho de ella, a la vista y defensa de los pleitos de que estuvieren encargados y se hallaren puestos en tabla para verse, pena de un ducado y de la multa correspondiente por cada vez que dexaren de cumplirlo.

Que ningún abogado firme por otro compañero pedimento ni escrito alguno, ni entre a informar por el que ha dirigido y defendido el pleito, y a no ser que éste se halle legítimamente impedido por enfermedad o ausencia.

Que los abogados de ninguna manera se presenten en el tribunal de capa y redesilla ni de militar los días de audiencia, y siempre se porten con el decoro y desensia correspondiente a su

²⁰⁰ Desconocemos el resultado de la petición. A.I.C.A.V., libro 4, pág. 155 B.

²⁰¹ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 194 B. P. Nácher Hernández, *Historia del Ilustre...*, págs. 287 y sigs.

profesión, haciendo particular encargo al decano y oficiales de la Junta del Colegio, para que celen y cuiden de su observancia y de corregir a los contraventores.²⁰²

Aunque en los libros de deliberaciones no se haga referencia al juramento que al principio de cada año los abogados debían prestar a las ordenanzas de la Audiencia, era notorio el malestar de este tribunal ante la indiferencia que los letrados mostraban. Lo cierto es que no solían pasar de quince o veinte los abogados que juraban cada año. Nada se consiguió en este sentido hasta que la real orden de 23 de enero de 1839 derogó el artículo 190 de las ordenanzas de las audiencias de 19 de diciembre de 1835, en el que todavía se regulaba este juramento.²⁰³

En cuanto a los puntos segundo y tercero de la contestación del Real Acuerdo, así como sobre el desprecio con que eran tratados los individuos del colegio, acudió el decano a visitar al regente y ministros para solicitar un mejor trato y una moderación en estos temas. Si bien se obtuvo del regente manifestaciones favorables y positivas, no parece que la Audiencia cambiara su actitud para con los colegiales. De hecho, y por manifestaciones de la junta de 12 de marzo de 1796, en el mismo año 1784 el colegio ya presentó pedimento al monarca, en réplica al decreto de la Audiencia, y sobre "el señalamiento de día para las relaciones de los procesos, firmar unos por otros, la tasación de los informes y escritos y de los abogados, y demás extremos que abraza la providencia del Real Acuerdo de 4 de fecha próximo pasado".²⁰⁴

²⁰² A.I.C.A.V., libro 5, pág. 35.

²⁰³ N. R., 2, 16, 2; Nov. R., 5, 22, 3; y *Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes*, XXV, págs. 70-71. Tan sólo una junta se refiere —de pasada— a este asunto. El 5 de enero de 1828 se lee oficio en el que la regencia de la Audiencia muestra su malestar ante la costumbre de los abogados de asistir al juramento sin el traje de golilla, faltando al decoro que merecen los tribunales. De esta manera, además, no era posible distinguirlos de los estudiantes. Véase P. Nácher Hernández, *Historia del Ilustre...*, pág. 296. J. Santos Torres, con respecto al colegio de Sevilla, dice que nos encontramos ante una "negativa sorda y solapada" de los colegiados a prestar un juramento que consideraban que no les correspondía, pues, entre otras cosas, no se exigía a los abogados de fuera de la capital, ni a los procuradores, ni a los jueces. Al parecer, este asunto fue un constante punto de fricción entre ambos organismos. Véase este autor en *Apuntes para la Historia...*, pág. 42. M. Corripio Rivero, para el colegio de Oviedo, dice que los abogados acudían de buena gana al acto de apertura de la audiencia y lectura de las ordenanzas, por la importancia y relevancia que el acto suponía, pero no al juramento, de ahí que en 1823 la junta de este colegio suplicara a las Cortes la supresión de esta obligación. Véase *Historia del Ilustre...*, pág. 15 y 16.

²⁰⁴ A.I.C.A.V., pág. 35 B. La gota que al parecer colmó el vaso y determinó que el colegio acudiese ante S. M., fue cuando "al Dr.D. Patricio Cervera, que acababa de llegar a su casa de fuera de la ciudad, y con necesidad de sangrarse por haber tenido una caída, porque en aquel

En 1786, y al parecer ante la paralización del anterior pedimento, el colegio vuelve a insistir en su pretensión —esta vez ante el capitán general—.

De nuevo, la Audiencia le recordó al colegio el decreto de 22 de marzo de 1784, mediante providencia de 4 de febrero de 1796.²⁰⁵ Consecuencia de ello fue que se decidiese, en la junta de 12 de marzo de ese mismo año, instar nuevamente y continuar el curso de la representación interpuesta en 1784 ante la Real Cámara.²⁰⁶ Igualmente, se resolvió que el decano y el diputado primero pasaran a la casa del regente para hacerle presente la representación pendiente y el estado en que se hallaba, e intentar así, mientras tanto, alguna modificación en el ejercicio y observancia de la providencia del Real Acuerdo. Especialmente, en cuanto al señalamiento de día para la relación de los procesos y asistencia personal de los abogados a la Real Audiencia, mientras tuviesen pleito en tablas.

Sobre todos estos asuntos, comprendidos en la providencia del Real Acuerdo de 4 de febrero, se decidió en junta de 14 de mayo de 1796 escribir a los colegios de Granada, Valladolid, Barcelona y Madrid, para que informasen sobre el sistema que al respecto se seguía en sus audiencias, chancillerías o Consejo, y con cuyo resultado fundar mejor la representación acordada en 12 de marzo.

En esta cada vez más deteriorada relación del colegio con la Real Audiencia, aquél ya había acordado en abril de 1796 presentar al regente un escrito con varias proposiciones, sin perjuicio de continuar el expediente que se hallaba en Madrid sobre estos mismos y otros extremos. Si bien no fue hasta noviembre cuando se decidió activar las oportunas diligencias, designándose encargado al maestro de ceremonias Juan Andrés Ibáñez.²⁰⁷ Las proposiciones a las que hacemos referencia son las siguientes:

día no asistió a la vista de un pleyto suyo, le multaron, exigieron la multa y apercibieron. Y aunque interpuso suplicación jurando haver estado indispuesto, y el fiscal reconoció había motivo para que se le devolviese la multa, desestimando la Audiencia el allanamiento de éste, se afirmó en su decreto y denegó la súplica. Igual procedimiento ha experimentado D. Antonio Guerau por la casualidad de no estar en casa quando se le fue a avisar que se hacía relación de un pleyto suyo". A.I.C.A.V., caja 7, expediente 2.

²⁰⁵ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 35 B.

²⁰⁶ Insistiéndose de nuevo en 1797 (junta de 27 de septiembre).

²⁰⁷ A.I.C.A.V., libro 4, juntas de 13 de abril y 12 de noviembre, págs. 37 B-38 y 42 B-43, respectivamente.

Primera, que, o bien se señalase día para ver las causas, o bien se manifestasen en la lista pública de la Audiencia en el día miércoles o jueves las que hubiesen de relatarse en toda la semana inmediata siguiente.

Que se permitiese poderse valer los abogados, para los informes de las causas en estrados, de otros abogados de su satisfacción e incorporados en este Ilustre Colegio.

Y que no se les obligase haver de asistir continuamente todas las horas de audiencia mientras tubiesen pleito en tabla.²⁰⁸

En junta de 6 de diciembre de 1800 se encargó al diputado cuarto, Vicente Ferrando, que en representación del colegio instase del Consejo de Castilla mandar a esta Audiencia que señalara día para la vista de las causas, y que tratara a los abogados con el honor que merecían. Ello se decidió con ocasión de la multa de cuatro libras que la Audiencia le había impuesto al colegial Manuel Pro, por no haber asistido a informar en estrados en cierta causa, y porque, sin embargo de haber suplicado, se le negó la suplicación, como igualmente el libramiento de cierto testimonio que pidió para acudir al monarca.²⁰⁹ Éste pidió informe sobre el particular a la Audiencia, la que trasladó el expediente a los fiscales. Enterada la Junta acordó, en reunión de 10 de abril de 1801, que José Soriano Nieto y Vicente Ferrando pasaran a suplicar que se despachara con la brevedad posible. De lo que ocurrió con posterioridad nada hablan los libros de deliberaciones.

Por lo visto, todo quedó en suspenso hasta que en el año 1819 varios individuos colegiales acuden al Real Acuerdo solicitando señalamiento de día para asistir a la vista de los pleitos, lo que provocó el decreto de 17 de junio por el que se ponía en conocimiento del colegio dicha exposición, a fin de que alegase lo conveniente. Como era de suponer, la Junta manifestó a la superioridad su total apoyo a dicha solicitud, aunque no parece que surtiera efecto.²¹⁰

Y por fin, en la junta de 19 de mayo de 1831, se lee el decreto del día 9 en el que el Real Acuerdo ordenaba el señalamiento de día para la vista de los pleitos en las salas de la Real Audiencia.²¹¹ Habían transcurrido casi 48 años desde que en la junta de 8 de julio de 1783 se acordara iniciar esta

²⁰⁸ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 38.

²⁰⁹ A.I.C.A.V., libro 5, págs. 60-60 B.

²¹⁰ A.I.C.A.V., libro 6, pág. 2.

reclamación. En opinión de Nácher Hernández, no se trató éste de un acto de justicia reparadora de la Audiencia ni de las autoridades superiores, sino, simplemente, de una decisión de la reina María Cristina, mucho más prudente y comprensiva con las aspiraciones de los abogados.²¹²

Pero no terminaron aquí los problemas. El 21 de diciembre de 1836 la Junta acordó hacer una reverente exposición al tribunal pleno de la Audiencia Territorial, para que se sirviese dictar providencia que evitase la abusiva actitud de este tribunal, según la cual tenía por costumbre señalar la vista de las causas criminales la víspera del día en que debían ejecutarse, lo que ocasionaba los correspondientes perjuicios a los abogados, que no tenían el suficiente tiempo para disponerse a informar en estrados. Además, y sucediendo con frecuencia que a un mismo abogado se le señalaban dos o tres causas para el día inmediato, le era muy difícil el poder hacer la defensa en todas con el esmero requerido. De la misma forma, la habitual costumbre de no verse los pleitos en el día prefijado —"retardándose ocho o más días"— les obligaba a asistir en todos ellos al tribunal, con la consiguiente incomodidad y pérdida de tiempo.²¹³

El problema del señalamiento de los pleitos no fue exclusivo de los abogados valencianos. También se sufrió en otros colegios, si bien no parece que con la misma intensidad. El de Valladolid, por ejemplo, inició parecido expediente en 1762. Pero en este caso el Consejo resolvió rápidamente: en 1768, y en su favor.²¹⁴

²¹¹ A.I.C.A.V., libro 7, pág. 126.

²¹² P. Nácher Hernández, *Historia del Ilustre...*, pág. 294 y 295.

²¹³ A.I.C.A.V., libro 7, pág. 203 B.

²¹⁴ F. García Marroquín, *Reseña histórica del...*, pág. 52. Sin embargo, en otro apartado de la misma obra —pág. 53—, García Marroquín afirma que el señalamiento de día cierto para pleito se ordenó por real cédula de, al parecer, 1770, en la que, además, se estableció la libre facultad de las partes para elegir abogados. Esta cédula se aclaró por otra del mismo año en la que se mandaba que la celebración de la vista se hiciera saber previamente al procurador, para que pudieran avisar a los abogados con tiempo. Por otra real cédula de 1775 se ordenaba que para el caso de no poderse ver el pleito en el día previsto, procediera nuevo señalamiento, con la excepción de los pleitos de menor cuantía, de corta consideración, de elecciones, u otros que no pudieran causar graves perjuicios a las partes, o en los que no se necesitara informe de los letrados —pág. 55—. Con quienes tuvo importantes desavenencias el colegio de Valladolid fue con los procuradores, a los que la chancillería les obligó a pasar los pleitos a los estudios de los abogados —págs. 52 y 55 y sigs.—.

Todas estas divergencias entre la Real Audiencia y el colegio, que afectaron a los colegiados como colectividad, se plasmaron, además, en el trato que algunos de ellos recibieron como abogados particulares en el ejercicio de su profesión o, incluso, como personas particulares. Y el colegio, con criterio corporativista, entendió que todo atropello —tanto de este tribunal, como de cualquier otra instancia—, contra cualquiera de sus miembros repercutía en la corporación, de ahí que saliera en su defensa. A continuación veremos algunos casos concretos.

En junta de 24 de febrero de 1774 se acordó defender al colegial Joaquín Blasco, a quien el intendente le había impuesto multa y le había privado del oficio, con ocasión de haber formado aquél el pedimento y los remedios de mejora y apelación en favor de ciertos acusados, en unos autos en que se les acusaba de haber entrado a cazar en el Estanco Redondo sin licencia. El colegio acordó patrocinar su defensa, por entender que los referidos escritos ni contenían voces ofensivas, ni atentaban a la modestia debida a los tribunales, ni pretendían dar reglas a dicho caballero intendente, como al parecer éste y el tribunal entendían. Por ello, el colegio decidió alzar súplica al Real Consejo de Hacienda, solicitando incluso ayuda del colegio de Madrid.²¹⁵

Otro caso fue el decreto de 16 de diciembre de 1782, por el que el Real Acuerdo condenó a José Villarroya a seis meses de suspensión del oficio, "en vista del expediente formado en el mismo para la averiguación del author de cierta representación hecha por el corregidor de esta ciudad, relativa a la asistencia a las visitas de cárcel".²¹⁶ Ese mismo año el colegio recurrió ante el monarca las providencias acordadas por la Real Audiencia contra este abogado, y por el modo con que se había tratado a otros letrados en la misma causa, de forma que por resolución de 20 de febrero del año siguiente se levantó la suspensión. Además, esta resolución

...acreditó el desagrado que causó a S. M. el modo con que aquélla procedió contra dicho Villarroya, perjudicando a su estimación e interés, faltando a lo prescrito por las leyes, y a la imparcialidad e indiferencia con que debe proceder un tribunal de justicia, por cuyas

²¹⁵ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 137 B-138.

²¹⁶ A.I.C.A.V., caja 7, expediente 2, pág. 1.

justas causas tuvo a bien mandar V. M. se le devolviese la multa, costas y qualquier otra cantidad que se le huviere exigido, y que esperaba V. M. en lo sucesivo procediese el Acuerdo con más templanza, guardando las leyes y el decreto de vuestros vasallos, y correspondiendo a la real confianza, pues de lo contrario se vería V. M. obligado a tomar otras providencias.²¹⁷

Pero, al parecer, esta resolución disgustó en gran medida a la Audiencia, que en adelante endurecería aún más el trato que dispensaba a los abogados, como prueba el decreto visto de 22 de marzo de 1784.

El 27 de marzo de 1809, el colegial Manuel Cortés Sanz solicitó del colegio protección en la causa formada contra él mismo, y continuada por el comisionado regio, sobre los motivos por los que se hallaba preso en las cárceles de la corte. La Junta acordó que el decano, junto con el tesorero y el secretario, tomando las noticias que estimaren conducentes en el asunto, practicasen aquellas diligencias que estimasen más favorables al alivio y satisfacción de dicho individuo.²¹⁸

Pero también tenemos otros supuestos en los que el colegio entendió que no procedía su intervención.

Es el caso reflejado en junta de 5 de febrero de 1764, cuando se trató sobre la representación del colegial Bernardo Longavila en asunto de una multa de 20 libras que el vicario general le había impuesto. Longavila pretendió que el colegio tomase voz y defensa, a lo que éste se negó, si bien manifestó que para el caso de que necesitase de medios para proseguir su defensa se acordaría lo conveniente. Y así ocurrió cuando el 16 de enero de 1766 la Junta, habiendo oído la representación hecha por el referido colegial sobre la suspensión y multa que le había impuesto la sala del crimen, acordó estudiar qué oficios pasaría el colegio para su alivio y consuelo, una vez el señor Longavila presentara el testimonio que había ofrecido de las resultas del proceso, y se reconocieran los términos hábiles.²¹⁹

En 1809 tenemos otro caso en el que, al parecer, el colegio no dispensó su amparo; esta vez a José Gregorio Genovés. Este colegial, que se encontraba en la cárcel de corte de la torre de Serranos, solicitó de la Junta

²¹⁷ A.I.C.A.V., caja 7, expediente 2, pág. 6.

²¹⁸ A.I.C.A.V., libro 5, págs. 101 B-102 B.

²¹⁹ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 70 B y 91-91 B.

que le favoreciese con la censura de ciertos escritos, de los que ofrecía poner copia en manos del decano, rogando asimismo la protección en la causa formada contra él mismo. La Junta acordó que usare de su derecho en el tribunal donde correspondiese y le conviniese.²²⁰ De cualquier manera, no conocemos suficientemente los hechos ni el delito que pudiera haber cometido José Gregorio, para aventurar ninguna interpretación.

El 5 de noviembre de 1818, la Junta recibe oficio de José Gregorio Genovés —preso todavía o de nuevo, no se sabe—, en donde reclamaba la observancia del estatuto XXXI. Por éste, el colegio quedaba obligado a socorrer a sus miembros en caso de enfermedad o prisión, previo conocimiento del decano. A lo que la Junta manifestó que ya se había nombrado a los señores Esteban Corones y Simón Suay para que pasaran a auxiliarle, favorecerle y patrocinarle, y que efectivamente ya lo habían cumplido en dos repetidas ocasiones.²²¹

Colaboración con la Audiencia

Todas estas desavenencias del colegio con la Real Audiencia no pueden hacernos caer en el error de pensar que, entre ambos organismos, sólo cabían las disputas y enfrentamientos. También cada uno de ellos acudía al otro en busca de ayuda o consejo cuando lo necesitaba.

De esta forma, el colegio acudió en multitud de ocasiones a la Audiencia, solicitando su ayuda, por ejemplo, ante la resistencia de algunos de sus individuos al pago de la contribución ordinaria anual, o de la limosna para las misas de los abogados difuntos, cosa que veremos en su momento.

También hay muchos ejemplos del supuesto contrario, en donde es la Real Audiencia la que, bien de *motu proprio*, bien por delegación del Consejo de Castilla, solicita la ayuda y colaboración del colegio. Si en unas ocasiones la Audiencia requería del colegio una determinada actitud, en otras se limitaba a comunicarle las disposiciones que se dictaban, por ella o por un órgano superior; en unos casos con el mandato de que las hiciera extensivas a sus colegiales, mientras que en otros así lo hacía el colegio por propia iniciativa.

²²⁰ A.I.C.A.V., libro 5, junta de 3 de agosto, pág. 106.

²²¹ A.I.C.A.V., libro 5, págs. 284 B-285.

En sus atribuciones políticas y gubernativas, la Audiencia se convierte de hecho, y según palabras de Morales Arrizabalaga, en un *órgano intermedio de ámbito territorial*, en el sentido de que sus actuaciones estaban relacionadas con las de órganos superiores o inferiores; fundamentalmente, y por lo que respecta a nuestro caso, con el Supremo Consejo y el colegio, respectivamente.²²² Con mucha menor frecuencia la Audiencia, a través del Real Acuerdo, actuará de manera autónoma.

Con respecto al rey y al Consejo, la primera atribución de la Audiencia era el genérico deber de velar por el cumplimiento de sus normas generales y decisiones, lo que llevaba aparejado el deber de conocerlas y, en su caso, el de difundirlas por su ámbito territorial de actuación, para que se adoptaran, a su vez, las oportunas medidas tendentes a su ejecución. Las vías burocráticas habituales de recepción en la Audiencia de aquellas normas eran dos: mediante carta orden del Consejo, dirigida al presidente o regente; o mediante pedimento dirigido a la misma Audiencia por el particular o la corporación, para que se tomase conocimiento de ellas y se registrasen en sus libros o archivos, que funcionaban como una especie de registro público. El regente o presidente comunicaba la norma en todo caso al Real Acuerdo, y, además, a la sala o salas de justicia, dependiendo del supuesto. A su vez, el Acuerdo decretaba un auto ordenando el cumplimiento y ejecución de la norma, y, en nuestro caso, su traslado al colegio para su conocimiento y, en su caso, cumplimiento.

La otra atribución fundamental de la Audiencia con respecto a los órganos superiores era la remisión de los informes que le solicitaban, con la expresión —en su caso— de su opinión, para fundamentar la adopción de una decisión concreta, o la redacción de una norma general. En este caso la Audiencia podía requerir, por propia iniciativa o por orden del superior, el informe a otra instancia inferior.

Con respecto al colegio de abogados o cualquier otra instancia inferior, la Audiencia actuaba como órgano intermediario, trasladando los memoriales o informes que la instancia superior les había requerido. En otras ocasiones trasladaba peticiones del inferior, en las que se solicitaba una decisión

²²² J. Morales Arrizabalaga, "Procedimientos para el ejercicio gubernativo y contencioso de la jurisdicción de la Real Audiencia de Aragón en el siglo XVIII", *Anuario de Historia del Derecho Español* 60 (1990) 509-550, pág. 516.

concreta por parte de este superior, sin perder de vista que la Audiencia también podía recibir consultas y peticiones de los inferiores solicitando la resolución directa de sus cuestiones.

Todo esto lo vemos claramente reflejado en situaciones como la que se originó en 1811, con el decreto de Cortes de 24 de abril, por el que se acordaba que los colegios de abogados no tuvieran número fijo de individuos. El día 4 de mayo el colegio ya conocía este decreto, gracias a una comunicación privada que por correo le había remitido el diputado y colegiado José Martínez. Sin embargo, la Junta continuó actuando en las siguientes reuniones como lo había hecho hasta el momento: daba traslado al Real Acuerdo de las solicitudes de incorporación que presentaban los pretendientes a ocupar las plazas dejadas vacantes por los colegiados que fallecían o se daban de baja, para que entre ellas decidiera. No fue hasta el 6 de julio, en que se recibió certificación del secretario del Acuerdo, con un ejemplar impreso de la real cédula, cuando la Junta acató la norma y abrió las puertas del colegio a todo pretendiente.²²³

Otro caso es el visto en junta de 6 de marzo de 1824, cuando el decano hizo presente orden del rey, en la que se comunicaba la necesidad que tenían de sacar nuevos títulos los abogados que hubieran sido recibidos durante el tiempo del gobierno constitucional. Sin embargo, la Junta decidió no hacer novedad por lo respectivo a los individuos del colegio que se encontraban en aquel caso, hasta que se comunicara dicha orden al decano o a la junta de gobierno por el conducto del Real Acuerdo.²²⁴

Con el tiempo y la difusión de la imprenta, las normas o peticiones en general serán remitidas directamente al organismo destinatario cada vez con mayor frecuencia, con lo que la importancia de la Audiencia como órgano intermediario irá disminuyendo.

La forma ordinaria que tenía el colegio de comunicar a sus individuos cualquier resolución propia o de otra instancia, y de cuya tramitación se encargaba, era la impresión de las oportunas esquelas que el monitor repartía entre aquéllos. El mismo monitor también podía limitarse a exhibir a los

²²³ Véase apartado *Ingreso en el colegio*.

²²⁴ A.I.C.A.V., libro 6, págs. 62 B-63.

colegiales esa resolución, a través de una copia o certificación que de la misma sacaba el secretario. Como prueba de quedar enterados, firmaban los colegiales a su pie o en una hoja separada. En el día 17 de diciembre de 1829 tenemos el curioso caso de que la junta particular acordó que el decano y el secretario pasaran por casa del regente, para indagar si habría inconveniente en que se imprimiese la certificación remitida por el Real Acuerdo, a lo que el regente no se opuso. Y es curioso porque, tal como manifiesta la misma junta, así "se acostumbraba en iguales casos".²²⁵

Veamos a continuación una serie de situaciones en las que, por diversos motivos, el colegio entró en contacto con la Audiencia:

En 1780, por ejemplo, la Junta hace saber a todos los colegiales que, por decreto de 17 de febrero de ese mismo año, el Real Acuerdo había ordenado que se cumpliera la costumbre de que, en todos los actos o escritos en que intervinieran los abogados en calidad de tales, los firmaran con el título de doctor, licenciado o bachiller, según su grado, con el apercibimiento de proceder a lo que hubiese lugar.²²⁶

El 3 de junio de 1784 la Junta acordó informar a los colegiados del contenido de la real provisión de 18 de mayo, por la que se ordenaba que los que quisieran recibirse en adelante de abogados serían examinados en particular de las leyes y capítulos de corregidores, y de lo que éstas establecían para el buen gobierno y policía de los pueblos.²²⁷ Lo curioso de esta decisión es que a los individuos del colegio ya no les podía afectar dicha real provisión. Tal vez iba encaminada a la mejor preparación de los pasantes que estaban a cargo de los colegiales.

En la reunión de 16 de septiembre de 1787 encontramos la única ocasión en que la Junta trata sobre las pasantías.²²⁸ En estos momentos los estudios de Leyes o Cánones en la universidad de Valencia duraban cuatro años. Tanto en esta como en cualquier otra universidad, eran unos estudios basados esencialmente en el Derecho romano-canónico, sin referencia alguna al Derecho nacional. Para evitar este desfase entre las aulas y el mundo real

²²⁵ A.I.C.A.V., libro 7, págs. 102 B-103 B.

²²⁶ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 174 B.

²²⁷ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 202-203.

²²⁸ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 237-238.

de los tribunales, se habían establecido, al menos desde las *Leyes de Toro*, las pasantías. Se trataba de la asistencia del graduado al estudio de un abogado aprobado durante un período de tiempo, en el que se instruía en los formularios procesales y, en general, en la práctica forense.²²⁹ Pues bien, en este día 16 de septiembre se vio el decreto del Real Acuerdo de 6 del mismo mes, por el que dicho tribunal dejaba constancia de la poca formalidad que guardaban los abogados de este colegio en el libramiento de las certificaciones de práctica a sus pasantes, ya que en ocasiones juraban que habían asistido a sus estudios durante los cuatro años que disponía el derecho, desde el día en que obtuvieron los grados o desde el inmediato. Sin embargo, muchos de ellos habían logrado los grados en otras universidades distintas a la de esta ciudad, con la consiguiente necesidad de gastar al menos unos días en el camino hasta llegar a presentarse a los letrados, a cuya dirección entraban a ejercer la pasantía. Para el remedio de estos abusos, el Real Acuerdo mandaba:

Que los abogados del Colegio de esta ciudad, en las certificaciones que dieren de práctica en lo sucesivo, sean con referencia al libro que deberían tener en sus estudios, en los que haya de constar con toda claridad y distinción el día que entrasen en ellos los pasantes, años, meses y días, semanas o días que han asistido a ejercitarse en la pasantía, y los que han faltado por ausencia, enfermedad o *cualquiera* otra causa, para que de esta forma pueda saberse con puntualidad si se encuentran completos los cuatro años al tiempo de pedirse la aprobación de abogados, con prevención de que los que lo contrario hiciesen serán castigados con todo rigor en el caso de advertirse alguna omisión en ello.²³⁰

En la junta de 16 de abril de 1791 se acuerda solicitar la real orden oportuna para que por los tribunales superiores se dictara providencia por la que se ordenara entregar, al decano o al secretario, un ejemplar de cada una de las pragmáticas, cédulas, órdenes reales y provisiones que se hubiesen expedido, y que en lo sucesivo se extendiesen, al efecto de poder imprimirlas o reimprimirlas. La decisión de acudir al rey se adoptó ante la queja manifestada por el aquel entonces diputado tercero, Matías Perelló, en la que exponía que en algunas ocasiones resoluciones adoptadas por S. M o por los tribunales superiores no llegaban a imprimirse, o bien se hacía de ellas una impresión tan

²²⁹ Véase su estudio más detenido en el apartado *Graduación y pasantía*.

escasa, que muchos de los individuos del colegio no podían lograr un ejemplar. De lo que se seguía el correspondiente perjuicio al no poder acertar en el dictamen y dirección de los asuntos relativos a ellas.²³¹ Para la tramitación en la corte de este asunto se otorgaron poderes, por junta de 21 de agosto, en favor del procurador del tribunal de la nunciatura, Fernando Beltrán. Aunque en los libros de deliberaciones no haya quedado constancia de respuesta positiva por parte del rey, lo cierto es que las notificaciones al colegio de abogados, por parte de la Real Audiencia u otras instituciones, fueron constantes.

En 1798 la sala del crimen remitió al decano un decreto, mediante el que se pretendía terminar con las frecuentes excusas de los abogados para asesorar a los alcaldes legos. A partir de ahora ningún abogado podría excusarse, si no era mediante justo motivo acreditado ante la misma justicia que le hubiese nombrado, en el término de 24 horas. No haciéndolo, se le apremiaría conforme a derecho para que aceptara y jurara el cargo, sin exigir derechos en las causas de oficio hasta su final terminación.²³²

A finales de 1807 el Consejo remite carta orden al Real Acuerdo, a fin de que expresara su parecer sobre la conveniencia de dictar regla que declarase nulos y de ningún efecto las memorias o papeles simples que dejaban escritos los testadores, previniendo en sus testamentos que se tuvieran por parte de su última voluntad, y que sólo valiera lo que se hubiera escrito en los testamentos. Por decreto de cuatro de febrero de 1808, el Real Acuerdo ordenaba al colegio informe al respecto, para lo que se convocó a los consiliarios.²³³

En 1810, el Real Acuerdo solicitó de la Junta del colegio informe sobre la solicitud presentada por los relatores, por la que pretendían preceder a los abogados en las funciones públicas convocadas por la Real Audiencia.²³⁴

En 1815, el mismo tribunal había remitido un decreto por el que mandaba al colegio que informase sobre la representación que los actores y

²³⁰ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 82, fol. 79 B.

²³¹ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 275-276.

²³² A.I.C.A.V., caja 10, expediente 10.

²³³ A.I.C.A.V., libro 5, junta de 18 de febrero de 1808, pág. 93.

²³⁴ A.I.C.A.V., libro 5, juntas de 8, 13 y 23 de octubre de 1810, págs. 132-133, 135 y 136. El 16 de marzo del siguiente año se ve en la Junta una certificación sobre el modo de juzgar en los recursos de moratoria. Véase A.I.C.A.V., caja 9, expediente sin número.

actrices de los teatros de la corte habían presentado ante el rey, a fin de que declarase que no eran viles ni su profesión infame.²³⁵

En la junta de 20 de febrero de 1819 se trató del informe ordenado por el Real Acuerdo, en nombre del Supremo Consejo, sobre la solicitud que ante este tribunal había deducido Antonio Sanvítores, de que se le dispensara la edad que le faltaba hasta los 25 años para obtener el título de abogado.²³⁶

En 1821 pidió informe sobre ciertos abogados que solicitaban alguna de las promotorías fiscales vacantes para los juzgados de primera instancia de Valencia, Callosa del Segura y Llíria.²³⁷

Otro ejemplo de colaboración es el decreto hecho saber a la Junta por el decano, en 14 de mayo de 1827, referente a que en las apelaciones se solicitase la remesa de autos originales. En este caso la Junta acordó que, pese a estar ya enterados todos los individuos del colegio de dicha disposición, se imprimiesen doscientos ejemplares y se circularan entre todos aquéllos, para su más exacto cumplimiento, y que se diese en lo sucesivo un ejemplar a los que nuevamente se incorporasen.²³⁸

El 31 de marzo de 1833 el Real Acuerdo remite al colegio real orden de 12 de marzo, por la que se prevenía que los escolares que hubieran ganado el curso de *Decretales*, y estuvieran matriculados en el primer año de *Recopilación* y Práctica, podrían graduarse de licenciados sin necesidad de estudiar el segundo año.²³⁹ Se trata de otra resolución que no podía afectar a los ya colegiados. Y en este caso, además, ni siquiera a sus posibles pasantes.

En la junta de 21 de enero de 1836, se deja constancia de que la Audiencia había remitido dos ejemplares de las ordenanzas de 19 de diciembre del año anterior —que regirían en todas las audiencias del reino—; para inteligencia y, en su caso, cumplimiento del colegio en la parte que les tocaba. El 21 de junio el secretario de la Audiencia trasladaba al colegio la real

²³⁵ A.I.C.A.V., libro 5, juntas de 27 de septiembre de 1815 y 26 de octubre y 9 de noviembre de 1816, págs. 234-234 B, 249 B y 250; caja 8, expediente 9.

²³⁶ Véase apartado *Recibimiento de abogado en el Real Acuerdo de Valencia*.

²³⁷ A.I.C.A.V., libro 6, junta de 12 de abril, 16 de junio y 14 de noviembre de 1821. El 7 de enero del año siguiente se da cuenta de una certificación de la sala tercera de la Audiencia Territorial, por la que se solicitaba al colegio informe sobre la providencia adoptada en la que se exoneraba a Manuel Franco, alcalde constitucional de Valencia, de la defensa de una causa en razón del cargo que ostentaba.

²³⁸ A.I.C.A.V., libro 7, págs. 55 B-56.

orden que se le había remitido, en la que se solicitaba de la Audiencia que manifestara cuantas observaciones le hubiese proporcionado la experiencia sobre el reglamento provisional.²⁴⁰

En la junta de 22 de marzo de ese mismo año se vio otro decreto, remitido por el mismo secretario, en el que se comunicaba la decisión adoptada de que los abogados continuaran en segunda y ulteriores instancias los negocios que hubiesen dirigido en la primera.²⁴¹

Tal vez la última de las comunicaciones fue la que remitió el regente el 12 de junio de 1838, junto con un ejemplar del real decreto de 5 de mayo, comprensivo de los nuevos estatutos para el régimen de los colegios de abogados.²⁴²

Relación del colegio con otras instancias

Como hemos podido observar, el colegio de abogados de Valencia tenía, entre otras, la misión de servir de medio de comunicación entre los organismos oficiales —especialmente Consejo de Castilla y, sobre todo, Real Audiencia—, y el cuerpo de letrados de la ciudad, de forma que daba a conocer entre los colegiados las resoluciones adoptadas por estos órganos que les pudiesen afectar. Veamos ahora otros organismos con los que también entró en contacto el colegio y, siempre a título de ejemplo, algunos de los asuntos que trataron.

Con el ayuntamiento de Valencia la relación fue continua. Además de los asuntos ya vistos, y del desempeño por parte de los colegiados de los oficios municipales,²⁴³ hay otros puntos a destacar.

Uno de los primeros, y posiblemente uno de los más importantes, fue el de la supresión de dos de las cuatro plazas de abogados consistoriales que tenía esta ciudad. El día 17 de junio de 1773 la Junta se enteró de la intención

²³⁹ Véase esta real orden en el apartado *Graduación y pasantía*.

²⁴⁰ A.I.C.A.V., libro 7, págs. 194-194 B.

²⁴¹ A.I.C.A.V., libro 7, págs. 190-190 B.

²⁴² A.I.C.A.V., libro 7, junta particular de 15 de junio, págs. 222-223. Muchos más serían los ejemplos. Y en todos ellos con un concreto mandato de la instancia emisora de hacer saber la resolución al colegio y, en ocasiones, también a sus individuos. Véase, por ejemplo, A.I.C.A.V., libro 5, juntas de 2 de marzo de 1797, 17 de abril de 1811, 4 de mayo de 1812, 16 de abril de 1818; libro 6, junta de 5 de junio de 1819; o libro 7, juntas de 17 de diciembre de 1829, 1 de octubre y 11 de diciembre de 1830, 19 de mayo de 1831, 21 de enero de 1836, ...

manifestada por la corporación municipal, en cabildo de 3 de ese mes, de no cubrir la plaza dejada vacante por la muerte del abogado Pedro Vicente Traver, así como de no cubrir tampoco la siguiente que vacara. Salvando, eso sí, la posibilidad de valerse el ayuntamiento de otros abogados más en el supuesto de necesitarlo. Además, el consistorio pretendía solicitar del Supremo Consejo una reforma general del estatuto de estos abogados. Todo lo cual desaprobaba el colegio, al considerar que esta reducción le afectaría “a lo menos en razón de las examinaturas anexas a las abogacías y compatronatos de la Universidad Literaria, con voto en todas las provisiones de preposituras y cátedras de todas facultades”.²⁴⁴ De esta forma, la Junta remitió un memorial al Consejo el en que solicitaba que no se hiciera modificación alguna, lo que se consiguió por real provisión de 8 de noviembre de 1773. Sin embargo, por otra disposición de 11 de julio de 1778 se acordó, definitivamente, suprimir las dos plazas más modernas, así como fueran vacando.²⁴⁵

La formación del *Libro Padrón* en la segunda década del siglo XIX, en el que los ciudadanos —entre ellos, los abogados— debían dejar constancia de sus riquezas, o la contribución de los colegiados en favor de ciertas obras públicas que por estos años se estaban realizando en la ciudad, especialmente en la época de los franceses —obras en el Grao, Alameda o, más tarde, plaza de Santo Domingo—, fueron otros asuntos en los que el colegio prestó su colaboración al ayuntamiento.²⁴⁶

Respecto a la mitad de las plazas nacionales, hemos visto que el colegio dejó de tratar este asunto, en 1779, desde que el secretario de Gracia y Justicia manifestara corresponderle en exclusiva a la ciudad. Hasta este momento la Junta solicitaba del ayuntamiento que le amparara en los memoriales que remitía al Consejo.²⁴⁷

²⁴³ Véase apartado *Los abogados y el ayuntamiento de Valencia*.

²⁴⁴ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 128 B.

²⁴⁵ A.I.C.A.V., libro 4, junta de 10 de noviembre de 1780, pág. 177 B.

²⁴⁶ A.I.C.A.V., libro 5, juntas de 6 de diciembre de 1812, 14 de enero de 1813, 3 de marzo y 31 de julio de 1817, y 11 de julio de 1818 (págs. 252-252 B, 260-260 B y 278-278 B). Sobre el *Libro Padrón* véase el apartado *Perfil de los colegiados*. Sobre obras públicas en los años de la ocupación francesa véase N. Cruz Román, *Valencia napoleónica*, Valencia, 1968, págs. 175 y sigs.

²⁴⁷ A.I.C.A.V., libro 4, juntas de 17 de julio ó 10 de agosto de 1776, 13 de julio de 1777, ó 19 de octubre de 1779, págs. 150 B, 151, 157 y 172-172 B, respectivamente

Mucho más tarde, en 1835, Francisco Palau, alcalde mayor de esta ciudad y como presidente del ayuntamiento, solicitó del decano que nombrase dos abogados de turno diario para despachar como asesores en unión con el ayuntamiento. Por lo visto, los alcaldes mayores no podían asistir al juicio de exenciones de las parroquias y cuarteles de la ciudad, que en esos momentos se estaba verificando, sin notable atraso en la administración de la justicia.²⁴⁸ Lo curioso de este caso es que, por ser una cosa nueva y extraordinaria, el decano proveyó inmediatamente y de propia iniciativa, dando cuenta a la Junta posteriormente. Pero la Junta consideró, que según las leyes, reales órdenes y estatutos del colegio, no se podía exigir de los abogados colegiales el desempeño de estas asesorías, con lo que el colegio no podía comprometerse, ni siquiera con sujetos que voluntariamente se encargasen de ellas. De esta forma, el decano, con el fin de evitar a los colegiales cualquier tipo de responsabilidad, y mirando por una más ágil y segura administración de justicia, remitió una carta al ayuntamiento por la que se desentendía de este encargo, y proponía que este servicio se llevara a cabo por quien correspondiera o como se hubiera practicado hasta ese momento.

También se actuó conjuntamente en numerosas ocasiones a través de la Junta Municipal de Sanidad. En 1810 este organismo le dirigió al colegio un oficio por el que le comunicaba el sistema de guardias que se había decidido efectuar para evitar que la fiebre amarilla detectada en Cartagena penetrara en la ciudad.²⁴⁹

Las relaciones del colegio con otros ayuntamientos fueron esporádicas. Caso de San Felipe, Alicante, Orihuela o Peñíscola, a los que en 1764 les comunicó el nombramiento de Manuel Sisternes como supervisor en la corte

²⁴⁸ A.I.C.A.V., libro 7, junta de 5 de febrero de 1835, págs. 177 B-178.

²⁴⁹ A.I.C.A.V., libro 5, junta de 21 de septiembre de 1810, págs. 128-129. La Junta Municipal de Sanidad había decidido que los abogados —junto con los escribanos y padres del convento del Carmen—, vigilaran y custodiaran la puerta de San José, desde su apertura hasta su cierre. La Junta del colegio, por su parte, decidió que, diariamente, dos de sus individuos modernos asistieran por la mañana hasta la una, y dos de los antiguos por la tarde. En junta de 9 de septiembre del año siguiente (pág. 166 B), la Junta de Sanidad ordenó trasladar este servicio a la puerta de San Vicente. Véase también juntas de 2 de enero de 1805, 21 de septiembre y 3 de diciembre de 1810; libro 6, junta de 6 de octubre de 1819; o libro 4, junta de 6 de junio de 1834..., y caja 7, expediente 17.

de la causa que la corporación tenía interpuesta sobre la mitad de las plazas nacionales.²⁵⁰

La Junta Suprema de Gobierno del Reino de Valencia, por su parte, solicitó opinión del colegio, en 1808, sobre el expediente que ante ella había suscitado el rector de la Universidad Literaria, Vicente Blasco, relativo a la supresión del nuevo plan de estudios de 1707, y la continuación con el antiguo de 1786. Esta junta se había constituido el 25 de este año para hacer frente al enemigo francés,²⁵¹ y, de hecho, parece que desempeñó las escasas competencias que el Real Acuerdo tenía en materia gubernativa. En cuanto a los planes de estudios, y por lo que respecta a la facultad de Leyes, la diferencia más notable es que en el plan de 1786 los estudios duraban cuatro años, dedicándose sólo uno de ellos al estudio del Derecho real, mientras que en el de 1707 se llegaba a los diez; de ellos dos dedicados a *Partidas* y *Recopilación*, otro a Economía Política y otro —para los que quisieran ejercer—, a Práctica y Retórica.²⁵²

También el capitán general remitió de propia iniciativa oficios al decano, para que éste los hiciera extensibles a los colegiales. De esta forma le comunicó, por ejemplo, que se hallaban vacantes las plazas de auditor de guerra de Castilla la Vieja, la del Ejército de la Costa Firme de Ultramar, y la de la provincia de Guipúzcoa.²⁵³ En los años anteriores a la ocupación de la ciudad por los franceses, remitió varios oficios solicitando de los colegiales su alistamiento en las milicias de infantería y caballería, sin que al parecer los abogados mostraran especial predisposición.²⁵⁴

Otros organismos que tuvieron alguna relación con el colegio, aunque fuese de forma esporádica, fueron, por ejemplo, el colegio de escribanos,²⁵⁵ la

²⁵⁰ A.I.C.A.V., libro 4, junta de 17 de mayo, pág. 73 B.

²⁵¹ Ardit Lucas, M., *Revolución y revuelta campesina*, Barcelona, 1977, pág. 126.

²⁵² A.I.C.A.V., libro 5, junta de 24 de noviembre de 1808, págs. 100-100 B. Véase el estudio detenido de estos planes en el apartado *Graduación y pasantía*.

²⁵³ A.I.C.A.V., libro 4, junta de 23 de enero de 1791. Para otros casos véase junta de 26 de mayo de 1773 en el mismo libro.

²⁵⁴ A.I.C.A.V., libro 5, juntas de 4 de mayo, 16 de junio o 3 de julio de 1809.

²⁵⁵ En junta particular de 4 de diciembre de 1805 remitió este colegio al de abogados un oficio para que sus colegiados diesen noticia de los protocolos que tuviesen en su poder, y del escribano que hubieren nombrado para su regencia.

Suprema Junta de Hacienda,²⁵⁶ la Real Junta de Consolidación de Vales Reales,²⁵⁷ la Junta Superior de Observación y Defensa del Reino,²⁵⁸ la Diputación Provincial,²⁵⁹ la Real Academia de Práctica Forense,²⁶⁰ o la Real Junta de Comercio.²⁶¹

* * *

Finalmente, debemos mencionar dentro de esta colaboración con las diferentes instancias públicas, el papel que el colegio desarrolló, a través de la redacción de *informes*,²⁶² en la supervisión y censura de obras jurídicas o literarias, así como manifestando su opinión sobre determinados proyectos legislativos. Mediante estos informes, los órganos inferiores auxiliaban e ilustraban a los superiores —a su requerimiento— en la adopción de sus decisiones: Real Audiencia al Consejo de Castilla, o el colegio de abogados a cualquiera de estos dos. Hay que tener en cuenta que nos encontramos en un período caracterizado por las continuas e importantes transformaciones que se produjeron en el Derecho y en sus instituciones, especialmente durante la primera mitad del siglo XIX. En cuanto a la censura, la labor del colegio se circunscribe a los períodos absolutistas del reinado de Fernando VII y, especialmente, a la Década Ominosa.²⁶³ Por decreto de 22 de octubre de

²⁵⁶ Por oficio de 26 de junio de 1808, este organismo comunicó al colegio, que a sus individuos les correspondía la contribución de 23.750 reales de vellón para las urgencias del estado, "repartidos al respeto de un 4 por ciento de sus utilidades" (junta de 4 de julio del mismo año). A lo que la Junta contestó que el colegio como tal no estaba obligado a satisfacer el cupo repartido a cada uno de sus individuos, ni tampoco éstos lo estaban por aquellos otros que no pudieran o no quisieran pagar (junta de 3 de septiembre).

²⁵⁷ A.I.C.A.V., libro 5, junta de 5 de abril de 1800.

²⁵⁸ A.I.C.A.V., libro 5, juntas de 3 de julio y 26 de diciembre de 1809, ó 15 de febrero de 1810.

²⁵⁹ A.I.C.A.V., libro 6, junta de 16 de junio de 1821.

²⁶⁰ A.I.C.A.V., libro 7, junta de 19 de junio de 1834.

²⁶¹ A.I.C.A.V., libro 7, junta de 28 de agosto de 1835.

²⁶² J. Morales Arrizabalaga, *Procedimientos para el ejercicio...*, págs. 519 y sigs.

²⁶³ Tanto en informes y dictámenes, como en la censura de libros, destacó, muy por encima del de Valencia, el colegio de Madrid. De hecho, en 1770 se le asignó, con carácter fijo y continuado, el cometido de la censura de las obras jurídicas. Curiosamente, el primer libro que se le mandó censurar fue el *Apuntamiento de Leyes de Partidas* de Berní y Catalá, en 1755. Del mismo autor también se censuró, en 1770, su *Instituta Civil y Real*; el *Heptámero a la Curia Philípica*, en 1782; y, en 1783, *Esponsales de los hijos de familia*, *Vinnius castigatus*, *Sobre el trigo de este reino*, *Sobre ganados*, *Fábrica de seda*, *Aumento de marina*, y *Suplemento a la Curia Philípica*. P. Barbadillo Delgado, *Historia del Ilustre...*, II, págs. 153-160, y III, págs. 108-113.

1820, por contra, se publicaba el *Reglamento acerca de la libertad de imprenta*.²⁶⁴

Además de los encargos ya vistos hasta ahora —como el de los actores y actrices en 1815—, en este mismo año el regente solicita de la Junta la censura de la obra titulada *Comentaire sur le Code de Procedure Civile*. La Junta, excusándose en que ninguno de sus componentes conocía el idioma francés, propuso para su ejecución a los colegiales José Ferrando y Tomás Naudín. Propuesta que fue aceptada por el regente.²⁶⁵ Es de destacar el retraso o poca formalidad que tuvo el colegio en este asunto, así como cuando se le pidió en el mismo año el informe sobre la representación de los actores y actrices, pues en varias ocasiones se le tuvo que recordar que ambos informes estaban pendientes.²⁶⁶

También de 1815 data una real orden por la que se mandaba que la sala de alcaldes de la Real Casa y Corte, las chancillerías y audiencias, las universidades y los colegios de abogados expusieran los defectos que hubieran advertido en el uso y estudio de la *Novísima Recopilación* y su primer suplemento —elaborados por Juan de la Reguera Valdelomar—, así como las correcciones que debieran hacerse. A este efecto, el colegio ordenó la impresión y entrega de un ejemplar de la orden a cada uno de sus individuos, para que en el término de 8 días expusieran lo que les pareciera oportuno. Tan sólo fueron 32 los abogados que acreditaron con su firma haber recibido el oficio. De los demás —y según el monitor—, unos no se encontraban en sus despachos y otros no quisieron firmar. En esta ocasión tampoco destacaron en celeridad el colegio ni los colegiales, puesto que hasta el año 1819 el Consejo tuvo que recordar en varias ocasiones su obediencia.²⁶⁷

Los siguientes encargos provienen, en 1821 y 1822, del gobierno constitucional. En ellos el Ministerio de Gracia y Justicia remite al colegio dos

²⁶⁴ *Decretos de las Cortes*, VI, págs. 234-246.

²⁶⁵ A.I.C.A.V., libro 5, juntas de 8 de julio y 7 de agosto de 1815 y 7 de febrero de 1816.

²⁶⁶ A.I.C.A.V., libro 5, juntas de 8 de julio y 7 de agosto de 1815, y de 7 de febrero y 26 de octubre de 1816.

²⁶⁷ A.I.C.A.V., libro 5, juntas de 19 de agosto y 9 de octubre de 1815, 7 de febrero y 23 de noviembre de 1816; libro 6, junta de 5 de junio de 1819; y caja 7, expediente 4. Véase también, para Valladolid, F. García Marroquín, *Reseña histórica...*, pág. 70; y para Sevilla J. Santos Torres, *Apuntes para la Historia...*, pág. 63, y E. Llach y Costa, *Reseña Histórica*, I, págs. 401-403 y 413-433.

reales órdenes con los ejemplares de los proyectos del código penal y del código de procedimientos en lo criminal, respectivamente, solicitando las observaciones que se considerasen oportunas, para tenerlas presentes al tiempo de la discusión de los proyectos.²⁶⁸ El trienio liberal continuaba con la labor codificadora iniciada en las Cortes de 1810 a 1814, pero esta vez con mayores resultados. Se designaron comisiones para los códigos civil, rural, de comercio, penal y de procedimientos en lo criminal. Los trabajos sobre el código penal son los que avanzaron más rápidamente, de forma que el proyecto pudo leerse en Cortes desde el día 22 de abril de 1821. Se acordó su impresión y la solicitud de dictámenes a todas las universidades, tribunales y colegios de abogados, así como a las personas instruidas que lo desearan. Tras su posterior discusión y aprobación en Cortes, fue sancionado por Fernando VII el 29 de junio del año siguiente, convirtiéndose en el primer código liberal español, a pesar de su efímera vigencia. El código de procedimientos en lo criminal, sin embargo, no pudo llegar ni siquiera a discutirse por la vuelta del absolutismo.²⁶⁹ No parece que el colegio de abogados de Valencia remitiera observaciones de ninguno de los dos proyectos.²⁷⁰

El próximo encargo al colegio data de 1824, cuando el viceregente manda censurar el *Manual de Práctica Forense* de Eugenio Tapia. Para este cometido se nombró una comisión formada por los colegiales Pablo y Joaquín Font.²⁷¹ Ese mismo año el capitán general remite al colegio, también para que censure, la comedia titulada *El fraticida, o sea, a delito cometido castigo merecido*, y el sainete *Los tres huéspedes hurtados*. En este caso se designó

²⁶⁸ A.I.C.A.V., libro 6, juntas de 27 de julio de 1821 y 12 de enero de 1822, págs. 28-29 B y 33 B-34, respectivamente. Para Valladolid véase F. García Marroquín, *Reseña histórica...*, págs. 71-72.

²⁶⁹ M. Peset Reig, "La primera codificación liberal en España (1808-1823)", *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario* (1972) 125-157, págs. 140 y sigs.

²⁷⁰ Sobre el proyecto de código de procedimientos en lo criminal, no consta que el colegio remitiera observaciones. Sobre el proyecto del código penal, la comisión redactora del proyecto recibió las observaciones de ocho colegios, entre los que no se encontraba el de Valencia. En concreto eran los de Barcelona, Cádiz, La Coruña, Granada, Madrid, Oviedo, Pamplona y Zaragoza. Véase J. R. Casabó Ruiz, *El Código Penal de 1822* (tesis doctoral inédita), Universidad de Valencia; y J. F. Lasso Gaité, *Crónica de la codificación española 5. Codificación penal*, 2 vols., Madrid, 1970, I, págs. 57 y sigs.

²⁷¹ A.I.C.A.V., libro 7, junta de 22 de abril de 1824, págs. 63 B-64.

como censores a los colegiales Vicente Martínez Bonet y Antonio Casanovas Ravanals.²⁷²

Las últimas obras mandadas censurar datan del año siguiente, y también por encargo del capitán general. Se trataba de la comedia titulada *A la vejez viruelas*, y del sainete *El maestro de la tuna*. También se designaron dos colegiales censores.²⁷³

En 1830 el Supremo Consejo solicitó informe sobre el nuevo plan de estudios de la carrera de Jurisprudencia, nombrando la Junta comisarios al decano, José Mariano Marín, y al diputado cuarto, Vicente Valor.²⁷⁴ Sin embargo, el colegio no fue consultado para la siguiente reforma del mismo plan de estudios, tres años después; tan sólo se le comunicó.²⁷⁵

En 1833 se recibe carta orden del Real Acuerdo, para que la Junta propusiera el reglamento o estatutos para la Real Academia de Práctica Forense, que debía formalizarse con arreglo al artículo 4º de la real cédula de 27 de noviembre del año anterior.²⁷⁶ Según este artículo, en todos los colegios establecidos y que se establecieran donde residía chancillería o audiencia, se debían formar academias de práctica forense, a imitación de las fundadas en la corte, y bajo la presidencia de uno de los ministros de aquel tribunal y la dirección de un letrado de “ciencia y probidad”. Por ello la Junta solicitó, a su vez, información al colegio de Madrid. No obstante, lo más destacable de esta cédula era su artículo primero, en donde se contemplaba la libre incorporación de abogados para todos los colegios del reino. Fueron el decano, Joaquín Romaguera, y el secretario, Francisco Moltó, los encargados de redactar los estatutos, que fueron aprobados en junta de 11 de abril.²⁷⁷

Por último, el ministerio de Hacienda remitirá al colegio en 1838 un memorial solicitando opinión sobre la supresión de los diezmos.²⁷⁸

²⁷² A.I.C.A.V., libro 7, junta de 20 de octubre de 1824, págs. 72 B-73.

²⁷³ A.I.C.A.V., libro 7, junta de 17 de febrero de 1825, págs. 1 B-2 B.

²⁷⁴ A.I.C.A.V., libro 7, juntas de 9 de septiembre y 11 de diciembre de 1830, págs. 112 B-113 y 119 B-120 B, respectivamente. Véase apartado *Graduación y pasantía*.

²⁷⁵ A.I.C.A.V., libro 7, junta de 19 de junio de 1833. Véase para los planes de estudio el apartado *Graduación y Pasantía*.

²⁷⁶ *Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII, y de la Reina su Augusta Esposa*, XVII, págs. 272-275.

²⁷⁷ A.I.C.A.V., libro 7, junta de 15 de febrero de 1833. Véase también juntas de 13 de marzo, 13 de julio y 3 de agosto.

²⁷⁸ A.I.C.A.V., libro 7, junta de 19 de marzo de 1838.

El colegio de Valencia y los otros colegios

En la real provisión de aprobación de los estatutos de 6 de febrero de 1762 se decía así:

...teniendo por bien de dar, como damos, al referido Colegio de Abogados de la Ciudad de Valencia la incorporación que ha solicitado por filiación de el de esta Corte, y declarar que todos los decretos, autos acordados y providencias promulgadas y expedidas a su favor sean y se entiendan comprehensivas al de Valencia, su decano e individuos, del mismo modo que si para él se hubieren librado, obrando igual efecto en la referida *nuestra* Audiencia y su jurisdicción sin *diferencia* alguna...

El estatuto XXVI, por su parte, decía:

...por quanto los colegios de abogados de las ciudades de Sevilla, Valladolid y Granada se hallan en virtud de filiación que les ha conzedido como al de Valencia, incorporados con el de nuestra Corte, y gobernándose por sus mismos acuerdos y estatutos; mandamos que si algunos individuos de ellos pretendieren extablecerse en Valencia, hayan de llevar certificación dada en consecuencia de decreto de su decano, y sellada en forma por el secretario, en que conste que dichos tres colegios se gobiernan por los estatutos del de esta Corte, principalmente en quanto a las calidades que han de tener los que se haian de recibir, y que en esta conformidad se les hicieron sus pruebas y fueron rezividos...

De estos estatutos se derivaron dos consecuencias prácticas: la primera, que el colegio con el que más se relacionó el de Valencia fue el de Madrid; y la segunda, que gran parte de estos contactos tuvieron como motivo las peticiones de ingreso de individuos de otros colegios en el de Valencia, o de los colegiales de éste en los otros, sobre todo en el de Madrid.

Las consultas que efectuó el colegio de Valencia al de Madrid fueron numerosas. Tuvieron lugar, especialmente, durante los primeros años de vida de la corporación, ya que la ambigüedad de los estatutos hacía que continuamente se acudiese al colegio de la corte para averiguar su modo de proceder ante semejantes supuestos.²⁷⁹ Sin embargo, las comunicaciones con

²⁷⁹ A.I.C.A.V., libro 4, juntas de 23-8-1762, 5-8-1763, 13-9-1763, 9-11-1763, 25-8-1764, 16-10-1764, 3-9-1766, 14-3-1767, 23-5-1767, 5-2-74, 24-2-1774, 29-7-1774, 5-2-1775; libro 5, juntas

otros colegios tuvieron por finalidad, principalmente, solicitar o dar consejo e información sobre el proceder de los colegiales o del mismo colegio en su relación con otras instancias. De esta forma, se trató con el de Valladolid sobre ciertos informes verbales; con el de La Coruña sobre el permiso que los abogados debían solicitar al regente para ausentarse de la ciudad; con el de Granada sobre el uso de la gorra en la asistencia al tribunal; con el de Zaragoza sobre si los abogados debían hacer guardias en la defensa de la ciudad; con los de Granada, Valladolid, Barcelona y Madrid sobre la obligatoriedad de los abogados de informar personalmente en estrados, ...²⁸⁰

Por otra parte, el colegio de Valencia recibía todos los años la felicitación de las pascuas de Navidad de los otros colegios, al tiempo que enviaba las propias. Igualmente recibía de los otros colegios y les enviaba, también anualmente, la lista de los colegiales.

Sanciones y apercibimientos

Muy poco dicen las ordenanzas del colegio sobre la posibilidad de que los colegiados pudieran ser sancionados, apercibidos o corregidos por el incumplimiento de alguno de los estatutos o, en general, por cometer actos o tener actitudes improcedentes para con otro colega, o para con el honor y la buena fama de la corporación. Tan sólo del estatuto XXV podemos inducir esta posibilidad, aunque de una forma muy vaga, cuando dice lo siguiente:

Item: estatuimos y mandamos, que los abogados recibidos en dicho Colegio que se encontraren en pleytos con otros que no estén incorporados con él, pidan por un otrosí del alegato que hagan que no se admita otro pedimento de aquel abogado ni permita continuar en su defensa, por no estar recibido en el Colegio. Y que de otra suerte no los despache, lo qual se execute sin disculpa ni respeto alguno por todos los abogados del referido Colegio, para cuyo puntual cumplimiento tenga cada uno nómina de los recibidos en él, que se le dará por el secretario. Y que si algún abogado congregante

de 3-3-1793, 14-5-1796, 28-2-1798, 25-10-1808, 4-3-1818; libro 6, junta de 12-4-1821; o libro 7 juntas de 30-5-1826, 26-6-1826, 15-2-1833.

²⁸⁰ A.I.C.A.V., libro 4, junta de 8-4-1768, por lo que respecta al colegio de Valladolid; de 9-6-1769 y 22-3-1836, por lo que respecta al de Granada; y de 28-5-1787, en cuanto al de La Coruña; libro 5, junta de 28-8-1793, en cuanto al colegio de Zaragoza; y junta de 14-5-1796, en que se solicitó información a los colegios de Granada, Valladolid, Barcelona y Madrid.

no cumpliere con este estatuto, sea apercibido y multado por el decano, dando las demás providencias convenientes en caso de reincidencia.

Pero los libros de deliberaciones no dejan constancia de que este estatuto se aplicara en ningún momento. Sin embargo, hay dos aspectos en los que sí se manifestó claramente la facultad punitiva que, de hecho, ejercía la Junta sobre los colegiados. El primero trataría de los actos de los colegiales que alteraban el orden de la Junta y atentaban contra el honor del colegio, mientras que el segundo trataría del impago de las cuotas a que estaban sujetos dichos individuos.²⁸¹

Actos contra el orden y el honor

Dos son los estatutos que especialmente vienen al caso: el XIV y el XVI. Respectivamente, dicen lo siguiente:

Item: establecemos que en las elecciones y juntas haya mucha quietud, silencio y modo, de suerte que si alguno, antes de votar, quisiere advertir alguna cosa, pida licencia al decano para hablar, y sin ella no hable, pues quando llegare a votar podrá decir todo lo que se le ofreciere. Ni tampoco se interrumpa al que estuviere votando, ni mientras tanto conversen unos con otros, sino que estén con toda atención para enterarse de las razones en que funda cada uno su voto, y poder si le hace fuerza reformar el suyo, pues de esta suerte se consigue el acierto.

.....

Item: ordenamos que así los oficiales como todos los abogados del Colegio, tengan la debida obediencia y debido respeto que corresponde al decano, como su cabeza y superior, asistiendo a las juntas a que convocare y executando las órdenes que les diere. Y que todos sean muy modestos, como su trage y profesión lo requiere, evitando entre sí qualesquiera discordias y juramentos, y

²⁸¹ Al contrario que en Valencia, los estatutos del colegio de Pamplona de 1818 sí regulaban clara y expresamente esta facultad del decano. En concreto, el estatuto 17 establecía que cualquier abogado que ofendiera en sus escritos con *personalidades* injuriosas a su compañero o a la parte contraria, faltando al decoro de los tribunales y a su honrosa profesión, sería multado con 200 libras la primera vez, 400 libras la segunda, y 800 la tercera. Además, en este último caso sería borrado de las listas y asientos del colegio, aplicándose estas multas por mitad a recetas reales y fondos del colegio. Según el estatuto 24, las multas que impusiera el decano no podrían ascender por cada vez a mayor cantidad que la de dos reales, reservándose la Junta proceder en casos y delitos de gravedad contra cualesquiera de sus individuos hasta la exclusión del delincuente. No obstante, el decreto de aprobación de las ordenanzas matizaba que esta exclusión sólo sería interina, pudiendo el infractor reivindicar su honor, y pudiendo la Junta solicitar más rigurosa providencia; todo ello ante los tribunales de justicia. Véase F. Salinas Quijada, "La abogacía...", págs. 26-28.

dando buen ejemplo a los demás compañeros congregantes y a todos los de fuera.

Encontramos diversas actuaciones de la Junta en este sentido. La primera de ellas tempranamente: el 19 de marzo de 1763 se determinó que el decano llamase y corrigiese al colegial Manuel Sisternes, por haber incumplido el estatuto XIV durante la última junta general, celebrada el día 14 de ese mismo mes.²⁸²

En la junta particular de 25 de agosto del año siguiente se acuerda escribir al colegio de Madrid, para conocer su proceder ante actitudes como la protagonizada por el colegial Luis Salazar, que hizo burla y manifestó su menosprecio al colegio.²⁸³

En la junta de 9 de julio de 1768 se acordó que el decano corrigiera a los colegiales informantes Mariano Campos y Antonio Valor, por haber recibido a los testigos de la sumaria del expediente de incorporación de Alejandro Gisbert en casa de su padre, que, además, era abogado colegial, cuando se deberían haber recibido en casa de los propios informantes.²⁸⁴

También el 4 de diciembre de 1783 se acordó amonestar a los nuevos incorporados, para que cumpliesen con la visita al decano y demás oficiales prevista en el estatuto XXI, y que, al parecer, tan olvidada tenían todos. Según este estatuto, antes de dar cuenta el secretario a la Junta del resultado de las pruebas, el pretendiente debía visitar al decano y oficiales "por precisa ceremonia y para que le conozcan".²⁸⁵

Pero, además de todas estas correcciones, la sanción máxima que se podía imponer a un colegial por su mal comportamiento era su expulsión de la corporación. Fueron en total 7 los casos de los que tenemos conocimiento.

El primero de ellos data ya de 1763, cuando en la junta de 19 de marzo se acordó expulsar a Joaquín Antonio Salón por haber pronunciado ciertas ofensas contra la Junta y el padre prefecto.²⁸⁶ Sin embargo, la letra de esta

²⁸² A.I.C.A.V., libro 4, págs. 46 B-47.

²⁸³ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 76 B-77. Desafortunadamente no conocemos el sentido de la contestación, si es que la hubo.

²⁸⁴ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 101 B.

²⁸⁵ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 198-198 B.

²⁸⁶ Para el colegio de Valladolid tenemos un caso similar, cuando su junta decidió la expulsión de Juan Fernández Pereda por las expresiones injuriosas producidas contra dicho colegio. Por

resolución aparece totalmente ilegible al haberse tachado por completo, como igualmente ilegible y tachada aparece la resolución de la junta de 19 de junio del mismo año, en que la Junta le concedió el perdón a este individuo. Este tipo de proceder, insólito por no darse nunca más, se acordó en junta de 6 de agosto de 1773, a petición del afectado, quien afirmaba que Berní y Catalá pretendía valerse de aquellas resoluciones en un juicio civil que tenía con él en la Real Audiencia.²⁸⁷ Sin lugar a dudas, este fue uno de los motivos que impulsó a Berní a escribir las *Decadencias* —que después veremos—.

En la junta particular de 18 de mayo del mismo año 1763 se acordó separar a Vicente Ballester, como consecuencia de sus irregularidades y de su inadecuado proceder y actuar frente a los clientes, y pese a haber sido continuamente advertido y amonestado por distintos oficiales. Al parecer, había vendido libros que otros compañeros le habían prestado, había tratado de cobrar trabajos profesionales no realizados, y había enajenado seis cubiertos de plata que guardaba en depósito.²⁸⁸ Consecuentemente, se ordenó que no saliese en la lista, se anotase en el libro de matrículas dicha separación, y se pasasen la oportunas esquelas a las "oficinas" —entiéndase escribanos de cámara y procuradores—. Presentadas formalmente excusas por el referido individuo, la Junta accedió a su readmisión el 29 de mayo, gracias a la mediación del padre prefecto y de los ministros togados colegiales, a quienes el secretario y el maestro de ceremonias, en nombre del colegio, habían acudido solicitando consejo. Esta readmisión se decidió sin que sirviese de ejemplar, en vista del arrepentimiento y miseria en que se encontraba el afectado, y con el apercibimiento de que en caso de reincidencia la expulsión sería irrevocable.²⁸⁹

La siguiente expulsión se produjo el 8 de julio de 1770, afectando a los colegiales Francisco Tomás Capou y Vicente Llorca, con motivo de sus "torcidos e irrectos procederes".²⁹⁰ Dichos procederes no se consideraban decentes al lustre y esplendor del colegio, si bien no conocemos a qué se

real orden de 1785 se ordenó su reposición, previniéndole mayor moderación en sus escritos. Véase F. García Marroquín, *Reseña histórica...*, págs. 57-58.

²⁸⁷ P. Nácher Hernández, *Historia del Ilustre...*, pág. 104.

²⁸⁸ P. Nácher Hernández, *Historia del Ilustre...*, pág. 148.

²⁸⁹ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 49 B-52.

²⁹⁰ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 111-111 B.

referían. Sin embargo, el 11 de agosto de 1771 la Junta acordó respecto a Tomás Capou que se le pusiera y continuara en la lista del año siguiente, en vista del memorial que había presentado, y de que por los nuevos informes y noticias que se tenían se acreditaba que en el día no concurrían motivos por los que no tenerle por individuo del colegio. Pero las cosas no quedaron así, ya que la junta de 13 de enero de 1786 nos revela nuevos datos. Al parecer, como consecuencia del incorrecto proceder del Dr. Capou, Teresa Romero entabló juicio contra él, que finalizó por sentencia de la sala del crimen de la Real Audiencia de 22 de octubre de 1772. Posteriormente, por providencia de 4 de mayo de 1779 se permitió que el abogado en cuestión ejerciese de nuevo su facultad, y que los escribanos y procuradores le admitiesen los pedimentos que ordenara y firmara. De lo que se interpreta su inhabilitación por aquella sentencia. Con lo que en la junta de 13 de enero de 1786 se discutió y aceptó la solicitud del Dr. Capou, de que se le colocara en la lista y en el lugar que le correspondía según el tiempo de su ingreso en el colegio.²⁹¹

La siguiente expulsión, con la consiguiente separación de la lista y su borrón en el libro de matrículas, se había producido en 1774, cuando la Junta decidió separar del colegio a José Mariano Ramo por haber publicado las amonestaciones para casarse —como efectivamente lo hizo—, con una "pública operanta". Sin embargo, recurrida esta resolución por el interesado, el Real Acuerdo resolvió que se le repusiese en la lista, eso sí, sin que el colegio tuviese obligación de convocarlo a ninguna función pública. Aun así, en junta de 29 de mayo de 1775 se resolvió acudir al alto tribunal exponiendo, que si el fin de esta medida no era otro sino procurar la digna subsistencia del letrado, ello también se podría conseguir pasando certificación a las escribanías, sin necesidad de que saliese en la lista, ya que esto no era decoroso para el colegio.²⁹² Desconocemos cuál fue la resolución final del Real Acuerdo.

De 1784 data la siguiente expulsión. El afectado en este caso fue Vicente Margarit, y el motivo fue su "desordenado" modo de vivir. Según la junta particular de 3 de junio eran tan "feos y escandalosos" los actos que había cometido, que ni se explicaban en los libros de deliberaciones, para que

²⁹¹ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 214 B-215 B.

²⁹² A.I.C.A.V., libro 4, págs. 143-144 y 146 B-147.

no constase para la posteridad cómo un individuo del colegio se había separado con tanto exceso del honor y la nobleza de la abogacía, ya que incluso había ingresado en prisión. En 1792, y con la vista puesta en la corte, Vicente Margarit intentó que se le anotase de nuevo en la lista, a lo que no accedió la Junta.²⁹³ Queda constancia en este caso de que para inteligencia de los escribanos y procuradores de los tribunales, tanto reales como eclesiásticos, superiores e inferiores de la ciudad, se despacharon por el secretario los correspondientes avisos. Es de suponer que tales avisos se libraban en toda expulsión.

Pascual Gamborino fue el último colegial en ser expulsado por cuestiones de honor o comportamiento. Sucedió en la junta de 23 de febrero de 1799, y de forma semejante a lo ocurrido con José Mariano Ramo. El motivo fue el interés por preservar el honor y la nobleza de la profesión, que en este caso se vió atacada por tener dicho colegial una hija cómica actuando en la ciudad de Valencia, con su complacencia y consentimiento.²⁹⁴

También la Real Audiencia desempeñaba un papel importante en las expulsiones, pero ya no del colegio sino de la abogacía, lo que obligaba a la Junta a expulsar del colegio al abogado en cuestión, si es que era uno de sus individuos. El caso más llamativo fue el de José Gregorio Genovés y Fuster. Tras un proceso de incorporación largo y complicado, el decreto de la sala de lo civil de 13 de enero de 1826 le privaba perpetuamente de la facultad de abogar y le recogía el título de abogado. Los motivos, según la junta de 15 de abril del mismo año, fueron sus "demasías e inobediencias a las providencias de la sala". Según lo descrito en esta junta, el Dr. Genovés ya tenía expediente abierto por razón de su conducta en el ejercicio de la abogacía, al menos desde el año 1819. La suplicación a dicho decreto fue declarada desierta, con lo que en calidad de cosa juzgada el decreto se comunicó a la Junta del colegio para los fines consiguientes: su anotación en el libro de matrículas y su exclusión de la lista. Ni siquiera la Junta accedió a la solicitud del Dr. Genovés de librarle certificación en la que constase la resolución por la que se le

²⁹³ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 202-203.

²⁹⁴ A.I.C.A.V., libro 5, págs. 53-53 B.

suprimió de la Lista. Es más, se acordó que así se lo hiciera saber "en voz" por el secretario.²⁹⁵

Impago de las cuotas

Sin perjuicio de su estudio en el apartado *Cuentas del colegio*, tres eran los pagos a que estaba sujeto todo abogado colegial:

El estatuto XXIII establecía una cuota de cuatro pesos, como propina de entrada, que cada nuevo individuo debía entregar al tesorero, y que quedaba "aplicada a los gastos que se ofrezcan".

El segundo pago venía recogido en el estatuto XXIX, cuando establecía "que todos y cada uno de los individuos del colegio tengan obligación de dar al secretario la limosna de una misa por el ánima de cada congregante que muere". Esta limosna ascendía a cuatro reales de vellón.

Finalmente, y por no ser suficiente con las entradas, en la junta general celebrada el día 28 de febrero de 1762 se acordó, que cada abogado ofreciera "liberal y voluntariamente", para los grandes gastos del colegio, dos duros el día de Navidad de cada año. Este pago —que vendría en llamarse contribución anual u ordinaria—, se mantendría hasta que hubieran fondos bastantes o se acordara otra cosa en junta general. En esta junta también se acordó que el individuo notoriamente pobre quedara dispensado de este pago y de las cuatro libras de ingreso.²⁹⁶

El primero de los tres pagos era requisito imprescindible para la anotación del individuo en el libro de matrículas y, consiguientemente, para considerarse colegial. Por lo tanto, es únicamente el incumplimiento de los otros dos pagos de lo que tratará este apartado. Me propongo en estas líneas presentar un esbozo de cuáles fueron los apercibimientos que se derivaron de estos impagos y sus consecuencias a lo largo de los años.

En la junta de 9 de marzo de 1763 ya se dejaba constancia de la morosidad de los colegiales, cuando se acuerda avisar para pago a todos los deudores de cualquiera de las cuotas referidas. Y ante la persistencia de esta situación, el 12 de julio se acuerda excluir de la lista a todos aquéllos que no

²⁹⁵ A.I.C.A.V., libro 7, junta particular de 15 de abril de 1826, pág. 30 B, y junta de 13 de mayo del mismo año.

abonasen los dos duros hasta el día 17 del mismo mes, o no se excusasen del impago ante el decano.²⁹⁷ Sin embargo, no hay constancia de que efectivamente se adoptara la expulsión.

En el año 1764 el decano tuvo que reprender y amonestar a Antonio Berenguer y a José Morant, por haber mostrado su desaprobación con la cuota de los dos duros en el reverso del recibo de pago que el monitor recogía de cada colegial.²⁹⁸

En la junta de 18 de mayo de 1786, y ante el reiterado incumplimiento por parte de algunos colegiales no pobres del estatuto XXIX, se acordó que se tuviese presente por el secretario para que tampoco se recogiera la limosna cuando fallecieran los referidos abogados. De igual forma se resolvió en ocasiones posteriores, acordando incluso que no se volviese a solicitar de ellos la limosna en los casos siguientes, ya que se les consideraba excluidos de esta hermandad de sufragio.²⁹⁹

Esta dificultad en el cobro de ambos pagos se volvió aún más patente tras la fundación del montepío, como bien lo manifiesta la junta de 10 de agosto de 1779, llegando a ser incluso la mayoría de los abogados los que no contribuían.³⁰⁰

Como veremos en su momento, la consiguiente falta de fondos hizo que la Junta rebajara la cuota anual de dos a un peso duro, y dividiera su cobro en dos fracciones. Pero ni aun así cambiaron mucho las cosas, puesto que el 9 de octubre de 1791 la Junta acordó repartir esquelas, en nombre del decano, para hacer frente a los socorros precisos y los gastos extraordinarios.³⁰¹ En estas esquelas se avisaba a los morosos que, de no satisfacer las deudas, no se les pondría en la lista ni se les convocaría para ningún acto ni función pública como colegiales. Paradójicamente, según la junta de 20 de agosto 1792, el colegio tenía suficientes fondos para eximir al

²⁹⁶ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 6-8.

²⁹⁷ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 38-40.

²⁹⁸ A.I.C.A.V., libro 4, junta de 27 de marzo, págs. 72-72 B.

²⁹⁹ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 218 B-219 B.

³⁰⁰ A.I.C.A.V., libro 4, juntas de 18 de mayo y 18 de octubre de 1786, 6 y 31 de diciembre de 1787, y 22 de diciembre de 1789; o libro 5, juntas de 10 de octubre de 1791, y 7 de agosto de 1793.

³⁰¹ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 281-281 B.

decano del pago de las cien misas ordenadas en el estatuto XXX.³⁰² Al parecer, este repentino desahogo tenía su causa en el alto número de abogados que se colegiaron durante estos años con las correspondientes cuatro libras que depositaba cada uno de ellos por el ingreso.

Las cosas, lejos de mejorar, empeoraban. En 1796 una cuarta parte de los colegiales no pagaban la contribución ordinaria, si bien en estos momentos esta contribución volvía a ser de 40 reales vellón. Por ello se acudió a la Audiencia solicitando resolución conveniente para obligarles, que se obtuvo por decreto de 1 de diciembre de 1796. En este importante decreto —que en adelante se alegaría continuamente por la Junta—, se establecía la posibilidad de que al individuo que requerido tres veces por el monitor o cobrador no cumpliera el pago, se le pudiera excluir de la lista hasta que lo verificase. De la misma forma quedaría inhabilitado para firmar en los tribunales de la ciudad, pasándose el oficio oportuno, y librándose certificación para inteligencia y conminación de los demás individuos. Además, y por lo visto en juntas posteriores, este decreto permitía a la Junta acudir a la vía judicial. El contenido del decreto se transcribiría en las esquelas que en adelante se entregarían a los colegiales.³⁰³

Sin embargo, poco parece que cambiaron las cosas cuando al año siguiente los problemas volvían a ser los mismos, y se acudió de nuevo a la Audiencia solicitando la exclusión de los insinuados individuos de la lista hasta que verificasen el pago, lo que la Junta acordó días más tarde.³⁰⁴

En definitiva, la falta de pago fue por lo visto la regla general durante todos estos años, destacando por sus repercusiones el impago de la contribución ordinaria, de forma que eran constantes las amonestaciones y sus consiguientes apercibimientos. Lo que no parece que fueran tan frecuentes son las exclusiones de la lista. Prueba de ello son los 68 colegiados que no habían pagado en 1803, cuando en la lista de este año aparecían unos 160

³⁰² A.I.C.A.V., libro 4, págs. 289 B-290.

³⁰³ A.I.C.A.V., caja 9, expediente 19.

³⁰⁴ A.I.C.A.V., libro 5, juntas de 7 y 22 de diciembre de 1797, pág. 48.

individuos, y en continuas juntas se recordaba a los morosos sus deudas, sin que se les expulsara.³⁰⁵

Ante semejante morosidad, en la junta de 3 de noviembre de 1810 se determinó que el asistente del colegio, con certificación de la decisión adoptada y del arriba mencionado decreto del Real Acuerdo, requiriese por última vez a todos los individuos que no hubiesen satisfecho la contribución anual ordinaria, y/o la limosna para las misas correspondientes a los años 1808-1809 y 1809-1810. Y ello con el fin de que los deudores ejecutasen dichos pagos en el término de tres días, con el apercibimiento de acudir al apremio judicial contra los que se resistieran. De hecho, en el expediente de cobro que el año siguiente presentó el asistente, consta que un total de 25 colegiales no habían pagado finalmente. Por tal motivo, el decano y el secretario pusieron la situación en conocimiento del alcalde del crimen Vicente Lisa de las Balsas, para llevar a efecto tal apremio y cobro.³⁰⁶

En la junta de 15 de enero de 1818 se deja constancia de que muchos de los que no pagaban se excusaban en que no contribuían todos. Por ello se acuerda que el asistente les requiriera al pago como máximo por dos veces, y no verificándose acudiera inmediatamente al juez del cuartel o alcalde mayor que correspondiese, a fin de que rubricara los recibos de los que se excusaran al pago, y los entregase a cualquier alguacil para que les apremiase a que lo hicieren efectivo con las costas. Además, y para que no pudieran alegar ignorancia, se acordó entregarles una certificación de esta resolución firmada por todos los asistentes a la junta.³⁰⁷

En 1823, según la junta de 12 de julio, todavía era la mayor parte de los individuos del colegio los que se negaban al pago de la contribución anual, con lo que se acordó pasarles copia certificada de esta deliberación, a fin de que se prestaran buenamente al pago de las dos medias anualidades vencidas, y evitar así la vejación que podría causarles el apremio judicial. En juntas posteriores —22 de noviembre y 13 de diciembre del mismo año— se acordó que el decano acudiese a uno de los alcaldes mayores para que éste

³⁰⁵ A.I.C.A.V., libro 5, juntas de 2 de noviembre de 1803, 6 de agosto de 1804, 2 de diciembre de 1807..., y caja 9, expediente 19.

³⁰⁶ A.I.C.A.V., caja 9, expediente 19.

³⁰⁷ A.I.C.A.V., libro 5, págs. 270-270 B.

compeliera a los deudores, en cuanto a las deudas devengadas y no pagadas al menos durante los tres últimos años.³⁰⁸

Por fin tenemos noticias en 1825 de que el pago de las contribuciones durante el último año colegial se había cumplido con bastante exactitud. Aún así, la junta de 11 de noviembre acordó que el asistente instara al pago a los deudores de los dos años anteriores, antes de acudir al apremio judicial.³⁰⁹

Pero a pesar de todo continuaron siendo habituales los problemas en el cobro de las contribuciones.³¹⁰

Pero no sólo eran los colegiales los que no cumplían con sus obligaciones contributivas. Por lo visto, la observancia de los estatutos XXIX y XXX por parte del secretario y del decano, respectivamente, dejaba mucho que desear a principios del siglo XIX, ya que por junta de 6 de agosto de 1804 se acordó su puntual cumplimiento. Según el primer estatuto, el secretario debía mandar decir las misas por las ánimas de los congregantes que muriesen, con cargo a las limosnas recogidas. Según el segundo, se ordenaba al decano mandar decir las cien misas rezadas, dando la limosna de su propio dinero, mientras no tuviese el colegio caudales suficientes, ya que en este caso se celebraría un aniversario general.³¹¹ En esta junta se obligó a ambos cargos a acreditar la observancia de estos dos estatutos mediante recibos acreditativos.

Esta inobservancia de las ordenanzas era más grave, si cabe, por lo que respecta a los decanos, ya que no era la primera vez que se les llamaba la atención. De hecho, en 1776 Berní y Catalá ya hacía constar este incumplimiento en la tercera de sus decadencias.

Decadencias

Bajo este nombre, el 30 de noviembre de 1776 José Berní y Catalá presentó un escrito en el que, a través de 16 observaciones o decadencias, destacaba los —según él— incorrectos y desordenados procederes, tanto de la Junta como de los colegiales, al tiempo que proponía algunos posibles

³⁰⁸ A.I.C.A.V., libro 6, págs. 50 B-51 B, 59-59 B y 59 B-60 B, respectivamente para las tres juntas.

³⁰⁹ A.I.C.A.V., libro 7, págs. 20 B-21.

³¹⁰ A.I.C.A.V., libro 7, juntas de 6 de marzo de 1827, 8 de julio de 1829 y 10 de diciembre de 1832.

³¹¹ Como ocurrió en el año 1792. Véase A.I.C.A.V., libro 4, junta de 20 de agosto.

remedios.³¹² Este escrito tiene su origen en otro memorial que presentó a la Junta el 8 de septiembre del mismo año. En éste ya exponía sus quejas ante el proceder de la Junta, con respecto a las tachaduras que efectuó de las resoluciones por las que se expulsaba del colegio a Joaquín Antonio Salón, ante las ofensas que había proferido contra la Junta y el padre prefecto. Tachaduras que se realizaron a petición del interesado, una vez se le readmitió en la corporación.³¹³

Realmente fue la Junta la que propuso a Berní redactar las decadencias, cuando éste insinuó en su anterior memorial de 8 de septiembre que había mucho que remediar en el colegio. De esta forma, la Junta podría proceder, en su caso, a la subsanación de estos males.³¹⁴

La mayoría de las 16 decadencias tratan del incumplimiento por parte de la Junta y de los colegiales de algunas de las obligaciones que les asignaban los estatutos. En otras decadencias se resaltaba la falta de predisposición de la Junta en la consecución de los cometidos que ella misma había acordado abordar en alguna reunión de las celebradas hasta ese momento. Y, finalmente, en otras decadencias se destacaba la inadecuada actuación de los colegiales ante los tribunales, pero ya no como colegiados, sino como simples letrados.

A los abogados colegiales les acusaba de no cumplir con la obligación de dar la limosna de una misa por el alma de cada colega fallecido; de no acabar los pleitos empezados, permitiendo que otros los continuaran; del corto número de informes de los abogados en sala; de su escasa asistencia al inicio de cada año al Real Acuerdo para la lectura de las ordenanzas y su juramento; de su también escasa asistencia a las vísperas y fiestas de la Asunción; y, finalmente, de no guardar la oportuna modestia en el traje.

A los decanos les recriminaba directamente el incumplimiento de la celebración de las cien misas por las almas de los difuntos colegiales, para lo que utilizaba expresiones como la de que "todos sabemos los que han

³¹² A.I.C.A.V., caja 1, documentos fundacionales, número 13. Véase también P. Nácher Hernández, *Historia del Ilustre...*, págs. 103-115, y *El doctor José Berní...*, págs. 55-62.

³¹³ A.I.C.A.V., caja 1, documentos fundacionales, números 12 y 14, respectivamente, para los memoriales de Berní y Joaquín Antonio Salón.

³¹⁴ A.I.C.A.V., libro 4, juntas de 12 de octubre y 1 de diciembre de 1776, págs. 152 B-153 y 153-153 B, respectivamente.

cumplido y los que no". También les recriminaba el no pagar la fiesta de la Asunción, siendo lo suficientemente ricos como para poderlo hacer.

A la Junta le recriminaba el no poner en práctica lo acordado sobre la tasación de los derechos de los abogados, sobre la rebaja en los precios de los alquileres de las casas de abogados inmediatas a la Audiencia, o sobre la mitad de las plazas nacionales. También de no socorrer adecuadamente, como ocurrió al menos en una ocasión, a los colegiales presos. Incluso, denunciaba la violación del carácter secreto de que gozaban sus resoluciones y votaciones.

Además, Berní se quejaba, en general, del excesivo número de abogados que salían en lista, con sus consiguientes perjuicios, cuando no todos ejercían la abogacía. Para evitarlo proponía que se les excluyera —como se hacía en el colegio de la corte—,³¹⁵ si no tenían despacho abierto, propio, y con los libros precisos. También se quejaba ante el colegio de que la vida y costumbres de los colegiales no eran lo buenas y honestas que de ellos cabía esperar. Incluso denunciaba, finalmente, que no se pusiera en práctica el estatuto XXXVII, por el que se permitía la modificación de las ordenanzas, puesto que el discurrir de los acontecimientos así lo aconsejaba.

Los resultados de las decadencias fueron, como era de esperar, nulos. Al parecer, las relaciones de Berní con sus colegas no eran muy cordiales. Tan sólo que, como deferencia, en junta de 4 de enero de 1777 se acordó lo siguiente:

...que se guarden las leyes del Reyno, los estatutos del Colegio y loables estilos, y que siempre que se trate de poner en práctica la ley 11, título 16, libro 2 de la recopilación, o sobre alquileres de las casas de los abogados inmediatas a la Audiencia, o sobre dimidiación de las plazas o togas para los nacionales, se cite al Dr. Berní.³¹⁶

En pocas palabras, y como resumen al apartado *Sanciones y apercibimientos*, la Junta no tenía capacidad definitiva para sancionar a los colegiados, sino que en última instancia era la jurisdicción ordinaria —la Audiencia—, la que supervisaba todas sus decisiones y resolvía los conflictos entre el colegio y sus individuos.

³¹⁵ P. Barbadillo Delgado, *Historia del Ilustre...*, I, págs. 148-151.

³¹⁶ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 154.

CAPÍTULO IV: CUENTAS DEL COLEGIO

Escuetos son los estatutos del colegio en materia de cuentas. El más importante es el XXXIV, cuando dice:

Item, deliveramos que el decano y diputados electos tomen cuentas solamente al thesorero que lo huviere sido en el año antezedente, pues el decano y diputados no manejan caudales algunos. Y que se las tomen de todos los que constare haber entrado en su poder, admitiéndole en data las partidas que hubiere pagado en virtud de libranzas del decano, intervenidas por el diputado primero y segundo, que serán los recados lexítimos de justificación.

Los otros estatutos que tratan sobre las cuentas los iremos viendo a lo largo de la exposición de este estudio. En todo caso, y para completar la información aportada por las ordenanzas, serán los libros de deliberaciones y, sobre todo, los legajos de cuentas,³¹⁷ los que nos van a dar una visión más detallada y aproximada de la situación económica del colegio a lo largo de los años.

Tesorero y contador

Como hemos visto en el estatuto XXXIV, el tesorero era el oficial encargado de llevar las finanzas del colegio, esto es, sus entradas y sus salidas. Pero también el contador, que era al mismo tiempo el secretario del colegio, desempeñaba un papel relevante, al ser el encargado de examinar la veracidad de las cuentas que presentaba el tesorero, y de dar razón a la Junta de su conformidad —o no— con las mismas. Con ello, son dos las contabilidades que se llevaban al mismo tiempo, para, de esta forma, poderse controlar mutuamente la exactitud de los asientos y los resultados.

Cada ejercicio económico se iniciaba cuando el nuevo tesorero tomaba posesión del cargo, y finalizaba el día del acto de posesión del año siguiente;

tal como ocurría con los demás cargos. Por lo tanto no coincidía, ni mucho menos, con el año natural ni con las juntas de elección de cargos.

Finalizado el ejercicio económico, el tesorero saliente presentaba a la nueva Junta el legajo de cuentas que había llevado durante su mandato. La Junta trasladaba este legajo al contador, también saliente, para que expusiera lo que le pareciera conveniente, según los libros de secretaría y contaduría que habían obrado bajo su poder. Se trataba de que el contador comprobara, que todos los asientos de la *data* o *descargo* del legajo de cuentas presentado por el tesorero se correspondían con los recibos de salida que él mismo, como secretario, había librado. Efectuada esta operación, el contador dejaba constancia en el mismo legajo de cuentas de su conformidad con las mismas. Y digo "conformidad" porque, durante la vigencia de los primitivos estatutos del colegio, nunca se presentaron problemas dignos de mención que pusieran en duda el recto proceder del tesorero.

Más tarde, y tras la conformidad presentada por el contador, la Junta aprobaba las cuentas, las declaraba legítimas, y acordaba colocarlas en el archivo del colegio. Asimismo, ordenaba guardar el saldo positivo, con que normalmente terminaba cada ejercicio económico, en el arca del depósito que había en el archivo. Acto seguido, el nuevo secretario expedía al tesorero una certificación que le serviría de finiquito y resguardo. En el caso de resultar el saldo negativo le expedía, además, libramiento contra el nuevo tesorero para la cobranza del *alcance* a su favor. Como se establece en el estatuto XXXIV, a la junta en que eran examinadas las cuentas no eran convocados ni el tesorero ni el maestro de ceremonias.

De todo lo explicado se dejaba constancia al final del legajo. Para el ejercicio 1790-91, por ejemplo, quedó de la siguiente manera:³¹⁸

Por la inspección de esta cuenta se ve que siendo el cargo el de dos mil novecientos ochenta y nueve reales y dos mrz. Vellón, y la data dos mil quinientos noventa y un reales y treinta mrz., resulta el

³¹⁷ A.I.C.A.V., cajas 285-289.

³¹⁸ A.I.C.A.V., caja 286, legajo años 1790-91. Sin embargo, en la portada del legajo el tesorero escribe lo siguiente: "Cuenta con cargo y data que forma el Dr. Dn. Vicente de Alagón, thesorero del Ilustre colegio de abogados de esta ciudad, de todos los efectos que entraron en su poder desde el día 9 de enero de 1791 hasta 23 de octubre del mismo año, en que ha tenido a su cargo la thesorería." Véase para estas juntas el libro 4, págs. 272-272 B y 282.

alcance a favor del Colegio de trescientos noventa y siete reales y treinta, digo seis, mrz. von., salvo qualquier error. Valencia 22 de septiembre de 1791.

D. D. Vcte. de Alagón.
[Tesorero saliente]

El secretario y contador del Colegio ha visto y examinado las cuentas que preceden y las encuentra conformes en todo, para lo qual ha tenido presentes los libros de su secretaría y contaduría, como también los documentos que acreditan el descargo. Valencia y octubre 18 de 1791.

Dr. Dn. Juan Andrés Iváñez.
[Secretario saliente]

Certifico: que en la junta celebrada en el día veinte y tres de octubre mil setecientos voveinta y uno, por nuestro Ilustre Colegio en casa del Sor. decano, se han aprobado estas cuentas con su cargo y data y alcance que anteceden, y que el Sor. Dn. Vicente de Alagón, thesorero saliente, en seguida de la aprovación en presencia de los señores vocales concurrentes a la dicha junta entregó el mismo alcance al Sr. Dn. Joseph Pinazo, actual tesorero, como todo resulta del libro de deliberaciones a que me refiero. Y para que conste lo firmo en Valencia veinte y quatro de octubre mil setecientos noventa y uno.

Dn. Cebolla.
[Secretario entrante]

Legajo de cuentas

El legajo de cuentas es el registro —escrito y documental—, que llevaba el tesorero durante su mandato de todas las entradas y salidas en los fondos del colegio, y que presentaba a la Junta al final del ejercicio económico para su examen y aprobación. Para cualquiera de las operaciones registradas se usaban indistintamente la moneda valenciana y la castellana.³¹⁹

Pero antes de entrar en el estudio de los legajos aludiremos, aunque sea brevemente, a las primeras cuentas del colegio, que fueron las que

³¹⁹ Para una información más completa y detallada, especialmente sobre equivalencias, véase J. M. Palop Ramos, *Fluctuaciones de precios y abastecimientos en la Valencia del siglo XVIII*. Valencia, 1977, pág. 17; y F. Mateu y Llopis, "La Moneda del Reino de Valencia. III. De la Guerra de Sucesión a la de por la Independencia. (1700-1808)", "La Moneda del Reino de Valencia. IV. Los reinados de Fernando VII e Isabel. (1808-1833-1868)", *Temas Valencianos* 31 y 42 respectivamente (1977), así como *Aportación a la Historia Monetaria del Reino de Valencia en el siglo XVIII*, Valencia, 1955. Las equivalencias eran las siguientes: 1 libra = 20 sueldos y 1 sueldo = 12 dineros; por lo tanto, 1 libra = 240 dineros. Por otra parte, 1 real de vellón = 34 maravedís. Finalmente, 1 libra = 15 reales de vellón y 6 céntimos ó 1 octavo —con lo que una libra serían 512 maravedís—, o bien 1 peso duro = 20 reales.

presentó José Berní y Catalá. Este primer legajo, aprobado en junta particular de 27 de septiembre de 1761, no se adapta por completo a las reglas establecidas por los estatutos.³²⁰ La partida de *cargo* se reducía a los 3.000 reales de vellón que 75 abogados habían pagado, a razón de dos duros cada uno de ellos. La de *descargo* ascendía a 3.277 reales de vellón y 14 maravedís, y se refería casi por completo a los gastos relacionados con la fundación del colegio. Con lo que el saldo fue negativo en 277 reales y 14 maravedís, que se le debieron al Dr. Berní, como así lo reconocieron los comisarios designados para el examen de las cuentas, Pedro Abaás y Mariano Caller.³²¹

En todo legajo de cuentas posterior podemos diferenciar dos partes principales: el sumario y los recibos.

Sumario

Se trata de una relación detallada, que aparece al principio o al final del legajo, de todos los asientos de entrada —*cargo*— y de todos los de salida —*descargo* o *data*—. Al final, restadas ambas partidas, aparecía el saldo del ejercicio o *alcance*, que podía ser, bien a favor del colegio, caso de ser el *cargo* superior a la *data*, o bien a favor del tesorero, caso de ser el *cargo* inferior. Raramente coincidían ambas cifras.³²²

A continuación, y como ya hemos dicho, el contador manifestaba por escrito su conformidad con las cuentas, o, en su caso, las alegaciones que estimaba oportunas. Finalmente, el nuevo secretario dejaba constancia de la resolución de la junta particular en la que se aprobaban.

³²⁰ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 5-5 B.

³²¹ A.I.C.A.V., caja 1, expediente nº 6. Realmente, el Dr. Berní asumió el papel de tesorero respecto de los 3.000 reales de vellón que se le dieron para hacer frente a los gastos de la fundación del colegio, puesto que esta contribución debió acordarse, como muy tarde, el 21 de marzo de 1759, que es de cuando data la primera elección de cargos, y, por lo tanto, de tesorero. En la junta particular de 9 de abril de 1759 se acordó, "que de los efectos en poder del thesorero se libren seiscientos reales vellón (por aora) para los gastos que ocurran, dándose libramiento conforme a ordenanza" (libro 4, pág. 2). Esta cantidad fue librada por el Dr. Berní en favor de Pedro de Rueda y Osorio, a pesar de que en estos momentos el tesorero era Vicente Salvachuna. Por otra parte, no ha quedado reflejado en ningún lugar que este último presentara sus cuentas. En junta de 13 de febrero de 1760 aparece como tesorero Mariano Caller, sin constancia de haber mediado previa elección, y por fallecimiento del anterior. Véase también P. Nácher Hernández, *El Doctor José Berní Catalá, su vida y su obra*, Valencia, 1961, pág. 41.

Este sumario falta en numerosos legajos de los primeros años. Lo más probable es que se hayan extraviado, ya que al principio el legajo no se cosía por el margen izquierdo —como se hizo a partir del ejercicio de 1778-79—, sino que todas las hojas aparecían sueltas. En estos casos hemos completado los datos con los libros de deliberaciones, ya que en las actas de las juntas en que se aprobaban las cuentas aparecían el total de los ingresos y de los gastos, así como el balance final. Por el contrario, durante los últimos años de vigencia de los antiguos estatutos estos libros se limitaban simplemente a aprobar las cuentas, sin hacer mención a cantidad alguna.

A continuación examinaré los asientos que regularmente aparecían en el *cargo* y los que lo hacían en la *data*.

Cargo

Prácticamente siempre fueron los tres mismos asientos:

1º) El remanente del ejercicio anterior, caso de que el balance hubiese sido positivo. Sin embargo, hay muchos sumarios en los que no aparece este asiento. Lo más probable es que se depositara en el arca de tres llaves, o el tesorero del nuevo ejercicio —o incluso el del anterior— lo destinara directamente al pago de deudas, con lo que se obviaría su consignación.

2º) El asiento relativo a los ingresos por incorporación o "propina de entrada" en el colegio. Por este concepto, y según el estatuto XXIII, cada nuevo individuo estaba obligado al pago de cuatro pesos, "para los gastos que se ofrezcan". La junta general de 28 de febrero de 1762 concretó esta cantidad en cuatro libras, que en la partida de *cargo* de la mayoría de los legajos de cuentas se traducía en 60 reales de vellón y 8 maravedís. A algunos abogados se les permitió atrasar este pago si en el momento de la incorporación carecían de disponibilidad.³²³

³²² Caso de los ejercicios económicos de los años 1762-63, 1772-73, 1829-30, 1833-33 y 1837-38. En el cuarto caso se trata del legajo presentado por el segundo tesorero que hubo en el mismo ejercicio al haber fallecido el primero.

³²³ A.I.C.A.V., libro 4, junta de 7 de junio de 1762, págs. 13-13 B.

En la junta particular de 16 de abril de 1791 se acordó que, en adelante, cada nuevo individuo pagaría además 8 reales de vellón, en concepto del papel, por los estatutos que se le entregaban. Además, también pagaría lo mismo cualquier antiguo colegial que los pidiera.³²⁴

De esta manera, ambos conceptos, entrada y papel, aparecerán a menudo comprendidos bajo un único asiento de 68 reales y 8 maravedís.

3º) El asiento relativo a los ingresos por la cuota anual.

Según la misma junta general de 28 de febrero de 1762,

...y por quanto son indispensables muchos gastos para poner en planta tan grande obra, y no ser bastantes las entradas; liberal y voluntariamente ofrecieron depositar en el día de Navidad de cada año dos duros por cada uno, interin y hasta tanto que haya fondo bastante, y en otra junta general se determine sesar este voluntario ofrecimiento".³²⁵

Según la misma junta, de este pago y del anterior quedarían dispensados los individuos notoriamente pobres. Sin embargo, a lo largo de los libros de deliberaciones no ha quedado constancia de que se pusiera en práctica esta posibilidad. Por otra parte, ni se acordó otra cosa en junta general ni, por lo visto, tuvo nunca el colegio suficientes fondos.

Ante el escaso número de colegiales que cumplían con este pago, en junta particular —que no general— de 22 de diciembre de 1789 se acordó rebajar la contribución anual a un duro, y que además se dividiera en dos pagos de 10 reales vellón cada uno: el primero por Navidad, y el segundo por San Juan de junio.³²⁶ Si desde el ejercicio 1767-68 el *alcance* había resultado ininterrumpidamente en favor del tesorero, a partir de ahora el *cargo* superará a la *data* prácticamente todos los años. Si bien es cierto que en el ejercicio 1796-97 cada media anualidad volvió a ser de 20 reales de vellón.

Muchos legajos contienen una separata en la que aparecen las firmas de los colegiales que habían pagado las cuotas. A su vez, numerosos legajos contienen los recibos impresos —firmados por el tesorero y el secretario— que

³²⁴ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 275-276.

³²⁵ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 8.

³²⁶ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 263-263 B.

acreditaban dicho pago. Y en otras ocasiones —pocas—, el tesorero enumeraba en una lista los individuos que no habían pagado.

La morosidad y, más aún, el simple impago de, sobre todo, la cuota anual, fue uno de los más graves problemas al que continuamente tenía que hacer frente la Junta. Aunque este tema ya lo hemos tratado, creo conveniente recordar aquí algunas noticias y aportar otras nuevas.

La primera ocasión en que este problema se refleja en los libros de deliberaciones es en el acta de la junta de 9 de marzo de 1763, cuando se acuerda avisar para pago, de orden del decano, a todos los que no habían abonado ni los dos duros de contribución anual, ni la cuota de ingreso, ni la limosna de la misa por los difuntos (estatuto XXIX), con el apercibimiento de que, de no cumplir, se "tomará otra providencia".³²⁷ La persistencia de esta situación llevó a la Junta a adoptar la decisión, el 12 de julio del mismo año, de excluir de la lista a todos los que no depositaran los dos duros hasta el día 17, o bien no se excusaran ante el decano.³²⁸ No obstante, no hay constancia de que se adoptara ninguna decisión al respecto.

Tras la fundación del montepío en 1779 se agudizaron el retraso y el impago de la cuota anual, llegando a ser incluso la mayoría de los abogados los que no contribuían.³²⁹ Es por ello que, como hemos visto, se decidiera rebajar la contribución anual de dos a un duro.

Sin embargo, los problemas para cobrar la cuota continuaron, como se manifiesta en la junta de 9 de octubre de 1791,³³⁰ si bien en estos años los ingresos del colegio ya eran superiores a los gastos. Los avisos de pago dirigidos a los morosos contenían ahora, además del apercibimiento de exclusión de la lista, la advertencia de no convocarles para ningún acto ni función pública como colegiales.

Con los años continuó empeorando la situación, de tal forma que en 1796 sólo era una cuarta parte de los colegiados los que pagaban. Considerando que en estos momentos no se permitían nuevas

³²⁷ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 40.

³²⁸ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 54.

³²⁹ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 170 y 242 B.

³³⁰ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 281 B.

incorporaciones, cuyos ingresos habían suplido hasta este momento el impago de la contribución anual, se decidió en la junta de 29 de noviembre de este año acudir al Real Acuerdo, solicitando permiso para que al individuo que, "requerido por tres veces por el monitor o cobrador no cumpla el pago, se le suspenda de la lista hasta que lo verifique, y de poder firmar en los tribunales de la ciudad, pasándose al efecto el oficio oportuno, y librándose para la inteligencia y cominación de todos los individuos la certificación correspondiente".³³¹ Lo que así acordó el Acuerdo en decreto de 1 de diciembre, "con apercivimiento de apremio y de que se hará efectivo en el caso de no cumplir".³³² Así pues, al año siguiente se acudió de nuevo al Real Acuerdo, pidiendo la exclusión de la lista de ciertos individuos que, pese a tener conocimiento del anterior decreto, se resistían al pago. Por este motivo se acordó, mientras tanto, suspender la formación e impresión de la lista. No obstante, quince días más tarde se decidió que, por ser ya finales de año, se formara e imprimiera esta lista con exclusión de los abogados referidos.³³³

La situación no parece que mejoró demasiado.³³⁴ El 21 de enero de 1803 el tesorero comunica a la Junta que 68 abogados no habían pagado,³³⁵ de un total de 160 individuos que aparecían en la lista de ese año. El 3 de noviembre de 1810 la Junta acuerda requerir al pago, por última vez, a todos los que no hubiesen satisfecho las limosnas de la misa por cada abogado difunto, y la contribución anual desde la de Navidad del año 1808, con el apercibimiento de que de no hacerlo en el plazo de tres días se solicitaría el apremio judicial para hacerlo efectivo. Fueron en total 25 individuos,³³⁶ y para el apremio se acudió al alcalde del crimen de la Real Audiencia, Vicente Lisa de las Balsas.

En la junta de 15 de enero de 1818 se ordenó al monitor que recordase el pago a los morosos como máximo dos veces, y que, no verificándose, acudiera al juez del cuartel o alcalde mayor que correspondiera, a fin de que

³³¹ A.I.C.A.V., caja 9, expediente 19, pág. 3 B.

³³² A.I.C.A.V., caja 9, expediente 19, pág. 4 B.

³³³ A.I.C.A.V., libro 5, juntas de 7 y 22 de diciembre de 1797.

³³⁴ A.I.C.A.V., libro 5, juntas particulares de 2 de noviembre de 1803 y 2 de diciembre de 1807.

³³⁵ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 69 B.

³³⁶ A.I.C.A.V., libro 5, págs. 136 B-137 B; y caja 9, expediente 19, págs. 10 y sigs. De los 25 individuos, 11 eran deudores de las cuatro medias anualidades.

rubricara los recibos de los que se excusaran al pago y los entregara a cualquier alguacil, para que éste apremiara a los deudores a que hicieran efectivo los pagos con las costas. Además, se acordó entregar certificación de esta deliberación, firmada por todos los asistentes a esta junta, a cada uno de los morosos para que no pudieran alegar ignorancia alguna.³³⁷

En 1823, según manifestación de la junta de 12 de julio, aún era la mayoría de los individuos los que se negaban al pago de la contribución anual, con lo que se acordó pasarles certificación para que pagasen las dos últimas medias anualidades, y para evitar el apremio judicial.³³⁸ En juntas posteriores se acordó que el decano acudiera a un alcalde mayor, para que éste compeliere a los morosos en cuanto a las cuotas no pagadas desde los tres años últimos.

Por fin, en 1825 tenemos noticias de que el pago de las contribuciones durante el último año se había cumplido con bastante exactitud, a pesar de que varios individuos todavía estaban atrasados en el pago de las anteriores.³³⁹

A pesar de todo, el incumplimiento de las obligaciones pecuniarias continuará siendo habitual durante los años siguientes.³⁴⁰ Si bien, de una forma mucho menos preocupante. De cualquier manera, pienso que lo transcrito en las actas no debe hacernos pensar que nos encontramos ante un incumplimiento general de estas obligaciones, sino sólo relativo. Es decir, que, aunque con retraso, los abogados pagaban. De alguna forma, este mayor cumplimiento también podría ser señal de que los objetivos perseguidos con la reducción del número de abogados se habían cumplido. Es decir, si uno de los objetivos de esta deseada reducción era el permitir unos mayores ingresos o, cuanto menos, una suficiente holgura económica de los abogados en ejercicio, el hecho de que en estos momentos haya muchos menos que a finales del siglo anterior implica que los existentes tuvieran más trabajo y, por lo tanto, gozasen de una mejor posición económica. De ahí el mayor cumplimiento en sus obligaciones pecuniarias. Pero esto son suposiciones que necesitarían ser comprobadas.

³³⁷ A.I.C.A.V., libro 5, págs. 270-270 B.

³³⁸ A.I.C.A.V., libro 6, pág. 59 B.

³³⁹ A.I.C.A.V., libro 7, pág. 21.

Data o Descargo

La partida de la *data* o *descargo* era mucho más compleja que la del *cargo*, y sus asientos mucho más numerosos e irregulares. Normalmente, a cada asiento le acompañaba un número que indicaba el recibo correspondiente que lo justificaba. Los asientos más importantes, y los que más se sucedieron a lo largo de los años, fueron los siguientes:

1º) La cantidad destinada al pago del *alcance* en favor del tesorero del ejercicio anterior, en el caso de que la *data* hubiera sido superior al *cargo*.

En algunas ocasiones este pago se efectuaba en dos partes, y en otras no aparece documentado, pese a ser negativo el saldo del año anterior. Lo más probable es que en estos casos se pagara al tesorero por otras vías de las que no se dejaba constancia. En este sentido, el 31 de diciembre de 1787, a propósito de las cuentas presentadas por el tesorero Juan Bautista Vergara —que resultaba acreedor del colegio por la cuantía de 216 libras, 7 sueldos y 6 dineros—, se acordó lo siguiente:

Y teniendo presente el referido alcance, y conferido como otras veces sobre los medios de que podría hecharse mano para cubrirle, se deliberó:

Que por aora lo hiciesen de propios los *señores* oficiales que asistieron a la junta, o bien *que* entraren en thesorería efectos del mismo colegio, en lo *que* únicamente deverían ser comprendidos los *señores* decano, don Francisco Nadal, don Juan Bautista Marau, don Juan Bautista Calabuig y don Estevan Benlloch; y no don Antonio Pérez Clemente, ni el precente *Secretario*, con motivo de la cesión *que* por lo mismo tenían hecha de los salarios de sus emanuenses, según resulta de la deliberación del día 6 de los *corrientes*.

Y *que* se explorase la voluntad de dicho señor Alfonso a fin de *que* si quería, como los demás *señores*, cubrir dicho alcance en los *términos* expresados.³⁴¹

No parece que se tratara de una decisión singular. Pienso que en otros ejercicios económicos con resultado negativo también se adoptarían soluciones semejantes, si bien no se dejaría constancia de ellas. De ahí que en

³⁴⁰ A.I.C.A.V., libro 7, juntas de 6 de marzo de 1827, 8 de julio de 1829 ó 10 de diciembre de 1832.

³⁴¹ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 224.

algunos legajos no conste el *alcance* del ejercicio anterior cuando era favorable al tesorero.

2º) Las 20 libras o 300 reales vellón como regalo acostumbrado que anualmente se hacía al padre prefecto.

3º) Los gastos de la festividad de la patrona del colegio, Nuestra Señora de la Asunción.³⁴²

El estatuto V ordenaba que "el decano haga a su costa la fiesta principal de Nuestra Señora de la Asunción y la de Nuestra Señora de la Concepción, interín que el Colegio tenga caudales suficientes para costear estos gastos, y los decanos escusen superfluidades." De hecho, en la junta particular de 4 de septiembre de 1762, teniendo en cuenta la solemnidad con que se había celebrado la fiesta de la Asunción en su primera ocasión, se acordó que el decano no la costeara. Asimismo, se insistió en el "exacto cumplimiento" del estatuto V, para que el decano tampoco costeara la fiesta de los años sucesivos mientras el colegio tuviera fondos. Tal decisión se basaba en que, "si el Sr. decano huviesse de costear la fiesta, apenas se encontraría abogado antiguo que, abando sus dependencias, se dedicase a servir empleo tan pesado y sin utilidad alguna huviesse de gastar tan crecidas sumas que le atrasaren".³⁴³ Lo cierto es que durante la vigencia de los primitivos estatutos esta fiesta fue costeada siempre por el colegio, a pesar de que durante años consecutivos la partida de *data* fuera superior a la de *cargo*, y de que la Junta manifestara que no había dinero, ya que en estos casos se sacaba el dinero del depósito del archivo.³⁴⁴

Según la junta de 20 de agosto de 1792, otra junta particular celebrada con anterioridad había regulado los gastos de esta fiesta, y había acordado

³⁴² Sobre la celebración de esta fiesta y la de la Concepción véase P. Nácher Hernández, *Historia del Ilustre...*, págs. 61-102.

³⁴³ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 33 B. No obstante, el decano, deseando mostrar su generosidad y aplicación al servicio, ofreció pagar voluntariamente, además de la limosna de las cien misas del estatuto XXX, el importe del regalo del predicador, que fue una arroba de chocolate; la partida de mayor consideración de todo el año.

³⁴⁴ Véase, por ejemplo, el acta de la junta de 15 de julio de 1773, cuando al final, por nota, se deja constancia de que, habiendo faltado 62 pesos para sufragar los gastos de esta fiesta, se sacaron del depósito del archivo. Igualmente, Berní y Catalá hizo constar esta "anomalía" en 1776 en su decadencia XV. Véase nota siguiente.

que en lugar de los agasajos y visitas que solía hacer el decano, éste depositara en el arca treinta libras para fondo del colegio.³⁴⁵ Esta junta de 20 de agosto de 1792 establecía la voluntariedad de esta contribución, con el fin de no sobrecargar las obligaciones y desembolsos del decano, y de que ninguno de ellos se excusara a aceptar el cargo. Hay que tener en cuenta que el colegio pasaba en estos momentos por un período de bonanza económica.

De cualquier forma, la celebración de la fiesta de la Asunción casi siempre suponía, con mucho, el gasto más importante de todos. Y como vamos a ver, lo normal es que aparecieran varios asientos referidos a esta fiesta. El más importante de ellos solía aparecer desglosado en una separata, y de él se hacía cargo el monitor; aunque en ocasiones la diversa composición de este asiento también se desglosaba en la partida de *data* (como en este caso: segundo otrosí). En definitiva, y tomando como ejemplo el año 1782, todos los gastos de la fiesta y sus respectivas cantidades aparecerían en la *data*, tal y como se transcribe a continuación:

Otrosí: En 11 del mismo, a presencia del señor Villarroya, maestro de ceremonias, entregué al padre Dr. don Josef Ferrando, prepósito de la congregación, diez libras, para un principio a la comunidad el día de la Asunta según estilo. 10 Ls.

.....
Otrosí: En 13 del mismo a dicho Quiles [monitor] treinta y cinco libras, catorze sueldos y onze, para satisfacer lo siguiente: por seis orzas de almívar, para el padre prepósito de la congregación: 4 L, 16 s. Por el plato de espuma para el celebrante: 4 L, 10s. A los hermanos de la congregación: 2 L, 2 s, 2. Al campanero: 13 s, 4. A los acólitos: 13 s, 4. Al manchador: 5 s, 4. Derechos de sacristía: 2 Ls. A los cinco asistentes: 3 L, 6 s, 5. A los pages: 2 L, 8 s. A los alguaciles: 2 Ls. A los cocheros del señor decano para convidar al Excelentísimo señor capitán general y señor regente vísperas y día, y darles gracias: tres duros. Por otro coche: quatro pesetas. Al monitor por gratificación: 16 s. Para ramilletes y enramada: 7 Ls, y por llevar la silla de la cathedral: 3 s. Todo consta por recibo del mismo Quiles e importa las referidas 35 L, 14 s, 11.

Otrosí: En 16 de dicho agosto a Josef Llazca, carpintero, por el tablado para la música, por colocar las imágenes en el nicho,

³⁴⁵ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 289 B-290. No consta de qué junta en concreto se trata; es más, el secretario al mencionarla deja un espacio vacío en donde debería aparecer escrito el día de su celebración. Por otra parte, la decadencia XV dice así: "El estatuto V previene que el Sr. decano pague la fiesta. Y en el día que los decanos son ricos será razón que se ponga en práctica. Verdad es que, considerando yo que aquellos antiguos abogados primeros no estaban tan sobrados como los del día, propuse en la junta general el contexto del estatuto 37, y todos ofrecieron 40 reales anuales, mientras quisieran darlos. En el día muchos no quieren, y yo soy uno de ellos..." Véase también caja 1, expediente 13, pág. 9.

componer el circo, traerlas y llevarlas, y limpiar las alfombras, onze libras, onze sueldos y uno, según su recibo del día 15. 11 L, 11 s, 1.

Otrosí: En 23 del dicho a Joaquín Gil, colector de la música de San Juan, por la fiesta de la Asumpta, según recibo del mismo día. Quarenta libras. 40 Ls.

Otrosí: En 25 idem al padre prefecto de la sacristía de la Real Casa Congregación, por la cera consumida dicha fiesta de la Asumpta, según recibo del día 23, pagué: doze libras, seis sueldos y nueve dineros. 12 L, 6 s, 9.

Otrosí: En 6 de septiembre a Roque Faenes, portero del Real Acuerdo: diez libras, según recibo de 18 del antecedente agosto por las asistencias y demás trabasos, que en él se expresan y se le acostumbran dar. 10 L, 00 s.

Otrosí: En 9 del mismo septiembre entregué a Francisco Quiles, por seis libras, tabaco para el predicador en la fiesta de la Asumpta, doscientos quarenta y tres reales de vellón, que componen en libras valencianas. 16 L, 2 s, 10.³⁴⁶

4º) Gastos de la fiesta de la Concepción.

Sobre el coste de esta fiesta, de que también habla, como hemos visto, el estatuto V, cabe decir lo mismo que lo dicho en el apartado anterior, si bien en este caso eran menos las ceremonias y el gasto era, por lo tanto, mucho menor. Para el año 1781 el resultado fue el siguiente:

Otrosí: En 10 de diciembre 1781 al padre Dr. don Juan Bautista Albors, prefecto de la sacristía de la Real casa congregación, por la cera consumida en el día de la Purísima para la comunión y asistencia de los acólitos: Una libra cinco sueldos y ocho, según su recibo del mismo día 10. 1 L, 5 s, 8.

Otrosí: En dicho día 10 a Francisco Quiles, por la mitad de su situado, que vencería en Navidad del mismo año: doze libras, diez sueldos, según libramiento de 4 del mismo diciembre. 12 L, 10 s.

Otrosí: En 13 del propio a Pedro Segarra, por la asistencia de los músicos a la misa y comunión del día de la Purísima, según libramiento del antecedente día 18: dos libras. 2 Ls.³⁴⁷

5º) Misas por las almas de los colegiales difuntos.

El estatuto XXX establecía que el decano mandara celebrar, cada año y a su costa, cien misas rezadas, mientras el colegio no tuviera rentas suficientes, pues de tenerlas se celebraría de ellas un aniversario general, como así se acordó en la junta ya vista de 20 de agosto de 1792, gracias al

³⁴⁶ A.I.C.A.V., caja 286, legajo 3º, págs. 27 y 28. Se trata de los asientos de la fiesta de este año, sin perjuicio de otros conceptos que no siempre aparecen o lo van haciendo con el paso de los años. Caso del evangelio, epístola, órgano, asistente en capa, cambrero, ropero, diácono, subdiácono, florero...

balance positivo de las cuentas de esos años. Sin embargo, parece ser que los decanos incumplían reiteradamente esta disposición, y así lo hizo constar en 1776 Berni y Catalá, en su decadencia tercera.³⁴⁷ También la junta particular de 6 de agosto de 1804 ordenó el puntual cumplimiento de este estatuto, mandando que los decanos que lo fueran en lo sucesivo hiciesen constar por medio de recibos haber ordenado celebrar estas misas.³⁴⁸

Este asiento aparece por primera vez en el legajo del año 1806-07.³⁴⁹ El coste era de unos 400 reales de vellón —26 libras, 11 sueldos y 3 dineros—. No obstante, deja de aparecer a los pocos años, a pesar de que los resultados de las cuentas continuaban siendo positivos.

6º) Gastos de impresión y papelería.

El impresor, como ya decía la junta particular de 3 de marzo de 1762, se nombraba para que "entienda en las impresiones correspondientes al colegio, sin salario y cobrando sus justos trabajos".³⁵⁰

Al igual que en el asiento de la fiesta de la Asunción, en algunos sumarios aparecen detallados todos y cada uno de los distintos gastos de impresión, mientras que en otros aparece tan sólo una cantidad total que después es desglosada en una separata. En el año 1803, por ejemplo, la factura presentada por el impresor ascendía a 475 reales de vellón, que se desglosaban de la siguiente manera: 75 reales en concepto de impresión de 350 listas de abogados; 64 por su encuadernación; 53 reales por 21 "mano de papel florete"; 18 por 50 pliegos de papel jaspe; 60 reales por 250 impresos de manifiestos, papel y cortar para el montepío; 60 por 1.000 recibos de contribución, papel y cortar; 45 reales por 1.000 recibos de misas, papel y

³⁴⁷ A.I.C.A.V., caja 286, legajo 3º, pág. 26 B.

³⁴⁸ A.I.C.A.V., caja 1, expediente 13.

³⁴⁹ A.I.C.A.V., libro 5, págs. 74-74 B.

³⁵⁰ A.I.C.A.V., caja 286, legajo de cuentas del año 1806-07, págs. 9 y 20 B. No obstante, la junta particular de 6 de agosto de 1804 había deliberado que los decanos que lo fueran en lo sucesivo cumplieren puntualmente con el estatuto XXX, haciendo constar por medio de recibos haber mandado celebrar de su cargo las cien misas, como lo había hecho el por aquel entonces decano. Y todo ello a pesar de que el colegio, durante esos años, tenía fondos suficientes para celebrar un aniversario general.

³⁵¹ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 8 B-9 B.

cortar; 40 por 500 esquelas para la fiesta de la Purísima; y otros 60 reales por 1.000 esquelas de ordenanza para el día de la fiesta de la Asunción.³⁵²

7º) Salarios.

El asistente-monitor era el oficio no colegial que más trabajaba y más obligaciones tenía para con el colegio. Su servicio continuo en la corporación le hacía tener derecho a un salario anual. Este salario se dividía en dos medias anualidades: la primera pagadera en Navidad, y la segunda en San Juan de junio. Hasta 1823, en que la Junta modifica sus derechos y obligaciones, cobraba 25 libras anuales de salario, además de lo que percibía por trabajos extraordinarios. A partir de este año cobrará 376 reales. Además, tenía derecho al cobro del cinco por ciento de todos los pagos que recaudase de los colegiales. En 1823 esta cifra se rebajará al cuatro por ciento.³⁵³

Durante los últimos años se constituyó un salario en favor del portero del cuarto que los abogados informantes tenían en la Audiencia. Se trataba de un salario mensual fijo de 20 reales de vellón. Hasta 1830 este cargo de portero lo desempeñaba el asistente, pero a partir de este año lo desempeñará otra persona diferente.

Otros oficios además del impresor, que, sin tener un salario fijo, cobraban por los servicios prestados al colegio eran los escribanos, los procuradores, los cocheros, los cereros, los amanuenses de la secretaría y la tesorería, los porteros de la Real Audiencia, etc. Estos últimos porteros cobraban todos los años. Así, tenemos años en los que al único portero que había se le llegaban a entregar 10 libras: 4 por "gratificación", 4 por la conducción de los bancos y alfombras, y 2 por la composición y adorno del tablado para la fiesta de la Asunción. Posteriormente, sólo aparecía un asiento que decía: "Lo son sesenta [reales de vellón] por la gratificación a los porteros de la Real Audiencia".

³⁵² A.I.C.A.V., caja 287, legajo de cuentas del año 1803-04, pág. 4.

8º) Entierros.

Según el estatuto XXVIII, el colegio debía hacerse cargo del sepelio de los colegiales que, muriendo tan pobres, no dejaban bienes suficientes para costear sus entierros. Este desembolso solía ser de alrededor de 10 libras ó 160 reales de vellón. No son muchos los asientos que aparecen bajo este concepto.

9º) Limosnas a colegiales, viudas y pupilos.

Las limosnas que la Junta concedía a los colegiados eran siempre con motivo de la enfermedad que les imposibilitaba para desempeñar su trabajo.³⁵⁴ A las viudas y sus hijos, para socorrerles por el estado de pobreza en que habían quedado, o para costear los gastos del entierro del marido o padre.

Hay que resaltar que todas estas limosnas, si bien abundaron en los primeros años, prácticamente desaparecieron durante el primer cuarto del siglo XIX, para volver a proliferar a partir de entonces, especialmente en favor de las viudas y huérfanos. Normalmente la cantidad era de 40 reales,³⁵⁵ y se solían conceder con motivo de las pascuas de Navidad. La junta de 10 de diciembre de 1832, en la que se concedió la limosna a las 7 viudas que lo solicitaron, acordó hacer lo mismo con todas las otras que lo solicitaran antes de las fiestas. En otras ocasiones se concedían con motivo de la celebración de un acontecimiento real: en 1784 por el feliz alumbramiento de la princesa de Asturias, y en 1802 por la visita de los monarcas a la ciudad. El primero de estos dos casos es diferente por cuanto que las limosnas no se concedieron de los caudales del colegio, sino de la recolecta que se hizo entre sus colegiados.

10º) Otros asientos varios.

De estos otros asientos, unos solían ser habituales o incluso anuales: el pago al trajinero por el traslado del arca del colegio a la casa del nuevo decano más viejo, y del armario de la tesorería y secretaría a la casa del

³⁵³ Aunque continuarán siendo muchas las ocasiones en que cobre el cinco por ciento. Véase la data de los últimos ejercicios económicos.

³⁵⁴ A.I.C.A.V., caja 286, legajo de los años 1791-92, recibos nº 10 y 11.

secretario entrante —estatuto XXXVI—; la formación de libros en blanco para las deliberaciones de la Junta; el alquiler de tartanas al servicio de los abogados, con motivo de las visitas semanales a la cárcel (a partir de 1834), etc. Otros asientos eran ocasionales o únicos: los gastos de la fiesta celebrada con motivo de la visita de los reyes en 1802; la limosna dada a los afectados de Orihuela por el terremoto de 1829; la que se dio a los afectados por el cólera morbo de 1832-33, etc.

A grandes rasgos, esta sería la distribución aproximada de los gastos:



De la estrechez en que se movía el colegio, motivada en gran parte por el retraso de los colegiales en el pago de sus cuotas, encontramos continuas manifestaciones en los libros de deliberaciones. El 15 de julio de 1773 declaraba el tesorero no haber suficientes caudales para los gastos de la próxima fiesta de la Asunción, por lo que la Junta acordó excusar todo gasto dispensable, empezando por retrasar la confección del traje del monitor que se había acordado en una junta anterior.³⁵⁶ En 1814 llegó a suspenderse esta

³⁵⁵ En ocasiones se concedieron limosnas mucho más cuantiosas. A Antonio Lorente 120 reales de vellón (junta de 21 de mayo de 1803), y a Eusebio Gascón 200 (30 de abril de 1807).

³⁵⁶ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 130 B-131.

fiesta por falta de fondos.³⁵⁷ El 10 de octubre del mismo año 1773, algunos oficiales se ofrecieron para pagar el manto de la Virgen —que se había quemado el día de su fiesta—, por no tener el colegio dinero, comunicándose este ofrecimiento a los oficiales del año anterior por si querían contribuir.³⁵⁸ En 1787 se acordó indagar en otros colegios sobre los medios de que disponían para su funcionamiento, ante el “deplorable” estado en que se encontraba el de Valencia por exceder los gastos a lo que se recaudaba. Este mismo año, y con la intención de evitar desembolsos superfluos, se llegó al punto de aplicar a los fondos del colegio las 30 libras que el decano pagaba por los refrescos que se servían a los concurrentes, en las juntas de proposición de oficiales y posesión de empleos.³⁵⁹ En el mismo sentido se orienta el escrito presentado por el tesorero, y aprobado en la junta de 25 de enero de 1823, en el que se proponía una reducción en varias de las partidas de la *data*. Entre otras, se acordó reducir los gastos en cera y las estrenas a porteros y alguaciles, así como una mayor conexión entre los honorarios de la secretaría y tesorería con los del montepío.³⁶⁰

Recibos

Es la segunda parte en que, a mi entender, se dividen los legajos de cuentas, en donde se encuentran los comprobantes de los asientos anteriores. Se trataba de un fajo de facturas, libramientos o certificaciones enumeradas, que acreditaban las salidas anotadas en la *data*, y en ocasiones también las entradas del *cargo*.³⁶¹ No obstante, muchas de estas certificaciones no se recogieron o, más posiblemente, se han perdido.

La mayoría de los recibos responden, en general, a alguno de los siguientes tres tipos que he podido distinguir (véanse en apéndices):

³⁵⁷ A.I.C.A.V., libro 5, junta de 21 de julio, págs. 207-208.

³⁵⁸ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 134 B-135.

³⁵⁹ A.I.C.A.V., libro 4, juntas de 30 de noviembre y 6 de diciembre de 1787, págs. 242-243. En esta última junta se acordó, además, que el tesorero y el secretario tomaran a su cargo los trabajos de escribanía de sus oficios, por lo que se ahorrarían 10 libras. Con motivo de la necesidad de evitar gastos superfluos, y ante el retraso en la contribución de los colegiados por causa de la reciente fundación del montepío, la junta de 10 de agosto de 1779 había acordado sustituir ese año el caballo de cuatro mulas para uso de los decanos en el convite de la patrona, por otro de sólo dos mulas; libro 4, págs. 169 B-170 B.

³⁶⁰ A.I.C.A.V., libro 6, págs. 48 B-50.

³⁶¹ El número suele aparecer en la esquina superior izquierda.

1º) El tipo más abundante de recibos es el que se refiere a aquellos libramientos del secretario dirigidos al tesorero para que librara a la persona especificada la cantidad referida.

En la parte superior se determina la cantidad, en la inferior aparece la firma del secretario, y en el margen izquierdo el destinatario acredita, mediante su firma y la expresión "recibí" u otra semejante, haber recibido el dinero del tesorero. Es en la parte central del libramiento donde el secretario ordena al tesorero entregar al acreedor la cantidad señalada, determinando asimismo bajo qué concepto. A continuación firma el decano y algunos oficiales, normalmente sólo los diputados primero y segundo, como establece el estatuto XXXIV. En ocasiones sólo lo hace el decano.

En algunos recibos de este tipo quien firma al margen es el monitor o mancipe que, a su vez, trasladará la cantidad al destinatario. Éste subscribirá un certificado del segundo tipo.

2º) El segundo tipo de recibos en importancia por razón de su número, es el que se refiere a aquellos recibos de cobro firmados por el destinatario del pago.

Se trata de unos sencillos recibos, en los que sólo consta la manifestación del destinatario acreditando haber recibido del tesorero una cantidad concreta por un determinado concepto. Al final del recibo firma el beneficiario y, normalmente a su izquierda, se escribe de nuevo la cantidad. En muchos casos el secretario también firma este recibo y deja constancia de la Junta que ordenó el pago.

3º) El tercer tipo de recibos engloba las solicitudes de limosna, bien de los colegiales impedidos para trabajar, en los que suplican socorro ante su enfermedad, o bien, y sobre todo, de las viudas suplicando limosna para ellas y/o sus hijos.

En el margen izquierdo de la solicitud el decano ordena al tesorero el libramiento de una determinada cantidad, firmando a continuación —estatuto XXXV—. Sin embargo, raramente se recoge el "recibí" del destinatario, sino que éste lo suele acreditar por documento separado del segundo tipo. En otras

ocasiones, la limosna la otorga el decano en documento aparte dirigido al tesorero, y firmado por el mismo decano, oficiales y secretario. Al final de este recibo acredita la viuda, con su firma, haber recibido la cantidad.

Cuadro de cuentas³⁶²

<u>Período</u>	<u>Cargo</u>	<u>Data</u>	<u>Alcance</u>
1761 ³⁶³	3.000 r.v.	3.277 r.v. 14 m.	- 277 r.v. 14 m.
1760-63	13.530	13.530	0
1763-64	6.300	5.370	915
1764-65	5.655	4.740	915
1765-66	6.030	4.620	1.410
1766-67	5.640	4.815	810
1767-68	4.995	5.010	- 15
1768-69	5.160	5.385	- 225
1769-70	4.410	4.860	- 435
1770-71	4.635	5.145	- 495
1771-72	4.920	5.400	- 465
1772-73	4.020	4.020	0
1773-74	4.425	4.800	- 375
1774-75			135
1775-76	4.710	4.710	0
1776-77			- 15
1777-78	4.080	4.230	- 150
1778-79	3.743, 2	3.956, 32	- 213, 30
1779-80	3.210	4.005	- 795
1780-81			- 795
1781-82	3.315	3.930	- 600
1782-83	2.670	2.925	- 240
1783-84	3.165	3.285	- 120
1784-85	2.490	3.270	- 780
1785-86	2.205	4.785	- 2.580
1786-87	2.610	5.805	- 3.240
1787-88	5.655	5.880	- 210
1788-89	3.133, 14	2.838, 12	295, 2

³⁶² Fuentes: A.I.C.A.V., cajas 285-289 y libros de deliberaciones 4-7. Hasta el ejercicio económico de 1787-1788 (salvo 1761 y 1778-1779) las cantidades venían presentadas en moneda valenciana: libras, sueldos y dineros; que he trasladado a moneda castellana: reales de vellón y maravedís, a razón de quince reales por una libra.

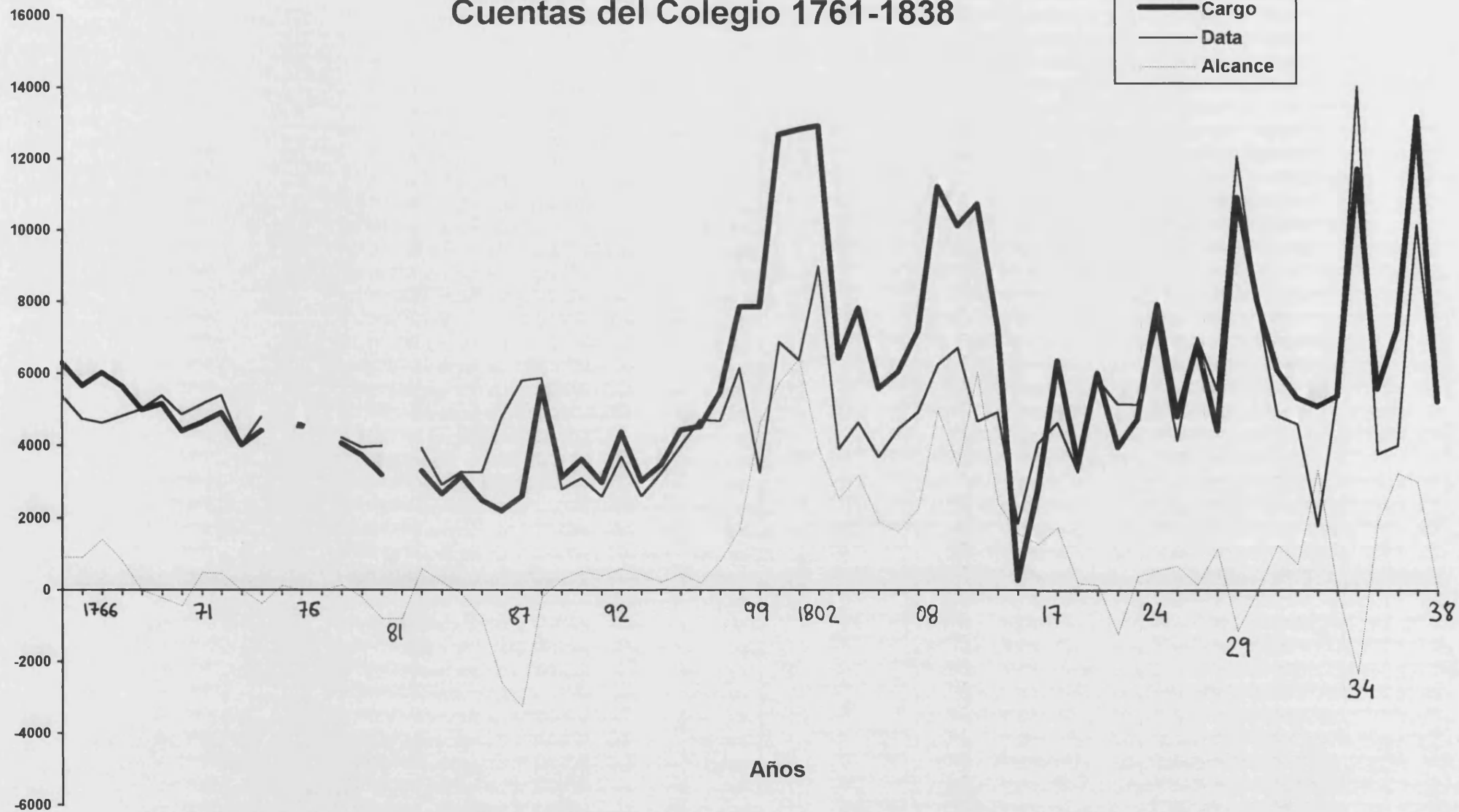
³⁶³ Cuentas presentadas por Berní y Catalá como consecuencia de los primeros ingresos y los gastos de fundación del colegio.

1789-90	3.629, 30	3.100, 12	529, 18
1790-91	2.989, 2	2.591, 30	397, 6
1791-92	4.379, 6	3.688, 2	591, 4
1792-93	3.035, 26	2.607, 6	428, 20
1793-94	3.479, 14	3.249, 20	229, 28
1794-95	4.431, 28	3.982, 21	449, 7
1795-96	4.529, 15	4.730, 22	201, 7
1796-97	5.500	4.687, 8	812, 26
1797-98	7.872	6.165, 14	1.706, 20
1798-99	7.881, 20	3.258, 12	4.623, 8
1799-1800	12.693, 12	6.890, 27	5.762, 19
1800-01	12.838, 16	6.398, 32	6.439, 18
1801-02	12.939, 18	9.007	3.932, 18
1802-03	6.460	3.909, 18	2.550, 16
1803-04	7.854, 13	4.654, 28	3.199, 19
1804-05	5.600	3.687, 10	1.912, 24
1805-06	6.080	4.452, 28	1.627, 6
1806-07	7.227, 6	4.955, 16	2.271, 24
1807-08	11.261, 2	6.263, 32	4.997, 30
1808-09	10.157, 30	6.744, 33	3.412, 31
1809-10	10.767, 30	4.689, 12	6.078, 18
1810-11	7.338, 28	4.937, 26	2.401, 2
1811-feb. 14	272, 32	1.846	1.573, 2
Mar. 14-sept. 14	2.812, 32	4.093	1.280, 2
1814-15			
1815-16			
1816-17	6.410, 20	4.657	1.753, 20
1817-18	3.512, 32	3.302, 26	210, 6
1818-19	6.063, 30	5.904, 28	159, 2
1819-20			
1820-21			
1821-22	3.980, 16	5.195	- 1.214, 18
1822-23	4.780, 32	5.170, 18	389, 20
1823-24	7.980.	7.425, 2	554, 2
1824-25	4.848, 14	4.165, 4	683, 10
1825-26	6.887, 12	7.049, 30	162, 18
1826-27			

1827-28	4.441, 6	5.593, 29	1.152, 23
1828-29	10.971, 28	12.109, 17	- 1.133, 23
1829-30	8.074, 14	8.070, 14	0
1830-31	6.156, 14	4.883, 3	1.273, 11
1831-32	5.373, 11	4.641, 29	731, 16
1832-may.33	5.139, 24	1.789	3.350, 24
May.1833-33	5.433, 18	5.433, 18	0
1833-34	11.760, 4	14.064, 2	- 2.303, 32
1834-35	5.627, 2	3.777	1.850, 2
1835-36	7.275, 32	4.018, 18	3.257, 14
1836-37	13.223, 18	10.200	3.023, 18
1837-38	5.263, 18	5.263, 18	0

Reales de vellón

Cuentas del Colegio 1761-1838



CAPÍTULO V: SOCORRO MUTUO. EL MONTEPÍO

Fundación del montepío y su primer reglamento

El primer reglamento del montepío del colegio de abogados de Valencia fue aprobado por real provisión del Consejo de Castilla de 20 de marzo de 1778. Con este reglamento quedaban aprobadas las ordenanzas que regirían el funcionamiento de esta sociedad de socorros mutuos, de que el colegio se había dotado para amparar a sus individuos y familiares más directos, frente a las necesidades y riesgos que en su título se recogían.³⁶⁴ Este reglamento estuvo vigente hasta que la real provisión de 21 de marzo de 1825 aprobó uno nuevo.

La fundación de montepíos fue una práctica muy extendida entre todas las clases sociales de la segunda mitad del siglo XVIII. Al igual que la hermandad de socorro, el montepío era una sociedad de socorros mutuos, si bien no respondía a ningún fin espiritual o religioso. A diferencia de la hermandad, que se basaba principalmente en el seguro de enfermedad y muerte, el montepío atendía, sobre todo, a los seguros de invalidez, vejez y, muy especialmente, al de supervivencia para viudas y huérfanos. Este movimiento mutualista surgió, bien a iniciativa oficial,³⁶⁵ bien a iniciativa privada. Aquéllos constituidos con la protección del estado y su apoyo económico; éstos, a imitación suya, con fondos particulares —al margen de que gozaran de la aprobación del Consejo de Castilla—. Aquéllos tratados por los autores y recogidos en las colecciones legislativas, éstos prácticamente

³⁶⁴ El nombre completo del reglamento es el de *Reglamento para el gobierno del montepío de viudas y pupilos de los abogados del Ilustre Colegio de la Ciudad de Valencia, y para socorrer a los individuos que padezcan alguna enfermedad temporal o habitual, que absolutamente les imposibilite la aplicación a la tarea literaria de la facultad, y no tengan otro modo de mantenerse con decencia; como también para costear los gastos de entierro de abogados pobres*. A.I.C.A.V., caja 387, legajo sin número.

³⁶⁵ La iniciativa de los montepíos oficiales se debió, fundamentalmente, al ministro de Carlos III, el Marqués de Esquilache, y fueron, por orden cronológico, los siguientes: el militar, el de ministerios, el de las reales oficinas, el de las minas de Almadén, el del cuerpo de oficiales de mar de la real armada, y el de corregidores y alcaldes mayores. Véase A. Rumeu de Armas,

desconocidos hasta fechas recientes. Entre los montepíos de iniciativa privada se distinguen claramente dos grupos: los que se referían a las clases más humildes de la sociedad, como labradores, artesanos y empleados, o simplemente los montepíos generales; y los montepíos propios de las profesiones liberales, entre los que encontramos el de abogados.³⁶⁶ El punto de partida, a la vez que anticipada conclusión, sobre la vida de los montepíos españoles, nos lo resume claramente Rumeu de Armas:

...los seguros sociales, en su mayor parte, no pueden subsistir sin la colaboración eficaz del Estado, ya sea dándoles seguridad, ayuda y garantía, ya dotándolos con cuantiosas rentas independientes de las cuotas o descuentos; los Montepíos que no alcanzaron esta ayuda arrastraron, en la generalidad de los casos, una vida lánguida y poco fructífera.³⁶⁷

El primer paso en la fundación del montepío de abogados de Valencia tiene lugar en el año 1776, cuando el por aquel entonces diputado primero, José Ignacio Alfonso, hizo presente, en la junta de 12 de octubre,³⁶⁸ que el colegio de abogados de la corte había fundado un montepío con su correspondiente real aprobación. Al igual que cuando hablábamos de la fundación del colegio, parece ser que el primer montepío de abogados también fue el del colegio de Zaragoza, cuyos estatutos datan de 30 de septiembre de 1771. A Zaragoza solicitó la Junta del colegio de Madrid un ejemplar de sus ordenanzas, en base a las cuales se redactó un proyecto de reglamento que se presentó al Supremo Consejo, y que, con leves modificaciones, fue aprobado el 31 de agosto de 1776.³⁶⁹ El reglamento de Madrid sirvió, de nuevo, como modelo a otros montepíos de abogados que se fundaron en el XVIII, además del nuestro: el de Granada, en 1778; el de Valladolid, anterior a 1779; el de Sevilla, en 1782; el de Salamanca, en 1788; el de Oviedo, en 1789;

Historia de la Previsión Social en España. Cofradías-Gremios-Hermandades-Montepíos, Barcelona, 1981, págs. 415-430.

³⁶⁶ A. Rumeu de Armas, *Historia de la Previsión...*, págs. 431-488.

³⁶⁷ A. Rumeu de Armas, *Historia de la Previsión...*, pág. 416.

³⁶⁸ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 152 B-153.

³⁶⁹ P. Barbadillo Delgado, *Historia del Ilustre...*, II, págs. 161-166, L. Del Campo Armijo, *El Real e Ilustre...*, pág. 51, y R. Pérez Bustamante e Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, *El Ilustre...*, págs. 235-239. Los estatutos del montepío de Zaragoza fueron pronto substituidos por otros de 1 de junio de 1782. A. Rumeu de Armas afirma, por contra, que el primer montepío de abogados fue el de Madrid; *Historia de la Previsión...*, pág. 463.

el de Calahorra y Santo Domingo de la Calzada, en 1792; el de La Coruña, en 1794; y el de Vizcaya, en 1799.³⁷⁰

Por estar el colegio de Valencia afiliado al de Madrid, José Ignacio Alfonso veía conveniente solicitar la extensión del montepío de la corte a los abogados de Valencia que quisieran incorporarse a él, contribuyendo con las mismas cantidades que disponían sus ordenanzas. Oída esta pretensión, la Junta decidió que el decano, Francisco Nadal, remitiera a Madrid los oficios correspondientes. Sin embargo, esta remisión no se llevó finalmente a cabo, puesto que el 1 de diciembre de 1776 el decano manifestó a la Junta haber recibido una carta del diputado tercero, José Villarroya, en la que "quitaba la esperanza" de que el colegio de Madrid admitiese en su montepío a los individuos de Valencia. Por este motivo, y para resolver sobre si convendría suplicar nueva real gracia para la formación de otro montepío, o si convendría hacerlo "inter volentes", se acordó en la misma junta escribir al colegio de Zaragoza, a fin de que hiciera saber el método que había seguido para la formación del suyo.³⁷¹

La siguiente noticia en el proceso fundacional data de principios del año 1777, cuando se dio comisión al maestro de ceremonias y al diputado tercero, Cristóbal Tarazona y José Villarroya, respectivamente, para que formaran los capítulos del montepío.³⁷² Remitidos a la corte, fueron aprobados por real provisión del Consejo de Castilla el 20 de marzo de 1778, y obedecidos y cumplimentados por el Real Acuerdo de Valencia el día 3 de abril del mismo año.

En la junta particular del colegio de 11 de este mes de abril se procedió a la designación directa del cargo de secretario de esta naciente institución,

³⁷⁰ A. Rumeu de Armas, *Historia de la Previsión...*, págs. 467-470. El montepío de Calahorra y Santo Domingo de la Calzada era de abogados, procuradores y receptores. Sobre el de Sevilla véase J. Santos Torres, *Apuntes para la Historia...*, págs. 47 y sigs., y sobre el de Oviedo M. Corripio Rivero, *Historia del Ilustre...*, págs. 91-100. Sobre el de Valladolid véase C. Martínez-Barbeito y Morás, *La Fundación...*, pág. 29. Este último montepío tiene como antecedente una hermandad de abogados fundada, a la par que el colegio, en 1592. Las ordenanzas de la hermandad de este año, reformadas en 1598 y 1618, estuvieron vigentes hasta 1667. El ingreso de los colegiados, al parecer, no era obligatorio. Véase en M. Torremocha Hernández, "Las actividades benéfico-asistenciales del Colegio de Abogados de Valladolid en el Antiguo Régimen", *Investigaciones Históricas* 16 (1996) 61-75.

³⁷¹ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 153-153 B.

³⁷² A.I.C.A.V., libro 4, juntas particulares de 19 de febrero, 22 de marzo y 7 de agosto de 1777, y 2 de abril de 1778, págs. 154 B-155 B, 157 B y 161 B.

recayendo en la persona de José Villarroya. Éste había sido convocado a esta reunión —junto con el exdecano Cristóbal Tarazona—, por lo que a continuación de la misma pudo celebrarse junta del montepío. En esta primera junta del montepío, considerada para todos los efectos como la junta fundacional, se señaló el mismo 11 de abril como día de la perfecta formación del montepío, entendiéndose este acuerdo por formal publicación del reglamento. Igualmente, se fijó este día como fecha de inicio para la cuenta de todos los plazos prevenidos en la real provisión de 20 de marzo.³⁷³ A partir de esta fecha, todos los asuntos relativos al montepío serían tratados en su junta.

El reglamento del montepío de Valencia era una copia del de Madrid, aprobado por el Consejo de Castilla por decreto de 31 de agosto de 1776. Sin embargo, la Junta del colegio de Valencia propuso dos modificaciones en este último, tal como explicaba la solicitud de aprobación del reglamento presentada ante el Consejo. En primer lugar, los individuos ya colegiados que quisieran incorporarse en el montepío de Valencia pagarían por cuota de ingreso seiscientos reales de vellón, y no los novecientos que se pagaban en Madrid, y que también pagarían los de Valencia que se colegiaran con posterioridad a la fundación del montepío. Y en segundo lugar, mientras que en el reglamento de Madrid se consignaban 3.287 reales de vellón anuales a los abogados que padecían accidente continuo o enfermedad habitual que absolutamente les impidiera para el ejercicio de la abogacía, con la condición de que no tuvieran otro medio para sostenerse dignamente, en Valencia esta cantidad se consignaría prescindiendo de los otros posibles medios de subsistencia que tuviera el abogado. No obstante, el Consejo de Castilla tan sólo accedió a la primera propuesta, ya que el párrafo primero del capítulo tercero del reglamento sí establecía, como condición para el cobro del seguro de invalidez, que el abogado "no tubiese modo ni medio alguno para la decente manutención suya y de su familia".

Según Rumeu de Armas, en Madrid el subsidio por enfermedad habitual o accidente continuo era variable, dependiendo de la categoría del abogado. El reglamento de Valencia no establecía esta diferencia, ni hay constancia de la misma en su solicitud de aprobación. Así, en Madrid los

³⁷³ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 162-162 B, y libro 8, págs. 1-3.

antiguos decanos recibirían 4.383 reales de vellón al año, los demás miembros de la Junta 3.896, los examinadores del colegio 3.409, y los restantes individuos 2.922.³⁷⁴ En Valencia todos recibirían 3.287 reales.

El reglamento estaba estructurado en capítulos y éstos en párrafos.

Los capítulos eran los siguientes:

1º) Fondos y caudales.

2º) Pensiones. Casos y circunstancias en que tienen lugar.

3º) Socorro de los abogados enfermos del montepío.

4º) De los entierros de los abogados individuos que carecen de medios para costearlos, aunque dejen bienes pero no caudales efectivos.

5º) De la Junta y de los protectores de viudas y pupilos.

6º) De la secretaría, contaduría y tesorería.

7º) Del arca en la que han de estar los caudales.

8º) De la modificación del reglamento.

Modificaciones del reglamento

El octavo y último capítulo del reglamento otorgaba a la Junta del montepío la facultad de

...añadir, reformar o corregir algo de lo establecido en este Reglamento, o aumentar (si hubiese fondos para ello), o disminuir (si faltasen o por no alcanzar los expresados) las cantidades de las pensiones.

Estas reformas sólo se podrían llevar a cabo si así lo acordaban las dos terceras partes de los individuos de la Junta. Además, se establecía que lo modificado sería "de igual fuerza y vigor que lo demás del reglamento".

En base a esta autorización se efectuarán varias reformas en el reglamento durante lo que restaba del siglo XVIII. Reformas que tendrían siempre como causa principal la crónica estrechez económica en que se movía la sociedad. Para su mayor validez y firmeza, la Junta del montepío solicitaría del Consejo de Castilla la aprobación de la modificación. Las más importantes

³⁷⁴ A. Rumeu de Armas, *Historia de la Previsión...*, pág. 464.

reformas fueron las de 10 de abril de 1786,³⁷⁵ 16 de febrero de 1788,³⁷⁶ y 4 de agosto de 1791.³⁷⁷ La primera de ellas centrada en la rebaja de la pensión de

³⁷⁵ A.I.C.A.V., libro 8, pág. 65. La reforma que se aprobó en este día ya fue presentada en la junta de 20 de agosto de 1785, en la que, además, se comisionó al diputado segundo, Joaquín Aparici y Bas, para solicitar su aprobación por el Supremo Consejo. Los nuevos oficiales surgidos de la elección de agosto de ese año consideraron que de la redacción del proyecto de reforma podrían derivarse algunas dudas e inconvenientes, por lo que el 11 de noviembre de ese mismo año (págs. 60-61) se acordó estudiarlo de nuevo. Lo que se hizo en la junta de 26 de noviembre —en cuya acta consta la redacción definitiva (págs. 61 B-63 B)—, en la que se practicaron ligeras modificaciones sobre el proyecto de 20 de agosto. Finalmente, fue aprobada la reforma en junta de 10 de abril de 1786. Cuatro eran sus puntos principales: 1) Reducción de 9 a 6 reales de vellón diarios de pensión para las viudas, huérfanos e inhabilitados por enfermedad permanente. 2) Los 900 reales de cuota de ingreso deberían pagarse de una sola vez, y sin concesión de plazo alguno. 3) Que los abogados que en lo sucesivo se incorporasen en el montepío y dejaran su domicilio de la ciudad de Valencia para trasladarse a otro pueblo, quedarían excluidos de sus beneficios. Pero si volvían a establecerse en la ciudad, sanos y expeditos para el ejercicio de la abogacía, se les admitiría pagando todas las tercias devengadas durante el tiempo de su ausencia. 4) Finalmente, la pensión de las hijas doncellas duraría sólo hasta los 25 años.

³⁷⁶ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 77 B-78, y caja 387, hoja sin número. Por su importancia creo interesante transcribir literalmente cada apartado de la reforma:

I. En el arca de tres llaves sólo se reserven por las urgencias que pueden ocurrir los 20 mil reales vellón que señala el § V del capítulo 1 del reglamento.

II. Los demás sobrantes: los atrasos que se cobren teniéndose por tales los vencidos hasta la tercia de onze de *deziembre* de 1787, inclusive, i lo que depositen por razón de ingresos los que se incorporen de oy en adelante, se destinen para empleos útiles al montepío que den renta proporcionada a las cantidades que se empleen a conocimiento y satisfacción de la Junta; cuya renta por ahora y hasta que se consiga la suficiente para la subvención sirva también para empleos.

III. A los admitidos al goze de la pensión del montepío sólo se les distribuya por ahora lo que anualmente se perciba de los contribuyentes por razón de tercias corrientes, como no exceda de lo que en el día logran de subvención.

IV. Lo que depositaran los contribuyentes desde onze de abril de este año 1788 en adelante se aplicará: en primer lugar al pago de tercias corrientes para que las viudas y demás que gozan de la subvención no sientan perjuicio si se destinan aquellas cantidades a cubrir los atrasos, y sólo sirva para pago de éstos lo que reste después de quedar satisfechas las tercias corrientes.

V. Se pase aviso por medio de copia de esta deliberación que se imprima a los incorporados en el montepío, permaneciendo en él para que se enteren de los capítulos que comprehende y puedan ponerse corrientes en sus atrasos; con inteligencia que si murieren quedando debiendo 480 reales vellón por las tercias de contribución anual, sean atrasadas o corrientes, o una sola por las de ingreso (estando fuera del tiempo que les señala de término el Capítulo 1º § 1 del Reglamento) no tendrán derecho los contribuyentes ni sus viudas ni hijos al goce del montepío, aunque no hayan sido requeridos por 1ª y 2ª vez, según se previene en el mismo Capítulo § 2; porque el aviso que se les pasará en virtud del presente ha de obrar y tendrá el mismo efecto que si se huviessen precedido dichos dos requerimientos.

VI. Por evitar la molestia que causa el pasar a efectuar el pago de la contribución anual en casa el thesorero, y tomar la razón de la contaduría y facilitar más la cobranza, se encargue a un solicitador la de corrientes y atrasos, a quien se tome cuenta todos los meses por el thesorero, contador y secretario, y para ello se le entregue un libro en el qual se anoten todos los incorporados que permanezcan en el montepío y la resta en que estén descubiertos con el blanco o vacío competente, donde el mismo contribuyente pueda subscribir, y la cantidad que entregue al solicitador (quien la admitirá como no bage de 20 reales vellón, y luego que se complete una tercia el mismo solicitador deberá recoger la carta de pago, intervenida por el contador y pasarla al interesado; por cuyo trabajo reportará un tres por ciento que ha de salir del mismo fondo.

viudedad y orfandad; la segunda en la mejora del cobro de las cuotas que los socios tenían atrasadas; y la tercera en la reducción de la cuota anual. De

VII. Anualmente se dará razón a los interesados en el montepío, por medio del secretario, de las entradas, salidas, empleos y enseres, formándose un estado por mayor para que a todos conste y se animen a contribuir por su parte a un establecimiento de Piedad decoroso i útil a los abogados de nuestro Ilustre Colegio."

Del día 26 de diciembre de 1789 consta la primera certificación que se libró a los interesados referidos en el capítulo VII de la reforma; véase B.U.V., *Manuscritos* 179, legajo 64.

³⁷⁷ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 90 B-91 B. He creído interesante, de nuevo, transcribir el texto de los diferentes apartados de la reforma, por las importantes modificaciones que conllevaron en las finanzas del montepío:

"I. Que la contribución de los 240 reales vellón anuales se reduzgan a ciento y veinte reales vellón, con lo que puede prometerse que sean más los contribuyentes, que en el día no llegan a una quinta parte de sus individuos, y las viudas, pupilos e impedidos logren mayor subvención, cuyos 120 reales vellón se depositarán por tercias anticipadas que han de tomar principio en 4 de enero de 1792 reformando en esto el § II del Capítulo I del Reglamento.

II. Para que no quede sin efecto la erección de este montepío, si a los que se hallan notablemente atrasados en los pagos que debieron hacer (que son la mayor parte de los incorporados en él) se les excluyera de él, se ha acordado: que el que se halle atrasado en los pagos que debía efectuar, si quiere tener derecho al goze de la pensión con que se subviene a las viudas, pupilos e impedidos, haya de depositar una tercia corriente al respecto de quarenta reales vellón, y otros quarenta por atrasos cada tercia hasta quedar satisfecha toda la deuda en que esté descubierto. De suerte, que juntándose tres tercias de contribución anual, o tres de las que ha de ir depositando por atrasos, si se imposibilita o muere sin aver pagado al día que vencieren no tenga obción él ni su viuda e hijos al socorro o goze del montepío.

III. Pudiendo acontecer que algunos, interrumpiendo el pago degen de continuarle, o no depositen los 40 reales vellón por tercias corrientes y los otros quarenta por atrasos; y quando se hallen accidentados o enfermos (de cuyas resultas recelen morir) aguarden a depositarlos, no se les admitirá entonces el depósito: por el contrario, si se verifica que de qualquier modo contraviniendo a lo dicho en aquel estado de accidente o enfermedad se le admitió el depósito de los atrasos, se tendrá por no echo, y no goze él ni su viuda e hijos de la pensión: sin que sea necesario que precedan avisos para los pagos conforme se prevenía en el Capítulo 1 § 2 del Reglamento (que en esto se reforma) porque el mismo plazo o tiempo en que deben efectuarse ha de servir de interpelación.

IV. Como el objeto principal de la erección del montepío aya sido el socorro a las viudas, pupilos e impedidos con alguna pensión decente, y ésta ha hecho ver la experiencia que no se puede lograr de pronto y hasta que tenga el montepío rentas suficientes al número de viudas o pensionistas, que en el día son ya trece y las que podrán juntarse, cuyas rentas no conseguirá si no se destina alguna parte de sus fondos a empleos útiles y que den la proporcionada a las cantidades que se empleen a conocimiento y satisfacción de la Junta, se deliberó assimismo: que por ahora y hasta que se logre la suficiente y que se estime necesaria para dicha subvención, se destinen para masa o bolsa de empleos los atrasos, teniéndose por tales los vencidos hasta todo el año 1791 y lo que depositen los que se incorporan en el montepío por ingresos. Y sólo se distribuya por tercias a las pensionistas lo que se cobre por contribución anual, y las rentas de los empleos hechos y que se hicieren en adelante, deducidos gastos y cargos del montepío. Y quando se verifique el caso de tener éste de fondo veinte mil libras, se repartan también a las pensionistas los productos de los bienes cedidos al mismo, según está dispuesto y prevenido en la escritura de cesión.

V. Si algún individuo contragese enfermedad o accidente que le imposibilite absolutamente poder trabajar, y por otra parte no tiene modo ni medio para la manutención, según se explica en el Capítulo III § I del Reglamento, mientras se verifique su necesidad se le haya de socorrer con seis reales vellón diarios por meses anticipados, aunque la pensión de las viudas y pupilos no llegue a esta cantidad. Pero si la de éstas fuese más crecida, se ha de socorrer a dicho impedido al mismo respeto que a los otros pensionistas.

VI. Si alguno solicitare la admisión en el colegio pasados algunos años desde que fue aprobado para abogado, se le admita con calidad de que el depósito de las tercias, así de

cualquier forma, las iremos viendo detalladamente cada una de ellas en su momento.

Ingreso

Tres eran las vías que tenían los colegiados de ingresar en el montepío. La sujeción a cada una de ellas dependía del momento en que el abogado había ingresado en el colegio. Además, las obligaciones pecuniarias que implicaba cada una difería ligeramente de las demás.

La primera de estas tres vías se recoge en el párrafo primero del capítulo primero. Se refería a los ya colegiados en el momento de la fundación del montepío. Para estos letrados, cuya incorporación a la sociedad era voluntaria, la cuota de ingreso ascendía a 600 reales de vellón, que se tenían que pagar en los tres primeros años a razón de 200 en cada uno de ellos. Además, cada uno debía contribuir con 240 reales de vellón al año, pagaderos por tercias de 80 reales, que vencían los días 11 de los meses de abril, agosto y diciembre. La junta de 17 de junio de 1778 aclaraba que estas tercias debían satisfacerse con respecto al último vencimiento. Por ejemplo, si se ingresaba con anterioridad al 11 de agosto, la primera tercia a pagar sería la de 11 de abril, sin posibilidad de prorrateo.³⁷⁸

Queriendo concretar los términos "después de algún tiempo" que aparecen en el párrafo tercero del capítulo primero, la junta del montepío de 11 de abril de 1778 acordó establecer el último día de junio como fecha tope, dentro de la cual podrían ingresar los colegiados bajo estas condiciones.³⁷⁹ Todo aquél que lo hiciera con posterioridad, quedaría sujeto a las condiciones

ingreso como de contribución anua, se entienda y note con respeto a las que correspondan al día en que fue recibido de abogado por el Real Consejo o Audiencia."

³⁷⁸ A.I.C.A.V., libro 8, pág. 6. Se establecen los días 11 porque, como ya hemos visto, este día del mes de abril de 1787 se designó como fecha para la perfección del montepío, a partir de la cual se contarían todos los plazos. De la misma manera, el día 11 de abril de 1787 quedó fijado como fecha a partir de la cual correrían los plazos de los tres años para ingresar los 600 reales de vellón aludidos (véase también junta de 2 de mayo del mismo año).

³⁷⁹ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 1-3. Así lo hacía saber a todos los colegiados José Villarroja en la comunicación que les libró el 30 de abril; B.U.V., *Varios* 234, núm. 60. En junta de 8 de mayo se resolvió comunicar esta medida a los individuos ausentes por medio de correo, cuando su

establecidas en la segunda vía. No obstante, conocemos al menos dos abogados que, incorporados posteriormente, tan sólo pagaron seiscientos reales. Se trata de Bernabé Antonio Grande y Gabriel Berenguer Cebrián, incorporados en 1779 y 1780, respectivamente.³⁸⁰ El primero por no encontrarse en Alzira al tiempo de la fundación del montepío, como así lo creía el secretario, sino en Madrid y posteriormente en Cuenca. Y el segundo, por no ser ya alcalde mayor de Chelva, sino de Villahermosa. De cualquier forma, y según manifestación de la junta de 12 de octubre de 1778, a esas alturas tan sólo se había incorporado una tercera parte de los colegiados.

En la misma junta de 12 de octubre de 1778 se llevó a cabo lo que constituyó la primera reforma del reglamento, con ocasión de los casos planteados por los letrados Blas Pons Saló y Joaquín Salelles Vilar. Ante la total libertad para incorporarse en el montepío —permitida en el párrafo tercero del capítulo primero—, e intentando evitar los abusos que al respecto se podían cometer, en esta junta se acordó que, si un individuo entraba en el montepío enfermo y moría de aquella enfermedad, no podría gozar de los socorros ni su viuda ni sus hijos. De la misma forma perdería la cantidad que hasta el momento hubiera depositado. Y lo mismo se establecía para el supuesto de que la enfermedad le imposibilitara para el ejercicio de la abogacía.³⁸¹ La real provisión del Consejo de 23 de junio de 1779 sancionaba esta reforma, y ordenaba que todos los individuos del colegio se incorporaran en el montepío en el término de cuatro meses, pasados los cuales no se les admitiría bajo ningún título ni pretexto.³⁸² Aun así también conocemos alguna excepción.³⁸³

La segunda vía de ingreso, regulada en el párrafo tercero del capítulo primero, se refería a aquellos abogados que, estando colegiados en el momento de la fundación del montepío, decidían no incorporarse al mismo hasta pasado algún tiempo —30 de junio de 1778—. Para estos colegiados la

paradero era conocido. En cuanto a los individuos de paradero desconocido se suspendían las diligencias.

³⁸⁰ A.I.C.A.V., libro 8, juntas de 15 de mayo y 17 de enero, respectivamente.

³⁸¹ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 8 B-9 B.

³⁸² A.I.C.A.V., libro 8, junta de 4 de julio de 1779, págs. 13-13 B.

³⁸³ Tal es el caso de Vicente Ballester, al que se le admitió en junta de 28 de noviembre de 1779, por tener su solicitud de ingreso presentada en la secretaría desde hacía varios días.

cuota de incorporación ascendería a 900 reales de vellón para fondo, a pagar en una sola vez, más los 240 anuales en las mismas condiciones que para los anteriores. Si bien, este último pago deberían aprontarlo desde el año en que quedó constituido el montepío, independientemente del momento en que efectuasen su incorporación.³⁸⁴

El 31 de octubre de 1779 la Junta corregía esta fórmula de ingreso, al posibilitarles pagar los 900 reales de cuota de entrada, al igual que a los demás abogados, en tres pagos anuales, contando el primero desde el 11 de abril de ese año 1779.³⁸⁵ A pesar de que, aunque menor, se trata de una modificación del reglamento, la junta en cuestión no hizo ninguna referencia al capítulo octavo ni a que la decisión constituyera tal reforma.

La tercera vía era la que debían seguir los que ingresaban en el montepío habiéndose colegiado con posterioridad a su fundación. Estos letrados, para los que la pertenencia al montepío se suponía obligatoria, debían aportar los 900 reales de vellón para el fondo como cuota de ingreso, pagaderos en los tres primeros años, a razón de 300 en cada uno, más los 240 anuales en los mismos términos que los anteriores. Ambas cuotas se modificaron posteriormente. La reforma de 10 de abril de 1786 estableció que los 900 reales debían pagarse íntegros en el momento de la incorporación, y sin concesión de plazos. Sin embargo, no consta en ningún momento que ningún abogado los pagara de una sola vez. La reforma de 4 de agosto de 1791 estableció una rebaja en la cuota anual de 240 a 120 reales de vellón, pagaderos por tercias anticipadas que principiaban el 4 de enero. De esta manera, muchos abogados sólo pagaron al montepío 348 reales de vellón en el momento de la incorporación —300 reales por la primera cuota de ingreso, 40 por la primera tercia de contribución anual, y 8 por el papel del reglamento—, desentendiéndose posteriormente de cualquier otro pago.

Y aquí aparece un dilema. Se trata de averiguar si la cuota anual se debía abonar desde el ingreso en el colegio, que parece lo lógico, o bien desde que el colegiado fue recibido como abogado ante los tribunales. El reglamento

³⁸⁴ El que la cuota de ingreso se tuviera que abonar de una sola vez y no en tres plazos, como en las vías primera y tercera, así como la cuota anual desde la erección de la sociedad, se puede entender como una forma de presionar a los abogados ya colegiados para que ingresaran en el montepío.

no dice nada al respecto, pero, al parecer, los libros de deliberaciones y los de matrícula se decantan, sorprendentemente, por esta segunda posibilidad. En estos casos, la primera cuota que devengaba no solía ser la del día 11 del mes correspondiente anterior a la fecha de recibimiento, sino la del mes posterior.³⁸⁶ La reforma de 4 de agosto de 1791 sí establecía expresamente, en su párrafo sexto, que los abogados que se colegiaran pasados algunos años desde su recibimiento deberían pagar desde que se recibieron.

Si alguno solicitare la admisión en el Colegio pasados algunos años desde que fue aprobado para abogado, se le admita con calidad de que el depósito de las tercias, así de ingreso como de contribución anua, se entienda y note con respeto a las que correspondan al día en que fue recibido de abogado por el Real Consejo o Audiencia.³⁸⁷

Otro problema se habría planteado si un letrado hubiera ingresado enfermo en el colegio. Por una parte, su alistamiento en el montepío era obligatorio, pero, por otra, ya hemos visto cómo la junta de 12 de octubre de 1778 había acordado que, si cualquier individuo que entraba en el montepío enfermo moría de aquella enfermedad, no podría gozar de sus socorros. Lo cierto es que la Junta no tuvo que pronunciarse en este sentido al no darse el caso. Este asunto nos revela la insuficiencia del reglamento, la inseguridad en que se movía la sociedad y, consiguientemente, la necesidad de improvisar decisiones según se fueran planteando las cuestiones.

La forma de admisión en el montepío, cualquiera que fuese la vía de ingreso, se consideró también en la junta fundacional. En ella se acordó que el secretario inscribiera en el libro de matrículas al abogado que acreditara haber pagado la primera tercia. Y que le inscribiera por antigüedad de depósitos y sin atender a la antigüedad que tuviese en el colegio. En base a este libro se imprimiría una lista anual de los individuos del montepío, por el orden de

³⁸⁵ A.I.C.A.V., libro 8, pág. 17 B.

³⁸⁶ Véase, por ejemplo, los casos de los abogados Nicolás Huguet, José Bellmonte, Manuel Morató, Vicente Armengol, Francisco Pallarés o Pascual Mayor, A.I.C.A.V., libro 4, juntas del colegio de 30 de julio y 22 de diciembre de 1783, y libro de matrícula del montepío nº 9, págs. 223, 228, 230, 232, 233, 236, 237. O los casos de Francisco de Paula Ruiz, Francisco Ventura Pinedo o Ignacio Navarro Pujasons, libro de matrícula del montepío nº 10, págs. 114, 126 y 130 (estos tres ingresaron en 1794).

³⁸⁷ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 90 B-91 B.

entrada en el mismo, que se repartiría al mismo tiempo que la de los individuos del colegio.³⁸⁸

En la junta de 16 de diciembre de 1780 se acordó que, de esta fecha en adelante, todos los abogados que se incorporasen en el colegio y se alistasen en el montepío debía ser con la precisa condición de residir en Valencia. En el caso de trasladar su domicilio fuera de la ciudad, debían dejar en ella sujeto de conocido arraigo que se obligara a contribuir a su debido tiempo, y al que se le pudieran hacer las interpelaciones oportunas con el mismo efecto que si se hicieran en la persona del interesado. De esta forma se entendería excluido del montepío y del goce de sus derechos, a todo aquél que se ausentara sin dar parte a la Junta.³⁸⁹ Esta decisión vino provocada, según la misma junta, por la constante práctica de los letrados de incorporarse en el colegio para poder ejercer la abogacía en esta ciudad, y de trasladar después su domicilio a las poblaciones de su naturaleza, para ejercer la profesión, o a otras en seguimiento de alcaldías mayores. Y ello sin dejar en el montepío noticias de su nuevo domicilio. De esta forma no se les podía requerir al pago de las cuotas atrasadas, con lo que, llegado el momento, solicitaban para sí el goce de la pensión, o bien lo hacían sus viudas o hijos, alegando que su no contribución fue debida a la ausencia de los requerimientos especificados en el párrafo segundo del capítulo primero. La reforma de 10 de abril de 1786 no sólo no se ratificó en esta postura, sino que aún la endureció más. A partir de ahora, todos “los abogados que se incorporasen en lo sucesivo” que por cualquier motivo dejaran de estar domiciliados en Valencia, quedaban por ese hecho automáticamente excluidos del goce de las pensiones y beneficios, de forma que si falleciesen o se imposibilitasen estando establecidos fuera de la capital, ni ellos ni sus viudas e hijos tendrían derecho a pensión alguna. No obstante, se admitía que

...si se regresare o volviese a establecerse en esta ciudad, volverá a ser admitido pagando las tercias devengadas en el tiempo de su

³⁸⁸ Pese a que la primera elaboración e impresión de la lista de los miembros del montepío fue ya acordada en la junta de 6 de diciembre de 1778, la primera lista de la que hay constancia en el A.I.C.A.V. es la del ejercicio 1827-28, en la que aparecen 37 individuos. Véase libros 85-88.

³⁸⁹ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 26-27.

ausencia, lo que deberá entenderse restituyéndose a esta capital sano y expedito para ejercer la abogacía.³⁹⁰

Ninguna de las tres vías de incorporación referidas eran aprovechables para abogados incorporados en otros colegios de España. Así se decidió en la junta de 28 de marzo de 1784, ante la solicitud de ingreso del colegiado sevillano Miguel María Martínez de Aparicio. Según el acta de esta junta, el establecimiento del montepío en Valencia lo fue sólo para los abogados de este colegio, sin extensión a otros. Y así se acordó teniendo en consideración que, pese a la incorporación por filiación que el colegio de Valencia tenía con el de la corte, tampoco admitía a los individuos de este último.³⁹¹

Riesgos

El montepío de Valencia, como el de Madrid,³⁹² aseguraba a sus asociados contra el riesgo de accidente continuo o enfermedad habitual —entiéndase invalidez—, así como a sus viudas y huérfanos contra el de supervivencia. Además, auxiliaba a aquéllos contra los riesgos de accidente repentino o enfermedad temporal, muerte y, ocasionalmente, vejez. Veamos cada uno de ellos a través del reglamento y de las actas de las juntas.

Supervivencia

El párrafo primero del capítulo segundo establecía una pensión de viudedad de 9 reales diarios, o lo que es lo mismo, 3.287 reales y 7 maravedís anuales, pagaderos por tercias vencidas de 1.095 reales y 22 maravedís cada una. Estas tercias vencían el último día de los meses de abril, agosto y diciembre. Si bien esta última, como se manifiesta en la junta de 19 de diciembre de 1801, se solía despachar en vísperas de la Navidad, para así

³⁹⁰ A.I.C.A.V., libro 8, junta de 26 de noviembre de 1785, págs. 61 B-63 B.

³⁹¹ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 45-45 B.

³⁹² A. Rumeu de Armas, *Historia de la Previsión Social en España...*, pág. 463. P. Barbadillo Dalgado, *Historia del Ilustre...*, II, pág. 163.

subvenir en mejor forma a las necesidades de estas fiestas.³⁹³ Según la comunicación que en 1811 remitió el colegio de abogados al ayuntamiento de Valencia para la formación del *Libro Padrón*, la media de beneficios profesionales de los ejercientes era, en ese año, de 3.215 reales; cantidad, curiosamente, muy similar a la de la pensión.³⁹⁴

Pero estas cantidades no permanecieron inmutables a lo largo de los años. En la reforma de 10 de abril de 1786 se rebajó a 6 reales diarios, que hacían un total de 2.190 anuales, en tercias de 730 reales, “por ahora y hasta que competentemente se mejore el estado de los fondos de este montepío y sus contribuyentes”.³⁹⁵ Y por la reforma de 16 de febrero de 1788 se ordenó —igualmente “por ahora”—, que no se repartiera más de lo que contribuyeran los colegiados que permanecieran en el montepío, a fin de que no se extinguieran sus fondos. Por ello, la tercia de agosto de ese mismo año sólo fue de 100 reales, pues como dice un asiento de la *data* del legajo de cuentas de ese año, por la contribución de 11 de abril sólo se habían recogido 1.200 reales. La tercia de abril de 1789 subió a 124 reales y la de agosto a 135. Las tres tercias conjuntas de diciembre de ese año y de abril y de agosto del siguiente sumaban un total de 489 reales, mientras que en el legajo del año 1790-91 esta cantidad se rebajará a 480, es decir, 160 reales por tercia, cantidad que permanecerá inmutable hasta el año 1825. Así pues, de una previsión inicial de 3.287 reales y 7 maravedís anuales, las dificultades económicas obligaron a rebajar esta cantidad hasta los sólo 480 reales.

El que las tercias fueran vencidas no lo decía el reglamento, pero así se acordó en la junta de 28 de noviembre de 1779, cuando se excluyó expresamente la posibilidad de que fueran anticipadas, tal y como lo solicitaba María Salvachuna, que fue la primera beneficiada.³⁹⁶ Además, al establecerse el pago diario, la primera y la última tercia de la pensión se prorrateaban, es

³⁹³ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 124-124 B. Esta particularidad también se extendía, según la misma junta, a las pensiones que cobraban los impedidos. Y ello a pesar de que el párrafo primero del capítulo tercero establecía que para éstos serían “pagaderos indistintamente por tercios anticipados.”

³⁹⁴ No obstante, esta cifra es simplemente orientativa. El año anterior el mismo colegio situaba la renta en 2.747 reales, rebajándose a sólo 631 en 1812. Véase apartado *Patrimonio de los abogados según el Libro Padrón de Valencia*.

³⁹⁵ A.I.C.A.V., libro 4, junta de 26 de noviembre de 1785, págs. 61 B-63 B.

decir, sólo incluía los días comprendidos entre el día del fallecimiento del abogado y el último del mes anterior al mes en que empezaba a contar la primera tercia completa —en cuanto a la primera tercia—, y desde el primer día de la última tercia hasta el día del fallecimiento del beneficiado —en cuanto a la última tercia—. ³⁹⁷

Tenían derecho a esta pensión las viudas y pupilos cuyos maridos y padres fallecieran desde el día en que se publicó el reglamento en adelante. El párrafo primero del capítulo primero especificaba que, si un abogado moría antes de cumplirse los tres años en los que debía aportar la cuota de ingreso, sus descendientes igualmente podrían cobrar la pensión, una vez se les retuviese de la misma lo que hubiere faltado por contribuir de esta cuota. Lo mismo constaba en el aviso que el secretario comunicó a los colegiales para que ingresaran en el montepío antes del último día de junio. ³⁹⁸ Y así ocurrió, no sin problemas, con José Guillén Buzarán, cuya muerte a finales de abril de 1778 resolvió el goce de la pensión en favor de sus cinco hijos y esposa —la anterior María Salvachuna—, pese a haber depositado en vida tan sólo la primera tercia de ingreso. Si bien hubo de ser el Consejo de Castilla quien les declarase comprendidos en este derecho, ante la inicial resistencia de la Junta del montepío. Resistencia que fundaba en el párrafo segundo del capítulo segundo, ya que Guillén Buzarán no había ingresado siquiera la primera tercia de contribución anual, que venció con anterioridad a su fallecimiento. ³⁹⁹

Fallecido el abogado, su viuda e hijos presentaban al protector que les correspondía —que era el encargado de la tramitación de la pensión, como después veremos—, un memorial en el que solicitaban el cobro de la pensión. En él se debía hacer expresión del día en que murió el marido y/o padre, los

³⁹⁶ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 18-19; véase también la junta de 10 de enero del mismo año, págs. 10 B-11.

³⁹⁷ A.I.C.A.V., libro 8, véase juntas de 11 de octubre de 1781, 21 de abril de 1784 ó 1 de febrero de 1787, para la primera tercia. Para la última tercia véase juntas de 21 de enero de 1787, 16 de junio de 1821 y 16 de diciembre de 1824. Por las dos últimas juntas se concedía a los herederos de la viuda fallecida la parte de la tercia correspondiente hasta el día de su fallecimiento. Por la primera, Francisco de Paula Colubi reclamaba los 222 reales que se le adeudaban a su esposa, Isabel Trínquer —viuda del abogado Baltasar Monserrat—, por el prorrateo de la última tercia, la devengada de 1 de septiembre hasta 8 de octubre, fecha en que ambos contrajeron matrimonio.

³⁹⁸ A.I.C.A.V., caja 387, legajo sin número. Firmado por 221 colegiales de un total de 226 que aparecían en la lista de 1778.

hijos legítimos que había dejado, sus nombres, edades y situación. Todo ello junto con las fes de bautismo de los hijos y la del casamiento, así como una copia de habilitación para el goce de la pensión, si el matrimonio se había celebrado después de la publicación del reglamento. Para el caso de quedar sólo la viuda sin hijos, no se necesitarían más documentos que los correspondientes al casamiento, y si quedaren sólo hijos y no mujer, el memorial se elaboraría en nombre de ella por el mismo protector, por el tutor, curador, o incluso por cualquier extraño, con, esta vez sí, todos los documentos. De obtenerse la pensión en este último caso, se cobraría por la persona al efecto designada por el padre en su última disposición y, en su defecto, por el tutor o curador que nombrare la justicia, a no ser que la Junta dispusiera otra cosa si lo estimaba conveniente y útil para los huérfanos. En cuanto a las tramitaciones a cargo del decano como protector, el párrafo cuarto del capítulo quinto especificaba, que las viudas e hijos de los ministros togados tan sólo estaban obligados a presentar una certificación de estar disfrutando la pensión que les correspondía por su ministerio, ya que se entendía que en su montepío en cuestión ya se habían dado las oportunas y justificadas pruebas. Ahora bien, si acudían antes al montepío del colegio que al del ministerio, en este caso sí debían aportar toda la documentación señalada.

Debido a la perenne escasez de fondos, y para evitar posibles fraudes, la Junta del montepío exigió en algunos momentos de las viudas y pupilos la acreditación de los requisitos que les hacían acreedores de la pensión. Y así por ejemplo, en la junta de 18 de abril de 1812, y con motivo de los desastres de la guerra, se acordó que el secretario exigiera de cada viuda una fe de vida, si no se presentaban al cobro personalmente, así como otra fe de mantenerse en el propio estado. Igualmente, en la junta de 19 de diciembre de 1818 se acordó, que para cualquier libramiento de cantidad el secretario exigiera en adelante, a las viudas y pupilos, la justificación de las cualidades prevenidas por el reglamento.⁴⁰⁰

Una vez entregado el memorial al protector, éste lo ponía a disposición del decano, y éste a su vez del secretario, para que diera cuenta a la Junta de

³⁹⁹ A.I.C.A.V., libro 8, juntas de 2 de mayo de 1778 y 10 de enero de 1779, págs. 3 B-4 y 10 B-11, respectivamente. Véase también caja 387, legajo sin número de 12 de mayo de 1778.

la situación del fallecido. Tras lo cual se decidía el otorgamiento de la pensión, si se estimaba todo correcto. Aunque el párrafo quinto del capítulo quinto habla efectivamente del secretario, lo habitual es que este cometido lo llevara a cabo el tesorero o, sobre todo, el contador.⁴⁰¹

A la pensión de supervivencia se le descontaban, en su caso, las cantidades correspondientes a las tercias de entrada o de contribución anual que el abogado no hubiera satisfecho.⁴⁰² Tercias que en la reforma de 4 de agosto de 1791 se establecieron, en cuanto a las anuales, en tres como tope, excluyéndose del montepío al abogado que llegaba a deber este número o más.⁴⁰³ Y ello a pesar de que del párrafo segundo del capítulo primero se entiende que se ordenaría la exclusión tras los dos requerimientos al pago posteriores a la primera tercia no abonada. En otras ocasiones, la compensación era propuesta a instancia de parte y convenida con la Junta.⁴⁰⁴ Y en otras ocasiones la Junta ordenaba que, para que la viuda pudiera tener derecho al cobro de la pensión, primero debía ingresar en el montepío todo lo adeudado por su marido.⁴⁰⁵ También se descontaban, en su caso, los gastos de funeral y entierro del abogado que el montepío pudiera haber sufragado.⁴⁰⁶

Con el tiempo, y sin duda debido al estado de penuria continuo del montepío, la Junta llegó a decidir que la pensión se cobrara, no desde el día del fallecimiento del abogado, como al principio, sino sólo desde el día en que la viuda pagara todo lo que su marido había dejado debiendo.⁴⁰⁷

Al goce de la pensión de supervivencia se podía llegar, o bien directamente, que era lo normal, o bien tras haber gozado el abogado de la misma pensión en vida, pero en concepto de accidente continuo o enfermedad habitual. En este caso se presentaba una segunda solicitud.⁴⁰⁸

⁴⁰⁰ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 140 B y 159-159 B, respectivamente para cada junta.

⁴⁰¹ A.I.C.A.V., libro 8, juntas de 9 de enero de 1804, 20 de marzo de 1808, 22 de agosto de 1814 u 11 de noviembre de 1815.

⁴⁰² A.I.C.A.V., libro 8, juntas de 28 de mayo de 1780, 1 de febrero de 1787, 3 de mayo de 1789 ó 23 de febrero de 1815.

⁴⁰³ A.I.C.A.V., libro 8, juntas de 8 de agosto de 1792, 28 de agosto de 1793 ó 29 de febrero de 1804.

⁴⁰⁴ A.I.C.A.V., libro 8, juntas de 27 de julio ó 19 de diciembre de 1821.

⁴⁰⁵ A.I.C.A.V., libro 8, juntas de 21 de abril de 1784, 20 de febrero de 1819, 22 de septiembre de 1820 ó 25 de mayo de 1822.

⁴⁰⁶ A.I.C.A.V., libro 8, junta de 6 de agosto de 1791.

⁴⁰⁷ A.I.C.A.V., libro 8, juntas de 12 de abril ó 19 de diciembre de 1821.

⁴⁰⁸ A.I.C.A.V., libro 8, juntas de 26 de noviembre de 1780 y 6 de agosto de 1791.

Cuando la viuda quedaba con hijos habidos con el abogado colegiado, o con otros que éste hubiese aportado de matrimonio anterior, percibiría por completo la pensión, quedando obligada a educar y sustentar a todos ellos hasta que dejaran de tener derecho (pár. 4º, cap. 2º). Esto sucedía cuando morían, o bien profesaban en religión, cumplían 20 años los varones, o tomaban estado las hembras⁴⁰⁹ —o bien llegaban éstas a la edad de 25 años tras la reforma de 10 de abril de 1786—. ⁴¹⁰ Es este supuesto el que comprende la mayoría de los casos tratados en juntas.

Si la viuda no tenía o se quedaba sin hijos, según los supuestos vistos en el párrafo anterior, y sin contar los que ella podría haber aportado de un matrimonio anterior, gozaba por sí sola de la totalidad de la pensión, a no ser que contrajera nuevo matrimonio (pár. 3º, cap. 2º).

En algunas actas consta cómo, al morir la viuda, los huérfanos del abogado presentaban memorial a la Junta, solicitando se les declarase continuar en el disfrute de la pensión, a pesar de que el reglamento no contemplaba este trámite. En estos casos se adoptaba la decisión favorable en la misma reunión, sin necesidad de que se estudiara el expediente por ningún oficial.⁴¹¹ Lo que de ordinario ocurría era que una vez fallecía la viuda y madre —o tomaba estado—, automáticamente recaía la pensión a partes iguales entre los hijos, si los había. Y conforme iban llegando éstos a alguno de los estados anteriormente aludidos, iba cayendo en los demás la parte de pensión que correspondía a aquéllos, aunque se redujera a uno sólo, que la gozaba por completo, hasta que se comprendía en uno de estos supuestos (párs. 5º y 6º, cap. 2º). También podía ocurrir que muriese la viuda con varias pensiones en su haber por cobrar. En este caso sus herederos también podían exigir su cobro.⁴¹²

Todo lo dicho hasta ahora tenía efecto siempre que el abogado hubiera pedido licencia al decano para contraer matrimonio, explicando las

⁴⁰⁹ El párrafo sexto del capítulo quinto aclaraba, con respecto al capítulo segundo, que "no se ha de tener por estado en los hijos, hijas y viudas si entran en religión hasta que profesen".

⁴¹⁰ Esta reforma, según el acta de la junta de 26 de noviembre de 1785, especificaba que sólo se aplicaría a las hijas doncellas "de los abogados que fallezcan de hoy en adelante".

⁴¹¹ A.I.C.A.V., libro 8, juntas de 16 de mayo de 1805, 9 de noviembre de 1806 y 22 de agosto de 1814.

⁴¹² A.I.C.A.V., libro 8, juntas de 16 de junio de 1821 y 16 de diciembre de 1824.

circunstancias de la novia y las de su familia. Los que no cumplían con esta exigencia no tenían derecho —ni ellos, ni sus viudas e hijos— a los beneficios del montepío, aunque hubieran contribuido a su fondo con todo lo ordenado. Así, en la junta de 18 de diciembre de 1779 se resolvió la expulsión de la sociedad de José Alfonso y Gisbert, por haber contraído matrimonio sin haber obtenido ni aún solicitado la referida licencia.⁴¹³ No obstante, la licencia del decano podía ser suplida por la concedida por el monarca, si se requería y obtuvo en su momento, como fue en el caso de José Mayans, alcalde del crimen de la Audiencia de Valencia.⁴¹⁴

El disfrute de estos derechos tendría lugar aunque el abogado dejara de trabajar como tal, y fuera ascendido al Ministerio u otros empleos honoríficos por cualquier carrera, o fuese promovido al estado eclesiástico, siempre que hubiese contribuido hasta su muerte de la misma manera que todos los demás abogados.

Accidente continuo o enfermedad habitual

Según el párrafo primero del capítulo tercero, gozaba de este seguro todo aquel colegiado que padeciese accidente continuo o enfermedad habitual, "que absolutamente le impidiese la aplicación a la tarea literaria de la abogacía, y por otra parte no tubiese modo ni medio alguno que le sufrague para la decente manutención suya y de su familia". También se le llama seguro de invalidez.

El socorro establecido para este supuesto ascendía a 3.287 reales de vellón —la misma cantidad que para el seguro de supervivencia, menos 7 maravedís—, que se correspondía a 9 reales diarios, pagaderos por tercias

⁴¹³ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 19 B-20.

⁴¹⁴ A.I.C.A.V., libro 8, junta de 22 de diciembre de 1783, págs. 44-44 B. Por una real orden de Carlos III de 23 de octubre de 1783, se prohibía contraer matrimonio a los individuos del colegio de Ocaña, o de cualquier otro colegio bajo protección real, sin la licencia del monarca, como se practicaba con los militares. Otra real orden de 7 de agosto del año siguiente extendía esta prohibición a los colegios de mujeres bajo protección real, así como a todos los individuos de ambos sexos que estuvieren en universidades, seminarios, o casas de enseñanza erigidos con autoridad pública. Por resolución de 31 de agosto del mismo año 1784 se exigía para contraer matrimonio, además del asenso paterno, otras licencias por delegación real: la del arzobispo, para los alumnos de los seminarios conciliares; la de los ministros del Consejo, para los alumnos de las universidades; y la de los ministros protectores o del gobernador del Consejo, para los individuos de los demás colegios o casas de enseñanza. El monarca se reservaba las

anticipadas —que no vencidas, como en el supuesto anterior—. Y ello sin la posibilidad de que esta cantidad pudiera rebajarse en cada tercia con lo correspondiente a la contribución anual a que todos los individuos estaban obligados, como se acordó en la junta de 20 de enero de 1780.⁴¹⁵ La reforma de 10 de abril de 1786 rebajó esta pensión de 9 a 6 reales diarios, como hizo con la pensión de viudedad y orfandad. Posteriormente, la reforma de 4 de agosto de 1791 estableció en su párrafo quinto que:

...mientras se verifique su necesidad, se le haya de socorrer con 6 reales vellón por meses anticipados, aunque la pensión de las viudas y pupilos no llegue a esta cantidad. Pero si la de éstas fuese más crecida, se ha de socorrer a dicho impedido al mismo respeto que a los otros pensionistas.⁴¹⁶

Lo que conocemos sobre este seguro procede de las actas de las juntas, ya que el reglamento sólo le dedica el párrafo primero del capítulo tercero. De la primera vez que se concedió —en favor de Joaquín Fontanelles—,⁴¹⁷ sabemos que, junto con el memorial que el abogado presentaba solicitando la pensión, se requería una certificación de facultativo que acreditara la enfermedad, además de los informes reservados que la Junta tomaba sobre la veracidad de la situación.⁴¹⁸ Concedida la pensión, el abogado debía presentar mensualmente certificación médica, por la que se acreditara mantenerse en la imposibilidad de ejercer la abogacía. Los sistemas de prorrateo y compensación funcionaban al igual que en el seguro de supervivencia.

Al goce de esta pensión se podía llegar bien directamente, como en el caso visto, o bien habiendo sido previamente socorrido el abogado por enfermedad temporal y haberse agravado ésta. En este segundo supuesto, a

licencias de los colegios militares, de los seminarios de nobles, y de su inmediata protección, tanto de varones como de mujeres. Véase *Novísima Recopilación*, 10, 2, leyes 11, 12 y 13.

⁴¹⁵ A.I.C.A.V., libro 8, pág. 21.

⁴¹⁶ A.I.C.A.V., libro 8, pág. 91 B.

⁴¹⁷ A.I.C.A.V., libro 8, junta de 22 de julio de 1779, págs. 15 B-16; y caja 391, expedientes de abogados impedidos admitidos, legajo nº 1.

⁴¹⁸ Aparte de este caso y el de Antonio Isnart, que veremos a continuación, sólo conocemos dos casos más: el de Vicente de Alagón —juntas de 24 y 30 de julio de 1798—, y el de Juan Andrés Iváñez —juntas de 28 de febrero y 24 de noviembre del mismo año, y 23 de febrero del siguiente—. Véase, asimismo, libro 12. Hay que decir que Vicente de Alagón no cobró nada en vida por este concepto, sino que lo hizo su hermana, como heredera, a su muerte.

la pensión a recibir por enfermedad habitual se le descontaban las cantidades percibidas hasta ese momento en concepto de enfermedad temporal, que, de hecho, se concederían a modo de anticipo. Es decir, que el momento a partir del cual se percibiría la pensión por enfermedad habitual dependería de la junta en que así se acordara; lo que, a su vez, invalidaba los posibles auxilios recibidos hasta el momento en concepto de enfermedad temporal. A Antonio Isnart, habiendo solicitado la pensión por enfermedad habitual, se le entregaron por vía de urgencia la cantidad de 600 reales en concepto de enfermedad temporal, sin perjuicio de que se resolviera lo conveniente sobre la pensión solicitada, y que se le otorgó posteriormente, al tiempo que se le descontaban de la primera tercia esos 600 reales.⁴¹⁹

Accidente repentino o enfermedad temporal

Al contrario que en los otros riesgos cubiertos por el montepío, las actas de las juntas apenas se refieren a éste. Durante la vigencia del antiguo reglamento tan sólo sabemos que se concediera en una ocasión; se trata del caso ya visto de Antonio Isnart.

Este auxilio aparece regulado en los párrafos segundo, tercero y cuarto del capítulo tercero. En ellos se establecía la posibilidad de que el decano mandase librar hasta 600 reales en favor del asociado que, atacado de cualquier accidente repentino o enfermedad temporal, no tuviese medios para hacer frente a estas adversidades ni mantener a su familia. Previamente, el decano debía asegurarse de la urgencia del caso y de las circunstancias de la enfermedad, especialmente a través de los informes médicos. Igualmente, y si lo consideraba oportuno, después del libramiento convocaría junta lo más pronto posible para tratar del asunto y tomar las medidas convenientes, dirigidas, entre otras cosas, a que no se aplicasen las cantidades a otros fines que los previstos.

Para cuando el abogado socorrido salía de la enfermedad y continuaba trabajando, el párrafo tercero le ordenaba reintegrar el importe de los socorros. Y ello en el plazo de un año, bajo el apercibimiento de que si pasado éste y

⁴¹⁹ A.I.C.A.V., libro 8, juntas de 12 de diciembre de 1784 y 4 de enero, 17 de febrero y 31 de marzo de 1785; caja 391, expedientes de abogados impedidos admitidos, legajo nº 2.

ocho días más no lo hubiera hecho, su viuda e hijos no gozarían de la pensión correspondiente, llegado el momento.

Finalmente, se establecía que si el abogado a quien se hubiese socorrido fallecía, o bien del referido accidente o enfermedad, o bien en el año señalado, el reintegro deberían ejecutarlo su viuda e hijos, si hubiesen quedado del difunto bienes suficientes después de satisfecho el funeral y entierro. El sistema de reintegro sería "por el medio de ir dejando en el Montepío y su fondo las pensiones que deberían percibir desde la muerte de su marido o padre respectivo, hasta la extinción de la deuda, sin que pretenda la viuda escusar esta calidad de reintegro". Una vez reintegradas las cantidades devengarían las pensiones a que hubiere lugar.⁴²⁰

El hecho de que este auxilio sólo se concediera en una ocasión, —con el agravante de que la cantidad que se recibió tuvo que compensarse posteriormente con la pensión de enfermedad habitual, puesto que no hubo mejoría—, nos hace pensar que nos encontramos ante un auxilio totalmente ficticio. Es posible que no fuera ésta la intención de los fundadores del montepío, pero la escasez de fondos obligaba. Por otra parte, no parece que la penuria de los abogados llegara a ser tan apremiante que les obligara a solicitar este auxilio, y más sabiendo que, de cualquier manera, se tendría que devolver la cantidad recibida. Además, tampoco parece que su trabajo se interrumpiera a causa de las enfermedades habituales. Entre otras cosas porque el XXXI de los estatutos del colegio establecía la asistencia a los colegiados imposibilitados para seguir su negocio, por enfermedad o por estar en prisión.

⁴²⁰ En este supuesto podría comprenderse el caso de Antonio Isnart, si bien su fallecimiento se produjo cuando la enfermedad ya no tenía la calificación de temporal, sino de continua.

Muerte

Este auxilio, que se regulaba en el capítulo cuarto, tenía dos modalidades. Según la primera —párrafo primero—, el decano podía librar hasta 600 reales vellón, con carácter de urgencia, para costear lo preciso para "hábito, cera, entierro y demás que se ofrezca", siempre que el abogado muriera tan pobre que no tuviera medios suficientes para hacer frente a estos desembolsos. De todo lo cual el decano se habría informado previamente. Posteriormente, la Junta aprobaría, de estimarlo conveniente, una ayuda mayor. En la segunda modalidad —párrafo segundo—, el decano gozaba de la misma facultad de librar la misma cantidad para los mismos gastos, pero con calidad de reintegro a los fondos del montepío, en las mismas condiciones que las establecidas para el supuesto de accidente repentino o enfermedad temporal. Este supuesto se daba cuando el fallecido, dejando bienes suficientes, carecía en ese momento de suficiente dinero en efectivo. Igualmente el decano tenía obligación de dar cuenta en Junta de lo efectuado.

Sólo en una ocasión la Junta concedió este auxilio: en favor del mismo Antonio Isnart, y acordando con posterioridad descontar los 600 reales de auxilio de la primera tercia de la pensión a que tenía derecho su mujer e hijas.⁴²¹

Vejez

No dispone el reglamento de párrafo alguno que haga referencia al genérico auxilio de vejez. Tan sólo se recoge algo parecido en una *Advertencia* que aparece al final del capítulo cuarto, cuando se dice que la Junta, a su "prudente arbitrio", y realmente a título de limosna, podría socorrer con alguna corta cantidad a aquellos abogados pobres de avanzada edad. Pero no a todos, sino sólo a aquéllos que gozaron de buen concepto durante el tiempo en que desempeñaron la abogacía. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el

⁴²¹ A.I.C.A.V., libro 8, juntas de 11 de abril de 1790 y 6 de agosto del año siguiente, págs. 85 B y 92, respectivamente. El acta de la primera junta, por la que el decano dejaba constancia de haber librado los 600 reales, no aclaraba si se concedían en calidad de reembolso o no, ya que,

concepto de vejez, tal y como lo entendemos hoy en día, todavía no existía en estos momentos.

Por todo ello, las solicitudes que podrían incluirse bajo este concepto fueron muy escasas. Es de suponer que los individuos no confiaran en su concesión. Así por ejemplo, el 23 de julio de 1785 no se accedió a la solicitud de Vicente Armengol, en la que pedía que se le asistiese con una subvención diaria por su avanzada edad y los accidentes que le suponían.⁴²²

En definitiva, nos encontramos, al igual que en el auxilio por enfermedad temporal, ante otro supuesto vacío por completo de contenido, además de arbitrario en cuanto a su concesión.

De todo lo visto podemos concluir que el montepío se limitó a cubrir y satisfacer las pensiones de viudedad y orfandad. Las demás atenciones previstas en el reglamento, incluido el riesgo de incapacidad habitual, tan sólo se cubrieron de manera excepcional. Tal vez la mayor dificultad en su acreditación y su regulación más genérica en las ordenanzas, posibilitaban a la Junta su denegación, que, además, siempre venía determinada por la permanente escasez de fondos.

La Junta del montepío y sus cargos

La Junta

Para la gestión y administración de los fondos del montepío se crea una junta como órgano central en donde discutir y adoptar las decisiones de la sociedad. A ella se le dedica el capítulo quinto del reglamento, aunque sus funciones aparecen diseminadas por todo el articulado.

La Junta del montepío se componía de los mismos cargos que la Junta del colegio, sólo que aumentada en un secretario. El párrafo primero establecía que se celebrara una cada mes, y se llevara a cabo en los mismos términos

según decía, se le concedieron de conformidad con los párrafos 1º y 2º del capítulo 4º, y del párrafo 4º del capítulo 3º.

⁴²² A.I.C.A.V., libro 8, págs. 57-57 B. No conozco ninguna otra petición de auxilio por este concepto.

que la del colegio, en casa del decano y en el día y hora que éste estableciera.⁴²³ En este sentido, por ejemplo, la junta particular del colegio convocada para el día 19 de junio de 1785 no pudo celebrarse por no estar presentes la mayor parte de sus vocales, ya que tan sólo habían acudido el decano, el maestro de ceremonias, el diputado tercero y el secretario. Por ello se pasó a celebrar junta de montepío, puesto que con la concurrencia de su secretario sí se verificaba estar presentes suficientes vocales.⁴²⁴ La junta de 21 de diciembre de 1813 se celebró asistiendo sólo cuatro individuos, que en realidad desempeñaban seis oficios: el decano, el diputado tercero —y tesorero interino—, el diputado cuarto —y secretario del colegio, también interino— y su secretario.⁴²⁵ Además, el motivo de la reunión era sacar dinero del arca de tres llaves para entregárselo al tesorero, y según el párrafo primero del capítulo séptimo, para la introducción, extracción o recuento de caudales debían asistir "precisamente" el decano —Vicente Martínez Bonet—, el contador —Eugenio Jordá, por enfermedad de Salvador Algarra— y el tesorero —Vicente Ximénez, en sustitución de José Ribera Gilabert—, o "los que por su indisposición tubieren sus respectivas llaves". En este caso la llave del tesorero la tenía Manuel Verdes.⁴²⁶ Por otra parte, es más que habitual que durante el mismo mes se celebrara más de una junta, o que entre dos juntas transcurriera más de un mes. O simplemente que durante algún mes no se celebrara ninguna.⁴²⁷ La mayoría de ellas se celebraban el mismo día que se celebraba la del colegio.

⁴²³ La junta de 11 de julio de 1825 se celebró en casa del diputado primero, Vicente Ferrando Segura, que substituyó al decano, José González, por su indisposición. Tomás Salelles, mientras fue diputado primero, no asistió deliberadamente a aquellas juntas en las que se trató de la exclusión del montepío de su hijo, Joaquín Salelles. En su defecto se le envió oficio en donde constaba la decisión adoptada de su expulsión. A.I.C.A.V., libro 8, junta de 11 de julio de 1779.

⁴²⁴ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 209 B.

⁴²⁵ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 142-142 B.

⁴²⁶ De cualquier manera, de la interpretación exacta del término "precisamente" no se puede deducir que la sola asistencia de estos tres oficios fuera suficiente para abrir el arca, sino que entre los asistentes debían encontrarse necesariamente estos tres.

⁴²⁷ En el mismo año de la fundación ya tenemos ejemplos de los tres supuestos. En el mes de mayo se celebraron cuatro juntas; de la junta de 25 de julio a la de 8 de octubre transcurrió más de dos meses; y durante los meses de agosto, septiembre y noviembre no se celebró ninguna. Es más, entre las juntas de 22 de agosto de 1805 y 9 de julio de 1806 transcurrió casi un año. A título de ejemplo, en 1780 la Junta se reunió en 12 ocasiones; en 1785, en 11; en 1790, en 5; en 1795, en 7 ocasiones; en 1800, en 5; en 1805, sólo en 2 ocasiones; en 1810, en 8; en 1815, en 12; y en 1820, en 6 ocasiones. Al igual que en la junta del colegio, los primeros años del siglo XIX fueron poco prolíficos en reuniones. De la misma manera, durante los años de la

Es por tanto la misma Junta del colegio la que, con algún oficio añadido, gestionará el montepío. Por ello, sólo trataremos de los oficios de la Junta del montepío con una función propia y diferente a la que desempeñaban sus oficiales como miembros de la Junta del colegio.

Secretario

Este cargo, así como los de tesorero y contador, aparece regulado en el capítulo sexto del reglamento. El secretario tenía en las juntas igual voto que los demás oficiales, y desempeñaba al mismo tiempo el oficio de celador. A su cargo estaba el archivo, y era el encargado de las funciones administrativas y de la tramitación de todos los asuntos en general. Daba cuenta a la Junta de los papeles o documentos que llegaban a sus manos, comunicaba los avisos y respuestas que ocurrían, hacía constar todos los acuerdos en el libro que llevaba al efecto, extendía libramientos... Como celador cuidaba, en general, de la puntual y exacta observancia de lo establecido en el reglamento. En este sentido, supervisaba las funciones y los libros a cargo del contador y del tesorero, dando cuenta a la Junta de cualquier anomalía que observase.

En la junta de 25 de julio de 1778 se acordó que en las funciones públicas a las que asistiera el colegio, el secretario del montepío ocupara el lugar inmediato al del secretario de aquél, con preferencia a los exdecanos,⁴²⁸ como apareció a partir de entonces en las listas. Y en la junta de 31 de enero de 1782 se resolvió que no fuera necesario que acudiera a todas las juntas del colegio en las que se admitían nuevos abogados, como hasta ese momento venía ocurriendo.⁴²⁹ Hasta entonces se seguía la práctica de admitir en el montepío a los abogados que se incorporaban en el colegio, según acuerdo de la Junta de este último, con lo que se seguía el inconveniente de que el secretario del montepío tenía que asistir a todas las juntas de admisión del colegio. A partir de ahora, las admisiones en el montepío se practicarán por deliberación del colegio, pasando su secretario certificación al de aquél para que lo anotara en sus libros, entregara a los nuevos individuos un ejemplar del

ocupación francesa se celebraron muy pocas juntas: tres en 1812 y dos en 1813; estas dos últimas en el mes de diciembre.

⁴²⁸ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 6 B-7 B.

⁴²⁹ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 35 B-36.

reglamento, y les hiciera saber las deliberaciones oportunas. Es decir, la admisión de un abogado en el montepío se entendería automática con su ingreso en el colegio. De hecho, el 15 de noviembre del año siguiente, el secretario del colegio remitió al del montepío una relación de todos los individuos del colegio incorporados en el montepío desde el 11 de abril de 1778 hasta el 11 de agosto de 1783.⁴³⁰

Mientras que el tesorero y el contador quedaban designados automáticamente en la junta de elección del colegio —como vamos a ver—, el secretario del montepío debía elegirse *ex profeso* en la misma junta. A falta de concreción por el reglamento del montepío, esta elección se llevaba a cabo de la misma forma que la de los oficiales de la Junta del colegio, es decir, se elegía uno de entre los tres candidatos propuestos por el decano. En cuanto a la elección del primer secretario, José Villarroya, se hizo el 11 de abril de 1787 "de conformidad" —es decir, sin elección—, y para que desempeñara el oficio hasta la siguiente junta de elección de cargos.

Al no decirse nada en contrario, el cargo de secretario fue desempeñado en más de una ocasión por el mismo abogado. Manuel Román, Vicente Climent y Nicolás Puigcerver ocuparon el puesto dos veces consecutivas cada uno de ellos, al haber sido elegidos los años 1780-81 el primero, 1820-21 el segundo, y 1824-25 el tercero. Por su parte, Pedro Barreda Centelles fue elegido cuatro veces —1816-19—. Pero el caso más llamativo es el de Juan Antonio Pérez Clemente, que fue elegido durante quince ejercicios casi consecutivos: desde la elección de 1787 hasta la de 1802. Tan sólo no fue elegido en 1797, y ello por pasar a ocupar el cargo de decano. En cuanto a las incompatibilidades, parece ser que tampoco estaban muy claras, puesto que este último secretario también desempeñó, al mismo tiempo, los cargos de diputado primero y segundo durante los ejercicios de

⁴³⁰ A.I.C.A.V., caja 387, legajo sin número.

1798 y 1799, respectivamente. En su ausencia era el secretario del colegio el que desempeñaba sus funciones.⁴³¹

Contador

Este oficio lo desempeñaba el secretario del colegio. Su función era llevar las cuentas de las entradas y salidas en los caudales del montepío, a través de los libros de *cargo* y *data*, respectivamente, que obraban bajo su poder. Estaba a cargo, además, de otros libros, a saber: el del haber de los pensionistas, donde constaba cada pensionista con sus derechos, el día en que empezó a gozarlos y la cuota; el de repartimientos, si se hiciesen; y el de socorros y funerales, donde se dejaba constancia de los gastos por estos motivos y de sus reintegros.

Para llevar correctamente estos libros, el contador debía intervenir todos los recibos que extendía el tesorero a los sujetos que le entregaban caudales, así como los libramientos que la Junta o el decano expedían contra el mismo tesorero.

Tesorero

El tesorero, que era el mismo que el del colegio,⁴³² recibía los caudales pertenecientes al montepío, extendiendo el oportuno recibo, de cuya razón tomaba el contador. Igualmente, pagaba todos los libramientos que contra él se expedían en nombre de la Junta o del decano, siempre que estuviesen firmados por el mismo decano y por el secretario, e intervenidos por el contador. Para todo esto el tesorero tendría en su poder iguales libros que el contador.

Como observamos, la verificación de la contabilidad en el Antiguo Régimen se llevaba a través de la dualidad de libros —contador y tesorero—, de manera que la igualdad en los mismos demostraba la exactitud de las

⁴³¹ Así ocurrió en 1806 y en 1810 (juntas de 9 de julio y 12 de abril, respectivamente). Sin embargo, en varias juntas durante los años 1811 a 1814, por indisposición de José Martín Cortés, que había sido nombrado abogado fiscal del juzgado privativo de artillería de Valencia, ejerció de secretario Pedro Brugués, que no ocupaba en ese momento ningún cargo. El 16 de diciembre de 1813 solicitó José Martín que se le admitiese su dimisión, sin que la Junta decidiese nada al respecto. Pedro Brugués fue elegido secretario del montepío en la siguiente junta de elección de cargos.

⁴³² A.I.C.A.V., libro 8, junta de 11 de abril de 1778, págs. 1-3.

cuentas. A partir de la reforma de 16 de febrero de 1788, y para aligerar el trabajo del tesorero, se designará un solicitador que se haría cargo de las cobranzas de las cuotas, tanto de corrientes como de atrasos.⁴³³

Según el párrafo sexto del capítulo sexto, en los quince días siguientes a la elección de oficios, el contador que dejaba de serlo debía tener liquidada, de acuerdo con sus libros, la cuenta del tesorero que también había dejado de serlo, para que cuando éste presentase la suya —lo que podía hacer durante todo el mes de septiembre (párrafo decimoquinto)— poderla reconocer y emitir el oportuno dictamen en el plazo de ocho días. En base a este dictamen, si la Junta aprobaba la cuenta presentada por el tesorero, la archivaba y le entregaba a éste el resguardo correspondiente.

No obstante, el incumplimiento total de este párrafo era lo habitual. Por una parte, porque la junta de elección de cargos no siempre se celebraba antes del día de Nuestra Señora de Septiembre;⁴³⁴ y por otra parte, porque tanto el tesorero como el contador solían tardar mucho más de un mes y ocho días, respectivamente, en presentar sus informes. Así por ejemplo, la junta de elección de cargos de 1802 se celebró el día 25 de septiembre. Las cuentas del tesorero se presentaron en la junta de 21 de enero del año siguiente, y el dictamen del contador el 20 de abril, día en el que la Junta manifestó su conformidad. En 1786 la junta de elección de cargos sí se hizo en su momento —el 28 de agosto—; sin embargo, el tesorero presentó las cuentas el 18 de octubre, y el contador su aprobación el 14 de diciembre.

En un papel existente en el archivo del colegio, de autor y destinatario desconocido, y que data de 12 de junio de 1818, consta la intención o voluntad de que el montepío tuviera un tesorero diferente al del colegio, aunque tuviera que compartir el mismo contador. El motivo era el desorden que se producía en las cuentas de la sociedad y, por lo tanto, la imposibilidad de conocer con exactitud su haber. El mismo papel exponía que en los libros de tesorería no constaban las cuentas de los años 1800-01, 1801-02 y 1802-03, ni estaban aprobadas las de los años 1810-11 y 1811-12.⁴³⁵ Finalmente, no fructificó esta

⁴³³ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 77 B-78.

⁴³⁴ A.I.C.A.V., caja 1, documentos fundacionales, 1748-1776, expediente 1.

⁴³⁵ A.I.C.A.V., caja 387, hoja suelta sin número.

propuesta. Es más, a partir de 1818, y con el mismo tesorero, lo que sí van a haber es dos contadores.

Protectores de viudas y pupilos

Regulado en el capítulo quinto, se trata de un cargo propio y específico del montepío. Su función era la tramitación de los memoriales en los que las viudas o pupilos solicitaban el auxilio o el goce de una pensión.

Los protectores eran cinco, y el cargo era desempeñado por los cuatro diputados y el decano. El diputado primero sería el protector de las viudas y pupilos de los abogados que hubieran sido decanos; el diputado segundo lo sería de las viudas y pupilos de los que hubieran sido oficiales de Junta, sin haber llegado al decanato; el diputado tercero sería el protector de las viudas y pupilos de los que hubieran sido examinadores o abogados de pobres; y el cuarto lo sería de las viudas y pupilos de los que nunca hubieran sido elegidos para ninguno de estos cargos referidos. Por último, el decano se encargaría de los memoriales de las viudas y huérfanos de los abogados que hubieran ascendido al ministerio o a otro empleo honorífico por cualquier carrera, o bien hubiesen sido promovidos al estado eclesiástico. Curiosa jerarquización en la distribución de las tareas en función de los cargos u honores que habían ostentado los abogados en vida; muy propio de una sociedad clasista como era la del Antiguo Régimen.

Tan pronto tuvieran noticia de la muerte de algún abogado, los protectores ofrecían a sus viudas y pupilos todos los oficios de protección y amparo, y les requerían para que les entregasen un memorial pidiendo la oportuna pensión. La función del protector no terminaba aquí sino que, una vez concedida la pensión o auxilio, debía remitir al decano, cada cuatro meses, una relación de las pensiones correspondientes a la clase de abogados de la que estaba encargado. Además, debía vigilar si sucedía cualquier supuesto que pudiera alterar o poner fin a su percepción, es decir, si los beneficiados morían, alcanzaban la edad prefijada, profesaban en religión o se casaban.

En todos estos procesos que hemos visto, los protectores gozarían de poder suficiente, que les habrían otorgado los interesados, para la cobranza de las pensiones. A no ser que los beneficiados designaran otro apoderado distinto o decidieran cobrarlas personalmente.

Por último, es interesante señalar que el reglamento no dedica ningún capítulo especial al decano. Sus funciones, como primer oficio que era, se regirían por las mismas reglas que las establecidas para las juntas del colegio en sus estatutos. Ya en concreto, y además de lo relativo a la protección de viudas y pupilos, y al libramiento de dinero, el decano sí tenía una función destacable, o al menos llamativa, recogida en el párrafo séptimo del capítulo segundo. Se trataba de la facultad de conceder licencia para contraer matrimonio a los asociados, en atención a las circunstancias de la novia y de su familia,⁴³⁶ bajo el apercibimiento de que el que se casare sin ella no tendría derecho a los beneficios del montepío. En 1779 tenemos el caso de Francisco Ferrer, que había pedido licencia para casarse. Estimando el decano que las circunstancias de la familia de la novia no eran suficientemente dignas, expuso el caso ante la Junta, la que el 28 de septiembre consideró finalmente que el decano sí debía conceder dicha licencia. La Junta dejó claro que, por corresponder esta decisión al decano, su intervención se había llevado a cabo sin que sirviera de precedente.⁴³⁷

Finanzas

Según el párrafo primero del capítulo séptimo, debía existir un arca en casa del decano, en la que se introducirían y de la que se extraerían todos los caudales que entraran o salieran de los fondos del montepío. De cada una de las operaciones que se practicara se dejaría constancia en un libro que dentro de ella debía existir. De esta arca existirían tres llaves, cada una de las cuales las tendrían el decano, el contador y el tesorero. Para cualquier transacción debían acudir los tres oficios o, en caso de indisposición, los apoderados en los que delegasen. Estos tres cargos serían responsables mancomunadamente de cualquier omisión o extravío que se pudiera producir, y el decano, especialmente, de los gastos indebidos y de cualquier otra

⁴³⁶ A.I.C.A.V., caja 387, hojas sueltas sin número.

⁴³⁷ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 16 B-17 B.

malversación. Tras cada elección de cargos, el arca pasaba a manos del nuevo decano, practicándose un recuento de los caudales que existían, en presencia de los cargos implicados en las cuentas, tanto salientes como electos.

El párrafo tercero del mismo capítulo disponía que este arca sólo se abriera al final de los meses de diciembre, abril y agosto, para que el tesorero depositara lo recaudado por las tercias de la cuota anual. En manos del tesorero sólo quedaría el dinero preciso para pagar las pensiones que vencieran en ese mes, "y alguna cantidad más, por si ocurre otro gasto necesario". Como veremos a continuación, el continuo estado en precario de la economía del montepío impediría el cumplimiento de este precepto.

De la misma manera que ocurría con el tesorero del colegio, el del montepío que dejaba de serlo presentaba a la Junta las cuentas de la tesorería durante el período del que había sido responsable. Estas cuentas nos proporcionarán una idea de cuáles eran las entradas y las salidas más habituales, así como la situación financiera de la sociedad a lo largo de los años. Como las del colegio, las cuentas del montepío se presentaban en un legajo en el que podemos diferenciar dos partes:

1ª) El sumario, dividido a su vez en dos partidas: la relación de los ingresos o *cargo*, y la relación de los gastos o *data* (también llamada *descargo*). Al final del sumario el secretario dejaba constancia de haber recibido la Junta el legajo, y de haberlo trasladado al contador del año anterior para su examen. Posteriormente, el contador manifestará su conformidad o disconformidad con las cuentas, y la Junta las aprobará o no, depositando — en su caso— los haberes que resultaran en el arca, y librando el correspondiente finiquito al tesorero.

De los legajos que han llegado hasta nosotros tan sólo en uno, el del ejercicio 1778-79, el contador, Francisco Valero, puso ciertos reparos a las cuentas del tesorero, Francisco Bruno Sebastián. Tras varios escritos cruzados parece ser que la disconformidad se debió a simples equivocaciones contables del tesorero. Uno de estos reparos era que el tesorero no cobraba los ocho reales que debían pagar todos los asociados por el reglamento que se les

debía entregar, a lo que éste contestó que no lo hacía puesto que no los entregaba, ya que no quedaban.⁴³⁸

2ª) Los recibos, tanto de pago como de cobro. La mayor parte son de pago y, en concreto, de libramientos del secretario dirigidos al tesorero para que entregara a una persona una determinada cantidad, en virtud del motivo que se aludía. Al final del recibo, y antes de la firma del secretario, aparecían las firmas de los componentes de la junta que había tomado la decisión del libramiento, así como la del destinatario, acreditando de esta forma su recibo. Mucho menos numerosos son aquellos recibos que libraba el destinatario —viuda o impedido—, manifestando haber recibido una cantidad en virtud de un determinado concepto, de lo cual el secretario tomaba razón en el mismo recibo. En cuanto a los recibos de cobro, destacan los que emitía el tesorero acreditando haber recibido de un asociado la cuota o cuotas especificadas. Al final de estos recibos, muy abundantes en el siglo XIX, en que ya aparecen impresos, el contador acreditaba haber tomado razón. También son poco numerosos aquellos recibos firmados por el secretario en los que dejaba constancia, de que en el día de la fecha el tesorero había hecho entrada en el arca de tres llaves de la cantidad resultante de la resta al *cargo* de la *data* —es decir, del *alcance*—.

A continuación haremos un estudio de los ingresos y gastos que aparecen en el sumario. También nos referiremos a las propiedades de que el montepío llegó a ser titular. Por ello diferenciaremos entre un activo y un pasivo.

Activo

Dentro de este apartado podemos diferenciar, a su vez, otros dos. Por una parte el dinero en metálico que anualmente entraba en los fondos del montepío y, por otra, los bienes inmuebles y los valores propiedad del montepío.

⁴³⁸ Tan sólo se le entregó y lo pagó Julián Calleja, que lo recibió de Joaquín Olano, en ausencia del tesorero.

1º. El primer grupo, que era el que quedaba reflejado en el *cargo* de los legajos, estaría compuesto, principalmente, por las cantidades que los asociados depositaban por diversos conceptos, y, muy secundariamente, por las rentas de aquellos bienes titularidad de la sociedad.

I. Ingresos personales

a) La cuota de ingreso, o sea, 900 reales de vellón pagaderos en tres tercias anuales de 300 reales cada una. Los abogados colegiados al tiempo de la fundación del montepío sólo debían ingresar 600, a razón de tres tercias de 200 reales. En ambos casos hay que tener en cuenta las modificaciones que en la forma del pago se operaron con los años.

b) La cuota anual, o sea, 240 reales de vellón pagaderos en tres tercias cuatrimestrales. Esta cantidad fue rebajada a 120 por la reforma de 4 de agosto de 1791, estableciéndose, además, que “se depositarán por tercias anticipadas, que han de tomar principio en 4 de enero de 1792, reformando en esto el § II del Capítulo I del Reglamento, ... con lo que puede prometerse que sean más los contribuyentes, que en el día no llegan a una quinta parte de sus individuos, y las viudas, pupilos e impedidos logren mayor subvención”.⁴³⁹

Tanto el apartado a) como el b) incluyen los pagos que efectuaban las viudas de las cuotas que sus difuntos maridos no abonaron en vida.

c) 8 reales de vellón, pagaderos en el momento del ingreso por razón de la copia del reglamento que se entregaba a cada nuevo individuos, pues así se estableció en junta de 25 de julio de 1778.⁴⁴⁰

Respecto a estos tres apartados, en ocasiones tan sólo se deja constancia de la cantidad global ingresada por todos los asociados, remitiéndose al libro de tesorería, en donde se especificaba la cantidad en concreto que cada uno había depositado, en virtud de qué tercia o tercias, así como la fecha del depósito. En otras ocasiones, sin embargo, todos estos

⁴³⁹ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 90 B-91 B.

⁴⁴⁰ No obstante, la cobranza de esta cantidad es bastante irregular, según consta en los libros de matrícula del montepío. Al principio son pocos los asociados que pagan, aumentando con los años hasta que, con el nuevo siglo, la totalidad de los abogados que ingresan en la sociedad pagan los 8 reales. Véase A.I.C.A.V., libros 9 y 10, años 1778-1787 y 1787-1824, respectivamente.

detalles aparecen en los asientos del *cargo*; un asiento por cada depósito, por cada individuo o por cada tercia.

II. Ingresos reales

Incluimos aquí las rentas que producían las diversas propiedades inmobiliarias y los valores de que era titular el montepío. Se trata de las rentas percibidas por el arriendo de las tierras de Burriana —a partir del ejercicio 1791-92, y que resultaban ser de 1.400 reales y 16 maravedís—; de las rentas de los bienes de la testamentaria de doña Cecilia Barber —a partir del mismo ejercicio, y de cantidad variable: 1.788 reales y 14 maravedís en 1792-1793 ó 2.560 reales dos años más tarde—; o de la pensión del empréstito del muelle —828 reales en octubre de 1820, y 722 con 28 maravedís en febrero del año siguiente—.

Hay dos tipos más de asientos en la partida de *cargo*, aunque no los podemos considerar como verdaderos ingresos. El primero es el de la cantidad del *alcance* en favor del montepío resultante del ejercicio anterior, y que se entregaba al siguiente tesorero. Este asiento sólo consta en el legajo de aquellos ejercicios en que la junta decidía no ingresar el saldo positivo del año anterior en el arca de tres llaves.⁴⁴¹ Y el segundo es el de las cantidades que se extraían de la misma arca cuando el tesorero no contaba con suficiente dinero para hacer frente a las pensiones, lo que sucedía con mucha frecuencia. Por contra, en otras ocasiones estas cantidades se entregaban directamente al tesorero por haber estado pagando las tercias de sus propios caudales.⁴⁴²

El párrafo quinto del capítulo primero preveía una nueva fuente de ingresos para el caso de que en el arca no hubiera fondos suficientes con que pagar el inmediato tercio de pensiones, cuya suficiencia se fijaba en veinte mil reales de vellón. Si no existía esta cantidad, la Junta tenía facultad para aumentar la cuota de cada individuo en la cantidad que estimase conveniente.

⁴⁴¹ La cantidad que se computa en el *cargo* no tenía por qué ser la misma que la del *alcance* del año anterior. En el ejercicio 1794-95, por ejemplo, el *alcance* ascendía a 15.695 reales y 20 maravedís, de los cuales la Junta decidió entregar al nuevo tesorero, Pedro Cebolla, sólo 4.781 reales y 8 maravedís; A.I.C.A.V., libro 8, junta de 16 de diciembre de 1795, pág. 111 B.

No conocemos cómo se hubiera llevado a la práctica esta disposición, ya que, a pesar de la continua escasez de fondos, el montepío nunca hizo uso de esta posibilidad. Es más, como hemos visto, lo que se hizo fue lo contrario: rebajar las cantidades para estimular a los colegiados a ingresar y continuar como asociados.⁴⁴³

2º. El segundo grupo del activo del montepío estaría formado por las propiedades y los valores que se fueron adquiriendo con los años. Según el acta de la junta de 24 de enero de 1789, lo que se pretendía con la compra de bienes inmuebles era afianzar la estabilidad del montepío, que las viudas y pupilos lograsen mayor subvención, y los contribuyentes rebaja en las cuotas.⁴⁴⁴ Estos bienes eran los siguientes:

a) 68 hanegadas de huerta en la heredad de Carabona, Burriana, vendidas a carta de gracia y pacto de retroventa en 1789 por el conde de Berbedel, como apoderado y procurador especial del Barón de Andilla, para lo que se emplearon 28.000 reales de vellón. Cantidad que se sacó del arca de tres llaves. Una vez examinadas, los peritos estimaron su valor en 220 libras por cahizada, considerando que se podría cobrar de cada una de ellas de 13 a 14 libras de arriendo anual.⁴⁴⁵

En la junta de 27 de septiembre de 1797, y al efecto de redimir la carta de gracia de estas tierras, se resolvió otorgar retroventa de las mismas en favor de Mariano Rubio, quien en la junta de 3 de mayo del mismo año había presentado escrito insinuando querer quitar dicha carta de gracia por el mismo precio de 1.859 libras, 7 sueldos y 6 dineros, en que las había comprado el montepío.⁴⁴⁶ Esta cantidad la satisfizo el propio Rubio en dos mitades, la una en metálico y la otra en vales reales —cuatro de 150 pesos cada uno y otro de 300—; en concreto 943 libras 8 sueldos y 9 dineros cada mitad.

⁴⁴² A.I.C.A.V., libro 8, juntas, por ejemplo, de 12 de enero ó 1 de septiembre de 1786.

⁴⁴³ Al parecer, la obligación de que hubiera al menos veinte mil reales en el arca no se cumplía. Así se desprende del párrafo cuarto de la reforma de 4 de agosto de 1791. Y ello a pesar de que la reforma de 1788, en su párrafo primero, reiteraba la necesidad de esta reserva.

⁴⁴⁴ A.I.C.A.V., libro 8, pág. 81.

⁴⁴⁵ A.I.C.A.V., libro 8, véase la misma junta anterior de 24 de enero de 1789.

⁴⁴⁶ A.I.C.A.V., libro 8, pág. 115.

b) Bienes provenientes de la herencia de María Cecilia Barber. Estos bienes, sitos en Valencia y su huerta, fueron otorgados en escritura a favor del montepío por Vicente de Alagón, abogado del colegio, como defensor del alma y único ejecutor de la última voluntad de los bienes de doña M^a Cecilia. Vicente de Alagón había sido nombrado judicialmente ejecutor por el fallecimiento de los ejecutores testamentarios originales. La referida señora residía y había muerto en Madrid, instituyendo por heredera a su alma y mandando que sus testamentarios se apoderasen de sus bienes y los invirtiesen en obras pías a su elección. Y así lo hizo Vicente de Alagón en favor del montepío, puesto que los testamentarios le habían otorgado poderes y facultades con respecto a estos bienes.⁴⁴⁷ Se trataba de los siguientes inmuebles:⁴⁴⁸

— Una casa en la calle Nueva de la parroquia de Santa Catalina Mártir de Valencia.

— Una casa alquería con su corral, caballería, andana y lagar, en la huerta y término de Albuixech, con nueve cahizadas de tierra regadío.

⁴⁴⁷ Como muestra de agradecimiento, el montepío estableció en favor de Vicente de Alagón un régimen especial de viudedad para cuando llegase el caso —junta de 17 de octubre de 1789—, que el 20 de abril de 1803 se concretó en 150 libras anuales, por tercias anticipadas, más la subvención ordinaria que gozaban las otras viudas. Estas 150 libras deberían extraerse necesariamente de las rentas que proporcionaran estos bienes.

⁴⁴⁸ A.I.C.A.V., libro 8, junta de 30 de noviembre de 1789, pág. 84 B; así como el libro 68 *Libro de cuentas tocante a las rentas de los bienes que fueron de D^a Cecilia Barber; y hoi del Monte Pío del Colegio de Abogados que deve obrar en poder del Sr^o. decano*, págs. 1-2. Esta cesión de bienes se hizo bajo una serie de condiciones —págs. 3 y 3 B—, entre las que cabe destacar las siguientes:

1^a. Que Vicente de Alagón fuera el administrador de estas fincas mientras viviese. En su defecto desempeñaría el cargo su cuñado, Antonio Pérez Clemente, y cuando éste muriese el decano de turno.

2^a. Se establecía en favor de M^a Francisca Vilar, viuda de Tomás Rius, apoderado de los primeros ejecutores, una pensión extraordinaria y por vía de limosna de cien libras anuales pagaderas por tercias anticipadas. Al margen de la pensión ordinaria que le pudiera corresponder.

3^a. Hasta que no hubiera veinte mil libras o pesos de fondo en el montepío, las rentas que proporcionaran los bienes se emplearían en capitales, como había dispuesto el capítulo segundo de la deliberación de 16 de febrero de 1788. Alcanzada esta cifra, se distribuiría el sobrante entre los que tuvieran derecho al cobro de pensión, hasta la cantidad que determinara el reglamento y deducidas cincuenta libras, que deberían quedar todos los años en depósito, para el empleo de capitales.

Según deliberación de 20 de marzo de 1793 (págs. 102-102 B), la Junta del montepío permutó 18 hanegadas de la partida de Cantavella con Pascual Esteve, a cambio de otras 15 libras de todo censo y tributo que este labrador tenía en Albuixech, contiguas a la alquería que allí tenía el montepío, más 300 libras por el exceso y valor de las tres hanegadas que había de más en las tierras de Albalat, siendo de cargo del propio Esteve el pago del luismo y demás que se adeudaran. A propuesta de Pascual Esteve, el montepío tomó esta decisión por reunir propiedades en el mismo término, ser el de Albuixech franco y realengo —mientras que el de Albalat era de señorío—, ser mejores tierras, pagarse más por arrendamiento en las primeras, y por construir con las trescientas libras una barraca con su andana para la seda.

— Otra casa en Albalat dels Sorells, en la calle del Camino de la Montaña, con tres hanegadas de tierra huerta contiguas a la misma.

— Cuatro cahizadas en total de tierra en la partida de Cantavella del término de Albalat.

c) El 15 de octubre de 1791 se constituyó empréstito al 6 % anual en favor del montepío, sobre 30.117 reales con 22 maravedís vellón (dos mil libras), concedidas por este montepío a la Real Junta de Consulado y Particular de Comercio de esta ciudad, al objeto de continuar la obra del muelle del grao. Cantidad que se extrajo asimismo del arca de tres llaves.

d) El 9 de diciembre de 1797 se compraron al comerciante Juan Antonio Pérez 25 hanegadas de tierra en Almusafes, por el precio de 1.455 reales, con pacto de retracto o carta de gracia. El 29 de febrero de 1804 otorgó la retroventa Juan Antonio Pérez Clemente, recibándose su precio en efectivo, con el que se negociaron cuatro vales reales en mayo —tres de 600 pesos y uno de 2100—. ⁴⁴⁹

e) Y, finalmente, según la junta de 30 de julio de 1798 consta haber negociado el montepío cuatro vales reales de 300 pesos cada uno al 4 %, habiéndose extraído del arca de tres llaves para su pago 11.575 reales de vellón con 9 maravedís. Y lo que faltaba hasta la suma de 993 libras 14 sueldos, que era el importe de los dichos cuatro vales, lo suplió el tesorero de los efectos que iba percibiendo. ⁴⁵⁰

Según consta en el informe remitido por la Junta al Real Acuerdo en 1820, en contestación a la petición presentada ante este tribunal por las viudas para el cobro de sus derechos, de todos estos empleos el montepío sólo podía contar con la renta del muelle, "porque de los vales en el día no se pagan los intereses, y los bienes cedidos por el testamentario de D^a. Cecilia Barber tienen la aplicación que se previno en la cesión y sujeción a los cargos y vitalicio, según lo manifestó el colegio en otro informe". ⁴⁵¹

⁴⁴⁹ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 115 B-116 y 127-127 B.

⁴⁵⁰ A.I.C.A.V., libro 8, pág. 118 B.

⁴⁵¹ A.I.C.A.V., libro 8, pág. 164 B.

Pasivo

El pasivo quedaba configurado por los diversos asientos de que se componía la partida de *data* o *descargo*. Se trataba fundamentalmente de las pensiones de enfermedad y, sobre todo, viudedad. Recogía además el salario de los impresores, libreros, agentes, escribanos de tesorería y contaduría, solicitador —o monitor—, y en general cualquier otro gasto material, libros, regalos, cartas, etc.

Aunque a simple vista de los balances finales podamos pensar que la tan aludida "desastrosa" situación de los fondos del montepío no era tal, no podemos olvidar que en muchas ocasiones la partida de *cargo* estaba formada, en gran parte, por cantidades extraídas del arca de tres llaves. Incluso, en alguna ocasión las tercias se pagaron de los caudales del propio tesorero.⁴⁵² De lo contrario, el déficit hubiera ido engrandeciéndose y acumulándose sobre los ejercicios siguientes.

Hasta 1783 no hubo grandes problemas, pues las recaudaciones eran superiores a los gastos. Pero a partir de este año las cosas cambiaron. De hecho, según un borrador encontrado en el archivo, en 1783 existían en los fondos del montepío 113.326 reales y 20 maravedís, cantidad que bajó en 1786 a 77.709 reales y 11 maravedís, y en el año siguiente a 55.532 reales y 16 maravedís.⁴⁵³ Así por ejemplo, de los 27.857 reales del *cargo* del ejercicio 1783-84 (cantidad ya inferior a la *data* —28.311 reales 33 maravedís—), 8.585 se habían extraído del arca, habiéndose recaudado por cuotas 19.272. En el ejercicio siguiente la *data* ascendía a 33.977 reales y 27 maravedís, mientras que de los individuos sólo se había recaudado 23.368 reales, por lo que se extrajeron del arca 16.640 reales. En el ejercicio 1786-87, la extracción del arca llegó a ser de 33.341 reales y 19 maravedís, pues la *data* era de 35.130 reales y 17 maravedís, y de los asociados tan sólo se había recaudado 8.656 reales. Bastantes más serían los años con parecidos resultados.⁴⁵⁴ Incluso, tenemos alguna manifestación de la Junta contraria a que de los fondos del

⁴⁵² A.I.C.A.V., libro 8, junta de 1 de septiembre de 1786.

⁴⁵³ A.I.C.A.V., caja 387, borrador sin número titulado *Representación al Real Consejo para que acuerde la Providencia que estime oportuna a fin de que no llegue el caso de la extinción del Monte Pío*.

montepío se extrajeran cantidades destinadas a suplir los gastos del colegio.⁴⁵⁵ Por el contrario, con los fondos de éste sí se cubrían necesidades de aquél, especialmente la pensión de viudedad durante la ocupación francesa.⁴⁵⁶

La pensión de viudedad

De todos los asientos de la partida de la *data* el más importante, por su profusión y por las cantidades que suponía, fue, sin duda alguna, el de la pensión de viudedad. A través de las decisiones que la Junta adoptaba sobre la concesión o no de este beneficio, podemos saber cuál era la situación en cada momento de la sociedad en general y de sus finanzas en particular. Es más, su prolífica concesión, las dificultades en su cobro, y las rebajas en la cantidad a percibir, caracterizaría e incluso condicionaría el funcionamiento y la marcha general del montepío. A continuación haré un repaso, a grandes trazos, de algunas observaciones y decisiones que se tomaron sobre este particular.

El 2 de mayo de 1778, todavía no hacía un mes de la fundación del montepío, ya vimos que se produjo el primer problema, cuando a María Salvachuna, viuda de José Guillén Buzarán, se le denegó inicialmente el cobro de la pensión por no haber aportado su marido más que la primera tercia de ingreso. Más interesantes fueron los casos de Blas Pons y Joaquín Salelles Vilar, que originaron la primera reforma del reglamento. En este sentido, una real provisión del Consejo de 23 de junio de 1779 declaró a sus viudas no comprendidas en el goce de la pensión, por entender que ambos abogados habían actuado con dolo, ya que, sabedores de la fundación del montepío, no decidieron su ingreso hasta que se vieron afectados por enfermedades incurables. Ingreso que el tesorero tuvo que practicar por no haber disposición alguna en el reglamento que lo impidiese. Al mismo tiempo, dicha provisión ordenaba al montepío pasar aviso a todos los abogados que aún no hubieran

⁴⁵⁴ Véase, por ejemplo, ejercicios económicos de los años 1785-1786, 1787-1788 ó 1795-1796.

⁴⁵⁵ A.I.C.A.V., libro 8, junta de 26 de agosto de 1823, págs. 173 B-174.

⁴⁵⁶ A.I.C.A.V., caja 387, legajo sin número, pág. 2. Asimismo libro 8, pág. 129 (año 1805), ó 140 y 140 B (años 1811 y 1812, respectivamente).

entrado en él, para que lo hicieran en el término de cuatro meses, pasados los cuales no se les admitiría bajo ningún pretexto.⁴⁵⁷

Por más razón se le denegó la pensión a Vicenta M^a Matoses, al haber aprontado ella misma, y ocho días después del fallecimiento de su marido, todas las tercias que éste adeudaba —y que eran todas, tanto de ingreso como anuales—.⁴⁵⁸ Tanto en este caso como en el anterior, y debido a la singularidad de los supuestos, la Junta decidió reintegrar las cantidades depositadas.

En 1785 el total de las pensiones de viudedad alcanzaba ya los 32.872 reales y 2 maravedís. A causa del impago de las cuotas por los colegiados, en la reforma de 1786 se tuvo que bajar la pensión de 9 a 6 reales diarios. La reforma posterior de 1788 —párrafo tercero— permitió que esta cantidad fuera variable, al establecer que dependiera de lo ingresado por los asociados. A estas alturas, como reconocía el párrafo cuarto de la reforma, el montepío ya debía tercias atrasadas, que se acordaron pagar sólo después de haber satisfecho las corrientes. Por el punto cuarto de la reforma de 1791 se acordó destinar "para masa o bolsa de empleos" los atrasos, teniéndose por tales los vencidos hasta todo el año 1791, así como las cantidades que se ingresaran por incorporaciones. Mientras, a las tercias corrientes se aplicaría sólo lo que se obtuviera por la contribución anual y por las rentas de los empleos hechos y que se hicieren en adelante, deducidos los gastos del montepío.

Si los colegiados se demoraban en el pago, también era habitual que las viudas cobraran con retraso. Hay que tener en cuenta que en 1783 eran 7 las viudas pensionistas, 13 en 1791, y 15 en 1805, mientras que los contribuyentes cada vez eran menos. En este último año tan sólo 16.⁴⁵⁹ El problema se agudizó con la invasión de los franceses. Según la junta del colegio de 21 de julio de 1814, se les debían las tercias desde que aquéllos se

⁴⁵⁷ A.I.C.A.V., libro 8, véase juntas de 8 y 12 de octubre de 1778, 10 de enero, 20 de marzo y 4 y 11 de julio de 1779, 21 de noviembre de 1780, 5 de enero de 1781 y 28 de octubre de 1782. Véase la real provisión en B.U.V., *Varios F/10*, núm. 6.

⁴⁵⁸ A.I.C.A.V., libro 8, junta de 26 de noviembre de 1780, págs. 24 B-25 B. Igual caso es el de María Bada Galinzoga, visto en la junta de 20 de julio de 1801. El 30 de noviembre de 1783 se vio un caso parecido cuando Vicenta Rey solicitó abonar lo que su marido dejó debiendo, a lo que la Junta no accedió, por no haber depositado éste en vida, y entre otras, las tercias de ingreso.

⁴⁵⁹ A.I.C.A.V., caja 387, legajo sin número, pág. 2.

apoderaron de la capital.⁴⁶⁰ Incluso, las viudas acudieron al Real Acuerdo en 1818, solicitando mayor puntualidad en el cobro,⁴⁶¹ sin que conociéramos efecto alguno de las provisiones dictadas por los tribunales. Así pues, los problemas continuaron siendo los mismos,⁴⁶² hasta que en el día en que se solicitó del Consejo la aprobación del nuevo reglamento, en 1825, se estaban debiendo dos anualidades enteras y parte de otra. En total, y desde 1778 a 1825, la Junta reconoció 34 pensiones de viudedad y orfandad, mientras que denegó, al menos, otras 15.⁴⁶³

Los montepíos de abogados de las otras ciudades corrieron parecida suerte al de Valencia. El de Madrid intentó la reforma de su reglamento en 1780, sólo cuatro años después de su aprobación, ya que desde el principio no pudo hacer frente a sus previsiones. En 1785 rebajó la pensión de 9 a 6 reales diarios, y en 1790 a sólo 3. En este año el número de viudas rondaba el centenar, mientras que se calcula que el 33 por ciento de las cuotas mensuales no se recaudaban. Del año siguiente data otro importante proyecto

⁴⁶⁰ A.I.C.A.V., libro 5, págs. 207-208. Véase también juntas de 26 de abril y 12 de diciembre de 1814, 24 de diciembre de 1816 ó 13 de agosto de 1818. En esta última junta se acordó librar una tercia atrasada a las viudas que se hallaban muy corrientes en el cobro, y dos a las más atrasadas.

⁴⁶¹ A.I.C.A.V., libro 8, juntas de 24 de septiembre, 8 de octubre y 21 de noviembre. Igualmente, 5 y 23 de enero del año siguiente.

⁴⁶² A.I.C.A.V., libro 8, juntas de 14 de enero y 12 de julio de 1823 ó 21 de febrero y 14 de julio de 1824 (esta última véase también en el libro 6 del colegio).

⁴⁶³ Las que gozaron de la pensión fueron, por orden cronológico, las viudas de los siguientes abogados (A.I.C.A.V., libro 12): Guillém Buzarán (resolución de junta de 10-1-1779, en base a real provisión del Consejo de 31-7-78, pues en un principio se le había denegado por junta de 2-5-78), Tomás Rius (junta de 28-5-80), Joaquín Fontanelles (26-11-80), Joaquín Blasco Domingo (20-1-81), Vicente Ferrer Peralta (17-2-81), José Liñana (11-10-81), Baltasar Monserrat (13-7-83), Tomás Villena -antes Salelles- (13-4-84), Joaquín Solsona (21-4-84), Pedro Abaás (31-3-85), Miguel Gordó Garneria (21-1-87), Francisco Ferrer (1-2-87, en base a real provisión del Consejo de 10-1-87, pues en un principio se le había denegado por junta de 3-6-84), José Berní (1-8-87), Andrés Puchalt (30-11-87), Nicolás Bas Borrull (3-5-89), Antonio Isnart (6-8-91), Juan Bautista Vergara e Ignacio Salvachuna (22-1-92), Ignacio Presencia y José Antonio Oller (10-7-93), Matías Perelló (8-3-94), José Ribera (20-11-94), Joaquín Olano (3-12-95), Francisco Bruno Sebastián (14-5-96), Joaquín Mariano Boil (16-6-96), Vicente Alagón (21-5-1803), Juan Bautista Calabuig (26-8-04), Carlos Sacristán (26-8-04), Juan Bautista Batifora (28-4-08), Juan Bautista Marau (16-6-09), Juan Bautista Adell (23-2-15), Pedro López Fernández de la Madalena (17-1-15), Eugenio Jordán (1820), Salvador Algarra (diciembre de 1825).

Las que no gozaron de la pensión fueron las viudas de los siguientes abogados: Blas Pons y Joaquín Salelles Vilar (4-7-1779), Tomás Morera (26-11-80), Vicente Herrero (30-11-83), Ignacio Botella (23-7-85), Ignacio Blanquer (18-5-86), José Alfonso Gisbert (21-1-87), Francisco Valero (24-7-90), Manuel Sisternes (22-1-92), Antonio Urgelles (26-4-92), Francisco Blasco (28-8-93), José Ibarra (20-7-1801), Mariano Manuel Rubio (29-2-04), José Lafuente (24-9-19) y Joaquín Fusell (16-12-24).

de reforma cuyas medidas más destacadas eran las siguientes: la suspensión por diez años del pago de pensiones a viudas y pupilos; la necesidad de contribuir durante diez años para poder gozar de las prestaciones, con pérdida de lo invertido de fallecer en el ínterin; que los que fuesen baja en el colegio pagasen un tercio más que los colegiados; o que el límite de las pensiones para las huérfanas se situara en los 30 años. Con la reducción a 200 del número de abogados que se produjo en la corte en 1794, la situación todavía empeoró más. De ahí que el nuevo reglamento que se presentó en 1796 subiera los derechos de ingreso de 100 a 1.200 reales, y la cuota anual de 240 a 360. Como vemos, justo lo contrario a lo que sucedía en Valencia, en que para incitar a sus individuos se rebajaba la cantidad de estas cuotas. Tras nuevas reformas, finalmente se aprobó un nuevo reglamento para Madrid en 1807, modelo para el de Valencia de 1825.⁴⁶⁴

Parecida fue la vida del montepío de Granada. En 1787 eran 13 las pensionistas, que consumían 42.900 reales, mientras que los ingresos de las cuotas de los 92 socios sólo llegaban a 22.080 reales. En el de Sevilla también se rebajaron las pensiones de 9 a 6 reales, a los cuatro años de aprobarse el reglamento, pues las 9 viudas que sostenía en 1786 consumían 29.584 reales, mientras que las contribuciones de los 118 colegiados sólo sumaban 29.520 reales. Al parecer, el montepío de La Coruña, fundado en 1794, conocía la precaria situación de los demás. De ahí que su reglamento contuviera importantes modificaciones con respecto al madrileño, del que se presentaba como una copia. La cuota de entrada era de 1.500 reales y se suspendía el pago de las pensiones durante seis años, al objeto de reunir el capital necesario para las futuras prestaciones. El de Salamanca parece que funcionaba como excepción frente a los demás, de manera que en 1825 se pagaban puntualmente las pensiones completas de las 12 viudas. Y ello fue así porque, entre otras cosas, las pensiones de invalidez y supervivencia eran inferiores: 1.800 reales al año. Las cuotas de ingreso también eran inferiores: 300 reales para los colegiados antiguos —de incorporación voluntaria— y 60 para los nuevos —de incorporación obligatoria—. Además, se establecía una

⁴⁶⁴ A. Rumeu de Armas, *Historia de la Previsión...*, págs. 465 y 466, P. Barbadillo Delgado, *Historia del Ilustre...*, II, págs. 165 y 166, y R. Pérez Bustamante e Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, *El Ilustre...*, págs. 237-239.

diferencia entre los abogados menores y los mayores de 30 años. Los primeros cotizaban desde su ingreso, y los segundos tenían que pagar todas las cuotas como si hubieran ingresado a esa edad. Además, durante los tres primeros años no se pagaría ninguna pensión⁴⁶⁵

Morosidad y expulsión de individuos

El eje de este asunto gira alrededor del párrafo segundo del capítulo primero del reglamento cuando, con respecto al impago de las contribuciones anuales, dice así:

...con apercivimiento que si requerido primera vez por el secretario del Monte-Pío, quien lo certificará después de pasados ocho días, y segunda de allí a otros ocho, no aprontase la respectiva cantidad de cada plazo, no tendrá derecho al Monte-Pío ni su viuda e hijos y se le escluirá de la lista...

El problema fundamental del montepío durante la vigencia de su primitivo reglamento fue, como ya sabemos, la permanente morosidad en que incurría la mayoría de sus asociados, especialmente aquellos para los que su incorporación era imperativa, es decir, los colegiados con posterioridad a su fundación. El número de viudas pensionistas que sobrevino inmediatamente a la fundación, la generosa pensión con que en un principio se las socorría, y la consiguiente indiferencia general con que los colegiados miraban la sociedad, hicieron que ésta se encontrara en un permanente estado de precariedad. La única forma de evitarlo era, indudablemente, mediante el cumplimiento por parte de los individuos de sus obligaciones pecuniarias. Y la mejor forma para obligarles era sancionando su incumplimiento con la expulsión del montepío, previos los requerimientos oportunos.

La junta de 18 de diciembre de 1779 y el párrafo arriba referido establecían que, pasados los ocho días del vencimiento de cualquier tercia de las anuales,⁴⁶⁶ el contador pasaría al secretario una lista con todos los

⁴⁶⁵ A. Rumeu de Armas, *Historia de la Previsión...*, págs. 467-68. Para el de La Coruña véase C. Martínez-Barbeito y Morás, *La Fundación...*, pág. 29.

⁴⁶⁶ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 19 B-20. Aunque tanto esta junta como el párrafo referidos hablan solamente de la contribución anual, hay que entender que se refieren también a las cuotas de ingreso hasta la reforma de 1786, en que se prescribió que los 900 reales se tuvieran que abonar en un solo pago.

individuos que no hubieran pagado, a fin de que éste pudiera practicar el primer requerimiento. Pasados ocho días más se repetiría nueva lista y nuevo requerimiento, tras el que se procedería a la expulsión, si no se pagaba en el plazo de otros ocho días. Pero con la excepción de aquéllos que, por su absoluta pobreza, no pudieran efectuar los pagos, aunque según el párrafo segundo del capítulo primero, "tampoco tendrán derecho al Monte-Pío su viuda e hijos". De esta expulsión se dejaría constancia en los libros de tesorería y contaduría. En cuanto a los domiciliados fuera de la capital, se les escribiría para que designaran sujeto en ella que efectuara los pagos, y con quien se entendieran los avisos y requerimientos. En su defecto, serviría de aviso formal y prueba la certificación que extendiera el secretario de haber escrito y dirigido la carta al sujeto por el correo ordinario.⁴⁶⁷

La junta de 7 de agosto de 1781 introdujo una importante novedad: la exclusión de la lista del montepío supondría, además, y en contra de lo que creían los abogados, la exclusión también del colegio.⁴⁶⁸ Sin embargo, cuando se decidía una exclusión del montepío se solía acompañar de la frase "sin perjuicio de la resolución que se acordare en cuanto a su subsistencia en este Colegio", u otra similar. Por lo que la expulsión de éste es más que dudosa. Al menos no hay pruebas claras de que se produjera ninguna. Es más, los individuos que fueron expulsados del montepío continuaron saliendo en las listas del colegio.

Como es lógico, las expulsiones del montepío por impago de cuotas no se hicieron esperar. La primera se produjo el 10 de enero de 1779, recayendo en el abogado Pablo Font, quien previamente había manifestado su voluntad de no continuar en el montepío.⁴⁶⁹ En 1781 tenemos la importante junta de 12 de diciembre, en la que se decidió la expulsión de 24 abogados.⁴⁷⁰ El mismo

⁴⁶⁷ A.I.C.A.V., libro 8, junta de 16 de diciembre de 1780, págs. 26-27. En esta junta se decidió expulsar del montepío a aquellos abogados no residentes en la ciudad que en el plazo de 30 días no cumplieran con lo determinado en la junta de 18 de diciembre de 1779.

⁴⁶⁸ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 31 B-32.

⁴⁶⁹ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 10 B-11.

⁴⁷⁰ De estos abogados expulsados 4 lo fueron por manifestar no querer continuar en el montepío —Luis Vicente Moya, Juan Francisco Longás, Fernando Vicente Alfonso y José González—; 4 más por haber recibido la segunda carta de aviso sin devolverlas con nota de haberla visto —Francisco María Basco, Bernando Sulroca, Vicente Talens de la Riba y Tomás Usurralde—; y 16 por haber notado haber recibido la segunda carta sin cumplir con los pagos pertinentes —Tomás Bohígues, José Codina, Joaquín Fuertes, Pablo Grau, Vicente Herrero,

día se decidió consultar al Supremo Consejo sobre si la exclusión de la lista, y consiguientemente de la abogacía, debía entenderse para todos los abogados, o sólo para los incorporados en el colegio tras la fundación del montepío.⁴⁷¹ La misma junta de 12 de diciembre decidió, además, conceder prórroga a otros 15 abogados, hasta el día de Navidad del año siguiente, para que pudieran pagar lo adeudado, por haber manifestado no poder cumplir con los pagos, pero ser su voluntad continuar en la sociedad.⁴⁷² Esta salvedad se concedió con la condición de que estos individuos no tendrían derecho a los beneficios del montepío si ocurriera el hecho que los originara en el período de tiempo concedido para pagar, o en el término de un mes después de haber satisfecho todo lo adeudado. No obstante estas exclusiones y prórrogas, en juntas posteriores se permitió el reingreso y se otorgaron nuevas prórrogas, bajo la condición referida.⁴⁷³

En 1784 el impago de las cuotas era tan general, y los requerimientos surtían tan poco efecto, que en la junta de 14 de noviembre se comisionó a Carlos Sacristán para que investigara sobre la práctica con que el montepío del colegio de Madrid trataba a sus morosos, y si se pedía fianzas a los asociados cuando existían indicios de su insolvencia.⁴⁷⁴ Y aquí queda al descubierto la inseguridad en que se movía el montepío cuando, al parecer, Sacristán informa que la Junta del montepío de la corte excluía de su colegio a los morosos después de los dos requerimientos,⁴⁷⁵ al tiempo que el montepío de Valencia había obtenido del Consejo resolución desfavorable en este sentido. Igualmente, parece ser que algunos individuos excluidos de la lista de Valencia habían acudido y obtenido del mismo Consejo resolución por la que se ordenaba que no se les perturbara en el ejercicio de la abogacía. Por todo ello,

Felipe Rubio, Antonio Salabert, Manuel Tinajero, Luis Pedro Sanchiz Gil, José Ximénez Ros de Ursins, Juan Francisco Ramada, José Díez, Pascual Pipera, Vicente Albors, Gabriel Montaner y José Antonio Dasí—. Algunos de ellos se desentendieron de la exclusión pretendiendo continuar como asociados; A.I.C.A.V., libro 8, págs. 34-35. Véase también la junta de 5 de junio de 1782 (págs. 36-36 B).

⁴⁷¹ Consulta que se decidió repetir el 31 de marzo de 1785.

⁴⁷² Se trata de Gabriel Pelecha, Francisco Luis Almela, Maximiano Alberola, Antonio Llorente, José Ximeno, Juan José Ximeno, Vicente Piamonte, José Cuevas Doménech, Francisco Tomás Eximeno, Vicente Picó, Antonio Urgelles, Bartolomé Heraud, Jaime Ronda, Vicente Cervera y Carlos Cabrera.

⁴⁷³ A.I.C.A.V., libro 8, juntas de 8 de febrero de 1783 ó 14 de noviembre de 1784.

⁴⁷⁴ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 49 B-50.

la Junta escribió de nuevo a Carlos Sacristán, para que se asegurara sobre lo dicho.⁴⁷⁶

Esta inseguridad disminuyó, en parte y transitoriamente, cuando en la junta de 2 de abril de 1785 se decidió que la exclusión del montepío sólo implicaría también la del colegio, con respecto a los individuos incorporados en éste con posterioridad a la fundación de aquél. Así pues, este día fueron expulsados 19 individuos del montepío, y 13 de éste y del colegio.⁴⁷⁷ En total fueron expulsados 34 abogados del montepío, contando a los dos que lo fueron por no haber pedido licencia al decano para contraer matrimonio, y que no fueron expulsados del colegio.⁴⁷⁸ De nuevo, algunos de ellos se reincorporaron previo acuerdo con la Junta de aportar todo lo adeudado bajo las condiciones pactadas.⁴⁷⁹ Y de nuevo todos ellos continuaron apareciendo en las listas del colegio de los siguientes años.

Las importantes reformas que afectaron al reglamento en los años siguientes obedecían al deseo de solucionar el estado ruinoso de la sociedad y, por lo mismo, de terminar con la morosidad e indiferencia general de los abogados para con ella. Indiferencia que se había acrecentado al saber los colegiales que, aunque expulsados del montepío, podían continuar ejerciendo la abogacía, pues así lo había dispuesto el Supremo Consejo el 19 de agosto de 1784.⁴⁸⁰ De ahí que en 1787 la Junta decidiera acudir a este tribunal solicitando las medidas oportunas para evitar la extinción del montepío. Como ya hemos visto, las medidas que se tomaron en este sentido conllevaron una rebaja en la cuantía de las pensiones. Entre estas medidas cabe destacar las siguientes:

⁴⁷⁵ En este sentido véase también A.I.C.A.V., caja 387, *Representación al Real Consejo para que acuerde la Providencia ...*, págs. 2 y 2 B.

⁴⁷⁶ A.I.C.A.V., libro 8, junta de 12 de diciembre de 1784.

⁴⁷⁷ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 53 B-55. Los 19 individuos expulsados del montepío fueron los siguientes: José Cuevas Doménech, Juan Bautista Hervás, Pascual Heraud, Antonio Eduardo Masot, Francisco Vilatela, Salvador Simó, Pascual Cardona, Francisco Damián Jover, Antonio Barberá, Fermín Nebot Villanueva, Cristóbal Ojalde, José Luis Marco, Abdón Baeza, Francisco Javier Soler, Vicente Albiñana, Francisco de Paula Soler, Antonio Noguer, Pedro Romero y José Campos. Y los 13 del montepío y del colegio estos otros: Gabriel Pelecha, Bartolomé Heraud, Vicente Picó, Antonio Llorente, Francisco Gascó, Andrés Blat, Joaquín Asensi, Vicente Piamonte, Francisco Eximeno, Jaime Ronda, Vicente Furió, Juan Andrés Ibáñez y Miguel Serrano.

⁴⁷⁸ Joaquín Chornet Calatayud y Adriano Cerdá Ricart.

⁴⁷⁹ A.I.C.A.V., libro 8, junta de 19 de junio de 1785, págs. 55 B-57.

⁴⁸⁰ A.I.C.A.V., libro 8, juntas de 22 de julio de 1786 y 25 de marzo del año siguiente.

— El pago de los 900 reales de contribución de entrada se tendría que efectuar en el acto de incorporación en el colegio, de una sola vez, y sin concesión de plazo alguno (párrafo segundo, reforma de 1786). De esta forma se pretendía evitar la tan extendida práctica de pagar sólo los 300 reales de la primera tercia de esta contribución, y la primera de la anual —que ineludiblemente debían pagar—, olvidándose por completo de las demás. Práctica debida a que los abogados no concebían esperanza alguna de, llegado el momento, conseguir beneficio alguno, pues era general el convencimiento de una pronta extinción del montepío. No obstante, y como veremos, no parece que esta reforma tuviera mucha aplicación.

— La exclusión del goce de la pensión para la viuda e hijos de aquellos asociados que murieran debiendo 480 reales por las tercias de contribución anual, atrasadas o corrientes, o una sola de las de ingreso (párrafo quinto, reforma de 1788). A partir de ahora ya no serían necesarios para la exclusión los dos requerimientos previos, pues la reforma estatuyó que era suficiente el aviso que se les pasaría de la misma.

— Reducción de la contribución anual de 240 a 120 reales (párrafo primero, reforma de 1791).

— Esta última reforma, intentando facilitar los pagos atrasados, e intentando evitar la expulsión de los individuos notablemente morosos, estableció, en su párrafo segundo, la posibilidad de que éstos pudieran ir depositando simultáneamente una tercia corriente y otra atrasada —de 40 reales cada una—, hasta quedar cubierta la totalidad de la deuda. De forma que, imposibilitándose o muriéndose debiendo tres tercias de contribución anual o tres de las que tenían que ir depositando por atrasos, no tuvieran derecho a los beneficios del montepío ni él, ni su viuda ni sus hijos.

Al parecer, estas dos últimas medidas tuvieron al principio bastante aceptación, pero al cerrarse el colegio en 1794 a las nuevas incorporaciones los ingresos disminuyeron drásticamente, y el desánimo cundió de nuevo entre los asociados.

— La misma reforma de 1791 acordó la inadmisión del depósito de los atrasos referidos en el punto anterior, con respecto a aquellos deudores que los pagaran cuando se encontraran accidentados o enfermos “de cuyas resultas recelen morir”. Es más, si de cualquier forma se verificara el depósito,

se tendría por no hecho (párrafo tercero). De nuevo se establece que no serían necesarios los avisos previstos, “pues el mismo plazo en que deben efectuarse ha de servir de interpelación”. Esta decisión se adoptó ante la situación que se había planteado en la junta de 20 marzo de ese año, cuando Juan Bautista Vergara, hallándose gravísimamente enfermo, quiso depositar las 13 tercias que debía desde la de 11 de diciembre de 1786. No admitiéndolas inicialmente el tesorero, esta junta tuvo que hacerlo al no existir todavía disposición que lo impidiese.⁴⁸¹

Pero a pesar de todo, observamos durante estos años que la Junta no solía expulsar a sus asociados aunque no cumplieran con sus pagos, sino que les permitía que propusieran un plan para cumplir con todo lo adeudado y continuar así en el montepío. Incluso una vez expulsados, les permitía el reingreso si presentaban esta propuesta de pago.⁴⁸² Téngase en cuenta que en 1787 tan sólo contribuían a la sociedad 24 de los 221 colegiados,⁴⁸³ y en 1791 una quinta parte de sus individuos. El fracaso de la sociedad era evidente.

Por lo visto, la reapertura del colegio a nuevos abogados decidida por las cortes liberales conllevó una cierta recuperación de los fondos del montepío. No obstante, el problema del impago y de los retrasos continuaría a lo largo de los años. Con la invasión de los franceses se agudizó, si cabe. En la junta de 26 de abril de 1814 se decidió, atendiendo a la imposibilidad de aprontar todas las deudas devengadas en un sólo pago, que se fuera satisfaciendo una tercia corriente y otra atrasada.⁴⁸⁴ Decisión que vemos reiterada en las juntas de 7 de febrero de 1816 y 24 de septiembre de 1818. Tal era su situación económica, que en el informe remitido al Real Acuerdo, a consecuencia de una demanda presentada por las viudas en este último año, el montepío manifestó que ni él mismo conocía, como aquellas pretendían, la

⁴⁸¹ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 89 B-90. Véase también junta de 22 de enero de 1792, en la que se trató también un caso parecido planteado por Andrea Fontanelles, viuda de Ignacio Salvachuna, y que se resolvió en el mismo sentido.

⁴⁸² A.I.C.A.V., libro 8, juntas de 8 de marzo de 1789, 17 de noviembre de 1790 ó 13 de febrero de 1791.

⁴⁸³ A.I.C.A.V., caja 387, legajo sin número, *Representación al Real Consejo para que acuerde la Providencia ...*, pág. 4. Según este borrador, los asociados debían un total de 166.220 reales, así por tercias de ingreso como de contribución anual.

⁴⁸⁴ A.I.C.A.V., libro 8, pág. 146.

suma exacta de lo que le debían sus individuos. Entre otras razones porque — según propias manifestaciones—, si dependía de la voluntad de los colegiales el continuar o no en la sociedad, al que no pagaba no se le podía considerar necesariamente como deudor obligado. Tan sólo se llegó a saber lo adeudado hasta el mismo año 1818, en que se pasó una lista a todos los morosos para que manifestaran si su voluntad era continuar en el montepío.⁴⁸⁵ A pesar de todo, en el mismo asunto la Junta remitió poco después otro informe al Real Acuerdo, en el que manifestaba que, de los 84 abogados que habían ingresado en el colegio y montepío desde 1810, tan sólo dos, Salvador Algarra y Victoriano Morera, habían pagado las tres tercias de contribución de entrada, con lo que el adeudo ascendía en total a 49.220 reales, 600 por cada uno de los 82 restantes. Por lo tanto, por este concepto sólo se habían ingresado 26.400 reales. En cuanto a los abogados antiguos que también debían la segunda y la tercera tercia de ingreso (a excepción de José Ribera y Manuel Chiva, que sólo debían la última), el total del adeudo ascendía a 23.400 reales.⁴⁸⁶

Mientras, el montepío seguía ofreciendo a los morosos la posibilidad de pagar cada año los 240 reales de contribución anual, correspondientes la mitad a las tercias del año corriente y la otra mitad a las atrasadas. Aunque no está muy claro, del acta de la junta de 31 de julio de 1822 se interpreta que el pago total se efectuaría a razón de 20 reales mensuales.⁴⁸⁷

Prueba de que no había manera de mejorar la situación es que, a mediados de 1824, el montepío tan sólo contaba con 9 contribuyentes.⁴⁸⁸ La situación era insostenible y la reforma del reglamento inevitable.

⁴⁸⁵ A.I.C.A.V., libro 8, junta de 23 de enero de 1819, págs. 159 B-160.

⁴⁸⁶ A.I.C.A.V., libro 8, junta de 24 de septiembre de 1819, págs. 162-162 B. Por lo que vemos, los 900 reales de cuota de incorporación seguían pagándose por tercias de 300 reales, a pesar de la reforma de 1786.

⁴⁸⁷ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 171 B-172.

⁴⁸⁸ A.I.C.A.V., libro 8, junta de 14 de julio, pág. 177.

Limosnas del colegio

Llegados a este punto, es de interés comentar la relación que existía entre la obra y función aseguradora del montepío y la labor asistencial, o incluso caritativa, que el colegio podía practicar con sus individuos y familiares.

La *Advertencia* que encontramos al final del capítulo cuarto del reglamento del montepío pretendía dejar bien claro que, pese a que la misión de esta sociedad era socorrer a los abogados en sus necesidades, no podía cubrirlas todas. En concreto decía lo siguiente:

Sin embargo de que el piadoso ánimo del Colegio se dirige al socorro de quantas necesidades padezcan sus Individuos, es imposible ocurrir a todas, siendo tantas y tan continuas en el sistema presente, que siguen muchos de permanecer en Valencia con el nombre de Abogados del Colegio, sin desengañarse, como devieran, a los quatro o cinco años de la ninguna esperanza que pueden tener de hacer en la Abogacía el progreso que los demás, ni aun el necesario para una reducidísima manutención, y así consumen su vida con urgencias y estrecheces separadas del egercicio de la facultad, de las que pudieran eximirse y ser útiles a la República aplicándose a otro honroso destino, luego que les haya desengañado el transcurso de dichos quatro o cinco años del ningún progreso que pueden esperar en el egercicio de la abogacía de Valencia, y por no hacerlo, y vivir ociosos, padecen voluntariamente las insinuadas estrecheces y urgencias, viéndose acaso obligados por ellas a egecutar lo que no corresponde al honor del Colegio, que les admitió en la inteligencia de que podrían mantenerse con él. Atendiendo a todo lo expresado, y considerando otras muchas razones, se previene en este Reglamento, que con el caudal o fondo del Monte-Pío, ninguna urgencia que provenga de semejantes causas puede socorrerse aunque sea en cortísima cantidad.

O sea, que el mismo reglamento establecía que la labor caritativa del montepío iba a ser nula. Lo más probable es que así se estableciera pensando que esta función debía corresponder a la Junta del colegio, y que debía correr a cargo de sus fondos, pues así quedaba previsto en sus estatutos.⁴⁸⁹

⁴⁸⁹ En el mismo sentido se manifiestan los estatutos de los montepíos de otros colegios. En los de Oviedo se decía que no podían aplicarse sus fondos "a otro fin por piadoso que sea, entendiéndose aun para alivio de abogados pobres, enfermos, ni ayuda de entierro y funerales, pues sólo se funda el Monte para alimento de viudas y pupilos"; véase M. Corripio River, *Historia del Ilustre...*, pág. 93.

Los estatutos del colegio que se referían a este asunto eran los números XXVIII, XXXI y XXXII. Según el primero, se libraría lo necesario para el entierro de aquellos abogados pobres que no dejaran bienes para costearlo, ni tuvieran parientes que lo pudieran hacer. Por el segundo, se facultaba al decano a socorrer, con la cantidad que estimara necesaria, a aquellos colegiados necesitados por razón de enfermedad o por encontrarse presos, así como a patrocinarlos en sus negocios. Finalmente por el tercero, se dispensaría a las viudas y huérfanos socorro económico en la medida de lo posible. Esto último, además del patrocinio que se les ofrecería en los pleitos en que se encontraran, y de los que se encargaría el abogado o abogados que señalara el decano, "como no sean de los dos nombrados en aquel año para los pobres y de los otros dos asalariados para el mismo efecto". En ninguno de los tres casos se hace referencia a la obligación de reintegrar lo percibido.

Así pues, con anterioridad a la fundación del montepío le correspondía a la Junta del colegio con exclusividad el conocimiento de estas cuestiones. Hay que decir que, según las actas de las juntas, fueron muy pocos los casos que se dieron.⁴⁹⁰ Pero también después de 1778, las limosnas continuaron conociéndose, prácticamente con exclusividad, por la Junta del colegio. Podemos diferenciar dos tipos de limosnas:

A) Las concedidas en favor de causas ajenas a la corporación: renovación de la capilla de N^a S^a de los Desamparados, vestuario para los soldados, y sobre todo, depósitos y caudales de abastos del Hospital General, Beneficencia y Casa de la Misericordia.⁴⁹¹ Algunas de estas limosnas las concedió el colegio como corporación, pero la mayoría las concedieron sus individuos como particulares, actuando el colegio como intermediario.

B) Las concedidas en favor de los colegiados, sus viudas o hijos. Estas solicitudes eran presentadas y conocidas en la Junta del colegio porque, como hemos visto, los abogados y sus familiares no esperaban que la Junta del montepío las concediera, ya que aquéllos eran sus deudores o, en ocasiones

⁴⁹⁰ A.I.C.A.V., libro 4, juntas de 5 y 7 de febrero de 1764. Por la primera se otorgaron a Antonio Jáudenes, gravemente enfermo y pobre, 20 libras, y por la segunda cantidad suficiente para costear su entierro. En la junta de 14 de enero de 1768 se libraron 10 libras para atender a la grave enfermedad de José Aznar. Véase, asimismo, apartado *Cuentas del colegio*.

⁴⁹¹ A.I.C.A.V., libro 4, juntas de 27 de mayo de 1766, 21 de julio de 1771, 4 de diciembre de 1805, 12 de mayo de 1812, ó 28 de octubre de 1826.

incluso, ni siquiera habían completado su ingreso.⁴⁹² En alguna ocasión el colegio también actuó aquí como intermediario.

Tenemos dos casos en los que un mismo asunto fue conocido por ambas juntas simultáneamente. La junta del montepío de 3 de febrero de 1792 denegó la limosna solicitada por la madre de Antonio Urgelles, ante la demencia a que había llegado su hijo, y para el caso de que la Junta no tuviera a bien socorrerle con la subvención diaria.⁴⁹³ Aunque la Junta excusó esta subvención alegando no tener Antonio Urgelles sus pagos al corriente, pese a los requerimientos que se le hicieron, tampoco accedió a la limosna. Sin embargo, el mismo día se vio este caso en la Junta del colegio, la que sí le otorgó de sus fondos 300 reales de vellón. El segundo caso es el de José Antonio Ortuño, que murió en el Hospital General de enfermedad contagiosa y constituido en la suma miseria. Considerando la Junta del colegio que algunos colegiados ya le habían socorrido en otras ocasiones, decidió librar en 12 de noviembre de 1796 las 30 libras que se le adeudaban al Hospital. Por no tener en esos momentos el colegio suficientes fondos, se decidió extraerlos de los del montepío en calidad de reintegro, lo que también consta en la junta del montepío del mismo día.⁴⁹⁴

Como podemos ver del texto de la Advertencia, el objetivo más explícito que pudiera tener esta recomendación era el de disuadir a los

⁴⁹² Tan sólo conocemos una súplica de limosna ante la Junta del montepío, que, por cierto, no se concedió: la de Inés Ortiz, viuda de Antonio Urgelles, en 4 de diciembre de 1819. En cuanto a las limosnas concedidas o denegadas por la Junta del colegio véase apartado *Cuentas del colegio*. Véase también A.I.C.A.V., libro 4, juntas de 10 de enero de 1779 y 8 de julio de 1783; o libro 6, junta de 13 de enero de 1823. Pero sobre todo abundaron tras la aprobación del nuevo reglamento del montepío de 1825; véase libro 7, juntas de 30 de septiembre y 19 de diciembre de 1825, 21 de agosto, 1 de septiembre y 16 de diciembre de 1726, 18 de diciembre de 1827, 10 de abril, 16 de septiembre y 17 de diciembre de 1829, 9 de abril y 14 de mayo de 1831 ó 16 de diciembre de 1834.

⁴⁹³ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 96-96 B.

⁴⁹⁴ A.I.C.A.V., libro 5, juntas de 1 de marzo, 16 de junio y 12 de noviembre de 1796 (págs. 36 B-37, 39-39 B y 42 B-43, respectivamente); y libro 60, junta de 12 de noviembre del mismo año, pág. 113. Según la junta de 1 de marzo "atendiendo al honor y clase del enfermo habían podido conseguir se le colocase en una de las camas y cuarto reservado, donde sería asistido y tratado con el honor y decencia que correspondía a su ilustre profesión". Por este motivo, el decano dio cuenta a la Junta en este día de que, por la urgencia del caso, se había obligado para con el Hospital al pago de las 30 libras con que, llegado el momento, purificar el cuarto donde se encontraba José Ortuño, si "muriese en él de enfermedad contagiosa", lo que así sucedió. Tratado el asunto, la Junta aprobó la actuación del decano y asumió la obligación como propia del colegio.

abogados del ejercicio profesional en la ciudad de Valencia. De esta forma, además, se pretendía evitar que se viesen obligados "a egecutar lo que no corresponde al honor del colegio, que les admitió en la inteligencia de que podrían mantenerse con él". Nos encontramos ante una especie de anticipo a las medidas restrictivas que, desde los últimos años del siglo XVIII, limitaron de forma mucho más rigurosa el acceso de los letrados a la abogacía.

El nuevo reglamento de 1825

En 1825 el viejo reglamento es, finalmente, sustituido por otro también copia del de Madrid, aprobado por real cédula de 14 de febrero de 1807. Como ocurrió con el de 1778, el reglamento de 1825 también tendría leves diferencias con respecto al madrileño.⁴⁹⁵

En la junta de 6 de marzo de 1824 el decano, Vicente Ferrando Segura, expuso que para mejorar —que era lo mismo que decir aumentar—, los fondos con que atender a las pensiones, se podían seguir dos caminos: o bien proponer al Consejo algunos arbitrios, como lo hizo el colegio de la corte,⁴⁹⁶ o bien solicitar del mismo Consejo que el nuevo reglamento de este colegio se aplicara también al de Valencia, en virtud del decreto de 14 de diciembre de 1761, por el que todos los autos acordados y providencias promulgadas y expedidas a favor del colegio de la corte se entendían comprensivas al de Valencia. Entre ambas posibilidades se decantó la Junta por la segunda, ya que la primera suponía la formación de un expediente instructivo largo y costoso, en el que constara un estado de todos los ingresos e inversiones, como lo hizo en su momento el colegio de Madrid.⁴⁹⁷

De esta forma, el decano presentó en la misma junta el reglamento del montepío de Madrid que, leído, pareció conforme a los miembros de la Junta, a

⁴⁹⁵ A.I.C.A.V., caja 387, *Real Provisión del Supremo Consejo por la que manda se entienda para con los abogados del Colegio de esta ciudad el reglamento inserto para el gobierno de su Monte Pío, en los mismos términos que el de la Corte, bajo las modificaciones que se expresan*, legajo sin número.

⁴⁹⁶ A. Rumeu de Armas, *Historia de la ...*, pág. 466. Véase también A.I.C.A.V., caja 387, legajo sin número.

⁴⁹⁷ A.I.C.A.V., libro 8, págs. 174 B-175 B.

excepción de algunos apartados del capítulo quinto —*Fondos del montepío*—, sobre los cuales se hicieron las siguientes modificaciones:

PRIMERA: Que en vez de los ochenta reales del tercio de contribución ordinaria, prevenidos en el § 2.º del capítulo V, sean solamente cuarenta, que es la señalada en el reglamento antiguo.

SEGUNDA: Que los veinte y cuatro reales, como honorario de todas las conclusiones que los individuos pongan en los pleytos que defienden, sea para definitiva o para artículos o incidentes en cualesquiera tribunales o juzgados de esta ciudad de Valencia, prefijados en el § 3.º de dicho capítulo V, queden regulados a cuatro.

TERCERA: Que en lugar de la cuarta parte del honorario de las cuentas y particiones de herencias y bienes en que intervengan abogados por nombramiento judicial, o de las partes por avenencia extrajudicial, o por disposición de los testadores, prevenida en el § 4.º del mismo capítulo, se substituyan solos treinta reales vellón.⁴⁹⁸

Según consta en el acta de esta junta de 6 de marzo, los demás arbitrios contenidos en los párrafos sexto y siguientes de este capítulo quinto no se estimaron necesarios para el montepío de Valencia. Sin embargo, esta salvedad no se recoge en la carta remitida al Supremo Consejo, tal como consta en al real provisión de 21 de marzo de 1825, por la que se aprobó el nuevo reglamento.⁴⁹⁹ De la misma forma, en la junta de 11 de julio del mismo año se adoptó el siguiente acuerdo:

...que sin embargo de lo dispuesto en el párrafo 6.º *Capítulo 5.º* de la Real Provisión del Supremo Consejo, en la que se halla inserto el reglamento para el gobierno del Monte-Pío del Colegio de Abogados, queda suprimido, por lo que se dispone en el párrafo 5.º *Capítulo 10* de dicho reglamento, por haverle parecido a la Junta muy gravosa la condición impuesta en dicho párrafo 6.º⁵⁰⁰

Haciendo un análisis comparativo entre los reglamentos de los años 1778 y 1825, algunas de las innovaciones más destacadas que supone este último son las siguientes:

a) Para que las viudas e hijos tuvieran derecho al goce de la pensión, el difunto marido-padre debería haber contribuido al montepío al menos durante diez años (párrafo 4º, capítulo I), a no ser que el asociado anticipara

⁴⁹⁸ A.I.C.A.V., caja 387, *Real Provisión del Supremo Consejo por la que...*, legajo sin número, pág. 4.

⁴⁹⁹ A. R. V., *Real Acuerdo*, libro 120, folios 34 y 633-640 B.

en el momento de su ingreso los 40 doblones a que ascendía el importe de las diez anualidades (pár. 2º, cap. III). En cuanto a los hijos, los varones gozarían de la pensión hasta los 17 años —21 si seguían carrera literaria o de las armas (y si antes no entraren estos últimos en plaza de oficial con sueldo)—, y las hembras hasta los 25 (pár. 3º, cap. III).

b) El socorro de enfermedad temporal se concretaba en 30 reales diarios, por espacio de 30 días, reintegrables dentro del año inmediato al restablecimiento, si éste aconteciera (pár. 2º, cap. II).

c) El importe de las pensiones de viudedad y de enfermedad habitual o permanente —así como de vejez—, sería proporcional al tiempo en que el individuo hubiera estado cotizándolo a la sociedad. Si hubiera contribuido de 10 a 16 años la pensión sería de 100 ducados anuales; si de 16 a 24 años, 200 ducados; si de 24 a 32 años, 300 ducados; y si más de 32 años, 10 reales diarios (pár. 3º, cap. III).

d) Por el párrafo 1º del capítulo V se excitaba a los titulares de la pensión de viudedad a entrar en religión o a casarse, a efectos de aligerar las cargas del montepío. En el mismo sentido, el siguiente párrafo acordaba que los hijos dejarían de percibir su pensión si en ellos recayera otro tipo de pensión o sueldo fijo de, al menos, 400 ducados.

e) El importe de la contribución de entrada pasó a ser de 1.500 reales de vellón, abonados al contado y por una sola vez. Además, todo aquel que se colegiara pasados sus 26 años pagaría la contribución anual de todos los años atrasados desde que cumplió esta edad (párrs. 1º y 6º, respectivamente, del cap. V).

f) El párrafo 9º de este último capítulo excluía del goce de la pensión a la viuda e hijos del abogado que falleciera debiendo nueve tercios. Para el caso de deber menos, el mismo párrafo establecía descuentos proporcionales.

g) El contador del montepío dejaría de ser el secretario del colegio, para constituirse en cargo independiente (pár. 1º, cap. VIII).⁵⁰¹

Pero las esperanzas que se depositaron en este nuevo reglamento no se correspondieron con la realidad. Pronto se advirtió que continuaba

⁵⁰⁰ A.I.C.A.V., libro 8, pág. 179 B.

⁵⁰¹ No obstante, esta separación de cargos no se aplicó en Valencia hasta la elección de 1828.

imperando la indiferencia entre los no asociados, y que apareció el descontento entre los que sí lo estaban. El motivo principal era el tratamiento que se dispensaba a las huérfanas. Con el viejo reglamento gozaban de la pensión hasta que tomaban estado o fallecían. A partir de ahora sólo hasta que cumplieran los 25 años, con la salvedad dispuesta en el párrafo 1º del capítulo IV, según la cual conservarían la mitad de la pensión hasta su fallecimiento, por vía de socorro, en el caso de que no hubiera esperanza racional —entiéndase impedimento o deformidad— de poder casarse o entrar en religión, y en el caso de que, a prudente arbitrio de la Junta, carecieran de medios para su sustento. De hecho, y de conformidad con el párrafo quinto del capítulo X, se solicitó real aprobación para que en este punto siguiera rigiendo en el colegio de Valencia el régimen existente con anterioridad.⁵⁰²

⁵⁰² A.I.C.A.V., caja 387, legajos sin número.

Cuadro de cuentas⁵⁰³

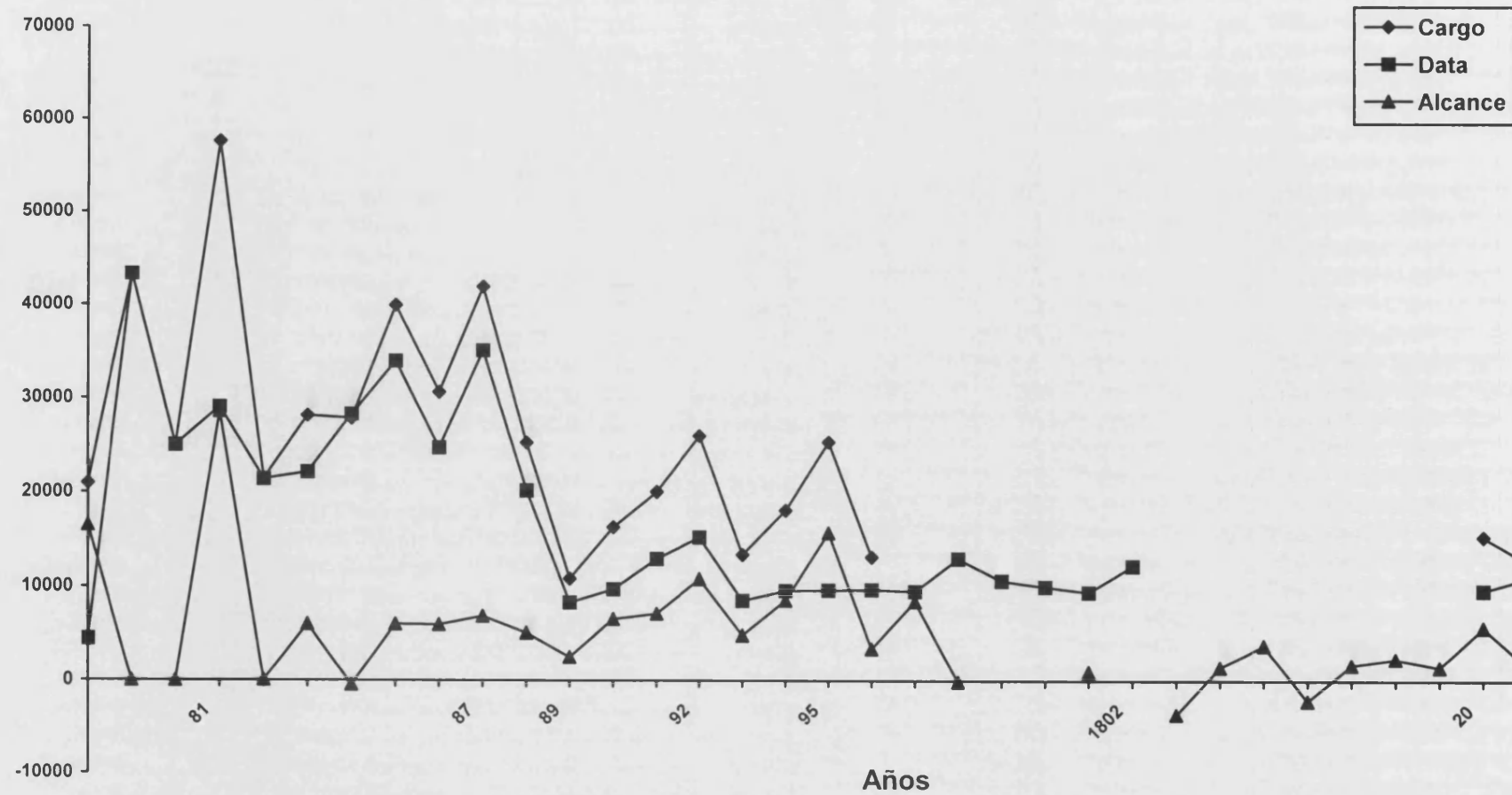
Período	Cargo	Data	Alcance
1778-78	20960	4455.18	16504.16
1778-79	43368	43368.1	0
1779-80	25000	25000	0
1780-81	57612	29037	28574
1781-82	21464	21394.4	69.30
1782-enero 83	5688	2040	3648
enero 1783-83	22456.18	20098.4	2358.14
1783-84	27857	28311.33	- 454.33
1784-85	40008	33977.27	6030.7
1785-86	30681.13	24715.26	5965.21
1786-87	41997.19	35130.17	6867.2
1787-88	25252	20167.15	5084.19
1788-89	10836	8321	2515
1789-90	16294.16	9720.20	6573.30
1790-91	20034.12	12913.28	7120.18
1791-92	26023.10	15214.2	10809.8
1792-93	13364.30	8522.16	4842.14
1793-94	18103.24	9562	8541.24
1794-95	25335.18	9639.32	15695.20
1795-96	13129.24	9697.14	3432.10
1796-97		9500.25	8441.23
1797-98		12940.29	- 128
1798-99		10621.21	
1799-1800		9997.33	

⁵⁰³ A.I.C.A.V., cajas 396 (años 1778-90), 397 (años 1791-96) y 398 (años 1819-28). Las *datas* de los años 1796-97 a 1801-02 han sido sacadas de una hoja sin clasificar de la caja 387, *Manifiesto de lo que se ha invertido en subvenir a las viudas, pupilos e impedidos...* (junta de 2 de noviembre de 1803). Los *alcances* de los años 1796 a 1820 se han extraído del libro de actas. En cuanto a los de los años 1798-99, 1799-1800 y 1809-10 sabemos que fueron negativos para el montepío, sin que haya quedado constancia de la cifra en concreto (juntas de 21 de diciembre de 1799, 29 de noviembre de 1800 y 26 de agosto de 1811, respectivamente). Las cantidades vienen todas en reales de vellón y maravedís.

1800-01		9414.2	959.19
1801-02		12193.28	
1802-03			
1803-04			- 3616.28
1804-05			
1805-06			1456.26
1806-07			3790.4
1807-08			- 2154.17
1808-09			- 1675.27
1809-10			
1810-11			2348
1811-16			
1816-17			1465
1817-20			
1820-21	15280.12	9600	5680.12
1821-22	12568.16	10934	1634.16
1822-23	3961.32	3419	542.32
1823-24	6260	6607	- 347
1824-25	10855.12	5976.10	4880.2

Cuentas del Montepío 1778-1825

Reales de vellón



SEGUNDA PARTE:
LOS COLEGIADOS

CAPÍTULO VI: INGRESO DE LOS ABOGADOS EN EL COLEGIO

Conviene dejar claro que una cosa era el recibimiento del jurista, como abogado, en el Consejo de Castilla o cualquiera de las reales audiencias o chancillerías, en cuanto requisito indispensable para ejercer en los tribunales; y otra diferente su ingreso, una vez recibido, en el colegio de abogados de la ciudad de Valencia. Ambos requisitos eran indispensables para ejercer en la Real Audiencia y demás tribunales dependientes de ella de esta ciudad.

Desde 1707 hasta la fundación del colegio, en 1762, fueron recibidos en el Real Acuerdo de la Audiencia de Valencia unos 617 abogados. Desde esta última fecha hasta la entrada en vigor de los nuevos estatutos, en 1838, fueron recibidos otros 1904 abogados más, —si bien hay que tener en cuenta que el Real Acuerdo se extingue en 1835—. De estos últimos, 1010 se recibieron en lo que quedaba del siglo XVIII y 894 en el XIX.⁵⁰⁴

Paralelamente, y a lo largo de los 76 años de vida de los primitivos estatutos, se colegiaron un total de 864 abogados: 221 lo hicieron en el momento de la fundación del colegio, y en virtud del estatuto XIX —esto es, sin necesidad de la práctica de las pruebas recogidas en el estatuto anterior—; 422 se colegiaron en lo que quedaba del siglo XVIII; y los otros 221 en los 38 años del siglo XIX. Pero no todos los abogados que ingresaron en el colegio de Valencia se habían recibido en el Real Acuerdo de esta capital. Y, por otra parte, tampoco, ni mucho menos, se habían graduado todos ellos en la Universidad de Valencia.

A continuación voy a hacer un estudio sobre los abogados del colegio, tomando como referencia estos tres momentos: graduación, recibimiento de abogado y colegiación.⁵⁰⁵ Junto con la graduación, y por su conexión y

⁵⁰⁴ A.R.V., *Real Acuerdo*, libros I-D 6 a I-D 12, y 1 a 130. Recuento propio sobre los acuerdos.

⁵⁰⁵ A lo largo de todo este apartado he tomado como punto de referencia los estudios de M. Peset Reig, "La formación de los juristas y su acceso al foro en el tránsito de los siglos XVIII a XIX", *Revista General de Legislación y Jurisprudencia* 62 (1971) 297-337; "La recepción de las órdenes del Marqués de Caballero de 1802 en la Universidad de Valencia. Exceso de abogados y reforma en los estudios de leyes", *Saitabi* 19 (1969) 119-148; y "Derecho romano y Derecho real en las universidades del siglo XVIII", *Anuario de Historia del Derecho Español*, 45 (1975)

dependencia, estudiaré la pasantía como otro requisito que en la mayor parte de este período también se exigió para recibirse de abogado.

Graduación y pasantía

La *Nueva Recopilación*, como previamente habían establecido las *Ordenanzas de Abogados* de los Reyes Católicos, de 14 de febrero de 1495, establecía lo siguiente:

...ningún Letrado pueda auer, ni aya oficio, ni cargo de justicia, ni pesquisidor, ni Relator en el nuestro Consejo, ni en las nuestras Audiencias, ni Chancillerías, ni en ninguna ciudad, villa, ni lugar de nuestros Reynos, sino constare por fee de los Notarios de los estudios auer estudiado en los estudios de qualquier Vniversidad destos nuestros Reynos, o de fuera dellos, y residido en ellos estudiado derecho Canónico, o Civil...⁵⁰⁶

El título o grado que en adelante se exigirá para poderse recibir de abogado ante los tribunales será, dependiendo del plan de estudios, el de bachiller o licenciado en cualquiera de los dos derechos. Y dos eran las universidades en las que, casi con exclusividad, se habían graduado los abogados del colegio: la de Valencia, en primer lugar; y la de Gandía, en segundo. A continuación analizaremos, cronológicamente, cuáles y cómo fueron los diversos planes de estudios que estuvieron vigentes en estas facultades de cada una de las dos universidades, a lo largo de la vida de los primeros estatutos del colegio. Paralelamente, también analizaremos cómo se organizaba la pasantía de los ya graduados.

Situación en 1762

Universidad de Valencia

En el momento de la fundación del colegio, las facultades de Leyes y Cánones de esta universidad estaban separadas, pues así lo prevenían sus

273-339. También M. Peset Reig, M. F. Mancebo, M. Martínez y P. García Trobat, *Historia de las universidades valencianas*, 2 vols, Alicante, 1994.

⁵⁰⁶ *Nueva Recopilación* 3, 9, 2.

constituciones de 1733. No obstante y como veremos, los cambios entre ellas no resultaban difíciles. De hecho, los alumnos las cursaban unidas, ya que los legistas estudiaban *Instituta* Canónica y los canonistas *Instituta* Civil, graduándose después en la facultad preferida. La mayoría optaban por la de Leyes. Los párrafos segundo y tercero del capítulo IX de estas constituciones dicen así:

2. Otrosí, para que dichos estudiantes puedan valerse de los cursos para obtener grado, ordenamos que los que estudiaren Jurisprudencia Civil ayan de cursar precisamente quatro cursos cabales, assiendiendo en todos ellos a oír la explicación de un cathedrático de Instituta, y lo mismo los que quisieren graduarse en Jurisprudencia Canónica; y en ellos el primer año ayan de acudir de ocho a nueve horas de la mañana a oír al cathedrático de Instituta, y los tres siguientes ayan de asistir a escribir dos materias de otros dos cathedráticos; con advertencia que en el tercero y quarto año, una de ellas ha de ser del de Prima o Vísperas; de manera que si en el tercer año tomare la materia del de Prima, en el quarto aya de tomar la del de Vísperas, *et en contra*. Y esto se entienda que si quisiere graduarse de Cánones, ha de tomar dichas materias de los cathedráticos de Cánones, y si en Leyes, de los de Leyes.

3. Otrosí, por quanto puede suceder que algún estudiante, después de aver cursado la Jurisprudencia Civil según lo prevenido en las constituciones antecedentes, quiera graduarse en Cánones, *et en contra*, ordenamos que si al empezar el tercer año de curso se matriculare para la facultad de Cánones en que quiere el graduado, aya de acudir los dos años siguientes precisamente a la aula del cathedrático de Instituta Canónica, y en los mismos tomar un año la materia de Prima de Cánones y en otro la de Vísperas, *et en contra*; y si concluido el tercer año de Jurisprudencia Civil quisiere graduarse en Cánones, aya de cursar dos años más esta facultad en la forma antecedentemente dicha. Y si después de los dichos quatro años quisiere mudar de intención, aya de cursar un año más la Jurisprudencia Canónica, *et en contra*.⁵⁰⁷

Por lo tanto, la organización del plan de estudios dependía de los catedráticos a cuyas clases el estudiante decidía asistir, sin perder de vista que la *Instituta* constituía el eje central, pues debía cursarse completa para obtener el grado. Los libros del *Corpus Iuris Civilis* y del *Corpus Iuris Canonici* daban

⁵⁰⁷ *Constituciones de la insigne Universidad Literaria de la Ciudad de Valencia, hechas por el Claustro Mayor de aquélla en el año de 1733*. En Valencia en la imprenta de Antonio Bordazar de Artazu, impressor del Santo Oficio y de la Ilustre Ciudad. Valencia. 1733. Véase también M. Peset, M^a F. Mancebo y J. L. Peset, *Bulas, constituciones y documentos de la Universidad de Valencia (1725-1733). Conflictos con los jesuitas y las nuevas constituciones*. Valencia, 1978.

nombre a las cátedras, y servían de base para las lecturas y explicaciones de los profesores.⁵⁰⁸

En 1733 había once cátedras, cuatro de Jurisprudencia Canónica (Prima, Vísperas, *Decreto* de Graciano e *Instituta* —en la constitución antecedente *Sexto de Decretales*—), y siete de Civil (Prima o Inforciado, Vísperas más antigua o *Digesto* Nuevo, Vísperas menos antigua o *Digesto* Viejo, tres de *Instituta* y otra de *Código* de Justiniano). En el mismo capítulo VIII se especifican las materias que cada uno de los catedráticos debía explicar a lo largo de cuatro años. Son las siguientes:

Los catedráticos de *Instituta* Canónica explicaban las materias que se contienen en los títulos de los cinco libros de los Decretales, según las Paratitlas de Andrés Vallensis. Los de *Instituta* Civil explicaban los cuatro libros, uno cada año, de las *Instituciones* de Justiniano, "según el Comento de algún autor institutista de los de mayor aceptación en las escuelas y de quien se valen los estudiantes, especialmente Arnolfo Vinio, atendiendo más a parafrasear el texto y enseñar principios de Derecho que a mover y ventilar cuestiones dilatadas". Con la provisión de tres cátedras de *Instituta* civil por las constituciones de 1733 —las dos nuevas temporales—, se pretendía terminar con la pésima formación que, al parecer, recibían los estudiantes. Hasta ahora sólo había una cátedra —perpetua—, con lo que el alumno que iniciaba la carrera podía hacerlo con el cuarto libro de *Instituta*, más difícil que los anteriores, si era el que le tocaba al catedrático explicar ese año, con el riesgo de no llegar a asimilar los conceptos básicos del Derecho. A partir de ahora se quería asegurar que cada año hubiera un catedrático que iniciara la *Instituta* por el primer libro, para que todo estudiante pudiera seguirle durante los cuatro años. Sin embargo, esto no se consiguió enteramente, pues quedaba por constituir una cuarta cátedra. En ocasiones era un catedrático de *Código* el que suplía esta falta.⁵⁰⁹

⁵⁰⁸ P. Marzal Rodríguez, "Docencia y pugnas en Leyes y Cánones (Valencia 1707-1741)", *Colegios y universidades del Antiguo Régimen al liberalismo. IV Congreso internacional de Historia de las universidades hispánicas*, México, 1997, en prensa.

⁵⁰⁹ P. Marzal Rodríguez, "Docencia y pugnas en...", pág. . El hecho de que fuera un catedrático de *Código* el que normalmente era designado por el rector para explicar *Instituta*, probablemente se debía a que en las constituciones de 1733 los estudiantes debían estudiar obligatoriamente, además de *Instituta*, Prima y Vísperas, pero no *Código*, con lo que se entiende que este catedrático estaría más liberado de trabajo.

En cuanto a Prima, los catedráticos de Jurisprudencia Canónica explicarían, una cada año, las materias *De Judiciis*, *De Ordine cognitionum*, *De Probationibus* y *De Exceptionibus*. Los de Jurisprudencia Civil explicarían *De Liberis et Posthumis*, *De Vulgari et Pupilari Substitutione*, *De Adquirenda vel Omittenda Haereditate* y *De Legatis primo*.

Para Vísperas el catedrático canonista explicaría *De Rescriptis*, *De Officio et Potestate Judicis delegati*, *De Praebendis et Dignitatibus* y *De Rebus Ecclesiae alienandis vel non*. El catedrático civilista más antiguo explicaría *Digesto Nuevo*, esto es, las materias *De Adquirenda possessione*, *De Re judicata*, *De Verborum obligationibus* y la Ley *Inter stipulantem* 83 del mismo título. Y el más moderno explicaría *Digesto Viejo*, *De Pactis*, *De Officio ejus cui mandata est jurisdictio*, *De Servitutibus* y *De Rebus creditis*.

La otra cátedra de Jurisprudencia Canónica es la del *Decreto* de Graciano, en la que se leerían las materias *De Legibus*, que se contiene desde la primera distinción en adelante; *De Poenitentia*, que empieza desde la *causa 23, quaestione 3, distinctione 1*; *De Simonia*, desde la *causa 1, quaestione 1*; y *De Matrimonio*, desde la *causa 25, quaestione prima*.

Y, finalmente, queda de Jurisprudencia Civil la cátedra de *Código* de Justiniano, cuyo catedrático explicará *De Contrahenda emptione*, *De Edendo*, *de Usucapione pro emptore* y *De Jure Fiscis*.

Para el aprendizaje de estas materias no era suficiente con las explicaciones de clase, entre otros motivos por las numerosas dudas que las lecturas en latín planteaban a los estudiantes. De ahí que surgiera una serie de academias privadas, en las que los estudiantes podían completar la formación recibida en las aulas, al tiempo que podían prepararse para el examen de grado. La mayoría de estas academias estaban dirigidas por graduados que pretendían obtener ingresos mientras esperaban una cátedra. El éxito que tenían entre los cursantes era tanto que las constituciones de 1733 prohibieron que su horario coincidiera con el de la lectura en la universidad.⁵¹⁰ En el mismo sentido, y con la misma prohibición, el rector Benito Pichón ya había decidido unos años antes institucionalizarlas a cargo de profesores con el título de extraordinario. No obstante, no parece que tuviera éxito en el intento, ya que

⁵¹⁰ *Constituciones de 1733*, cap. IV, 17.

las academias se suspendían en el momento en que el profesor accedía a una cátedra, con lo que la inasistencia a las aulas de la universidad continuaría siendo frecuente.⁵¹¹

Es curioso que en el párrafo segundo ya visto se hablara de cuatro cursos "cabales". Tal vez con ello se pretendía terminar con la confusión que originaba el que en los capítulos XVI a XIX de las anteriores constituciones de 1651 no se concretara este término. De hecho, Isidoro Trilles suplicó, el 14 de marzo de 1722, que se le admitiese el depósito y se le señalase día para realizar el examen de bachiller en leyes, por tener tres cursos completos y el cuarto desde el 19 de octubre del año anterior. En el informe que remitieron los abogados de la ciudad, a petición de la universidad, se hacía constar que se le debía admitir por no contravenir su pretensión la letra de las constituciones, y por haberse observado así en iguales casos anteriores.⁵¹²

Hay que tener en cuenta que todavía no existen los exámenes anuales, pasando los alumnos de un curso a otro mediante la obtención del correspondiente certificado o cédula de aprovechamiento, expedida por el catedrático, previo acuerdo del rector, y por la simple asistencia a las clases. Asistencia que el catedrático controlaba por las listas de estudiantes que al principio de cada año le entregaba el secretario.⁵¹³ La obtención del bachiller, que era el grado que se requería para abogar, se regulaba en el capítulo X de la forma que voy a describir:

⁵¹¹ P. Marzal Rodríguez, "Docencia y pugnas en... M. Torremocha Hernández ha estudiado los gimnasios universitarios de Valladolid, cuya existencia para la facultad de Leyes se remonta a comienzos del siglo XVI. Aunque la asistencia a los mismos por parte de los escolares terminó siendo obligatoria, no parece que esta obligatoriedad se exigiera con mucho celo. Como en Valencia, la enseñanza se impartía fuera del horario escolar. No obstante, en Valladolid había dos tipos de individuos: los clásicos y los actuantes. Los primeros, con una participación más activa, tenían que ser bachilleres, mientras que a los segundos sólo se les exigían dos años de matrícula. La diferencia fundamental entre las cátedras y los gimnasios es que mientras que en aquéllas el estudiante adoptaba una actitud totalmente pasiva, en éstos participaba más activamente. No obstante, y por no introducirse en sus actividades el Derecho real, la utilidad de estos gimnasios era más que dudosa. En definitiva, no parece que pasaran de ser meras academias de repaso y perfeccionamiento de los conocimientos adquiridos en las clases. Véase en "La formación de los letrados en el Antiguo Régimen", *Iª jornadas sobre formas de organização e exercicio dos poderes na Europa do Sul, séc. XIII-XVIII*, Lisboa, 1998, págs. 509-536, en concreto págs. 515-519.

⁵¹² M. Peset y otros, *Bulas, constituciones y documentos de la Universidad de Valencia (1707-1724)*, Valencia, 1977, pág. 290, extraído del Archivo Municipal de Valencia, *Instrumentos 1722*, D-32.

⁵¹³ *Constituciones...*, 1733. Cap. III, núm. 3, pág. 57 y cap. IV, núm. 22, pág. 65.

Constándole al rector que el estudiante había cursado en esta universidad, o en otra aprobada por sus constituciones,⁵¹⁴ los estudios requeridos, tal y como se relataban en el capítulo antecedente, se le señalaba día y hora para el examen. Veinticuatro horas antes del mismo, el estudiante acudía a la capilla de la universidad junto con el canciller, el prior del claustro de examinadores de Jurisprudencia, los dos examinadores apuntantes del mismo claustro, y el secretario de la universidad. Los examinadores apuntantes le señalaban al estudiante tres partes del primer tomo de las *Pandectas* (caso de aspirar a bachiller en Leyes), o de los cinco libros de las *Decretales* de Gregorio Nono (caso de aspirar a Cánones), para que, con asistencia del padrino, escogiera de ellas un texto para leer al día siguiente. Transcurridas las veinticuatro horas, acudía el estudiante a la misma capilla a puerta cerrada y, en presencia del canciller, rector, examinadores y secretario —y de nadie más—, recitaba de memoria una lección por espacio de un cuarto de hora. Tras ello, dos examinadores le argüirían contra la conclusión sacada del texto.

Concluido el examen, los examinadores, uno por uno, se acercaban a la mesa del altar de la capilla, en donde recogían de una urna abierta una haba, blanca si le aprobaban y negra si no. Acto seguido la depositaban en otra urna cerrada. Habiendo terminado de votar todos los examinadores, recogía el bedel esta última urna y se la entregaba al canciller —o en su defecto el rector o vicerector—, quien comprobaba que el número de habas correspondía al número de examinadores. Si todas o la mayor parte de ellas eran negras, se tenía al estudiante por reprobado. Por contra, si todas o su mayor parte eran blancas, se le tenía por aprobado *nemine discrepante* o *ex communi consensu*, respectivamente. Todo lo cual se explicaba en la colación y cartilla del grado.

En caso de empate podía el canciller, si lo estimaba oportuno, conferirle el grado *ex communi consensu*. Además, el mismo canciller podía conferir el grado con el honor de *nemine discrepante* si en la urna sólo se

⁵¹⁴ Estas universidades eran, según el capítulo XXIII, las siguientes: en Italia: la Sapiencia de Roma, Bolonia, Perosa, Padua, Nápoles, Ferrara, Pisa, Sena y Pavia. En Francia: Tolosa, Poitiers, Montpellier, Aviñón y Burdeos. En Saboya: Turín. En Alemania: Colonia, Viena y Praga. En Castilla: Salamanca, Alcalá de Henares, Valladolid, Sigüenza, Granada, Toledo, Osuna y Sevilla. En Aragón: Zaragoza y Huesca. En Cataluña: Cervera. En Portugal: Coimbra. En Flandes: Lovaina y Duay. Y en Indias: México.

hallaban dos habas negras. Pero si la mayor parte eran negras, aunque sólo por una más, no podía concederle el grado *ex communi consensu*.

Suspendido el estudiante, quedaba al arbitrio de los examinadores la concreción del período en que podía presentarse de nuevo a examen, que sería más riguroso que el primero.

El examen para el grado de doctor, regulado en el mismo capítulo X, era más riguroso, aunque en la práctica, y al parecer, no lo era tanto. A él sólo podían presentarse los ya bachilleres, y las diferencias con el anterior eran que la lección tenía que durar media hora, y los argumentos tenían que ser cuatro. Pero previamente a este examen, y para evitar el agravio del suspenso, el bachiller tenía que pasar por otro examen privado a realizar en cada una de las casas de dos *examinadores tentantes*. Tras el examen, el bedel pasaba a estas casas con una urna cerrada para que cada examinador pusiera una A o una R, señalando el rector día para el examen en la capilla si las dos letras eran A. Si una era A y la otra R nombraría el rector un tercer examinador para nuevo examen.

Al margen de estos exámenes de grado obtenidos "con prueba de cursos" estaban los de "suficiencia", es decir, aquéllos a los que se presentaban los que no podían aportar cédula de aprovechamiento. Se trataba de un examen mucho más riguroso, por cuanto el graduando debía

...defender un día, por mañana y tarde, conclusiones públicas de la Facultad en que se huviere de graduar, sin Presidente o Padrino, y de leer en el examen secreto de la Capilla una hora sobre el punto que huviere elegido, de los tres que por suerte se le señalaren veinte y quatro horas antes de leer; y si quisiere graduarse de Bachiller a título de suficiencia, aya de leer media hora de dicho punto; y el Secretario en la escritura del Grado notará, si éste es a título de suficiencia o con prueba de cursos.⁵¹⁵

De los primeros abogados que aparecen inscritos en el libro matrícula del colegio, al menos 24 se graduaron en la universidad de Valencia con anterioridad a 1733,⁵¹⁶ vigentes las constituciones de 1651.⁵¹⁷ Éstas regulaban

⁵¹⁵ *Constituciones...*, 1733, Cap. X, núm. 19, pág. 84.

⁵¹⁶ A.U.V., *Libros de grados en Leyes y Cánones*. Todos los datos que sobre los grados de esta universidad aparezcan en este estudio se habrán sacado de esta misma fuente.

el tema que nos ocupa en sus capítulos XII a XXIV, sin prácticamente ninguna diferencia con respecto a las constituciones posteriores por lo que se refiere a las materias. Si bien, las cátedras eran nueve; cinco de Leyes: *Instituta*, *Prima*, *Código*, *Vísperas* y *Digesto Viejo*; y cuatro de Cánones: *Sexto de Decretales*, *Prima*, *Decreto* y *Vísperas*. La única diferencia es que *Sexto de Decretales*, con las materias *De Consuetudine*, *De Iure Patronatus*, *De Sentencia excommunicationis* y *De Usuris*, se substituirá en 1733 por *Instituta* canónica. Las he relacionado aquí según la importancia que se les concedía, de lo que dependía su horario: de ocho de la mañana a cinco de la tarde. En el mismo orden y con el mismo horario aparecerían en 1733.

Los capítulos XVI a XVIII de las constituciones de 1651 dicen así:

XVI. ITEM, que lo primer any de Canons ajen de cursar en Instituta y Decretals, y los tres següents en dos càthedres de la dita facultad, havent de ser precisament la una de aquelles de Decretals y la altra o Decret o Sext o si voldrà les dos de Decretals.

XVII. ITEM, que los estudiants de Lleys lo primer any cursen en Instituta, Prima o Vespres los tres anys següents en dos càthedres de Lleys, com la una sia de prima o vespres.

XVIII. ITEM, que el que voldrà graduar-se en Lleys havent cursat Canons los quatre anys o cursos, sia admés a dit grau de Lleys ab altre curs de dita facultat provant-lo y matriculant-se, y et en contra, cursant en prima y vespres de aquella facultat.

Para analizar los exámenes de grado nos debemos ayudar de las constituciones de 1611,⁵¹⁸ puesto que las de 1651 no eran sino una modificación o adaptación. Con respecto a las de 1733 apenas se observan diferencias. Las conclusiones que mantenían los graduandos, no obstante, eran públicas, lo que se derogó por decisión del claustro de 24 de mayo de 1653.⁵¹⁹

⁵¹⁷ *Constitucions del Estudi General de la insigne Ciutat de València*. En València. Estampades en casa de Claudi Macè, junt al Colegi del senyor Patriarca. Any 1652.

⁵¹⁸ *Constitucions del Estudi General de la insigne ciutat de València*. En Valencia. Estampades en casa de Felip Mey, Impresor de la dita Ciutat. Any 1611. Para exámenes véase cap. XIX, pág. 37.

⁵¹⁹ *Constitucions del Estudi General de València, fetes en diferents juntes del Claustro, segons los Chalendaris de cascuna. Manades imprimir per los Ilustres, Egregis, Nobles, Magnífichs S. S. Nicandro Assio Generós, lurat en Cap per los Nobles y Cavallers, Severino Ginart Ciudadà, lurat en cap dels Ciudadans, Don Luis Lloris y Rocafull, Senyor de Alfarrací, Iuan Navarro, Vicent Ruiz, Francisco Farinós lurats, Pere Iop Périz, Ciudadà Racional, Iusep Gil de Torres Ciudadà, Síndich de la Cambra e Insigne Consell general*. En València per Geroni Vilagrasa,

Como podemos observar, se trata de unos planes de estudios basados exclusivamente en el Derecho romano —especialmente *Instituta*—, con una ausencia total del Derecho patrio, que no se introducirá sino, progresivamente, a través de los sucesivos planes de estudios que iremos viendo.

Universidad de Gandía

La de Gandía fue, después de la de Valencia, la universidad en la que más colegiados se graduaron en términos absolutos. Pero si tenemos en cuenta que esta universidad cierra sus puertas definitivamente en 1772, tras la expulsión de los jesuitas por la real pragmática de 2 de abril de 1767,⁵²⁰ hasta estos años eran más los colegiados graduados en Gandía que en Valencia; de ahí el interés en analizar, aunque sea someramente, su sistema de estudios. Previamente, voy a destacar este hecho en el siguiente cuadro, a través de datos concretos y tomando como último año de estudio 1777, ya que a partir de éste la presencia de graduados en Gandía es meramente testimonial.⁵²¹ Hay que tener en cuenta que los estudiantes que se graduaron en 1772, tras los cuatro años de pasantía, ingresarían en el colegio en 1776 ó 1777.

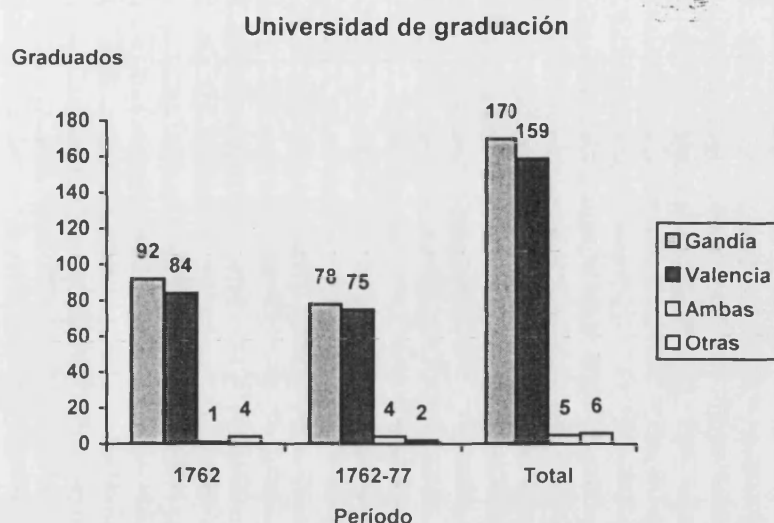
Años	Col.	Grados*	Gandía	Valencia	Ambas	Otras
1762	221	181 (81.90 %)	92 (50.82 %)	84 (46.40 %)	1 (0.55 %)	4 (2.20 %)
62-77	196	159 (81.12 %)	78 (49.05 %)	75 (47.16 %)	4 (2.51 %)	2 (1.25 %)
Total	417	340 (81.53 %)	170 (50.00 %)	159 (46.76 %)	5 (1.47 %)	6 (1.76 %)

*Se trata de los grados conocidos del total de colegiados. Fuente: A.M.V., libros g-1 a g-8 (véase estudios de P. García Trobat). Elaboración propia.

impressor de la Ciutat y de la Santa Inquisició, junt al molí de Rovella, Any MDCLXXIV, fol. 1B. Véase, asimismo, decisiones de 21 de abril de 1652, 18 de julio y 25 de octubre de 1653.

⁵²⁰ P. García Trobat, "Un modelo colegial: Gandía", *Universidades valencianas*, Valencia, 1987, págs. 107-111, en concreto 110.

⁵²¹ Tan sólo fueron cuatro los graduados en Gandía que se colegiaron con posterioridad a 1777. Se trata de Vicente Carbonell Vidal, graduado en Leyes en 1765, que ingresó en el colegio en 1780; Antonio Coussinier Martínez y Vicente Morato, ambos graduados en Leyes en 1769 y 1772, respectivamente, que ingresaron en 1783; y Miguel Gordo Garnería, graduado en Leyes en 1766, que ingresó en 1785. Datos facilitados por P. García Trobat, y obtenidos del Archivo Municipal de Valencia, *Libros de grados de la Universidad de Gandía*, g-2 a g-8.



La supremacía de la universidad de Gandía sobre la de Valencia, tanto en el número de grados que expide en general, como en el número de abogados que habían obtenido sus grados en ella, no significa, ni mucho menos, que estos últimos hubieran estudiado en sus aulas. Como demuestra Pilar García Trobat, existe una fuga académica de estudiantes que, habiendo cursado sus estudios en otras universidades, especialmente en la de Valencia, deciden presentarse al examen de grado en la de Gandía. Ello se debe fundamentalmente a tres motivos: el bajo coste económico del grado, la facilidad en su obtención, y el descuido o tolerancia a la hora de comprobar los cursos obtenidos en las universidades en que se cursaron los estudios.⁵²²

La obtención del grado en Gandía suponía el desembolso de tan sólo una cuarta o quinta parte de lo que suponía en Valencia, y la falta de rigor en su obtención se demuestra, entre otros, en el hecho de que prácticamente siempre se obtenía el de bachiller y el de doctor en el mismo día. De ahí el interés de la universidad de Valencia en desacreditar los títulos obtenidos en Gandía. Las continuas quejas de Valencia ante las "tropas de médicos y

⁵²² M. Peset, M^a Fernanda Mancebo, M. Martínez y P. García Trobat, *Historia de las ...*, II, 1994, 180-186. P. García Trobat, "La Universidad de Gandía: ¿fuga académica?", *Doctores y Escolares, II Congreso internacional de historia de las universidades hispánicas*, 2 vols. Valencia, 1995, II, págs. 183-193. M. Martínez Gomis, "Gandía ante la reforma carolina: el proyecto de plan de estudios de 1767", *Universidades españolas y americanas*, Valencia, 1989, 45-68, pág. 50.

letrados" que se graduaban en Gandía, "con menoscabo de esta universidad de Valencia",⁵²³ se saldaron definitivamente con la clausura de la gandiense.

En cifras, de los 179 colegiados graduados en Gandía, todos obtuvieron los dos grados de bachiller y doctor. De ellos nos costa que 161 — esto es, el 89.95 %— los obtuvieron el mismo día. Para los 18 restantes colegiados —esto es, el 10.05 %—, graduados todos entre los años 1770 y 1772, la diferencia entre ambos grados es de 2 a 12 días, con una media que no llega a cuatro días. Es más, de los cinco que se graduaron en ambos derechos tres lo hicieron con un día de diferencia, otro con dos días y el otro con dos años y ocho meses.

En cuanto a los planes de estudios, poco podemos decir. Las constituciones de la universidad de Gandía son más antiguas que las de Valencia que hemos estudiado, pues datan de 1569. No obstante, todo parece indicar que con el tiempo se fueron modificando, si bien no conocemos el sentido de estas reformas, por cuanto las constituciones siempre las formaron únicamente los religiosos de la Compañía, sin ningún tipo de publicación. La regulación de los grados de Leyes y Cánones aparece en la constitución decimosexta que, escuetamente, decía así:

Si por caso se ouiere alguno de graduar en la presente universidad en leyes o en cánones, se haga de la manera que se sigue. Para bachilleres en leyes ninguno sea admitido, sino ouiere oydo cinco años leyes o la mayor parte de cada uno dellos, y para bachiller en cánones, quatro años cánones en la universidad en donde ay curso dellas.

Para ser graduados de bachilleres en las dichas facultades ayan de leer dos liciones públicas en la facultad en que han de ser graduados, y después ayan de hazer el examen secreto, leyendo un texto de la facultad, en que se hizieren bachilleres y sobre él le mouerán dudas y argumentos los examinadores y siendo hallado suficiente se le dé el grado.

El grado de doctor no se dé sino a quien fuere bachiller en la misma facultad.

Para el examen primero lea dos liciones públicamente, después de lo qual le darán dos puntos, que prouea dentro de veynte y quatro horas, a la manera que se a dicho de los maestros en artes en la constitución 13ª y sobre los dos puntos harán el examen secreto y siendo hallado sufficiente le darán el grado.⁵²⁴

⁵²³ Palabras del pavorde de la universidad de Valencia Juan Bautista Ferrer. Véase P. García Trobat, "Un modelo...", pág. 108.

⁵²⁴ P. García Trobat, *El naixement d'una universitat: Gandia*, Gandía, 1989, pág.111-112.

Aunque los primeros grados que expidieron estas facultades datan de 1640, para Cánones, y 1642, para Leyes,⁵²⁵ no es hasta el siglo XVIII cuando se crean cátedras para ambas facultades. En 1700 se fundó una de Leyes y otra de Cánones. En 1742 otra más para cada facultad, y en 1747 dos para Cánones y una para Leyes.⁵²⁶

Por carta orden de 19 de septiembre de 1767, se ordenaba a las universidades de la Corona de Aragón reformar sus planes de estudios. El claustro de la de Gandía redactó un proyecto que nunca llegaría a aprobarse, por la extinción de la universidad por el real decreto de 11 de agosto de 1772. Pero es interesante que veamos las características más importantes, en cuanto a los estudios que establecía para Jurisprudencia.⁵²⁷

Ambas facultades formarían una, para ayudarse mutuamente, con cuatro cátedras de Leyes y tres de Cánones.

Los estudios de Leyes durarían cuatro años. En primero, el catedrático canónico explicaría *Instituta* de Justiniano, "haciendo a sus discípulos que lo digan en el aula al pie de la letra",⁵²⁸ así como las noticias históricas de las *Antigüedades Romanas* de Heineccio, acomodadas a la *Instituta*. En segundo, el catedrático de Prima explicaría los títulos de las *Pandectas*, "haciendo que los discípulos lean las leyes contenidas en ellos y traigan la lección al aula", acompañándolo de lo que el mismo Heineccio tratare sobre cada título, y de lo que paralelamente estuviere prevenido en las Leyes y Práctica de España. En tercero, y hasta Navidad, el catedrático de Vísperas explicaría los títulos del *Código*, *Auténticas* y de *Usibus Feudorum*, "obligándolos [a los estudiantes] a que de viva voz, y mejor por escrito, digan en el aula la substancia y contenido de cada título del *Código*, *Auténticas*"; para lo que se ayudarían de la *Expositio Titulorum utriunque iuris* de Sebastián Brant, señalando el catedrático qué leyes de Justiniano están recibidas o cuáles derogadas en España. A partir de enero se volvería a explicar a Heineccio en *Elementa iuris Civilis*. Y, finalmente

⁵²⁵ P. García Trobat, "Los grados de la universidad de Gandía (1630-1772)", *Universidades españolas y americanas*, Valencia, 1987, págs. 175-186, en concreto pág. 182.

⁵²⁶ M. Martínez Gomis, "Gandía ante...", pág. 49. Este autor toma como referencia a P. Sanz y Forés en *Historia del Colegio y Universidad de Gandía*, Gandía, 1970.

⁵²⁷ A.H.N., *Consejos*, legajo 6.861, núm. 11.

⁵²⁸ A.H.N., *Consejos*, legajo 6.861, núm. 11, pág. 33 B, párrafo 61.

en cuarto, el catedrático supernumerario dictaría un buen compendio de la *Práctica* de Paz, con todas las fórmulas de las demandas, sentencias y autos interlocutorios y definitivos de todos los juicios.

Al mismo tiempo, los escolares acudirían durante los tres primeros años a una academia de teórica, presidida por un bachiller, en la que estudiarían y disputarían las *Varias* de Antonio Gómez, y algún tratado de los académicos del Puga o de las "qüestiones ilustres de el Valencia". En cuarto acudirían a otra academia de práctica forense, bajo la presidencia de otro bachiller señalado por el canciller.

El párrafo 66 preveía que los civilistas acudieran desde el segundo año de Leyes a las tres cátedras de Cánones.⁵²⁹ En el primer año, el catedrático de Prima explicaría la más breve y compendiosa *Instituta* canónica, de entre los compendios de Pitchler, Gasparro, Hut o Phebeo. Los estudiantes llevarían la lección al aula, que explicaría el catedrático a voz viva, anotándoles las leyes y costumbres eclesiásticas de España, y el origen histórico de las disposiciones canónicas, por Thomasino, Wan Espen o Rutprec en *Notes Historicis ad ius Canonicum*. En el segundo año, el catedrático de Vísperas leería un compendio de las *Decretales*, concordando el *Sexto*, *Clementinas*, *Extravagantes* y Concilio Tridentino, sin excitar cuestiones, sino sentando positivamente las conclusiones fijas que se deducen de cada título de las *Decretales*, añadiendo lo que sobre cada una de estas disposiciones legales ha añadido o reformado el *Sexto*, *Clementinas* y Concilio de Trento. Para ello se proponía como modelo a Eusebio Amor en *Clemente iuris Canonici*. "Procurará el cathedrático que los discípulos le den por escrito la *synopsis analíticos* que ellos formen en sus quartos de el título respectivo, o títulos de que llevar la lección diaria al aula". La tercera cátedra se encargaría de explicar todo el *Decreto* de Graciano, durante los tres años, de la siguiente manera: en el primer año las 101 distinciones; en el segundo las 33 causas, hasta el tratado de penitencia; y en el tercero, el tratado de penitencia, causas restantes, y las cinco distinciones de "consecraciones", con los cánones apostólicos y penitenciales que se encuentran al final del *Decreto*.

⁵²⁹ A.H.N., *Consejos*, legajo 6.861, núm. 11, pág. 35.

De haberse aprobado, se hubiera constituido en un plan de estudios más avanzado que el de Valencia, en el sentido de que, aunque sin profundizar, introducía el estudio del Derecho nacional, en línea ya con las corrientes racionalistas y las ideas ilustradas que inspiraban la reforma universitaria de Carlos III.

Otras universidades

La presencia de las demás universidades es meramente testimonial, incluso la de Orihuela.⁵³⁰ De los 535 incorporados de graduación conocida durante el XVIII, tan sólo nos consta que 8 —un 1.49 %— se graduaron en otras universidades diferentes a las de Valencia y Gandía. De ellos cinco en la de Orihuela, uno en Salamanca, otro en Zaragoza y el otro en Cervera.⁵³¹ Del siglo XIX sólo tengo constancia de un individuo graduado en Orihuela. Debido a que el número de colegiados cuya graduación desconocemos no es muy considerable (104 de los 864, esto es, el 12.03 %), creo que estos datos demuestran claramente que el abogado valenciano había estudiado, casi con exclusividad, en su país.

Pasantía

Como hemos visto, la universidad formaba a los juristas exclusivamente en Derecho canónico y, sobre todo, romano, con una ausencia total del Derecho patrio. Éste no se introduce efectivamente en las universidades españolas hasta los planes de estudios derivados de la real cédula de Carlos III de 24 de enero de 1770. La enseñanza que se impartía hasta ahora en las universidades no tenía ninguna relación con el mundo de la abogacía o de la judicatura. Además, el latín y el método escolástico tampoco propiciaban la formación más idónea para la ejercicio en el foro.

⁵³⁰ Ampliamente estudiada por M. Martínez Gomis. Véase *La Universidad de Orihuela 1610-1807*, 2 vols., Alicante, 1987; "Los orígenes de la Universidad de Orihuela", *Universidades valencianas*, 1987, 113-120; e *Historia de las universidades valencianas*, 2 vols., Alicante, 1993, II, págs. 7-152.

⁵³¹ En cuanto a la universidad de Salamanca la bibliografía es extensa; véase en M. y J. L. Peset Reig, *El reformismo de Carlos III y la Universidad de Salamanca*, Salamanca, 1969, págs. 7-9. En cuanto a la de Zaragoza véase J. Borao, *Historia de la Universidad de Zaragoza*, Zaragoza, 1987, o A. Ubieta Arteta, *Historia de la Universidad de Zaragoza*, Madrid, 1983. Para la de Cervera véase J. Prats i Cuevas, *La Universitat de Cervera i el reformisme borbònic*, Lleida, 1993.

La discordancia entre el saber académico y la realidad práctica de los tribunales se intentaba subsanar a través de la pasantía, o práctica privada, que se llevaba a cabo en el despacho o bufete de algún abogado aprobado. De ahí la estrecha conexión entre los conocimientos adquiridos en la universidad y la duración de la pasantía; a mayor estudio del Derecho nacional se entendía que debía ser menor la duración de la práctica. Pero debemos tener en cuenta que esta práctica sólo se exigía para los futuros abogados, en ningún momento para los miembros de la judicatura. Cuando hablamos del aprendizaje de la "práctica", en oposición a la "teoría" de las universidades, nos referimos tanto a los usos y técnicas de que se valían los tribunales en la administración de la justicia, como al estudio de la legislación —real— que estos tribunales efectivamente debían aplicar en sus sentencias. De hecho, en el siglo XVIII era común distinguir entre un Derecho teórico —el romano— y otro práctico —el patrio—. ⁵³²

En el momento de la fundación del colegio la pasantía tenía una duración de cuatro años.⁵³³ Su origen hay que buscarlo en la segunda de las *Leyes de Toro*, que dice así:

Porque nuestra intención y voluntad es que los letrados en estos nuestros Reynos sean principalmente instructos e informados de las dichas leyes de nuestros Reynos, pues por ellas y no por otras han de juzgar. Y a nos es echa relación que algunos letrados nos sirven y otros nos vienen a servir en algunos cargos de justicia sin haber pasado ni estudiado las dichas leyes y ordenamientos y pragmáticas y partidas: de lo qual resulta que en la decisión de los pleitos y causas, algunas veces no se guardan ni plactican las dichas leyes como se debe guardar y platicar, lo qual es contra nuestro servicio. Y porque nuestra intención y voluntad es de mandar, recoger y enmendar los dichos ordenamientos para que se hayan de imprimir y cada uno se pueda aprovechar de ellos. Por ende por la presente ordenamos y mandamos que dentro de un año primero siguiente y dende adelante contado desde la data dellas nuestras leyes todos los letrados que oy son o fueren, así del nuestro Consejo, o oydores de las nuestras audiencias y alcaldes de la nuestra casa y corte y chancillerías do tienen o tuvieren otro qualquier cargo y administración de justicia así en lo realengo como en lo abadengo, como en las órdenes y behedrias como en otro qualquier señorío de estos nuestros Reynos, no pueda usar de los dichos cargos de justicia, ni tenerlos sin que primeramente hayan pasado

⁵³² M. Torremocha Hernández, "La formación de los letrados...", págs. 515 y 522.

⁵³³ Algún autor cree que la duración de la pasantía en cuatro años viene fijada por un auto acordado de 26 de abril de 1616, pero no lo he podido constatar.

ordinariamente las dichas leyes de ordenamientos y pragmáticas, partidas y fuero real.⁵³⁴

Son pocos los datos que tengo sobre el funcionamiento de las pasantías. Es difícil discurrir sobre las tareas que realizaban los pasantes, sus horarios, sus posibles honorarios... La bibliografía al respecto es más que escasa. Muchos años antes, Melchor de Cabrera y Núñez de Guzmán ya manifestaba, en su *Idea de un Abogado Perfecto*, lo siguiente:

Esta asistencia de los Passantes les es de mucha vtilidad, porque ven los pleytos, examinan la justicia, ajustan los puntos de derecho, del qual, y del hecho hazen relación a los Abogados, que por este medio se enteran de los negocios, y hallando justificación entran en la defensa; y de otra manera los desestiman, desengañando al interessado ... escriben las peticiones e informaciones en derecho, y las ayudan a estudiar. Esta asistencia y manejo de negocios es el mejor y más efectivo Maestro de la práctica y estilos de los Tribunales, pues con ella salen los Passantes con la suficiencia necessaria para entrar en la Abogacía, y con bastantes experiencias para no estrañar qualesquiera negocios, como se ve en los mayores Abogados que todos o los más han corrido esta vereda.⁵³⁵

Según los estudios llevados a cabo por Mariano Peset, parece ser que las condiciones de los pasantes dependerían en gran medida de las exigencias del abogado que libraría la certificación de asistencia. Opina este autor que no serían muy trabajosas, ya que se podían compatibilizar con ejercicios y actos de la universidad, con lo que seguramente durarían un par de horas al día. En ellas "leerían los prácticos —Gómez, Molina sobre mayorazgos, Hevia de Bolaños, Paz—, así como los ordenamientos patrios; estudiarían los pleitos y usarían de los formularios, ayudando en la confección de escritos y preparación de intervenciones orales al maestro. Algunas veces le consultarían u oirían".⁵³⁶

Antonio Risco opina que el horario de los pasantes era más extenso, y ya no sólo por la mañana, sino que frecuentemente se alargaba a la tarde. Lo que demuestra a través del memorial del licenciado Francisco Joaquín Herreros, en el que éste solicitaba la *jubilación* excepcional prevista en los

⁵³⁴ *Los Códigos Españoles concordados y anotados*, 12 vols., Madrid, 1848-1851, VI, pág. 558.

⁵³⁵ M. de Cabrera y Núñez de Guzmán, *Idea de un Abogado Perfecto*, Madrid, 1683, pág. 3.

⁵³⁶ M. Peset, *La formación de los juristas...*, pág. 616.

estatutos de la Junta de Jurisprudencia Práctica —de la que después trataremos—. En este memorial, el referido licenciado manifestaba que su jornada era de siete de la mañana a una y media de la tarde, y de tres a once de la noche.⁵³⁷ Aunque es probable que exagerara, o fuera un caso excepcional, los miembros de esta Junta manifestaban en 1743 su deseo de tener libres las tardes de cada día, lo que da a entender que, al menos, no las tenían todas.

Al parecer, existía una distinción, por antigüedad y consecuentemente por el trabajo a desarrollar, entre el simple "pasante" y, por encima de él, el "pasante de pluma", que podría equivaler a lo que ellos llamaban *amanuense*, y que se encargaría de la redacción de los escritos jurídicos. En cuanto a las retribuciones, si las había, García Venero manifiesta que "la pasantía, entonces, servía a los intereses de los abogados ya establecidos, tanto por el trabajo obtenido con mínima retribución, quizá a veces sin ésta, y en ocasiones por el solo sustento".⁵³⁸ Pérez y López, en su *Teatro de la legislación*, equipara al pasante y al escribiente cuando la *Nueva Recopilación*, en referencia a sólo estos últimos, establece que no lleven propinas ni salarios, y que en las informaciones lleven lo que sea justo.⁵³⁹

Los expedientes de incorporación de los abogados en el colegio no tratan este tema. Tan sólo hay alguna referencia en los expedientes de los colegiados que se acogieron a la providencia del Supremo Consejo de 28 de junio de 1765, por la que se dispensaba del estatuto XIX a todos aquellos que, al tiempo de la fundación del colegio, habían empezado a tomar la práctica. En estos expedientes se incluye una escueta certificación del abogado para el que trabajaba el pasante, en la que acredita el tiempo exacto durante el que tuvo a su servicio al graduado, y que es al menos de cuatro años. En ellas se incluye expresiones como estas: "asistiendo por mañana y tarde con toda puntualidad y desempeñando las obligaciones de su empleo", o "a fin de habilitarle y poder lograr con él algún descanso en mi estudio, le puse en mi bufete para pasante

⁵³⁷ A. Risco, "Los trabajos y los días de un pasante letrado en Madrid, hacia 1756", *Revista crítica de Derecho Inmobiliario* 1983-II, 1517-1527.

⁵³⁸ M. García Venero, *Orígenes y vida del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, Madrid, 1971, pág. 147. Véase también M. Torremocha Hernández, "La formación de los letrados...", pág. 522.

de pluma un año antes de que obtuviera el grado mayor de leyes".⁵⁴⁰ Lo que sí está claro, según estas certificaciones, es que todos los pasantes, al poco de iniciarse en la práctica, ya ejercían en los tribunales eclesiásticos y en los demás no dependientes de la Real Audiencia.

Conocemos algunos datos sobre el estado de la pasantía en la ciudad de Valencia en 1762, como consecuencia de la real ordenanza de 12 de junio relativa a la quinta de ese año. Esta ordenanza contemplaba el alistamiento de los familiares de los facultativos "en quanto a los mozos solteros, hijos, criados y familiares que no gozen de hidalguía, fuero eclesiástico o título de grado"; paralelamente, cada uno de los colegiados podría reservarse un oficial escribiente, en el caso de no tener pasante. A este efecto, los individuos del colegio debían comunicar a la autoridad —entre otras cosas—, el número de escribanos y pasantes que tenían en sus despachos, sus nombres y apellidos, grados, parroquia y calle donde vivían, edad y estado.⁵⁴¹ Visto así, lo más probable es que los colegiados contabilizaran a la baja el número de sus pasantes, pues estaban exentos por su graduación, y lo que les interesaba era la exención de los escribientes. Hay que tener en cuenta que uno de los privilegios de los abogados era el estar exentos de ir a la guerra, y como la nobleza del abogado, por ser personal, no permitía la extensión de este privilegio a sus hijos, la misma norma de 1762 permitía, en compensación, su exención si trabajaban como escribientes de su padre.⁵⁴² Con los años, todo indica que desapareció esta exención para los escribientes, fueran o no hijos del abogado. Y así se entiende que la junta de 1 de abril de 1773 manifestara lo siguiente:

...fue acordado, que mediante hallarse en esta ciudad la real orden de quinta, en la que por lo literal de la ordenanza para su gobierno no se pone expresa exención a favor de los hijos de abogados, como otros la tienen, y considerando que en esta ciudad no es posible por

⁵³⁹ A. J. Pérez y López, *Teatro de la legislación universal de España e Indias*, 28 vols., Madrid, 1791-1798, XXII, pág. 181; en relación a la N. R., 2, 16, leyes 19, 21 y 29.

⁵⁴⁰ A.I.C.A.V., caja 12, año 1765, expediente nº 4, folio 1; y año 1766, expediente nº 1, folio 1, respectivamente. También, de la misma caja, año 1766, exp. nº 1, fol. 1; exp. nº 7, fol. 1; año 1767, exp. nº 5, fol. 1; exp. nº 6, fol. 2; exp. nº 7, fol. 2; año 1772, exp. nº 3, fol. 2; o año 1774, exp. nº 5, fol. 1.

⁵⁴¹ A.I.C.A.V., caja 4, exp. nº 3, hojas sin número; y libro 4, juntas particulares de 9, 10, 16 y 20 de julio de 1762.

⁵⁴² J. Berní y Catalá, *Resumen de los privilegios...*, privilegio XLI, págs. 86 y 87.

lo común que los individuos de este Colegio puedan estar asistidos de pasantes para el despacho de sus respectivos asuntos, se represente a su Magestad suplicando la esención del servicio de quinta a favor de los hijos de abogados colegiales y de un escriviente cada uno...⁵⁴³

Es decir, ya que los graduados —entiéndase pasantes— continuaban gozando del privilegio de exención de quintas, lo que les interesaría ahora a los colegiados sería mantener los antiguos privilegios de exención para los hijos y un escriviente. Para ello alegarían su utilidad, y aun necesidad, ante la —según ellos— escasa implantación de la pasantía en la ciudad de Valencia.

No obstante, por real orden de ese mismo año se replicaba a esta pretensión con las siguientes palabras:

Enterado S. M. de todo, ha venido en declarar que, aunque es cierto que los abogados gozan una especie de nobleza personal, ésta no trasciende a sus hijos si ellos no la adquieren con su estudio y letras, por lo que se ha servido denegarles su pretensión, mandando se les incluía en el sorteo, a menos que por algún título legítimo gocen esención.

Tampoco quiere el rey que se exceptúen los escrivientes de los citados abogados, por ser expresamente contra lo establecido en el artículo 29, párrafo 5 de la ordenanza de reemplazo, y porque a los abogados más útil les es tener pasantes que aprendan con ellos la práctica forense, y estén graduados de bachiller en universidad aprobada, los cuales por sí mismos sean exentos conforme a ordenanza.

Y para que a esos abogados no les falten pasantes facultativos sin necesitar amanuenses, tomará S. M. providencia general, la qual entenderán por la vía correspondiente.⁵⁴⁴

En el memorial que el secretario del colegio formó en 1762, en base a la información que le remitieron los colegiados, se contabilizan un total de 152 abogados colegiados. De éstos, sólo podemos tener en cuenta 132, pues los restantes se hallaban fuera de la ciudad o bien no habían remitido todavía la esquila informativa. Los 75 pasantes que había en total quedaban distribuidos entre los 132 colegiados de la siguiente manera:

⁵⁴³ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 126 B-127.

⁵⁴⁴ A.I.C.A.V., caja 4, exped. 3, hoja sin número.

Sin pasante	102 abogados
<u>Con pasante</u>	<u>30 abogados</u>

1 pasante	16 abogados
2 pasantes	3 abogados
3 pasantes	4 abogados
4 pasantes	1 abogado
5 pasantes	3 abogados
6 pasantes	1 abogado
7 pasantes	1 abogado
9 pasantes	1 abogado

total: 75 pasantes	132 abogados
---------------------------	---------------------

De estos 75 pasantes, 39 se colegiaron posteriormente, pues aparecen anotados en el libro de matrículas. La mayor parte de ellos eran doctores en leyes por la universidad de Gandía.

En cuanto a los escribanos, prácticamente todos los abogados tenían uno. Muy pocos no tenían ninguno, y excepcional era el abogado que tenía más de uno: en concreto, tres de los abogados tenían dos escribanos⁵⁴⁵ y otro tres. Este último incluye como tal a Vicente Carrey, que consta al mismo tiempo como pasante, y que se colegiará en su momento.

Toda esta información me hace pensar que las funciones del pasante y del escribano coincidían en numerosas ocasiones, llegando incluso a confundirse, especialmente cuando aparece el término “pasante de pluma”, o incluso “escribiente pasante de pluma”. Así por ejemplo, el abogado Pedro Salvador decía que sus pasantes —cinco— eran “de pluma, pues yo no uso de escribiente”; o Antonio Berenguer, que decía tener un escribiente —su hermano—, “que me asiste en mi estudio de abogado por no tener pasante de pluma”. De cualquier manera, las posibilidades podían ser múltiples. Hay abogados que tienen como pasantes a sus hijos; otros pasantes viven en casa del abogado, pues son al mismo tiempo preceptores de sus hijos; otros, que son bachilleres, continúan sus estudios al tiempo que realizan la práctica; otros acuden a una de las academias públicas de práctica... Juan Bautista Nebot declaraba no tener ningún pasante y dos escribanos: “un estudiante de leyes y

⁵⁴⁵ Uno de ellos, Manuel Albert, manifestaba tener un escribano “y en cuanto al tribunal de padre de huérfanos me asiste otro”.

otro que en ausencia de éste escribe". Era habitual que en casa del abogado se alojara algún estudiante de fuera de la ciudad, como mandado o sirviente, y que podía trabajar en ocasiones de escribano. Francisco Nadal, con respecto a uno de sus tres pasantes, decía, que "de Sacristán me valgo para trabajos en las madrugadas, días de fiesta y muchas veces a las horas del despacho, por no estar para aguantar la tarea de mi estudio el escribiente antiguo que me asiste, por su avanzada edad y cortedad de vista". Más claro era Luis Antonio Ortells, que decía, que "pasante tengo uno que me sirve de escribiente". Incluso, Tomás Salelles declaraba como escribiente a su hijo, doctor en leyes e incorporado en el colegio. De hecho, en su asiento en el memorial, éste último abogado aparecía como simple asistente de su padre.

En definitiva, el trabajo de pasante no estaba en absoluto delimitado, de forma que en la práctica se basaba en gran medida en ocupaciones que hoy entendemos propias de los escribientes o *amanuenses*.

Podemos pensar que el cumplimiento de los requisitos que se exigían para dar por terminada la pasantía no era muy estricto, como tampoco lo eran los abogados cuando libraban los certificados. Así se desprende de algunas manifestaciones del Real Acuerdo de Valencia. En 1772, este tribunal prohibía que la secretaría admitiera los escritos presentados por graduados, solicitando dispensa del tiempo que les quedaba para cumplir los cuatro años de práctica exigidos para presentarse a examen; pues así venía ya prohibido por la real provisión del Consejo de 21 de agosto de 1770. Lo que da a entender que hasta entonces sí se admitían estos pedimentos y, por lo tanto, cabía la dispensa.⁵⁴⁶

En el mismo sentido nos encontramos con esta otra resolución que data de 1787:

Que habiendo observado el Real Acuerdo la poca formalidad que guardan los abogados de este colegio en librar las certificaciones de práctica a sus pasantes, jurando a las veces haver asistido a sus estudios en los quatro años que dispone el *derecho* desde el día en

⁵⁴⁶ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 67, págs. 35 y 139. No obstante, al bachiller en Leyes, Juan Quintano Ruiz, se le tramitó en 1795 su petición de recibimiento a examen faltándole diez meses de práctica, en virtud de la dispensa concedida por real cédula. Véase libro 90, folio 161 B. A José Díaz el secretario de Gracia y Justicia también le dispensó, en 1809, el tiempo que le quedaba para recibirse. Véase libro 104, folio 64.

que obtuvieron los grados, o desde el inmediato, quando muchos les han logrado en otras universidades distintas de la de esta ciudad, siendo por consiguiente preciso gastarse algunos días en el camino para llegar a presentarse a los letrados, de cuya dirección entran a ejercer la pasantía, sin que se tome razón o forme asiento del día que la comienzan. Y para el remedio de estos abusos, habiendo ohído sobre ello en voz al fiscal de su magestad, mandaron: que los abogados del colegio de esta ciudad, en las certificaciones que dieren de práctica en lo sucesivo sean con referencia al libro que deberán tener en sus estudios, en los que haya de constar con toda claridad y distinción el día que entraren en ellos los pasantes, años, meses, semanas o días que han asistido a ejercitarse en la pasantía, y los que han faltado por ausencia, enfermedad y qualquiera otra causa, para que de esta forma pueda saberse con puntualidad si se encuentran completos los quatro años al tiempo de pedirse la aprobación de abogados, con prevención de que los que lo contrario hicieren serán castigados con todo rigor en el caso de advertirse alguna omisión en ello.⁵⁴⁷

Me inclino a pensar que estos años se entendían, por lo menos hasta ahora, como naturales, y no como efectivos. De hecho, en las informaciones sobre las quintas de 1762, algunos abogados manifiestan que sus pasantes habían regresado a sus pueblos de origen a pasar las vacaciones o, incluso, a realizar los trabajos agrícolas de verano.

Ya en el siglo siguiente, la real orden de 29 de agosto de 1802 —que más adelante estudiaremos—, también se hacía eco de esta falta de seriedad, al disponer que después de los años de universidad, todo graduado

acredite haber tenido por dos años la pasantía (a que se reduce a partir de ahora) en el estudio de algún abogado de Chancillería o Audiencia, asistiendo frecuentemente a las vistas de los pleitos en los tribunales; lo que certificarán los Regentes de ellos, a quienes avisarán los abogados de los pasantes que reciban, para que les conste y puedan celar y certificar su asistencia, a fin de evitar los fraudes que en esto se cometen continuamente.⁵⁴⁸

A partir de la introducción del Derecho patrio en la universidad de Salamanca, con el plan de 1771, se permitió a sus estudiantes substituir hasta dos años de la pasantía por otros tantos de estudio de Derecho real (*Nueva Recopilación y Leyes de Toro*), e Instituciones canónicas (*Decretales o*

⁵⁴⁷ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 82, págs. 122-123. Véase también 79B.

⁵⁴⁸ S. Sánchez, *Suplemento a la colección de pragmáticas, cédulas, provisiones, circulares y otras providencias publicadas en el actual reynado del Señor Don Carlos IV*, Madrid, 1803, págs. 180 y ss. Véase también en *Novísima Recopilación* 5, 22, 2.

Derecho eclesiástico nuevo). Parecida solución se dio en las universidades de Valladolid y Granada. En esta última se estudiaría en el segundo año Derecho público universal, tanto civil como eclesiástico. Además, los estudiantes de Salamanca gozaban del privilegio, concedido por real provisión de 15 de febrero de 1772, de poder abogar en los tribunales reales y eclesiásticos de la ciudad y provincia sin otro requisito que su grado, con extensión al resto del territorio español presentando el certificado del título en el Consejo.⁵⁴⁹ Pero nada de esto ocurrió en la universidad de Valencia.

Academias de jurisprudencia práctica

Las *academias o juntas de jurisprudencia práctica* se fundaron para facilitar a sus miembros el conocimiento del Derecho nacional y de la práctica forense, y como un intento de subsanar la deficiente enseñanza universitaria en estas materias. Se trata de asociaciones organizadas al margen de la universidad y de sus propias academias, y vinculadas, por contra, a la audiencia o chancillería del lugar. Sus individuos, que podían ser tanto abogados en ejercicio como pasantes, se reunían periódicamente —tal y como venía previsto en unas constituciones—, para razonar y discutir sobre casos y procesos semejantes a los que se tramitaban ante los tribunales.

Muchos juristas de este siglo criticaron el excesivo romanismo de los planes de estudios, al tiempo que propugnaron el aprendizaje del Derecho patrio, como una de las mejores maneras de dar cumplimiento a las continuadas disposiciones que pretendían la aplicación en los tribunales de las leyes patrias, con preferencia al Derecho común.⁵⁵⁰ Evidentemente, estas críticas no provenían de los catedráticos, pues habían sido formados en dichos planes de estudios, sino de aquellos prácticos que actuaban ante los tribunales. Destacan, entre otros, Macanaz en 1713,⁵⁵¹ Medina y Flores en

⁵⁴⁹ C. M^a Ajo G. y Sainz de Zúñiga, *Historia de las universidades hispánicas. Orígenes y desarrollo desde su aparición a nuestros días*, 11 vols., Madrid, 1957-1979, V, págs. 200-201.

⁵⁵⁰ Por auto acordado de 4 de diciembre de 1713 el Consejo de Castilla ordenaba que "...para determinar los pleitos y causas que se ofrecieren se guarden íntegramente las leyes de la Recopilación de estos Reinos, los Ordenamientos y Pragmáticas, leyes de la Partida y los otros Fueros (en lo que estuvieren en uso), no obstante que de ellas se diga que no son usadas, ni guardadas..." *Auto* 2, 1, 1, edición de 1745.

⁵⁵¹ F. Aguilar Piñal, *Los comienzos de la crisis universitaria en España. Antología de textos*, Madrid, 1967, págs. 167-168.

1744,⁵⁵² Ensenada en 1751,⁵⁵³ o Mora y Jaraba en 1748.⁵⁵⁴ Es muy elocuente este último, cuando manifestaba lo siguiente:

Entra en las escuelas de la jurisprudencia un muchacho tierno y dispuesto a imprimirse de todo lo que oye y lee en los libros de Derecho común. Allí encuentra infinitas reglas y principios que, oy por injustos, o porque las cosas variaron en un todo, no pueden acomodarse ni observarse en España. Aprende como verdades infalibles aquellas especies, defiéndelas en la cátedra, explícalas después a sus discípulos, procura por todos medios conciliar los textos civiles con los preceptos de la razón, aunque dentro de sí le dé latidos su propio conocimiento, se afirma tenazmente en aquellas reglas, y estando mezclados en el Derecho común los elementos verdaderos de la jurisprudencia con otras muchas máximas ya derogadas como inútiles o como ridículas, sucede precisamente que unas y otras se le imprimen con tal fuerza que le parece que toda la jurisprudencia vendrá a tierra, si alguno de los principios que ha estudiado le saliera falible. En este estado de creencia inevitable a quantos entran a estudiar el Derecho civil, sale de la universidad, emprende de nuevo el estudio de las leyes de el Reyno, y ve aquí que este jurista teórico se halla con dos dificultades invencibles. La primera, ignorar casi todas las materias principales de la jurisprudencia, y la segunda, hallarse embutido de un millón de principios y especies impracticables y perniciosas en el uso de los tribunales. El primer defecto fácilmente lo conoce, porque hasta las voces de la práctica le parecen peregrinas. El segundo no puede conocerlo mientras no encuentre con el desengaño.⁵⁵⁴

No obstante, todas estas críticas fracasaron, entre otras razones porque ni siquiera el Consejo de Castilla estaba realmente dispuesto a alterar una mentalidad y una práctica, como ésta, gestada a lo largo de siglos. Tampoco quería —o podía— enfrentarse a las universidades, que llegaban a considerar la introducción del Derecho real en sus planes de estudio —o cualquier otra orden del monarca—, como una intromisión en su autonomía y un intento de control por parte del poder real.⁵⁵⁵ No debemos olvidar que si el Derecho romano se estudiaba en esta medida en las universidades es porque su utilidad en el foro era indiscutible; su alegación por los abogados así lo

⁵⁵² F. Canella Secades, "El Derecho español en 1744", *Revista General de Legislación y Jurisprudencia* LII (1878) 353-367 y 481-495.

⁵⁵³ J. Sempere y Guarinos, *Historia del Derecho español*, Barcelona, 1847, págs. 429-430.

⁵⁵⁴ P. de Mora y Jaraba, *Tratado crítico. Los errores del derecho civil y abusos de los jurisperitos*, Madrid, 1748, págs. 172-174. Sobre esta obra véase M. Peset Reig, "Una propuesta de código romano-hispano, inspirada en Ludovico Antonio Muratori", *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Santa Cruz Tejeiro*, 2 vols, Valencia, 1974, II, 217-260.

⁵⁵⁵ M. Peset, "Derecho romano y ..., págs. 302-310.

acredita.⁵⁵⁶ Pero, independientemente de esta cuestión, era en las juntas o academias de jurisprudencia práctica, además de en las pasantías, en donde los graduados aprendían el Derecho real, de ahí que, en principio, no fueran bien vistas ni por las universidades ni por los colegios de abogados. Antonio Risco lo describe claramente:

Il ne fait pas de doute que les Universités ne voyaient pas d'un très bon oeil le développement de ces circuits parallèles d'enseignement, état d'esprit qui allait se manifester avec éclat, quelques années plus tard, lors des enquêtes, tentatives et plans de réforme successifs des études universitaires. Par ailleurs, l'Illustre Colegio —et les avocats qui le formaient— avaient une raison bien précise pour jalouser ces juntas de jurisprudencia dont développement les inquiétait. Le nombre sans cesse croissant d'avocats qui arrivaient à Madrid avait retenu à plusieurs reprises l'attention du Colegio qui cherchait à en limiter l'extension.⁵⁵⁷

Además, las academias "arrebataban a los jóvenes pasantes",⁵⁵⁸ pues posiblemente se computaban los años de estudio que los graduados pasaban en ellas como años de práctica, si bien este extremo no lo he podido comprobar. Así lo cree Antonio Risco, para la Real Academia de Santa Bárbara de Madrid, cuando la real cédula de 20 de febrero de 1763 —por la que se le concedía a esta institución esta categoría y dejaba de ser Junta Práctica de Leyes—, decretaba que "se tengan por actos positivos los que se ejecutasen en ella".⁵⁵⁹ En el mismo sentido, por orden circular de 2 de noviembre de 1787, se computaría como uno de los cuatro años de práctica el curso de Derecho natural y de gentes que la orden de 4 de diciembre de 1780 obligaba a estudiar, en los Estudios de San Isidro, a todos los bachilleres que realizaban la práctica en la corte.⁵⁶⁰ De esta manera se privaba a los abogados de mano de obra barata y abundante, al tiempo que la dedicación de los pasantes dejaba de ser en exclusiva.

⁵⁵⁶ Véase de este trabajo el apartado *Pleitos y Alegaciones*.

⁵⁵⁷ A. Risco, *La Real Academia de Santa Bárbara de Madrid (1730-1808). Naissance et formation d'une élite dans l'Espagne du XVIIIème siècle* (tesis doctoral inédita en castellano), 2 vols., Toulouse, 1979, I, págs 116-117. El subrayado es del original.

⁵⁵⁸ V. de la Fuente, *Historia eclesiástica de España*, III, Madrid, 1855, pág. 445, citado por A. Risco, *La Real Academia...*, I, pág. 117.

⁵⁵⁹ A. Risco, *La Real Academia...*, I, pág. 151. Véase la real cédula en R. Pérez Bustamante e Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, *El Ilustre...*, págs. 240-241.

⁵⁶⁰ A. J. Pérez y López, *Teatro de la Legislación...*, I, págs. 63-64.

No obstante, y en sentido opuesto, en 1772 el colegio de abogados de Madrid informa muy favorablemente al Consejo de Castilla sobre los estatutos de la Academia de la Purísima Concepción, que en este año pretendía su reconocimiento oficial —lo que consiguió al año siguiente—.⁵⁶¹

Según una real provisión de 14 de agosto de 1784, uno de los requisitos imprescindibles para recibirse de abogado en el Real Acuerdo de Zaragoza, era el haber sido miembro de la Real Academia Jurídico Práctica Aragonesa al menos durante la mitad del tiempo de la pasantía. Por decisión de la junta general del colegio de abogados de esta ciudad, de 24 de junio de 1792, se exigiría este requisito, además, para colegiarse. No obstante, esta exigencia sólo afectaba a los que hubieran hecho la práctica en Zaragoza.⁵⁶²

De la misma manera, para examinarse de abogado en la Chancillería de Valladolid se exigía, desde 1788, la asistencia durante al menos dos años a la Academia de Jurisprudencia Nacional de San Carlos.⁵⁶³

Para la Audiencia de Valencia conozco las constituciones de una *Junta y Academia de Jurisprudencia Práctica*, del año 1740. De 1753 datan otras constituciones de la *Junta de Jurisprudencia Práctica, establecida en la Ciudad de Valencia y Estudio del Dr. Don Pedro Salvador y Clemente*. Y de 1770

⁵⁶¹ Su fundación privada parece que se remonta a 1642. Véase J. L. Bermejo Cabrero, *Derecho y Administración Pública en la España del Antiguo Régimen*, Madrid, 1985, págs. 152 y sigs. En concreto, el colegio de Madrid manifestó que, "...pues ocupándose sus individuos en el estudio y ejercicio que prescriben sus capítulos, se logrará sin duda un ventajoso adelantamiento y uso de la Jurisprudencia práctica, y conseguirán los que sean de dicha Academia proveerse de las noticias forenses de los tribunales, y por medio de estos ejercicios resultará más acierto para la dirección y despacho de las dependencias..." (nota 13 de la pág. 153).

⁵⁶² De hecho, en el mismo día 24 de junio de 1792 se denegó la incorporación a dos individuos; a uno por no pertenecer a la academia, y al otro por no haber realizado los exámenes de rigor. La real provisión de 1784 fue confirmada por una carta orden del Real Acuerdo de 8 de julio de 1795. La academia aragonesa fue fundada en 1733, con el principal objeto de que los jóvenes abogados pudieran instruirse en el derecho, tanto castellano como aragonés, profundizando en sus conocimientos de legislación y jurisprudencia. Por real provisión de 21 de mayo de 1770, el Supremo Consejo aprobó la incorporación de esta academia a la de Santa Bárbara de Madrid. Véase L. del Campo Armijo, *El Real e Ilustre...*, págs. 30 y 40-41.

⁵⁶³ M. Torremocha Hernández, "La formación de los letrados...", págs. 519-522. Según esta autora, en 1789 se fundó por la propia universidad de Valladolid la Real Academia de Derecho Real y Público, para hacer frente a las críticas que se vertían sobre las universidades, de que en ellas no se enseñaba el Derecho real. A diferencia de los gimnasios o academias universitarias, para pertenecer a ésta en calidad de académicos se tenía que estar en posesión del grado de bachiller. Los que no lo tuvieran sólo podían ser admitidos en calidad de oyentes. Esta academia pretendía colmar la deficiente formación universitaria en el Derecho real a través de diferentes tipos de ejercicios y, por su escaso éxito entre los graduados, pretendió equipararse a la de San Carlos, lo que consiguió en 1791.

datan otras, modificación de las anteriores. Seguramente, la primera también se trataría de la misma junta.⁵⁶⁴ En las tres se establece una misma finalidad:

...el deseo de aprender; este es el más poderoso incentivo de la aplicación; y como el uno, y el otro se entibian, por lo común, sin el estímulo de la competencia: pareció conforme a la idea de los aplicados, fomentar esta Academia; para que viendo en práctica lo mismo que estudian, logren su deseado fin, que es saber; esto es, ensayarse a solas, antes de salir en público, queriendo más errar de burlas, que después escarmentar de veras ... no basta a tanta materia (la jurisprudencia práctica) sólo un estudio; son indispensables el formal, y el material: en el primero, se prende el derecho; y en el segundo el ritual, y norma para explicarlo: aquel se ve patente en qualquiera libro; y éste, muchas veces en todos no se encuentra: el uno, y el otro se procurarán ventilar en esta Junta, confiando salir de ella a las controversias de la Plaza, sino del todo instruidos en tanto assumpto, a lo menos noticiosos de sus materias.⁵⁶⁵

La Junta de 1740 funcionaba de la manera que paso a explicar. Sus cargos eran los de presidente, vicepresidente, dos jueces, un censor, un fiscal, un relator, un alcalde, un secretario, un vicesecretario y un tesorero. Todos ellos se elegían cada tres meses por el cuerpo de la Junta, de entre una terna propuesta por el presidente para cada cargo, a excepción de los jueces, que eran elegidos directamente por aquél, que a su vez era perpetuo —el presbítero Nicolás Morera—.

El cuerpo de la Junta, que salvo decisión en contra que adoptara ella misma no tenía número determinado, estaba compuesto por graduados en Leyes o Cánones con al menos un año de práctica, justificados ambos extremos por la cartilla de grado y la correspondiente certificación. Además, se les exigía para el ingreso un informe favorable, a cargo del fiscal, sobre su vida y costumbres, así como sobre su aplicación. No hallándose impedimento, tenían que pasar por un examen de teórica y algunas preguntas de Suárez de Paz o de la *Curia Filípica*, que le formularía el presidente. El examen se realizaba en presencia de todos, quienes, en su caso, decidirían admitirle por pluralidad de votos.

⁵⁶⁴ B.U.V., *Varios 143*, núm. 13; *Varios 129*, núm. 13; y *Varios 130*, núm. 7, respectivamente.

⁵⁶⁵ B.U.V., *Varios 143*, núm. 13, pág. 5. Lo arriba transcrito aparece exactamente igual en las dos restantes constituciones, de ahí que, entre otros motivos, seguramente se tratara de la misma institución.

Las principales funciones no protocolarias de cada cargo eran las siguientes:

— El presidente designaba los pleitos —a los que introducía algunas contenciones—, y los abogados encargados de ventilarlos de entre los miembros de la Junta.

— El vicepresidente desempeñaba el cargo del presidente en caso de enfermedad u ocupaciones de éste.

— Los jueces firmaban y rubricaban los autos, y votaban las sentencias, conjuntamente con el presidente, a excepción de aquéllas en las que hubiesen intervenido como abogados, en cuyo caso se elegían otros jueces.

— El censor se encargaba de supervisar la doctrina que los abogados aportaban en sus escritos.

— El fiscal defendía las causas en que intervenía interés o derecho de la Junta, velaba por el cumplimiento de las constituciones, y pedía la imposición de penas en que incurría cualquier miembro. Además, señalaba por turno el abogado actor y el reo de cada causa, y "examinará los processos, notará los defectos que encuentre en orden a actuar, la impropiedad de las voces facultativas, el estilo menos decente en las palabras, assí en las causas, relaciones y expedientes, como también en el decoro de los individuos al Tribunal, el silencio mientras se lee o explica el Presidente, y el término y compostura de todos mientras asisten a la Junta".⁵⁶⁶

— El relator recitaba los procesos y solicitaba los decretos.

— El alcalde estaba a cargo del tribunal conocedor de los recursos y apelaciones.

— El secretario entregaba a las partes los autos, leía los memoriales, ponía los decretos y publicaba las sentencias.

— El vicesecretario sustituía al secretario en caso de necesidad y, además, servía de escribano en el tribunal del alcalde.

— El tesorero o depositario venía obligado a rendir cuentas, siempre que se lo exigieran, de las multas en que incurría cualquier componente de la Junta por el incumplimiento de sus deberes.

⁵⁶⁶ B.J.V., *Varios* 143, núm. 13, constitución XIII.

Los pleitos que se ventilaban eran canónicos, civiles y criminales, y todos los que intervenían en ellos sólo podían basar sus escritos, autos o sentencias en las leyes de Castilla. No obstante, el presidente se encargaba de buscar doctrina con que fundar las sentencias. Además, los abogados debían fundar sus puntos de derecho en al menos tres autores, "arreglándose al modo de decidir que explica Gómez en la Ley. 1 de Toro".⁵⁶⁷

Las principales novedades que presentaban las constituciones de 1753, respecto a las anteriores, eran que desaparecía el cargo de vicesecretario, y el vicepresidente era al mismo tiempo el juez primero. A este último se le elegiría ahora por votación entre los que estuvieran aprobados —si los había en la Junta—. No habiéndolo sería vicepresidente, hasta que hubiera algún aprobado, el más antiguo. Por ausencia de los jueces, desempeñarían sus cargos primeramente los individuos aprobados, por orden de antigüedad de ingreso en la Junta, y en su defecto los no aprobados. Además, los puntos de derecho de los abogados podían ir ilustrados ahora con doctrinas de tres autores o bien de dos y una ley, "que no se devan citar, sino aviéndolas visto originalmente".⁵⁶⁸

En las constituciones de 1770 reaparece el cargo de escribano, y el número de jueces era de cuatro. El primer juez sería también el vicepresidente, y sobre su elección no había modificación con respecto a las constituciones anteriores. Respecto a los otros tres jueces, eran elegidos por el presidente, y eran sustituidos también como en las constituciones de 1753. Cada individuo debía seguir por lo menos dos pleitos. En cada junta el individuo que hubiera designado el fiscal explicaría una acción por Suárez de Paz y dos leyes de la *Recopilación*. En estas constituciones, si alguno quisiera citar en sus puntos de derecho más autores o leyes no habiéndolas visto originales, bastaría con que las citara.

Las juntas o sesiones se celebraban por la tarde y dos veces por semana, salvo en las constituciones de 1740, en que comenzarían a las siete de la mañana desde el primero de mayo al primero de octubre.

⁵⁶⁷ B.U.V., *Varios 143*, núm. 13, constitución XII.

⁵⁶⁸ B.U.V., *Varios 129*, núm. 13, constitución XII.

De los 20 individuos que formaban parte de la Junta en el momento de la publicación de las constituciones de 1753, 10 de ellos ingresaron posteriormente en el colegio de abogados de Valencia. Nos consta que al menos 11 eran pasantes, puesto que se recibieron en el Real Acuerdo entre los años 1754 y 1756. Otros 3 ya se habían recibido (años 1745, 1751 y 1752). En cuanto a las constituciones de 1770, en el momento de su publicación recogían 28 individuos, de los cuales 6 ya estaban colegiados y 8 lo harían en los años siguientes. Nos consta que 16 eran pasantes, puesto que se recibieron desde entonces hasta 1774.

Contrariamente a lo que ocurría en otras ciudades, en ningún momento se exigió en Valencia la asistencia a estas academias como requisito para presentarse al examen de recibimiento ante la audiencia.

Real cédula de 24 de enero de 1770 y plan de 1786

Esta real cédula de Carlos III se enmarca dentro de la gran masa de legislación que pretende una reforma de carácter ilustrado de las universidades españolas. Supuso el primer intento de uniformar los requisitos previos para la obtención de los grados en todas ellas.⁵⁶⁹ Y todo con el objetivo, entre otros y por lo que a nosotros nos interesa, de combatir la excesiva facilidad con la que muchas universidades otorgaban el de bachiller, que se consideraba el más importante, puesto que

...debiera ser un público y auténtico testimonio de la idoneidad del graduado, por lo qual en ningún grado debe ponerse tanto cuidado como en éste, por ser el único que quasi generalmente se recibe por todos los profesores, y el que abre la puerta y da facilidad y proporción, no sólo para la oposición y logro de las cátedras, sino también para los exámenes y exercicio de la abogacía y medicina, en tanto interesan la felicidad, quietud y salud pública; con cuyo motivo la *Ley once, título diez y seis, libro tercero de la Recopilación* llama importante al grado de bachiller, dando a entender, no sólo que la causa pública interesa más en la justicia de este grado que en la de todos los otros, sino también que él es quasi el único importante para los efectos más útiles y comunes...⁵⁷⁰

⁵⁶⁹ C. M.^a Ajo G. y Sainz de Zúñiga, *Historia de las universidades...*, IV, págs. 469 y ss.

⁵⁷⁰ C. M.^a Ajo G. y Sainz de Zúñiga, *Historia de...*, IV, pág. 471.

En los puntos IX y X de la real cédula se establece, que todo el que quisiera graduarse en Leyes o Cánones debía justificar haber estudiado "a lo menos, la Dialéctica en universidad aprobada" y cuatro cursos en la universidad en que solicitaba el grado, además de haber actuado en ellos por lo menos un acto público mayor o menor. El examen sería leer media hora, con puntos de veinticuatro, sobre la ley o decretal que eligiera entre los tres piques, satisfacer a los argumentos que le expusiera cada uno de dos examinadores, y responder a las preguntas sueltas de un tercero. Se contemplaba la posibilidad de que un estudiante con sólo tres cursos quisiera presentarse a examen público del claustro entero de su facultad, en cuyo caso todos los individuos concurrentes podrían hacerle las preguntas que estimaran convenientes. Por otra parte, si un graduado en Leyes o Cánones quisiera graduarse en la otra facultad, debería estudiar dos cursos de la misma y sujetarse a su mismo examen.

La universidad de Valencia adaptó a su manera su sistema de grados, y en general su plan de estudios, a esta cédula en 1786, a través del plan del rector Blasco, aprobado por el mismo monarca el 22 de diciembre del mismo año, y sancionado por el Consejo de Castilla por real cédula de 21 de abril del siguiente.⁵⁷¹ Se trata del último plan inspirado en esta cédula, tras los de Valladolid, Salamanca y Alcalá de Henares en 1771, Santiago en 1772, Oviedo en 1774, y Granada en 1776.

En el plan de Valencia las facultades de Leyes y Cánones continuaban separadas. El bachiller en cada una de ellas se estudiaría en adelante en cinco cursos, y no en cuatro como pretendía la citada real cédula. A tenor del capítulo VII del plan, en la facultad de Leyes se estudiaría primeramente un curso introductorio de Derecho Natural y de Gentes, por *Institutiones iuris naturae et gentium* de Juan Bautista Almici. En primero, Historia de la Jurisprudencia Romana, por Carlos Antonio Martini, e *Instituta* hasta el título *De Legatis*, con las notas de Arnaldo Vinnio, las recitaciones de Heineccio y un compendio del *Syntagma antiquitatum romanarum* del mismo, acomodando

⁵⁷¹ *Plan de Estudios aprobado por S. M. y mandado observar en la Universidad de Valencia*. Madrid en la imprenta de la viuda de Ibarra. Año MDCCLXXXII. Véase una copia impresa y su estudio en A. Ten y otros, *Plan de Estudios aprobado por S. M. y mandado observar en la*

cada cosa a su propio título. En segundo, se terminaba *Instituta* con las mismas notas, recitaciones y compendio. En tercero, *Elementa iuris secundum ordinem Pandectarum adornata* de Heineccio. Y en cuarto, Derecho real por las *Instituciones del Derecho civil de Castilla*, de Asso y Manuel, incluida la introducción histórica dedicada a esta legislación. El último párrafo del capítulo VII decía así:

En la enseñanza del Derecho romano omitirán los catedráticos aquellos títulos que tratan de solemnidades, de sutilezas y de cosas que no tienen analogía con nuestra Jurisprudencia. Cuidarán, además, que los estudiantes observen la correspondencia del Derecho civil con el natural, y las diferencias que ocurran entre nuestras leyes y las romanas.

En 1794 se reducirían de nuevo los estudios a cuatro años, con la supresión del Derecho Natural y de Gentes, al parecer ante los temores que suscitaba la revolución francesa y sus consecuencias. Hay que tener en cuenta que el iusnaturalismo racionalista suponía en estos momentos, la existencia de un Derecho desligado de consideraciones religiosas, y de las veleidades de los monarcas. Su origen protestante, y su fundamento racional, hacían que fuera visto con desconfianza por todos aquellos que no deseaban para España las transformaciones que estaba sufriendo el país vecino.

Para la facultad de Cánones —capítulo VIII— también se establecía un primer curso introductorio, común a Leyes y suprimido igualmente en 1794. En los cuatro posteriores se estudiaba Derecho canónico. En primero, *Praecognita iuris ecclesiastici universi*, de Jorge Sigismundo Lackics, y la primera parte de *Ius ecclesiasticum universum*, de Van Espen, hasta el título 24, *De Instituto Regularium*. En segundo, desde dicho título 24 hasta el 16 de la segunda parte de *De aedificandis, consecrandis et reparandis ecclesiis*. En tercero, todos los restantes títulos de la segunda parte. Y en cuarto se estudiará toda la tercera parte junto con Disciplina eclesiástica, por las *Antigüedades Cristianas*, de Lorenzo Selvagio (capítulo IX). El último párrafo del capítulo decía así:

Universidad de Valencia, Valencia, 1984, págs. 77-90. Véase también L. Esteban y Mateo, "El Rector Blasco y la reforma universitaria de 1787 en Valencia", *Saitabi* 23 (1973) 89-102.

Tanto en la enseñanza, como en la nueva edición que se haga de Van-Espen, se omitirá lo que trae particular de Flandes y de otros reynos, y cuidarán los catedráticos de añadir en lugares oportunos los decretos del concilio de Trento y lo que sea propio y peculiar de España conforme a nuestros concilios, concordatos y leyes nacionales.

El examen de bachiller —capítulo XVIII— se practicaba según el sistema seguido hasta el momento, pero con alguna diferencia. La duración de la lección del graduando no sería de un cuarto, sino de media hora; las conclusiones que extrajera del texto tendrían que ser dos, y no una sola; y finalmente, debería responder durante un cuarto de hora a las preguntas que se le hicieran sobre sus cursos estudiados. Además, debían estar presentes todos los examinadores, pudiendo argüir o preguntar los más antiguos si querían. Votarían todos menos el catedrático del curso del graduando, que tampoco podría argüir.

La obtención del grado de doctor en este plan se complicaba mucho con respecto al anterior. Debían sufrirse —palabra literal— tres exámenes. En el primero, que era privado, dos examinadores averiguaban la idoneidad del candidato, a través de las preguntas que estimaban convenientes. Si los examinadores no estaban de acuerdo sobre el resultado se nombraba un tercero. Una vez aprobado se le señalaba fecha para el segundo examen, a celebrar públicamente en el teatro de la universidad. Consistía éste en la defensa de conclusiones de la mayor parte de las materias de su estudio, respondiendo a cuatro argumentos por la mañana y a otros cuatro por la tarde, argüidos por los doctores de la facultad designados por sorteo. Si lo aprobaba pasaba al tercer examen, que consistía en una lección de una hora, a puertas cerradas, sobre el tema que se le hubiera señalado 24 horas antes. Además, tendría que responder a cuatro argumentos que le argüirían los examinadores, sobre las dos conclusiones que hubiera deducido del punto de la lección. Finalmente, y si los examinadores lo estimaban pertinente, podían preguntarle durante media hora sobre las materias que el candidato debía tener estudiadas. De no aprobar se le señalaría fecha para sufrir igual examen.

Los resultados de este plan no se hicieron esperar. Si en el curso que finalizaba en 1786 obtuvieron los grados de bachiller y doctor en Leyes 53 y 33 estudiantes, respectivamente, en el siguiente fueron 33 los que obtuvieron el

de bachiller y ninguno el de doctor. Hay que esperar al curso 1791-92 para encontrar al primer doctor.⁵⁷²

Del cuarto curso de Jurisprudencia Civil, y de los dos párrafos anteriormente transcritos, se deduce un claro interés por el estudio del Derecho real. Sin embargo, la formación en las leyes reales continuaba siendo del todo insuficiente según los deseos de los monarcas Borbones. La finalidad y la duración de la pasantía, por lo tanto, mantenían toda su vigencia. No obstante, y como ya hemos visto, en algunas universidades —Salamanca, Valladolid o Granada— se podían sustituir hasta dos años de pasantía por otros tantos de estudio de Derecho real (*Nueva Recopilación y Leyes de Toro*), o incluso de *Instituciones* canónicas (*Decretales* o Derecho eclesiástico nuevo). Es más, por privilegio de que gozaba la universidad de Salamanca, sus licenciados podían abogar sin ningún año de práctica.

Método de enseñanza

En este plan, y en ambas facultades, los estudiantes tenían como profesor al mismo pavorde o catedrático perpetuo durante los cuatro años de Jurisprudencia. Además, tenían otro catedrático temporal que seguía el curso y repasaba todo lo visto por aquél. El pavorde del curso introductorio también se valdría de otro catedrático temporal que hacía lo mismo, pero ambos sin pasar de curso con los estudiantes.

Una de las grandes novedades del plan Blasco fue la introducción, al margen de los de grado, de los exámenes anuales, que se realizaban a lo largo del mes de junio. Debían asistir todos los catedráticos perpetuos y temporales de la facultad. Aprobado el estudiante, se le daba la matrícula para el año siguiente. Los que no aprobaran serían examinados de nuevo en el mismo mes, y si volvían a suspender repetirían curso al año siguiente. Si en éste tampoco lo aprobaban, se les echaría de la universidad y se pasaría aviso al gobernador de la sala del crimen. Tampoco se les daría la matrícula a los

⁵⁷² M^a. A. Lluch, "Grados en la Universidad de Valencia durante el siglo XVIII", *Universidades españolas y americanas*, Valencia, 1987, págs. 351-360.

estudiantes que hubieran faltado más de diez días a las clases o a los repasos, lo que se sabía por la lista que pasaban los profesores cada día.⁵⁷³

Hasta ahora, el párrafo 16 del capítulo IV de las constituciones de 1733 ordenaba a los catedráticos que dictaban sus lecciones que también las explicaran dentro de la misma hora, para mayor comprensión de los estudiantes. Con el capítulo XI del plan de 1786 se dificultan las clases dictadas, de forma que el catedrático que así pretendiera darlas previamente debería presentar sus disertaciones o notas al claustro de su facultad para su aprobación, bajo multa de trescientos reales al contraventor. Además, de todo lo que se dictara debería dejarse copia en la biblioteca. Con ello, y con la retribución pecuniaria con que el claustro gratificaba los trabajos oportunos, se intentaba estimular la redacción de buenos libros. Y ello porque con este plan se pretendía que las clases, aunque continuaran siendo en latín, se basaran más en la exposición y en la explicación, y no sólo en el dictado. Para ello se tomaría como punto de partida modernos manuales escritos al efecto y no, como hasta ahora, a los autores clásicos y los cuerpos de derecho justiniano y canónico.⁵⁷⁴ Estos manuales no serían todavía elegidos por el profesor, sino los preestablecidos en el plan.

El otro pilar de la enseñanza, junto con las explicaciones o clases ordinarias, había sido tradicionalmente la defensa de conclusiones a través de disputas y argumentaciones. Pero, aunque se recogieron en las constituciones de 1733,⁵⁷⁵ dejaron de practicarse poco después de su publicación, de forma que el plan Blasco ya no hacía ninguna referencia a ellas. Se trataba de que el estudiante preparara la defensa y argumentación de unas conclusiones que previamente el bedel había fijado en las puertas de la universidad. Se defendían cuatro argumentos por la mañana y otros tantos por la tarde; los dos primeros a cargo de estudiantes, y los otros dos a cargo de catedráticos o graduados nombrados por el rector. Lo que se pretendía, en definitiva, era estimular no ya la memoria, sino el discurso de los estudiantes a través de la

⁵⁷³ *Plan de Estudios ...*, cap. XIV, pág. 20.

⁵⁷⁴ M. Peset Reig y J. L. Peset Reig, "El plan de estudios de 22 de diciembre de 1786 y la enseñanza universitaria en Valencia", *Actas del III Congreso de historia de la medicina*, 3 Vols., Valencia, 1969, II, págs. 295-315.

⁵⁷⁵ *Constituciones...*, 1733, cap. XX, págs. 110-111.

discusión. Que éstos depuraran y fijaran los conocimientos-adquiridos en las clases teóricas.

El aprendizaje en el discurso de la disputa se completaba en las academias que las mismas constituciones preveían, y que se dedicaba, asimismo, al repaso de las clases teóricas.⁵⁷⁶ El rector de la academia de Jurisprudencia, al igual que el de la academia de Teología o Medicina, era elegido por el rector de la universidad de entre una terna de estudiantes que, por mayoría de votos, le presentaban los catedráticos de cada facultad. El rector así nombrado era el encargado de designar los demás estudiantes que tenían que argüir en las conclusiones. Esta academia sólo funcionaba en los días "feriados".⁵⁷⁷

* * *

Antes de continuar con el siguiente plan de estudios, ya en el siglo XIX, voy a comentar algunas cuestiones de interés.

Como ya sabemos, hasta estos momentos para recibirse de abogado en los tribunales se había exigido el grado de bachiller, si bien era el de doctor el que confería categoría y prestigio, especialmente dentro de la carrera judicial. Además, este último grado era imprescindible para los que quisieran

⁵⁷⁶ *Constituciones...*, 1733, cap. IV, núm. 21, pág. 65.

⁵⁷⁷ El curso duraba desde San Lucas hasta San Juan en los días no feriados, que eran los siguientes: domingos y fiestas de precepto, los días desde la víspera de Santo Tomás Apóstol hasta el dos de enero, desde el jueves después de la dominica sexagésima hasta el miércoles de ceniza, desde el domingo de Ramos hasta la última fiesta de pascua, y desde el nueve de octubre hasta el veinte del mismo mes, ambos inclusive. También los siguientes días sueltos: San Antonio Abad, San Fabián y San Sebastián, San Valero, San Blas, Santo Tomás de Aquino, San Gregorio, San Marcos, San Bernabé, la víspera del Corpus, la Visitación de Nuestra Señora, San Felipe Neri, la Sangre de Cristo Señor Nuestro, el día de la Octava de Corpus, San Buenaventura, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de los Ángeles, Santo Domingo, San Roque, la Exaltación de la Cruz, Santo Tomás de Villanueva, San Gerónimo, San Francisco de Asís, San Pedro Pascual, la Conmemoración de los Difuntos, el Santo Cristo de la Agonía, San Martín Obispo, la Presentación de Nuestra Señora, San Mauro Mártir, San Nicolás Obispo, Santa Lucía, y los seis días que hay de jubileo en el colegio. Además, sería feriado todo jueves de las semanas en que no concurriera ninguno de los días anteriores, aunque aquí se concedía arbitrio al rector para que pudiera cambiarlo por otro día de especial devoción de la misma semana. Véase *Constituciones...*, 1733, cap. XXVI. En el plan de estudios de 1786 el curso comenzaría el uno de octubre y concluiría el treinta y uno de mayo (capítulo XIII). Se produciría una notable reducción de los días feriados, que serían desde la víspera de la Natividad del Señor hasta el día de la Circuncisión, los tres días de carnestolendas, y desde el miércoles de la semana santa hasta el martes después de pascua. Además del domingo, será

dedicarse a la carrera universitaria. Debo señalar en este punto que las fuentes de la época no prestaban ninguna atención a esta diferente terminología, de manera que en el recibimiento de abogado en el Real Acuerdo, o en los expedientes de incorporación en el colegio, un mismo graduado aparecerá indistintamente en unos trámites con el título de bachiller y, más frecuentemente en otros, con el de doctor, aunque no lo fuera. Incluso con el de licenciado, a pesar de que este título no aparecerá en la universidad de Valencia hasta el siglo siguiente.

Al margen de las particularidades ya vistas que presentaba la universidad de Gandía, podemos ver cómo cada vez son menos los estudiantes que obtenían el grado de doctor en la de Valencia. Para ello he dividido el siglo XVIII en tres períodos:

1. Desde el año 1700 hasta 1748.

En este período nos encontramos con prácticamente las mismas cifras para cada grado (267 bachilleres frente a 274 doctores, para Leyes, y 76 bachilleres frente a 70 doctores, para Cánones). He fijado la división en 1748 porque es a partir del año siguiente cuando se ve claramente la reducción del número de doctores con respecto al de bachilleres: 5 frente a 10, para Leyes; y 2 frente a 5, para Cánones.⁵⁷⁸ El motivo del brusco descenso en el número de doctores que se produce a partir de este año lo desconozco todavía. Hasta ahora había cursos, incluso, en los que la universidad expedía más grados de doctor que de bachiller; posiblemente algunos de los bachilleres examinados provenían de otras universidades.⁵⁷⁹

2. Desde 1749 hasta 1786.

En este período el número de doctores en Leyes fue algo superior a los dos quintos del número de bachilleres (390 frente a 927), mientras que en Cánones la diferencia fue mucho menor (266 doctores frente a 337

feriado un día entre semana que, a discreción del rector, podría ser el jueves y aquellas festividades en que no fuera lícito trabajar.

⁵⁷⁸ M^a. A. Lluch, "Universidades españolas...", pág. 354.

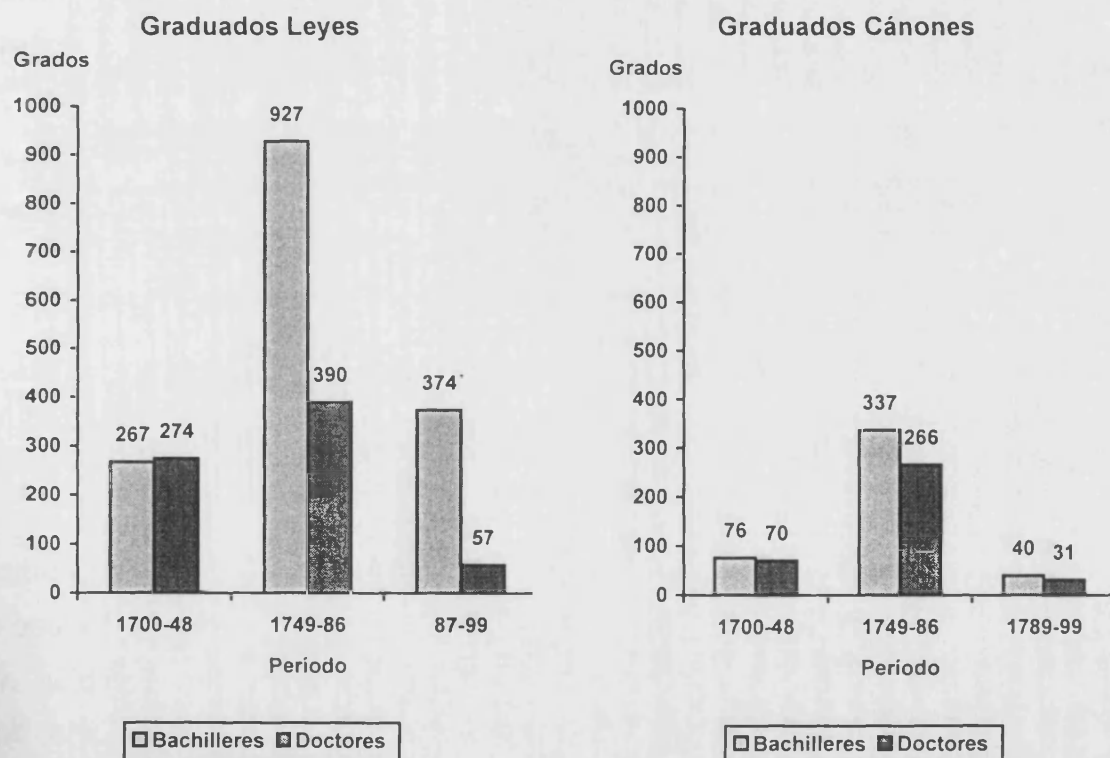
⁵⁷⁹ A título de ejemplo, y para Leyes, en 1703 se gradúan 8 bachilleres y 14 doctores; en 1711, 8 y 10 respectivamente; y en 1740, 1 y 2. En Cánones en 1702, 4 bachilleres y 5 doctores; en 1727, 2 y 3 respectivamente; y en los años 1746 y 1748, ninguno y 1.

bachilleres). En este caso he cortado en 1786 porque de este año data el plan de estudios del rector Blasco que, como hemos visto, tan hondas transformaciones supuso en el examen de doctor.

3. Desde 1787 hasta 1799.

Durante estos años, y como consecuencia del plan de estudios de 1786, el descenso de doctores se agudiza, al menos por lo que a Leyes respecta: 57 frente a 374 bachilleres, esto es, poco más de una sexta parte. En Cánones, sin embargo, hay 31 doctores frente a 40 bachilleres.

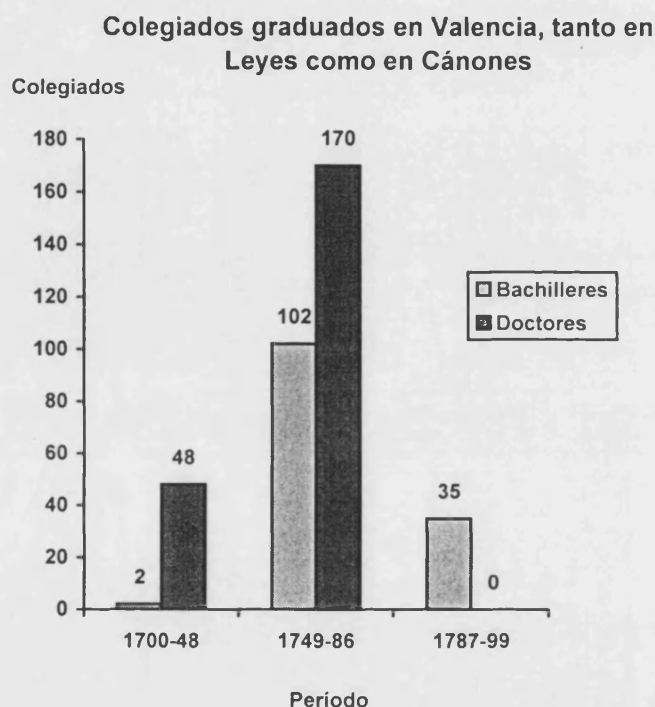
En concreto, quedaría de la siguiente manera:⁵⁸⁰



Refiriéndonos a los grados de los colegiados en concreto, podemos observar cómo sucede lo mismo en los apartados A y C, pero no así en el B.

⁵⁸⁰ Fuente: datos obtenidos por M^a. Ascensión Lluch. Véanse en "Universidades españolas...", pág. 351 y sigs.

De los 50 colegiados con graduación conocida anterior a 1749 —tanto de Leyes como de Cánones— tan sólo 2 nos consta que fueran sólo bachilleres. Y de los 35 colegiados con graduación posterior a 1786 y hasta final del siglo ninguno es doctor. Sin embargo, de los 272 colegiados con grado conocido entre 1749 y 1786 el número de doctores es todavía muy superior al de sólo bachilleres: 170 frente a 102, respectivamente. Posiblemente, todavía era fuerte y atractivo, para el ejercicio de la abogacía, el prestigio que concedía el estar en posesión del grado de doctor. Veámoslo en el siguiente cuadro:⁵⁸¹



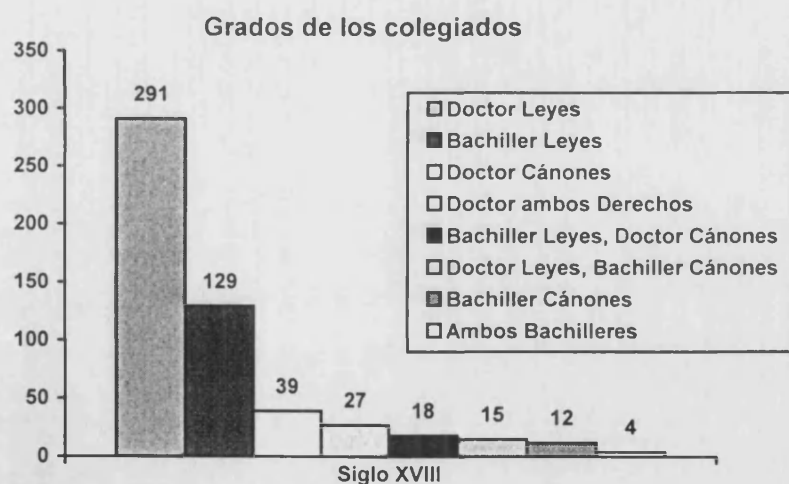
Al contrario que en Gandía, en Valencia nunca se obtuvieron ambos grados al mismo tiempo, aunque eran pocos los días de diferencia. Incluso a principios del XVIII hay casos en que sólo mediaba un día. También es esporádico que medie más de un mes, y excepcional más de un año. No obstante, en los años setenta es muy habitual que la diferencia se sitúe en algunos meses o en un año, para volver a disminuir en la década siguiente.

Otra cuestión es la graduación de los colegiados en una o en ambas facultades. El ser doctor *utrumque iuris* otorgaba mayor reputación al jurista, lo

⁵⁸¹ Fuente: Elaboración propia. A.U.V., *Libros de grados en Leyes y Cánones*.

que le hacía aumentar sus posibilidades de éxito en cualquiera de sus ocupaciones.⁵⁸² Los poseedores de ambos grados son 64, es decir el 11'96 % de los 535 colegiados en el XVIII de graduación conocida; de ellos 56 obtuvieron los dos en Valencia, 5 en Gandía y 3 un grado en cada universidad, coincidiendo estos tres en que el grado de Leyes lo obtuvieron en Valencia y el Cánones en Gandía. Pero no todos los 64 colegiados eran doctores en ambas facultades, tan sólo 27. De los restantes, 4 eran bachilleres en ambos derechos, 18 bachilleres en Leyes y doctores en Cánones, y 15 al contrario. El período de tiempo que media entre la obtención de ambas facultades en Valencia solía ser de dos años, especialmente a partir de la década de los setenta, con aproximadamente 27 colegiados. Otro gran bloque de colegiados —18— es aquel para el que el intervalo de tiempo se sitúa alrededor de un año, que son los que se graduarían con anterioridad a esta década. Los 11 restantes se debaten de entre varios días a cinco años.⁵⁸³ De los graduados en Gandía tres lo hacen con un día de diferencia, uno con dos días y el otro con tres años. Finalmente, de los graduados en ambas universidades, dos lo hacen con un año de diferencia y el otro con seis.

Todo ello esquematizado nos daría el siguiente cuadro:⁵⁸⁴



⁵⁸² P. Marzal Rodríguez, "Perfil de los catedráticos de Leyes y Cánones en Valencia (1707-1733)", *Anuario de Historia del Derecho Español* 67 vol. I (1997) 551-571, pág. 558.

⁵⁸³ En concreto dos colegiados con unos pocos días, dos con dos meses, tres con tres años, dos con cuatro años y dos con cinco.

⁵⁸⁴ Fuentes: Elaboración propia. A.U.V., *Libros de grados*, y A.M.V., libros g-1 a g-8.

Reales órdenes del marqués de Caballero de 1802

En 1802, las reales órdenes de 29 de agosto y 5 de octubre del entonces secretario de Gracia y Justicia, José Antonio Caballero, configuran un nuevo plan que intenta uniformar los estudios posteriores al bachiller en Leyes —que no en Cánones—, de todas las universidades españolas.⁵⁸⁵ Este nuevo plan, inspirado en el de la universidad de Salamanca, tenía como uno de sus principales objetivos profundizar en el aprendizaje del Derecho patrio, amén de frenar el ingreso de graduados en una profesión tan saturada, como era en estos momentos la de la abogacía. Sus consecuencias fueron el mayor número de cursos exigidos para abogar y la reducción de la pasantía, por no considerarse ya tan necesaria.

Para los que quisieran recibirse de abogados, estas órdenes exigían el grado, no ya de bachiller como hasta ahora, sino de licenciatura. Es decir, además del bachiller en Leyes (basado en el Derecho romano), los estudiantes debían estudiar cuatro años más de Derecho patrio, o bien dos de este derecho y los otros dos de *Instituciones* canónicas, que se cursaban en la facultad de Cánones. Finalmente, la práctica o pasantía se reducía a dos años, con lo que eran diez en total los que se requerían para el ejercicio, observándose con ello lo establecido en la ley 2 del título 9 del libro 3 de la *Nueva Recopilación*, incumplida hasta este momento. El afán por no excluir a nadie de los diez años de estudio hace que la pasantía se extienda hasta tres años para aquellos que hubieran obtenido el grado de bachiller con sólo tres años, por medio del examen a claustro pleno. También para los licenciados de Salamanca, que tenían privilegio de ejercer la abogacía con sólo este título, se les exigía completar los diez años con otros dos de Derecho canónico, para los letrados, o de Derecho real, para los canonistas. O, si lo preferían, podían sujetarse a la pasantía.

La real orden de 29 de agosto preceptuaba que los estudiantes se presentaran a los exámenes de grado en las universidades en que hubiera

⁵⁸⁵ Para la real orden de 29 de agosto véase S. Sánchez, *Suplemento a la...*, págs. 180 y sigs. Véase también *Novísima Recopilación* 5, 22, 2; y A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 97, folio 102 B. Para la orden de 5 de octubre véase A.U.V., Sala II, *Documentos de Claustros*, 1800-1808, hoja suelta del legajo 60.

cátedras de Derecho patrio. La de 5 de octubre establecía el plan de estudios para los cuatro años de licenciatura en Salamanca, mandando que el Consejo procurara trasladarlo a las otras universidades, y, asimismo, que éstas trataran el asunto en claustro pleno y remitiesen a este supremo tribunal las opiniones sobre la asunción del plan o sus posibilidades de adaptación.⁵⁸⁶

La universidad de Valencia, puesto que no tenía tantas cátedras como la de Salamanca, y ninguna de ellas estaba dedicada al Derecho patrio, no pudo aplicar enteramente el plan, sino que tuvo que adaptarlo a sus posibilidades, tal como quedó configurado en el informe del claustro de 21 de junio de 1803.⁵⁸⁷ Los cuatro cursos de Derecho real quedaron reducidos a dos, y los estudiantes que quisieran completar los cuatro de este derecho, y no de canónico, tenían que repetir aquellos dos, lo que les serviría para su mejor conocimiento. Por otra parte, el contenido de los dos años de este derecho sería distinto al que se contemplaba en las órdenes. En el primer año se estudiarían las *Instituciones del derecho civil de Castilla*, de Asso y Manuel, o en su caso, la *Ilustración del Derecho real de España*, del pavorde valenciano Juan Sala, y en el segundo se estudiaría la *Nueva Recopilación*, a través del compendio publicado por Reguera Valdelomar, con especial hincapié en las *Leyes de Toro*. Los que repetían debían estudiar, además, el orden de enjuiciar por la *Curia Filípica* de Hevia de Bolaños.

Puesto que se entendía que de esta forma se aseguraba suficientemente el aprendizaje del Derecho real, el grado de bachiller aún

⁵⁸⁶ El plan previsto en la real orden de 5 de octubre de 1802, para la universidad de Salamanca, era el siguiente: "...es la voluntad de S. M. que las Cátedras de Prima de Leyes de Salamanca tengan ambas su enseñanza por la mañana; que el Catedrático de la más antigua explique por dos años, y por hora y media todos los días lectivos, las *Instituciones de Castilla* que escribieron Don Ignacio Jordán y Asso y Don Miguel de Manuel y Rodríguez, cuidando los maestros de corregir los defectos con que se hallan, y que al mismo tiempo enseñe la Recopilación, de modo que en los dos años se pasen los nueve libros, deteniéndose algún tanto en las Leyes de Toro, sin aligarse a comentario alguno, explicando el motivo de la ley, las dudas que resolvió y la inteligencia más recibida de ella; que el menos antiguo explique, por el mismo espacio de hora y media por otros dos años, las Leyes de Toro con más extensión y bajo las reglas dichas, y al mismo tiempo la *Curia Filípica* para instruirse en el orden de enjuiciar, teniendo a la vista las demás obras que de esta clase se han escrito, para poder dirigir con acierto a sus discípulos, que han de ser precisamente los que habiendo estudiado los dos años primeros en la más antigua no pasen al estudio del Derecho canónico y quieran seguir los cuatro de Leyes del Reino. Con este estudio y procurando los profesores dedicarse a la lectura del Prieto Sotelo, del Mesa, *Arte histórico legal*, de la *Themis hispana* de Cortés, vulgarmente dicha de Francheanau y a las cartas de Burriel a Amaya, pueden salir de las Universidades con unos conocimientos nada vulgares y en disposición de poder ser útiles a la carrera de la abogacía y del magisterio."

⁵⁸⁷ A.U.V., Sala II, *Documentos de Claustros*, 1800-1808, hoja suelta del legajo 60.

sufrió una ligera modificación, en el sentido de incrementar —si cabe— su romanismo. El estudio de *Digesto* por la obra de Heineccio, que se realizaba en tercero, se extendía a cinco meses más de cuarto, estudiándose en los tres meses restantes de este curso la historia de la jurisprudencia española, por Asso y Manuel. El informe hablaba de la posibilidad de sustituir a este último autor por la obra de Nicolás M^a Garelli si, una vez terminada, recibía real aprobación. De esta forma, se entendía que los bachilleres entrarían mejor preparados en el estudio del Derecho real propio de la licenciatura.

El plan del marqués de Caballero de 1807

Este plan, contemplado en la real cédula de 12 de julio de 1807, continúa la línea marcada por las reales órdenes anteriores en cuanto a los estudios de Derecho se refiere.⁵⁸⁸ Se trata de otro intento, es vez más completo, de unificar los estudios jurídicos de todas las universidades españolas. Pero esta vez tanto de bachiller como de licenciatura, y tanto en la facultad de Leyes como en la de Cánones. Se tomará de referencia, de nuevo, la universidad de Salamanca, y se seguirán exigiendo diez años de estudios para poderse recibir de abogado ante los tribunales. No obstante, la duración de cada grado aumentará. El de bachiller se obtendrá tras el sexto curso, y el de licenciatura tras el noveno —octavo en Cánones—. Pero lo realmente innovador de este plan es que se suprimen las pasantías, puesto que se entiende que la mayor atención que se presta al Derecho real las hace ya innecesarias.

Los estudios en Leyes eran como siguen. En primero se estudiaba Filosofía moral. En segundo Historia y Elementos del Derecho Romano, por la obra de Heineccio, y, además, sus *Recitaciones*, los comentarios de Vinnio y la *Instituta* de Justiniano. En tercero se repasaba lo visto en segundo. En cuarto se estudiaba *Instituciones* canónicas, en la facultad de Cánones. En quinto Historia y Elementos del Derecho Español, por las *Instituciones del Derecho*

⁵⁸⁸ Real Cédula de S. M. y señores del Consejo por la cual se reduce el número de las Universidades literarias del Reyno; se agregan las suprimidas a las que quedan, según su localidad; y se manda observar en ellas el plan de Estudios aprobados para la de Salamanca, en la forma que se expresa. Editada en el *Boletín Oficial de la Dirección general de Instrucción pública*, III, 5^o (1895) 1-27. Véase su estudio en M. Peset Reig, "La enseñanza del Derecho y la

Civil de Castilla de Asso y Manuel, aprendiendo las reglas de Reguera Valdelomar. En sexto se repasaba lo visto el año anterior. En séptimo y octavo se estudiaban al mismo tiempo *Partidas* y *Novísima Recopilación*, con especial hincapié en la partida séptima (derecho penal, uniéndola al libro doce de la *Novísima*, del mismo contenido), y en el libro undécimo de la *Novísima*, capítulo de corregidores y *Leyes de Toro*. En el noveno curso se estudiaba Economía Política, a través de las *Investigaciones sobre la riqueza de las naciones* de Adam Smith, mientras no se tradujera al castellano la obra de Juan Bautista Say. En el décimo se estudiaba Práctica por la mañana y Retórica por la tarde. En aquélla se seguía a Hevia de Bolaños y se estudiaban las primeras instancias de todos los tipos de juicios, sus apelaciones y recursos. La Retórica, al igual que Filosofía moral, correspondían a la facultad de Filosofía.

Es interesante comprobar cómo estas dos materias substituyen a la práctica privada, por una parte, y por otra servían para recibirse de abogado con la presentación de su cédula de asistencia y aprovechamiento, como si se hiciese en chancillería. "Y será precisa aun a los licenciados por Salamanca, cuyo privilegio servirá sólo para abogar sin otro título en los tribunales de la provincia, y para que sin examen se les despache el correspondiente en el Consejo, presentándose con el testimonio de dicho grado y del de Práctica. Este privilegio será extensivo a todas las universidades del Reino luego que se uniformen a la de Salamanca".⁵⁸⁹

Vemos cómo el Derecho real se impone, pues el romano queda reducido a dos años y el canónico a uno.

En cuanto a los exámenes, no se realizaban todavía los anuales. Los grados continuarán siendo los controles del conocimiento. Para la obtención del de bachiller se preguntaba al estudiante media hora sobre Derecho romano, otra media sobre canónico y otra media sobre Derecho real, ante los tres catedráticos de número más modernos de la facultad. Para la obtención del grado de licenciatura el examen constaba de dos fases: una repetición de memoria ante cinco catedráticos, durante una hora y media, sobre Derecho

legislación sobre universidades durante el reinado de Fernando VII (1808-1833)", *Anuario de Historia del Derecho Español* 38 (1968) 229-375, págs. 238-248.

real, con tres argumentaciones de media hora cada una; y una disertación latina, de entre tres sacadas a suerte entre doscientas, durante media hora, sobre Derecho real, canónico o romano, arguyéndole dos horas y preguntándole otras dos sobre ella y las materias de la facultad.

En cuanto a la facultad de Cánones, se separa más de la de Leyes, al insistir ésta en el estudio del Derecho real, por lo que se dificulta a sus graduados el ejercicio de la abogacía. No obstante, pueden acceder a ella a través de dos vías:

a) Estudiando un curso de Historia y Elementos del Derecho real, dos de *Partidas y Recopilación*, y un cuarto de Práctica, con el posterior examen de bachiller en Leyes y el recibimiento de abogado; o

b) Estudiando, tras el bachiller en Cánones, los cursos sexto a décimo de Leyes, graduándose de bachiller en Leyes y examinándose de abogado.

El plan de estudios en esta facultad empezaba con el mismo curso de Filosofía moral; se seguía con un segundo de *Instituta* civil; un tercero de Prenociones canónicas, por el texto de Lackis; el cuarto, de Historia eclesiástica, por el *Índice cronológico y alfabético* de Félix Amat; el quinto, de *Instituciones* canónicas, por Cavallario; y el sexto, de repetición del anterior, con lo que se obtenía el bachiller. Tras él, un séptimo curso en el que por la mañana se estudiaban Concilios generales, por la *Suma* de Larrea; y por la tarde *Decreto* de Graciano, por Z. B. Van Spen. Y un octavo de Concilios españoles, por la mañana, por Villanuño; y Retórica, por la tarde, con el que el estudiante se podía presentar al grado de licencia. El sistema de exámenes de grado era similar al de la facultad de Leyes.

En cuanto al método de enseñanza, las clases ordinarias continuaban compaginándose con la academia y los actos públicos. Las academias funcionaban los domingos, y la tercera falta equivalía a las quince de las clases ordinarias, que se debían recuperar en el cursillo que duraba desde el 18 de junio hasta el 7 de septiembre. Se acudía a ellas desde tercero durante tres horas. En la primera hora un alumno diserta sobre un tema de Derecho romano o español, preparado el día anterior. La segunda se dedica a preguntas sobre la materia señalada en la anterior reunión. Y la tercera a

⁵⁸⁹ *Real cédula...*, pág. 13.

argumentar sobre cuestiones de la disertación. Los actos menores también son exigidos para graduarse de bachiller, y se pueden practicar desde tercero. Se celebran los 24 primeros jueves del curso por la mañana, sustituyendo a las clases. Consisten en la defensa de seis conclusiones, previamente censuradas por el decano, el censor regio, y con licencia del rector. Se imprimen dos ejemplares, y se defienden en reunión presidida por un doctor contra cuatro argumentos de media hora cada uno: dos por bachilleres y dos por doctores.

La inmediata ocupación francesa y la Guerra de la Independencia hicieron que la aplicación del plan de 1807 durante los años siguientes fuera muy accidentada —cuando no dudosa—, tanto en la universidad de Valencia como en las demás universidades. De hecho, el Consejo de Regencia ordenó por decreto de 30 de abril de 1810 el cierre de todas las universidades, a fin de que los estudiantes pudieran dedicarse a tareas más provechosas en defensa de la patria.⁵⁹⁰ Pero por resolución de 5 de enero de 1808, el rey había ordenado al ayuntamiento de Valencia que ejecutara el nuevo plan de 1807, al parecer ante la pretensión por parte del municipio de mantenerse en el de 1786.⁵⁹¹ Esta resolución, junto con algunos datos obtenidos de los libros priorales de la universidad de Valencia, confirman la presunción de que en la universidad de Valencia sí que llegó a aplicarse el plan de 1807. Así, el mayor número de cursos exigidos para la obtención de los grados conllevaba, necesariamente, la no celebración de exámenes durante algunos años, como efectivamente ocurrió. Al menos es lo que se desprende de la siguiente manifestación:

Habiéndose comunicado a esta Ilustre Universidad literaria en el mes de julio del año 1807 el nuevo plan de estudios inserto en real cédula expedida en doce del mismo mes y año, y, acordándose su cumplimiento, se puso en ejecución en el año escolar que empezó el día 18 de octubre del referido año. Desde esta época no se presentó a graduarse ninguno en las facultades de leies y cánones hasta el año mil ochocientos diez, y en éste solamente hubo un grado de bachiller en leies, que se confirió *nemine discrepante* al Dr. en

⁵⁹⁰ *Diario de las sesiones de Cortes 1810-13*, sesión 6 de abril de 1811, II, 832, donde se trae parte del decreto, publicado también en la *Gaceta de Madrid*.

⁵⁹¹ AM.V., *Capitulares y Actas*, D-203, junta de 11 de enero de 1808, fols. 9 B-10.

Las Cortes de Cádiz

Aunque durante el período de las cortes liberales no vio la luz ningún nuevo plan de estudios para las facultades de Jurisprudencia, es indudable el interés que los diputados gaditanos mostraron por la reforma de la enseñanza en general, y universitaria en particular. De ahí, que por decreto de 16 de abril de 1811 se reabran las universidades, por considerar que la enseñanza sí favorecía la defensa de la patria.⁵⁹³ Es más, el título IX de la Constitución de 19 de marzo de 1812 se llamaba *De la Instrucción Pública*, y su artículo 368 ordenaba el estudio de la carta magna "en todas las universidades y establecimientos literarios donde se enseñan las ciencias eclesiásticas y políticas".

El *Proyecto de 7 de marzo de 1814*, aunque no llegó a convertirse en ley, nos proporciona una idea de cómo entendían los nuevos legisladores que debía plasmarse en la práctica el mandato constitucional. Dos eran las principales novedades con respecto a planes anteriores: en primer lugar, el adelantamiento a la segunda enseñanza de materias tradicionalmente explicadas en las facultades jurídicas; y, en segundo, la práctica desaparición de la facultad de Cánones, aunque no de sus estudios, ya que éstos se integrarían en la enseñanza de Jurisprudencia —y también de Teología—. De esta forma, todos los estudiantes debían cursar en segunda enseñanza moral y Derecho natural, así como Derecho político y *Constitución*. Además, los que iban a dedicarse a la Jurisprudencia también estudiarían economía política y estadística; en total once cursos. Después estudiarían ocho cursos en la universidad según el siguiente plan: cinco cursos de Jurisprudencia: uno de principios de legislación universal e historia del Derecho civil, otro de elementos de Derecho civil romano, dos cursos de instituciones de Derecho

⁵⁹² A.U.V., *Libro Prioral del Ilustre Claustro de Examinadores de los Derechos Canónico y Civil*, núm. 90, pág. 19. Efectivamente, en este libro no aparece ningún grado durante este período. Además, hasta 1807 los grados se obtenían según el plan de 1786.

⁵⁹³ *Diario... 1810-13*, sesiones de 6, 13 y 16 de abril de 1811, II, págs. 832, 862 y sigs., y 879 y sigs. Véase el decreto de 16 de abril también en *Colección de los decretos y órdenes que han expedido las cortes generales y extraordinarias desde su instalación de 24 de setiembre de 1810 hasta igual fecha de 1811*, I, pág. 130.

español, y otro de fórmulas y práctica forense; y tres cursos de Derecho canónico: historia y elementos de Derecho público eclesiástico, instituciones canónicas, e historia eclesiástica y suma de concilios. En cuanto al contenido de estas materias, sólo la legislación universal era una innovación respecto al plan de 1807.⁵⁹⁴

La universidad de Valencia fue, al parecer, la única universidad española que no se clausuró en ningún momento, ni durante el asedio a la ciudad por las tropas imperiales,⁵⁹⁵ ni durante su ocupación (de enero de 1812 a julio de 1813), a pesar de tener destruido su edificio y biblioteca por las bombas, y de no quedar casi alumnos. El 16 de enero de 1812 el mariscal Suchet comunicó al claustro de catedráticos que patrocinaría el estudio, interesándose por la búsqueda de edificios en donde se pudieran impartir las clases, sin que, finalmente, se encontraran. Por todo ello, es de suponer que los cursos 1811-12 y 1812-13 vieran gravemente alterados su normal funcionamiento. No obstante, los pocos estudiantes que no fueron desterrados a Francia consiguieron ganar sus cursos gracias, en parte, al gran interés que mostraron los profesores, impartiendo la enseñanza, incluso, en sus propias casas, y aún sin poder cobrar sus retribuciones. Todo ello fue interpretado por muchos como una señal inequívoca de apoyo de la universidad a la causa napoleónica. Una vez terminada la guerra, y como recompensa a la valentía de los estudiantes prisioneros en Francia —e incluso como acto de desagravio ante los *afrancesados*—, se les dio por ganados los dos cursos a que habían faltado, y sin necesidad de examen, de forma que algunos de ellos regresaron, curiosamente, con sus estudios terminados. Aunque algún autor manifiesta que cada facultad continuó confiriendo sus grados, con las formalidades de siempre,⁵⁹⁶ lo cierto es que, por lo que a los estudios de Leyes y Cánones se refiere, durante este período no se confirió ninguno. Del grado concedido el 17 de julio de 1811 se pasa directamente al otorgado en 8 de junio de 1813.⁵⁹⁷

⁵⁹⁴ M. Peset Reig, "La enseñanza del Derecho...", págs. 264-273.

⁵⁹⁵ En este asedio destacan los dos sitios: el primero de 23 de mayo a 28 de junio de 1808, y el segundo del 5 al 10 de marzo de 1810. Véase V. Genovés Amorós, *València contra Napoleó*, Valencia, 1967, págs. 34 y sigs., y 138 y sigs.

⁵⁹⁶ N. Cruz Román, *Valencia...*, págs. 181-193.

⁵⁹⁷ A.U.V., libro 90, págs. 11 y 14 B.

Por resolución dictada en Cádiz el 12 de enero de 1811, remitida al rector y claustro de la universidad de Valencia, el Supremo Consejo accede a la petición de esta universidad de cesar la enseñanza en el plan de 1807 y de restablecerla según el plan de 20 de marzo de 1787.⁵⁹⁸ No obstante, la ocupación francesa y la derogación de la legislación liberal por Fernando VII me hacen pensar que tal substitución no llegó a tener efectos.

Circular del Consejo Real de 27 de octubre de 1818

La vuelta de Fernando VII supone la posibilidad de afianzar la implantación del plan de 1807, ya que toda la legislación liberal es derogada y desaparece la enseñanza de la Constitución.

No obstante, este plan seguía disgustando al mismo monarca y a las distintas universidades, que solicitaron de aquél la vuelta a sus antiguas regulaciones, a lo que éste accedía, al menos parcialmente.⁵⁹⁹ Pero ante el ataque que estas concesiones suponían contra la uniformidad de planes — durante tanto tiempo perseguida y conseguida finalmente con el de 1807—, el 27 de octubre de 1818 Fernando VII derogaba el plan de 1807 y reponía, también parcialmente y para todas las universidades, el de Salamanca de 1771, derivado de la real cédula de 24 de enero de 1770; esto es, “el [plan] de 1771 con las prevenciones sobre libros y enseñanza contenidas en las reales órdenes dirigidas últimamente a varias universidades, señaladamente a la de Salamanca”.⁶⁰⁰ Puesto que el plan de Salamanca de 1771 y el arreglo que al mismo hicieron sus profesores —y que posiblemente se trasladó al resto de universidades—, solamente se ocupaban de materias y asignaturas, todo lo que en aquéllos no se contemplara vendría a ser regulado, en lo posible, por las antiguas ordenaciones de cada universidad. De cualquier manera, se trataba de una reposición provisional a la espera de la publicación del nuevo plan de estudios, que el 1 de febrero de 1815 ya se había mandado redactar a

⁵⁹⁸ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 106, fol. 314. Según consta, la solicitud remitida por la universidad el 17 de julio de 1810 obedecía a los “malos efectos” que había tenido el plan de 1807. La resolución se vio en el claustro de catedráticos celebrado en 3 de febrero de 1811.

⁵⁹⁹ Salamanca lo consigue en 1717 y Santiago en 1818. Este mismo año Valladolid también lo intenta.

⁶⁰⁰ *Decretos del Rey Don Fernando VII*, V, 611-614. Véase su estudio en M. Peset Reig, “La enseñanza del Derecho y...”, págs. 294-306.

una junta especial designada al efecto. Sin embargo, este nuevo plan de estudios general nunca se redactó.

Por lo que respecta a los estudios de Derecho, el arreglo de 1818 sobre los estudios de 1771 configuraba un plan que realmente vendría a ser una mezcla de las reales órdenes de 1802 y del plan de 1807, ya que el monarca en absoluto pretendía recuperar un sistema tan romanista como el de 1771, y olvidar el estudio del Derecho real, que tanto había costado introducir. Se volvía a los ocho años de estudios y se restablecía el bachiller de Leyes de cuatro años: dos cursos de *Instituciones* romanas, por la *Instituta* de Justiniano y los comentarios de Arnolfo Vinnio; un tercero de *Instituciones* canónicas, que pertenecía a la otra facultad; y el cuarto de *Partidas*, con las referencias de *Ilustración del Derecho Real* de Sala. Para el grado de licencia se debían cursar, además, tres cursos de Derecho real (*Novísima*, por las *Instituciones* de Asso y Manuel, y *Leyes de Toro* y *Práctica*, siguiendo en esta última la *Curia Filípica* de Hevia de Bolaño), y un cuarto de explicaciones de extraordinario, ayudando a los catedráticos. Tras este último curso, con o sin el grado de licencia, el estudiante podía presentarse a examen en las audiencias y chancillerías. Las pasantías continuaban abolidas.

En la facultad de Cánones el bachiller se compone de dos cursos de *Instituciones* civiles en la facultad de Leyes, más un tercero de *Instituciones* canónicas y Derecho eclesiástico antiguo, por Devoti, y un cuarto de repaso del anterior. Para el examen de licenciado se tenía que estudiar un quinto curso de *Decreto* de Graciano, por Bernardi, e Historia eclesiástica antigua y colecciones anteriores a Graciano, por Berti y Doujat. Un sexto de Concilios generales, por Cabasutio y Larrea, y de España, por Villanuño. Un séptimo curso de Derecho real en las cátedras de Prima de leyes. Y, finalmente, un octavo curso de explicación de extraordinario, al igual que en la facultad de Leyes. Como vemos, las diferencias entre ambas facultades se reducen, de forma que se pueda abogar con grado de Derecho canónico, conforme al privilegio salmantino.

En los exámenes de grados se recupera el antiguo sistema. El bachiller no se reduce sólo a preguntas, como en el plan de 1807, sino que se dan puntos para la defensa de conclusiones y argumentación, como en el examen de licenciatura.

Una real provisión del Consejo de 11 de noviembre de 1817 nos confirma que hasta la circular de 1818 venía aplicándose el plan de 1807, en cuanto a los cursos y materias que se exigían para el recibimiento de abogado. Por aquella provisión se concedía licencia y facultad a don Julián Gardeta para ejercer de abogado en los tribunales y juzgados de todo el territorio nacional, sin necesidad de examen. Según la exposición presentada ante el Consejo, y el informe remitido por la universidad de Huesca, este graduado había cursado y aprobado en la misma un año de Lógica, otro de Ética, tres de Jurisprudencia Civil, dos de Jurisprudencia Canónica, dos de Derecho patrio y uno de Economía Civil. Además, había obtenido la cédula de aprovechamiento en la cátedra de Práctica y Retórica. Lo que era conforme con el párrafo doce del artículo de la real cédula de 12 de julio de 1807 en que se establecía la enseñanza en la facultad de Leyes. La petición de Julián Gardeta reconocía que no había cursado los estudios desde el principio, según se prescribía en este artículo, pero aclaraba que su caso quedaba incluido en la segunda regla de las ordenadas para la ejecución del plan de estudios, en virtud de la cual se había arreglado a los nuevos estudios desde el siguiente curso a la publicación de la real cédula, matriculándose en octubre de 1807 en la cátedra de Economía Política, y en Práctica y Retórica en el curso siguiente. Y todo ello porque el plan de la universidad de Huesca estaba uniformado al de Salamanca.⁶⁰¹

Igualmente, los libros de grados y de priorato de la universidad de Valencia nos aportan algunos datos que nos indican que, en esta universidad y hasta 1818, si bien los estudios se realizaban de acuerdo con el plan de 1807, los exámenes se podían realizar según el plan de 1786. Que el plan de estudios fuera el de 1807 se induce de la anotación de grado de Jacinto Company, de 17 de julio de 1816, en la que se dice que se examinó "según el Plan de 1807, que actualmente rige".⁶⁰² Que los exámenes se realizaran conforme el plan de 1786 se demuestra del hecho de que con la anotación de grado de Andrés Vilella, de 6 de abril del mismo año 1816, en todas y cada una

⁶⁰¹ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 112, folios 17 y 675.

⁶⁰² A.U.V., libro 90, pág. 21 B. Bernardo Falcó y Puig fue otro graduado según el plan de 1807, con los grados de bachiller y licenciado en Cánones, el 19 de abril y el 8 de mayo de 1818, respectivamente (libro 90, pág. 32 B, y libro 70, pág. 36 B).

de las anotaciones de grado posteriores se aclara que se han obtenido "según el plan de 1786, en virtud de dispensa del Supremo Consejo".⁶⁰³ Hasta este graduado, y por no decirse nada, se puede interpretar que los exámenes se realizaban según el plan de 1807, extremo este último todavía por confirmar. Tomás Liñán y Morelló, doctor en leyes el 19 de diciembre de 1818, fue el último en graduarse con licencia real según el plan de 1786. Los siguientes examinados obtuvieron el grado conforme a la cédula de 24 de enero de 1770.⁶⁰⁴ A partir de ahora, lo habitual en los libros de grados será la expresión "juxta seriem et tenorem Regiae Sanctionis a Carolo III emisae die XXIV meniis Januari anni MDCCLXX, nec non alterius Matriciedite die XXVI mensis septembris anni MDCCCXVIII"; o sea, según el plan de 1770 con las modificaciones previstas en el arreglo provisional de 1818.⁶⁰⁵ No obstante, continuarán siendo numerosos los permisos o licencias del Consejo para graduarse conforme el plan de 1786, aunque ahora con carácter menos generalizado.⁶⁰⁶ Como vemos, en los últimos años de la segunda década del siglo XIX confluyen distintos planes de estudio con sus diferentes sistemas de exámenes.

Si consideramos que los graduados según el plan de 1786 se examinaron de bachilleres con sólo los cuatro años previstos en este plan, el acceso al foro se habría acortado en el tiempo más que nunca, puesto que las pasantías continuaban suprimidas, de manera que con sólo estos cuatro años podían presentarse a examen de abogados en el Real Acuerdo.⁶⁰⁷

⁶⁰³ A.U.V., libro 90, pág. 21 B. Parecida expresión es la que consta en el libro 69, cuando para todos estos graduados dice haberse realizado el examen "secundum methodum studiorum praescriptam a Carolo III, anno millesimo septingentesimo octoagesimo sexto".

⁶⁰⁴ El primero de ellos, Martín Belda Amat, obtuvo el grado el 29 de diciembre de 1818, A.U.V., libro 90, pág. 33 B. Véase también libro 70, pág. 133 B; y libro 71, págs. 43 y sigs. en donde aparece la expresión "juxta seriem et tenorem Regiae Sanctionis a Carolo III emisae die XXIV Januari anni MDCCLXX".

⁶⁰⁵ A.U.V., libro 71, págs. 24, 52 ó 213. Incluso hay algún caso en que consta haberse examinado para los grados de licenciatura y doctorado según el plan de 1771 (pág. 174).

⁶⁰⁶ A.U.V., libro 90, véase, por ejemplo, págs. 37, 33 B, ó 39.

⁶⁰⁷ Florencio Vives Pasqual, por ejemplo, se graduó de bachiller en leyes el 16 de diciembre de 1818 y se recibió en el Real Acuerdo el 25 de febrero de 1819. Además, su inscripción en el libro de matrícula del colegio de abogados data de 9 de junio de 1820. Pedro Ayuso Larragoiti obtuvo los grados de bachiller y doctor en leyes el 24 de septiembre y el 8 de noviembre, respectivamente, de 1818, y se recibió el 1 de marzo de 1819. O Ramón Ramírez Llombart, que obtuvo los mismos grados el 2 y el 21 de noviembre de 1817, y se recibió en el Real Acuerdo el 13 de mayo de 1819.

En cuanto al método de enseñanza, apenas se constata ninguna modificación. Continuarían los actos públicos y las academias dominicales, si bien en éstas se restringe su acceso, aunque es obligatoria su asistencia, al menos en calidad de oyente.

De cualquier forma, parece ser que los acontecimientos políticos sólo permitieron la aplicación del plan de 1818 durante un curso.

Trienio liberal

Con el retorno de los liberales se reanudan los trabajos parlamentarios sobre instrucción pública, interrumpidos por el regreso de Fernando VII en 1814. El decreto de 6 de agosto de 1820 repone, con algunas modificaciones, el plan general de 1807, a la espera de la discusión del proyecto de 1814.⁶⁰⁸ A su vez, deroga todas las órdenes dadas desde este último año que se pudieran oponer al plan de 1807. Se trata de una reposición interina, y además parcial, del plan del Marqués de Caballero, en cuanto que los estudios de Leyes se reducían de diez a ocho años, rebajándose en la misma proporción el estudio del Derecho canónico. Además, las asignaturas no iban a ser todas las mismas. Según el punto tercero del decreto, se substituía el estudio de la *Novísima Recopilación* por el Derecho natural y de gentes, y el de *Partidas* por la *Constitución*. Por no mencionar las pasantías, se entiende que se mantenía su supresión.

Uno de los puntos más interesantes y novedosos del decreto es el apartado 5º, cuando dice que "Por esta sola vez el Gobierno señalará los libros elementales que deban subrogarse en el mencionado plan, conforme lo exija la utilidad común y el mejor servicio de la enseñanza". Es decir, se contemplaba la posibilidad, propia de los liberales, de que en el futuro los manuales no viniesen predeterminados por el plan, sino que fuesen libremente elegidos por los profesores. Pero, por ahora, y debido a la premura del tiempo, la comisión encargada de adaptar el plan de 1807 a este decreto presentó un informe, de 15 de septiembre de 1820, en el que se fijaban los manuales de cada

⁶⁰⁸ *Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las cortes ordinarias de 1820 y 1821*, VI, págs. 30 y ss. Véase su estudio en M. Peset Reig, "La enseñanza del Derecho y...", págs. 306-313.

asignatura, intentando conjugar su calidad con la posibilidad de su adquisición, dada la escasez de algunos de ellos.⁶⁰⁹

En la facultad de Leyes se estudiaría un primer año de Filosofía moral, en la facultad de Artes, y un segundo de Derecho natural y de gentes, por el manual de Heineccio, pues las obras de Bentham, Vattel, Felice o Tamburini no existían traducidas o en suficiente número. En tercero se estudiará, también de Heineccio, *Historia y elementos del Derecho romano*. En cuarto *Instituciones* canónicas, en su facultad, por Cavallario. En quinto Derecho patrio, por la *Ilustración del Derecho Real* de Juan Sala, e Historia, por Fernández Prieto y Sotelo. En sexto la *Constitución* de 1812, con la obra de Benjamín Constant. En séptimo Economía Política, por la obra de Say, y en el octavo curso Práctica forense, por la *Curia Filípica*, y Retórica. En definitiva, se introduce el Derecho natural y de gentes a cambio de un curso de Derecho romano, y la *Constitución* sustituye a tres de Derecho patrio: uno de *Instituciones* y dos de *Novísima y Partidas*.⁶¹⁰

La facultad de Cánones, por su parte, sigue en su acercamiento a los estudios de Leyes. Los tres primeros años le son comunes —en 1807 sólo dos—. Por lo demás apenas varía nada. En cuarto se estudiarían *Prenociones* canónicas. En quinto y sexto *Instituciones*, por Cavalario. En séptimo Historia eclesiástica. Y en octavo Concilios generales por la mañana, por Larrea, y Retórica por la tarde. A los canonistas que quisieran abogar o dedicarse a la

⁶⁰⁹ M. Peset Reig, "La enseñanza de la medicina en España durante el siglo XIX", *Medicina Española* 60 (julio-agosto 1968), 27-35 y 98-105.

⁶¹⁰ Las Cortes conmutaron a Antonio Caureni cinco cursos de teología, en la universidad de Cervera, y diez años y algunos meses de servicios militares, por un año de estudios de Jurisprudencia que le faltaba para los ocho. Y ello a pesar de que en su solicitud pretendía la convalidación por los tres años que él creía le faltaban, puesto que, al parecer, la Audiencia de Cataluña seguía exigiendo los diez años de estudios. La misma real orden se ratificaba en que la reducción a ocho años mandada en el artículo 4º del decreto de 6 de agosto se entendía, tanto para el efecto de ser recibido de abogado, como para recibir el grado mayor, previos los exámenes requeridos. *Colección...*, VII, pág. 15. Véase también A.R.V., libro 116, folios 16 B y 214. Es posible que se encontraran en similar situación los colegiados Juan Facundo María Martínez Sánchez, Antonio Aznar Villanueva, Rafael González de Villaventín y Tribes, y Tomás Montoliu Cros. El primero obtuvo el bachiller en Leyes en enero de 1819 y se recibió en agosto de 1820. El segundo obtuvo el mismo bachiller en marzo de 1821 y se recibió en el Real Acuerdo en mayo del año siguiente. El tercero obtuvo el bachiller en junio de 1822 y se recibió en julio de ese mismo año. Y el cuarto se graduó en diciembre de 1822 y se recibió en agosto de 1823. Debo decir, no obstante, que el tema de la supresión de las pasantías es difícilmente contrastable, entre otros motivos porque apenas hay colegiados recibidos durante el trienio constitucional.

judicatura se les facilitaba el camino. Bastaba estudiar dos años más: uno de *Constitución* y otro de Derecho patrio.

La discusión del proyecto de 1814 terminaría cristalizando en el *Reglamento de 29 de junio 1821*.⁶¹¹ Las innovaciones con respecto al proyecto son mínimas y de detalle, como que el curso de Fórmulas y práctica forense tenía que aprenderse en academias o tribunales. Pero a pesar de todo, se trataba de una reforma tan extensa que no pudo materializarse, pues hay que tener en cuenta que, junto con las universidades, suponía también una reforma de las enseñanzas primaria y secundaria. Por lo tanto, continuó vigente el plan de 1807 con las observaciones de 1820. Pero no por mucho tiempo, como vamos a ver.

A pesar del decreto de 6 de agosto de 1820, por el que se reponía el plan de estudios de 1807,⁶¹² la Junta de restablecimiento del mismo acordó el 12 de febrero de 1821 acceder a la petición del claustro particular de Leyes y Cánones por la que, a instancia de los estudiantes de cuarto año de Leyes, solicitaba que éstos pudieran obtener el grado de bachiller al finalizar las cuatro matrículas. El 21 de mayo del mismo año esta Junta decidió, de nuevo a petición del mismo claustro, "que los grados así de Bachiller como de Doctor deben restablecerse en los ejercicios y demás del Plan de 1787".⁶¹³ Si desde el decreto de 6 de agosto de 1820 hasta el 21 de mayo de 1821 parece que todos se examinaban según el plan de 1807,⁶¹⁴ a partir de esta fecha va a coexistir este sistema de exámenes con el de 1786, que rápidamente se impondrá hasta la aparición del siguiente plan.

Queda demostrado, por lo tanto, el apego que los escolares, y posiblemente también el profesorado, tenían al plan de 1786, por encima de los planes de estudios posteriores. Las causas pueden ser varias, pero, según

⁶¹¹ *Colección...*, VII, págs. 363-381. M. Peset Reig, "La enseñanza...", págs. 314 y sigs.

⁶¹² A pesar de esta reposición, hasta el 10 de octubre de 1820 se confirieron los grados según el plan de 1770, con las modificaciones del arreglo de 1818; A.U.V., libro 71, pág. 282 B. El primer grado obtenido según el plan de 1807 data del 31 de marzo de 1821 (mismo libro, pág. 293).

⁶¹³ A.U.V., libro 90, págs. 51-52. Véase también libro 71, pág. 478, y libro 74, pág. 19 B.

⁶¹⁴ "Juxta seriem et tenorem Regia sanctionis a Carolo IV emisse dia VII mensis Julii anni MDCCCVII, nec non ejundem Matriti edite die XVI mensis Augustii anno MDCCCXX"; A.U.V., libro 71, pág. 293. Aunque el decreto data de 6 de agosto, en las anotaciones de grado siempre aparece anotado el día 16. De la misma forma, aunque al principio aparezca que el examen

mi entender, son fundamentalmente dos. Por una parte, los estudiantes preferían un sistema de estudios como el del rector Blasco que, además de breve, se basaba en las materias que secularmente habían demostrado su eficacia ante los tribunales. Preferían este antiguo plan de estudios a cualquier otro, mucho más largo, y basado en un Derecho —el real— que todavía no había demostrado claramente su efectividad en el foro, y cuya efectividad tan sólo empezaba a vislumbrarse. Por su parte, la gran mayoría de los profesores no se encontraban todavía preparados para explicar una materia que no dominaban, por no haber sido instruidos en ella. Además, el estudio del Derecho romano todavía se consideraba de una altura intelectual muy por encima del Derecho real.

Plan de 14 de octubre de 1824 y disposiciones posteriores

Por decreto de 24 de septiembre de 1823,⁶¹⁵ derrocado el gobierno constitucional, la Regencia del Reino repone el plan de 27 de octubre de 1818 que, como ya sabemos, era un arreglo del de 1807 y las reales órdenes de 1802, tomando como base el plan salmantino de 1771. La real cédula de 21 de julio de 1824, aunque en general aceptaba los estudios realizados en el régimen anterior, establecía las siguientes excepciones:

10. El curso dispensado por las Cortes a los que acreditaron haber estudiado en el verano de 1820 la llamada Constitución política, por ninguna razón se contará entre los precisos de la carrera, ni pasarse a los que obtuvieron semejante dispensa. Igual suerte cabrá al año de Constitución que se les obligaba a estudiar.

11. No se abonarán tampoco los cursos dispensados por las Cortes, pero si los interesados se creen con méritos para esta gracia, deberán reproducir sus solicitudes al Consejo.

12. En los conmutados por las mismas se hará la distinción siguiente: si los cursos estudiados tienen alguna analogía con los que se conmuten, se abonarán; pero si no la tuviesen, de ninguna manera, más siempre acudiendo al Consejo para su aprobación.

14. A los que hubiesen ganado dos o más cursos en un año se les abonará uno sólo, y éste deberá ser el inmediato al anterior.⁶¹⁶

deba realizarse según el plan de 1787, en las anotaciones posteriores siempre aparecerá como de 1786.

⁶¹⁵ *Decretos del Rey...*, VII, pág. 128. A. R. V., *Real Acuerdo*, libro 118, folios 71 y 576.

⁶¹⁶ *Decretos del Rey...*, IX, págs. 110-111; o A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 119, folios 59 B y 460-465 B. Esta real cédula fue objeto de aclaración por otras disposiciones posteriores, como la circular de 12 de julio de 1828, sobre juramento de no haber pertenecido a ninguna sociedad prohibida —*Decretos...*, XIII, pág. 252—; o la circular de 27 de agosto de 1829, sobre

Paralelamente a la reposición del plan de 1818, el régimen de purificaciones de Fernando VII se extiende a la universidad. La vuelta al absolutismo en este momento es más radical y rotunda que en 1814. La anterior real cédula fundaba su injerencia en las universidades en el "deplorable estado en que se hallaban estos establecimientos literarios, por consecuencia de los abusos introducidos en la enseñanza en la época del titulado Gobierno constitucional, y de las doctrinas y máximas de sus maestros que se habían distinguido por su adhesión a las novedades que se propusieron establecer los revolucionarios".⁶¹⁷ De ahí que se decida la purificación de todos los catedráticos y demás individuos de las universidades conforme a la legislación general, pero con especialidades. Entre las disposiciones que establece la cédula destaca el que para las cátedras que quedaran vacantes, por purificaciones u otra causa, tuvieran que proponerse "personas a cierta ciencia leales, amantes de mi Real Persona y de los derechos de mi soberanía".⁶¹⁸ El plan de estudios de 14 de octubre de 1824 insistirá en este sentido; lo que se refleja en la importancia que le concede a las informaciones políticas sobre los propuestos al Consejo para los nombramientos de catedráticos.⁶¹⁹

purificaciones de escolares de las universidades literarias, —*Decretos...*, XIV, págs. 262-264—. El mismo decreto de 14 de octubre de 1824, por el que se estableció el nuevo plan de estudios, reconocía en su art. 322 los cursos ganados en los años anteriores "...de modo que no se les irroque [a los estudiantes] ningún perjuicio ni pierdan los años académicos que estudiaron con diferente método autorizado por el legítimo Gobierno o en enseñanzas privadas; pero en este caso precederá el examen. Esta regla se aplicará a las incorporaciones de cursos y grados." Véase A.U.V., libro 90, págs. 95 B y 114, donde constan los nombres de 20 graduados rehabilitados en virtud de esta real cédula.

⁶¹⁷ *Decretos del Rey...*, IX, pág. 107.

⁶¹⁸ *Decretos del Rey...*, IX, págs. 109-110. El artículo segundo de la real cédula ordenaba que para las purificaciones se formara una junta en cada pueblo donde residieran las chancillerías y audiencias del Reino. La junta estaría compuesta del regente, que la presidiría, de un arzobispo u obispo y de un ministro de dicho tribunal —nombrados estos dos últimos por el Consejo—, así como de uno de los rectores y de uno de los doctores de cualquier universidad del distrito del tribunal —nombrados ambos por aquellos tres—. Por otras disposiciones de la real cédula quedaban absolutamente privados de sus cátedras los catedráticos que hubieran pertenecido a la milicia nacional voluntaria. Los que en ese momento había suspensos seguirían en este estado hasta que fueran purificados. Véase M. y J. L. Peset Reig, "Legislación contra liberales en los comienzos de la década absolutista (1823-1825)", *Anuario de Historia del Derecho Español* 37 (1967) 437-485, pág. 474.

⁶¹⁹ *Decretos del Rey...*, IX, págs. 267 y sigs. M. y J. L., "Legislación contra liberales...", pág. 475. Según Marc Baldó, las oposiciones eran fáciles en estos momentos, pues se valoraba más la ideología de los aspirantes que sus méritos científicos; véase "Los años liberales", *Universidades valencianas*, Valencia, 1987, págs. 69-75, en concreto pág. 71.

En cuanto a la purificación de los estudiantes, la cédula de 21 de julio de 1824 —art. 9— era, ciertamente, más benévola:

Serán admitidos en las Universidades y demás establecimientos literarios, previo el juicio de purificación ante las mismas juntas que quedan establecidas para los Catedráticos, los estudiantes que hubiesen sido milicianos nacionales voluntarios, debiendo tener presente aquellas la época del alistamiento para apurar si son de los que fueron conducidos por la fogosidad y vehemencia con que generalmente abrazaron, extendieron y apoyaron las ideas revolucionarias, o de los que sólo se alistaron por la indiscreción de su edad, o por disfrutar de los beneficios que se les concedían en los sorteos; pero aun en el caso de quedar habilitados para continuar su carrera, serán muy zelados por sus Catedráticos y demás superiores académicos.⁶²⁰

El plan de estudios de 1824 estuvo vigente, con sus posteriores reformas, hasta 1845.⁶²¹ Supuso la definitiva unificación y centralización de los estudios universitarios y, por lo tanto, jurídicos de todas las universidades españolas. Unificación por cuanto —salvo escasas excepciones—, se terminaba con las peculiaridades propias de cada universidad. No se trata de que las distintas universidades adaptasen sus planes de estudios a las directrices impuestas por el monarca, sino de que todas ellas compartiesen un mismo y único plan: las mismas asignaturas, manuales, horarios, tipos de exámenes, etc. Y centralización por su mayor dependencia, tanto funcional como presupuestaria, del gobierno a través del Secretario de Gracia y Justicia, con la intervención del Consejo, y posteriormente de la Inspección General de Instrucción Pública. En esta dirección podemos situar la posterior real orden de 15 de noviembre de 1827, comunicada al decano del Consejo Real, en la que se mandaba que no se dieran certificaciones de estudios privados:

La facilidad con que muchos doctores y abogados han franqueado certificaciones de cursos privados después de publicado el Plan General de Estudios, ha llamado la atención de S. M.; y conformándose con lo propuesto por la Inspección General de Instrucción Pública se ha servido resolver: que los abogados, doctores y aun los mismos catedráticos no libren tales

⁶²⁰ *Decretos del Rey...*, IX, pág. 110.

⁶²¹ *Decretos del Rey...*, IX, 230-296. También lo podemos encontrar en A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 113, folios 89 y 586-607, y libro 120, folios 39 y 272-296. Ha sido estudiado por M. Peset Reig en "La enseñanza del Derecho y...", págs. 339-374.

certificaciones, y que se tengan por nulas las que den, limitándose los primeros a dar los de práctica forense a los que recibido el grado de bachiller en Leyes se pongan bajo su dirección para aprenderla.⁶²²

Los estudios de Leyes se componen en este plan de un bachillerato de cuatro años y de una licenciatura de siete. En primero se estudia Historia y elementos de Derecho romano; aquélla por Heineccio en el primer tercio del curso y éstos, en el resto, por la *Instituta* de Justiniano, con los *Comentarios* de Vinnio ilustrados con las notas relativas al Derecho español de Juan Sala, en *Institutiones Romano-Hispanae ad usum Tyronum Hispanorum*. En 1835 se sustituyeron los *Comentarios* de Vinnio por los *Elementos* de Heineccio.⁶²³ En segundo se continúa el estudio de *Institutiones* en la misma forma. En tercero *Institutiones* de Derecho patrio, por *Ilustración del Derecho Real de España* de Juan Sala, que debía traducirse del latín. Durante estos tres años los estudiantes tenían al mismo catedrático. En cuarto se estudia *Institutiones* canónicas de Juan Devoti, "señalándose para esta asignatura las materias escogidas de los libros primero, tercero y cuarto que conciernen a la Jurisprudencia canónica del Foro, cuyo conocimiento es más indispensable a los juristas. El catedrático instruirá a sus discípulos por los autores regnícolas más piadosos en todo lo perteneciente a las regalías de S. M., sólidamente entendidas y a las obligaciones y derechos del Real Patronato".⁶²⁴ En 1834 Devoti será substituido por el compendio de Cavallario, más propio de la nueva mentalidad liberal.⁶²⁵ En quinto, y por la mañana, se estudian los títulos del Derecho romano que faltan en la *Instituta* y los correspondientes de las *Partidas*, con Juan Sala en *Digestum Romano-Hispanum*. Por la tarde Religión. En sexto y séptimo *Novísima Recopilación* por el mismo catedrático, señalándose los más escogidos títulos de los libros 1º, 2º, 3º, 5º, 10º, 11º y 12º, y tomando como guía la *Ilustración al Derecho real* de Juan Sala. Además, se estudia, sin entrar en detalle, las demás leyes de la *Recopilación* por el *Sumario* que va al final de la misma.

⁶²² *Decretos del Rey...*, XII, pág. 219.

⁶²³ Real decreto de 30 de septiembre de 1835. *Decretos de la Reina...*, XX, págs. 443 y 444.

⁶²⁴ *Decretos del Rey...*, IX, pág. 244.

⁶²⁵ Real orden de 30 de septiembre de 1834, *Decretos de la Reina...*, XIX, apéndice, pág. 191.

Durante los dos últimos cursos los estudiantes asistían a la Academia de Jurisprudencia Práctica Forense dos horas de dos tardes a la semana. "En el primer tercio de cada curso se explicará la teoría del orden judicial, civil y criminal por el *Febrero*, adicionado y corregido por Gutiérrez, consultándose para ampliar la enseñanza al Hevia Bolaños, Lacañada y los Tiempos de Paz. Los otros dos tercios se ocuparán en ejercicios prácticos de demandas de toda clase, recursos, acusaciones, defensas y demás que se expresarán en el reglamento".⁶²⁶

El grado de licenciatura permitía ejercer en todos los tribunales del reino, con la sola exhibición del título al Consejo y sin necesidad de examen. Sin embargo, los que tras el estudio de estos siete años no se graduaban de licenciados y querían abogar, tenían que estudiar otro año más de Práctica y presentarse al examen de abogado. Además, el artículo 68 del decreto permitía a los estudiantes hacer alguna variación en los últimos años:

Los juristas que en vez de los dos últimos años de universidad quisieren estudiar la práctica en Madrid, asistiendo a las vistas de pleitos, podrán hacerlo, con tal que asistan también a la Academia Práctica Forense tres años, matriculándose en ella y acreditando con la certificación del presidente, firmada también por el secretario, su puntual asistencia y aprovechamiento. A los que no hayan estudiado el séptimo de universidad se exigen dos de práctica en la forma dicha si han de examinarse de abogados.⁶²⁷

En 1830 se añade un curso más para examinarse de licenciado: *Decretales* en sexto.⁶²⁸ Por carta orden del Supremo Consejo de 28 de febrero de 1831, dirigida a las chancillerías y audiencias, se resolvían algunas de las dudas que estos tribunales habían planteado al primero sobre la aplicación de la real orden de 28 de diciembre de 1829, en la que se introducía este nuevo curso. Según aquella carta, el estudio de *Decretales* solamente debían practicarlos los que en el año pasado hubieran ganado el quinto de Leyes y los precedentes, pero no los que habían cursado sexto y séptimo, ni los que,

⁶²⁶ *Decretos del Rey...*, IX, art. 66, pág. 245.

⁶²⁷ *Decretos del Rey...*, IX, pág. 245.

⁶²⁸ Por real orden de 27 de agosto de 1830 se aclaraba que el año de Cánones que se había decidido aumentar a los juristas fuera el de *Decretales*, resolviendo así las dudas que varias universidades habían presentado a S. M. a través de la Inspección General de Instrucción Pública. Véase A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 125, págs. 66 B y 284.

concluida su carrera, no se habían recibido por falta de edad.⁶²⁹ De esta manera, los que no se licenciaban tenían que estudiar hasta nueve años.

Sin embargo, la aplicación de esta última reforma es dudosa. Hay que tener en cuenta que los ecos de la revolución francesa de Luis Felipe de Orleans ocasionaron el cierre de las universidades desde el curso 1830-31 hasta el real decreto de María Cristina de 7 de octubre de 1832. Durante este período el ministro de Gracia y Justicia y la Inspección General de Instrucción Pública organizarían un sistema de estudios privados, para que los estudiantes no perdieran cursos ni la posibilidad de obtener grados.

Pronto, por la real orden de 25 de marzo de 1833, se acordó volver al sistema anterior,⁶³⁰ y por otra real orden de 21 de mayo se acordaba que los escolares que hubieran ganado el curso de *Decretales* y se hallaren matriculados en el primero de *Recopilación* y *Práctica*, podrían graduarse de licenciados sin necesidad de estudiar el segundo.⁶³¹ Además, como señala Mariano Peset, parece ser que en el curso privado de *Decretales* algunos estudiantes estudiaron efectivamente *Decretales*, mientras que otros estudiaron el primero de *Novísima*.⁶³²

Por su parte, la facultad de Cánones continúa su progresivo acercamiento a la de Leyes, que finalmente le llevaría a su desaparición como tal en 1842, por integrarse sus estudios en la de Leyes. Los cuatro primeros cursos eran comunes, con lo que el bachiller se obtenía con el estudio de quinto. En este curso se estudian, por la mañana, las *Instituciones* canónicas que se hubieran omitido en el anterior, junto con los concilios nacionales, leyes, pragmáticas y costumbres de la Iglesia española. Por la tarde Religión. En sexto *Decretales*, por *Commentaria in Ius ecclesiasticum universum* de Carlos Sebastián Berandi, ilustrada por las leyes del Reino. Se estudiaría también colecciones eclesiásticas y *Decreto* de Graciano por *Gratiani Canones genuini ab apocryphis discreti* del mismo Berandi. Y en séptimo Historia y Disciplina general y particular de la Iglesia, con el *Breviario* de Berti y *Synodorum aecumenicarum Summa* de Larrea; con algunos capítulos de *Reformatione* del

⁶²⁹ M. Peset, "La enseñanza del Derecho...", págs. 364 y sigs. (A. I. C. A. V., libro 7, pág. 155 B). A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 126, folios 12 B y 205.

⁶³⁰ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 128, folio 31 B y 201.

⁶³¹ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 128, folios 42 y 223.

Concilio de Trento, de la Bula *Apostolici Ministerii*, de los concordatos entre la Santa Sede y España, y de las novísimas constituciones de la Iglesia y providencias de S. M., como protector de la de España.

Tras estudiar los siete años de Cánones, quien quisiera licenciarse en Leyes debía presentarse al examen de bachiller de esta facultad, y estudiar un año de *Digesto Romano-Hispano* y otro de Derecho real por la *Novísima*, con asistencia a la Academia de Práctica Forense. Este último curso lo podrían suplir con los dos años de práctica y asistencia a los tribunales superiores de Madrid, en la forma vista en el artículo 68 del decreto de 14 de octubre de 1824.

El plan de 1824 tuvo una aplicación inmediata en la universidad de Valencia.⁶³³ Ya en el mismo curso 1824-25 tenemos varios ejemplos de estudiantes que se sujetaron al examen de bachiller a claustro pleno,⁶³⁴ de la forma que veremos a continuación. También se aplicaron ya desde este primer curso los artículos 303 y 304. Por el primero se confería un grado gratis, de cada diez de bachiller o licenciado en cada facultad, en favor del estudiante pobre más sobresaliente en doctrina y conducta. Por el segundo se confería todos los años otro grado de bachiller gratis *por sobresaliente* al estudiante más aventajado, esta vez pobre o rico. En ambos casos sometiéndose al examen específico que establecía el artículo 304.⁶³⁵ Tardaría algo más en aplicarse el artículo 305, por el que cada dos años se conferiría en cada facultad un grado gratis de doctor a los licenciados que a título de

⁶³² M. Peset Reig, *La enseñanza del Derecho...*, pág. 372, nota a pie de página núm. 255.

⁶³³ Hasta ahora, y desde mayo de 1821, los exámenes se realizaban mayoritariamente según el plan de 1786, aunque algunos pocos según el "plan actual" o "que rige", que se entiende como el de 1807. Incluso hay tres graduados de bachiller en Leyes según el plan de 1771; véase A.U.V., libro 74, págs. 101 B, 102 B y 103 B. Los tres grados son de mayo de 1824 y, probablemente, se realizaron conforme a este plan gracias a la derogación por Fernando VII de la legislación del trienio liberal.

⁶³⁴ José Tous Pérez y Antonio Torres Sánchez se examinaron de Leyes el 5 y el 23 de junio de 1825, y Gil Fabra Illas e Ignacio Capestany Rius se examinaron de Cánones en el mismo mes. A.U.V., libro 90, *Libro Prioral*, págs. 73 B, 74, 82 B y 84, respectivamente.

⁶³⁵ *Decretos del rey...*, IX, págs. 288-289. Por el artículo 303 se examinaron y aprobaron de bachiller en Leyes 5 estudiantes; y por el 304 Andrés Armengol López, que lo obtuvo por quinto año de Leyes. A.U.V., libro 90, págs. 86 y 87 B. Desde el 1 de agosto de 1825 al 22 de julio de 1826 se habían conferido 73 grados de bachiller en Leyes, agraciándose a los anteriores cinco como gratuitos, por no presentarse más estudiantes para su obtención; los 23 grados restantes se acumularían a los del curso siguiente. De la misma forma se actuaría en la concesión de los otros grados.

sobresaliente aspiraren a conseguirlo, sujetándose también a un examen específico.

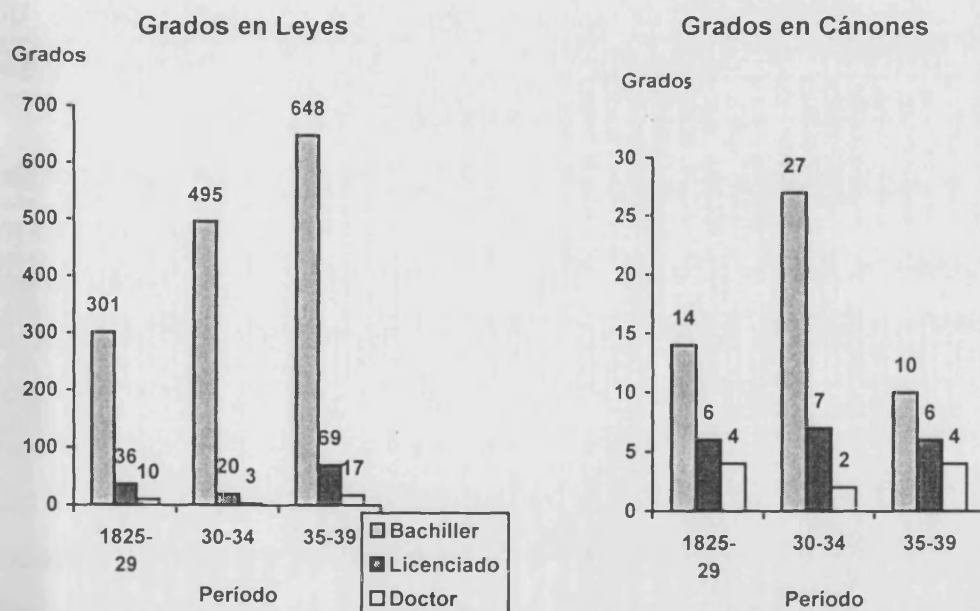
Pero al margen del sistema visto hasta ahora, existía en la práctica otra vía de acceso a la abogacía. Ante las dudas ocasionadas por los numerosos casos particulares promovidos ante los tribunales, por real resolución de 22 de octubre de 1833 el Consejo determinó los años de práctica que debían acreditar los que aspiraban al examen de abogado, después de obtener el grado de bachiller. Según esta resolución, los aspirantes debían justificar haber ganado los cuatro años de práctica forense, "que siempre se han exigido", a través de una de estas dos maneras: o bien en academias aprobadas, matriculándose en ellas y acreditando su puntual asistencia y aprovechamiento con la certificación del presidente, firmada también por el secretario; o bien con la acreditación de abogado recibido con estudio abierto en pueblo donde resida chancillería o audiencia, en la que manifieste su constante asistencia a sus respectivos estudios con el mismo aprovechamiento. Por el primero de estos cuatro años se podía computar el quinto que debían cursar después del grado, siempre que acreditaran que simultáneamente habían asistido en dicho año a academia aprobada o a estudio de abogado recibido, en los términos mencionados para ambos supuestos. Para el caso de no haber tribunal superior ni academia aprobada en la localidad, bastaría para acreditar la práctica de dicho año el haber asistido al estudio de abogado establecido en el pueblo donde estudió el quinto curso.⁶³⁶ En definitiva, la pasantía continuaba vigente para acceder a la abogacía, al menos como posibilidad alternativa y paralela al estudio de los cursos previstos en el propio plan.

Pero por carta orden de la sección de Gracia y Justicia del Consejo Real de España e Indias, de 27 de mayo de 1834, se comunicaron a la Audiencia de Valencia las nuevas modificaciones que habían obrado en este procedimiento. En adelante, todos los bachilleres en Leyes quedarían sujetos a estudiar quinto, cuyo curso se consideraría como primero de práctica, sin necesidad de asistir simultáneamente a ninguna academia ni estudio de abogado. Pero sí debían acudir, durante los tres últimos años, a estudio abierto de abogado de cualquier pueblo del reino, bastando su certificación jurada de

⁶³⁶ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 128, folios 80 B y 389-390.

puntual asistencia y aprovechamiento. Además, tendrían la obligación de asistir con la misma puntualidad y aprovechamiento a la academia forense, si la hubiera en dicho pueblo donde hiciera la práctica, lo que acreditarían con certificación su presidente y secretario. Estos años de práctica, matizaba, se entenderían naturales y no escolares.⁶³⁷

En definitiva, con el plan de estudios de 1824 —con todas sus modificaciones— son minoría los estudiantes que se reciben de abogados con el grado de licenciatura. Además, entre la fecha de obtención del grado de bachiller y su recibimiento pasan al menos cuatro años;⁶³⁸ que debe ser el período dedicado a la pasantía, o bien al estudio de los cursos quinto a séptimo más el año de práctica (artículo 67). En concreto, los grados concedidos por la universidad de Valencia durante el plan de estudios de 1824 son los siguientes:⁶³⁹



Paralelamente a lo que ocurre con los grados totales expedidos por la universidad, los 50 colegiados que se graduaron de Leyes con el plan de 1824

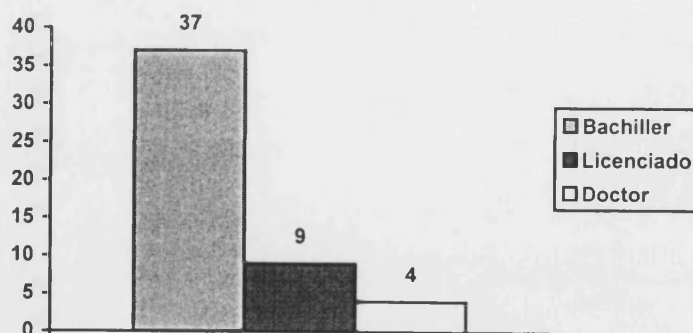
⁶³⁷ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 129, folios 37 B, 80 B, 218 y 434.

⁶³⁸ Véanse los apartados *Recibimiento de abogado en el Real Acuerdo de Valencia*, y *Edad en Perfil de los colegiados*.

⁶³⁹ Fuente: Elaboración propia. A.U.V., libro nº 90. Los últimos grados de Cánones son de 1830.

configuran, en proporciones, un cuadro similar al anterior. Es posible que con un porcentaje ligeramente superior de grados mayores.⁶⁴⁰

Grados de los colegiados en el plan de 1824



Volviendo al decreto de 1824, los exámenes de grado aparecen regulados en sus títulos XIV y XV, para bachiller y licenciado respectivamente, con una especial relevancia sobre este último por su dureza y solemnidad. Continuaría concediéndose el grado de doctor a los licenciados que lo solicitaren, pero vaciado de contenido y reducido a las solemnidades prescritas (título XVI). De hecho, apenas se da el caso.

Requisito indispensable para presentarse al examen de bachiller era acreditar la asistencia a las explicaciones de extraordinario, durante tres meses en alguno de los cursos de *Instituciones*.⁶⁴¹ Veinticuatro horas antes del examen de bachiller, el graduando, tanto en Leyes como en Cánones, elegía una proposición de entre tres que, ante el decano de su facultad, le hubieran tocado a suerte de entre cien de Derecho civil romano, cincuenta de Derecho patrio y cincuenta de Cánones. Al día siguiente disertaba ante el tribunal durante media hora sobre la proposición que le hubiere tocado, y "responderá en cinco minutos en materia a cada uno de los argumentos que por espacio de diez le harán dos examinadores, y contestará a las preguntas que sobre las materias de las Instituciones le hará durante media hora otro de los

⁶⁴⁰ Evito los grados en Cánones puesto que tan sólo hay un colegiado graduado en este Derecho; Anselmo Eloy Vélez Yanguas, con el grado de bachiller, además de ser licenciado en Leyes. Fuente: Elaboración propia. A.U.V., libro nº 90.

⁶⁴¹ *Decretos del Rey...*, IX, título XI, pág. 257.

examinadores."⁶⁴² Los tres examinadores de Leyes serán los tres catedráticos más modernos, y los tres de Cánones el de *Decretales* y los dos de *Instituciones*.

Los legistas que con los tres primeros cursos, y los canonistas que con los primeros cuatro, quisieran graduarse de bachilleres a claustro pleno, eran admitidos a examen ante los catedráticos y doctores de la facultad, con certificación del catedrático que acreditara su idoneidad. "Recitará el graduando una disertación latina de media hora sobre la proposición que le hubiere cabido en suerte veinte y cuatro horas antes, elegida entre tres. Le argüirán dos catedráticos o doctores en un cuarto de hora cada uno, y responderá en materia a cada argumento en cinco minutos. Contestará en seguida a las preguntas que durante otra hora le harán los examinadores por su antigüedad. Media hora preguntarán precisamente sobre la materia del curso que a virtud del grado se le dispensa" (artículo 155).⁶⁴³

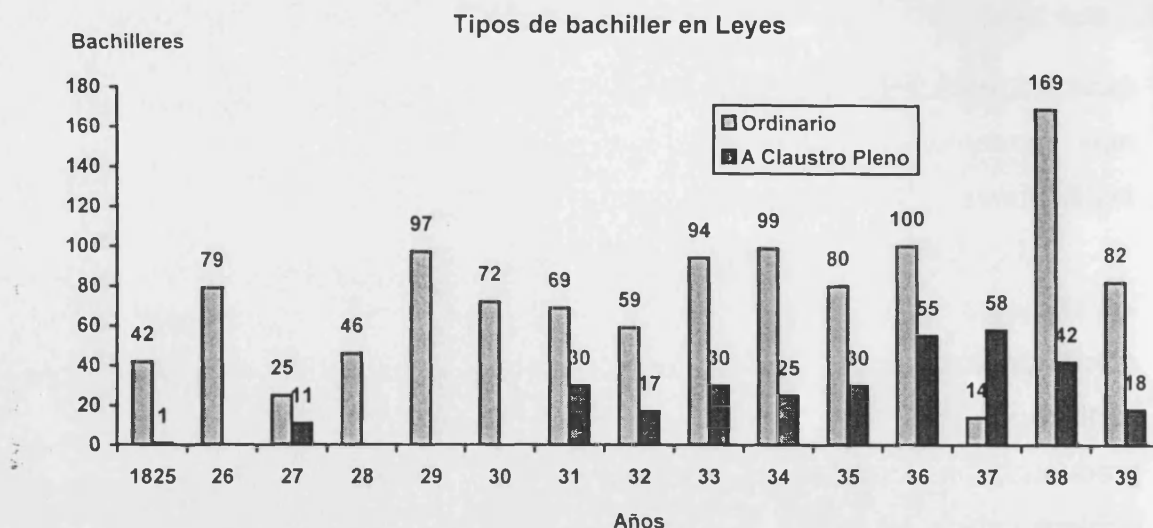
Aprobado por el tribunal, el decano le conferiría el grado, previo juramento, que sería el mismo para el de licenciado, y que resultará ser el mismo observado hasta entonces. Esto es, enseñar y sostener la doctrina del Concilio de Constanza contra el regicidio, y enseñar y defender la Inmaculada Concepción. A lo que ahora se añadía el juramento sobre la soberanía del rey y los derechos de su corona, y sobre no haber pertenecido nunca a sociedades secretas reprobadas por la ley.

El siguiente cuadro nos muestra cómo en Leyes fueron numerosos los estudiantes que optaron por el grado a claustro pleno:⁶⁴⁴

⁶⁴² *Decretos del Rey...*, IX, pág. 261.

⁶⁴³ *Decretos del Rey...*, IX, pág. 261.

⁶⁴⁴ Fuente: Elaboración propia. A.U.V., *Libros de Grados*. En cuanto a los bachilleres en Cánones a claustro pleno, sólo hay dos —de cuatro bachilleres—, en 1826, tres —de 11—, en 1832; y el único de 1837. En Leyes, he contabilizado como ordinarios los bachilleres que obtuvieron el grado gratis, por pobres o por sobresaliente (artículos 303 y 304 del decreto). Aunque hay años en que no consta ningún bachiller a claustro pleno, es probable que sea por no haberse dejado constancia en los libros del priorato.



Para la obtención del grado de licenciado se tenía que ser previamente bachiller y superar tres exámenes. Un primero secreto ante los catedráticos y doctores de la facultad, quienes en una hora de preguntas tanteaban la idoneidad del candidato. Votada su admisión se pasaba al segundo examen, llamado de *repetición pública*. Este examen se celebraría en día feriado, con la asistencia de catedráticos, doctores y licenciados de la facultad y de las otras que quisieren acudir, debiendo repartírseles conclusiones impresas. Durante una hora recitaría el graduando una disertación latina, sobre una proposición elegida entre tres que ocho días antes le hubieran tocado a suerte entre cuatrocientas. Después, y durante diez minutos, contestaría a las réplicas de un bachiller de sexto o séptimo, señalado por el rector, que durante veinte minutos le hubiera argüido. Lo mismo se contemplaría con dos catedráticos o doctores que por su antigüedad pidieren el argumento. Para el tercer examen, el día que el rector y el cancelario designasen, acudiría éste último junto con dos doctores a dar puntos para el ejercicio secreto en la forma ya vista. Durante 24 horas permanecería el graduando incomunicado en la biblioteca u otro lugar adecuado, con comida y cama y un escribiente no facultativo, para poder redactar la disertación, que una hora antes del ejercicio entregaría al secretario para que la pudieran leer los examinadores. El ejercicio consistía en la lectura durante tres cuartos de hora de la disertación en latín, la que argüían dos catedráticos durante veinte minutos cada uno, respondiendo el candidato a las réplicas durante diez. Posteriormente, cuatro examinadores, sacados a

suerte entre los que no hubieran argüido, le preguntarían durante una hora sobre toda la facultad. El graduando podía simplemente aprobar, cuando todos los votos no le hubieran sido favorables, o aprobar *con unanimidad o nemine discrepante*, en el caso de que todos los votos sí le hubieran sido favorables.

Aparte de las clases ordinarias, existían otros tres medios en los cuales los estudiantes se instruían en el Derecho: las *explicaciones de extraordinario*, los *actos mayores*, y las academias.

Según el decreto, las *explicaciones de extraordinario* venían a sustituir a las pasantías.⁶⁴⁵ A ellas estaban obligados a asistir los aspirantes a bachiller durante tres meses en alguno de los cursos de *Instituciones*. Los encargados de darlas debían ser ya bachilleres, sin tacha y de confianza del rector, quien los elegiría teniendo en consideración las súplicas o propuestas que hicieren los cursantes de cuarto año, y después de oído el dictamen de la junta de catedráticos. Se trataba de explicar durante media hora aquellos títulos o capítulos de las *Instituciones* que el rector con el decano de cada facultad señalara. Una segunda media hora se dedicaría a argüir, defender, y satisfacer las preguntas sobre el texto controvertido.

Los *actos mayores* podían ser de dos tipos, *pro munere Cathedrae* y *pro Universitate*, según el profesor que los presidiera. A tenor del artículo 225, "el acto comenzará por un argumento de veinte minutos que propondrá un bachiller, a quien en otros diez responderá el actuante, contestando a sus réplicas; el segundo argumento será de un catedrático sin limitación de tiempo, y el restante, hasta cumplir dos horas, argüirán los catedráticos o doctores que gusten y pidieren el argumento por su antigüedad, pero irán prevenidos turnando entre sí los doctores menos antiguos".⁶⁴⁶

Las *academias* eran dos —aparte de la de Práctica Forense—: la de oratoria y la de dominicales, y en ellas los escolares completaban su formación en argumentación y discurso.⁶⁴⁷ La primera estaba dirigida por un moderador nombrado por el claustro general, entre sus individuos o entre los licenciados de cualquier facultad, distinguidos por su instrucción en letras humanas y demás calidades. A ella asistían los cursantes de quinto, tanto de Leyes como

⁶⁴⁵ *Decretos del Rey...*, IX, título XI, págs. 256 y 257.

⁶⁴⁶ *Decretos del Rey...*, IX, págs. 274 y 275.

de Cánones, además de los de Teología, durante dos horas de cada jueves y domingo. En los dos primeros meses se daban lecciones teóricas, por la Filosofía de la Elocuencia de Capmay ampliada por el Blair. El resto del curso se dedicaba a toda clase de composiciones sagradas y forenses. La academia de dominicales estaba dirigida por otro moderador, elegido también por el claustro general, entre los doctores y licenciados que hubieran aprobado los ejercicios de oposición a alguna cátedra de su facultad. En su defecto se nombraba a un catedrático. Estas academias —una de Leyes y otra de Cánones— se celebraban los domingos después de misa durante dos horas y media, y en ellas se realizaban dos ejercicios. En el primero, un bachiller recitaba por espacio de media hora una disertación latina, que había elaborado en las cuarenta y ocho horas anteriores, sobre la proposición de las *Instituciones* que le hubiere tocado a suerte. Posteriormente le argüirían dos bachilleres, durante un cuarto de hora cada uno, y en cinco minutos el sustentante respondería a cada argumento. El segundo ejercicio era de argumentos y defensas, actuando los cursantes de tercero y cuarto sobre una conclusión de las *Instituciones*. La última media hora se dedicaba a preguntas que estos estudiantes hacían a los de primero y segundo sobre tratado. Las proposiciones y las preguntas y respuestas se habrían fijado los viernes a las puertas de las aulas donde se celebrarían las academias. Cuatro faltas de asistencia a las mismas equivaldrían a quince a las cátedras. En este supuesto el catedrático no les expediría la cédula indispensable para pasar de curso.

Es indudable que uno de los motivos fundamentales —sino el principal—, del endurecimiento de los planes de estudios y de sus exámenes, era el de disuadir de la abogacía a posibles pretendientes. Incluso así venía reconocido por alguna disposición legal, como la real cédula de 27 de noviembre de 1832, en la que se declaraba libre la incorporación en los colegios de todo abogado que lo solicitara. En concreto decía lo siguiente:

...por otras reales órdenes de treinta de setiembre de mil setecientos noventa y ocho, veinte y nueve de agosto de mil ochocientos dos, y veinte de mayo de mil ochocientos siete, se hicieron varias prevenciones al mi Consejo, dirigidas a restringir el número de abogados en las chancillerías, audiencias y capitales del Reino, fijar

⁶⁴⁷ *Decretos del Rey...*, IX, título X, págs. 253-255.

los años de estudio y práctica que debían tener los que aspirasen a tan distinguida como noble facultad...

...resulta demostrado con exactitud que desde el año de mil setecientos ochenta y cuatro se ha disminuido progresivamente el número de abogados, pues muy pocos colegios han conservado el que se les fijó, siendo consiguiente continúe esta disminución con el plan general de estudios y rigor en los exámenes que rige en la actualidad...

Método de enseñanza

El título IX del decreto de 14 de octubre de 1824 se divide en doce principios rectores reguladores del sistema de docencia que los profesores debían seguir en sus clases. Destacaré algunos de ellos.

Al principio de cada curso se reunían los catedráticos de cada facultad para discutir sobre los apartados de sus asignaturas que se podían omitir, cuáles podían estudiarse sin detenerse especialmente en ellos, y a cuáles se debía prestar particular atención, para que ninguno de los importantes quedasen por explicar. Además, cada catedrático debía realizar una especie de programación al principio de cada curso sobre su cátedra, y presentársela al rector, quien la remitiría al ministro director para los efectos oportunos. La primera media hora de clase se dedicaba a pasar lista, anotar las faltas y tomar las lecciones, empleándose el resto de clase en la explicación del catedrático. El último cuarto de hora se dedicaba a preguntas o argumentos, aquéllas en las lecciones de la mañana y éstos en las de la tarde. Pasados los diez primeros días del curso, las lecciones de la tarde serían de repaso de las de la mañana. Las explicaciones y las preguntas y respuestas se hacían en castellano, pero los argumentos y las respuestas necesariamente en latín.

Creo que es interesante dejar constancia de la importancia que en estos momentos se concedía a la asistencia a las clases a lo largo de todo el curso ordinario, que duraba del 18 de octubre al 18 de junio. De hecho, se celebraba un cursillo desde el 18 de junio al 18 de julio al que tenían que asistir todos los escolares que hubieran perdido clases por los distintos motivos que se señalaban. Como por haberse matriculado una vez finalizado el plazo ordinario de matrícula (del 18 de octubre al 4 de noviembre), y con anterioridad al 20 de este mes. O por enfermedad, que debían comunicar al catedrático y, al tercer día, éste al rector para que, si lo estimara oportuno, enviara un médico a certificar la dolencia. El cursillo podría suplir hasta treinta días lectivos

perdidos. Caso de ser más se repetiría curso, aunque se podían suplir otros treinta asistiendo dos meses a las explicaciones de extraordinario. Al margen de las faltas justificadas a los escolares, se les podía conceder hasta quince días en todo el curso, continuos o interrumpidos. Si voluntariamente faltaren más perderían el curso.

En este plan se contemplan, por primera vez con carácter general para todas las universidades, los exámenes al final de cada curso —excepto para el precedente al del grado de bachiller—, sin cuyo *examinado y aprobado* el estudiante no podía matricularse del curso siguiente. Estos exámenes eran públicos y no podían realizarse en horas en que hubiera cátedra de la respectiva facultad. A ellos se podían presentar, desde el uno de junio, sólo los estudiantes que hubieran obtenido de su catedrático la cédula de asistencia y aprovechamiento. De suspender en junio se les concedía dos nuevas posibilidades, una al cabo de quince días y otra a los cuatro meses. De no aprobar en la tercera convocatoria repetía curso, y de volverlo a suspender se le expulsaba de la universidad.

Plan de 4 de agosto de 1836

Antes que nada hay que decir que este plan de estudios —llamado del Duque de Rivas—, aprobado por decreto del Consejo Real de 1 de julio y sancionado el 4 de agosto, apenas estuvo vigente durante un mes, ya que el día 13 del mismo agosto la Reina Gobernadora reponía la Constitución de 1812.⁶⁴⁸

Se trata de un plan general en donde la tercera enseñanza o universitaria es tratada con bastante superficialidad, a la espera del posterior desarrollo del decreto. Por lo que a nosotros respecta, destacan dos puntos: la supresión de la facultad de Cánones, y la continuidad con el plan anterior, ya que la disposición adicional segunda contemplaba la subsistencia de las universidades existentes con las modificaciones que el gobierno determinare. No obstante, las disposiciones comunes a la segunda y tercera enseñanza, recogidas en el título IV (artículos 49 a 112), nos proporcionan algunas ideas

acerca de lo que hubiera podido ser la facultad de Jurisprudencia y su método de enseñanza. Una de las novedades más importante era el derecho reconocido a los profesores de elegir texto o textos —o de no elegir ninguno—, y la prohibición paralela de imponerlos a sus alumnos. Sin embargo, esta libertad quedaba recortada en cuanto que, al principio de cada curso, todo profesor debía presentar el programa de sus lecciones al claustro general para su aprobación. Otros puntos destacables serían el definitivo reconocimiento del castellano como única lengua, tanto en libros como en explicaciones; la posibilidad de seguir en un mismo curso dos o más asignaturas; y, sobre todo, la desaparición de los exámenes anuales, quedando de nuevo sólo los de grado. Éstos eran los de bachiller, licenciado y doctor. Según el artículo 98, "el grado de licenciado en facultad mayor será indispensable para la habilitación del que hubiese de ejercer alguna de las profesiones a que conducen las mismas."⁶⁴⁹

Arreglo provisional de 29 de octubre de 1836

Tras el motín de La Granja, y ante la imposibilidad por el apremio del tiempo de retomar para ese mismo curso al plan de estudios de 1821, el real decreto de 29 de octubre de 1836 aprobaba un arreglo provisional para ese curso que ya empezaba con retraso. Nuevamente, como dice Mariano Peset, un plan confeccionado con premura iba a orientar la enseñanza española.⁶⁵⁰ Y de nuevo, esta pretendida interinidad no fue tal, puesto que el *Arreglo* de Quintana se aplicó hasta la creación de la facultad de Jurisprudencia el 1 de octubre de 1842, en que quedaba suprimida la facultad de Cánones, conservándose algunas de sus asignaturas. Pero esto ya sucede dentro de la vigencia de los estatutos del colegio de abogados de 1838. Se trataba el *Arreglo* de una modificación de corte liberal del plan de 1824, a la espera de la redacción de uno nuevo. Fue una modificación que sólo afectó a determinados sectores de la enseñanza, pero con una especial incidencia en el Derecho.

⁶⁴⁸ *Decretos de la Reina...*, XXI, 301-328. Véase su estudio en M. Peset Reig, "Universidades y enseñanza del Derecho durante las regencias de Isabel II (1833-1843)". *Anuario de Historia del Derecho Español* 39 (1969) 481-544, págs. 483 y sigs.

⁶⁴⁹ *Decretos de la Reina...*, XXI, pág. 319.

⁶⁵⁰ *Decretos de la Reina...*, XXI, 496-504. Véase su estudio en M. Peset Reig, "Universidades y enseñanza...", págs. 498 y sigs.

El examen de bachiller en leyes se realizaría tras cinco años de estudios, y el de licenciatura tras siete. En primero se estudiaría Elementos de Derecho natural y de gentes, y los Principios de la legislación universal. En segundo Historia y elementos de Derecho romano. En tercero se continuaría con el Derecho romano y Principios del derecho público general. En cuarto y quinto Elementos del derecho público y del civil y criminal de España, *Instituciones* canónicas y Derecho público eclesiástico, con observaciones sobre los concilios nacionales y disciplina de la Iglesia de España. En sexto se continuaría el estudio del Derecho patrio con *Partidas* y *Novísima Recopilación*, así como Economía política. Y en séptimo Práctica forense, Elocuencia forense y Jurisprudencia mercantil. Como ocurría desde 1824, el grado de licenciatura exhibido ante el Tribunal Supremo de Justicia bastaría para abogar en todos los tribunales del Reino. El que no lo obtuviera y quisiera abogar tendría que estudiar un octavo curso dedicado a ejercicios de Práctica forense y Derecho político.

En cuanto a los estudios de Cánones, el artículo 25 instituía que su estudio no formaba por sí solo una facultad o carrera separada, sino que debía ser común a juristas y teólogos, convirtiéndose, de hecho, en una bifurcación de los estudios de leyes, aunque mantuviera sus grados. El legista que hubiera obtenido el grado de bachiller, y quisiera obtener el de Cánones, tendría que estudiar un sexto curso de *Instituciones* canónicas y de Historia eclesiástica. Y si quisiera obtener la licenciatura tendría que estudiar un séptimo de Disciplina general y nacional de España, Elocuencia sagrada y Práctica de juicios eclesiásticos. Por otra parte, si el licenciado en cánones quisiera licenciarse en Leyes tendría que estudiar sexto y séptimo de esta facultad.

Método de enseñanza

Se profundiza en la libertad del profesor de elegir manuales, pues ya ni siquiera tenían que presentar al claustro o rector el programa de docencia. Bastaba comunicar el libro o libros que habían elegido. Pero así como en las otras facultades los catedráticos podían optar por no adoptar ningún libro de texto, sino explicar por medio de cuadernos o mediante clases orales, en las facultades de Jurisprudencia civil y canónica y Teología sí se obligaba a adoptar un libro o libros en concreto. El *Arreglo* detallaba, asimismo, el número

de lecciones —60 u 80— de algunas asignaturas, así como el tiempo de cada una de ellas, hora u hora y media. Por primera vez se van a estudiar varias asignaturas el mismo curso, terminándose con la secular práctica de dedicar el año entero a una misma materia. El curso se prolongaba hasta el 30 de junio inclusive, sin más días feriados que los domingos y días de fiesta entera.

Especial atención merecen los exámenes anuales, que cobran más importancia que nunca, de ahí que se dejara su regulación para una norma posterior: la real orden de 20 de mayo de 1837,⁶⁵¹ la cual consideraba el método anterior "vicioso e ineficaz", y pretendía substituirlo "por otro más conforme a los adelantamientos modernos y más conducente al objeto".⁶⁵²

El rector era el encargado de designar las comisiones ante las que se tenían que examinar los estudiantes. Las comisiones estaban formadas por el mismo rector y tres catedráticos, de los cuales uno tenía que ser el de la clase que iba a ser examinada y el otro el de la inmediata superior. Previamente, cada catedrático había dejado en secretaría una lista con cien preguntas o cuestiones relativas a la materia que había explicado. Estas listas se supervisaban por la junta de catedráticos de la facultad, y una vez aprobadas pasaban de nuevo a secretaría, en donde se copiaban las preguntas en cédulas de igual tamaño y forma. Los exámenes empezaban el diez de junio del siguiente modo: convocados los estudiantes en hora y lugar determinado, el secretario presentaba a la comisión las cédulas con las preguntas, de las que uno de los examinadores sacaba a suerte hasta diez, y las leía en voz alta para que los escolares pudieran transcribirlas. Se retiraban los examinadores y el público y, en presencia del rector o vicerector, el secretario y el bedel, los examinados ponían por escrito sus respuestas en el intervalo de una hora. Terminado este tiempo, cada examinado metía su examen en un pliego que cerraba, y que era calificado por los examinadores con la nota de *sobresaliente*, *notablemente aprovechado* o *aprobado*. El que no mereciera ninguna de estas calificaciones se consideraba reprobado. Estos últimos alumnos se volverían a examinar en el mes de octubre, pero sometiéndose al sistema que se aplicaba a los que habían hecho estudios privados, que era

⁶⁵¹ Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, XXII, 247-251.

⁶⁵² Colección de las Leyes..., XXII, pág. 248.

prácticamente el mismo, salvo que las preguntas eran diez y ocho, el tiempo de examen de una hora y media, y que cada examinador les preguntaba durante diez minutos sobre el contenido del examen o sobre otros puntos relacionados. Los que no quisieran examinarse en junio podían presentarse en octubre con la cédula de asistencia o cumplimiento de faltas, examinándose por el sistema de junio. Finalmente, los que fueran reprobados en octubre no serían admitidos a nuevo examen.

Consideraciones finales

Iniciábamos el análisis de la formación académica de los abogados con las constituciones de la universidad de Valencia de 1733, y lo terminamos con el *arreglo provisional* de 1836, válido para todas las universidades de España. Hemos visto cómo a lo largo de este período, y especialmente desde los inicios del siglo XVIII, se suceden los planes de estudios y las reformas, que conducen a las facultades de Jurisprudencia, desde una concepción prácticamente medieval hasta otra mucho más cercana a los postulados liberales, pasando por los tenues y poco fructíferos intentos de reforma ilustrada. De hecho, las dos fechas señaladas se sitúan en épocas muy diferentes en todo lo que al Derecho se refiere, de manera que los sucesivos planes de estudios van reflejando las distintas concepciones que del estado y del Derecho —así como de su divulgación—, se tenía por parte de las distintas tendencias que interactuaron en la transición del Antiguo Régimen al estado liberal. Por lo que respecta a los estudios en las facultades de Jurisprudencia, este tránsito o evolución incide especialmente en ciertos aspectos, que resumimos en los siguientes puntos:

1. Centralización de las decisiones y unificación de planes.

Las constituciones de la universidad de Valencia de 1733, en donde se regulan los estudios de los primeros abogados que se incorporaron en el colegio —salvo los pocos que lo hicieron bajo las constituciones de 1651—, no supusieron una gran modificación con respecto a estas últimas. Más que nada son una traducción al castellano de las de 1651, así como la reunificación de las principales decisiones adoptadas con posterioridad a esta fecha. Nos encontramos ante una universidad municipal, de ahí que fueran redactadas por

el ayuntamiento y aprobadas, además de por el claustro mayor, por la justicia y concejo de la ciudad.⁶⁵³ Hay que tener en cuenta que el ayuntamiento de Valencia había recuperado el patronato de la universidad en 1720, después de que Felipe V aboliera la legislación valenciana en 1707. Este patronato lo conservó hasta 1827, en que, ante el conflicto suscitado por el nombramiento simultáneo de dos rectores, la corona decide arrebatárselo, privándole de las facultades de nombrar catedráticos, rector y otros oficios.⁶⁵⁴ La universidad de Gandía, mientras tanto, que había dependido de la Compañía de Jesús, se clausuraba en 1772. Las otras universidades españolas de las que procedía algún colegial eran la dominica de Orihuela, la pontificia de Salamanca, la de Zaragoza, municipal, y la de Cervera, de fundación real; cada una de ellas con su propio plan de estudios.

Con la real cédula de 24 de enero de 1786 se llega al punto culminante de la política universitaria de Carlos III,⁶⁵⁵ caracteriza por su ofensiva contra la diversidad de los planes de estudios, y de la autonomía de las universidades españolas de la época moderna. Hasta estos momentos, la voluntad o capacidad unificadora de la monarquía apenas se había manifestado. Con esta norma —de la que se deriva el plan del rector Blasco de 1786, para la universidad de Valencia—, el Supremo Consejo exigía una cierta unificación en el grado de bachiller. Años más tarde, las reales órdenes de 1802 intentaron una unificación, esta vez más completa, para el grado de licenciatura. Y con el plan de 1807, con el que se da por extinguida la pasantía, se consigue una unificación definitiva de todos los estudios. A pesar de que algunas universidades consiguieron retornar —temporalmente— a sus planes antiguos, con estas últimas normas la dirección de las universidades empieza a recaer de manera irreversible en el gobierno de la nación. Los siguientes planes ahondarán en este sentido, culminando en el plan Pidal de 1845.⁶⁵⁶

⁶⁵³ M. Peset Reig, "Felipe V y la universidad de Valencia. Las constituciones de 1733", *Anuario de Historia del Derecho Español* 43 (1973) 467-480, págs. 473 y sigs.

⁶⁵⁴ M. Baldó Lacomba, "Los años...", págs. 70-72.

⁶⁵⁵ M. y J. L. Peset Reig, *El reformismo de Carlos III y la Universidad de Salamanca*, Salamanca, 1969, pág. 7.

⁶⁵⁶ M. Peset Reig, "El plan Pidal de 1845 y la enseñanza en las facultades de Derecho", *Anuario de Historia del Derecho español* 40 (1970) 613-651, pág. 622. El artículo 131 de este plan, aprobado por decreto de 17 de septiembre, decía que "La dirección y gobierno de la instrucción pública en todos los ramos corresponde al Rey, por el ministerio de la Gobernación de la

He dicho que la organización de las universidades y de sus estudios recaerá en el gobierno porque, como consecuencia de la inestabilidad de la política liberal, van a ser los decretos o arreglos provisionales del ejecutivo los que durante la primera mitad del siglo XIX elaborarán los sucesivos planes de estudios. Hasta que con el plan Moyano de 1857, y como consecuencia de su aprobación por las cortes, se logra una definitiva y duradera regulación. Hasta este año, la reglamentación de la instrucción pública, y, por lo que a nosotros respecta, de los estudios de Derecho, fue objetivo principal de todos los gobiernos, dentro de una confrontación entre absolutistas y liberales, primero, y progresistas y moderados, después.

Así como ocurrió en otros ámbitos del Derecho y de la sociedad, serán los moderados y no los progresistas los que, por la misma inestabilidad política y su mayor permanencia en el gobierno, llevarán a cabo la transformación de los planes de estudios. En ocasiones estos cambios parecerán más propios de una monarquía ilustrada que de un estado propiamente liberal. Lo que se puede observar en el tratamiento de asignaturas tan importantes para los progresistas como el Derecho natural y de gentes, germen del futuro Derecho internacional, y, como no, el Derecho político o público; o en la sustitución de los exámenes de grado por los anuales; todo lo cual se introducirá concluyentemente con el *Arreglo provisional* de 1836.

En este proceso de unificación de estudios, la universidad de Salamanca actuará como punto de referencia en los primeros momentos, pues la mayoría de las reformas tomarán como base sus planes.

Península", *Colección de las Leyes...*, XXXV, pág. 242. El ministerio tenía una sección de instrucción pública, que era la que se encargaba de todo lo referente a la enseñanza. Un decreto de 13 de marzo de 1846 crearía la Dirección General de Instrucción Pública, que se encargaría de todos los asuntos que surgieran con la reforma.

2. Unificación de ambas facultades.

Desde el proyecto de reforma de 1814 se intenta terminar claramente con la tradicional separación de las facultades de Leyes y Cánones. Aunque a partir de ahora se hable de la reunión o fusión de ambas facultades, lo que realmente se pretendía era una reducción de los estudios de Cánones y su integración en la facultad de Leyes. Objetivo que se consiguió finalmente por decreto de 1 de octubre de 1842.⁶⁵⁷ Además, durante los años anteriores el número de graduados en cada facultad en Valencia demostraba la indudable preferencia de los estudiantes por Leyes: 1.444 bachilleres en Leyes durante los cursos 1825-1839, frente a tan sólo 51 en Cánones.⁶⁵⁸ En el plan de Espartero de 1842, los estudios canónicos quedaban reducidos a dos cursos de los ocho que se exigían para abogar: elementos de historia y de derecho canónico, en cuarto, e historia y disciplina eclesiástica general y especial de España, así como las colecciones canónicas, en quinto. El plan de 1845 sólo supondrá en este sentido una readaptación de la reforma de 1842.⁶⁵⁹ La orden de 15 de junio de 1842 defendía esta unificación en base a que

⁶⁵⁷ *Colección de las Leyes...*, XXIX, págs. 358-360. El artículo 5 prescribía el siguiente plan de estudios: en primero, prolegómenos del Derecho, elementos de historia y de Derecho romano; en segundo, elementos de historia y de Derecho civil y mercantil de España; en tercero, elementos de Derecho penal, de procedimientos y de Derecho administrativo; en cuarto, elementos de historia y de Derecho canónico (grado de bachiller); en quinto, códigos civiles españoles, el de comercio y materia criminal; en sexto, historia y disciplina eclesiástica general y especial de España, colecciones canónicas; en séptimo, Derecho político constitucional con aplicación a España y economía política; en octavo, academia teórico-práctica de jurisprudencia (grado de licenciado, con el que se podía abogar); en noveno, Derecho natural y de gentes, tratados y relaciones diplomáticas de España; y en décimo, principios generales de legislación, legislación universal comparada y codificación (grado de doctor). La orden de 23 de mayo de 1843 fijaba, de manera detallada, las reglas que se debían observar en los exámenes. Eran anuales y orales, uno al final de cada curso, además de los exámenes de grado. Como vemos, empieza a destacar la capacidad de memorizar. La gran similitud entre unos exámenes y otros facilitará la desaparición de los de grado. Véase *Decretos Isabel*, XXX, págs. 226-232, y M. Peset Reig, "Universidades y enseñanza del Derecho...", págs. 534 y sigs.

⁶⁵⁸ A.U.V., libros 66-77 y 89-90.

⁶⁵⁹ El plan de 1845 reduce los cursos para ejercer de ocho a siete, quedando de la siguiente manera: en primero, Prolegómenos del Derecho, Historia y Elementos del Derecho romano —al que se le daba más importancia—, y Economía política. En segundo, continuación del Derecho romano. En tercero, Derecho civil, mercantil y criminal. En cuarto, Historia e instituciones del Derecho canónico. En quinto, códigos civiles españoles: código de comercio, materia criminal y Derecho político y administrativo. En sexto, Disciplina general de la Iglesia y, en particular, de la de España. Y en séptimo, asistencia a la academia teórico-práctica de jurisprudencia, y Estilo y Elocuencia con aplicación al foro. El grado de bachiller se recibía en quinto, y el de licenciado, necesario para el ejercicio, tras séptimo. El que quisiera doctorarse aún debía estudiar un octavo curso, en Madrid, de Derecho internacional, Legislación comparada y Métodos de enseñanza de la ciencia del Derecho. Además debía realizar los ejercicios para el grado que

Una de las bases en que estos trabajos deben apoyarse por parte de la administración consiste en la economía, aprovechando los recursos ordinarios y combinándolos de manera que proporcionen al país, sin nuevos sacrificios, todo el fruto de que son capaces. A este efecto S. A. el Regente del reino ha juzgado que la reunión definitiva de las dos facultades de jurisprudencia civil y canónica, formando entrambas una sola carrera literaria, perfeccionará el estudio de tan interesante profesión, y descargará notablemente las obligaciones de este ramo. Ya el citado arreglo provisional en sus artículos 25 y siguientes dio un paso de consecuencia hacia esta medida: mas conviene concluir ya de todo punto con una separación que en el estado en que antiguamente se encontraba sólo puede explicarse por el afán de ciertas clases de la sociedad española en levantar una barrera privilegiada entre las cosas eclesiásticas y las civiles.⁶⁶⁰

3. Reducción del Derecho romano.

La explicación al tardío predominio del Derecho real en los planes de estudio hay que buscarla, en parte, en la tendencia al inmovilismo que caracteriza a toda institución, máxime en el Antiguo Régimen. La reestructuración de los planes de estudio, en este sentido, sólo podía venir desde fuera de la universidad. La sustitución del Derecho romano por el patrio es consecuencia directa —pero retrasada en el tiempo— de la pretensión del monarca de que en sus tribunales sólo se aplicase este último derecho. El auto acordado de 4 de diciembre de 1713, por el que se reitera la preferencia en la aplicación del Derecho real frente al romano-canónico,⁶⁶¹ es el punto de partida. En este sentido, Paz Alonso Romero manifiesta lo siguiente:

El objetivo continuaba siendo la aplicación prioritaria del Derecho regio, el orden de fuentes que se iniciaba y concluía en el rey se reiteraba, pero ahora los consejeros del primer Borbón parecían tener muy claro que para su efectiva observancia eran imprescindibles los cambios en la docencia universitaria, en el entendimiento de que si no se aplicaban las leyes del reino tanto como desde la Corte se deseaba, era en gran medida porque a los jóvenes estudiantes de Leyes no se les inculcaba el necesario amor hacia ellas que debería venir con su conocimiento y estudio, marginado y desdeñado desde el exclusivismo de unas enseñanzas romanistas ... si por no enseñarse las leyes propias no se practicaban, la solución era bien sencilla: eliminada la premisa

habilitaba para la docencia. *Colección de Leyes...*, XXXV, págs. 221 y sigs. Véase M. Peset Reig "El Plan Pidal de 1845...", págs. 638 y sigs.

⁶⁶⁰ *Colección de Leyes...*, XXIX, pág. 48.

⁶⁶¹ *Nueva Recopilación*, 2, 1, 1. Véase su estudio en el apartado *Pleitos y alegaciones*.

menor, se eliminaría la consecuencia. Planteado el asunto en términos de rivalidad entre órdenes normativos —Derecho propio *versus* Derecho común—, la fórmula no podía ser otra que la de una enseñanza menos romanista y más patria para una práctica del Derecho de idénticas características.⁶⁶²

Partiendo de las constituciones de Valencia de 1733, en donde únicamente se contemplaba el estudio del Derecho romano, se llega al *Arreglo provisional* de 1836, en donde sólo se estudiaría en dos años de los siete de estudios —y no durante todo el curso—, pasando por los planes de 1802 ó 1807, en que Derecho real se impone a costa, no del romano, sino de la práctica privada. Es más, en el plan de 1842 quedará reducido a un sólo curso —de ocho— y no entero, que volverían a ser dos —de siete— en 1845.⁶⁶³

4. Manuales.

La libertad de los profesores para elegir un determinado manual con el que explicar la asignatura, o de no elegir ninguno era, en principio, uno de los objetivos de los liberales, si bien sus gobernantes no terminaban de confiar en este sentido en la capacidad de los profesores, ni siquiera los progresistas.⁶⁶⁴ Como habían desconfiado siempre los absolutistas. Entre la solución del Antiguo Régimen, o de los planes ilustrados de 1807 ó 1824, en que los textos quedaban determinados por el mismo plan, y la solución del plan de 1836, de libertad casi absoluta para elegir texto, el plan de 1845 supone una cierta variedad dentro de la uniformidad.⁶⁶⁵ Es decir, el profesor podía elegir el manual dentro de la lista cerrada —de seis libros— que le proponía el Consejo de Instrucción Pública, y que era renovada cada tres años. De esta forma se pretendía asegurar una cierta unidad desde la libertad. La real orden de 1 de

⁶⁶² P. Alonso Romero, "Del «amor» a las leyes patrias y su «verdadera inteligencia»: a propósito del trato con el Derecho regio en la universidad de Salamanca durante los siglos modernos", *Anuario de Historia del Derecho Español* 67 vol. I (1997) 529-549, pág. 530.

⁶⁶³ M. Peset Reig, "Universidades y enseñanza del Derecho...", pág. 532.

⁶⁶⁴ De ahí que en el trienio liberal el informe de 15 de septiembre de 1820 se ocupara de los libros que se debía seguir, atendiendo a criterios de hacer la menor innovación posible, conservar los que no fuera posible sustituir por otros mejores, y dar preferencia a los textos de suficiente surtido y fácil adquisición. M. y J. L. Peset Reig, "La enseñanza de la medicina...", págs. 32 y sigs. y 102 y sigs.

⁶⁶⁵ P. García Trobat, "Libertad de cátedra y manuales en la facultad de Derecho (1845-1868)", *Colegios y universidades, del Antiguo Régimen al Liberalismo. IV Congreso internacional de Historia de las universidades hispánicas* (en prensa), México, 1997.

septiembre de 1846, por la que se aprobaban las listas de obras presentadas por el Consejo de Instrucción decía lo siguiente:

La escasez de obras que reúnan todas o la mayor parte de las circunstancias apetecidas y que sean dignas por tanto de figurar en aquella lista, la precisión de echar mano para formarla ahora de muchos libros poco a propósito, y que incluidos en ella ocuparían por tres años un lugar del que obras más útiles publicadas con posterioridad se verían privadas, y, por último, la consideración de lo preferible que es elaborar lentamente este difícil trabajo por medio de listas provisionales, que permitan introducir sucesivamente en ellas cada año los libros que aparezcan con las condiciones requeridas, bastan a probar, a juicio del Consejo, que lo que propone no debe recibir el carácter de definitivo.

.....
la escasez en España de obras originales, elementales y propias para la enseñanza, pues fueron pocas las publicadas en el primer tercio de este siglo, y no muchas las que salieron a la luz en estos últimos años, sin duda a causa del poco feliz señalamiento de libros textuales hecho en el plan de estudios de 1824.⁶⁶⁶

No obstante, y junto a libros tradicionales, aparecen otros nuevos.

Para terminar, y en otro orden de cosas, el castellano se impone definitivamente en la universidad.

Recibimiento de abogado en el Real Acuerdo de Valencia

Según las *Ordenanzas de Abogados* de los Reyes Católicos de 1498:

...ninguno sea, ni pueda ser Abogado en el nuestro Consejo, ni en la nuestra Corte, ni Chancillería, ni ante las justicias de nuestros Reynos, sin que primeramente sea examinado, y aprouado por los del nuestro Consejo, y oidores de las nuestras Audiencias, y por las dichas justicias, y escrito en la matrícula de los Abogados. Y qualquier que lo contrario hiziere, por la primera vez sea suspendido del oficio de Abogado por vn año, y pague diez mil maravedís: y por la segunda, que se doble la pena: y por la tercera, que quede inhábile, y más no pueda vsar del dicho oficio de abogacía.⁶⁶⁷

⁶⁶⁶ *Colección de Leyes...*, XXXVIII, pág. 249.

⁶⁶⁷ *N. R.*, 2, 16, 1; *Nov. Recop.* 5, 22, 1. Véase también la pragmática de Felipe III de 7 de noviembre de 1617 (*Nov. Recop.*, 5, 22, 29).

Este precepto ya era recogido en *Partidas*, que en el mismo sentido decía:

...que de aquí adelante ninguno non sea osado de trabajarse de ser Abogado por otri en ningún pleyto, a menos de ser primeramente escogido de los Judgadores, e de los sabidores de derecho de nuestra Corte, o de las tierras, o de las Ciudades, o de las Villas en que ouiere de ser Abogado. E aquél que fallaren que es sabidor o ome para ello, dévenle fazer jurar que el ayudará bien e lealmente a todo ome a quien prometiére su ayuda.⁶⁶⁸

En este apartado voy a describir cuáles eran los trámites por los que el graduado tenía que pasar para ser recibido de abogado en los tribunales, así como los supuestos o incapacidades que se lo impedían.

Incapacidades

Todo graduado que quisiera recibirse de abogado no podía estar incurso en ninguna de las incapacidades absolutas para pleitear, aunque pudiera estarlo en alguna relativa. Aquéllas le impedían abogar en todo caso, es decir, no podía pleitear ni por sí ni por otro —de lo que se interpreta que no pudiera ser recibido—; las incapacidades relativas le permitían pleitear sólo en determinados supuestos.

Incapacidades absolutas

En *Partidas* se exigía para abogar una edad mínima de 17 años.⁶⁶⁹ En la *Nueva Recopilación* se elevaba a 26 años, pero, como veremos, no se cumplía esta disposición.⁶⁷⁰ Por orden del Consejo Real de 8 de junio de 1826 se fijó la edad mínima en 25 años,⁶⁷¹ volviendo a quedar de nuevo en los 17

⁶⁶⁸ *Partidas*, 3, 6, 13.

⁶⁶⁹ *Partidas*, 3, 6, 2.

⁶⁷⁰ *N. R.*, 3, 9, 2.

⁶⁷¹ *Decretos del rey...*, XI, págs. 131-132. Esta orden obedece a la pretensión de algunos interesados de solicitar el título de abogado, siendo menores de edad, en virtud de haberse graduado de licenciados o doctores —según el artículo 67 del plan de estudios de 14 de octubre de 1824—. Por otra parte, la misma orden decía que en la chancillería de Valladolid y en otras audiencias quedaba fijada en 25 la edad que se exigía para recibirse de abogado. Por otra parte, en los libros del Real Acuerdo consta que a los examinandos a los que esta real orden les sorprendía en trámites para la obtención del título, se les eximía de este requisito. Véase A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 122, folios 5 B y 445; y libro 123, folios 48 B y 220.

por la real cédula de 27 de enero de 1833, restauradora de la ley de *Partidas*.⁶⁷²

Aunque *Partidas* sólo prohibía a las mujeres abogar en defensa de derechos ajenos, se entendía que tampoco podían hacerlo en defensa de los propios.⁶⁷³

Tampoco podían abogar bajo ningún supuesto los sordos, locos, o "desmemoriados".⁶⁷⁴ Ni los pródigos en poder de curador, los condenados por delito de infamia,⁶⁷⁵ o los siervos y los excomulgados.⁶⁷⁶ En este último sentido, la *Nueva Recopilación* extendía la prohibición a los reconciliados por delito de herejía y apostatía, así como a los hijos y nietos de quemados y condenados por dicho delito, hasta la segunda generación por línea masculina y primera por línea femenina.⁶⁷⁷ De cualquier manera, y debido a su excepcionalidad, estamos hablando de supuestos que difícilmente encontraríamos en la práctica.

Incapacidades relativas

El ciego de ambos ojos y el condenado por causa de adulterio, traición o alevosía, falsedad, homicidio u otro delito tan grave o más que éstos, no podía abogar por otro, pero sí en defensa de derechos propios.⁶⁷⁸

En otros supuestos el letrado podía abogar, además de por sí mismo, por otros sujetos determinados:

— Los que lidiaban por precio con bestia brava, por los huérfanos de que fueran tutores.⁶⁷⁹

— Los infamados por algún delito menor de los arriba referidos, en causa de sus ascendientes y descendientes, hermanos, mujeres, suegros,

⁶⁷² *Decretos del rey...*, XVIII, págs. 21-22, véase también en A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 128, págs. 17 B y 159-161.

⁶⁷³ *Partidas*, 3, 6, 3.

⁶⁷⁴ *Partidas*, 3, 6, 2.

⁶⁷⁵ *Partidas*, 3, 6, 2; y 7, 6, 7.

⁶⁷⁶ *Ordenanzas Reales de Castilla*, 2, 19, 7.

⁶⁷⁷ N. R. 8, 3, 3.

⁶⁷⁸ *Partidas*, 3, 6, 3.

⁶⁷⁹ *Partidas* 3, 6, 4. Se refiere a los toreros, y no podían abogar por otros porque, al parecer, no se les estimaba dignos de confianza.

verno, nuera, entenado o hijastro, padrastro, patrono o sus hijos y huérfanos que tuviesen bajo su tutela.⁶⁸⁰

Por motivos religiosos, en *Partidas* se prohibía a los moros y judíos abogar por cristiano, pero lo podían hacer por sí o por otros de su propia religión.⁶⁸¹ Las *Ordenanzas Reales de Castilla* añadían, además, a los herejes.⁶⁸²

Respecto a los religiosos, la situación no era clara. En *Partidas* se establece que no pueden abogar ni los monjes ni los religiosos regulares, por sí ni por otro, excepto por los monasterios o iglesias en donde residen, o por los otros lugares que a ellos pertenecen. Parecida solución nos da la *Nueva Recopilación*, añadiendo que también podían abogar por ellos mismos, por sus vasallos, paniaguados, padre, madre, personas a quienes hayan de heredar, o por personas pobres y miserables.⁶⁸³ No obstante, la misma *Nueva Recopilación* recoge en otro apartado la prohibición para cualquier clérigo, de orden sacro o religioso, de abogar en los pleitos temporales y en los que toquen a legos.⁶⁸⁴

Hay otros supuestos de incapacidad relativa que suponen incompatibilidad con determinados cargos desempeñados por el mismo abogado o por otros oficios públicos. Así, los escribanos, jueces y regidores no podían ser abogados en las causas que ante ellos pendieren.⁶⁸⁵ Ni el abogado podía ejercer como tal en aquellos casos en que el escribano fuera su padre, hijo, yerno, hermano o cuñado,⁶⁸⁶ o en que el juez de la causa fuere su padre, hijo, suegro o yerno.⁶⁸⁷

Los magistrados del Consejo tampoco podían abogar sino por parte y en defensa del propio Consejo, o con su licencia y mandato;⁶⁸⁸ los oidores

⁶⁸⁰ *Partidas*, 3, 6, 5.

⁶⁸¹ *Partidas*, 3, 6, 5.

⁶⁸² *Ordenanzas Reales de Castilla*, 2, 19, 7.

⁶⁸³ *Partidas*, 3, 6, 2, y *N. R.* 2, 16, 15.

⁶⁸⁴ *N. R.*, 1, 3, 10.

⁶⁸⁵ *N. R.*, 2, 16, 30.

⁶⁸⁶ *N. R.*, 4, 25, 7.

⁶⁸⁷ *N. R.*, 2, 16, 33.

⁶⁸⁸ *N. R.*, 2, 4, 27.

tampoco podían hacerlo en los pleitos que pendieren en su audiencia;⁶⁸⁹ ni los fiscales en cualquier tribunal salvo “por nos [el rey] y en las causas fiscales”.⁶⁹⁰

Procedimiento: examen de recibimiento

El graduado que no se encontrara en ninguna de las incapacidades absolutas y quisiera ejercer en el reino de Valencia, debía ser recibido como abogado, tras el oportuno examen, por el Acuerdo de la audiencia de este reino, por el real acuerdo de otra audiencia o chancillería, o por el Consejo de Castilla —o, tras su extinción, por la sección de gracia y justicia del Consejo Real de España e Indias—.⁶⁹¹ Nos limitaremos a estudiar los pasos que se seguían en Valencia, y que eran los siguientes:

En primer lugar, el pretendiente en cuestión presentaba a la Audiencia la petición de recibimiento a examen de abogado. A ella le acompañaban tres documentos: el del respectivo grado en Leyes o Cánones y la fecha de su obtención, la certificación de haber ejercido la pasantía durante los cuatro años, y el *mote* o partida de bautismo.⁶⁹² A continuación, el Acuerdo trasladaba

⁶⁸⁹ N. R., 2, 5, 18.

⁶⁹⁰ N. R., 2, 13, 2.

⁶⁹¹ El abogado recibido por el Consejo u otro real acuerdo debía presentar su título ante el Real Acuerdo de Valencia si quería ejercer en la jurisdicción de esta audiencia; véase, por ejemplo, A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 65 (año 1770), fol. 683. Es posible que en un principio sólo pudieran ejercer en todos los tribunales del reino de España los recibidos en el Supremo Consejo, pero con el tiempo se admitió a todos los recibidos en cualquier chancillería o audiencia. El auto acordado de 23 de junio de 1722 parece que viene a confirmar esta costumbre (auto acordado 2, 16, 10, edición de 1775). En 1813, Matías Jorge de Arcas, individuo del colegio de la corte, reivindicaba su derecho a ejercer en Cádiz por hallarse en estos momentos en esta ciudad el colegio de la corte, “llamándole con impropiedad de *Madrid*”. Según este abogado “la ley no exige otra circunstancia en los ya recibidos de abogado para poder ejercer la honrosa profesión de la abogacía en la corte, que la entrada en el colegio de ella; los individuos de él lo son determinadamente del de la corte, y cualquiera que sea el pueblo en que ésta se halle pueden abogar libremente en todos los tribunales y juzgados que existan en el mismo”. Además, manifestaba que “...así como los abogados examinados en el Consejo podían ejercer la profesión en todos los pueblos de las Españas, a diferencia de los que examinaban las audiencias, que solamente podían verificarlo en el territorio de la que los recibía, a no ser que incorporasen su título en los consejos, los del colegio de la corte están autorizados para abogar en todos los tribunales del territorio español, haya o no colegios en los pueblos en donde existan, aunque la corte no resida en ellos...” Véase B.U.V., *Varios* 432, núm. 17, *Apología de la maravillosa hospitalidad que los abogados del colegio de Cádiz han ejercido con los del colegio de la corte que han emigrado: o sea, representación hecha a la regencia por D. Matías Jorge de Arcas, reclamando sus derechos para ejercer la profesión de la abogacía en todos los tribunales de esta plaza, que en el día son de la corte, cuyo ejercicio le han impedido los abogados de esta ciudad*. Cádiz: imprenta de D. Vicente Lema, 1813.

⁶⁹² Tengo constancia de un certificado que un abogado extendió en Madrid en 1733 en favor de un pasante, y que decía así: “Certifico en la forma que puedo, que el doctor don Joseph Marín, vezino y natural de la villa de Ontinente, reino de Valencia, a asistido a mi estudio en esta corte

todos estos papeles al oidor más moderno, para que los reconociera y depusiera sobre su autenticidad.

Por carta orden del Consejo de 28 de mayo de 1784, se ordena a la audiencia de Valencia que no admita a examen de abogado a los que sólo aportaran el grado de bachiller en la facultad de Cánones. El origen de esta orden lo encontramos en un auto acordado de 16 de enero de 1773, en el que se había adoptado esta decisión para todas las universidades del reino, como consecuencia de un problema planteado por la de Alcalá de Henares. Esta última orden decía así:

...entendiéndose esta declaración sin perjuicio de los graduados hasta el presente curso inclusive, empezando la observancia desde principio de el curso próximo venidero. Y que lo mismo se prevenga a las demás universidades por necesitarse para los que en adelante exerzan la abogacía el grado de bachiller en leyes, como calidad precisa, sin perjuicio de que lo puedan recibir en ambos derechos con distintos exámenes.⁶⁹³

La orden de 1784 consideraba que, no habiéndose comunicado la de 1773 a la audiencia de Valencia, en concreto, ni a su universidad, no se comprendía en ella a sus graduados hasta 1784, sino sólo a los que obtuvieran el grado a partir del curso siguiente. Ciertamente, los casos de colegiados graduados exclusivamente en Derecho canónico son escasísimos, pero todos ellos obtuvieron el título con anterioridad a 1785. Excepto José Marco Layrach, con el grado de doctor, que lo obtuvo en este año.

En segundo lugar, tras el examen de los documentos del pretendiente por el oidor más moderno, éste informaba verbalmente al Acuerdo sobre su

el tiempo prefinido por las leies destos reinos, sin hazer ausencia considerable, y para los efectos que haia lugar doi ésta que firmé en Madrid a 26 de octubre de 733. Joan Francisco Ansoti". A.H.N., *Consejos, expedientes de gobierno —escribanías—*, legajo 49.075. Aunque no se trate del mismo supuesto, son interesantes los certificados de pasantía que los abogados extendían a aquellos que, habiéndose recibido con posterioridad a la fundación del colegio, querían incorporarse sin pasar por la práctica de las pruebas. Véase apartado *Pasantía o práctica privada*.

⁶⁹³ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 79, págs. 64 y, en concreto, 367. *Novísima Recopilación* 8, 8, 14. Véase también A. J. Pérez y López, *Teatro de la legislación...*, I, pág. 63. Prueba de que no se admitían a examen a los sólo graduados en Cánones, es el informe que en 1795 remite la audiencia de Canarias al Supremo Consejo, en el tema de la reducción de colegiados, en el que reconocía que, por la escasez de abogados en las islas, se veían compelidos a no poner reparo a los que pretendían examinarse sin más grado que éste; véase J. M. Alzola González, *Historia del Ilustre...*, pág. 116.

autenticidad —que siempre era positiva—. Por resolución de 19 de julio de 1787, el Real Acuerdo, para cerciorarse de la fecha en que los pretendientes habían obtenido el grado, acordó que antes de examinarse estos documentos se escribiera por el secretario a los secretarios de las correspondientes universidades, para que remitieran testimonio que acreditara el día, mes y año en que se obtuvieron los referidos grados.⁶⁹⁴ Testimonio que se uniría a los demás papeles y que se pasarían al mencionado oidor. Sin embargo, este trámite ya se venía observando incluso con anterioridad a esta fecha.⁶⁹⁵

Tras el informe del oidor más moderno,⁶⁹⁶ el Acuerdo ordenaba al pretendiente acudir al oidor decano para que le confiara pleito para examen. Días más tarde, el decano le entregaba un caso o pleito concreto del que se examinaría, y que leería a las veinticuatro horas siguientes ante el Acuerdo. Así pues, al día siguiente el graduado expondría la fundamentación de cada una de las partes y de la sentencia que, según su parecer, debería dictarse. Por decreto de 22 de junio de 1761, el Real Acuerdo de Valencia había fijado en tres las razones fundadas que el examinando debía presentar para cada una de las partes del pleito.⁶⁹⁷ En 31 de mayo de 1763 adoptó nueva decisión al respecto:

Que considerando que la lición de puntos que hacen en el Acuerdo los que pretenden la aprobación de abogado es examen equíboco, y que conducirá hazerles algunas preguntas en práctica y theórica, mandavan y mandaron: que quando se les encomiende pleyto para leer en el Acuerdo, en la forma que está prevenido, se les prevenga también que se les harán algunas preguntas en práctica y theórica.⁶⁹⁸

Después del examen, el Acuerdo, si lo estimaba procedente, lo recibía por abogado de esta audiencia, concediéndole licencia y facultad para usar de

⁶⁹⁴ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 82, págs. 64-65 y 121-122.

⁶⁹⁵ Véase, por ejemplo, casos de Vicente Colas Baió o Jaime Piles y Baguer. A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 82, págs. 19 y 22 (acuerdos de 8 y 15 de marzo de 1787).

⁶⁹⁶ A partir de la petición de recibimiento presentada por Pascual Taengua Serra, vista en acuerdo de 2 de agosto de 1827, el traslado de los documentos que presenta el pretendiente para la verificación de su autenticidad ya no se hace al oidor más moderno, sino al fiscal de Su Majestad. Véase, por ejemplo, el caso de Francisco Dualde Llopis, A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 123, fol. 37.

⁶⁹⁷ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 56, folio 58.

⁶⁹⁸ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 58, pág. 47 B.

dicho oficio en ella y en los demás tribunales y juzgados de esta ciudad y reino.⁶⁹⁹ Todo ello tras prestar juramento de que

...usarán de sus oficios bien y fielmente: y guardarán a todo su poder lo contenido en esta ley. Y otrosí *que no ayudarán en causas desesperadas en que sepan y conozcan que sus partes no tienen justicia, y que si huvieren comenzado a ayudar en algunos pleitos en qualquier estado dellos que supieren y les constare que sus partes no tienen justicia, que luego les auisarán dello y les dirán que se dexen de los tales pleitos, y que los dichos Abogados en tal caso luego se desistan y aparten de ayudar en los tales pleitos lo mejor y más sin daño de las partes que puedan.*⁷⁰⁰

Podemos ver que este juramento, que se reiteraba en los primeros días de enero de cada año, en el acto de apertura del tribunal, tenía un doble significado: el acatamiento de las normas por parte de los abogados, y la asunción de lo que podríamos denominar como *código deontológico* de la abogacía. El juramento anual fue derogado por la real orden de 23 de enero de 1839,⁷⁰¹ que a su vez derogaba el artículo 190 de las ordenanzas de las audiencias de 19 de diciembre de 1835,⁷⁰² por el que prohibía el ejercicio a todo abogado que actuara en cada audiencia si no juraba ante el tribunal en pleno el día de la apertura de la audiencia, o, de no serle posible, el más inmediato hábil.

⁶⁹⁹ Por resolución de 15 de noviembre de 1802, y sin que posteriormente se observase cambio alguno en el procedimiento de ingreso, el Real Acuerdo, ratificándose en la práctica seguida hasta ese momento, establecía lo siguiente: "Que para que la aprobación de abogado recaiga con el conocimiento que se requiere para formar segura idea de la suficiencia de los pretendientes; mandaba y mandaron que éstos, quando estén sus papeles avilitados para obtener la aprobación, se presenten al señor ohidor decano, por quien se les entregue proceso para leer en el Acuerdo, escogiéndole del oficio de cámara que estime. Y se pase el oportuno al decano del colegio de abogados para su noticia y la de sus individuos, previniéndoles *que en las certificaciones de práctica que libren a sus pasantes expresen si tienen la idoneidad y suficiencia necesaria para desempeñar el examen que deven sufrir en el Acuerdo.*" Sin embargo, en el segundo cuarto de siglo se produjo una transformación constante de todo este procedimiento, al menos por lo que a su constancia en los libros del Acuerdo se refiere. Si hasta ahora se hacía constar cada paso, a partir de 1828 lo normal será que tan sólo aparezca la petición de recibimiento, la lectura del examen y la aprobación-juramento. A partir de 1829 también dejará de aparecer la lectura, y a partir de 1830 la petición, dejándose constancia tan sólo del recibimiento y juramento. Pero todo ello es debido a que —como veremos— el procedimiento será diferente.

⁷⁰⁰ *Nueva Recopilación* 2, 16, 2 y *Nov. Rec.* 5, 22, leyes 1 y 3. Esta disposición tiene su origen en la ley 37 de los Reyes Católicos de las cortes de Toledo de 1480 y en *Partidas* 3, 6, 13.

⁷⁰¹ *Colección de las Leyes...*, XXV, págs. 70-71.

⁷⁰² J. Escriche, *Diccionario de la Administración Española*, 8 vols, Madrid, 1886-87, VI, págs. 861-876. J. Santos torres, *Apuntes para la Historia...*, pág. 43.

Por real provisión de 21 de agosto de 1770, el Consejo de Castilla introdujo un nuevo trámite en el recibimiento. Ordenó que la Real Audiencia de Valencia se sujetase a lo prescrito para él en auto de 12 de julio de ese año. Según esta provisión, el colegio de Valencia tendría que nombrar cada año, como efectivamente hizo, nueve individuos, que alternativamente se juntarían cada semana en ternas de tres, y a quienes se les remitirían a examen los pretendientes a abogados, después de presentar ante el Real Acuerdo la certificación de práctica y los documentos requeridos.⁷⁰³ De ahora en adelante, y después del informe verbal del oidor más moderno, se pasará aviso al decano del colegio para que actuara en consecuencia con esta real provisión y, posteriormente también, con la de 21 de abril de 1784, por la que se mandaba que preguntaran a los examinandos sobre las leyes y capítulos de corregimientos, y del gobierno y policía de los pueblos.⁷⁰⁴

Lo bien cierto es que en los certificados remitidos al Acuerdo, los examinadores siempre encuentran suficientemente instruidos a los pretendientes. Incluso en alguna ocasión el tribunal presentó sus quejas ante la Junta del colegio por la ligereza con que, a su entender, los examinadores solían aprobar a los graduados.⁷⁰⁵

La real orden de 28 de diciembre de 1829 supuso una reforma general en el recibimiento, modificándose tanto el examen que había de practicarse en la Audiencia como el del colegio.⁷⁰⁶ Además, ya vimos que añadía un curso de *Decretales* a los planes de estudio. La intención de esta reforma no era otra que la de limitar el acceso al foro de los abogados, como hacía la cercana real

⁷⁰³ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 65, págs. 96 y 391-394 B

⁷⁰⁴ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 79, págs. 64 y 367-368. De estos avisos hay muchos en el A.I.C.A.V., caja 6, expediente 2, sin enumerar. En la mayoría de las ocasiones consta en el margen izquierdo el nombre de los tres examinadores.

⁷⁰⁵ En 1822 la Audiencia, "en vista de los ejercicios que ha debido hacer en el tribunal don Domingo González y del Campo", se dirigió al colegio manifestando "que ha extrañado mucho se aprueben en sus exámenes sujetos que no sólo resultan ignorantes de las leyes, si que hasta los principios de jurisprudencia, y espera que en lo sucesivo procederá en ellos con más atención." Por decisión de 19 de octubre la Junta comunicó esta resolución a los presidentes de las ternas para que, a su vez, lo hicieran saber a los respectivos examinadores. No obstante, parece ser que el mismo decano remitió a la Audiencia una explicación de lo ocurrido, según la cual, el examen en el colegio se realizaba en una casa particular, mientras que el del Real Acuerdo en estrados, lo que provocaba miedos y respetos que podían llegar a bloquearle la mente hasta al más inteligente. A.I.C.A.V., caja 6, hoja sin número.

⁷⁰⁶ P. Nácher Hernández, *Historia y organización de la Abogacía en Valencia desde la Reconquista hasta nuestros días*, Valencia, 1952, págs. 94-96. A.R.V., *Real Acuerdo*, año 1832, libro 127, folio 61 B. Se trata del primero que consta que ha seguido este procedimiento.

orden de 8 de julio, por la que se ordenaba a los colegios de abogados no proveer ninguna de las plazas vacantes o que vacaren en lo sucesivo, "atendida la escasez de negocios que se advierte en el día".⁷⁰⁷ Además, se consultaba a las chancillerías y audiencias el número de abogados de que había de componerse cada colegio.

A partir de ahora el examen en el colegio consistiría en que durante una hora el examinando tendría que estar contestando a las preguntas de los examinadores, "sobre todo de jurisprudencia, haciendo las réplicas que se crean convenientes, y exigiendo del examinando las explicaciones que el examinador juzgue necesarias". Después se le señalaría una ley de las 83 de *Toro* o de las principales de los libros primero a tercero, quinto y décimo a duodécimo de la *Novísima Recopilación*, para que sobre ella hiciera una exposición o comentario, tras habérsela preparado por espacio de un cuarto de hora. Durante 25 minutos tendría que explicar el origen de la ley, partes de que se compone, fundamentos de su inteligencia y justicia, excepciones que tenga por otras leyes y demás que se le ocurriera. Cada juez examinador le haría las observaciones y argumentos que tuviera por oportunos, "tanto sobre el método de la explicación, cuanto sobre la doctrina y lenguaje".

En cuanto al examen en el Real Acuerdo, los aspirantes serían examinados por una comisión formada por tres ministros, quienes de encontrarlo capacitado lo harían saber al día siguiente al Acuerdo para que lo recibiera con el oportuno juramento. El examen versaría sobre un caso civil, criminal o eclesiástico, sobre el que el examinando tendría que presentar una demanda, contestación, réplica y contraréplica, notificaciones, el interrogatorio, la alegación de bien probado, el escrito e interrogatorio de tachas, y la sentencia definitiva o auto que correspondiera. De estar el caso en segunda instancia, seguiría los trámites desde el auto en que se admitió la apelación con su presentación, alegación de agravios y diligencias, hasta la confirmación o revocación de la sentencia del inferior. Para la preparación del examen al pretendiente se le asignaría una pieza del edificio de la Audiencia, sin comunicación y con los libros necesarios. La lectura del examen se

⁷⁰⁷ A.I.C.A.V., libro 7, junta particular de 4 de agosto de 1829. Véase también A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 124, folios 69 B y 543-543 B

verificaría a la hora que determinaran los examinadores, dentro de las 24 horas siguientes.

Hasta ahora tan sólo nos consta alguna certificación esporádica de abogado recibido por el Consejo de Castilla, librada por este tribunal y presentada ante el Real Acuerdo por el mismo letrado, con el objeto de poder ejercer en los tribunales dependientes de la Audiencia. A partir de 1830 este recibimiento en Madrid se convierte en algo habitual, como consecuencia del plan de estudios de 1824. Ya vimos en su momento que este plan establecía la posibilidad de que los licenciados abogaran en todos los tribunales del reino con la sola presentación del grado ante el Consejo. Los que no aprobaran el examen de licenciatura, y también quisieran ejercer en todo el reino, continuarían presentándose al examen ante el Supremo Consejo, después de cursar otro año de práctica.⁷⁰⁸

El real decreto de la Reina Gobernadora de 13 de abril de 1834 confirmaba este sistema, modificando el tribunal expendedor de los títulos. Establecía que con los títulos de abogado que expidieran las audiencias se podría abogar sólo dentro de sus respectivos territorios, mientras que los que quisieran ejercer la abogacía en todos los dominios de la monarquía deberían acudir a la sección de gracia y justicia del Consejo Real de España e Indias, la cual, sin otro examen y en vista del título expedido por la audiencia, mandaría librar el oportuno título, tras el pago de los oportunos derechos establecidos.⁷⁰⁹ El real decreto de 29 de mayo del mismo año, en su punto 9º, confirmaba esta competencia de esta sección.⁷¹⁰ No obstante, por una real orden de 25 de julio de 1836 se acuerda que la sección de gracia y justicia referida deje de expedir estos títulos, y que, en adelante, los sujetos que estén dispensados de examen por haber obtenido los grados académicos, acudieran a habilitarse para ejercer la profesión a la audiencia del territorio de su residencia, para que les librara la certificación acostumbrada.⁷¹¹

⁷⁰⁸ *Decretos del Rey...*, IX, pág. 245.

⁷⁰⁹ *Decretos de la Reina...*, XIX, pág. 197. Véase también A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 129, págs. 29, 31 B, 184 y 198.

⁷¹⁰ *Decretos de la Reina...*, XIX, pág. 294.

⁷¹¹ *Decretos de la Reina...*, XIX, pág. 289. Al parecer, durante los últimos años se habían dispensado en numerosas ocasiones algunos requisitos exigidos en el recibimiento. Pero finalmente, la real orden 26 de enero de 1837 resolvía que las audiencias no admitieran ninguna dispensa, si no "se hace constar que ha sido concedida por las Cortes, que se ha presentado

De los 210 recibimientos que constan en los libros del Real Acuerdo entre los años 1830 a 1835, 43 obtuvieron el título en el Consejo —esto es, el 20'47 %—. De estos 43 nos consta que la mitad —21— eran bachilleres y que se sometieron a examen. La otra mitad eran títulos de licenciados, salvo tres que eran de abogados recibidos por otras audiencias y que solicitaban el título para abogar en todo el reino.⁷¹² Y por lo que respecta a los que ingresaron en el colegio a lo largo de todo el período objeto de estudio, los datos que he obtenido sobre la dualidad de recibimiento Real Acuerdo-Consejo Real son los siguientes:

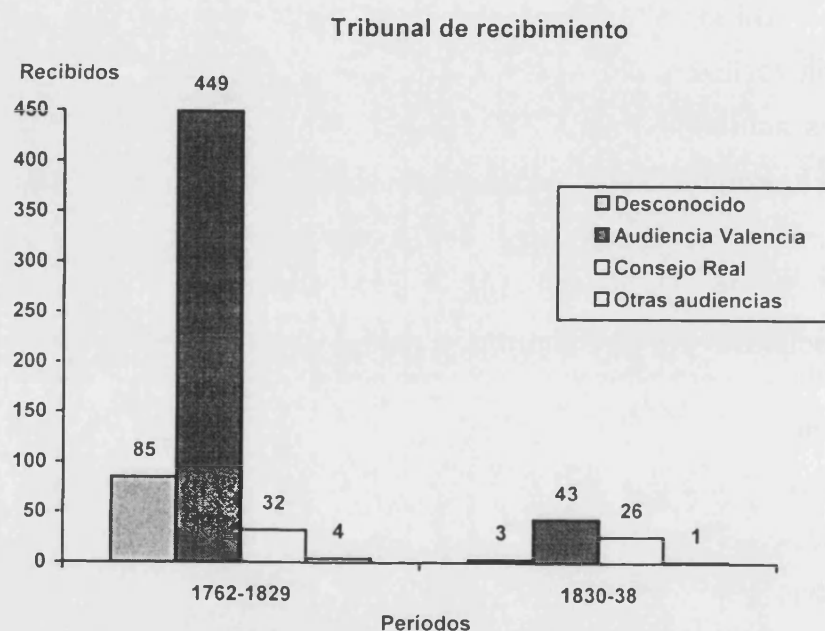
De los 570 colegiados entre 1762 y 1829 tan sólo nos consta que 32 fueron recibidos por el Supremo Consejo —el 5'61 %— y otros 4 por otros reales acuerdos: Palma de Mallorca, Zaragoza, Sevilla y Granada. A partir de 1830 fueron recibidos en el Supremo Consejo y, posteriormente, en el Consejo Real, 26 abogados del total de 73 que se colegiaron hasta 1838, esto es, el 35'61 %. De este período tan sólo conocemos un colegiado recibido por otro real acuerdo —el de Palma de Mallorca—.

en esta Secretaría del Despacho, y que por Real orden expedida de la misma se ha despachado la correspondiente cédula, después de haberse satisfecho la cuota señalada en el arancel de gracias al sacar". Véase *Colección de las Leyes...*, XXII, pág. 29.

⁷¹² En concreto, en 1830 hubo 39 recibimientos, de los cuales 5 en los reales consejos. De ellos uno pertenecía a bachiller —con examen—, otro a un abogado recibido en Zaragoza y que pretendía abogar en todo el Reino y los otros tres a licenciados —sin examen estos cuatro—. De los 13 recibimientos de 1831, 10 se produjeron en los reales consejos, de los cuales 3 eran bachilleres. De los 11 recibimientos de 1832, otros 10 en los reales consejos, y de ellos 7 bachilleres. En 1833 hubo 51 recibimientos, de ellos 12 en los reales consejos, y de ellos 8 eran bachilleres. En 1834 hubo 43 recibimientos, de los cuales 5 en los reales consejos, y de éstos 2 eran bachilleres y se habían recibido en la audiencia de Madrid. Y de los 53 recibimientos de 1835, sólo 1 era en los reales consejos y pertenecía a un licenciado.

Tribunal de recibimiento	1762-1829	1830-38
Desconocido	85 (14'91 %)	3 (4'10 %)
Audiencia de Valencia	449 (78'77 %)	43 (58'90 %)
Consejo Real	32 (5'61 %)	26 (35'61 %)
Otras audiencias	4 (0'70 %)	1 (1'36 %)
Total	570 (99'99 %)	73 (99.97 %)

Fuente: A.R.V, *Libros del Real Acuerdo*, libros 57-130; y A.I.C.A.V., *Expedientes pruebas de ingreso*, cajas 11-31. Elaboración propia.



Como es de suponer, el número de los recibidos en el Real Acuerdo de Valencia es mucho mayor que el de los individuos que ingresaron en el colegio. En concreto, entre 1762 y 1835 fueron recibidos en este tribunal aproximadamente 1.866 abogados. En el mismo período se colegiaron 629 individuos, sin contar los 221 que ingresaron en 1762 sin expediente de incorporación (estatuto XIX). Veámoslo en el siguiente cuadro:

Período	Recibidos en Valencia	Cole- giados	Recibimiento de colegiados:		
			Desconocido	Valencia	Fuera
1762-64	46	26	5 (19'23%)	20 (76'92%)	1 (3'84%)
1765-69	113	57	3 (5'26%)	46 (80'70%)	8 (14'03%)
1770-74	99	60	10 (16'66%)	47 (78'33%)	3 (5%)
1775-79	160	78	15 (19'23%)	60 (76'92%)	3 (3'84%)
1780-84	185	65	24 (36'92%)	39 (60%)	2 (3'07%)
1785-89	142	54	6 (11'11%)	46 (85'18%)	2 (3'70%)
1790-94	149	81	3 (3'70%)	69 (85'18%)	9 (11'11%)
1795-99	116	1	-	1 (100%)	-
1800-04	88	-	-	-	-
1805-09	152	-	-	-	-
1810-14	100	49	3 (6'12%)	43 (87'75%)	3 (6'12%)
1815-19	90	39	5 (12'82%)	32 (82'05%)	2 (5'12%)
1820-24	85	19	1 (5'26%)	17 (89'47%)	1 (5'26%)
1825-29	169	41	10 (24'39%)	29 (70'73%)	2 (4'87%)
1830-34	119	47	2 (4'25%)	22 (46'80%)	23 (48'93%)
1835	53	12	1 (8'33%)	10 (83'33%)	1 (8'33%)
Total	1866	629	88	481	60

* Fuente: A.R.V., *Libros del Real Acuerdo*, libros 57-130; y A.I.C.A.V., *Expedientes pruebas de ingreso*, cajas 11-31. Elaboración propia.

Del recibimiento se dejaba constancia en el libro de matrícula de abogados que debía existir en el Consejo, chancillerías y audiencias, según las *Ordenanzas de 1498*.⁷¹³ Sin embargo, parece ser que esto no se cumplió en Valencia hasta 1758, cuando el Real Acuerdo acordó que el secretario formara un libro en donde se

⁷¹³ Nueva Recopilación 2, 16, 1.

...noten y matriculen los que oy hay aprovados con estudio y despacho abierto, y los que se aprovaren en adelante para exercer la abogacía en la presente ciudad, expresando los días de sus respective aprobaciones, por qué tribunales, y el permiso de este Real Acuerdo. Y que sin tener certificación de estar matriculado en la forma prevenida nadie pueda patrosinar ni defender causas ni firmar peticiones, pareces ni alegatos algunos.⁷¹⁴

Pero, al parecer, esta resolución sólo se refiere a los abogados de la ciudad. Mucho más tarde, por resolución de 3 de junio de 1833, el Acuerdo ordenó el registro en sus libros de los títulos de aprobación y nombramiento que se expidieran por su secretaría, como así se hizo, apareciendo recogidos tras los títulos expedidos por el Supremo Consejo o, posteriormente, por el Consejo Real.⁷¹⁵

Todo el procedimiento de recibimiento solía durar alrededor de un mes en 1762.⁷¹⁶ En la segunda década del siglo XIX se redujo la duración, de manera que en poco más de medio mes el graduado prestaba juramento como abogado. Y ello a pesar de que aparecieron los nuevos trámites del examen en el colegio, o de la certificación de estudios que se pedía de la universidad en donde se había graduado el individuo. En el segundo cuarto del siglo solía durar poco más de un mes, si bien es cierto que el procedimiento ya era diferente.

El Real Acuerdo raramente examinaba a más de un pretendiente por reunión. De ahí que en casi todas las reuniones se solía leer un examen. Y de ahí que cuando eran varios los que presentaban la petición al mismo tiempo, el Acuerdo estableciera el orden de presentación a examen.⁷¹⁷ Lo que ocurría normalmente es que les mandaba acudir al oidor decano "por antigüedad de

⁷¹⁴ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 53, fols. 104 B y 122-122 B.

⁷¹⁵ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 128, folio 98. Hasta este momento la identificación de los abogados en los libros del Real Acuerdo era doble según donde se hubiera producido el recibimiento: de los aprobados por el Supremo Consejo aparecía su título al final de los libros del Real Acuerdo, mientras que de los aprobados por éste se recogía su juramento en las actas del mismo tribunal. A partir de ahora todos los abogados aparecerán con sus títulos en los libros, primero los aprobados por el Consejo y después los aprobados por el Real Acuerdo. En este año de 1833 todos los recibidos por el Real Acuerdo lo son, curiosamente, con posterioridad al 3 de junio. El primero de ellos lo es, en concreto, del 4 de este mes.

⁷¹⁶ Un ejemplo: el día 15 de mayo de 1762 se vio en el Real Acuerdo la petición de Patricio Casador Bernat. El día 17 presentó Martín Dávila, como oidor más moderno, el informe verbal, y se remitió al pretendiente al oidor decano. El 13 de junio se le entregó el examen, y el siguiente lo leyó y juró. A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 57, fols. 35, 36 B y 47.

⁷¹⁷ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 57, fol. 36 B.

grado". Si bien, esta última norma no se solía tener mucho en cuenta, ya que es más que habitual encontrar casos en los que, de entre varios pretendientes cuya petición es vista en el mismo acuerdo, se presente a examen primeramente el más moderno en grado.⁷¹⁸ A finales del siglo XVIII ya encontramos reuniones en las que se presentan dos examinandos, lo que se convirtió en práctica habitual entrado el siglo siguiente, sin que se superase nunca este número.⁷¹⁹ Cualquiera que sea el asunto, todo lo relacionado con el recibimiento de abogados aparece siempre en los libros del Acuerdo al final de cada acta.

Por otra parte, y desde el año 1793 hasta 1802, el Real Acuerdo adoptó la práctica de suspender la admisión de papeles y la aprobación de abogados desde el mes de julio hasta el de octubre.⁷²⁰

Para el caso de que el Acuerdo estimara no estar el pretendiente lo suficientemente preparado, no lo aprobaba, y le concedía un plazo tras el cual podía volverse a presentar a examen. Este plazo podía ser desde varios meses —cuatro o seis normalmente—, hasta un año, y, en ocasiones, junto a la expresión "Buelba a examen pasado un año" —o X meses—, se añadía "Y en el interin procure estudiar". Incluso, hay supuestos en los que no se determina este período, y en otros el suspendido, antes de finalizar el tiempo, solicita del Real Acuerdo que se le exima del que le falta, a lo que éste accede.⁷²¹ De cualquier modo son supuestos poco frecuentes.

En otras ocasiones el aspirante no comparecía ante el Acuerdo el día del examen, presentando certificación médica en la que justificaba su

⁷¹⁸ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 82, casos de Manuel Pablo Romero Moyá y Timoteo Gazo Gazo, o de Tomás Luis Espí y Agustín Soler; o libro 83, caso de Manuel Alemany, Pedro Luis Traver y Lorenzo Martínez.

⁷¹⁹ No podemos decir que la causa fuera el mayor número de graduados que se presentaban, pues no era así.

⁷²⁰ Para el año 1793, por ejemplo, véase A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 88, fol. 85 B.

⁷²¹ Para el caso de no fijarse plazo el pretendiente suele volver a presentarse a examen al cabo de poco tiempo. A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 59. El 18 de junio es suspendido Manuel Linares a quien simplemente se le dice "Buelva a examen". El día 25 del mismo mes solicita de nuevo examinarse, leyendo y aprobando el 28. En 1787 —libro 82—, José Francisco Pi suspende el 23 de julio, se le impone un plazo de seis meses para volverse a presentar, y el 16 de octubre se le dispensa del tiempo que le faltaba. El 7 de julio de 1788 —libro 83— se suspendió a Estanislao Xavier de Salazar, concediéndole dos meses; pero el 11 de agosto se le aceptó la solicitud de dispensa del tiempo que faltaba, aprobando el día 26. Andrés Rodríguez Ferrer suspendió el 22 de marzo y se le ordenó no volver a examinarse hasta pasado un año. Pero el 21 de abril el Acuerdo, previa petición de parte, le eximió del tiempo que le faltaba, de forma que leyó el examen y juró el 2 de mayo —libro 58—.

indisposición y solicitando, asimismo, se le relevase de la obligación del examen. A lo que el Acuerdo resolvía que volviera a tomar pleito cuando su estado de salud se lo permitiera. Es curioso comprobar como en la mayoría de estos casos, que ciertamente tampoco son muchos, el examinando suspendía cuando se presentaba al examen.⁷²²

Incidencias políticas

Como regla general, hay que decir que los cambios de régimen político del primer tercio del siglo XIX apenas afectaron a la expedición de títulos.

El artículo 7 del decreto de 4 de septiembre de 1809, de José Bonaparte, obligaba a todos los abogados a presentar sus títulos de aprobación y examen en el Ministerio de Justicia, "para ser revalidados los de aquéllos que lo solicitaren y merecieren". Además, establecía que pasados 30 días de la publicación del decreto, no podrían ejercer su profesión sin haber obtenido la habilitación interina de los gobernadores, intendentes o presidentes de las chancillerías y tribunales que debieran darlas. El artículo 8 ordenaba a los abogados, que al recibir sus títulos prestaran juramento de fidelidad y obediencia "a nuestra Persona", a la Constitución y a las leyes, y de administrar fiel y rectamente justicia.⁷²³ Pero no debemos olvidar que la audiencia borbónica de Valencia se estableció a finales de 1811 en Xàtiva y, posteriormente, en Alicante, quedándose en Valencia la *afrancesada*, de la que todavía no conocemos su funcionamiento, y, por lo tanto, la posible aplicación en la misma de esta norma.⁷²⁴ Sin embargo, en otros colegios de abogados sí tuvo aplicación efectiva este decreto.⁷²⁵

De la misma manera, no parece que la guerra ni la posible colaboración del colegio de Valencia o de los colegiados con el gobierno del mariscal Suchet, afectara lo más mínimo a la vida colegial. Lo cierto es que, conquistada la ciudad, sus principales fuerzas sociales optaron por colaborar

⁷²² A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 57, fols. 58, 62 B y 87 B; libro 58, fols. 7, 56 B y 81.

⁷²³ *Prontuario de las leyes y decretos del rey nuestro señor don José Napoleón I*, I, págs. 331 y sigs.

⁷²⁴ Sobre la Audiencia de Valencia en el reinado de Fernando VII J. Sánchez Rubio está escribiendo en el presente una tesis doctoral.

⁷²⁵ Algunos pretendientes a colegiados en Valladolid solicitaron de rey invasor su incorporación en el colegio sin pruebas de limpieza de sangre ni demás requisitos, para lo que se le pidió informe al colegio; véase F. García Marroquín, *Reseña histórica...*, págs. 69 y 70.

con los franceses, destacando en esta línea el arzobispo, Joaquín Company, el corregidor, José de Vallejo, y el jefe de policía, Agustín de Quinto.⁷²⁶ Las únicas repercusiones aparentes en el colegio de la ocupación de la ciudad fue la suspensión de las elecciones a Junta, y el hecho de que no hubiera ninguna nueva incorporación.⁷²⁷ Ni siquiera nos consta que hubiera posteriores represiones, al contrario de lo que ocurrió en otros colegios.⁷²⁸ Liberada la ciudad de los franceses en enero de 1813, fue el mismo colegio el que se adelantó a la Audiencia, manifestándole que deseaba prestar su juramento, como corporación, a la Constitución de 1812, en virtud de lo establecido en el decreto de 18 de marzo; al tiempo que le comunicaba su intención de que tal juramento "merezca alguna preferencia y distinción, y se ejecute de un modo el más solemne y honorífico".⁷²⁹

En 1814, con el regreso de Fernando VII, y después de varias y confusas disposiciones, la circular del Consejo Real de 14 de abril de 1815 autorizaba a la chancillería de Valladolid y demás audiencias para que expidiera los títulos oportunos a los abogados recibidos durante la dominación francesa, sin necesidad de nuevo examen. "Pero pudiendo haber algunos que al tiempo del examen no tuviesen los años de estudios prevenidos por la ley, deberían justificarlo antes de la expedición de los nuevos títulos".⁷³⁰ Eso sí, se exigía de todos ellos la presentación de un informe del ayuntamiento de su residencia, acreditativo de su buena conducta política durante la ocupación.

Tras el trienio liberal este tipo de disposiciones fueron más numerosas y confusas. La real cédula de 5 de febrero de 1824 había ordenado sacar nuevo título a los abogados recibidos durante la época del gobierno constitucional, previa censura de su conducta moral y política. No obstante, por otra circular del Consejo Real de 4 de abril del mismo año, se matizaba aquella

⁷²⁶ N. Cruz Román, *Valencia...*, págs. 60-146.

⁷²⁷ Véase apartados *La junta y sus cargos*, y *Tres grandes etapas de incorporación*.

⁷²⁸ Para el colegio de Oviedo véase M. Corripio Rivero, *Historia del Ilustre...*, págs. 12 y sigs. Destaca el hecho de que las causas sobre purificaciones que llegó a conocer esta audiencia no fueron, tanto instadas de oficio, como por los propios colegiados o, incluso, por aquellos que aún no lo eran, y siempre movidos por intereses particulares. Para el colegio de Sevilla véase J. Santos Torres, *Apuntes para la Historia...*, págs. 65-75, y E. Llach y Costa, *Reseña Histórica*, I, págs. 327 y sigs.

⁷²⁹ A.I.C.A.V., libro 5, junta de 18 de agosto de 1812. Véase también juntas de 26 de agosto, 1 de septiembre y 6 de octubre del mismo año.

renovación para sólo los que no pudieran acreditar que, en el momento del recibimiento, se hallaban con los años de estudio y la práctica que se exigía antes del 7 de marzo de 1820. Volvemos a comprobar así el recelo que el régimen fernandino mostraba para con la instrucción liberal que pudieran haber recibido los abogados a su paso por la universidad. Al mismo tiempo, en la circular del Consejo Real de 19 de enero de 1824, se recuerda a las chancillerías y audiencias la obligación que tenían las Justicias de dar traslado a los procuradores síndicos de las informaciones de limpieza de sangre y conducta política que debían presentar los aspirantes a abogados, para que pudieran exponer sobre las declaraciones de los testigos. Al parecer, este traslado se suplía hasta entonces con la simple citación. No obstante, no tenemos ninguna noticia del Real Acuerdo de Valencia sobre este punto.⁷³¹

Por otra parte, por real cédula de 1 de agosto del mismo año 1824, se había impuesto a todos los profesionales del foro el juramento de "no pertenecer, ni haber pertenecido a ninguna logia ni asociación secreta de cualesquiera denominación que sea, ni reconocer el absurdo principio de que el pueblo es árbitro en variar la forma de los gobiernos establecidos".⁷³² La fórmula del juramento todavía sufrió más modificaciones posteriores, aunque de poca importancia. Por circular del Consejo Real de 22 de noviembre de 1833 se substituyeron los términos "no pertenecer, ni haber pertenecido", por los de "que no pertenece ni pertenecerá".⁷³³ Y por real orden de 26 de febrero de 1836 quedó de la siguiente manera: "Juro a Dios ser fiel a la Reina Doña

⁷³⁰ *Decretos del rey...*, II, págs. 238-240, en concreto 239. F. García Marroquín, *Reseña histórica*, pág. 70.

⁷³¹ *Decretos del rey...*, VIII, págs. 120-126, 293-295, y 73-74, respectivamente para las tres disposiciones. Los expedientes de incorporación apenas dejan constancia de esta revalidación de títulos; véase Juan Reguart Lacruz y Pedro Pasqual Calabuig, A.I.C.A.V., caja 28, legajo del año 1826, nº 8, folio 12 B, y caja 29, legajo del año 1829, nº 1, folio 5 B, respectivamente. Sobre la confirmación de los títulos de abogado expedidos durante la dominación francesa por las audiencias de América, véase real cédula de 26 de octubre del mismo año, *Decretos del rey...*, IX, págs. 325-326.

⁷³² *Decretos del rey...*, VIII, págs. 120-124. M. y J. L. Peset Reig, "Legislación contra liberales...", pág. 467. Realmente cada cambio político suponía una modificación en la fórmula del juramento. Por real orden de 27 de julio de 1823 se prohibía todo juramento "que no sea de los prescritos por la Constitución, o cuya fórmula esté expresa y especialmente aprobada por decretos de las Cortes". A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 118, folios 38 y 330.

⁷³³ *Decretos del rey...*, XVIII, págs. 285-286.

Isabel II y a su augusta madre como Regenta y Gobernadora, observar las leyes del Reino, y cumplir bien y fielmente las obligaciones de mi cargo".⁷³⁴

En 1826 tenemos nuevas disposiciones sobre purificaciones. Por real orden de 13 de junio se acordó que los pretendientes a la abogacía acreditaran documentalmente, además de los requisitos prevenidos por el plan general de estudios, su buena conducta política y *opiniones*.⁷³⁵ Lo que el Supremo Consejo mandó circular a las audiencias para que éstas, a su vez, lo trasladasen a las juntas colegiales. Tratado el asunto en junta particular del colegio de 14 de julio de ese año se acordó que, debiéndose acreditar estas circunstancias en el Real Acuerdo, no era necesario repetir este trámite en los expedientes de incorporación.

En este año se reitera la revalidación de los títulos obtenidos en el período constitucional, matizándose que los abogados no estaban sujetos a purificación, y que podían todos ellos continuar ejerciendo la facultad, a no ser que estuvieran comprendidos en alguna de las excepciones del artículo segundo del decreto de 1º de mayo de 1824, por el que se exceptuaban del indulto a los principales cargos constitucionales e instigadores contra el régimen fernandino.⁷³⁶ No ocurrió exactamente lo mismo con los abogados o examinandos que durante el trienio habían pertenecido a la Milicia Nacional Local Voluntaria. En un principio no se les privó de derecho alguno, en espera de una resolución definitiva.⁷³⁷ Pero por circular del Consejo de 25 de enero de 1827 se concluyó que, no siendo esta circunstancia impedimento para recibirse ni ejercer, sí se les prohibía el ejercicio de la judicatura, "ni aun con títulos de asesores", y opositar a las cátedras que vacaren en las universidades y colegios. En 23 de febrero el Consejo acordó que todas las chancillerías y

⁷³⁴ *Decretos de la Reina...*, XXI, pág. 91.

⁷³⁵ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 121, fols. 55 B, 697 y 698. Véase también expedientes de incorporación de los abogados Juan Reguart y Lacruz y Pedro Pascual Calabuig, A.I.C.A.V., caja 28, año 1826, expediente nº 8, folio 12 B; y caja 29, año 1829, exp. nº 1, segundo legajo, folio 5 B, respectivamente.

⁷³⁶ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 121, folios 44, 284, y especialmente 57 y 699-701. Para el decreto de indulto véase *Decretos del rey...*, VIII, págs. 325-333.

⁷³⁷ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 121, folios 44, 284 y 57, 699-701.

audiencias preguntaran a los examinandos si habían sido milicianos, para, de haberlo sido, expedir el título con las restricciones prevenidas.⁷³⁸

Ingreso en el colegio

Requisitos

Para el ingreso del graduado en el colegio de abogados de Valencia se requería, además de haber sido recibido como abogado, estar en posesión de determinados requisitos y calidades, así como el cumplimiento de una serie de trámites; regulado todo ello en los estatutos XVII a XXVI.

La minuciosidad con que son detallados estos estatutos nos revela hasta qué punto alcanzaba la preocupación del colegio por conseguir el prestigio y alcanzar el honor que creía propio de la abogacía, y del que al parecer, no gozaba por aquella época. No en balde, nos encontramos ante el asunto tratado con más profusión por la Junta a lo largo de los años.

La primera duda que se plantea es la domiciliación de los colegiales, ya que los estatutos nada dicen sobre este particular. Esto es, si era requisito imprescindible para colegiarse el residir en la ciudad de Valencia. La junta de 10 de septiembre de 1766 manifestaba que, "reconociendo la incorporación que se ha conferido a los abogados de fuera la ciudad en el colegio, y que hasta ahora no han contribuido en la entrada anual de los dos duros y la peseta para la misa de cada difunto, se les escriba por el Sr. secretario a tal fin, incluyendo a cada uno en la lista."⁷³⁹ Sin embargo, la Junta decide, el 14 de marzo del año siguiente, consultar al colegio de Madrid para saber si en la corte se admitían por colegiales a los forasteros en las cinco leguas, o sólo a los que tenían estudio abierto dentro de las cinco leguas o dentro de sus muros.⁷⁴⁰ La junta de 23 de mayo, ateniéndose a la contestación recibida, resolvió que sólo saliesen en la lista los colegiales vecinos y habitantes de la ciudad, dejándose para otra junta la decisión sobre si debían ser admitidos por

⁷³⁸ *Decretos del rey...*, XII, pág. 17-18. A. R. V., *Real Acuerdo*, libro 122, folios 13 B y 186; y 25 B y 207.

⁷³⁹ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 96.

colegiales o no los forasteros. Por ello es de suponer que se siguió con la práctica vigente hasta ese momento, que era la de su admisión. Hasta este año 1767 habían aparecido en la lista todos los colegiales, residentes o no en la ciudad; si bien en las listas de los años 64, 65 y 66 se señalaba con un asterisco a los forasteros.⁷⁴¹ En 1796 la Junta manifiesta que el colegio incluía en la lista anual a los abogados que residían en la ciudad, añadiendo que para el caso de que algún ausente quisiera ejercer la facultad en la misma se le entregaría certificación por el secretario del colegio, para inteligencia de los escribanos y demás abogados, como venía establecido en los autos acordados 13 y 14 del título XVI del libro II de la *Nueva Recopilación*. De esta forma se da a entender que el colegio había estado admitiendo a abogados de fuera de la ciudad, como así lo continuaría haciendo.⁷⁴²

Otro problema diferente será el de si para figurar en la lista se requería el continuo ejercicio de la abogacía en despacho abierto en la ciudad. Al principio todo indica que no, pero con la llegada del decreto reduccionista de 1795 —que más adelante veremos—, muchos aspirantes a colegiales así lo pretendieron, y con esta intención acudían ante el Real Acuerdo. Ante la ausencia de una declaración inequívoca por parte del colegio sobre el domicilio y el efectivo ejercicio profesional de los colegiados, es interesante observar a través de casos concretos cuál era la práctica que se seguía:

En junta de 13 de noviembre de 1774 se acordó sacar de la lista a José Pérez, sin perjuicio de que conservara las preeminencias que como tal abogado y colegial le correspondían, incluyendo en su lugar, y por propia petición, a Antonio Isnart de Teulada, por haberse vuelto a domiciliar en la ciudad. Igualmente se acordó, que todos los colegiales que habiéndose

⁷⁴⁰ Sobre las cinco leguas, que es la jurisdicción de las capitales donde existen colegios de abogados, véase J. Berni y Catalá, *Resumen de los Privilegios...*, privilegio I, pág. 10.

⁷⁴¹ A.I.C.A.V., libro núm. 85.

⁷⁴² Los estatutos del colegio de Oviedo exigían de los aspirantes a colegiales que tuvieran casa —propia o alquilada— y estudio abierto. De hecho, en 1776 se le niega la incorporación a Carlos Fernández Sierra porque "sobre otras circunstancias, le faltaba la de residencia fija en esta ciudad, y casa abierta, por vivir como aún vive, en una posada, sin libros precisos para el ejercicio de abogado". Además, la Real Audiencia venía a confirmar esta exigencia al concederle licencia, por cuatro meses, para ejercer la profesión mientras buscaba casa. No obstante, este requisito fue relajándose con el tiempo, de forma que en 1828 se admitió a Antonio Menéndez Cuesta, que tenía "cuarto de estudio abierto en habitación y casa de posada". Véase M. Corripio Rivero, *Historia del Ilustre...*, págs. 10 y 16.

ausentado de la ciudad pretendiesen aparecer de nuevo en la lista, comunicasen al secretario su regreso.

El 16 de diciembre de 1780 se trató sobre la solicitud de Miguel Mora, colegial vecino de Alzira, por la que pretendía salir en la lista para que el colegio no olvidara hacerle los avisos de las misas con que debía contribuir por los colegiales difuntos. A lo que la Junta acordó que señalase sujeto en la ciudad con quien se entendiesen los avisos.

El 10 de octubre de 1811 se acuerda excluir de la lista, a petición propia, a Gabriel Montaner, por haber trasladado su domicilio a la villa de Jalón, y a efectos de eximirle de todo repartimiento de contribuciones y demás cargas y obligaciones a que estaban sujetos los colegiales, excepto en lo referente a la limosna de misas en sufragio de las almas de los demás individuos que falleciesen; acordando el colegio poner la oportuna nota en el libro de matrícula. En el mismo día también se separó de la lista, por propia petición y a efectos contributivos, a Franciso Ventura Pinedo. Lo mismo se practicó con José Ribelles Pla, por hallarse de alcalde mayor de Albalat de la Ribera; con Vicente Vives Crespo, por trasladar su domicilio a la villa de Benisa; y con José Pascual Ferrándiz y José Morant Segarra, por hallarse ausentes de la ciudad sin esperarse su regreso. Evidentemente, a ninguno de estos individuos se les excluyó del colegio.

De la misma manera, la Junta, en algunos informes remitidos al Real Acuerdo durante los períodos de vigencia del *numerus clausus*, se reafirmaba en la postura —que como veremos no era compartida por muchos pretendientes a colegiales—, de que en la lista no aparecían los abogados ausentes de la ciudad de Valencia, los cuales pertenecían indudablemente al colegio, e igualmente podían ejercer la facultad siempre que lo quisieran —con la oportuna certificación del secretario o domiciliándose de nuevo en la ciudad—. No obstante, en junta de 11 de noviembre de 1826, la Junta aprobó la solicitud de Antonio Martí de Veces de aparecer en la lista pese a residir en Oliva, si bien con la condición de que nombrase un representante en la ciudad que verificase en su nombre todos los pagos relativos a los fondos del colegio. De cualquier forma, se trata de un caso excepcional.

Resumiendo, podemos afirmar que para colegiarse no era preciso estar domiciliado en la ciudad de Valencia. En cuanto a salir en la lista, como

norma general lo hacían todos los residentes en esta ciudad, sin que tuviesen que dedicarse, necesariamente y con exclusividad, al ejercicio de la abogacía.

Calidades

El estatuto XVII exigía de todos los abogados que quisieran ingresar en el colegio, que

...haian de ser de buena vida y costumbres, hixos lexítimos o naturales, de padres conocidos y no vastardos ni expúreos, que assí los pretendientes como sus padres y abuelos paternos y maternos sean y haian sido christianos viejos, limpios de toda mala infección y raza, sin nota alguna de moros, judíos ni recién convertidos a nuestra santa feé cathólica, y que a lo menos los pretendientes y sus padres no tengan ni haian tenido oficios o ministerio vil ni mecánico público, lo qual se observe indispensablemente, entendiéndose ésto con equidad y prudencia y sin caluminiosa cavilación y dolosa emulación, y con calidad de que no por ello se admitan sin las regulares circunstancias que deven tener. Y que siendo tales que se dude de su admisión por el Colegio lo deva consultar con la referida nuestra Audiencia para que resuelva lo que estime.

En los siguientes estatutos (XVIII-XXIII) se detallaba el procedimiento por el que los pretendientes probaban ante el colegio que poseían las referidas calidades exigidas para el ingreso. Asimismo, exponían los trámites posteriores necesarios para lograr la definitiva incorporación. Debido a la ambigüedad de estos estatutos, son los expedientes de incorporación los instrumentos que nos han proporcionado una más exacta idea sobre los pasos que en la práctica se seguían, cuyo orden, además, diferirá ligeramente del recogido en los mismos estatutos.⁷⁴³

Procedimiento

En primer lugar, el pretendiente entregaba memorial al secretario solicitando su incorporación en el colegio. Este memorial contenía, además de dicha solicitud, certificación de hallarse recibido como abogado por el Real Acuerdo de Valencia, por cualquier otro real acuerdo o por el Consejo de Castilla. Contenía también la manifestación de su naturaleza o lugar de nacimiento, y de la de sus padres, abuelos maternos y paternos, con nombres

⁷⁴³ A.I.C.A.V., cajas 11 a 31.

y apellidos, a lo que adjuntaba una representación de su árbol genealógico y tres fes de bautismo: la del pretendiente y la de los padres. Estas fes debían estar legalizadas por tres escribanos o notarios, o al menos por dos, si no hubiera copia.

Si faltaba alguna de estas tres partidas, la Junta, o bien no accedía a la solicitud, sin más,⁷⁴⁴ o bien proponía la presentación de un documento complementario. Es el caso de Lorenzo Isern Lombart, que en 1811 presentó, a propuesta de la Junta, el desposorio de sus padres, al no poder adjuntar la partida de bautismo de su padre por estar ocupado su pueblo por los enemigos.⁷⁴⁵ En los últimos años de vigencia de los primitivos estatutos llegó a admitirse a algún abogado sin la presentación de las correspondientes partidas de bautismo, pero con la condición de que las aportara en un breve plazo de tiempo.⁷⁴⁶ Caso diferente fue el ocurrido en 1794, cuando al parecer llegó a oídos de los letrados el inminente cierre del acceso al colegio. En esta ocasión varios letrados solicitaron la incorporación, aun sin aportar todas las partidas de bautismo debidamente legalizadas, suplicando la iniciación de la práctica de las pruebas mientras ellos obtenían dicha legalización. A lo que accedió el colegio, concediéndoles un plazo, de normalmente 15 días, para aportarlas.⁷⁴⁷ Pero, además, la Junta tampoco admitía la incorporación si no se aportaban todas estas partidas correctamente legalizadas.⁷⁴⁸ A este respecto, en junta de 3 de mayo de 1777 se puntualizaba que los estatutos no obligaban a que fuesen sacadas necesariamente por escribano. Éste tan sólo debía legalizarlas, ya que el párroco sí podía sacarlas.

Una vez el secretario reconocía en forma todos los documentos presentados por el pretendiente, dejaba constancia de la certificación de hallarse recibido como abogado al margen de la solicitud de incorporación — certificación que le era devuelta—, y daba cuenta al decano. Éste, precediendo

⁷⁴⁴ Caso de Francisco Calbo Marco, al que por junta de 24 de julio de 1811 se le denegó su admisión por no aportar su propia partida; véase A.I.C.A.V., libro 5, pág. 159 B. Fue admitido el 8 de agosto.

⁷⁴⁵ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 158.

⁷⁴⁶ Casos de Gabriel Cabrera Angulo, en 1825; o de José Burlo Camiliere y Felipe Esno de Bas, en 1836; A.I.C.A.V., libro 5, págs. 19, 196 B y 203 B, respectivamente.

⁷⁴⁷ Caso de los colegiales Manuel Macías Pérez, José de la Fuente o José Rivelles; A.I.C.A.V., libro 5, págs. 25 y 26 B.

informe secreto favorable de la calidad del solicitante, nombraba dos informantes o comisarios individuos del colegio, uno antiguo y otro moderno, para que, previo juramento, examinasen a los testigos presentados por el pretendiente, a tenor de las preguntas que a continuación veremos. Pero, si según el anterior informe —del que por ser secreto no quedaba constancia en los expedientes de incorporación—, no parecía el pretendiente merecedor de formar parte del colegio, los mismos secretario y decano se encargaban de disuadirle de su pretensión.

Si el pretendiente era merecedor de formar parte del colegio, de acuerdo con el informe secreto del decano, el secretario confeccionaba interrogatorio arreglado al pretendiente y a su genealogía presentada. Este interrogatorio, junto con el memorial presentado por el pretendiente y el nombramiento de informantes, era remitido al más antiguo de éstos. El interrogatorio, como aparece regulado en el estatuto XVIII, quedaría de la siguiente forma:

1. Primeramente se les preguntará por el conocimiento del dicho don N., y si le tienen de sus padres y abuelos paternos y maternos, y de su naturaleza y vecindad, domicilio de unos y otros, dando razón individual.

2. Si saben que el dicho don N. es hixo legítimo de don J. y de doña N., su muger, naturales de N., nieto legítimo de don N. y de doña N., su muger, naturales de N. Y los mismos que el pretendiente expresa en su genealogía digan lo que supieren y por qué lo saben.

3. Si saben que assí el dicho don N., pretendiente, como los dichos sus padres y abuelos paternos y maternos han sido christianos viexos, limpios de toda mala raza de moros, judíos, penitenciados por el Santo Oficio de la Inquisición, ni de los nuevamente convertidos a nuestra santa fee. Y que no desciendan de ninguno que tenga ni haya tenido semejante nota ni han sido castigados por otro tribunal alguno con pena que irroque infamia. Y que siempre todos estuvieron, están y han estado en reputación de chistianos viejos en las partes y lugares de sus naturalezas, residencia, vecindad y domicilio y en todas sus comarcas, sin que jamás en una ni otra parte se haya ohído ni entendido cosa en contrario. Y que assí es público y notorio, pública voz y fama, expresando la razón que tubieren para saberlo y que a no ser así no dexaran de tener noticia fixa.

4. Si saben que el dicho don N., pretendiente, ni el dicho don N., su padre, ni la dicha doña N., su madre, hayan tenido ni exercido en tiempo alguno, ni actualmente exercen oficio, ni ministerio, ni empleo

⁷⁴⁸ Caso de Antonio M^a García de Alcaraz, que no fue admitido inicialmente en junta de 13 de octubre de 1813 por no presentar legalizada la suya.

vil, ni mecánico y menos decente y que se oponga o pueda oponer a el lustre de tan decorosa profesión como la de la abogacía. Y en caso de que sepan o tengan noticia de haber tenido o ejercido alguno de los oficios menos decentes, expresen el que hubiere sido, dando razón de todo.

5. Item: De público y notorio, pública voz y fama, y común opinión.

En base a estas preguntas los informantes examinaban en sus casas,⁷⁴⁹ y previo recibimiento de juramento, a seis testigos "mayores de toda excepción" presentados por el mismo pretendiente. Son numerosas las ocasiones en que la Junta considera insuficientes los resultados del interrogatorio. En unos casos porque no había suficientes testigos que depusieran sobre los padres o, sobre todo, los abuelos del pretendiente;⁷⁵⁰ y en otros casos porque no se consideraba bastante la información que aportaban.⁷⁵¹ También había expedientes en los que se suplían los defectos por otros medios indicados por la Junta.⁷⁵²

⁷⁴⁹ En casa de los propios informantes, pues así se desprende de lo manifestado en junta particular de 19 de julio de 1768, cuando se corrige a los informantes Mariano Campos y Antonio Valor por haber recibido a los testigos del solicitante, Alejandro Gisbert, en casa de su padre, el también colegial José Gisbert. Sin embargo, por no haber actuado los informantes maliciosamente y por no haberse faltado a la substancia del informe, sino sólo al ritual, estando en todo conforme a los estatutos, fue aprobado el informe en cuestión.

⁷⁵⁰ Bernabé Antonio Grande no fue admitido en 1775 por no conocer los testigos a los abuelos; A.I.C.A.V., libro 4, pág. 146 B. Sin embargo, Matías Pérez Gómez y Alberto Marco fueron admitidos en 1775 y 1792, respectivamente, a pesar de no aportar suficientes testigos que depusieran sobre los suyos —por su dificultad—. El primero sólo aportó uno, el segundo ninguno. Y ello a pesar de que la Junta entendía que, según estatutos, al menos dos de los seis testigos aportados por el pretendiente debían conocer a cada uno de los ascendientes. Véase libro 4, págs. 146 B y 284, respectivamente.

⁷⁵¹ Casos, por ejemplo, de Vicente Rovira Martí, en 1767; o Cristóbal Ojalde, en 1778. En el primer caso por no quedar claro el oficio del padre, y en el segundo porque el abuelo materno sólo era conocido por un testigo; A.I.C.A.V., libro 4, págs. 97 y 164.

⁷⁵² En junta de 24 de julio de 1785 se hizo saber a Tomás Pastor que sólo había presentado un testigo de conocimiento de su abuelo paterno, y que suplire esta prueba "ya produciendo nuevos testigos o bien por instrumentos". En 1764 a Luis Coloma se le había eximido de la justificación de las calidades de sus abuelos maternos mediante testigos, por ser aquéllos vecinos de la universidad de El Palomar y tener más de 80 años. Si bien, se presentó en su lugar sumaria original remitida por dicha población; A.I.C.A.V., libro 4, pág. 75. Casi exacto es el caso de Tomás Gomis Rusafa, dado en 1768 y natural de San Juan, Alicante; libro 4, pág. 102 B. O el caso de Juan Bautista Batifora, al que la junta de 28 de enero de 1777 le admitió sumaria recibida en Génova sobre conocimiento de su abuela paterna, por no haber podido encontrar en Valencia testigos que la hubiesen conocido. Incluso en 1774 fue el mismo secretario del colegio quien escribió al corregidor de Almería solicitando noticias de la familia del pretendiente Manuel Pro, al no poder presentar éste testigos de conocimiento de su abuela materna, por haber fallecido en aquella ciudad mucho tiempo atrás; libro 4, pág. 106.

Dos abogados intentaron suplir estas pruebas por la de limpieza de sangre dada en el Santo Oficio de la Inquisición, a lo que la Junta se negó por considerar que no residían en ella facultades para alterar los estatutos.⁷⁵³

Hemos visto que ante la ausencia de alguna partida de bautismo el decano ni siquiera admitía la solicitud de incorporación hasta que no se adjuntaba toda la documentación exigida, tras lo cual se designaban los comisarios informantes. Sin embargo, en el caso de insuficiencia de testigos o de sus deposiciones, era tras los interrogatorios y el informe de los comisarios cuando la Junta estimaba insuficiente el número o la acreditación de las calidades requeridas. Y es aquí cuando se paralizaba el procedimiento de incorporación, a la espera de una mayor justificación de estos extremos.

Una vez los informantes tenían las respuestas de los testigos, añadían a continuación un informe en el que opinaban sobre la aptitud del pretendiente para ser recibido o no en el colegio. Este informe, que junto con las respuestas del interrogatorio se uniría al expediente o memorial, se basaba, no sólo en el resultado del referido interrogatorio, sino además en otro informe que, secreta y paralelamente, habían elaborado los comisarios, y del que tampoco se dejaba constancia escrita. Todo ello se volvía a remitir al secretario.⁷⁵⁴

Tan sólo un año después de la aprobación de los estatutos se produjo lo que podría haber constituido la primera modificación en el procedimiento de ingreso. Por auto del Real Acuerdo de 24 de noviembre de 1763 —en el expediente originado ante la negativa del colegio a admitir al abogado Gabriel Pelecha—, se dispuso que los informes que los comisarios realizaban dejaran de ser secretos, y que en ellos se hiciera constar la identidad de los individuos de los que se hubiera obtenido esta información. Al parecer, el Real Acuerdo pretendía, además, que se elaborara un informe separado por cada individuo. En junta particular de 13 de julio del año siguiente, el maestro de ceremonias, preocupado por la observancia de la letra de los estatutos, pero al mismo tiempo no queriendo contravenir lo dispuesto por el Real Acuerdo, propuso que se suspendiese la admisión de nuevos colegiales, hasta que este tribunal

⁷⁵³ Fueron los casos de José Andrés Salelles Molina, visto el 14 de enero de 1768, y Francisco Margarit Pujasons, visto en 22 de enero de 1792; A.I.C.A.V., libro 4, pág. 284 B.

⁷⁵⁴ En 23 de mayo de 1767 la Junta resolvió devolver a los informantes el expediente de Vicente Rovira Martí, porque no expresaban en él la aptitud del pretendiente.

resolviera en suplicación el recurso que el colegio había interpuesto contra la parte del mencionado auto que se refería a este punto.⁷⁵⁵ Recurso que había interpuesto a propuesta del colegio de Madrid y fundándolo en que dicho auto era contrario a los estatutos. Pero la Junta decidió no suspender las incorporaciones. Aunque ignoramos cuál fue el resultado de esta resolución, lo cierto es que en ningún momento los informes de los comisarios dejaron de ser secretos.

Tan sólo conocemos un caso en el que los comisarios informantes no estuvieron de acuerdo entre sí sobre la calidad del pretendiente y su conducta. Y así se refleja en el expediente de Antonio Aznar Villanueva, en el que uno de los comisarios manifestó sus dudas mediante escrito separado. Las causas no radicaban, eso sí, en razones sanguíneas u honoríficas, sino en la posible irregularidad de su proceder como testigo letrado en dos o tres informaciones de utilidad en que intervino para la enajenación de bienes de menores. Sin embargo, la Junta no manifestó reparo alguno en su admisión.⁷⁵⁶

En alguna ocasión se dio comisión a abogados del lugar de procedencia del aspirante para que recibiesen allí a los testigos, ante la imposibilidad de que éstos se trasladasen a Valencia.⁷⁵⁷ Y ello a pesar de que el estatuto XVIII establecía expresamente que este interrogatorio se llevase a cabo en la ciudad de Valencia.

El secretario daba cuenta del resultado de las pruebas que habían practicado los informantes en la primera junta que se celebraba. Previamente habría avisado al pretendiente para que visitase al decano y oficiales, "por precisa ceremonia y para que le conozcan" (estatuto XXI). Según el estatuto XXII, en esta junta

...si hallaren que corresponde a lo prevenido por los Estatutos, las aprobarán. Y en caso de tener algún reparo substancial las suspenderán, y procurarán disuadir por los medios más prudenciales

⁷⁵⁵ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 74.

⁷⁵⁶ A.I.C.A.V., caja 27, expediente 4, folios 12 y 13.

⁷⁵⁷ Casos de José Gil, natural de Soneja e incorporado en 1791; A.I.C.A.V., caja 21, año 1791, expediente 2; Francisco Moltó Miralles, natural de Cocentaina e incorporado en 1825, caja 28, año 1825, expediente 6; o Miguel Jerónimo Amat, natural de Elda e incorporado en 1826, caja 28, año 1826, expediente 1. El colegio remitía a los abogados de estas poblaciones el expediente, quienes, al parecer, debían aceptar y jurar desempeñar el cargo con arreglo a lo establecido en los estatutos.

a el pretendiente para que desista de la pretensión y se separe de abogar en la referida Audiencia y tribunales de aquella ciudad, dándole a entender se procurará executar lo mismo que se le persuade. Y en caso de que no lo practique así, queriendo mantenerse abogando, se dará cuenta a la Audiencia para que dé la providencia conbeniente.

Si se daban por buenos los resultados de las pruebas, el secretario avisaba al pretendiente para que entregara al tesorero cuatro pesos duros como propina de entrada, para aplicar a los gastos que se ofreciesen.⁷⁵⁸ Posteriormente, y llevando al secretario papel del tesorero que acreditara haber abonado dicha cantidad, lo sentaría aquél en el libro de entradas o matrícula,⁷⁵⁹ previo juramento ante el decano o, de su orden, ante el mismo secretario, de defender "que Nuestra Señora la Virgen María fue preservada y exempta de la original culpa". Aunque de la lectura del estatuto XXIII pueda parecer lo contrario, según los expedientes de incorporación, y hasta el año 1786, el juramento solía preceder al depósito, efectuándose ambos normalmente el mismo día. Según consta en junta de 9 de agosto de 1768, estaba establecido como costumbre el hecho de que el pretendiente que hubiese logrado el ingreso en el colegio visitase a los señores de la Junta y les diese las gracias por su incorporación.

En 1786, y a propósito del ingreso de Tomás Castelló Bernabeu, la Junta acuerda por resolución de 15 de julio que en adelante se siguiese en todos los expedientes de incorporación el mismo orden en el cumplimiento de estos pasos, a saber: en primer lugar, el secretario leería al pretendiente la junta en la que se acordaba su admisión, el cual, mostrando su agradecimiento al colegio por el honor que se había dignado en hacerle, aceptaba todas las condiciones que prevenía la Junta en sus decretos, se obligaba en debida forma y prometía cumplir los estatutos, reglamentos y deliberaciones del colegio y del montepío; en segundo lugar, depositaba las cantidades señaladas

⁷⁵⁸ Pedro Cebrián Bordes no pagó los derechos de entrada cuando se incorporó en 1763. El motivo fue el ser hijo de Gaspar Cebrián, del Consejo de S. M. y oidor en la Real Audiencia, y practicarse en el Real Acuerdo el ser recibidos los hijos de estos señores sin examen. Aunque se incorporó en 1763, la Junta acordó sacarle en la lista en el turno que correspondía al día 19 de noviembre del año anterior, por haberse suspendido en ese momento las diligencias de incorporación mientras se dilucidaba si, por ser quien era, quedaría exento de las pruebas. Lo que no sucedió; A.I.C.A.V., libro 4, pág. 48 B.

⁷⁵⁹ A.I.C.A.V., libros 1 y 2. El segundo viene a ser el primero puesto en limpio.

para ambas corporaciones; y, en tercer lugar, prestaba el juramento como estaba deliberado, tras lo cual se procedía a su anotación en el libro de matrícula.⁷⁶⁰ A partir de su inscripción en el libro de matrícula, el abogado adquiría la condición de colegial y congregante de pleno derecho, y como tal disfrutaba de los derechos y estaba sujeto a las obligaciones de todo miembro de esta corporación.⁷⁶¹

El procedimiento de incorporación, tal y como lo he descrito, permaneció inmutable hasta 1836. En junta particular de 29 de agosto de este año se discutió sobre lo poco conformes que se presentaban algunos de los extremos del interrogatorio con las instituciones y leyes que regían en ese momento. En definitiva, con la situación política y social de la época, tan diferente de la que existía cuando se aprobaron las ordenanzas. Con lo que, teniendo en cuenta el espíritu de las leyes que se habían publicado desde entonces, y especialmente la orden de 31 de enero de 1835, por la que se abolía la prueba de *limpieza de sangre*,⁷⁶² se acordó:

Que interinamente, y sin perjuicio de solicitarse la aprobación correspondiente y de estarse en esta parte a lo que resuelva la superioridad, o tenga a bien establecerse, se suspenda el examen de testigos al tenor de las preguntas 3ª y 4ª, y subsistiendo la primera y segunda se substituya a aquellas la siguiente: y si saben que el pretendiente D. F. [iniciales del último pretendiente cuya solicitud motivó esta reforma en los estatutos] no ha sido castigado por tribunal alguno con pena que cause infamia, y que tanto éste como sus referidos padres y abuelos son y han sido personas honradas y de buenos procedimientos y en este concepto han

⁷⁶⁰ A.I.C.A.V., caja 19, año 1786, expediente 2, última hoja.

⁷⁶¹ En Sevilla la antigüedad del colegiado quedaba fijada desde el juramento y "la visita de estudio" que realizaban dos letrados nombrados por la Junta, y que no tenía lugar cuando el individuo no iba a ejercer la abogacía; J. Santos Torres, *Apuntes para la Historia...*, págs. 40-41. En Valencia no hay nada parecido a esta visita.

⁷⁶² *Decretos de la reina...*, XX, 1835, págs. 67-68. La razón de esta abolición era, según la misma orden, que "han desaparecido felizmente las causas que las motivaron [las pruebas], que es opuesto a los principios de la justicia universal castigar en la generación presente y en las futuras extravíos y debilidades que pertenecen y probablemente purgaron ya las generaciones pasadas, que semejante prueba es inútil, porque la caridad cristiana y los sentimientos nobles y generosos de los españoles se resisten a revelar hechos que pudieran privar a hombres inocentes, y acaso beneméritos, de los medios que para su subsistencia y con provecho del Estado les ofrecen el estudio de las ciencias y la profesión de las artes, y, por último, que los gastos a que dan margen las diligencias judiciales, que las citadas informaciones suponen, son un sacrificio que las escasas fortunas de muchas familias no pueden soportar". La misma orden establecía que, en lugar de la limpieza de sangre, bastaba la partida de bautismo que acreditara ser el aspirante hijo de legítimo matrimonio, así como la justificación de buena moral y conducta.

estado y están tenidos y reputados en los pueblös de su respectiva naturaleza y residencia sin que los testigos sepan o hayan oído decir cosa en contrario.⁷⁶³

Esta nueva estructura del interrogatorio tan sólo se aplicó a los abogados que se colegiaron hasta la redacción de los nuevos estatutos del año 1838.

Caso particular era el que se daba cuando solicitaban el ingreso dos hermanos. Si los dos presentaban la solicitud al mismo tiempo, la práctica de las pruebas para ambos se realizaba en el mismo expediente, presentando una sola partida de bautismo de cada padre, y deponiendo los mismos testigos sobre ambos pretendientes y sus ascendientes. Al mismo tiempo, los comisarios elaboraban un informe final conjunto para los dos.⁷⁶⁴ Pero si las solicitudes se presentaban en años diferentes la solución variaba dependiendo del supuesto. Así por ejemplo, en 1770, Carlos Cipriano Marín Peronier suplicó la incorporación en el colegio con dispensa de las pruebas, por haberlas presentado ya su hermano José Mariano, que había ingresado en el año anterior, o bien que en todo caso se entendiesen sólo en cuanto a lo personal del pretendiente. La junta particular de 15 de julio no admitió esta súplica, disponiendo que se diesen las pruebas completas según estatutos.⁷⁶⁵ Sin embargo, en 1776 la Junta accede a la pretensión de Luis Pedro Sánchez Gil de que se tuviese en cuenta el expediente de su hermano Ignacio, incorporado dos años antes, a efectos de las deposiciones de los testigos con respecto al conocimiento del abuelo materno y de la abuela paterna, por ser descendientes de Sax y Caudete, respectivamente, y no haber podido encontrar testigos en Valencia que pudiesen deponer sobre ellos.⁷⁶⁶ Finalmente, durante los últimos años de vigencia de las antiguas ordenanzas

⁷⁶³ A.I.C.A.V., libro 7, pág. 197.

⁷⁶⁴ Es el caso —único— de los hermanos Carlos y Ramón Sánchiz Vendrell, incorporados en 1769; A.I.C.A.V., caja 13, año 1769, expediente 8.

⁷⁶⁵ Carbs C. Marín no se incorporó hasta 1777. La misma decisión adoptó la Junta el 29 de marzo de 1772, y según ella misma por coherencia con la anterior, ante idéntica súplica de Cristóbal Clergues Martínez, con respecto a su hermano Alejos, incorporado en 1766.

⁷⁶⁶ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 151 B. Caso similar es el Blas Gascó Orbera, que en 1789 pretendió que se le dispensara de aportar testigos del conocimiento de sus abuelos paternos, al tener más de 80 años y serle imposible traerlos a Valencia desde Vilareal. Sobre este extremo proponía que se estuviese a lo que se manifestaba en el expediente de incorporación de su hermano Mariano, que ingresó en ese mismo año. La Junta también accedió a esta pretensión; libro 4, pág. 261.

éstas ya no se cumplían con el mismo celo con que se observaban al principio. Por junta de 2 de mayo de 1836 se admitió en el colegio a Francisco Javier Verdejo Montañana, en base a las mismas pruebas aportadas un año antes por su hermano Miguel, sin que al parecer existiese motivo especial que impidiese al primero llevarlas a cabo. Hay otros abogados que ni siquiera solicitaron que valiesen en su expediente las pruebas presentadas por sus hermanos incorporados con anterioridad. Destacan los tres hermanos Calabuig Calabuig, oriundos de Bocairén, cada uno de los cuales presentó su expediente completo y se incorporó en diferentes años.⁷⁶⁷

El primer abogado en incorporarse mediante expediente de incorporación fue Joaquín Salelles Villar, cuyo ingreso fue aprobado en junta particular de 25 de abril de 1762, prestando juramento y sentándolo el secretario en el libro de matrícula el mismo día. Desde este día, y durante los 76 años en que estuvieron vigentes los primitivos estatutos, 643 abogados ingresaron en el colegio siguiendo el procedimiento estudiado, además de los 221 que en este 25 de abril ya se encontraban matriculados por haberse recibido en virtud del estatuto XIX, como a continuación veremos. Todo ello según consta en el libro de matrícula.

Otros procedimientos de ingreso

Pero no todos los abogados que se colegiaron tuvieron que seguir el procedimiento que hemos visto. Existieron otras tres formas diferentes de incorporarse en el colegio. Son las siguientes:

⁷⁶⁷ A.I.C.A.V., caja 26, año 1817, expediente 23; caja 29, año 1829, exp. 1; y caja 30, año 1835, exp. 1. En el colegio de Sevilla se dispensaban las pruebas a los abogados cuyo padre y algún hermano también se hubieran incorporado. Sin embargo, en los casos en que sólo se hubiera incorporado previamente el padre se exigía lo que se llamaba la media prueba pública, por no constar la ascendencia materna; véase J. Santos Torres, *Apuntes para la historia...*, pág. 40.

1. Abogados recibidos con anterioridad a la concesión de los estatutos.

A tenor de lo dispuesto en el estatuto XIX, quedaban "eximidos de esta prueba todos los abogados recibidos hasta el presente, y los que se recibieren y huvieren comenzado a ejercer abogacía en la Audiencia o alguno de los tribunales de la expresada ciudad de Valencia hasta el día de la fecha de esta nuestra carta".⁷⁶⁸

En total fueron unos 221 los abogados que se incorporaron según este supuesto, esto es, sin expediente de incorporación, y por lo tanto sin necesidad de acreditar las calidades recogidas en el estatuto XVII.

2. Graduados que estuviesen realizando la pasantía o la hubiesen terminado al tiempo de la concesión de los estatutos.

En el mismo sentido, por providencia del Consejo de 28 de junio de 1765, y en base a razones de equidad, se aplicó el mismo estatuto XIX a todos aquellos individuos que, hallándose graduados en Leyes o Cánones, y sin estar recibidos todavía al tiempo de la aprobación de las ordenanzas del colegio, hubiesen ejercido o estuviesen ejerciendo la abogacía en sus respectivas pasantías y tribunales eclesiásticos u otros no dependientes de la Real Audiencia. Precediendo, claro, el examen y la aprobación por el Real Acuerdo.⁷⁶⁹

Fueron alrededor de una veintena los abogados que así se incorporaron, entre ellos Franciso Almerich. En su caso, la Junta decidió, en 19 de abril de 1763, que sus pruebas no eran suficientes, por lo que el secretario le comunicó esta resolución y le disuadió de su pretensión. Pero con motivo de la providencia de 28 de junio de 1765 volvió a solicitar su incorporación, puesto

⁷⁶⁸ El colegio de abogados de Sevilla adoptó en junta general una medida similar tras aprobarse la extensión de los estatutos del colegio de la corte de 1732. Puesto que estos estatutos no contemplaban ninguna disposición en este sentido, la junta acordó dispensar de las pruebas de limpieza de sangre y demás requisitos para incorporarse a todos los que estuvieran ejerciendo en la ciudad, ya que se entendía que habían estudiado en su universidad, y en ella ya se había tenido especial cuidado en no admitir individuos "infectos ni de defecto notable". De darse en algún individuo alguna circunstancia que le hiciera indigno de formar parte del colegio, el asunto sería discutido por los trece abogados más ancianos en su recibimiento, y se estaría a lo que acordara la mayoría. Véase E. Llach y Costa, *Reseña Histórica...*, I, págs. 94 y sigs.

⁷⁶⁹ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 83 B.

que, como acreditaba la certificación de Juan Bautista Ferrando, había sido pasante en su estudio desde el año 1758 hasta últimos de junio de 1762, recibéndose de abogado en el Real Acuerdo el 17 de este mes. Asimismo, había ejercido la abogacía en su pasantía y tribunales eclesiásticos y otros no dependientes de la Real Audiencia al tiempo de la aprobación de los estatutos.⁷⁷⁰ Por lo que esta vez la Junta sí acordó su incorporación el 14 de octubre de 1765. También fue el caso de Vicente Carrey Cabanes, recibido en el Real Acuerdo el 25 de enero de 1768, quien, a pesar de haber cumplido con la pasantía mucho antes de la concesión de las ordenanzas del colegio, solicitó en este año su incorporación por el procedimiento ordinario.⁷⁷¹ Pero al año siguiente, ante la paralización del expediente por falta de testigos que pudiesen deponer sobre su padre —natural de Bosedarros (Francia)—, solicitó de nuevo el ingreso según este procedimiento extraordinario. En 1774, estando todavía paralizado el expediente, Vicente insiste de nuevo en su pretensión, accediendo esta vez la Junta por decisión de 24 de febrero de ese año.

3. Abogados procedentes del colegio de Madrid o de sus filiales.

Según lo previsto en el estatuto XXVI, los abogados incorporados en el colegio de Madrid o en aquellos otros que estuviesen afiliados a éste —Sevilla, Valladolid y Granada según el mismo estatuto—⁷⁷² y que quisieran ingresar en el de Valencia, no tenían que pasar por todas las pruebas, sino que era suficiente con que aportasen certificación expedida por el decano y sellada por el secretario de su colegio en la que constase ser colegial del mismo. Lo que ocurría en la práctica fue, que si un abogado de estos colegios quería ingresar en el de Valencia lo hacía saber al secretario, quien se ponía en contacto con su colega del colegio del que provenía el solicitante, para asegurarse de que había pasado todas las pruebas. Recibida la confirmación, la Junta acordaba su incorporación, sentándole en el libro de matrícula y regulándole la antigüedad desde el día de dicho asiento.

⁷⁷⁰ A.I.C.A.V., caja 11, año 1763, expediente 7, pág. 19.

⁷⁷¹ A.I.C.A.V., caja 14, año 1774, expediente 5.

⁷⁷² Véase de este trabajo apartado *Fundación y Estatutos*.

El primer abogado así incorporado fue Bernardo Joaquín Dámbila, en 1774, procedente del colegio de Madrid.⁷⁷³ Pocos más lo hicieron, procediendo casi todos ellos de este colegio.⁷⁷⁴

El último que lo intentó fue Francisco de Paula González, en 1834, del colegio de Barcelona.⁷⁷⁵ En esta ocasión, como igualmente se hizo en las últimas anteriores, se presentó la solicitud de incorporación ante el Real Acuerdo, que requirió al colegio informe al respecto. En el memorial que remitió al Real Acuerdo, la Junta manifestaba que no se oponía a su admisión, si bien, por ser Francisco de Paula abogado del colegio de Barcelona, no podía ser eximido de las diligencias y depósitos prevenidos en los estatutos, ya que este colegio no se hallaba incorporado por filiación al de la corte. Finalmente, no se incorporó, como tampoco se incorporaron algunos otros que anteriormente ya lo habían intentado.⁷⁷⁶

Francisco Ferreyro intentó ingresar en el colegio de Valencia en 1814, fundando su solicitud, entre otros motivos, en que ya era colegial del de Mallorca. Según la Junta, este colegio no tenía filiación con el de Madrid, por lo que se le respondió que se encontraba en el mismo caso que los demás pretendientes; es decir, que no se le admitía y que usara del derecho que creyera tener dónde y cómo le conviniera.⁷⁷⁷ Y no se le admitió porque en estos momentos estaba vigente la real orden de 4 de mayo del mismo año, por la que no estaba permitido el ingreso de ningún letrado sin la autorización competente.

Más habitual era el caso contrario, es decir, que colegiados de Valencia solicitasen su incorporación en otros colegios, fundamentalmente en el de Madrid.⁷⁷⁸ En 1784 Vicente M^a Escaso solicitó ante la Junta que se le

⁷⁷³ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 139 B.

⁷⁷⁴ Bernardo Joaquín Dámbila, procedente del colegio de Madrid, 1774; Ignacio Llopis Ferris, Madrid, 1775; José Blasco, Zaragoza, 1791; Joaquín Maldonado Maldonado, Madrid, 1814; Manuel González Roig, Madrid, 1817; Francisco Jaldero, Madrid, 1817; Pedro José Andino Álvarez, Sevilla, 1828.

⁷⁷⁵ A.I.C.A.V., libro 7, pág. 174.

⁷⁷⁶ Francisco Ferreyro, procedente de Mallorca, en 1814; y Miguel Gómez, de Sevilla, en 1832.

⁷⁷⁷ A.I.C.A.V., libro 5, junta de 22 de agosto. A pesar de esta manifestación de la Junta, Barbadillo Delgado insinúa esta filiación; véase *Historia del Ilustre...*, II, págs. 200-201.

⁷⁷⁸ José Navarro Vidal, en 1778; Juan Francisco Ramada, en 1782; Vicente María Escaso, en 1784; Carlos Sacristán Sarrió, en 1791; Francisco Marín Sánchez, en 1794; Nemesio López Bueno, en 1796; Simeón Solves, en 1816; Francisco Zaragosí, en 1816; Fermín Sánchez

admitiesen sus justificaciones para incorporarse en el colegio de la corte, a lo que aquélla contestó no haber lugar a semejante pretensión por no residir en ella dicha facultad, con lo que se le devolvieron los papeles y documentos presentados, a fin de que expusiese su solicitud donde conviniese, que era ante el decano del colegio de Madrid, tal como ya había ocurrido en casos anteriores.⁷⁷⁹ Así por ejemplo, José Navarro Vidal había presentado en 1778 memorial ante el colegio de la corte solicitando su incorporación. Este colegio, como hacía siempre, solicitó del de Valencia informe de las calidades y circunstancias del pretendiente, preguntando si su incorporación se había efectuado con arreglo a sus estatutos, y el motivo por el que había decidido ausentarse de Valencia e incorporarse en el colegio de Madrid.

Libro de matrículas y listas⁷⁸⁰

Como ya he dicho anteriormente, la anotación del abogado por parte del secretario en el libro de matrículas suponía su completa incorporación en el colegio. En base al orden en que aparecían los individuos en esta matrícula se confeccionaba anualmente la lista de abogados, que se repartía entre los colegiales y se enviaba a los otros colegios afiliados al de la corte. Asimismo, la ubicación del abogado en esta lista determinaba el asiento que había de ocupar como colegial en los actos públicos a los que asistía el colegio en pleno. Y al mismo tiempo destacaba su preferencia con respecto a los demás.

En el libro de matrículas se anotaba —casi siempre en el mismo orden—, el nombre y apellidos del colegial, posteriormente su lugar de procedencia y, en ocasiones, su vecindad. También la fecha de aprobación como abogado y si lo fue en un real acuerdo o en el Supremo Consejo, la fecha en que se celebró la junta que acordó su admisión en el colegio, y la fecha o fechas en que se obligó a cumplir las condiciones de ingreso y en que

Ferris, en 1817; Vicente Valor, en 1820; Patricio Cerdá Hernández, en 1821; Florencio Vives Pascual, en 1824; Anastasio Checa, en 1829; y Joaquín Casaus, en 1829.

Con respecto a Juan Francisco Ramada, Francisco Marín Sánchez, Patricio Cerdá y Florencio Vives Pascual, véase también A.I.C.A.V., caja 7, expediente 3. En el mismo expediente hay un escrito del colegio de Cádiz de 1818, solicitando información sobre la pretensión del colegiado valenciano Manuel González Roig, de incorporarse en aquel colegio.

⁷⁷⁹ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 203.

⁷⁸⁰ A.I.C.A.V., libros 1 y 2, para los libros de matrículas, y libros 85, 86, 87 y 88 para las listas. Las listas a partir de la de 1830-31 véanse también en los legajos de cuentas: cajas 285-289. Véase la impresión de una de ellas en los apéndices.

juró. En ocasiones aparece anotado al final el día y, más esporádicamente, el lugar en que murió. En muy pocos casos se anota su oficio, caso de tener cargo público, o si era presbítero. Tampoco las primeras noticias aparecen todas, ni mucho menos, en todos los asientos.

Conocida la importancia que en el Antiguo Régimen se concedía a los actos protocolarios y a sus formalidades, el lugar que los abogados ocupaban en la lista no era una cuestión sin trascendencia, sino un tema de suma importancia que originó no pocos problemas, y que obligó a la Junta a manifestarse en numerosas ocasiones, ante la falta de regulación de este asunto por las ordenanzas. Hasta el punto de que por junta de 2 de noviembre de 1803 se acordó la elaboración de un nuevo libro de matrículas:

...enterados de lo muy destruido y desgovernado que se haya el libro de matrícula, de la falta de orden, enmiendas, omisiones y otros defectos que en él se advierten, acordaron se encuadernase de nuevo, quitando y ceparando todo lo escrito y anotado, para que coordinándolo siguiendo el debido orden con arreglo al tiempo de ingreso o incorporación de cada individuo, se coloquen en él, incluyendo a los que por descuido se les ha omitido...⁷⁸¹

Pero mucho antes la Junta ya se había pronunciado al respecto. Ante las continuas confusiones producidas se acordó definitivamente, por deliberación de 10 de julio de 1765, que a todos los abogados que estuviesen ejerciendo la abogacía al tiempo de la aprobación de los estatutos se les colocase en el lugar de antigüedad que les correspondía, con arreglo a las fechas en que hubieran sido recibidos por el Consejo o por el Acuerdo de Valencia. Mientras, a los demás —incluyendo a los dispensados de pruebas en virtud de la resolución del Consejo de 28 de junio de ese mismo año—, se les colocaría según el día en que prestasen el juramento.⁷⁸²

Fue durante el primer año de vida del colegio cuando estos problemas empezaron a plantearse. Obedeciendo a lo dispuesto en el estatuto XIX, se celebró junta general el día 28 de febrero de 1762, en la que se puso en conocimiento de los abogados aprobados con anterioridad a la erección del colegio y que quisieran incorporarse en el mismo, que se presentasen ante el

⁷⁸¹ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 72 B. Este nuevo libro de matrículas se trata del libro nº 2.

⁷⁸² A.I.C.A.V., libro 4, págs. 84-84 B.

secretario dentro del plazo de 30 días, exhibiendo el despacho de aprobación, a efectos de coordinar la matrícula e imprimir las listas sin agravio de antigüedad.⁷⁸³ Confeccionada la lista, y antes de repartirse, varios individuos presentaron sus quejas sobre el lugar en que aparecían, acordándose en junta de 23 de julio de ese año, que todos los colegiales manifestasen sus aprobaciones para el arreglo del lugar que les correspondía, bastando para ello una certificación del secretario del Real Acuerdo.⁷⁸⁴ Para dicha presentación se señaló como día último el 30 del mismo mes, advirtiendo que al que no lo hiciese se le colocaría después del último que hubiese cumplido. Pero finalizado este último término, quedaron aún por presentar algunos títulos de aprobación, encargándose el colegio de requerirlos él mismo del Real Acuerdo. Y en atención a la proximidad de la fiesta de la Asunción, se acordó en junta de 6 de agosto cerrar la matrícula e imprimir y repartir las listas. Se acordó asimismo anotarse "en lo sucesivo las antigüedades por los asientos en el libro en cuanto a las ingresiones, pues si alguno fuese aprobado antes de las ordenanzas o estatutos en la lista de dicho año se le dará el turno correspondiente a su antigüedad".⁷⁸⁵

Sobre la relevancia del lugar en que aparecían los abogados en el libro de matrículas y en las listas, la junta de 13 de julio de 1777 tuvo que decidir que los cuatro abogados que había admitido en el colegio ese día se anotasen en el referido libro por el orden en que iban nombrados, por ser ése el de la antigüedad de sus títulos de abogados. El motivo de esta decisión obedece a que entre ellos se disputaba el orden de ingreso y su consiguiente preferencia en la lista.⁷⁸⁶ Por lo tanto, predominaba la antigüedad del título cuando los abogados prestaban el juramento el mismo día.

Hasta la lista de 1785 aparecían en primer lugar los oficiales, expresándose, a continuación y en cursiva, el cargo o cargos que iban a

⁷⁸³ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 6-8.

⁷⁸⁴ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 21 B-22 B.

⁷⁸⁵ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 30.

⁷⁸⁶ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 157-157 B; José María del Puig, José Mayans, Vicente Furió y Joaquín Navarro, por este orden. Otro caso es el que se vio en junta de 3 de enero de 1784; libro 4, págs. 199-199 B. En esta ocasión, cinco de los once abogados admitidos el 22 de diciembre del año anterior solicitaron de la Junta que se les anotase según la fecha en que habían prestado el juramento y efectuado los depósitos, sin mérito de la antigüedad en el recibimiento como abogados, a lo que no hubo lugar.

desempeñar durante ese año. A continuación los exdecanos, también con indicación de su rango en cursiva. Y a continuación todos los demás colegiales, por el orden de antigüedad establecido en el libro de matrícula. Al lado de éstos también se expresaba, en su caso y en cursiva, si iban a desempeñar el cargo de examinador o abogado de pobres. E igualmente se hacía saber de la misma forma los que eran presbíteros. A partir de la lista de 1786, todos los abogados que iban a desempeñar un cargo colegial aparecerán al principio de la lista en su apartado correspondiente. Esto es, en un primer apartado aparecería el decano y a continuación los oficiales, en un segundo los exdecanos, en un tercero los abogados de pobres, y en un cuarto los examinadores en sus ternas.⁷⁸⁷ A continuación, el resto de colegiales por orden de antigüedad. Para éstos tan sólo cabía añadirles, en cursiva y en su caso, el oficio de presbítero.⁷⁸⁸ A partir de la lista de 1819-20 también aparecerían reflejados todos los cargos extracolegiales, tales como el de asesor, relator, auditor, fiscal, agente fiscal, escribano, alcalde, etc. Los abogados de pobres presos y no presos dejarán de aparecer a partir de la lista de 1821-22, ya que desde el decreto de 25 de octubre de 1820 se turnaban en la defensa de pobres todos los individuos del colegio, a excepción de los cargos de la Junta y otros determinados oficios. Y a partir de la lista de 1827-28 se añade al final otra lista con los contribuyentes al montepío.

Por resolución de 30 de noviembre de 1789 se acordó que en adelante, y para mayor comodidad, se imprimieran las listas como en Madrid, es decir, figurando los colegiales por el orden alfabético de sus apellidos, con su número de antigüedad al lado.⁷⁸⁹ La primera fue la de 1790. Sin embargo, en la lista de 1795, y hasta el último año, vuelven a aparecer los colegiales por orden de antigüedad y con su correspondiente número. Hasta 1773 las listas se habían confeccionado y repartido anualmente en agosto, tras la junta de

⁷⁸⁷ Salvo la del mismo año 1786 en que los examinadores aparecieron por delante de los abogados de pobres.

⁷⁸⁸ Como excepción repetida a lo largo de los años, a Luis Máñez se le anotaba su oficio de "ministro honorario y en comisión de la Real Sala del Crimen de esta Real Audiencia", y a Tomás Naudín el de "canónigo doctoral de esta Metropolitana".

⁷⁸⁹ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 262-262 B.

elección de cargos. Por resolución de 17 de noviembre de ese año se acordó que, en lo sucesivo, tuviese lugar en diciembre.⁷⁹⁰

A partir de la lista de 1800-01 se añadirá el domicilio de cada abogado. Posteriormente, también el del asistente y cualquier otra anotación o aviso que al colegio interesare.⁷⁹¹ Al final de las listas de los años 1810 y siguientes se anotaban aquellos individuos que, sin estar incorporados en el colegio, habían sido habilitados para ejercer en la Real Audiencia. Se trataban fundamentalmente, y como más adelante iremos viendo, de los abogados Joaquín Maldonado, Francisco Belloch y Tomás Benavente.

Por último, al final de la lista de cada año se transcribían una serie de decretos a modo de *Advertencia*. Por creerlos interesantes los he copiado literalmente, tomando como ejemplo la lista de 1810-11. Dicen así:

Por decreto del Real y Supremo Consejo de Castilla de 21 de Mayo de 1737 (es el Auto Acordado 13 tit. 16 lib. 2 de la Nov. Recop.) está mandado: Que los escrivanos de cámara de los consejos, juntas y tribunales eclesiásticos y seculares, los de provincia, número y comisiones, no admitan en sus respectivos oficios ni los procuradores firmen pedimento, que no lo esté de alguno de los Individuos del colegio de abogados de la Villa y Corte de Madrid; pena por la primera vez de 50 ducados; por la segunda de 6 meses de suspensión de oficio; y por la tercera de privación de él.

Por otro decreto del mismo Real Consejo de 16 de julio de dicho año (es el Auto Acordado 14 tit. 16, lib. 2 de la Nov. Recop.) se manda: que cada uno de los Individuos del referido colegio reconozca si en los pleytos que despachare se halla algún pedimento firmado de abogado no comprendido en la lista que anualmente se reparte; y que haviéndole, tenga obligación de dar cuenta al secretario que fuere del colegio, para que haciéndolo presente a la junta, ésta lo traslade a noticia del Consejo para egecución de las penas que sea servido imponer a los contraventores; con apercibimiento de que si no lo hicieren dará el colegio cuenta a dicha superioridad para que tome la condigna providencia. Y por el estatuto 25 de dicho colegio de la Corte se manda: Que los abogados recibidos en él, si se encontraren en pleytos con otros que no estuvieren incorporados en el mismo, pidan por un otrosí del escrito que formaren no se admita otro de aquel abogado, ni permita continuar en la defensa, por no estar recibido en el colegio, y que de otra suerte no los despachen; lo qual se egecute sin disculpa ni respeto alguno por todos aquellos Individuos; para cuyo puntual

⁷⁹⁰ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 135-135 B.

⁷⁹¹ La junta particular de 25 de octubre de 1808 resolvió, ante la solicitud presentada por Domingo Villalba, darle el tratamiento de asistente y recaudador del montepío como se daba al que desempeñaba el mismo oficio en el colegio de Madrid.

cumplimiento tenga cada uno la nómina de los recibidos en el colegio, que se le dará por el secretario; y que si algún abogado congregante no cumpliera con este estatuto sea apercibido y multado por el decano, dando las demás providencias convenientes en caso de reincidencia.

Y por otro decreto del Real Consejo de 14 de diciembre de 1716 (según consta de la real cédula de 6 de febrero de 1762, que contiene los estatutos de nuestro Ilustre Colegio) se concedió y aprobó su incorporación por filiación con el de la Corte; y se declaró que todos los decretos, autos acordados y providencias promulgadas y expedidas a favor de este último, fuesen y se entendiesen comprensivos al de esta ciudad, su decano e individuos, del mismo modo que si para él se huviesen librado, obrando igual efecto en la Real Audiencia de este reyno y su jurisdicción, sin diferencia alguna, gobernando se por los estatutos de la Corte corregidos, limitados y arreglados como corresponde a las circunstancias y estado de la ciudad, su Real Audiencia y abogados de ella.

Tres grandes etapas de incorporación

Durante los 76 años en que estuvieron vigentes los primitivos estatutos, el ingreso de abogados en el colegio de Valencia no sólo dependió de que los letrados cumplieran los trámites y tuvieran las calidades que en aquéllos se exigían, sino de que el acceso al colegio no estuviera cerrado por el Consejo de Castilla y, en su delegación, por el Real Acuerdo. Por ello he creído interesante dividir todos estos años en tres etapas, cuyos dos puntos de inflexión serían el decreto del Real Acuerdo de 24 de noviembre de 1794, por el que se ordenó suspender la admisión de nuevos letrados, y la real cédula de 24 de abril de 1811, por la que se ordenó a los colegios no tener número fijo de individuos y su libre incorporación. A partir de ahora el colegio de abogados sólo abrirá sus puertas en los periodos liberales, y en los absolutistas cuando el número de los ejercientes en la ciudad no superarse el centenar.

Primera etapa: libre incorporación (1762-1794)

Esta primera etapa se caracterizó por la libre incorporación en el colegio de todos los abogados que lo pretendían, siempre que cumplieran con lo exigido por las ordenanzas y reunieran las calidades requeridas en las mismas. Por ello, las únicas incidencias que podían ocurrir quedaban reducidas, en principio, a la dispensa justificada —o no— de alguno de los

extremos sujetos a prueba, tal y como hemos visto en los apartados anteriores. Sin embargo, en algunas ocasiones, y por fidelidad a la letra de los estatutos, la Junta se vio en la necesidad de denegar la admisión de ciertos pretendientes, debido en la mayoría de los casos a que el padre de los mismos desempeñaba o había desempeñado oficio considerado vil o mecánico,⁷⁹² contraviniendo lo establecido en el párrafo 4º del estatuto XVIII. En estas situaciones era normalmente el Real Acuerdo quien decidía en última instancia, y siempre en sentido favorable al ingreso. En caso de decidir la incorporación, ordenaba en la misma resolución que el pretendiente a colegial ocupase en la lista el lugar que le correspondía según el día en que la Junta le denegó la admisión.

El primer caso que se dio fue el de Gabriel Pelechá.⁷⁹³ Este abogado pretendió su incorporación en el colegio en 1763, apareciendo en el árbol genealógico presentado que su padre era labrador. Pero resultando de las deposiciones de los testigos que su padre, por ese tiempo, trabajaba como fabricante de jabón y almidón, que en su misma casa elaboraban y vendían sus criados y operarios a los que pagaba, resolvió la junta particular su

⁷⁹² Aunque en ningún momento se especifica cuáles eran estos oficios, o cuál el criterio para su consideración como viles o mecánicos, las ordenanzas del colegio de abogados de Canarias, que se presentaron en 1766 ante el Consejo de Castilla para su aprobación, nos aportan información interesante en este sentido. Según el número 29 de estas ordenanzas, eran mecánicos los oficios de sastre, carpintero, herrero, barbero, regatón, lanero, cerero, platero, tonelero, pescador, confitero, comediante por precio, panadero, pellejero, pedrero, tundidor, especiero, zapatero, sombrerero, hortelano, latonero, espartero, vendedor de pescado, cohetero, danzarín por precio, sedero y tintorero. El oficio de mercader era mecánico si en su ejercicio no se vendían especies, jabón pólvora ni otras cosas semejantes. Eran oficios viles y de infamia los de verdugo, carnicero, molinero, clarinero, tamborero, pregonero, portador de carnes y menudencias de la carnicería, camellero y torero por precio, así como "otros semejantes a estos". El fiscal de la audiencia de Canarias, en el informe que remitió al Consejo sobre las ordenanzas, no opuso reparo alguno en cuanto a los oficios viles, pero sí en cuanto a los mecánicos, especialmente en los de sastre, carpintero y hortelano. Finalmente, el Consejo, a propuesta de la misma audiencia, retira de los estatutos ambas listas. Es más, ordena que se admitan a los pretendientes cuyos padres o abuelos ejerzan o hayan ejercido, o ellos mismos cuando muchachos, los oficios considerados mecánicos en las islas, siempre que en los pueblos en donde los hubieren ejercido o ejerzan, estén reputados por honestos y decentes. Véase Alzola González, M. A., *Historia del Ilustre...*, págs. 85-91, 95-97 y 194-195. Lo que está claro —al menos para Valencia—, es que los oficios o trabajos agrícolas no se consideraban en ningún caso viles o mecánicos. Véase apartado *Perfil de los colegiados*. Por otra parte, y al igual que ocurrió en el colegio de Valencia, tampoco parece que fueran habituales en los otros colegios las denegaciones de incorporación por estos motivos. La Junta del de Sevilla planteó sus reticencias a algunos aspirantes por ser hijos de sangradores flebotomianos o de carpinteros de lo blanco, aunque finalmente fueron admitidos; véase J. Santos Torres, *Apuntes para la Historia...*, págs. 38-39.

⁷⁹³ A.I.C.A.V., caja 11, año 1763, expediente 6.

inadmisión, en decisión adoptada en 21 de octubre de ese año.⁷⁹⁴ A continuación, el decano, Francisco Jerónimo de Saboya, le advirtió que desistiese de su objetivo. Ante esta negativa, Gabriel Pelechá recurrió al Real Acuerdo, que remitió auto al colegio ordenándole informe en seis días. Poco después se recibió otro auto del mismo Acuerdo por el que comunicaba que el recurrente podía ejercer la abogacía, interin no se resolviera el recurso. Por nuevo auto de 24 de noviembre el tribunal ordena al colegio que le admitiera como uno de sus colegiales. Pero ya con anterioridad a este último auto el colegio había escrito al de Madrid, solicitando información sobre lo que su Junta obraba en casos semejantes, la que le manifestó que interpusiera recurso ante el Real Acuerdo, y si éste fuera denegado ante el Supremo Consejo, ofreciéndose el de Madrid como coadyuvante, por ser "asunto del honor de todos".⁷⁹⁵ Sin embargo, la Junta del colegio de Valencia, antes de recibir esta contestación, ya había decidido obedecer el auto de 24 de noviembre.

Hay que decir que este último auto era el mismo que ordenaba al colegio extender con individualidad los informes que los comisarios elaboraban sobre la calidad de los pretendientes, y que según los estatutos debían ser secretos. Sobre si el colegio acudió al Real Acuerdo como le propuso el de Madrid nada sabemos, aunque consta que ésta era su intención.

Finalmente, en junta de 11 de agosto de 1764 se acordó incluir a Gabriel Pelechá en la lista en el lugar que le correspondía según el día en que fue denegada su admisión.⁷⁹⁶

El segundo caso de inadmisión inicial fue el de José Ignacio Lacueva Capafons.⁷⁹⁷ Se trata, igualmente, de otra incorporación denegada por desempeñar el padre oficio considerado vil y mecánico. Y así se consideró en junta de 6 de agosto de 1769, a la vista de los informes secretos y de las deposiciones de cuatro testigos, según los cuales el padre del pretendiente había ejercido el oficio de especiero en una tienda de ramilletes en el

⁷⁹⁴ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 66-66 B.

⁷⁹⁵ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 68.

⁷⁹⁶ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 75 B-76.

⁷⁹⁷ A.I.C.A.V., caja 13, año 1769, expediente 1.

mercado.⁷⁹⁸ De nuevo fue el decano, Francisco Nadal, el encargado de persuadirle de su pretensión y de prevenirle que se abstuviese de la abogacía. Pero en octubre del mismo año José Ignacio Lacueva presentó memorial, insistiendo en su solicitud y afirmando que lo manifestado por los testigos era una equivocación, pues su abuelo había sido mercader con grandes caudales y había ejercido su oficio por medio de sus criados, mientras que su padre sólo le ayudaba en el trabajo, vendiendo en ocasiones algún género cuando el abuelo tenía alguna ocupación y los criados no estaban a la mano. Además, decía que su padre realmente era corredor de lonja y cambios. Con lo que la Junta le instó a que presentara desposorio de sus padres y testimonio de la escritura de admisión del mismo en el colegio de corredores.

En abril de 1770 reitera de nuevo su solicitud de ingreso, con lo que la Junta, ante la duda de si es digno, y según lo previsto en el estatuto XVII, decide acudir a la Real Audiencia para que resolviese lo que estimase conveniente. Con la aprobación de esta última se le admite por el colegio en junta de 15 de enero del año siguiente.

El tercer caso fue el de Pedro Juan Ferrer Poyo.⁷⁹⁹ A este solicitante también se le denegó la admisión en el colegio, el 1 de diciembre de 1776, por tener su padre una tienda de especies en la plaza del Mercado, según constaba de su partida de bautismo y deposiciones de los testigos. En esta ocasión fue el secretario el encargado de notificarle que desistiera de su pretensión y se abstuviera de abogar. No conformándose con ello, recurrió el pretendiente al Real Acuerdo que, tras el informe del colegio, dictó auto de admisión el 14 de abril de 1777, incorporándose por tanto al colegio por resolución de junta de 25 de abril del mismo año. En esta última junta también se acordó consultar este caso y el siguiente al colegio de Madrid, que contestó unos meses más tarde manifestando que sería conveniente representar al Real Consejo, para lo que se designó al diputado tercero, Joaquín Solsona. Pero ante la lentitud en la tramitación de este expediente, la Junta acuerda el 2 de noviembre de 1781, "se represente por dicho *nuestro Ilustre Colegio* derechamente y con la mayor brevedad al Real Consejo lo *conveniente* para

⁷⁹⁸ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 107-107 B.

⁷⁹⁹ A.I.C.A.V., caja 15, año 1776, expediente 13.

que subsista la exclusión de dichos individuos del cuerpo del Colegio acordada por éste, y que el Sr. Dn. Joseph Villarroya quede encargado de hacer dicha representación".⁸⁰⁰

Finalmente, a principios del año siguiente se hizo saber una real provisión del Consejo ganada por Juan Ferrer y José Esteve —que veremos a continuación—, por la que se ratificaba definitivamente la admisión de ambos letrados en el colegio.

La solicitud de ingreso en el colegio de José Esteve Monac también fue denegada en 1777, por haber ejercido su padre públicamente el oficio de maestro de sastre, según constaba en el expediente probatorio.⁸⁰¹ El Real Acuerdo ordenó por auto de 19 de junio de ese mismo año, previo informe remitido por el colegio, admitir a José Esteve como colegial. Y así se hizo en junta de 24 de junio, sin perjuicio de la representación hecha al colegio de Madrid en la que también se trató de este pretendiente.

El siguiente caso fue el de Pedro Romero. Por junta de 2 de noviembre de 1781 se encargó al secretario que le disuadiera de su solicitud de ingreso.⁸⁰² El motivo fue, de nuevo, que por las partidas de bautismo y las deposiciones de los testigos constaba haber ejercido sus padres —en este caso ambos— el oficio de ropero, considerado poco digno, y del que llegó a ser su padre maestro. Recurriendo el interesado al Real Acuerdo, éste ordenó al colegio remitir informe con el expediente original de las pruebas. Encargado de la elaboración del informe el decano, Vicente Branchat, es aprobado por la Junta que lo remite al Acuerdo, solicitando la desestimación del recurso interpuesto por el pretendiente. Por decreto de 22 de agosto de 1782 se mandó al colegio admitirlo dentro del segundo día, y ponerlo en la lista en el lugar que le correspondiera según su antigüedad con respecto al día 2 de noviembre del año anterior. Ya finalmente, por nuevo decreto de 29 del mismo mes, el Real Acuerdo se ratifica en su postura, ordenando la convocación de junta a efectos de que cumpliera con el anterior decreto, bajo multa de 200 libras. Pero la Junta, una vez cumplidos ambos decretos, y entendiendo que los mismos eran perjudiciales a los intereses del colegio, atentaban contra su

⁸⁰⁰ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 184 B.

⁸⁰¹ A.I.C.A.V., caja 15, año 1776, expediente 14.

lustre y decoro, y eran opuestos a sus estatutos, decidió de nuevo recurrir las resoluciones ante el Real Consejo. Al mismo tiempo, comunicó dicha decisión al colegio de Madrid, a fin de que tuviera a bien intervenir en el mismo, sin que sepamos cuál fue su resultado.⁸⁰³

Aunque los motivos de la inicial inadmisión de Pascual Gamborino Sierra no parecen estar claros, no hay duda de que se debió, o bien a su mala fama, o bien a la calidad de sus familiares. Así consta en junta de 28 de enero de 1777, en la que se acordó devolver a los comisarios los expedientes de pruebas de este pretendiente y de otros dos más —Gregorio Almerich y Manuel Salabert—, al entender que dichos comisarios "omiten en sus informes, en unos las noticias secretas que hayan tomado sobre las costumbres, y en otros sobre la calidad de las familias".⁸⁰⁴ En agosto de ese mismo año, y una vez incorporados los otros dos pretendientes, Pascual Gamborino presenta ante el colegio una queja por la tardanza en su incorporación, y éste recibe comunicación del Real Acuerdo para que le remitiera en los seis días siguientes informe con el expediente original. Las siguientes noticias que tenemos sobre este caso datan de siete años después, cuando el pretendiente presenta al colegio memorial solicitando pasara los correspondientes oficios al Real Acuerdo, para que éste se sirviera remitirle el expediente de las pruebas y se le admitiera en dicha corporación.⁸⁰⁵ La Junta acordó, en decisión de 3 de julio de 1784, que no había lugar, y que la parte usara del derecho que entendiere tener dónde y cómo le conviniese. Con lo que al parecer acude al Real Acuerdo, que de nuevo requiere del colegio informe sobre la solicitud de incorporación, no pudiendo acceder a ello por encontrarse el expediente original archivado en dicho Acuerdo. Enterado el Real Acuerdo de esta incidencia, devuelve los expedientes al colegio, el que, finalmente, por medio de su secretario, elabora informe que remite al tribunal, expresando sus reparos a la pretendida incorporación. Ya por fin, el Real Acuerdo, por decreto de 7 de julio de 1785, ordena al colegio su admisión, lo que acepta en junta de

⁸⁰² A.I.C.A.V., libro 4, págs. 184 B-185.

⁸⁰³ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 190.

⁸⁰⁴ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 154 B.

⁸⁰⁵ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 203.

24 del mismo mes,⁸⁰⁶ sin que sepamos que interpusiera ningún tipo de queja ni recurso.

El séptimo y último caso de inadmisión inicial que nos consta fue el de Cristóbal Pascual. Por constar en el expediente probatorio que su padre había sido sastre, la junta de 20 de octubre de 1782 resolvió no admitirlo como colegial. Incluso, parece ser que con anterioridad el secretario del colegio ya le había disuadido de su pretensión. Pero Cristóbal Pascual reiteró de nuevo su petición en el mes de diciembre, y ante la nueva negativa del colegio, por junta del día 18, interpuso recurso ante el Real Acuerdo, que pidió el informe de costumbre —del que se encargó el secretario— con el expediente original de las pruebas. Finalmente, por decreto de 7 de julio de 1783, el Acuerdo ordenó al colegio la admisión del pretendiente dentro del segundo día, y que se le diera la antigüedad correspondiente al 18 de diciembre del año anterior.⁸⁰⁷ Tampoco nos consta en este caso que el colegio se opusiera formalmente a este decreto.

Tras este último caso no volvemos a encontrar ninguno más en el que la Junta del colegio opusiera resistencia a la admisión de nuevos colegiales, por motivo de haber desempeñado sus ascendientes oficio considerado vil o mecánico. La razón podría estar en la publicación de la real cédula de 18 de marzo de 1783, en la que se establecía lo siguiente:

...que no sólo el oficio de curtidor, sino también los demás artes y oficios de herrero, sastre, zapatero, carpintero y otros a este modo, son honestos y honrados, y que el uso de ellos no envilece la familia ni la persona del que los ejerce, ni la inhabilita para obtener los empleos municipales de la república en que estén avecindados los artesanos que los ejercitan. Lo cual mandó el Consejo se guardase, cumpliese sin permitir su contravención con ningún pretexto, causa. Antes bien, para que tubiese su entero y debido cumplimiento se diesen las órdenes y providencias que conviniesen, se registrase y copiase por el *escribano* del ayuntamiento a continuación de las ordenanzas de gremios y de las cofradías, congregaciones, colegios y otros cuerpos en que hubiese estatutos contrarios a lo dispuesto en ellas...⁸⁰⁸

⁸⁰⁶ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 210-210 B.

⁸⁰⁷ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 190 B-192 y 195-195 B.

⁸⁰⁸ A.I.C.A.V., libro 7, junta particular de 11 de marzo de 1826, pág. 28 B.

De la misma manera, la real cédula de 10 de febrero de 1786 declaraba que los individuos del gremio de cortantes de esta ciudad que fueran maestros quedaban comprendidos en la anterior disposición, disfrutando de las mismas gracias que por ella se dispensaba a aquellos oficios.⁸⁰⁹

Con disposiciones como éstas, la administración de Carlos III, en el propósito de modernizar el país, intentaba atraerse hacia los trabajos manuales y productivos a toda aquella hidalguía que hasta el momento los había considerado como impropios de su categoría, al tiempo que se pretendía reducir la población dedicada a los oficios de letras, y especialmente a la abogacía. No obstante, este tipo de cuestiones siguió planteándose en otros colegios de abogados hasta bastantes años después.⁸¹⁰

En parecido sentido, la pragmática sanción de 19 de septiembre de 1783 había declarado que los gitanos no lo eran por su origen, ni por su naturaleza, ni provenían de raza infecta, pudiendo ser admitidos a los oficios o destinos a que se aplicaran cuando se arrepintiesen de su mala vida. Dos días después se publicó una real cédula determinando que para el ejercicio de cualquier arte u oficio no servía de impedimento la ilegitimidad en la filiación.⁸¹¹ Lo que venía a dejar sin efecto el párrafo segundo del estatuto XVIII. Sin embargo, no parece que estas dos resoluciones fueran, siquiera, motivo de comentario por la Junta.

Segunda etapa: exceso de abogados (1795-1811)

El exceso de profesionales del foro era un problema que ya preocupaba desde mucho tiempo atrás.⁸¹² A lo largo del tiempo fueron muchas las disposiciones que intentaron restringir el acceso a la abogacía, a través de la exigencia de determinados requisitos que debían cumplir los letrados. Requisitos que bien podían ser académicos o simplemente personales. La intención inmediata de los primeros era mejorar la formación y perfeccionar los

⁸⁰⁹ A.I.C.A.V., libro 7, junta particular de 11 de marzo de 1826, pág. 28 B.

⁸¹⁰ En 1817 el colegio de Zaragoza denegó la incorporación de un pretendiente por haber tenido su padre una tienda de aguardiente, lo que se oponía a sus ordenanzas. Tanto el Real Acuerdo como el Supremo Consejo ordenaron posteriormente su ingreso, que se verificó en 1818; véase L. del Campo Armijo, *El Real e Ilustre...*, pág. 31.

⁸¹¹ P. Barbadillo Delgado, *Historia del Ilustre...*, II, pág. 195.

⁸¹² M. Peset Reig, "La recepción de las órdenes...", págs. 120 y sigs.

conocimientos de los futuros abogados. Pero no hay duda de que al mismo tiempo hay una nítida pretensión subyacente de reducir este colectivo y, consiguientemente, de mejorar la situación económica de los individuos que permaneciesen o consiguiesen entrar en él. En este apartado podríamos incluir, desde los exámenes a que se tenían que presentar los graduados ante el Consejo o las chancillerías y audiencias, a los diferentes, y cada vez más largos y complicados, planes de estudios y pasantías, pasando por la edad mínima que se exigía para recibirse.⁸¹³ Entre los requisitos personales, destacan las cláusulas contenidas en los estatutos de los colegios de abogados, por las que se exigía de los colegiales su limpieza de sangre, ser hijo y nieto legítimo, no haber trabajado en oficios considerados viles o mecánicos, o tener una buena fama y reputación. El primer colegio en exigir estos requisitos fue el de Madrid, fundado en 1596, si bien no fue hasta 1684, y sobre todo hasta los nuevos estatutos de 1732, cuando estos requisitos se convirtieron en verdaderas y rígidas exigencias.⁸¹⁴

También fueron muchos los autores que desde tiempo atrás venían denunciando el desmedido número de abogados que había. Algunos incluso propusieron medidas encaminadas a limitarlo. En 1741 José del Campillo decía, en su obra *Lo que hay de más y de menos en España para que sea lo que debe ser y no lo que es*, que no sólo había letrados de más, sino también procuradores, notarios, escribanos y jueces, sobre todo "de los malos".⁸¹⁵ Melchor Rafael de Macanaz ya sugirió a Felipe V que se estableciese un número fijo de abogados en el colegio de la corte y de las chancillerías, de forma que no se admitiese a ninguno hasta que no vacase una plaza.⁸¹⁶ También José de Covarrubias consideraba en 1789 que había un excesivo

⁸¹³ La real cédula de 27 de enero de 1833, por la que se restablecía en 17 años la edad mínima para abogar, reconocía expresamente que en 1826 se había elevado esta edad a los 25 años por creer "conveniente restringir el número y prolongar la carrera de los que se dedicaban al noble ejercicio del Foro"; véase *Decretos del Rey...*, XVIII, pág. 21.

⁸¹⁴ P. Barbadillo Delgado, *Historia del Ilustre...*, I, pág. 151; y II, pág. 191. Ya vimos como en *Partidas* 3, 6, 5 se prohibía el ejercicio de la abogacía a judíos, moros y herejes.

⁸¹⁵ J. del Campillo, *Lo que hay de más y de menos en España para que sea lo que debe ser y no lo que es*, edición y estudio preliminar de A. Elorza, Madrid, 1969, págs. 90-93 y 157-164.

⁸¹⁶ M. de Macanaz, "Auxilios para bien gobernar una monarquía católica o documentos que dicta la experiencia y aprueba la razón para que el monarca merezca justamente el nombre de grande. Obra que escribió y remitió desde París al Rey Nuestro Señor Don Felipe Quinto". *Semanario erudito que comprende varias obras inéditas, críticas, morales, políticas, históricas*,

número de abogados, especialmente en la corte, resaltando además su deficiente formación. Para evitar estos males proponía que, estudiando los que quisieran, sólo un número de ellos pudiera ejercer exigiendo honorarios.⁸¹⁷

Detengámonos un poco en la *Disertación sobre la libre multitud de abogados* que Juan Pérez Villamil escribió en 1782. Villamil partía de la base de que todo estado requiere un equilibrio entre las profesiones de armas, de oficios y de letras. Este equilibrio se había roto en España, al menos desde los tiempos de Enrique III, como consecuencia del crecimiento desmesurado de los que se dedicaban a las letras. Con ellos se ensaña, y especialmente con los abogados. Expresivos son sus siguientes comentarios:

XXXVI. A la verdad ¿cómo hemos de responder a tantas quejas como se suelen dar de muchos de nosotros? Somos muchos, i es imposible que haya ocupación para todos; i así tengo por muy verosímil que algunos se entreguen a excesos vergonzosos para sacar de los pleytos un fondo de que vivir. Cada día escuchamos quejas de esta naturaleza, i nuestro honorario suele ser ya tan sensible como lo sería un duro tributo que se impusiese a los litigantes. No quiera Dios que yo sea ingenioso en descubrir las faltas de mis compañeros, pero es cierto que padece en ellas el nombre en general de la profesión i aquel número de profesores honrados que con pureza sostienen en los tribunales los derechos de sus paisanos, empleando noblemente su talento en suplir la ignorancia necesaria de los que litigan.

XXXVII. La libre multitud sin duda es la causa de todas aquellas quejas.⁸¹⁸

Entre las causas de esta “multitud”, Villamil culpa no sólo a las altivas pretensiones de los abogados, sino a las mismas leyes. Es decir, es la misma cantidad de normas superfluas, o, aunque necesarias, su deficiente ordenación, lo que promueve la necesidad de su interpretación, que todavía se vuelve más difícil por la multitud de comentadores y glosadores que las tratan.

satíricas y jocosas de nuestros mejores autores antiguos y modernos. Publicados por D. Antonio Valladares de Sotomayor, Madrid, 1787, V, págs. 238 y sigs.

⁸¹⁷ J. de Covarrubias, *Discurso sobre el estado actual de la abogacía en los tribunales de la nación. Dirígelo a los ilustres y perfectos abogados españoles, el licenciado...*, Madrid, 1789.

⁸¹⁸ J. Pérez Villamil, *Disertación sobre la libre multitud de abogados, si es útil al Estado o si fuera conveniente reducir el número de estos profesores, con qué medios y oportunas providencias capaces de conseguir su efectivo cumplimiento. Lo leyó en la Real Academia de Derecho patrio y público, titulada de Ntra. Señora del Carmen... en 16 de octubre de 1782*, Madrid, págs. 35-37.

Tomando como referencia el número de abogados que contenía la lista del colegio de Madrid —referencia poco segura—, Villamil calcula en unos diez mil los abogados de toda España, cifra del todo perniciosa —según él—, “porque es antecedente necesario de que se aumenten los pleytos, o se sigan con más proporción, en grave daño de muchos vasallos”.⁸¹⁹ Con las vistas puestas en la reducción de este número, sugiere la redacción de una ley que bien podría tener las bases que él propone, y que se asentaban, fundamentalmente, en la reducción y el número fijo de estudiantes de cada universidad, pudiendo entrar a estudiar sólo los que superasen una oposición. Además, introduciría los exámenes anuales —cuya instauración todavía se demoraría—, y exigía un especial rigor en los exámenes de recibimiento. En defecto de la criba en la universidad, proponía que se llevase a cabo en los colegios, fijándose un número máximo en cada uno, y prohibiendo el ejercicio en los pueblos menores de 500 ó 600 habitantes, evitándose así el desvío de los candidatos. Finalmente, proponía de todo el que se presentase a examen ante los tribunales una renta mínima de 200 ducados, u otra proporcionada al pueblo donde se estableciese, así como los mismos requisitos que se le exigían por estatutos para incorporarse en cualquier colegio.⁸²⁰

Muchos más serían los autores preocupados por esta problemática y que aconsejaban medidas semejantes para remediarla.⁸²¹

También los colegios de abogados eran conscientes de esta realidad. La Junta de Madrid manifestaba en 1772, sobre la obligatoriedad de que todo pretendiente a colegial tuviera estudio en la corte, que del incumplimiento de esta obligación provenía “la multitud de los que componen el Colegio, mendigando muchos para sostenerse”.⁸²² En Valencia, la *Advertencia* del reglamento del montepío de 1778 decía lo siguiente:

⁸¹⁹ J. Pérez Villamil, *Disertación sobre...*, pág. 34.

⁸²⁰ J. Pérez Villamil, *Disertación sobre...*, págs. 68-75; 109-11; y 118-123. Según este autor, el exceso de estudiantes destacaba en las universidades de Zaragoza y Valencia.

⁸²¹ Véase, por ejemplo, J. Rodríguez Campomanes, *Apéndice a la Educación popular*, 4 vols., Madrid, 1775-1777, I, 207-311; J. F. de Castro, *Discursos críticos sobre las leyes y sus intérpretes*, 2.^a edición, 2 vols., Madrid, 1829, I, págs. 269 y sigs.; o Conde de Cabarrús, *Carta sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la felicidad pública, escritas... al señor don Gaspar de Jovellanos...*, Vitoria, 1808, 91.

⁸²² P. Barbadillo Delgado, *Historia del Ilustre...*, II, págs. 142-143.

Sin embargo de que el piadoso ánimo del Colegio se dirige al socorro de quantas necesidades padezcan sus individuos, es imposible ocurrir a todas, siendo tantas y tan continuas en el sistema presente que siguen muchos de permanecer en Valencia con el nombre de abogados del Colegio sin desengañarse, como devieran, a los quatro o cinco años de la ninguna esperanza que pueden tener de hacer en la abogacía el progreso que los demás, ni aun el necesario para una reducidísima manutención, y así consumen su vida con urgencias y estrecheces separadas del egercicio de la facultad, de las que pudieran eximirse y ser útiles a la República, aplicándose a otro honroso destino luego que les haya desengañado el transcurso de dichos quatro o cinco años del ningún progreso que pueden esperar en el egercicio de la abogacía de Valencia, y por no hacerlo y vivir ociosos padecen voluntariamente las insinuadas estrecheces y urgencias, viéndose acaso obligados por ellas a egecutar lo que no corresponde al honor del Colegio que les admitió en la inteligencia de que podrían mantenerse con él.⁸²³

Según los libros de deliberaciones, la Junta del colegio tan sólo trató sobre este problema en una ocasión, el 30 de abril de 1768. En esta junta el decano hizo presente una copia de la carta que el doctor Salvador Riola remitió al fiscal del Real Consejo, Pedro Rodríguez Campomanes, en la que exponía el exceso en el número de abogados y la conducta de alguno de ellos. Como solución, dicho doctor proponía que, a ejemplo de lo resuelto en "crearse escribanos hasta cierto número mandada por el propio Real Consejo, se dé igual providencia en los abogados de esta ciudad".⁸²⁴ En consecuencia, el Real Consejo solicitó el oportuno informe del capitán general. El Real Acuerdo a su vez lo solicitó del colegio, el que encargó su redacción al diputado tercero, Francisco Nadal. Este informe fue leído y aprobado en junta de 11 de junio, sin que haya quedado constancia de su contenido.

Así las cosas, a finales del siglo XVIII el problema era ya apremiante. Según el censo de Floridablanca de 1787, en el reino de Valencia había un total de 790 abogados, de los cuales 264 estaban censados en la capital. Es decir, considerando que en aquella época la ciudad de Valencia contaba con 68.548 habitantes, la razón era de un abogado para cada 259.⁸²⁵ Un remedio drástico y contundente debía imponerse. Y esta solución pasaba por el establecimiento de un *numerus clausus*.

⁸²³ A.I.C.A.V., caja 337, legajo sin número, folio X.

⁸²⁴ A.I.C.A.V., libro 4, pág. 101.

⁸²⁵ Véase el apartado *Naturaleza de los colegiados*.

Por decreto del Real Acuerdo de 14 de abril de 1795, se fijó en 100 el número máximo de abogados que en adelante podrían estar incorporados en el colegio de Valencia.⁸²⁶ De esta forma se prohibió la admisión de abogado alguno hasta que su número no descendiera de esta cifra. El origen de este decreto hay que buscarlo en la real orden de 30 de septiembre de 1794, por la que se reducía el número de abogados del colegio de Madrid a 200, y se mandaba, que "se encargue a las chancillerías y audiencias igual reforma o arreglo en el número de abogados, y cuidado en razón de su conducta."⁸²⁷ Es interesante la alusión que hace esta real orden al deseo del monarca de evitar la propagación en España de las ideas nacidas de la Revolución francesa. Al parecer, empezaban a influir en las argumentaciones de los abogados las nuevas corrientes políticas revolucionarias. Barbadillo Delgado apunta que la reducción del número de abogados sería una de las medidas encaminadas a evitar que cundiese la lectura de obras arriesgadas y perniciosas.⁸²⁸ A mi entender, se trata de cosas diferentes y dicha reducción no sería un medio

⁸²⁶ Este decreto data de esta fecha según manifestaciones de la propia Junta del colegio. A.I.C.A.V., juntas de 7 de enero de 1809 ó 4 de noviembre de 1824 (libro 5, págs. 101-101 B y libro 7, págs. 74 B-75 B, respectivamente). Sin embargo, en los libros del Real Acuerdo tan sólo ha quedado constancia de que en este día se vio una carta orden del Consejo ordenando a la Audiencia que informara sobre lo que hubiera practicado acerca de la reducción del número de abogados de este tribunal. Reducción que se le había mandado hacer en 14 de octubre del año anterior. A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 90, pág. 51. Con lo que, al parecer, el mismo día la Audiencia dictó el decreto de reducción al que nos referimos.

⁸²⁷ *Novísima Recopilación* 5, 22, 30. Esta real orden fue vista en el Real Acuerdo el día 30 de octubre del mismo año. A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 89, folio 141. Respecto a la aplicación de esta norma en otros colegios, la audiencia de Canarias no parece que se la tomara muy en serio, entre otras razones porque de los sólo nueve abogados con que contaba el colegio de Las Palmas, cinco eran clérigos. De los otros cuatro, dos eran relatores, otro asesor de Guerra, y el otro, vecino de Cádiz, se hallaba de paso por la ciudad. De ahí que el Supremo Consejo exigiera en dos ocasiones acuse de recibo. Finalmente, la audiencia remite informe en el manifestaba que esta escasez de letrados ocasionaba muchos y dilatados términos en el despacho de los pleitos, por lo que consideraba que el número ideal de abogados debía de ser el de 20; véase J. M. Alzola González, *Historia del Ilustre...*, págs. 115 y sigs. Para el colegio de Valladolid García Marroquín afirma que por real orden de 1790 se había fijado un número máximo de 40 abogados; véase este autor en *Reseña histórica del Ilustre...*, pág. 75. Para el colegio de Cáceres se fijó en 30 el número máximo de individuos; véase P. Hurtado, *Tribunales y abogados...*, pág. 46. En el caso de Zaragoza, en junta de 23 de noviembre de 1777 ya se propuso fijar el número de individuos del colegio, y establecer una oposición para todos los que pretendiesen ingresar. Aunque en 1795 ya hay alguna denegación de ingreso, como consecuencia de la real orden de 30 de septiembre de 1795, no parece que hubiera reducción, ya que en 1817 se designa una comisión para que determinara el número conveniente de abogados; véase L. del Campo Armijo, *El Real e Ilustre...*, págs. 35-36. Para el colegio de Sevilla, en 1804 se estableció un número máximo de 75 individuos; véase A. Fernández Serrano, *La abogacía en España...*, III, pág. 72.

⁸²⁸ P. Barbadillo Delgado, *Historia del Ilustre...*, II, pág. 204.

para conseguir el citado fin, sino un objetivo en sí, del que ya se venía tratando desde hacía tiempo.⁸²⁹

Pero desde antes de 1795 ya estaban cerradas las puertas del colegio de Valencia a los nuevos pretendientes. Por decreto de 24 de noviembre del año anterior, la Audiencia había ordenado al decano que, en virtud de lo establecido en carta orden del Consejo,

...y teniendo presentes las circunstancias de este pueblo, los muchos tribunales que hay establecidos en él, y la diversidad de negocios que se versan en ellos, informe a la maior brevedad el número de abogados a que podrá quedar reducido el Colegio, suspendiéndose desde aora la admisión de individuo alguno hasta que con presencia de todo se acuerde la providencia que corresponda.⁸³⁰

A lo que la Junta acordó en 27 de noviembre su obediencia, quedando suspendida la admisión desde dicho día 24, y encargando la redacción del informe a los abogados Vicente de Alagón, Antonio Pérez Clemente y Pedro Sacristán. En junta de 30 de noviembre se presentó el informe, según el cual se requerían 150 abogados para la expedición de las causas que se versaban en los varios tribunales con que contaba la ciudad, sin contar en este número los colegiales que se hallaban fuera de ella, siguiendo sus carreras de alcaldes mayores, corregidores, etc.⁸³¹ Finalmente, remitido el informe al Real Acuerdo éste decidió rebajar a 100 la cifra por referido decreto de 14 de abril de 1795, ratificado por el Consejo de Castilla el 19 de noviembre de 1796.⁸³²

Se trata de una reducción de más de la mitad de sus miembros, puesto que la lista de abogados impresa en 1795 contabilizaba un total de 218 colegiales.⁸³³ Si bien, en estos años no todos ellos se dedicaban de forma continua y en exclusiva al ejercicio de la abogacía, con despacho abierto en la ciudad.

⁸²⁹ No obstante, es posible que exista una cierta relación entre estas dos medidas. Aunque los colegios de abogados y sus juntas estaban en manos de personajes de tendencias conservadoras, no es menos cierto que los nuevos abogados jugaron un papel importante en las cortes liberales decimonónicas. De hecho, una considerable parte de los diputados doceañistas era letrado.

⁸³⁰ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 29.

⁸³¹ A.I.C.A.V., libro 5, págs. 29-29 B.

⁸³² A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 91, fol. 155 B.

En este punto debo destacar, que en ningún momento se especifica el criterio que se tenía que seguir a la hora de contabilizar la cifra de los cien abogados, lo que originará constantes y diferentes interpretaciones a lo largo de los años. Hay que tener en cuenta que las puertas del colegio estuvieron de nuevo cerradas en otros períodos posteriores, —que en la tercera etapa iremos viendo—. Lo que está claro es que el número de colegiados era muy superior al que aparecía en lista, puesto que se permitía el ingreso de letrados no residentes en la ciudad, sin que, desgraciadamente, exista forma de saber con exactitud los individuos que cada año en concreto estaban vivos, ya que no disponemos de ningún registro en el que se anotaran las bajas o fallecimientos.

Con referencia a los residentes en Valencia, cuyos nombres serán los que aparecerán en la lista, su número será también siempre superior al centenar. Incluso en aquellos períodos en que el colegio manifestaba haberse conseguido el objetivo reduccionista.⁸³⁴ De esto se induce que la cifra de cien venía referida a los colegiales que ejercían la abogacía de forma exclusiva, excluyéndose por lo tanto del cómputo a aquellos residentes que, apareciendo en la lista, se dedicaban a otras actividades, relacionadas o no con el mundo de la justicia o de la administración. Si bien ésta es la conclusión general extraída de la lectura de las actas de los libros de deliberaciones, también es cierto que numerosas manifestaciones de la Junta y de los pretendientes a colegiales parecen desmentirlo. Al menos, lo que parece estar claro es que entre el Real Acuerdo y el colegio las discrepancias eran continuas a la hora de determinar el número exacto de los colegiales que, apareciendo en la lista, debían entrar en el cómputo y cuáles no. Discrepancias que se agudizaban cuando este cómputo lo efectuaba el abogado que, pretendiendo colegiarse, intentaba demostrar que los que realmente ejercían de abogados constituían un reducido número del total de alistados. Por todo esto he creído oportuno insertar a lo largo de estas páginas numerosas declaraciones en las que

⁸³³ A.I.C.A.V., libro 85.

⁸³⁴ El número de individuos que aparecen inscritos en las listas de abogados posteriores a 1794, y que han llegado hasta nosotros es el siguiente: año 1795, 221; 1798, 199; 1800, 186; 1803, 160; 1808, 129; 1810, 134; 1813, 126; 1815, 125; 1816, 121; 1817, 131; 1818, 123; 1819, 124; 1821, 114; 1822, 114; 1826, 130; 1827, 133; 1828, 133; 1829, 132; 1831, 121; 1832, 116; 1833, 151; 1834, 146; 1835, 151; 1836, 154.

quedan palpables las diferentes interpretaciones que sobre estos decretos se hacían. Parece que esta inseguridad persiste, al menos, hasta 1828, treinta y tres años después del decreto reduccionista de 1795, cuando en junta particular de 7 de febrero se manifiesta lo siguiente:

...se continuó la sesión sobre si se estaba en el caso de admitir nuevos individuos en el Colegio, y sobre qué datos debía gobernarse la Junta para la declaración de vacantes. Y pesadas todas las razones que se espusieron por cada uno de los señores vocales, se resolvió por unanimidad que debía procederse a la provisión de las plazas vacantes y que, siguiendo para ello las reglas dadas por el Supremo Consejo, como por este Real Acuerdo, resultan cuatro vacantes a saber...⁸³⁵

Unos años antes —en 1825—, a propósito de su solicitud de incorporación presentada ante el Supremo Consejo, Joaquín Melchor Pinazo había puesto de relieve la falta de criterio claro, al manifestar lo siguiente:

Que en este Real Acuerdo pende expediente de informe, pedido por Vuestra Alteza, sobre la solicitud deducida por algunos abogados relativa a que se declare que las cien plazas designadas a este Colegio deban ser efectivas, sin llenar el número de los señores ministros, los relatores, escribanos de cámara, canónigos, presbíteros y ausentes, que no ejercen la facultad ni sufren los turnos de pobres y promotorías fiscales para el despacho de los negocios criminales, ocupando el número en la lista e impidiendo la carrera de otros que con su aplicación y estudio pueden ser útiles a la causa pública.⁸³⁶

Por último, es posible que el número de colegiados no residentes en Valencia fuera con los años cada vez menor, puesto que, según los expedientes de incorporación y las solicitudes presentadas ante el colegio, el Real Acuerdo o el Supremo Consejo, los nuevos colegiales pretendían ejercer en Valencia. Incluso es lógico pensar que aquellos que no fueran a ejercer en esta ciudad ni siquiera se molestaran en intentar su colegiación. De ello se induce que el número total de colegiados y el de los que aparecían en la lista se iría aproximando con el tiempo.

⁸³⁵ A.I.C.A.V., libro 7, pág. 71.

⁸³⁶ A.I.C.A.V., caja 28, año 1825, expediente 2, pág. 2 B.

A pesar de las pretensiones reduccionistas, antes de finalizar el siglo ya se habían incorporado en el colegio tres abogados. El primero fue Blas Gascó Orbera. Este abogado solicitó en 1796 que se le anotase en el libro de matrícula, previo depósito de las cantidades requeridas, cosa que todavía no había hecho, pese a que la Junta del colegio ya había decidido su ingreso el 8 de noviembre de 1789. Así pues, por junta de 16 de junio de 1796 se acordó que, cumpliendo los trámites que le faltaban, fuese inscrito como un colegial más, como así se hizo.⁸³⁷ Con ello se infringió tanto lo dispuesto en el decreto de 14 de abril de 1795 como lo dispuesto en el estatuto XXIII, ya que según éste, y como se recordaba en numerosas juntas,⁸³⁸ la incorporación en el colegio no se hace efectiva hasta después de la anotación en el libro de matrícula, mientras que Blas Gascó, pese a formalizar su ingreso en 1796, aparece anotado en el antiguo libro de matrícula en el año 1789 a modo de intercalado. El segundo abogado al que se le permitió el ingreso en el colegio fue Vicente García-Ramos García, según lo establecido en junta de 10 de febrero de 1798, y en virtud de la real provisión del Supremo Consejo de 16 de diciembre de 1797.⁸³⁹ En el momento de suspenderse las incorporaciones por el decreto de 24 de noviembre de 1794, Vicente García-Ramos ya tenía prácticamente finalizado el expediente de incorporación, y opinaba, según reflejaba en la solicitud de ingreso que interpuso ante el Supremo Consejo, que "el decreto del Real Acuerdo debía entenderse para los que no hubiesen empezado a hacer las diligencias para su incorporación en su colegio, y no con los que no sólo las tenían empezadas, sino casi concluidas, como el Consejo lo ha declarado en otros casos semejantes ocurridos en esta Corte."⁸⁴⁰ Y así lo debió ver el alto tribunal, puesto que dispuso su ingreso en el colegio, sin embargo de la reducción del número de sus individuos. El tercer abogado que se incorporó antes de finalizar el siglo fue Rafael Vicente Morón de Piqueras Llorens, que se encontraba en un caso prácticamente idéntico al primero. Fue admitido por junta de 10 de diciembre de 1786, si bien no cumplió con los pagos y el oportuno juramento en su momento, sino cuando, previa petición, lo

⁸³⁷ A.I.C.A.V., libro 5, págs. 39-39 B.

⁸³⁸ A.I.C.A.V., libro 6, juntas de 19 de julio de 1823 y 6 de septiembre de 1824, págs. 52-53 B y 70-72 B.

⁸³⁹ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 48 B.

autorizó la junta de 3 de diciembre de 1799.⁸⁴¹ Y de la misma forma aparece intercalado en el antiguo libro de matrícula en el año 1786.

Fue el mismo colegio el que se encargó de comunicar la suspensión de los ingresos a los pretendientes que en ese momento tenían en trámite su expediente de pruebas, haciéndoles saber, asimismo, que debían acudir a usar de su derecho ante Real Acuerdo o a donde les conviniese.⁸⁴² Se trataba tan sólo de los casos de Vicente García-Ramos y de Alejandro Royo, cuyos expedientes fueron entregados al secretario del Real Acuerdo por mandato de esta instancia. Este último abogado, no obstante, ya no intentó nunca más su incorporación. Posiblemente era de fuera de la ciudad o no pretendía dedicarse a la abogacía.

Con el nuevo siglo continuaba intacta la preocupación del Supremo Consejo por reducir el número de abogados. Y así se entiende de la orden del Real Acuerdo, vista en junta particular de 17 de diciembre de 1800, por la que se solicitaba del colegio que propusiera el medio que estimara más conveniente en este sentido, o si podía seguirse un nuevo método que asegurara el mayor adelantamiento en lo sucesivo. Y ello con el fin de cumplir con el informe que, sobre esta materia, le pedía al Real Acuerdo el Supremo Consejo. Dicho informe fue remitido el día 17 del mes siguiente, sin que haya llegado hasta nosotros su contenido.

Como es de suponer, la existencia del *numerus clausus* hizo que a partir de ahora los abogados agudizasen su ingenio buscando vías alternativas de incorporación en el colegio o, simplemente, solicitando los permisos o habilitaciones convenientes para ejercer la profesión en la ciudad de Valencia, aun sin estar incorporados. Todo ello con resultados muy desiguales. Así, por ejemplo, en junta particular de 21 de julio de 1802 se vio real orden del Consejo de Castilla, hecha llegar al colegio por el Real Acuerdo, en la que se habilitaba a Tomás de Benavente para que pudiese entender en todos los asuntos pertenecientes a la Real Hacienda en esta ciudad, sin embargo de no hallarse incorporado en el colegio. La Junta acordó cumplir dicha orden,

⁸⁴⁰ A.I.C.A.V., caja 23, año 1794, expediente 4, pág. 17.

⁸⁴¹ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 97.

⁸⁴² A.I.C.A.V., libro 5, pág. 29 B.

poniendo la conveniente nota en las listas.⁸⁴³ Supuesto muy parecido es el que ocurrió unos años más tarde con el letrado Joaquín Maldonado Maldonado, si bien en este caso fue el Real Acuerdo el que, por decreto de 25 de septiembre de 1809, accedió a su petición y para toda clase de negocios y tribunales.⁸⁴⁴ También es parecido el caso de Franciso Belloch Navarro, que en 1810 pretendió ante el Real Acuerdo ejercer la abogacía en la ciudad de Valencia sin estar incorporado en el colegio, en base a real orden que le habilitaba para ejercer en Sevilla. El colegio se opuso, pero el referido letrado obtuvo otra real orden del Consejo de Regencia de España e Indias, dada en Cádiz en 28 de junio de 1810, y con obediencia del Real Acuerdo en 17 del mismo mes, por la que se le concedía la gracia de poder ejercer la abogacía "en esta ciudad durante las actuales circunstancias".⁸⁴⁵ Otro caso es el de José de Vellugera Núñez, abogado del colegio de Madrid y habilitado por el Real Acuerdo para despachar e informar en toda clase de negocios y tribunales, como los individuos del colegio de Valencia. Cumplido el decreto por el colegio, acordó la junta de 16 de marzo de 1811 representar a las Cortes en solicitud de que este Real Acuerdo no concediera iguales habilitaciones bajo pretexto alguno, por ser opuesto a sus estatutos.⁸⁴⁶

Pero más importante fue el caso que se trató también en la junta de 21 de julio de 1802, y que veremos repetido de forma parecida en años siguientes. En esta ocasión el colegial Cristóbal Clergues acudió al Supremo Consejo solicitando autorizase la cesión o traspaso de su facultad de abogar en favor de Felipe Benicio Navarro. Ante esta pretensión, el supremo tribunal solicita informe del colegio, que encarga su redacción al tesorero, Vicente Ferrando Segura. Literalmente el informe decía así:

Que el número actual de los individuos colegiales havitantes en esta ciudad es de 176, sin contar 28, de los quales los más se hallan domiciliados en varios pueblos del reyno y los otros siguen la carrera de judicatura, pero que en la hora en que se presenten no deven encontrar embarazo en exercer su facultad como tales abogados colegiales. Que el número a que deven éstos quedar es el de 100,

⁸⁴³ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 66.

⁸⁴⁴ A.I.C.A.V., libro 5, junta de 15 de octubre, pág. 111.

⁸⁴⁵ A.I.C.A.V., libro 5, junta de 23 de julio, pág. 122.

⁸⁴⁶ A.I.C.A.V., libro 5, págs. 146 B-148.

según real orden comunicada por esta audiencia y cumplimentada por esta junta en 5 de enero de 1795.

Que la reducción se ha considerado como un punto de utilidad o conveniencia pública.

Que la tal cesión de la facultad de abogar, sobre presentarse extraña por cualquiera parte que se considere, ofrece varios inconvenientes actuales, choca contra la misma reducción, y produciría un exemplar que la podría inutilizar absolutamente, pues quedando substituidos los unos por los otros, por convenios particulares, resultaría que sería siempre el mismo el número de los colegiales.

La Junta reconoce la suficiencia de Navarro, que se desprende bastante de su relación de méritos, pero no deve dejar de manifestar a V. A. los inconvenientes que ha de producir necesariamente el logro de la solicitud de Clergues, que como que por este medio indirecto se abría la puerta a la incorporación a la sazón misma en que excede el número de los actuales colegiales en más de 100 al de la reducción acordada."⁸⁴⁷

Parece ser que así lo entendió también el Supremo Consejo, puesto que Felipe Benicio no se incorporó sino hasta más tarde, y en virtud de diferente resolución. Sin embargo, en 1810 la Junta informa favorablemente al Real Acuerdo sobre la petición de los abogados Gabriel Montaner y Andrés Blat, de que sus hijos ejerciesen la profesión en la ciudad e informasen en estrados por ellos mientras durase la enfermedad que les imposibilitaba,⁸⁴⁸ siempre y en tanto en cuanto estuviesen sujetos a las obligaciones y cargos que sufren y deben desempeñar los individuos del colegio. Como vamos a ver, en estos momentos la situación del colegio ya había cambiado.

Aparte de estos casos y pretensiones particulares, fueron numerosos los letrados que intentaron entrar en el colegio como miembros de pleno derecho y siguiendo el procedimiento ordinario. Tal fue el caso visto en junta de 25 de octubre de 1808, en el que el Real Acuerdo pedía informe al colegio sobre la solicitud de José Salelles, Peregrín Blat, José Cortes y "otros abogados" —como dice el acta de este día—, según la cual se debería separar del cómputo del número de abogados del colegio a todos los individuos que no tuviesen estudio abierto o se hallasen en otros destinos distintos de la abogacía. Al mismo tiempo también se pedía informe sobre la pretensión de Salvador Algarra y "otros", en la que simplemente solicitaban que se les

⁸⁴⁷ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 66 B.

⁸⁴⁸ A.I.C.A.V., libro 5, juntas de 23 y 28 de julio, págs. 122 y 122 B.

admitiese en clase de supernumerarios o se les concediese la primera plaza vacante.⁸⁴⁹ Enterada la Junta de que similares pretensiones ya se habían planteado en el Supremo Consejo, y de que el colegio de Madrid, ante igual supuesto, evacuó el informe en junta a la que asistieron los consiliarios y exdecanos, se acordó tratar el tema en la siguiente junta, previa convocatoria de estos últimos cargos. De esta junta, celebrada el 8 de noviembre del mismo año 1808, se infiere un cierto deseo de apertura del colegio por parte de los reunidos. Esto es, se encarga a Vicente Martínez Bonet y a Vicente Ximénez —tesorero y secretario respectivamente—, la redacción de un informe para remitir al Real Acuerdo, en el que debían dejar constancia de que muchos colegiales que figuraban en la lista no ejercían la facultad por ser eclesiásticos, relatores, escribanos, hacendados, o estar ocupados en otros destinos que no les permitían tener estudio abierto. De la misma manera debían decir que otros muchos no podían desempeñarla por su edad, achaques y accidentes que padecían, lo que afectaba, además, a la defensa de los pobres presos y no presos por las excusas que planteaban a desempeñar este cargo. Igualmente, los miembros de la Junta consideraban que, como se había decidido en 30 de noviembre de 1794, para la expedición de las causas que versaban en la gran variedad de tribunales que existían en la ciudad era necesario el número de 150 abogados con estudio abierto. Por lo tanto, y considerando que de los colegiados que aparecían en lista un total de 40 no deberían hacerlo, ello supondría la existencia de ocho o diez vacantes.⁸⁵⁰ Por primera vez, la Junta entiende que se ha conseguido el objetivo de rebajar a menos de 100 el número de abogados en efectivo y continuo ejercicio, o, como a veces aparece escrito en las actas de juntas, el número de plazas "útiles".

Por junta de 7 de enero de 1809 se aumenta a 45 el número de los abogados que no deberían aparecer en la lista, con lo que, apareciendo 129 individuos en la de ese año, deberían considerarse tan sólo 87 los abogados con estudio abierto, y por lo tanto 13 el número de vacantes hasta las 100 plazas prefijadas en el decreto de 14 de abril de 1795.⁸⁵¹ Incluso se alega que

⁸⁴⁹ A.I.C.A.V., libro 5, págs. 97 B-98 B.

⁸⁵⁰ A.I.C.A.V., libro 5, págs. 99-99 B.

⁸⁵¹ La no coincidencia de cifras es propia del acta del libro de deliberaciones. A.I.C.A.V., libro 5, pág. 101.

de los anteriores 87 todavía podrían descontarse unos cuantos más puesto que, según se dice:

...son muchos los que trabajan mui poco aunque tengan despacho abierto, por ancianos y accidentados unos, por ocupados otros en asesorías, procuras *generales* y otras comisiones, y otros finalmente porque nunca llegaron a acreditarse, sin verificarse por lo mismo el concepto formado de ser necesarios cuando menos 100, con egercicio continuo y sin otra ocupación que les distrahiga para el buen servicio del público y de la muchedumbre de tribunales que se conocen en esta capital. De modo que caminando baxo de estos principios, si pareciese al Real Acuerdo podrían admitirse por aora en el Colegio hasta 25 ó 30 con que se cubriría prudencialmente el vacío que resulta.⁸⁵²

La junta de 12 de julio de 1810 deja constancia, de nuevo, de que el número de abogados que se dedicaban al ejercicio de la abogacía en Valencia continuaba siendo inferior al centenar. Con motivo de la graduación o regulación de las ganancias anuales de los abogados colegiados con despacho "corriente" en la capital, se confeccionó una lista en la que aparecían 82 individuos, más Joaquín Maldonado Maldonado que, como hemos visto, estaba habilitado por la Audiencia para ejercer en Valencia sin necesidad de incorporarse en el colegio.⁸⁵³

En noviembre de 1810 vemos cómo la Junta expresa de nuevo sus deseos de apertura del colegio a todos los pretendientes que cumplieran con lo dispuesto en los estatutos, levantándose la suspensión de incorporaciones y el número máximo de ejercientes. Y así lo solicita del Real Acuerdo en el memorial que éste le ordena remitir sobre la pretensión de incorporación de los letrados Andrés López y Peregrín Blat.⁸⁵⁴ Además, se acuerda trasladar idéntica pretensión al monarca. Los mismos deseos se vuelven a manifestar en junta de 3 de diciembre del mismo año, a propósito de la solicitud de incorporación de otros tres letrados.⁸⁵⁵ En mayo de 1811, a propósito de la solicitud presentada por Juan Raymundo Richart ante el Real Acuerdo, la

⁸⁵² A.I.C.A.V., libro 5, pág. 101. No tenemos constancia de lo acordado por el Real Acuerdo sobre este informe, ni siquiera si llegó a remitirse o incluso a redactarse.

⁸⁵³ A.I.C.A.V., libro 5, págs. 119-121 B.

⁸⁵⁴ A.I.C.A.V., libro 5, junta de 3 de noviembre, pág. 136 B.

⁸⁵⁵ José Salelles, José Cuenta y Gabriel Montaner Llombart; A.I.C.A.V., libro 5, págs. 139 B-140 B.

Junta vuelve a manifestar a este tribunal lo útil que sería al estado la apertura del colegio.⁸⁵⁶

Pero ya en el mes de julio de 1810 el Supremo Consejo de España e Indias había autorizado la incorporación de seis letrados.⁸⁵⁷ Incluso, faltando todavía la efectiva incorporación de tres de ellos,⁸⁵⁸ reiteró al colegio la orden de admitir a cinco de los anteriores seis,⁸⁵⁹ permitiéndole además proponer al Real Acuerdo la incorporación de tres abogados más.⁸⁶⁰ Finalmente, ante el gran número de pretendientes, y a fin de seguir con la práctica y costumbre que existía en asuntos de ternas y propuestas, y con objeto de facilitar al Real Acuerdo mejor elección, el colegio le propuso los nombres de nueve de ellos.⁸⁶¹ Los elegidos por el Real Acuerdo fueron Victoriano Morera de la Vall, José Salelles Palos y Andrés López Espinosa.⁸⁶² Todo ello indica que el Supremo Consejo, sin abrir las puertas del colegio, coincidía con éste en que el número de plazas "útiles" ya era inferior a cien.

Por junta de 10 de febrero de 1811 se dio cuenta de tres certificaciones del Real Acuerdo: la primera contenía decreto del Supremo Consejo de Regencia por el que se habilitaba a Juan Bautista Genovés, abogado de la Audiencia de Sevilla, para ejercer la abogacía en la de Valencia; por la segunda dicho Supremo Consejo ordenaba al colegio incorporar a Joaquín Font; y por la tercera el Real Acuerdo también ordenaba la admisión de Peregrín Blat, en lugar de Luciano Sulroca que, mandado incorporar el 26 de noviembre de 1810, falleció con anterioridad a su ingreso.⁸⁶³

En junta de 16 de marzo de este mismo año 1811 nos encontramos por primera vez con una práctica que en adelante se convertiría en habitual. Se

⁸⁵⁶ A.I.C.A.V., libro 5, págs. 153 B-154 B.

⁸⁵⁷ Se trata de los abogados Felipe Benicio Navarro Aliguer, José Caballer Muñoz, Salvador de Algarra, Carmelo Morte, José Martín Cortés y Manuel Boil Vidal; A.I.C.A.V., libro 5, págs. 123 B, 135, 139 y 139 B.

⁸⁵⁸ Carmelo Morte, José Martín Cortés y Manuel Boil Vidal.

⁸⁵⁹ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 138 B. Se trata de los abogados Carmelo Morte, Manuel Boil, José Cortés, Felipe Benicio Navarro, Salvador Algarra. De ellos los dos últimos ya estaban incorporados de hecho.

⁸⁶⁰ Teniendo en consideración, según la misma orden, los méritos del abogado José Salelles Pastor. Como así se tuvo en cuenta.

⁸⁶¹ José Salelles Palos, Peregrín Blat, Andrés López Espinosa, Vicente Valor, Joaquín Font Ferris, Gabriel Montaner, Victoriano Morera de la Vall, Luciano Sulroca y José Cuenca; A.I.C.A.V., libro 5, pág. 138 B.

⁸⁶² A.I.C.A.V., libro 5, pág. 141 B.

⁸⁶³ A.I.C.A.V., libro 5, págs. 146-146 B.

trata de la solicitud de incorporación —presentada en este caso ante el Real Acuerdo—, para pasar a ocupar la plaza vacante dejada por el fallecimiento de algún colegial. Lo cual sería otra señal de que ya se había conseguido el objetivo reduccionista. En este caso fueron seis los que pretendieron ocupar las plazas dejadas vacantes por Vicente Piamonte y Vicente Manuel Vercher. Y siguiendo lo actuado por real orden del Consejo de España e Indias en el caso visto párrafos arriba, el Acuerdo solicita del colegio informe, y éste propone la lista de los pretendientes por orden,⁸⁶⁴ manifestando asimismo que la muerte de Vicente Manuel Vercher no causaba vacante por no formar número en la reducción. En este mismo orden de cosas, unos días más tarde se presentan, también ante el Real Acuerdo, los memoriales de dos nuevos pretendientes solicitando su admisión en el colegio por los anteriores fallecimientos y por el nuevo de José Lasala.⁸⁶⁵ A lo que el colegio manifiesta que, aun no constándole la muerte de este último, considera no causar vacante por estar domiciliado en Vinaroz. Mientras que José Lasala no aparecía en las últimas listas, Vicente Manuel Vercher, sí; sin embargo, no consta como ejerciente en las listas que durante estos años el colegio remite al ayuntamiento de la ciudad para la confección del *Libro Padrón*.⁸⁶⁶ Finalmente, por decreto de 28 de marzo el Real Acuerdo ordena admitir a Vicente Valor Seguer y a Gabriel Montaner Lombart por los fallecimientos de Vicente Piamonte y Vicente Manuel Vercher, manifestando que el fallecimiento de José Lasala efectivamente no causaba vacante. Con respecto a la plaza de Vicente Vercher parece ser que el Real Acuerdo no participaba en este momento de la opinión del colegio, al considerar que su muerte sí producía vacante.

En el mismo decreto se ordena al colegio que en las vacantes que ocurrieran en lo sucesivo "admita los memoriales que presentasen los pretendientes a ellas y, exponiendo el mérito y circunstancias de cada uno, forme propuesta y la pase al Acuerdo para su elección y nombramiento".⁸⁶⁷ Muestra inequívoca y definitiva de que la finalidad de la real orden de 14 de

⁸⁶⁴ Por este orden, Vicente Valor Seguer, Félix Ganir Scaso, Carlos Martínez de Visiedo Alfonso, Gabriel Montaner Lombart, Manuel Escolano González y Francisco Calbo Marco; A.I.C.A.V., libro 5, págs. 146 B-148.

⁸⁶⁵ Vicente Nebot y Lorenzo Isern; A.I.C.A.V., libro 5, junta de 27 de marzo, pág. 148.

⁸⁶⁶ Véase *Patrimonio de los abogados según el Libro Padrón de Valencia*.

⁸⁶⁷ A.I.C.A.V., libro 5, junta de 17 de abril, págs. 148 B-149 B.

abril de 1795 se había conseguido. Y así empezaron a tramitarse las siguientes solicitudes de incorporación que se presentaron en el colegio para ocupar las vacantes dejadas por el fallecimiento de los colegiados Miguel Beltrán y Vicente Luis Seguí.⁸⁶⁸ Y digo empezaron porque al mes siguiente se puso fin al régimen de *numerus clausus*.

Recapitulando todo este período, podemos llegar a la conclusión de que finalmente se consiguió el propósito de la real orden de 14 de abril de 1795, por lo menos en cuanto a la reducción del número de abogados de la capital. Así, si en la lista de 1795 aparecían un total de 218 abogados, en la de 1810 tan sólo salían 134, habiéndose llegado a 129 en la de 1808. Y si consideramos que el número de cien quedaba referido exclusivamente a plazas "útiles", el objetivo reduccionista se había conseguido, según la Junta, ya varios años antes de finalizar este período. Cosa distinta es la reducción del número general de abogados recibidos en el Real Acuerdo, en donde entiendo que la leve reducción que se aprecia es debida, más bien, a las reformas y ampliaciones de los planes de estudios.⁸⁶⁹ Es posible, incluso, que por contra el número de abogados creciera en las otras poblaciones.

Tercera etapa: aperturas y cierres (1811-1838)

A lo largo de los 27 años de esta etapa las puertas del colegio estuvieron abiertas o cerradas a las nuevas incorporaciones dependiendo del régimen político en el poder. Durante los tres períodos liberales el acceso fue libre para todos los pretendientes, mientras que en los dos períodos absolutistas, mucho más largos, estuvo vigente de nuevo el decreto reduccionista. En estos dos últimos períodos tan sólo lograron el ingreso en el colegio aquellos abogados que, por vía de excepción, obtenían la gracia del Real Acuerdo o del Supremo Consejo. Si bien, esta vía de excepción dejaría de ser tan excepcional con el paso de los años. Estos cinco períodos son los siguientes:

⁸⁶⁸ Se trata de los memoriales de Patricio Cerdá, Ramón Gilabert, Lorenzo Isern, José Oller, Tomás Bru y Nicolás Puigserver; A.I.C.A.V., libro 5, pág. 156 B.

De julio de 1811 hasta mayo de 1814

Se inicia este período con la real orden del Supremo Consejo dada en Cádiz el 24 de abril de 1811, y hecha llegar al colegio por medio de decreto del Real Acuerdo de Valencia de 1 de julio. Se trata de una orden por la que, de conformidad con el decreto de las Cortes generales y extraordinarias del Reino de 22 de abril, se mandaba que, subsistiendo los colegios de abogados, no tuviesen número fijo de individuos y fuera libre la incorporación en ellos de cuantos lo solicitasen.⁸⁷⁰

En total fueron 35 los abogados que ingresaron en el colegio durante estos casi tres años. De ellos, 22 lo hicieron en lo que quedaba de 1811, 10 durante el año 1813, y 3 durante los meses de 1814. Destaca el hecho de que desde el 20 de septiembre de 1811 hasta el 14 de agosto de 1813 no se matriculara ningún nuevo letrado.⁸⁷¹ Como he dicho en otras ocasiones, aunque las actas de los libros de deliberaciones apenas hacen referencia a la guerra del Francés,⁸⁷² este período coincide con la ocupación de la ciudad por las tropas napoleónicas y la ausencia de la audiencia borbónica, sin que tengamos noticia de ningún abogado recibido por la audiencia *afrancesada*, si

⁸⁶⁹ En concreto, si en el quinquenio 1790-94 se habían recibido 149 abogados, en el siguiente esta cifra bajó a 116, y en el de 1800-04 a 88, subiendo a 152 de 1805 a 1809. Véase apartado *Recibimiento de abogados en el Real Acuerdo de Valencia*.

⁸⁷⁰ *Colección de los Decretos...*, I, pág. 132; y A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 106, folios 72 y 284. No obstante, la Junta ya tenía conocimiento de esta real cédula desde el día 4 de mayo. En dicha junta consta que el diputado en Cortes José Martínez —encargado junto con Antonio Lloret de tramitar recurso del colegio sobre su apertura, acordado en junta de 23 de octubre de 1810—, había dirigido carta a Pedro Sacristán en la que le manifestaba haber suspendido dar curso a dicho recurso, a fin de evitarle gastos infructuosos, ya que en base al memorial que un abogado tenía presentado en las Cortes, para que se le admitiese en el colegio de Cádiz, la Comisión de Justicia de las mismas Cortes había resuelto la apertura de todos los colegios, como después se acordó por decreto. A.I.C.A.V., libro 5, págs. 153-153 B.

⁸⁷¹ Fechas en que se quedaron anotados en el libro de matrícula, respectivamente, Manuel Escolano González de Aramil (A.I.C.A.V., caja 25, expediente 15, última página), y Tomás Sáiz Martínez (caja 25, expediente 14, última página). Para este último, sin embargo, ya se había acordado su admisión en junta de 5 de diciembre de 1811 (libro 5, págs. 171-172).

⁸⁷² A.I.C.A.V., libro 5. La junta de 6 de diciembre de 1812 (pág. 177-178 B) es la única que trata el tema con algo de transparencia. La convocó el decano para manifestar las causas legítimas que le habían hecho diferir la elección de oficios, y a ella acudieron también los exdecanos y consiliarios. Según consta en el acta, se analizaron los numerosos hechos ocurridos desde la última elección por la venida de las tropas imperiales en septiembre del año pasado: la ausencia de la Real Audiencia y otros tribunales con sus subalternos, “desde este tiempo hasta el mes de abril, cuya suspensión dejó sin facultades el oficio del Sr. decano”; las ocurrencias del nuevo gobierno; la dificultad respectiva de reunirse para celebrar juntas; la inhabilitación de la real casa de los padres congregantes, en cuya iglesia celebraba la festividad anual el colegio; o el destino del decano en el cuerpo de la guardia nacional en clase de oficial nombrado por el mariscal Duque de la Albufera.

es que los hubo.⁸⁷³ Algo similar sucedió en Sevilla, mientras estuvo ocupada, en donde sólo hubo una incorporación en 1810, dos en 1811 y otra en 1812. Santos Torres apunta como causa la posible disonancia del colegio sevillano con el nuevo régimen.⁸⁷⁴ Por lo demás, no parece que la contienda tuviera graves repercusiones en el funcionamiento del colegio valenciano, excepto en el menor número de reuniones que se celebraron, y en la suspensión de la elección de cargos hasta febrero de 1814, así como de las fiestas de carácter religioso.⁸⁷⁵

De mayo de 1814 hasta marzo de 1820

Este nuevo período reduccionista se inicia con la real orden de 4 de mayo de 1814, publicada el día 16, por la que Fernando VII derogaba la Constitución de 1812 y todos los decretos de las Cortes liberales que se oponían a su soberanía. Esta orden fue hecha saber a la Junta por su secretario el día 18. Y por verse en este mismo día la solicitud de incorporación de Vicente María López se acordó celebrar otra junta, con asistencia de los exdecanos y consiliarios, para tratar sobre si se mantenía la libre incorporación o bien se cerraba el colegio en virtud de la referida orden. El día 21 se celebró dicha junta, y en ella se acordó el cierre a cualquier nueva incorporación, incluida la de Vicente María López, a pesar de que ya tenía finalizado el expediente.⁸⁷⁶

Mediante esta derogación se volvía al régimen de incorporación en el colegio vigente con anterioridad al período liberal. Volvía a estar en vigor, pues, el decreto del Real Acuerdo de 14 de abril de 1795, por el que se establecía que el número máximo de abogados no debía superar los 100. Por lo tanto, se volvía de nuevo al sistema restringido de ingreso en donde el colegio quedaba sometido a las decisiones del Real Acuerdo y del Supremo Consejo en cuanto a la admisión de nuevos letrados. Por este motivo, a principios del mes de junio la Junta manifiesta a varios pretendientes que "acudan a usar de su derecho dónde y cómo les convenga, sobre la incorporación que solicitan,

⁸⁷³ Sobre la ocupación francesa de la ciudad de Valencia véase N. Cruz Román, *Valencia...*

⁸⁷⁴ J. Santos Torres, *Apuntes para la Historia...*, pág. 67. Véase también E. Llach y Costa, *Reseña Histórica...*, I, págs. 313 y sigs.

⁸⁷⁵ P. Nácher Hernández, *Historia del Ilustre...*, págs. 91-96.

poniéndose certificación de esta determinación en cada una de ellas [solicitudes]".⁸⁷⁷ La misma decisión se adoptó en similares casos que se dieron en adelante.⁸⁷⁸ El Real Acuerdo, en primer lugar, y el Supremo Consejo, en segundo, serían los órganos que de nuevo se iban a encargar de conocer estas pretensiones.

El caso referido de Vicente María López guarda gran paralelismo con el de Vicente García-Ramos, visto en la segunda etapa. Vicente M^a López recurrió su no admisión ante el capitán general, en base a que su expediente de incorporación ya estaba completo y terminado desde el día 10 de mayo, con lo que de no haber estado el decano ausente de la ciudad en ese momento se le hubiera admitido con anterioridad a la publicación de la orden del día 4. En el recurso alega además que, de la misma manera que lo había entendido el Supremo Consejo en el caso de Vicente García-Ramos, esta resolución no debería afectar tampoco a aquellos expedientes finalizados con anterioridad a la publicación de la resolución, manifestando asimismo que el colegio era perfectamente conocedor de este caso. Sin embargo, el capitán general desestimó el recurso, siguiendo así —curiosamente— el informe que le había presentado el colegio, y que era contrario al informe favorable a la admisión presentado por el auditor. Con lo que el pretendiente recurrió al Supremo Consejo que, finalmente, por real provisión de primero de agosto de 1814 ordenó al colegio que, no estando completo el número señalado de cien abogados, le admitiese o, estándolo, le recibiese en la primera vacante.⁸⁷⁹ Lo que no ocurrió hasta 1817.

Sin embargo, dos pretendientes lograron la colegiación con anterioridad a la existencia de vacantes. Se trata de Joaquín Maldonado Maldonado y de Salvador Gramage Delgado de Molina. Para el primer caso, y según consta en junta de 15 de octubre de 1809,⁸⁸⁰ el decreto del Real Acuerdo de 25 de septiembre del mismo año autorizaba a Joaquín Maldonado,

⁸⁷⁶ A.I.C.A.V., libro 5, págs. 203 B-205.

⁸⁷⁷ Se trata del expediente de pruebas de Pedro Bohígues y de las solicitudes de incorporación de Mariano Marqués, Vicente Navarro y Manuel González Roig; A.I.C.A.V., libro 5., junta de 7 de junio, pág. 205 B.

⁸⁷⁸ Véase, por ejemplo, juntas de 22 de agosto de 1714 ó 4 de septiembre de 1816, libro 5, págs. 208-209 B y 247 B-248, respectivamente.

⁸⁷⁹ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 109, págs. 193 B y 698-701.

⁸⁸⁰ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 111.

abogado del colegio de Madrid desde 1795, para despachar e informar en Valencia en toda clase de negocios y tribunales como si fuera individuo de su colegio. La Junta acordó poner en la lista nota separada en la que constase dicha habilitación. En 1813, y como consecuencia de un problema protocolario, el colegio pasó oficio a Maldonado a fin de que "se abstenga por ahora de reunirse en dicho cuerpo del colegio en sus actos y concurrencias públicas, hasta que verifique su incorporación con arreglo a los estatutos y soberanos decretos de las Cortes de 22 de abril de 1811 y 9 de octubre de 1812".⁸⁸¹ Presentada queja por el interesado ante la Audiencia, ésta solicita informe al colegio, que redactará su decano, y en el que se manifestará entre otras cosas que:

...cuando se le admitió por decreto de habilitación de 25 de septiembre de 1809, al Colegio no se le dio audiencia en aquel expediente, pero calló, aunque los motivos que Joaquín Maldonado tenía para ingresar era la imposibilidad de pertenecer al de Madrid, y porque no le era permitida la incorporación en este colegio por la ley prohibitiva de admisión que gobernaba. Pero, a pesar de todo, se le admitió y se le notó en la lista, no obstante que aquella resolución parecía opuesta a lo determinado por S. M. Además, aquella resolución no se dirigía a que disfrutase de las preeminencias de colegial, sino a que no pereciese de necesidad.

En el día han variado las circunstancias. Ya no subsisten los motivos por los que se concedió dicha gracia. Faltaría el Colegio a los estatutos y al decreto que previene subsistan los colegios y que sea libre su incorporación.

No hay motivo para que disfrute los privilegios de colegial y no lleve las cargas ni satisfaga las contribuciones, sin que pueda escusarse por haber sido designado abogado de pobres y convocado según dice a las funciones públicas del Colegio.

El estatuto 26 previene que los abogados de los colegios filiales al de la Corte pueden incorporarse en éste sin necesidad de pruebas, y sólo con certificación de que el pretendiente es tal abogado colegial. Así es que Maldonado si quiere continuar despachando debe incorporarse y obligarse a las cargas⁸⁸²

Visto este informe, la Audiencia acordó por providencia de 29 de marzo de 1814 que, acreditando Joaquín Maldonado en el plazo de 40 días ser individuo del colegio de Madrid, se le incorporase en el de Valencia. Así lo acreditó mediante certificación del secretario de aquel colegio, con lo que por

⁸⁸¹ A.I.C.A.V., libro 5, junta de 28 de octubre, pág. 185.

⁸⁸² A.I.C.A.V., caja 25, año 1814, expediente 6.

junta de 22 de junio de 1814 se acordó su plena incorporación, previo cumplimiento del depósito y juramento.

Diferente fue el caso de Salvador Gramaje Delgado de Molina. Admitido por junta de 26 de agosto de 1811, no cumplió con las consiguientes obligaciones para lograr su anotación en el libro de matrícula, lo que solicitó en julio de 1814. Por coherencia con lo ocurrido en otros dos casos similares vistos en la segunda etapa, el colegio debería haberlo admitido. Sin embargo, no lo hizo así. Al parecer, y según lo expuesto en la junta de 21 de julio, Salvador Gramaje había trabajado en favor del gobierno intruso, con lo que se le hizo saber que en su caso usara del derecho que entendiere tener donde y como le conviniese.⁸⁸³ De no admitirse por este motivo, nos encontramos ante la única ocasión manifiesta en que la Junta toma en consideración la actitud de un abogado frente al invasor. No obstante, recurrida por el pretendiente esta resolución ante el Real Acuerdo, éste ordena, previo informe de costumbre del colegio, su admisión, lo que se lleva a cabo por junta de 8 de abril de 1815. A diferencia de los dos casos referidos anteriormente, Salvador Gramaje no aparecerá anotado en el libro de matrícula en el lugar que le correspondería según la junta que por primera vez acordó su admisión, esto es en el año 1811, sino en 1815.⁸⁸⁴

Al igual que lo ocurrido en la segunda etapa, en este período reduccionista también tenemos casos de abogados que, no pudiendo incorporarse en el colegio, intentaron ejercer en la capital a través de otros caminos.⁸⁸⁵ Tal es el caso de José Magraner, abogado de Alzira, que acudió

⁸⁸³ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 207 B.

⁸⁸⁴ En junta de 7 de agosto de 1815 se da cuenta de un oficio del regente en comisión, el Barón de Antella, según el cual el 30 de julio anterior el Exmo. Sr. Tomás Moyano le manifestaba cómo el Rey había mandado que Estanislao Fita fuera incorporado en el colegio, con lo que se acordó su obediencia y cumplimiento. Sin embargo, nada más se sabe del particular, puesto que tal pretendiente ni siquiera llegó a anotarse en el libro de matrícula.

⁸⁸⁵ De cualquier manera, debemos destacar en este punto que, si bien este tema era especialmente relevante durante los períodos en que el acceso al colegio era restringido, también lo podemos encontrar en los momentos en que, siendo libre la incorporación, el letrado no estaba interesado en convertirse en colegial. Por junta particular de 14 de enero de 1813, por ejemplo, conocemos la pretensión ante el Real Acuerdo del letrado Luis María Agulló de que se le habilitase para firmar como abogado los pedimentos, papeles en derecho, y demás que fueran necesarios en el seguimiento de sus asuntos propios. A lo que la Junta manifestó "que se informe a la Real Audiencia en conformidad de las Reales órdenes insertas en la *Novísima Recopilación* y de los Estatutos del Colegio, y manifestando no poderse separar de la privación que excluye a todo abogado no recibido en él, y de las prerrogativas que son propias de sus individuos"; A.I.C.A.V., libro 5, pág. 179.

en 1815 al Real Acuerdo solicitando se le habilitase para firmar en las causas propias que tenía pendientes en la Real Audiencia y demás tribunales de la capital.⁸⁸⁶ Solicitado informe al colegio, éste delegó en su secretario, sin que haya quedado constancia del resultado. También Vicente Alfonso acudió en 1816 al Real Acuerdo solicitando se habilitase a su sobrino, José Oller, para que informase por él. Ordenado informe al colegio, éste, en consideración a los méritos y circunstancias de Vicente Alfonso, respondió favorablemente, salvo en lo referente a la firma.⁸⁸⁷ Y tal vez fuera también el caso de Francisco Xavier Cabestany, que, por junta de 22 de enero de 1817 se sabe que acudió al Real Acuerdo solicitando permiso para ejercer en este reino. Pedido informe al colegio, éste manifestó que "no puede separarse de lo mandado por el Consejo Real, según la certificación que se acompaña, y, consiguientemente, no encuentra reparo en que dicho interesado ejerza la facultad en todos los tribunales del Reyno menos en los de esta capital sin preceder la incorporación en el colegio".⁸⁸⁸ No sabemos cuál fue la resolución del Real Acuerdo, si bien, dicho pretendiente no llegó a incorporarse en el colegio.

Cosa diferente fue el intento por parte de algún letrado de incorporarse en el colegio de Valencia por ser colegial de la corte. Se trata del caso de Manuel González Roig. Ante esta pretensión, el colegio de Valencia pide informe sobre el pretendiente al decano de Madrid, al tiempo que le inquiriere si, hallándose ya completo el número de abogados de dicho colegio, admitiría al individuo de Valencia que acudiera al suyo. Ante su respuesta negativa, y teniendo en cuenta que el estatuto XXVI sirvió para la época en que se admitían en los colegios a todos los individuos que lo solicitaban, la Junta acordó no haber lugar a dicha admisión por el momento, por encontrarse completo el número de colegiales.⁸⁸⁹ Pero más tarde, en junta de 8 de marzo de 1817,⁸⁹⁰ el colegio acuerda la admisión de Manuel González y la de Francisco Jaldero, en virtud del mismo estatuto XXVI, y por ser ambos

⁸⁸⁶ A.I.C.A.V., libro 5, junta de 8 de julio, pág. 227.

⁸⁸⁷ A.I.C.A.V., libro 5, juntas de 24 de agosto y 12 de octubre, págs. 244 B y 249 B, respectivamente.

⁸⁸⁸ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 151 B.

⁸⁸⁹ Este letrado ya había intentado, infructuosamente, incorporarse en 1814 por el procedimiento ordinario. A.I.C.A.V., libro 5, págs. 205 B, 240 y 243 B.

⁸⁹⁰ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 253-253 B.

colegiales de la corte. Este repentino y aparente cambio de parecer no fue tal, sino consecuencia del decreto del Real Acuerdo de 20 de febrero de ese mismo año, por el que ordenaba al colegio incorporar, entre otros, al primero de estos dos pretendientes y a otros hasta el número de 31, entre los cuales el colegio decidió admitir a Francisco Jaldero.

En efecto, por decreto de 20 de febrero de 1817 el Real Acuerdo declaró hallarse vacantes en el colegio 31 plazas, hasta completar el número de 100 útiles que debían componerlo, mandando a la Junta de Gobierno admitir desde luego a Vicente María López, Vicente Ruiz, Vicente Climent, José Morales, Manuel González y José Oller. Para la provisión de las restantes plazas vacantes ordenó asimismo a la Junta que propusiese sujetos idóneos, graduándolos según sus méritos y antigüedad. Con lo que la Junta acordó en 3 de marzo que se fijasen edictos, con el anterior decreto insertado, en la Real Audiencia y demás sitios acostumbrados, para que todos los que quisieran incorporarse presentasen las correspondientes solicitudes en el plazo de 15 días.⁸⁹¹ En este caso no hay duda de que el Real Acuerdo consideraba que el número de 100 se refería exclusivamente a los ejercientes. Y avala esta idea el hecho de que para el año 1816-1817 la lista contenía un total de 121 inscritos.

Fueron en total 45 las solicitudes de incorporación, de las cuales el colegio propuso una lista de 24 pretendientes,⁸⁹² puesto que el Real Acuerdo ya había ordenado admitir los 6 letrados anteriores y el colegio también había admitido por su cuenta a Francisco Jaldero. Entre los méritos por los que se graduaron los pretendientes en la lista, se tuvo en especial consideración a los hijos de abogados colegiales y a aquellos que por causa de haber sido prisioneros de guerra no pudieron lograr la incorporación, anteponiendo los méritos a la antigüedad en circunstancias iguales.⁸⁹³

⁸⁹¹ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 252.

⁸⁹² No obstante, la junta de 20 de marzo se refiere tan sólo a 23 pretendientes. Todo indica que se trata de una equivocación.

⁸⁹³ Los 24 pretendientes que posteriormente con arreglo a los Estatutos se convirtieron en colegiales fueron: Joaquín Fusell Gil, Estanislao de Oloris, Pedro Bohígues, José Sanchiz Causín, Juan Vicente Genovés, José M^a Marín, Luis Alonso Garrea, Juan Bautista Genovés, Mariano Marqués, Vicente Navarro Álvarez, Mariano Mateu Dasí, Manuel Ximénez, Tomás Liñán, Simón Suay Beltrán, José Rafael Gómez Devesa, José Tomás Valentí, Manuel Pardo Grau, José M^a Calabuig, José Estruch Armengol, Martín Serrano, Manuel Franco Vives, Pedro Fuster, José Cuevas y Antonio Guiral. Además, el colegio proporcionó al Real Acuerdo la lista de los 21 restantes pretendientes, que fueron: José Magraner, Luis Sellés, Vicente Ferrándiz

Por decreto de 6 de junio de ese año el Real Acuerdo aprobó la propuesta hecha por la Junta, pese a que dicho tribunal le había solicitado en abril que le remitiese los memoriales y méritos de los pretendientes a las 24 plazas que quedaban vacantes, lo que dejaba ver la consiguiente desconfianza del Real Acuerdo para con el colegio, según interpretaba éste.⁸⁹⁴ También es cierto que el Real Acuerdo recibió cuatro memoriales de otros tantos pretendientes en los que se quejaban de la ubicación en que aparecían en la propuesta del colegio.⁸⁹⁵

Con posterioridad a este decreto, tanto el Supremo Consejo como el Real Acuerdo continuaron recibiendo memoriales de letrados solicitando su incorporación en el colegio, sin que ninguno de ellos lo consiguiera.⁸⁹⁶ Hasta que el 27 de noviembre de 1817 la Junta de Gobierno decidió, dada la existencia de cinco vacantes dejadas por la muerte de otros tantos colegiales,⁸⁹⁷ publicar edicto con el fin de que los abogados que quisieran incorporarse y tuviesen las cualidades requeridas propusieran su solicitud en el plazo de 10 días. Presentadas nueve solicitudes por otros tantos letrados, el colegio, acomodándose a las condiciones del decreto del Real Acuerdo de 20 de febrero del mismo año, propuso los cinco que finalmente fueron mandados incorporar por el Real Acuerdo en decreto de 26 de enero de 1718,⁸⁹⁸ si bien uno de ellos, Francisco Carbonell, no pudo finalmente ingresar, por encontrarse preso a disposición del capitán general en el tribunal de la Inquisición. Aunque lo volvió a intentar en 1820, y se le admitió por junta de 13

Abillejos, Domingo Hernández, Xabier de Cabestany, Pedro Dimas Cervelló, Benito Antonio García Motilla, Cristóbal Santonja, Eufemio Reig, Bonifacio Amorós, Pedro Gómez Polop, Roque Francés, Joaquín Antonio Boil, Melchor Marau, José Saz Marín, José Ximénez, Tomás Cabot, Miguel Sánchez, Miguel Vercher, Lucas García Marín, Salvador Alagón. A.I.C.A.V., libro 5, pág. 255 B.

⁸⁹⁴ A.I.C.A.V., libro 5, junta de 19 de abril, pág. 257 B.

⁸⁹⁵ De estos cuatro tres, Domingo Hernández, Tomás Cabot y José Ximénez aparecían en la segunda lista y uno, José Sánchez Causín, en la primera.

⁸⁹⁶ A.I.C.A.V., año 1817, juntas de 10 de julio y 22 de noviembre, por lo que respecta al Supremo Consejo —solicitud de Vicente Vilanova Miralles—; y de 31 de julio y 22 de noviembre en cuanto al Real Acuerdo —solicitudes de Lucas García y Miguel Sánchez, respectivamente—.

⁸⁹⁷ Carmelo Morte, Eugenio Jordá, Eugenio Pallarés, Mariano Ximeno Planes y José Soriano Nieto; A.I.C.A.V., libro 5, pág. 268 B.

⁸⁹⁸ Se trata de Antonio Gómez Devesa, Lucas García Marín, Francisco Carbonell, Jacinto Company y Juan Bautista Ros. Los cuatro restantes eran Julián Ferrer Cardona, Francisco Xabier Cabestany, Joaquín Antonio Boil y Luis Antonio Sellés; A.I.C.A.V., libro 5, juntas de 13 y 20 de diciembre de 1817, págs. 269-270.

de mayo, su nombre no aparece recogido en el libro de matrícula.⁸⁹⁹ El último decreto referido ordenaba, además, que se hiciese saber a los agraciados que en el término de tres meses se establecieran con despacho corriente en la ciudad, bajo el apercibimiento de que propasado dicho término se declararían vacantes dichas plazas.

En junta particular de 9 de mayo de 1818, se lee un decreto del Supremo Consejo de 26 de febrero, en el que, entre otras cosas, se aclaraba y fijaba la competencia de cada tribunal en materia de incorporaciones. En este decreto se ordenaba a la Audiencia, que en lo sucesivo, y mientras que de cualquier modo resultara completo el número de colegiales señalado para el colegio, no ordenara incorporar pretendiente alguno sin el permiso o licencia del mismo Consejo. De esto se interpreta que el Real Acuerdo seguirá siendo el tribunal encargado de designar los abogados que ocuparán las plazas declaradas vacantes, mientras que el Supremo Consejo será la única instancia que podrá ordenar el ingreso de un abogado en calidad de supernumerario. Y así ocurrió con los siguientes pretendientes que, después de presentar su solicitud de incorporación en el colegio, tuvieron que acudir, por indicación de éste, al Supremo Consejo.⁹⁰⁰ Este tribunal, pese a tener conocimiento de que se excedía en 25 ó 26 el número de los abogados,⁹⁰¹ acordó la incorporación de alguno de ellos.⁹⁰² Si bien, como argumentaba Florencio Vives Pascual en su solicitud de incorporación, no estaba completo el número de los abogados que ejercían la profesión. Aquí parece que el colegio se contradiga con posturas adoptadas con anterioridad, ya que en los informes remitidos al Consejo incluye, dentro de los 25 ó 26 abogados excedentes, a todos los alistados, puesto que en la lista de 1818 tan sólo aparecen 123 individuos.

En el mismo sentido, en estos momentos la Junta adopta una postura desfavorable con respecto a aquellos abogados que solicitaban ante el Real Acuerdo habilitación para poder informar en estrados por cuenta de otro

⁸⁹⁹ A.I.C.A.V., caja 27, año 1820, expediente 7.

⁹⁰⁰ A.I.C.A.V., libro 5, Felipe Mustieles, pág. 275; Pedro Burgos de Vallabriga, pág. 277 B; Juan Bautista Guitart Richart, pág. 279 B; Pedro Gómez Polop, pág. 284; Andrés Vilella, pág. 286; Libro 6, Florencio Vives Pascual, pág. 2; y Ramón Ramírez Llombart, pág. 8.

⁹⁰¹ A.I.C.A.V., libro 5, juntas de 7 y 26 de agosto de 1818, págs. 278 B-279 B.

⁹⁰² A.I.C.A.V., libro 5, Felipe Mustieles y Pedro Burgos de Ballabriga, junta de 5 de diciembre de 1818, págs. 286 B-287; y libro 6, Juan Bautista Guitart Richart, junta de 23 de enero de 1819, págs. 288-288 B.

abogado colegial. Se trata de una postura completamente diferente a la adoptada años atrás en los mismos supuestos. Fue el caso de los letrados Manuel Ferrer y Antonio María García de Alcaraz. Por creerlo interesante, transcribo el informe que a instancia del Real Acuerdo remitió el colegio sobre la primera de estas dos solicitudes:

...sobre la solicitud de don Manuel Ferrer, relativa a que se le habilite para informar en estrados, cree dever poner en la consideración de V. E., que la facultad de informar en estrados va anexa a la de intervenir en los negocios judiciales que ocurren en los tribunales de esta capital y firmar los escritos, que está concedida únicamente a los abogados incorporados en el Colegio, quienes al tiempo de su ingreso contrahen una formal obligación de observar sus estatutos. Por gozar de estas prerrogativas, se sugetan los individuos del Colegio a contribuir con las cantidades impuestas, a fin de atender a los gastos que se ofrecen en la corporación y en el establecimiento del Monte Pío.

Si se permitiese a don Manuel Ferrer el poder informar en estrados por cualquiera abogado del Colegio, se verificaría estar disfrutando de una de las prerrogativas concedidas a los individuos colegiales sin sufrir ningún gravamen.

Aunque en tiempos pasados ocurrieron algunos exemplares de habilitaciones hechas por esta superioridad para informar en estrados, media una razón de diferencia para haberse concedido entonces. En el año 1810, con motivo de la falta de abogados colegiales que se experimentaba por haber transcurrido tantos años sin incorporarse mediante la reducción de los colegios, la misma necesidad obligó a algunos abogados del Colegio, que por su avanzada edad y achaques se veían imposibilitados de asistir a informar en estrados, a solicitar la habilitación de algunos pasantes ya abogados que se ocupaban en el despacho de los mismos asuntos en que intervenía el director que pedía la habilitación. Pero aun entonces, a ningún abogado se habilitó para que pudiese informar indistintamente, por cualquiera individuo colegio que lo ocupase sino por uno solo.

Posteriormente se han incorporado muchos jóvenes que pasan de ochenta, y en caso de imposibilidad de cualquiera director de una causa puede valerse de éstos para desempeñar la asistencia en estrados.

Por estas razones, entiende el Colegio que no se reconocen méritos suficientes para que pueda tener lugar la habilitación a que aspira don Manuel Ferrer...⁹⁰³

Haciendo un balance de este segundo período reduccionista, podemos decir que de nuevo fueron conseguidos los objetivos propuestos, puesto que al menos desde principios de 1817 los colegiales ejercientes ya habían bajado

⁹⁰³ A.I.C.A.V., libro 6, pág. 9.

del centenar. Las listas ratifican este descenso. Si en la de 1813-1814 aparecían inscritos 126 individuos, en la de 1819-1820 lo hacían 124, llegándose como máximo a los 131 en 1817. Como vemos, el objetivo de este período fue, más que reducir, mantener la baja cifra de abogados conseguida durante el primer período reduccionista.

De marzo de 1820 hasta abril de 1823

El 10 de marzo de 1820 Fernando VII acata la constitución de Cádiz. Con ello se inicia el Trienio Constitucional que, por lo que respecta al ingreso de abogados en el colegio vendría caracterizado por una vuelta al régimen de libre incorporación que ya estuvo vigente en 1811, en virtud del decreto de las Cortes de 22 de abril de ese año. Durante este período fueron un total de 16 los abogados que se colegiaron.

Uno de los puntos más interesantes de este período fue el intento por parte de algunos abogados —Miguel Sánchez, Manuel Ferrer, Saturnino Campos y Antonio Sanvítores—, de ingresar en el colegio sin hacerlo al mismo tiempo en su montepío.⁹⁰⁴ La junta particular de 13 de mayo de 1820 deja constancia de que, de estos abogados, los dos primeros celebraron con el decano del colegio juicio de conciliación ante el alcalde primero constitucional de la ciudad de Valencia, Vicente Tomás Traver —también colegial—; el cual, por decisión de 26 de abril, ordenó el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo cuarto del capítulo primero del reglamento del montepío, obligándoles así a ser miembros también del montepío.⁹⁰⁵ No conformándose los demandantes con esta resolución, en junta de 18 de julio se da cuenta de real orden comunicada por el secretario de estado y del despacho de Gracia y Justicia, por la que se mandaba al colegio informe, para lo que se comisionó al

⁹⁰⁴ A.I.C.A.V., libro 6, juntas de 12 de abril y 13 y 27 de mayo de 1820, págs. 12 y 15.

⁹⁰⁵ "Como esta obra tan piadosa tenga por objeto socorrer las necesidades de los abogados, sus viudas e hijos y el lustre y honor del Colegio, y considerando por otra parte que las diligencias y pruebas para su ingreso ningún gasto causan al que le logra, quando en las que se hacen aun con menos circunstancias para el de otros cuerpos se ocasionan los de crecidas sumas de maravedís, es equitativo y justo que todos y cada uno de los que después de publicado este reglamento pretendan ser admitidos en el Colegio precedidas las diligencias y pruebas de estatuto, y verificada su admisión, se hayan de incorporar en el montepío y aprontar en lugar de lo que antes aprontaban nuevecientos reales vellón por una vez para fondo del montepío. Y esta cantidad se ha de pagar en los tres primeros años a trescientos en cada uno satisfaciendo además de los referidos los doscientos y quarenta reales anuales; todo en el modo especificado en los párrafos primero y segundo"; A.I.C.A.V., caja 387, sin número.

diputado tercero, José Martínez, y al secretario, Francisco Calbo Marco. Al mismo tiempo, se deliberó dirigirse al decano del colegio de Madrid adjuntándole copia certificada de dicho juicio, de la real orden, representación e informe que se evacue, "con encargo de que tenga a bien coadyubar en lo posible para el buen éxito de la solicitud de este colegio, respecto a que puede recaer una decisión general para que se observe en todos los colegios".⁹⁰⁶ Mientras tanto, Manuel Ferrer junto con otros letrados habían obtenido de un juez de primera instancia auto en 10 de junio de 1820 por el que se les habilitaba para ejercer la abogacía en la ciudad de Valencia.⁹⁰⁷ Auto que fue revocado por la sala por decreto de 22 de octubre de 1821, declarando que dicho juez no tenía facultades para ello. Además, en este decreto se ordenaba a los escribanos de cámara y a los demás jueces de primera instancia, que no admitiesen "por ahora" escritos firmados por dichos letrados, y devolviesen los autos con certificación para que los continuasen sobre lo principal según su estado.

Todos estos problemas planteados en esta etapa liberal derivaban de que algunos abogados, entre los cuales se incluían algunos ya colegiados, opinaban que los estatutos del colegio no estaban en concordancia con los tiempos que corrían, no se adecuaban al nuevo sistema normativo reinstaurado en 1820. Tanta fue la preocupación sobre este aspecto que en este año, como hemos visto, la Junta del colegio de Valencia había consultado este tema con la de Madrid, la que le comunicó que con las nuevas instituciones no se había hecho novedad alguna en las fórmulas y pruebas que se requerían para la incorporación. No obstante, aquel colegio había resuelto la formación de nuevos estatutos, puesto que las Cortes efectivamente opinaban, que "las pruebas de Estatutos que se exigen en el colegio no son las más conformes y adaptables a las nuevas instituciones".⁹⁰⁸ Y en este contexto se

⁹⁰⁶ A.I.C.A.V., libro 6, pág. 15 B.

⁹⁰⁷ Se trata de los letrados Miguel Sánchez, Santiago Campos, Antonio Sanvítores, Domingo Hernández, Vicente Calabuig y Francisco Carbonell. A.I.C.A.V., libro 6, junta de 14 de noviembre de 1821, pág. 31 B.

⁹⁰⁸ Esta manifestación de las Cortes con respecto a los estatutos del colegio de Madrid, viene originada por la solicitud de un pretendiente interpuesta ante esta instancia, de que se le dispensara de las pruebas por haberse incendiado los archivos de su pueblo. Aunque el colegio llegó a redactar unos nuevos estatutos, que fueron aprobados por junta general, el cambio de régimen impidió que fueran aprobados por el gobierno. Véase P. Barbadillo Delgado, *Historia del Ilustre...*, III, págs. 30-31 y 139.

entienden las continuas habilitaciones solicitadas ante los tribunales para abogar sin tenerse que colegiar necesariamente. Con lo que partir de ahora las solicitudes de habilitación y su concesión ya no serán exclusivas de los períodos en que el colegio tenía sus puertas cerradas.

Es el caso visto en junta de 31 de julio de 1822, cuando se recibe oficio del juez de primera instancia, Tomás Liñán, manifestando que había habilitado a Francisco Palau para el ejercicio de la abogacía. La Junta acordó citarle y emplazarle en el expediente que sobre el particular pendía en la Audiencia. Sin que sepamos nada más sobre este particular, Francisco Palau ingresó en 1826. El mismo juez remitió a la Junta en el mismo año otro oficio, al cual acompañaba testimonio de la solicitud del escribano Vicente Ramírez relativa a su habilitación para ejercer la abogacía en la ciudad sin perjuicio de su incorporación.⁹⁰⁹ Incorporación que finalmente no llevó a cabo, ni aun cuando lo intentó en 1823.

Pero el caso más interesante fue el acontecido como consecuencia del siguiente incidente: en junta de 12 de abril de 1821 se da cuenta del informe remitido por los abogados informantes Juan Sala y Tomás Liñán, en el expediente de pruebas de Gaspar Monleón Broquer, en el que manifestaban:

...que de ningún modo pueden los estatutos del Colegio regir en el día, porque no se [...] con lo que establece la Constitución de la monarquía y decretos de las Cortes que dimanar de aquella, pues que sino eran [...] como las preguntas tercera y cuarta del interrogatorio serían por lo menos [...], que por lo mismo sería conveniente consultar con el colegio de Madrid, a efecto de que se sirva comunicar o manifestar las constituciones y demás reglas que actualmente le sirven de [...], y que para evitar los perjuicios que de la dilación se pueden originar al pretendiente se le podía habilitar por ahora bajo la protesta de cumplir lo que se resuelva en vista de quando diga el colegio de Madrid.⁹¹⁰

Y los señores de la Junta, teniendo presente el oficio que con fecha de 6 de octubre de 1820 se recibió del decano de Madrid, acordaron escribirle de

⁹⁰⁹ A.I.C.A.V., libro 6, págs. 40 B y 45 B. Otro caso, anterior, fue el del doctor Trapiella, que había acudido a la Audiencia solicitando que se le admitiesen escritos con su firma. La Audiencia pidió informe al colegio, el que en junta de 9 de agosto de 1820 manifestó que, no siendo colegial, no se le admitiesen tales escritos. La cuestión es que dicho letrado no se colegió (libro 6, pág. 16).

⁹¹⁰ A.I.C.A.V., libro 6, pág. 25 B.

nuevo para que manifestara si en el día continuaba rigiéndose su colegio por los antiguos estatutos, en lo tocante a las fórmulas y pruebas para la incorporación de sus individuos, y si sobre ello se había hecho alguna novedad como consecuencia del nuevo régimen político. En junta de 16 de junio se da cuenta de la contestación, acordándose poner copia de ella en el expediente de incorporación de Gaspar Monleón, y remitirlo éste de nuevo a los jueces informantes nombrados.⁹¹¹ El caso es que no se produjo ninguna modificación en el procedimiento de incorporación.

De abril de 1823 hasta noviembre de 1832

En virtud de real orden de la Junta Suprema de Gobierno de España e Indias, expedida en Bayona el 6 de abril de 1823, las cosas volvían al estado en que se encontraban con anterioridad al 7 de marzo de 1820. Por ello, en junta de 5 de julio de 1823 se acuerda volver al sistema de incorporación anterior, en el que, por decreto del Consejo de Castilla de 26 de febrero de 1818, y mientras resultare completo el número de colegiales señalado, la Real Audiencia quedaba privada de ordenar la admisión de pretendiente alguno sin el correspondiente permiso o licencia del Consejo.⁹¹²

Así ocurrió con Vicente Ramírez Escoín, a quien por hallarse completo el número de abogados no se le admitió en la misma junta de 5 de julio, y se le hizo saber que usara del derecho que entendiese tener donde correspondiera.⁹¹³ Más tarde, el informe solicitado por el Real Acuerdo al colegio, que data de 20 de septiembre de 1823, decía así:

Que repuestas enteramente las cosas al ser y estado que tenían antes del siete de marzo de mil ochocientos veinte, ha vuelto a renacer en toda su extensión la observancia de las órdenes expedidas por el Real y Supremo Consejo, en las que prohíbe exceda el número de abogados de este Colegio de los ciento que tiene prefixados, siendo de advertir que la real provisión de veinte y seis de febrero de 1818 previene terminantemente que, mientras de qualquiera manera resulte completo el número de colegiales señalado, no se admita ni incorpore pretendiente alguno sin que obtenga permiso o licencia del Consejo.

⁹¹¹ No conocemos el contenido exacto de esta contestación puesto que este expediente de incorporación no ha llegado hasta nosotros.

⁹¹² A.I.C.A.V., libro 6, págs. 50-50 B.

⁹¹³ A.I.C.A.V., libro 6, pág. 50 B.

En la actualidad se halla completo este número con bastante exceso, según convence la lista impresa del presente año, en la qual se leen ciento catorce individuos, y, aunque se rebajen dos, que han fallecido con posterioridad al día de la impresión, siempre resultan doce sobre los ciento que debiera únicamente haber. Y si se examina el libro de ingresos o incorporaciones todavía se encuentran otros muchos abogados colegiales cuyos nombres no aparecen en la lista impresa, porque, hallándose ausentes al tiempo de su formación, no se creyó oportuno insertarlos en ella, pero pertenecen indudablemente al Colegio, pueden ejercer la facultad siempre que les parezca, y aumentar el número como todos los demás, en términos que en el día existen veinte y cinco individuos sobre los ciento que se hallan prefixados.

Se infiere, pues, que la solicitud de incorporación dirigida por don Vicente Ramírez al Ministerio de Gracia y Justicia, y no al Supremo Consejo, se opone directamente a todas las reales órdenes expedidas sobre el particular por aquel Supremo Tribunal, y muy particularmente la real provisión de 26 de febrero de 1818. V. E., sin embargo, resolverá lo que estime más acertado.⁹¹⁴

Parecido fue el caso de los letrados Andrés Vilella Crespo y Onorato Piera Minguet. Los dos habían sido admitidos en la etapa anterior, por junta de 25 de mayo de 1820, sin que se les hubiese anotado en el libro de matrícula por no haber hecho el depósito ni prestado el juramento correspondientes. Solicitando en estos momentos la plena incorporación, la misma junta de 5 de julio de 1823 adoptó igual decisión de no admitirles ateniéndose a las disposiciones legales vistas.⁹¹⁵ Ambos letrados insistieron en su intención ante el Real Acuerdo, el que solicitó informe al colegio. Informe en el que la corporación repetía los razonamientos legales vistos hasta ahora en favor de la no admisión, si bien añadiendo lo siguiente:

Y por último debe manifestar la Junta, que tiene por bastante sospechoso el pretexto de que se valen para cohonestar el transcurso de tanto tiempo, por no ser creíble dexaran de hacer entonces el depósito por falta de medios, y que los tengan precisamente en el día en que escasean más todos los recursos por una consecuencia forzosa de la infeliz y minosa época que ha desaparecido. Parece, pues, que la pretensión de los mismos es enteramente despreciable, y que sólo les queda el recurso de acudir al Supremo Consejo según lo determinó la Junta. Más V. E. podrá resolver lo que sea justo y procedente.⁹¹⁶

⁹¹⁴ A.I.C.A.V., libro 6, pág. 58 B. No hay constancia de como quedó este asunto, ya que no vuelve a aparecer en los libros de deliberaciones.

⁹¹⁵ Sin embargo, ya hemos visto cómo en casos similares de períodos anteriores la decisión de la Junta fue favorable a la admisión.

⁹¹⁶ A.I.C.A.V., libro 6, junta de 19 de julio de 1823, pág. 42 B.

Presentado por Onorato Piera recurso ante el Supremo Consejo, el informe que al respecto remitió el colegio por solicitud de aquél, y que data de 13 de diciembre de 1823, venía a decir lo mismo que el transcrito para Vicente Ramírez. Pero en este caso los individuos que excedían el número de cien ya no eran 12, sino, extrañamente, 27. Y ello a pesar de que entre ambos informes no se había acordado ninguna incorporación. Finalmente, tras varios informes del colegio a requerimiento del Supremo Consejo,⁹¹⁷ por real provisión de 4 de noviembre de 1824 se ordena la incorporación de Onorato Piera, Andrés Vilella y Juan Bautista Alberola,⁹¹⁸ como así se hizo en junta de 29 de noviembre de ese mismo año.

Interesante también fue el caso del presbítero Miguel Sánchez Gil, en el que, tras varios intentos frustrados de incorporación ante el Supremo Consejo y el Real Acuerdo,⁹¹⁹ este último tribunal solicitó información al colegio —por decreto de 30 de octubre de 1824—, sobre ciertos puntos relativos al número de colegiales que lo componían. En el informe que el colegio le remitió se detallaban los siguientes apartados:⁹²⁰

— En cuanto al número de abogados que debía componer el colegio, éste contesta que 100, según la resolución del Real Acuerdo de 14 de abril de 1795, aprobada por el Consejo según carta orden de 19 de noviembre de 1796. Añadía que, según real provisión de 26 de febrero de 1818, se mandó expresamente no admitir ningún pretendiente mientras que de cualquier manera resultara completa esta cifra, a no ser que medie permiso o licencia del Consejo.

— En segundo lugar, el Real Acuerdo se interesaba por el número de abogados colegiales comprendidos en la lista del año 1823-1824 que en el día se hallaban ausentes, sin esperarse su pronto regreso, a lo que la Junta respondió que 18. "De éstos existen tres dentro de la provincia y cinco de los

⁹¹⁷ A.I.C.A.V., libro 7, juntas de 14 de enero y 6 de septiembre de 1824, págs. 61-62 y 70-72 B, respectivamente.

⁹¹⁸ Este último abogado había sido admitido por junta de 14 de noviembre de 1821, pero, al igual que los otros dos, no había efectuado el depósito ni había prestado el juramento.

⁹¹⁹ A.I.C.A.V., libro 6, pág. 71 B; y caja 28, año 1825, expediente 1º.

⁹²⁰ A.I.C.A.V., libro 6, pág. 76 B. Lo subrayado es propio del acta.

de la misma regresados hasta el día, debiendo añadir que de los anotados en la generalidad son tres difuntos en este año".

— Por último, preguntaba sobre los anotados en la lista que no ejercían la abogacía, y las razones que tenían para ello, a lo que la Junta reconoció que no le constaba con seguridad el número de estos letrados, "pero, bien por razón de destino incompatible, bien de público, sin que les sea dable indicar la razón que concurra en los segundos en su concepto, son doce".

Considerando que en la lista de 1822-23 aparecen un total de 114 individuos —no disponemos de la del año colegial siguiente—, si sumamos los ausentes y los que no ejercían, claramente no se sobrepasaría el número permitido de abogados.

Pero Miguel Sánchez aún volvió a acudir al Supremo Consejo el 27 de mayo de 1825, alegando que, con motivo de las solicitudes de incorporación de los abogados Melchor Pinazo y Mateu Giner, la Audiencia de Valencia había manifestado que de las 100 plazas sólo estaban cubiertas 78 útiles.⁹²¹ Sin embargo, hay que decir que, a pesar de esta disponibilidad de plazas reconocida por la Audiencia, ella misma no ordenaba ninguna incorporación. Finalmente fue admitido en el colegio —junto con los referidos pretendientes Joaquín Melchor Pinazo y Francisco Mateu Giner—, por junta de 13 de julio de 1825, y en base a las respectivas provisiones del Supremo Consejo.

En esta época llegaron a ser tantas las pretensiones de incorporación elevadas al Supremo Consejo, y tantas las correspondientes peticiones de informe que éste requería del colegio por medio del Real Acuerdo, que en junta de 13 de octubre de 1825 se resolvió lo siguiente:

...para evitar el perjuicio de admitirse a quantos lo soliciten en contravención a los estatutos y órdenes superiores, por no considerarse vacantes plazas algunas: se acordó se recurra al Consejo, solicitando no se altere ni perturbe al Colegio en la posesión de admitirse en casos de vacantes y de los derechos que le corresponde. Que se suspenda la admisión, creyendo aún hallarse en estado de nueva reducción...⁹²²

⁹²¹ A.I.C.A.V., caja 28, año 1825, expediente 1º, pág. 4.

⁹²² A.I.C.A.V., libro 7, pág. 18 B.

Pero las consiguientes provisiones del alto tribunal disponiendo la incorporación de abogados continuaron siendo numerosas,⁹²³ a pesar de que según la Junta las plazas útiles sobrepasaban las cien. En total fueron 26 los abogados que se colegiaron entre los años 1825 y 1826, trece en cada uno de ellos. Según consta en los expedientes de incorporación, en la mayoría de las solicitudes de incorporación remitidas al Supremo Consejo el pretendiente exponía a su favor la existencia de un cierto número de vacantes, según manifestación de la Real Audiencia en informes, que, a propósito de otros pretendientes anteriores, había remitido al supremo tribunal. En las primeras solicitudes se solía coincidir en el número de 22 vacantes,⁹²⁴ si bien Francisco Moltó Miralles llegó a decir en su solicitud de 12 de abril de 1825, que de los 127 colegiados no llegaban a 50 los que ejercían como profesionales.⁹²⁵ Por lo que se ve, la Junta del colegio y el Real Acuerdo no coincidían en el número de plazas útiles vacantes.

El 5 de julio de 1826, a propósito de la solicitud de incorporación de Vicente Martínez Peris, se declaró la existencia de sólo 8 vacantes, sin que sepamos exactamente de quién procede esta manifestación.⁹²⁶ Días más tarde, el 26 del mismo mes, la Junta recibió cuatro reales provisiones del Supremo Consejo ordenando la admisión de otros tantos pretendientes.⁹²⁷ Y el mismo día la Junta también recibió un decreto del mismo tribunal autorizando al colegio a admitir, para las cuatro plazas que quedaban, a aquellos aspirantes más antiguos y beneméritos que hubiera. La Junta acordó que todos los pretendientes acreditaran sus "méritos y ejercicios literarios", eligiéndose finalmente el 12 de agosto, de entre los once solicitantes que presentaron memorial, a Julián Ferrer, Gerónimo Amat, Juan Antonio Pérez y Tomás Montoliu.

En este punto destacaría el hecho de que no consten solicitudes de incorporación presentadas ante el Real Acuerdo, a pesar de que en estos

⁹²³ Una vez conseguida real provisión favorable, el pretendiente, presentando dicha provisión al colegio, le solicitaba la práctica de las diligencias requeridas para el ingreso.

⁹²⁴ A.I.C.A.V., véase, por ejemplo, José Guillem Gras, caja 28, año 1825, expediente 3, pág. 2 B; Pascual Falcó Marco, expediente 5, pág. 2 B; o Estanislao Lafora Giner, expediente 8, pág. 3.

⁹²⁵ A.I.C.A.V., caja 28, año 1825, expediente 6, pág. 2.

⁹²⁶ A.I.C.A.V., libro 7, pág. 34 B.

⁹²⁷ Vicente Martínez Peris, Francisco Palau, Joaquín Albert, y José Zacarés Velázquez.

momentos vemos que sí había plazas vacantes, y desde tiempo atrás así lo consideraban los pretendientes. No obstante, sí es cierto que, según la junta de 5 de julio de 1826, Juan Reguart obtuvo provisión del Supremo Consejo ordenando su admisión en la primera vacante que hubiera. Admisión que ordenó el Real Acuerdo dado que, como hemos visto, había ocho plazas libres. Es decir, que una vez dictada esta provisión por el Supremo Consejo se declararon ocho vacantes que fueron cubiertas por otros tantos abogados: cuatro designados por el propio Consejo, y las otras cuatro por el colegio por orden del Consejo. Y esto sin tener en cuenta que Juan Reguart ya había ocupado una de estas vacantes. Como se puede ver, era notoria la descoordinación entre todos estos organismos e incluso entre ellos mismos.

Tras todo esto parece ser que las 100 plazas útiles ya se encontraban de nuevo ocupadas, aunque desde el Consejo siguiera llegando alguna que otra provisión de incorporación.⁹²⁸ Más aún, en junta particular de 16 de diciembre de 1826 se leyó certificación del Supremo Consejo, por la que se mandaba al colegio admitir al letrado Manuel Pizcueta Donday en la primera vacante que ocurriese.⁹²⁹ Y en la misma junta se acordó admitirle en la plaza dejada por el fallecimiento de Pablo Font, ingresando con anterioridad a otros que ya tenían su real provisión de incorporación.

A partir de estos momentos el colegio ya no recibió casi ninguna orden de incorporación más del Supremo Consejo, siendo éstas concedidas a los aspirantes no en calidad de supernumerarios, sino para ocupar las siguientes vacantes que se produjesen.⁹³⁰ Ahora, ante las vacantes dejadas por fallecimiento, ascenso o ausencia de abogados colegiales, era la Junta la que elegía por votación a un mismo número de pretendientes que vacantes, de entre todos los que solicitaban el ingreso.⁹³¹ Sin que tampoco interviniese para nada el Real Acuerdo. En ocasiones, el elegido era el que gozaba de la

⁹²⁸ A.I.C.A.V., libro 7, juntas de 12 de agosto y 23 de septiembre de 1826, págs. 38 B y 45 B respectivamente. Se trata de los abogados Manuel García Mínguez, Luis García Mínguez —que finalmente no ingresó— y Pedro Pascual Calabuig.

⁹²⁹ A.I.C.A.V., libro 7, págs. 48 B-50.

⁹³⁰ A.I.C.A.V., libro 7, juntas de 19 de agosto de 1828 y 4 de agosto de 1829, págs. 73 y 83 respectivamente.

⁹³¹ A.I.C.A.V., libro 7, junta particular de 9 de febrero de 1828. Además véase las juntas de 14 de mayo y 18 de noviembre del mismo año, o de 17 de enero y 3 de febrero de 1828.

recomendación del Supremo Consejo, ya que este tribunal continuaba recibiendo solicitudes de ingreso.⁹³²

Tal vez por llevarse en estos momentos un control más estricto en cuanto a la cobertura de las 100 plazas útiles, empieza a darse la situación de que, admitido un colegial o habiéndose ordenado su admisión, la Junta le recuerde, cuando se retrasa, las obligaciones que aún le restan por cumplir para conseguir su completa incorporación.⁹³³ Hasta el punto de avisarle de que, de no hacerlo en el plazo que se le concede —de normalmente unos 30 días—, se consideraría de nuevo vacante su plaza. Existe incluso el caso de algún letrado al que se le tuvo que apercibir una segunda vez, concediéndole 15 días más.⁹³⁴ Para evitar estos abusos, la junta de 18 de noviembre de 1828 decide conceder en adelante a todos los futuros colegiales un plazo, de normalmente ocho días, para principiar las diligencias, y otro de treinta para concluirlos.⁹³⁵ Todo ello por entender que, de lo contrario, se causaría perjuicio a otros letrados que podrían obtener su plaza. Y aun a los mismos colegiales sobre quienes pesaban las cargas de la corporación.

Pero este control no impidió los acuerdos entre colegiales y letrados que pretendían serlo, mediante los que los primeros cedían su puesto a los segundos, como había ocurrido en otros momentos en que el acceso al colegio también era restringido. De cualquier forma, en esta etapa sólo conocemos dos casos. El primero es el visto en junta particular de 8 de enero de 1829, en la que se examinaron dos memoriales. Uno del colegiado Vicente Agulló González, que por aquel entonces contaba con 74 años, al que acompañaba una escritura de renuncia de su plaza, con la condición de que fuese provista en favor del abogado Francisco María Asensi Climent. El otro memorial lo presentó este último, y en él suplicaba a la Junta que se adhiriese a la renuncia del doctor Agulló en los términos propuestos. La propuesta fue admitida por unanimidad de votos.⁹³⁶ El segundo caso es el visto en junta de 4 de agosto

⁹³² A.I.C.A.V., libro 7, junta particular de 18 de noviembre de 1828, pág. 80 B-81 B.

⁹³³ A.I.C.A.V., libro 7, juntas particulares de 21 de julio de 1827, y 14 de mayo y 7 de octubre de 1828. Este retraso se refiere tanto al inicio de las pruebas como al cumplimiento de los trámites posteriores a la decisión de la Junta acordando la admisión.

⁹³⁴ Pedro Calabuig; A.I.C.A.V., libro 7, pág. 80 B.

⁹³⁵ A.I.C.A.V., libro 7, págs. 80 B-81 B.

⁹³⁶ A.I.C.A.V., libro 7, págs. 83-84.

del mismo año. En ella se vio la representación de Simeón Mayor Sellés, de 79 años, y de José Sanchis, por la que el primero renunciaba a su plaza del colegio con tal que se proveyese en favor del segundo, contestando la Junta que "a su tiempo", sin que se supiese más sobre este asunto.⁹³⁷ Esta diferente respuesta con respecto al caso anterior tal vez sea debida a que ya en esa misma junta se había tratado sobre la real orden de S. M., de 8 de julio, que a continuación vamos a ver.

El 4 de agosto de 1829 la Junta recibió oficio del secretario del Real Acuerdo, al que acompañaba la real orden de 8 de julio, por la que S. M. había resuelto que no se proveyeran las plazas vacantes ni las que vacaren en lo sucesivo. Al mismo tiempo, el monarca solicitaba informe a los regentes de las chancillerías y audiencias sobre el número fijo de que debían componerse los colegios de abogados de sus respectivas capitales, a fin de que en todos ellos no hubiera más que los que se pudieran mantener atendidas las circunstancias particulares de cada tribunal. De ahí, que incluso el mismo día cuatro de agosto la Junta acordara estarse a lo dispuesto en esta real orden, por lo que respectaba a las solicitudes de incorporación de Juan Jover Amat y José Rives Súnier. Y ello pese a haber obtenido dichos pretendientes real provisión del Supremo Consejo el 30 de junio pasado, ordenando su admisión en las dos primeras vacantes que se produjeran. Esta misma provisión establecía, además, que en lo sucesivo se tuvieran que proveer las vacantes por la antigüedad del título de abogado de los pretendientes.⁹³⁸

Pero aún llegó más lejos el Supremo Consejo, cuando por otra carta orden de 24 de diciembre solicitaba del Real Acuerdo

...le informe en el preciso término de un mes acerca de la conveniencia de la reducción del número de abogados de este territorio, sean o no colegiados, remitiendo una razón de los que haya en él, con distinción de si ejercen o no la abogacía, teniendo al efecto presentes los informes que evacuó sobre el particular, como así bien las variaciones que hayan ofrecido el tiempo y las circunstancias.⁹³⁹

⁹³⁷ A.I.C.A.V., libro 7, págs. 82 B-83.

⁹³⁸ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 124, folios 63 B y 524-525. Por otra parte, vemos como en junta de 28 de noviembre se deniega estas admisiones, no obstante haber fallecido algún colegial.

⁹³⁹ A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 125, fol. 4.

Es decir, ya no se habla sólo de una posible reducción de los abogados colegiados, sino de todos los del Reino.

Con respecto al informe requerido por el Supremo Consejo, el Real Acuerdo de Valencia a su vez lo requirió del colegio, el que contestó, por lo que a él respectaba, en los términos siguientes:

Que el número de abogados que en la actualidad componen este Colegio es de ciento y treinta. Que de éstos sólo ochenta y ocho consta a la Junta ejercen la profesión con estudio abierto, en la inteligencia que un cortísimo número de ellos despachan en una misma casa con otros abogados también del número, aunque más antiguos, y respectivamente se ayudan o auxilian, sin embargo de que cada uno tiene por separado sus negocios particulares, siendo los únicos que la Junta cree poder colocar hasta cierto punto, bien que no con rigor en la clase de auxiliares.

Que treinta y dos no ejercen la profesión por causas particulares, y diez tampoco la ejercen por razón de sus empleos y carácter.⁹⁴⁰

Por ello, la Junta informaba favorablemente al Real Acuerdo cuando éste le instaba informe sobre la petición de algún abogado colegial solicitando habilitación en favor de otro colegial residente en la capital, para que le tramitara asuntos propios.⁹⁴¹ Situaciones similares encontramos en otros colegios de abogados.⁹⁴²

Como observamos, desde el momento en que se instauró por primera vez el *numerus clausus* en el colegio, la Junta no mantuvo siempre el mismo criterio. En determinados momentos parece estar especialmente interesada en que se declare la existencia de plazas vacantes, mientras que en otros

⁹⁴⁰ A.I.C.A.V., libro 7, junta de 11 de febrero de 1830, págs. 105-106 B.

⁹⁴¹ A.I.C.A.V., libro 7, juntas particulares de 29 de noviembre de 1830, 21 de julio de 1831 y 25 de agosto de 1832.

⁹⁴² El colegio de Oviedo manifestó sobre la reducción de abogados que en su colegio no existía número fijo de individuos, fijando la Junta en 24 el número de los que consideraba necesarios. A pesar de tener que rechazar las incorporaciones solicitadas, también hay algún ingreso ordenado por el Real Acuerdo. Véase M. Corripio Rivero, *Historia del Ilustre...*, pág. 17. En el colegio de Las Palmas y en el año 1828, uno de sus miembros fijó en 8 el número de abogados que podían ejercer en la isla, uno menos de los que ejercían en esos momentos, por no permitir más su endeble economía. Según manifestación propia, la ciudad contaba con dieciséis ó diecisiete mil habitantes. Si a finales del siglo anterior la audiencia estimaba en 20 el número ideal de abogados del colegio, en estos momentos el colegio había reducido la cifra hasta 8, justificando este corto número por los malos tiempos que corrían. Véase J. M. Alzola González, *Historial del Ilustre...*, págs. 125-127. Para el colegio de Zaragoza, su Junta fijó en 30 el número de individuos que creía suficiente. La lista del año 1830 comprendía 60 ejercientes; véase L. del Campo Armijo, *El Real e Ilustre...*, págs. 36-37.

momentos no, considerando que las plazas útiles están más que cubiertas, y oponiéndose incluso al criterio del Real Acuerdo. El por qué de estos aparentes cambios de parecer pienso que debe radicar en la unión de muchas y variables causas, entre las que no se debe rechazar, incluso, los intereses profesionales de los miembros de la Junta.

En 1 de octubre de 1831 la Junta remite informe al Real Acuerdo sobre la solicitud de José Cadena —presentada ante el Supremo Consejo—, para que se le permitiese ejercer la abogacía en el colegio. Decía así:

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de esta ciudad ... cree podrá llenar aquel objeto con sólo recordar que por real orden de catorce de julio de mil ochocientos veinte y nueve, cumplimentada por V. E. en veinte del mismo mes, comunicada y obedecida por esta Junta en cuatro de agosto de aquel año, tuvo a bien S. M. mandar, entre otras cosas, que se dijese al colegio de abogados de Madrid no provehiese ninguna de las plazas vacantes y que vacaren en lo sucesivo, haciéndose el mismo encargo a los señores regentes de las chancillerías y audiencias del Reino, a fin de que en todos los colegios no haia más abogados que los que se puedan mantener, atendidas las circunstancias particulares de cada tribunal.

La Junta comprende que el ejercicio de la abogacía en este colegio a que aspira el Dr. Cadena es precisamente el primer objeto que se propone todo el que pretende la incorporación, y el punto en que termina el obtento de una plaza en el mismo, y en tal concepto parece que la pretensión de don José Cadenas está en oposición con lo resuelto por S. M. en la citada real orden y razón que la motivó.

De manera que la Junta entiende que don José Cadena no puede prometerse un buen éxito en su pretensión, mientras que no obtenga una real orden en que S. M., dispensándole una gracia especial, le excluía de aquella medida general. En cuio caso la Junta obedecerá y acatará como debe la voluntad del soberano.

Más la Junta faltaría a los principios de justicia, que forman el norte en sus deliberaciones, si en tales circunstancias dejara de poner en la consideración de V. E. que muchos abogados, no siendo de menos mérito que el Dr. Cadena y de más antigüedad, no han podido incorporarse en este colegio por la citada resolución de S. M. Concurriendo a más en algunos circunstancias atendibles y que les recomiendan, particularmente en los que han obtenido real provisión del Supremo Consejo, que V. E. cumplimentó en seis de julio de mil ochocientos veinte y nueve, en la que se manda a la Junta que les incorpore en las primeras vacantes que ocurran. A los cuales en concepto de la Junta se les irrogará un agravio si se les propusiere a Cadena.

La Junta, implicada en la rectitud e imparcialidad con que desea proceder, no ha podido prescindir, y ha creído como un deber elevar

al conocimiento de V. E. todos estos antecedentes, a fin de que en su vista resuelva como siempre lo más justo.⁹⁴³

Al final de este tercero y último período reduccionista podemos ver que se habían conseguido, de nuevo, los objetivos propuestos por la real orden de 30 de septiembre de 1794 y el decreto del Real Acuerdo de 14 de abril del año siguiente. Las manifestaciones del colegio en este sentido son constantes, y en cuanto a la lista, si en el año 1827-28 aparecían 133 abogados, en la de 1832-33 ya sólo lo hacían 116. Sin embargo, el número de abogados recibidos en el Real Acuerdo, por contra, había aumentado considerablemente: de 85 en el quinquenio 1820-24 se había subido a 119 abogados entre los años 1825-1829.

De noviembre de 1832 hasta junio de 1838

Dos son las disposiciones que configurarán este último período. Se trata de dos disposiciones que supondrán una fuerte transformación del papel que hasta este momento había desempeñado el colegio dentro del mundo de la abogacía en la ciudad de Valencia. Además, la segunda de ellas le vaciará, en gran medida, de muchas de las funciones que hasta entonces había tenido. Se trata de las siguientes normas:

1. Real cédula de S. M. la Reina de 7 de noviembre de 1832.⁹⁴⁴

El capítulo primero de esta real cédula, que da inicio a este quinto período, ordena la libre incorporación en los colegios de abogados de España de todos aquellos que lo soliciten, “concurriendo en él [el abogado] las circunstancias y cualidades necesarias y que las leyes exigen”. En la misma cédula se aclaraba que la real orden de 25 de noviembre de 1829, por la que se consultaba la posibilidad de fijar el número de abogados, tanto colegiados como no colegiados, dejaba de tener sentido. El motivo —según la cédula—, era que desde 1804 había ido disminuyendo progresivamente el número de

⁹⁴³ A.I.C.A.V., libro 7, págs. 132 B-133. Por los libros de deliberaciones no conocemos —si la hubo—, la decisión que sobre este respecto tomó el Supremo Consejo, si bien, José Cadena se incorporó en 1833, una vez finalizado este período reduccionista.

⁹⁴⁴ *Decretos del rey...*, XVII, págs. 272-275. A.R.V., *Real Acuerdo*, libro 127, fols. 72 y 265-269. A.I.C.A.V., libro 7, pág. 145 B.

letrados como consecuencia de las medidas restrictivas que al efecto se habían adoptado, entre ellas el rigor de los planes de estudio, de forma que “el número de abogados existentes en el día está en la debida proporción con las necesidades públicas y con las otras profesiones”. Y que así como éstas gozaban de entera libertad e independencia en su ejercicio, no era justo no practicar lo propio con la abogacía. Además, “y aun cuando fuese más excesivo, siempre son útiles al Estado en el concepto general de hombres de letras para el desempeño de otros destinos independientes de la Abogacía”.

De hecho, ese mismo mes de diciembre de 1832 fueron 27 los pretendientes que presentaron sus solicitudes, de los cuales 26 lograron ser admitidos en el mes siguiente. A partir de ahora las solicitudes y las admisiones serán continuas, de manera que en esta etapa fueron en total 73 los abogados que se colegiaron.

Recordemos que en agosto de 1836 se modificó el régimen de preguntas al que se sometía el pretendiente en el expediente de pruebas, a fin de acomodarlo a la nueva situación socio-política.

2. Decreto de 11 de julio de 1837.⁹⁴⁵

Mediante este importante decreto, que suponía el principio del fin de un sistema ya anquilosado en el tiempo, se rehabilitaba el otro decreto de Cortes de 8 de junio de 1823, por el que se permitía a todos los abogados el ejercicio de la abogacía sin la necesidad de incorporarse en ningún colegio de abogados. Hasta estos momentos el colegio de Valencia no había dado señal alguna de la existencia de esta última norma.

Por decreto de la Audiencia de Valencia de 23 de agosto de 1837, este tribunal accedía a la solicitud que en este sentido había presentado Antonio Rodríguez de Cepeda. Lo que se ponía en conocimiento del decano para los efectos convenientes que, entre otros, eran el de que se le repartiesen los turnos de pobres como a los abogados colegiales.⁹⁴⁶ Inmediatamente, el ejemplo de Rodríguez de Cepeda fue seguido por otros abogados.

⁹⁴⁵ A.I.C.A.V., libro 7, juntas de 28 de agosto ó 23 de septiembre de 1837, págs. 214-215 B y 217-218.

⁹⁴⁶ A.I.C.A.V., libro 7, junta de 28 de agosto del mismo año, pág. 214.

En base a esta práctica, el colegio acordó formar expediente del oficio referido y de los que en lo sucesivo se pasaren con igual objeto, a fin de que constase en todo tiempo quiénes eran los abogados que, no perteneciendo a la corporación, ejercían la abogacía en esta ciudad.

Tras la incorporación de José Pitarch Forest no se inscribió ningún colegial más en el libro de matrícula. La última junta en la que se acordó la admisión de abogados fue la de 9 de agosto de 1837,⁹⁴⁷ prácticamente un año antes de finalizar la vigencia de los primitivos estatutos. En ella se acordó la admisión de José María Zusausti y, precisamente, de Antonio Rodríguez de Cepeda, sin que ninguno de los dos se inscribiera finalmente en el libro de matrícula.

Hasta el final de este período fueron en total 11 los abogados que, sin colegiarse, fueron habilitados por la Audiencia para ejercer en la capital.⁹⁴⁸

En junta de 23 de septiembre de 1837 se vio un caso particular. Pascual M^a Estruch había presentado al colegio papeleta librada por el secretario del ayuntamiento de Valencia en la que éste manifestaba que, conforme a lo prevenido en el artículo primero del real decreto de 20 de julio de 1837, Pascual Estruch había presentado al alcalde primero constitucional su título de abogado para ejercer la profesión en esta ciudad. En la misma junta el decano hizo presente que, al presentarle dicha papeleta, el interesado le había manifestado que su oficio era despachar sólo algunos negocios propios, y que por ello expresaba no se le repartiesen turnos. La Junta quedó enterada sin que sepamos nada más al respecto.⁹⁴⁹

Pero pronto comienzan a surgir los primeros problemas, cuando en junta de 12 de enero de 1838 se hace constar que algunos abogados, sin haber obtenido la oportuna habilitación de la Audiencia, ejercían la facultad sin, por lo tanto, soportar las cargas que iban anejas a ella, como era la defensa de las causas de pobres. Y ello por no estar incluidos en la lista de turnos que llevaba el decano. Por este motivo se acordó hacer presente este abuso al

⁹⁴⁷ A.I.C.A.V., libro 7, págs. 213-214.

⁹⁴⁸ A.I.C.A.V. libro 7, Antonio Rodríguez de Cepeda, pág. 214; Joaquín María Insausti Lazo de Vega y Ángel Azopando, pág. 217; Joaquín Palanca Gutiérrez, pág. 218; José Sanz Flores, pág. 220; José María Marqués y José García Fortea, pág. 221; Salvador Catalá, pág. 221 B; y Paulino Oliver Mestre, Francisco Campos García y Joaquín Sebastiá, pág. 222.

⁹⁴⁹ A.I.C.A.V., libro 7, págs. 217-218.

tribunal, para que ordenase a los escribanos de los juzgados de esta ciudad, que no admitiesen escrito alguno de abogado que, no siendo del colegio, no hubiese obtenido la habilitación de la Audiencia y la hubiese presentado al decano, para que la anotase en la lista de repartimiento de causas de pobres. No conocemos como se resolvió el asunto, puesto que inmediatamente entraron en vigor los nuevos estatutos de 1838.

CAPÍTULO VII: PERFIL DE LOS COLEGIADOS

Edad

Dividiré este estudio en dos apartados. El primero, referido a la edad que tenían los abogados en cada uno de los tres pasos vistos que debían dar para colegiarse: graduación, recibimiento en los tribunales, e ingreso en el colegio. El segundo, referido a la media de edad que tenían los colegiados en algunos de los años más significativos de los 76 en que estuvieron vigentes los primeros estatutos.

En cuanto al primer estudio, previamente debo explicar el método que he seguido, y las premisas de que me he servido en su elaboración.

Los datos de que dispongo los he obtenido de los expedientes de incorporación en el colegio, y de los libros de grados de las universidades de Valencia y Gandía.⁹⁵⁰ En aquellos expedientes consta la fecha de nacimiento de cada colegiado, la de aprobación como abogado por los tribunales, y la de ingreso en el colegio. En los libros de grados consta la fecha en que los abogados se graduaron. Y aquí debo hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, que los resultados que obtengamos, aunque muy aproximados, no podrán ser del todo exactos, ya que no conocemos los datos de todos los colegiados. Por una parte, no disponemos de todos los expedientes de incorporación, y por otra, en muchos de ellos falta alguna de las fechas, con lo que las medias no están obtenidas siempre con el mismo número de abogados para cada una de las cifras resultantes. Esto es, hay abogados que son tenidos en cuenta para todos los cálculos, y hay otros que sólo para algunos. La segunda aclaración es que, cuando hablamos de la graduación siempre nos referimos a la primera, es decir, a la de bachiller, y ello por dos razones: porque hasta entrado el siglo XIX éste era el grado que bastaba para recibirse;

⁹⁵⁰ A.I.C.A.V., *Expedientes Pruebas de Ingreso*, cajas 11-31; A.U.V., *Libros de Grados y Libros de Priorato*, núms. 66-77 y 89-90; y A.M.V., libros g-1 a g-8.

y, en segundo lugar, porque, como vimos en su momento, en los planes de estudio de este último siglo el grado de licenciatura exigido para abogar podía ser substituido por el cumplimiento de otros requisitos. Además, cuando algún abogado tenía el bachiller en ambos derechos he tomado en consideración el primero en el tiempo. Finalmente, los resultados aparecen en años y meses.

Este estudio ha sido, a su vez, dividido en dos apartados o cuadros, distinguiéndose entre los abogados incorporados con anterioridad, y los que lo hicieron con posterioridad a la aparición del *numerus clausus*. Esta división, como vamos a ver, obedece a las inevitables consecuencias que el cierre de las puertas del colegio conllevó en los resultados.

En el primer cuadro vemos cómo entre la edad de obtención del primer grado y el recibimiento del abogado transcurrían al menos cuatro años, que eran los exigidos para la pasantía, y entre el recibimiento y la colegiación al menos unos pocos meses, que era lo que solía durar la tramitación del expediente de incorporación. Los intervalos de tiempo que hemos obtenido en ambos casos son ligeramente superiores, ya que hay muchos abogados que se recibieron tras muchos años de graduarse, o se colegiaron tras muchos años de recibirse. Casos, por ejemplo, de Mariano Tortosa, que se graduó a los 26 años y se recibió a los 36, o de Gerónimo Francisco Nieto, que se graduó a los 20 años y se recibió a los 33. O, por otra parte, nos constan los casos de Francisco Almerich o José Lasala, que se colegiaron 3 años y 4 meses —el primero—, y 5 años —el segundo—, después de recibirse. Crisanto Sellés y José Ibarra son dos casos extremos. Pasaron 14 años y 6 meses —para el primero—, y 20 años y 1 mes —para el segundo—, entre el recibimiento y la colegiación. Ambos lo hicieron en 1794, seguramente sabedores del inmediato cierre de las puertas del colegio. De hecho, José Ibarra en ese momento era alcalde mayor de Sanlúcar la Mayor, y otorgó poderes al abogado José González para que en su nombre solicitara la incorporación.

Primer Cuadro

<u>Años</u>	<u>Nº abog.</u>	<u>Edad 1º grado</u>	<u>Recibmto.</u>	<u>Colegón.</u>
1762-64	26	21'7	27'1	27'8
1765-69	57	21	25'8	26'4
1770-74	60	20'10	25'9	26'11
1775-79	78	21'2	25'7	26'3
1780-84	65	20'6	25	26'5
1785-89	54	21'8	25'11	27'3
1890-94	81	21'7	26'6	28
1795-99	1	19	24	28
<hr/>				
Total	422	21'2	25'11	27.

Segundo Cuadro

<u>Años</u>	<u>Nº abog.</u>	<u>Edad 1º grado</u>	<u>Recibmto.</u>	<u>Colegón.</u>
1810-14	49	20'10	26'8	32'6
1815-19	39	22'8	27'3	33'5
1820-24	19	23'5	24'5	28'1
1825-29	41	22'5	26'6	29'8
1830-34	47	20'8	25'7	28'3
1835-38	26	20	25'10	28
<hr/>				
Total	221	21'9	26'2	30'3.

A simple vista observamos cómo la media para cualquiera de las tres edades es superior en el segundo cuadro. Pero la diferencia más significativa reside en el intervalo transcurrido entre el recibimiento y la colegiación. Mientras que en el primer cuadro apenas supera el año, en el segundo es

superior a los cuatro.⁹⁵¹ La razón es obvia: los periodos en que las puertas del colegio estaban cerradas obligaban a retrasar el ingreso de los abogados durante varios años, cosa que se apreciaba especialmente en los primeros lustros.

Hasta la real orden de 8 de junio de 1826 la edad exigida para abogar era la de 17 años, según *Partidas*, y de 26 según la *Nueva Recopilación*. Aquella disposición se cumplía, pues no tenemos datos de ningún abogado recibido con anterioridad a los 17 años, pero la *Recopilación* no se cumplía en absoluto. La edad en la que ya era habitual recibirse era a los 23 años. Me consta que al menos 18 colegiados se recibieron a los 22 años. Dos se recibieron a los 21 años y otros dos a los 20.⁹⁵² Tras la real orden señalada no

⁹⁵¹ Esto lo podemos observar aún mejor en los siguientes cuadros. Como he explicado, todos los resultados han sido obtenidos en base a los datos que conocemos de cada abogado, por lo que no se puede establecer un exacto paralelismo entre todos los resultados finales, de ahí que éstos no coincidan plenamente con los de los cuadros anteriores. En el primer cuadro he distinguido dos bloques. El "A" comprende a todos los colegiados para los que conocemos tanto la fecha de recibimiento como la de ingreso. El "B" sólo comprende, de éstos, a aquellos en que este intervalo de tiempo no sobrepasa los doce meses (considerado como tiempo más que prudente para tramitarse el expediente), y que comprende el 75% de todos los colegiados. La razón de esta distinción es que la existencia de algunos abogados que, tras recibirse, dejan pasar muchos años hasta la colegiación, distorsionan las medias. El bloque B no aparece para el segundo período como consecuencia del *numerus clausus*.

Años	"A"	"B"
1762-64	5 meses, 12 días.	3 meses, 24 días.
1765-69	8 m., 11 d.	4 m., 6 d.
1770-74	19 m., 5 d.	3 m., 23 d.
1775-79	10 m., 28 d.	3 m., 14 d.
1780-84	22 m., 7 d.	4 m., 16 d.
1785-89	16 m., 2 d.	4 m., 7 d.
1790-94	18 m., 40 d.	2 m., 29 d.
1795-99	40 m.	
Media	15 meses, 11 días.	3 meses, 24 días.
.....		
1810-14	6 años.	
1815-19	5 a., 6 meses.	
1820-24	1 a., 11 m.	
1825-29	3 a., 3 m.	
1830-34	2 a., 7 m.	
1835-38	2 a.	
Media	3 años, 10 meses.	

⁹⁵² Respectivamente, Carlos Ferrer Olmos y José Sanz López —incorporados en los años 1784 y 1813—; y Joaquín Mariano Boil y Mariano Parra Blat —incorporados en los años 1769 y 1813—.

aparece ningún colegiado recibido antes de los 25 años, que era la edad que esta norma exigía, salvo alguna rara excepción.⁹⁵³

En cuanto al segundo estudio, sobre la media de edad de los colegiados en distintos momentos de la vigencia de los estatutos, también creo que debo hacer alguna referencia al método que he seguido y a las dificultades con las que me he encontrado, así como a las premisas de las que he tenido que partir. En primer lugar, no hay constancia segura del momento del fallecimiento de los colegiales, como único motivo que causa la baja cierta en la corporación. En segundo lugar, cuando Joaquín Salelles Villar juró como colegial en 1762, 221 abogados ya se encontraban incorporados en virtud del estatuto XIX, es decir, sin haber pasado previamente por la práctica de las pruebas, lo que impide conocer sus fechas de nacimiento. Y, en tercer lugar, y como consecuencia del primer problema, no sabemos —ni siquiera aproximadamente—, cuántos y quiénes eran los abogados colegiados en cualquier año en concreto. Tan sólo conocemos los que aparecían en la lista que se confeccionaba anualmente, con todas las incertidumbres que, como ya hemos visto, envuelven a estos registros. Con estas premisas, es obvio que cualquier resultado al que lleguemos no será más que orientativo.

De cualquier manera, y siempre utilizando como punto de partida las listas de que disponemos, he hallado en estas condiciones la edad media de los colegiados en siete distintos y significativos momentos:

1) 1795. La lista redactada el 14 de enero de este año contenía 218 colegiados, de los que conocemos la edad de 150. De los 68 restantes, 31 se incorporaron directamente sin pruebas en 1762, y 37 después, si bien faltan sus expedientes o, en ellos, las fechas de sus nacimientos. Así pues, la media para aquéllos es de 38 años y 8 meses. Hay que tener en cuenta que, de conocer la fecha de nacimiento de aquellos 31 abogados esta media sería, indudablemente, algo mayor.

⁹⁵³ Bernardo Ansaldo Ferrarao, colegiado en 1833, fue recibido en el Real Acuerdo de Valencia el 14 de mayo de 1830, habiendo nacido el 30 de julio de 1805. Y Rafael M^a Carsi Carrasco, colegiado en el mismo año, fue recibido por el Supremo Consejo en 1831, faltándole 9 días para cumplir los 25 años.

2) 1808. El 14 de noviembre se confeccionó la lista. En ella el número de colegiados había descendido a 129, como consecuencia del conocido *numerus clausus*. De ellos conocemos la edad de 97. De los restantes sólo cinco se habían incorporado sin pruebas, con lo que la media apenas aumentaría ligeramente. En concreto había subido a 51 años y 2 meses. El aumento con respecto a la cifra anterior es más que evidente.

3) 1814. La lista de 18 de mayo de este año se sitúa al final del período de libre incorporación iniciado en 1811. Conocemos la edad de 92 de los 109 individuos que aparecen en la lista, y de los restantes tan sólo quedaban dos de los incorporados sin pruebas. Para aquéllos la media se situaba en 48 años y 7 meses. No obstante, esta cifra hubiera sido todavía menor si se hubiera producido algún ingreso durante la ocupación francesa.

4) 1820. 124 abogados aparecen en la lista de 5 de febrero de este año. Para los 108 abogados de los que conocemos la fecha de nacimiento — de los restantes todavía uno era de los incorporados sin pruebas—, la media se situaba en 49 años. Aunque esta lista se sitúa al final de los seis años en que las puertas del colegio estuvieron cerradas, durante este período se produjeron muchas incorporaciones en virtud de disposiciones del Real Acuerdo y del Consejo de Castilla, manteniéndose constante el número de individuos en lista. Este número es similar al anterior, de ahí que la media de edad apenas experimentase cambios.

5) 1823. La lista de 16 de enero de este año comprende 114 abogados, de los que conocemos la edad de 100. A pesar de que durante el trienio constitucional las puertas del colegio estuvieron abiertas, sólo se produjeron 16 incorporaciones. Por ello la media de edad apenas descendió; en concreto era de 48 años y 9 meses.

6) 1832. La lista de 2 de octubre de este año recogía 116 letrados, de los que conocemos la edad de 95, siendo su media de 45 años y 7 meses. Aunque nos situemos tras nueve años de *numerus clausus*, los incorporados

por orden de la Audiencia o del Consejo habían logrado mantener más o menos constante el número de abogados desde muchos años atrás y, por lo tanto, su media de edad.

7) 1836. La lista de 26 de octubre de este año ya recogía, tras casi cuatro años de libre incorporación, 161 individuos, de los que conocemos la fecha de nacimiento de 142, para los que la media de edad había descendido a 39 años y 4 meses.

En resumen, estas serían las edades para cada año:

Años:	1795	1808	1814	1820	1823	1832	1836
Edad:	38'8	51'2	48'7	49	48'9	45'7	39'4

Procedencia geográfica

En este apartado intentaré dar una visión sobre la naturaleza o procedencia geográfica de los colegiados, al tiempo que ensayaré varias conclusiones sobre los datos obtenidos.

Pero en este estudio no nos detendremos en 1838, sino que tendremos en consideración a todos los abogados incorporados durante el primer siglo de existencia del colegio, es decir, desde 1762 hasta 1861.

Las fuentes de que me he servido son fundamentalmente dos: los expedientes de incorporación y los libros de matrículas.⁹⁵⁴ Como ya hemos visto, los expedientes de incorporación tenían como misión principal la elaboración de un informe, en el que se debía acreditar, entre otros extremos, que

...así los pretendientes, como sus padres y abuelos paternos y maternos, sean y haian sido christianos viejos limpios de toda mala infección y raza, sin nota alguna de moros, judíos ni recién convertidos a nuestra santa fee católica... (estatuto XVII).

⁹⁵⁴ A.I.C.A.V., cajas 11 a 31, y libros 1 y 2.

Esta limpieza de sangre se probaba a través de los *motes* o partidas de bautismo que aportaban los pretendientes, en donde constaba la parroquia y población donde el bautismo se había celebrado. Pero había abogados a los que se les eximía del informe y de la referida limpieza de sangre: aquellos que en el momento de la aprobación de los estatutos ya estaban recibidos o estaban realizando la pasantía. Para estos abogados es el libro de matrículas el que me ha proporcionado la información. Del mismo libro me he servido también para aquellos abogados que ingresaron con expediente pero que no ha llegado hasta nosotros, y para los admitidos tras la entrada en vigor de los nuevos estatutos de 1838, puesto que en los nuevos expedientes de incorporación ya no se exige la limpieza de sangre, y normalmente no aparece el lugar del que eran naturales.

Del siglo XVIII conocemos la procedencia geográfica de la mayoría de los abogados que ingresaron una vez aprobados los estatutos, —349 de 422, esto es, el 82'70 %—, mientras que sólo la conocemos de algo más de la mitad de los que ya ejercían en este momento, —122 de 221, esto es, el 55'20 %—. El motivo es que el libro de matrículas no constituye un documento exhaustivo ni metódico en este siglo, eludiendo para el caso de ser el abogado natural de la ciudad de Valencia, la parroquia en la que había nacido. Por el contrario, del siglo XIX conocemos la naturaleza de 991 abogados de los 1.014 que en total se colegiaron, esto es, el 97'73 %.

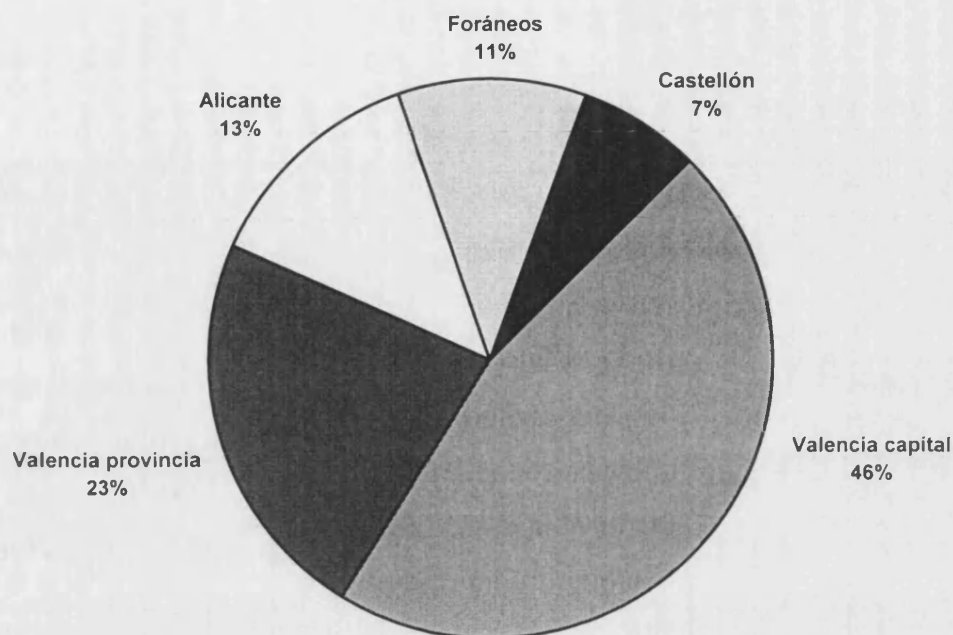
Los primeros resultados generales son los que aparecen en el siguiente cuadro:

CUADRO I. Origen de los abogados colegiados.

Origen	Habitantes en 1787*		Abog XVIII		Abog XIX	
Valencia cap.	68.548	8'77%	210	44'58%	468	47'22%
Valencia prov.	314.474	40'23%	105	22'29%	227	22'90%
Alicante	242.088	30'97%	73	15'49%	118	11'90%
Castellón	156.491	20'02%	51	10'82%	52	5'24%
Foráneos			32	6'79%	126	12'71%
Total	781.601	99'99%	471	99'97%	991	99'97%

*Fuente: Elaboración propia en base al censo de Floridablanca en J. E. Castelló Traver, *El País Valenciano en el censo de Floridablanca. Análisis demográfico, organización y presentación de los datos locales*, Valencia, 1794, págs. 155-470.

Procedencia conocida de 1.462 colegiados entre 1762 y 1861



En base a la información así obtenida varios son los puntos que he creído interesante destacar:

1. El indiscutible peso que tiene la ciudad de Valencia en el conjunto del país, en dos aspectos diferentes:

A) En primer lugar, como núcleo en el que ejerce la abogacía —o podía ejercerla—, la casi mitad de los letrados del país. Así, frente a 894 graduados que fueron recibidos como abogados por el Real Acuerdo de Valencia entre los años 1762 y 1794,⁹⁵⁵ 421 ingresaron en el colegio, lo que vendría a suponer un 47.09 % de aquéllos.⁹⁵⁶ Para el período comprendido entre los años 1.810 y 1.835, fecha en que desaparece el Real Acuerdo, frente

⁹⁵⁵ A.R.V., *Real Acuerdo*, I-D, 7 y 8. De 1794 data el decreto del Real Acuerdo de 24 de noviembre por el que, en virtud de carta orden del Consejo, se suspendía la admisión de colegiales.

⁹⁵⁶ Se trata de una cifra meramente aproximativa, puesto que de los 421 incorporados durante estos años hay constancia de que al menos 30 fueron recibidos como abogados por el Consejo

a un total de 654 aprobados⁹⁵⁷ se colegiaron 207 abogados, lo que supondría un 31.65 %.⁹⁵⁸ Este notable descenso con respecto a la centuria anterior se debe a las trabas vistas que se impusieron a la libre incorporación en el colegio durante los períodos absolutistas.

Para mejor constancia de lo visto en este apartado centraré el análisis en dos fechas en concreto, una para cada siglo.

La primera es 1787. En este año, según el censo de Floridablanca, la población de la capital era de 68.548 habitantes,⁹⁵⁹ frente a un total de 812.174 habitantes para conjunto del país.⁹⁶⁰ Mientras que para el conjunto del País Valenciano —exceptuando la capital—, había un total de 526 abogados,⁹⁶¹ esto es, uno para cada 1.413 habitantes, en la capital el número de letrados ascendía a 264,⁹⁶² o sea, uno por cada 259 habitantes. La lista de colegiados de este año contiene 226 individuos, es decir un abogado por cada 303 habitantes. La no coincidencia en el número de abogados entre ambas fuentes es probable que se deba a que en el censo de Floridablanca aparecen todos los letrados residentes en Valencia, estén o no colegiados. De cualquier manera, la disparidad de cifras, sea cual sea el punto de referencia, queda más que manifiesta.

La otra fecha de referencia es 1860. Para este año la población del país ascendía a 1.275.731 habitantes, de los que 107.703 residían en la capital.⁹⁶³ En la lista de este año aparecen 515 abogados,⁹⁶⁴ de los cuales sólo 174 ejercían la profesión, es decir, uno por cada 209 ó 618 habitantes, respectivamente. Mientras, en el conjunto del país, exceptuando la capital,

de Castilla u otros reales acuerdos, y de los 894 aprobados en la Audiencia de Valencia no sabemos cuantos ejercieron la abogacía fuera del país.

⁹⁵⁷ A.R.V. *Real Acuerdo* I-D, 10-12.

⁹⁵⁸ Se trata también de una cifra aproximativa puesto que de los 207 incorporados al menos otros 30 fueron aprobados por el Consejo de Castilla u otros reales cuerdos.

⁹⁵⁹ J. E. Castelló Traver, *El País Valenciano en el censo de Floridablanca (1787) Análisis demográfico, organización y presentación de los datos locales*, Valencia, 1789, pág. 94.

⁹⁶⁰ Según los actuales límites geográficos, es decir incluyendo las poblaciones de la Plana de Utiel y Villena y Sax. *Censo español executado de orden del rey comunicada por el excelentísimo señor conde de Floridablanca, primer secretario de estado y del despacho, en el año de 1787*. Pág. XXV. J. E. Castelló Traver, *El País Valenciano ...*, págs. 29 y 30.

⁹⁶¹ J. E. Castelló Traver, *El País Valenciano ...*, págs. 155-470.

⁹⁶² J. E. Castelló Traver, *El País Valenciano ...*, págs. 312-323.

⁹⁶³ *Censo de la población de España, según el recuento verificado en 25 de diciembre de 1860 por la Junta General de Estadística*, Madrid (Imprenta Nacional), 1863, págs. 765 y 624, respectivamente.

existían 718 abogados,⁹⁶⁵ por lo tanto uno por cada 1.626 habitantes. La diferencia continua siendo notoria.

B) El segundo motivo por el que destaca la ciudad de Valencia es como población de la que son originarios la mayoría de los abogados.

Para el siglo XVIII, nacieron en Valencia el 46'41 % de los colegiados recibidos tras la aprobación de los estatutos.⁹⁶⁶ Y con respecto al total de los colegiados en este siglo, con pruebas de limpieza de sangre o sin ellas, nacieron en Valencia el 44'58 %.⁹⁶⁷

En cuanto al siglo XIX, de los 1.014 incorporados entre los años 1810 y 1861 conocemos la naturaleza de 991 —el 97'73 %—, de los cuales 468 nacieron en Valencia, esto es, el 47.22 %. Cifra similar a la anterior. Aquí podemos distinguir entre antes y después de los estatutos de 1838. Hasta esta fecha eran nacidos en Valencia el 57'72 % de los colegiados, y después bajó la cifra hasta el 44'22 %.⁹⁶⁸

Pero, paralelamente a esta segunda nota, se llega a la no menos importante conclusión de que la ciudad de Valencia no sólo era lugar en el que nacían, y centro en el que desarrollaban su trabajo la casi mitad de los abogados del país, sino que —y esto es destacable—, era importante centro receptor de abogados nacidos fuera de ella. Así, los letrados que ejercían en la ciudad de Valencia habían nacido mayoritariamente en otras poblaciones. Para el siglo XVIII, 187 nacidos fuera frente a 162 nacidos en la ciudad, por lo que atañe a los incorporados mediante pruebas, lo que supone un 53'58 %; y 261 frente a 210, con respecto al total de los incorporados, lo que supone el 55'41 %. Y en cuanto al siglo XIX, 523 de 991, lo que supone un 52'77 %.

Por lo tanto, la atracción que ejercía la capital sobre los abogados de todo el país era más que evidente. No en vano Valencia, además de su importancia demográfica, aparecía como gran metrópoli y capital administrativa indiscutible, así como sede de los más importantes juzgados —la Audiencia—,

⁹⁶⁴ A.I.C.A.V., libro de listas 89.

⁹⁶⁵ *Censo de la Población de España...*, pág. 765.

⁹⁶⁶ Es decir, el 46'41 % de los 349 abogados cuyo origen geográfico conocemos de los 422.

⁹⁶⁷ Es decir, el 44'58 % de los 471 abogados cuyo origen conocemos de los 643.

⁹⁶⁸ Hasta 1837 conocemos la procedencia geográfica de 220 de los 221 incorporados (el 99'54 %). De 1838 a 1861 la conocemos de 771 de los 793 incorporados (el 97'22 %).

en donde se resolvían la mayor parte y las más importantes contiendas judiciales.

No olvidemos tampoco que el siglo XVIII es una época de fuerte crecimiento demográfico general, y testigo de una importante corriente migratoria del campo a la ciudad, siendo Valencia la principal receptora de esta masa de población. También la primera mitad del XIX, aunque de forma más lenta, presenta un crecimiento continuo.⁹⁶⁹

De esta forma, la mayor necesidad de abogados en la capital, y también la creencia por parte de éstos de la existencia de mejores perspectivas, actuarían como imanes de atracción. Según el censo de Floridablanca, el 33.41 % de los abogados de todo el País Valenciano residían en 1787 en Valencia.⁹⁷⁰ En el mismo sentido, en 1849 Pascual Madoz recogía, para la ciudad de Valencia, 108 abogados considerados por la Administración como sujetos a contribución en concepto de industriales, frente a 123 para el resto de la provincia.⁹⁷¹ Parecida proporción encontramos en las restantes actividades o estados privilegiados: empleados con sueldo del rey, escribanos, hidalgos, etc.

En el análisis de las diferentes parroquias de donde eran originarios los abogados nacidos en la ciudad de Valencia (Cuadro II), observamos cómo en el siglo XVIII, si bien hay representación de todas ellas, no hay una correspondencia entre las parroquias más populosas y las que ven nacer a un mayor número de futuros letrados. Así por ejemplo, las parroquias de San Pedro y de San Bartolomé, que eran de las menos pobladas de la ciudad, eran las parroquias en las que más abogados nacían. Mientras, la de San Martín, que era con diferencia la más populosa, no era la que veía nacer a más. En este punto parece confirmarse que la profesión de abogado seguía considerándose, en cierta medida, noble y propia de esta clase, que vivía preferentemente en los barrios cercanos a la catedral. Como veremos más adelante, cuando analicemos el *Libro Padrón*, en aquellas dos parroquias encontraremos la mayoría de los domicilios de los abogados y de sus

⁹⁶⁹ P. Pérez Puchalt, *Geografía de la población valenciana*, Valencia, 1976, págs. 36-41.

⁹⁷⁰ J.E. Castelló Traver, *El País Valenciano...*, pág. 99.

⁹⁷¹ P. Madoz, *Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar*, 16 tomos en 11 vols., Madrid, 1848-1850, XV, pág. 353.

despachos profesionales. También es cierto que la localización de estos domicilios, y sobre todo de los despachos, vendría claramente determinada por la proximidad a la Audiencia, que se encontraba en este lugar.

Para las demás parroquias sí parece existir una cierta correlación, siendo la de San Esteban y la de los Santos Juanes de las más habitadas y, por lo tanto, de las que más abogados aportaban, aunque la primera de ellas, pese a ser notablemente menor en el número de habitantes que la segunda, da origen a un mayor número de abogados. En cuanto al papel de las menos habitadas —véase San Salvador o San Lorenzo—, es poco más que testimonial. Más tarde, en el XIX, parece que se corrigen estos desequilibrios, y son las parroquias más populosas las que mayor número de colegiales aportan, especialmente la de Santos Juanes (Cuadro II). Posiblemente —y como veremos en el apartado *Extracción social*—, es la burguesía comercial la más interesada ahora en esta profesión.

CUADRO II. Distribución por parroquias de los abogados colegiados nacidos en la ciudad de Valencia.⁹⁷²

Parroquias	Hab. 1787	Abog. XVIII		Abog. XIX	
San Pedro	1.892— 2'97%	22	13'92%	8	7'01%
San Esteban	7.397—11'62%	22	13'92%	8	7'01%
Santos Juanes	12.592—19'79%	21	13'29%	27	23'68%
San Bartolomé	2.259— 3'55%	19	12'02%	8	7'01%
San Martín	14.391—22'62%	18	11'39%	18	15'78%
Santo Tomás	2.055— 3'23%	10	6'32%	3	2'63%
Santa Cruz	5.230— 8'22%	10	6'32%	8	7'01%
San Andrés	6.291— 9'89%	9	5'69%	8	7'01%
San Nicolás Obispo	2.460— 3'86%	9	5'69%	8	7'01%
Santa Catalina	3.610— 5'67%	6	3'79%	11	9'64%
San Miguel	3.343— 5'25%	6	3'79%	2	1'75%
San Lorenzo	1.151— 1'80%	4	2'53%	3	2'63%
San Salvador	937— 1'47%	1	0'63%	1	0'87%
Hospital General		1	0'63%	1	0'87%
Total	63.608	158	99.93%	114	99.91%

⁹⁷² Para los habitantes véase J. E. Castelló Traver, *El País Valenciano* ..., págs. 312-323. En cuando a los abogados, se trata de cifras relativas a los colegiados mediante expediente de incorporación desde 1762 hasta 1837, puesto que son los únicos de los que conocemos la parroquia en la que nacieron: 158 de 164 nacidos en Valencia, con respecto al siglo XVIII, y 114 de 129 para el XIX. Para los colegiados bajo la vigencia de los estatutos de 1838, al no aportarse partida de bautismo, no conocemos más que su población de origen.

2. El segundo punto a destacar sería la importancia proporcionalmente menor, y por este orden, del número de colegiados nacidos en las actuales provincias de Valencia, Alicante y Castellón, en relación con la cifra total de sus habitantes; excluyendo para la provincia de Valencia los habitantes de su capital, y comprendiendo, por el contrario, para el caso de las provincias de Alicante y Castellón, los habitantes tanto de su capital como los de sus comarcas (Cuadro I y Apéndice).⁹⁷³

La importancia de los pueblos de la provincia de Valencia se mantendrá más o menos estable durante toda la centuria estudiada (el 22'29 % en el siglo XVIII, el 19'09 % hasta 1838, y el 23'99 % desde este año hasta 1861). Sin embargo, no ocurre lo mismo con las otras dos provincias. Mientras que durante la primera parte del XIX bajan drásticamente sus porcentajes, a partir de 1838, y a pesar de la fundación de sendos colegios en sus capitales, no se producirá un descenso en la colegiación de sus abogados, sino más bien todo lo contrario. Para el caso de Alicante del 15'49 % de los colegiados en el XVIII se pasa al 8'18 % en el primer período del siglo siguiente, y al 12'97 % desde 1838 hasta 1861. En el caso de Castellón el aumento es insignificante, del 5 al 5'31 %, mientras que en el XVIII el porcentaje era del 10'82 %. La explicación pasa, a mi entender, por el hecho de que el cierre del colegio empujó a estos abogados a establecerse en sus poblaciones y a desistir del ejercicio en la capital.

3. El tercer punto sería el escaso número de abogados colegiados que proceden de fuera del País Valenciano, pues en el siglo XVIII tan sólo 32 de los 471 colegiados de procedencia conocida —es decir el 6'79 %—, han nacido más allá de sus fronteras. Si bien, en el siglo siguiente se duplican estas cifras: 126 de 991 colegiados de origen conocido—lo que supone el 12'71 %—. De estos 126 foráneos, 104 se colegiaron vigentes ya los estatutos de 1838, lo que supone el 13'48 % de los colegiados durante este período,

mientras que sólo 22 lo hicieron hasta ese año, lo que supone el 10 %. Aunque se trate de un porcentaje bajo con respecto al total, vemos que es creciente con el tiempo (Cuadro I y Apéndice).

De cualquier manera, parece ser que algunos de estos letrados foráneos no lo eran tanto. Es decir, aunque no habían nacido en el país, sus padres sí eran valencianos, lo que indicaría que accidental o temporalmente se encontraban fuera. Por otra parte, la mayoría de ellos se graduaron en la universidad de Valencia. En cuanto al siglo XVIII conocemos la ascendencia de 19 de estos letrados, de los cuales cuatro tenían padres valencianos, mientras que los padres de los otros 15 eran oriundos de su misma población. De los 19, once se habían graduado en Valencia, tres en Gandía y uno en Cervera. No conocemos la graduación de los otros cuatro, pero es posible que no se graduaran en universidades valencianas. De los 22 nacidos en el siglo XIX hasta 1838 nos consta que, al menos, 14 se graduaron en Valencia.

Concretando los orígenes, en conjunto destacan por su número los oriundos de los territorios vecinos al de Valencia. Así, el 58'83 % procede de las actuales provincias de Castilla-La Mancha (especialmente Cuenca y Albacete), de Aragón, de Cataluña, y —de forma destacada—, de Murcia. Los demás proceden del resto de la península o incluso del extranjero (Cuadro III y Apéndice).

CUADRO III. Origen de los colegiales nacidos fuera del País Valenciano.

Origen	Abogados	
Castilla-La Mancha	27	17.08%
Aragón	25	15.82%
Cataluña	24	15.18%
Murcia	17	10.75%
Andalucía	14	8.86%
Castilla-León	11	6.96%
Baleares	9	5.69%
Madrid	9	5.69%
Navarra	4	2.53%

⁹⁷³ Para los habitantes, véase nota anterior. Y con respecto a los abogados hablamos de aquellos cuyo lugar de nacimiento es conocido, esto es, 471 del total de 643 colegiados desde 1762 hasta 1799 y 991 del total de 1014 desde 1800 hasta 1861.

Galicia	3	1.89%
Asturias	2	1.26%
Cuba	2	1.26%
Cantabria	1	0.63%
Extremadura	1	0.63%
Italia	1	0.63%
País Vasco	1	0.63%
República Dominicana	1	0.63%
La Rioja	1	0.63%
Otros	5	3.16%
<hr/>		
Total	158	99.91%

De todo lo expuesto llegamos a la conclusión de que el colegio de abogados de Valencia se nutría, fundamentalmente, de letrados procedentes de la clase social media que habitaba la ciudad de Valencia, en sus parroquias más ricas y céntricas. A ella le siguen, dentro del País Valenciano y a título de ejemplo, ciudades como Xàtiva, con 28 abogados; Cullera, con 21; Alicante, con 19; Gandía, con 17; Castellón de la Plana, con 16; Cocentaina, con 15; Sueca y Alcoy, con 14; Albaida y Sagunto, con 13; Orihuela, con 12; Segorbe, con 11; Ontinyent, con 10; etc. Procedían en general de las ciudades, en donde realmente habitaban las familias más ricas y con mayor interés en promocionar a sus hijos, en defecto de los pueblos, mucho más pobres y atrasados, y con un mayor índice de analfabetismo.

También queda claro que los restantes incorporados en el colegio procedían prácticamente en su totalidad del mismo país, ya que la presencia de foráneos es, como hemos dicho, poco más que testimonial; Barcelona 11 abogados, y Madrid 8.

Extracción social

Berní y Catalá recogía, en su *Resumen de los privilegios, gracias y prerrogativas de los abogados españoles*, el carácter de dignidad del letrado y su consideración como ciudadano, así como su derecho a gozar de los

privilegios propios de la nobleza y del estamento militar.⁹⁷⁴ Por otra parte, las constituciones del colegio exigían de los pretendientes a colegiados y de sus padres, que no ejercieran ni hubieran ejercido "oficio ni ministerio vil, ni mecánico y menos decente, y que se oponga o pueda oponer a el lustre de tan decorosa profesión, como la de la abogacía" (estatuto XVIII, párrafo 4º).

Pero, como vamos a ver, independientemente de esta pretendida consideración nobiliaria del abogado y de la abogacía, la ascendencia familiar de los letrados no siempre reflejaba esta situación, sino que más bien ofrece una notable diversificación de origen; desde la nobleza titulada —escasa—, hasta el simple artesano.

Me limitaré en este análisis a presentar unos esquemas sobre la extracción social del abogado, tomando como punto de partida los datos que nos proporcionan los expedientes de incorporación. La razón de no profundizar más reside en el hecho de que, de nuevo, nos encontramos ante unos documentos que ni son exactos ni concluyentes. Por una parte, no tenían por qué recoger todas las preeminencias paternas, bastaba con que los testigos acreditaran con sus manifestaciones la limpieza de sangre de la familia, y el no desempeñar ni haber desempeñado el abogado ni su padre oficio vil o mecánico. Por otra parte, la mayoría de datos son propios de la fecha del nacimiento del abogado, en cuanto que en su partida de nacimiento consta el oficio del padre y el de ambos abuelos. Con lo que el padre perfectamente podría promocionar o cambiar de oficio con los años.

Dividiré el estudio en tres apartados: oficios u profesiones, cargos —compatibles con los oficios—, y títulos. Todos ellos siempre de los padres.

Profesiones

La siguiente tabla nos muestra cuáles eran las profesiones que desempeñaban los padres de los abogados en el momento en que éstos nacían; sobre los padres de oficio conocido: 301 de 422 (el 71'32 %) para el XVIII, y 159 de 221 (el 71'94 %) para el XIX.⁹⁷⁵

⁹⁷⁴ J. Berní y Catalá, *Resumen de los privilegios...*

⁹⁷⁵ Fuente: A.I.C.A.V., *Expedientes Pruebas de Ingreso*, cajas 11 a 31. Cuando para un mismo sujeto nos constan dos o más oficios he tomado en consideración el primero. En total seis casos: dos abogados y procuradores; un labrador y fabricante de jabón y almidón; un

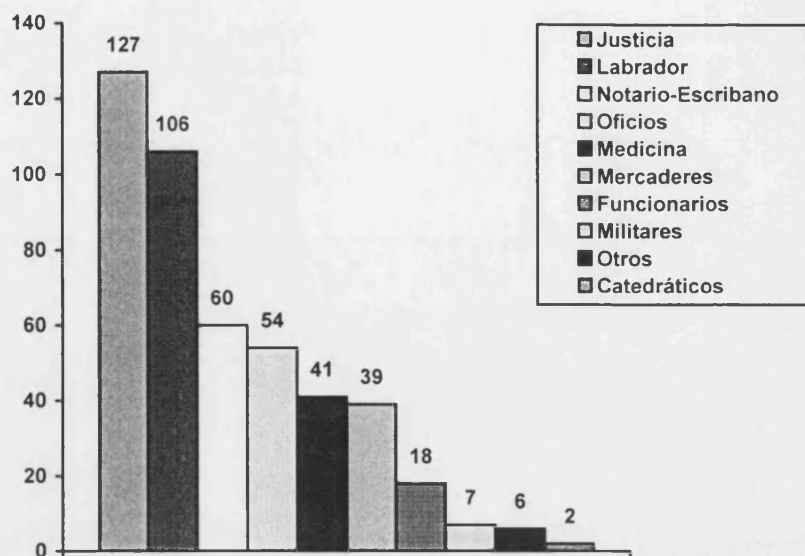
Oficios	XVIII	XIX	Total
Labrador	86 (28.57%)	20 (12.57%)	106 (23.04%)
Justicia:	67 (22.25%)	60 (37.73%)	127 (27.60%)
Abogado	52 (17.27%)	46 (28.93%)	98 (21.30%)
Procurador	4 (1.32%)	2 (1.25%)	6 (1.30%)
Administración de Justicia:	11 (3.65%)	12 (7.54%)	23 (5%)
Relator	(7)	(5)	(12)
Oidor-alcalde del crimen	(1)	(1)	(2)
Agente fiscal	(1)	(2)	(3)
Fiscal		(2)	(2)
Secretario Rl. Acuerdo		(1)	(1)
Magistrado Aud. Sevilla		(1)	(1)
Registrador gral. Rl. Aud.	(1)		(1)
Alcalde de Casa y Corte	(1)		(1)
Notario-escribano	49 (16.27%)	11 (6.91%)	60 (13.04%)
Otros funcionarios:	12 (3.98%)	6 (3.77%)	18 (3.91%)
Empleado rentas reales	(5)	(1)	(6)
Empleado hacienda militar		(1)	(1)
Corregidor de Valencia		(1)	(1)
Nuncio del Rl. Cancellor	(1)		(1)
Oficial contad. gral. propios		(1)	(1)
Of. cont. amortz. deuda pública		(1)	(1)
Registrador de la Corte	(2)		(2)
Subdecano ayunt. Ontinyent		(1)	(1)
Capitán milicias urbanas	(2)		(2)
Teniente milicias	(1)		(1)
Diplomático	(1)		(1)
Militar	4 (1.32%)	3 (1.88%)	7 (1.52%)
Medicina:	27 (8.97%)	14 (8.80%)	41 (8.91%)
Médico	(12)	(5)	(17)
Cirujano	(9)	(5)	(14)
Boticario	(6)	(4)	(10)
Catedráticos	2 (0.66%)		2 (0.43%)
Mercader-corredor	18 (5.98%)	21 (13.20%)	39 (8.47%)
Oficios:	35 (11.62%)	19 (11.94%)	54 (11.73%)
Profesiones:	18 (5.98%)	4 (2.51%)	22 (4.78%)
Albañil	(1)		(1)
Arquitecto	(2)	(1)	(3)
Barbero	(1)		(1)
Cantarería	(1)		(1)
Capitán Morbo	(1)		(1)
Escultor	(1)		(1)

procurador y criado mayor; y dos hijos de un registrador de la corte, canciller mayor del Real sello de cera de Castilla y alférez mayor.

Maestro de coches (<i>d'aixà</i>)	(1)	(1)	(2)
Marinero	(1)		(1)
Ministerio latinidad		(1)	(1)
Platero	(2)		(2)
Pintor	(2)		(2)
Relojero	(1)		(1)
Ropero	(1)	(1)	(2)
Sastre	(3)		(3)
Artesanos:	17 (5.64%)	15 (9.43%)	32 (6.95%)
Alpargatero		(1)	(1)
Carpintero	(3)	(2)	(3)
Cerero	(3)	(1)	(4)
Cerrajero	(1)		(1)
Condonero	(1)		(1)
Especiero		(2)	(2)
Pañero		(3)	(3)
<i>Peraire</i>	(1)		(1)
Soguero		(1)	(1)
<i>Sucrer</i>	(1)		(1)
Tintorero	(2)		(2)
Torcedor	(1)	(2)	(3)
Tornero		(1)	(1)
<i>Velluter</i>	(4)	(1)	(5)
Zapatero		(1)	(1)
Otros varios:	1 (0.33%)	5 (3.14%)	6 (1.30%)
Adm. Casa San Gregorio		(1)	(1)
Adm. Excmo. Arzobispo		(1)	(1)
Criado mayor	(1)		(1)
Director hospital dementes		(1)	(1)
Rentas propias		(2)	(2)

Total **301 (99.95%) 159 (99.94%) 460 (99.95%)**

Oficios



Los sectores que claramente destacaban sobre los demás eran dos: el de los oficios relacionados con la justicia y el de labrador, con una evolución completamente opuesta. Mientras que en el siglo XIX los labradores eran menos de la mitad con respecto a su porcentaje del siglo anterior, los oficios judiciales casi se duplicaron en proporción, constituyéndose en total como el sector más importante. A su vez, los abogados llegaban a constituir el 77'16 % de estos últimos, siendo la presencia de los procuradores prácticamente testimonial. Aunque los oidores, alcaldes del crimen o relatores sólo representan el 5 % de los casos, se trata de una cifra nada desdeñable si tenemos en cuenta el reducidísimo número de estos profesionales. En cuanto a los labradores, lo más probable es que la mayor parte de ellos fueran grandes propietarios, aunque no vivieran en la ciudad de Valencia. Nos consta que en el XVIII tan sólo 10 de los 86 padres labradores vivían en la capital. De su gran disminución producida en el siglo siguiente, y del carácter de los demás oficios, se aprecia de forma nítida el origen claramente urbano de estas familias.

Estos dos sectores comentados ocupaban el cincuenta por ciento del total. La otra mitad está muy diversificada, destacando los médicos, los

mercaderes, y los notarios o escribanos. Mientras la importancia de estos últimos disminuye con el tiempo, la de los mercaderes aumenta.

Sobre estudios similares en otros colegios, Navas ha estudiado los orígenes familiares de los abogados del colegio de Madrid en el siglo XVII.⁹⁷⁶ Aunque son más las similitudes que las divergencias con respecto al presente estudio, existen ciertas diferencias que considero oportuno constatar.

Por una parte, en Madrid los agricultores sólo representan el 3'9 % del total de los padres de los colegiados, mientras que en Valencia representan el 23'04 %. Además, mientras que en Madrid los mercaderes y hombres de negocios tan sólo llegaban al 2'3 %, en Valencia esta cifra se elevaba al 8'47 %. Cifra a la que incluso podríamos sumar el 11'73 % de los oficios —que, por otra parte, no aparecen para Madrid—. Por el contrario, el porcentaje de funcionarios en Madrid es mucho más elevado que en Valencia; más del 20 % en Madrid y aproximadamente la mitad en Valencia.

Las interpretaciones a estas disparidades son obvias y pasan, necesariamente, por la consideración de Madrid como capital de la monarquía, y por la mayor riqueza agrícola del País Valenciano. Navas también caracteriza como claramente urbano el origen de los abogados madrileños, a pesar de que tan sólo el 9'34 % de ellos había nacido en la capital, cifra mucho más reducida que en Valencia.

De cualquier manera, y como conclusión, parece obvio que se mantenía intacta la común creencia de que el oficio de abogado conllevaba una respetable consideración social, y posibilitaba un seguro medio de promoción. De ahí el ascenso social que en este sentido observamos que se produce en la mayoría de los colegiados con respecto a sus padres.

Cargos

En algunos expedientes de incorporación se dejaba constancia de los cargos honoríficos o políticos que los mismos padres detentaban al margen de su profesión. Esto se hacía sin seguir ningún criterio riguroso, ya que esta referencia no venía impuesta por los estatutos. Lo que quiere decir que,

⁹⁷⁶ J. Manuel Navas, *La Abogacía en el Siglo de Oro*, Edición especial IV centenario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Madrid, 1996, págs. 62 y sigs.

seguramente, no se dejara constancia de todos ellos, y que muchos de estos cargos sólo se detentaban temporalmente en el momento del nacimiento del abogado. Además, están los abogados de los que no nos ha quedado el expediente y aquellos otros en los que no consta el oficio paterno. Por todo ello, he obviado los porcentajes que estos datos representan respecto del total de los abogados, pues considero que la intención de estas cifras no es, sino, la de darnos una idea meramente aproximativa. Lo que sí se observa es una importante reducción de estos cargos en el siglo XIX, o al menos de su constatación. Los cargos, tal y como aparecen designados en las fuentes, son los siguientes:

Cargos	XVIII	XIX	Total
Familiar del Santo Oficio	13	4	17
Alcalde mayor	8	6	14
Alcalde ordinario	16	2	18
Juez letrado		1	1
Regidor	18	3	21
Síndico procurador	4	1	5
Baile	2		2
Diputado del común	1	1	2
Jurado	1		1
Gobernador general	2	1	3
Teniente gobernador	1		1
Otros	11	9	20
Vocal Junta Suprema Reino		1	1
Académicos de artes	3		3
Síndico apostólico	1		1
Total	81	29	110

Títulos

Finalmente, podemos efectuar una rápida aproximación a la nobleza de las familias por razón del título que detentaba el padre de cada colegiado. Es decir, en qué medida los abogados procedían de familias nobles. Al igual que en el cuadro anterior, y por los mismos motivos, los datos que aquí aparecen tan sólo sirven para darnos una idea aproximada de la realidad. Además, debemos tomar en consideración la confusión que en esta materia existía en el Reino de Valencia tras la Guerra de Sucesión.⁹⁷⁷ De nuevo, se observa una significativa reducción en el siglo XIX.

Título	XVIII	XIX	Total
Ciudadano	18	2	20
Hidalgo	8	5	13
Caballero	3	1	4
Generoso	1		1
Infanzón	2	1	3
Noble	7	7	14
Marqués	2		2
Título de Castilla	1		1
Oficial Mesa Maestral Montesa		1	1
Total	42	17	59

Los abogados y el ayuntamiento de Valencia

En el estudio de la relevancia que tuvieron los abogados en el ayuntamiento de Valencia, me detendré sólo en los siguientes cargos municipales: regidor, síndico procurador general, diputado del común, y síndico

⁹⁷⁷ Sobre este tema véase M. Madramany Calatayud, *Tratado de la nobleza de la Corona de Aragón, especialmente del Reyno de Valencia, compara con la de Castilla, para ilustración de la Real cédula del Sr. Dn. Luis I, de 14 de agosto de 1724*, Valencia, 1788.

personero del público. Respecto a los abogados sólo tomaré en consideración a los que estuvieron efectivamente colegiados, puesto que los informes que los pretendientes a estas plazas remitían al ayuntamiento, en los que describían todos sus méritos, no parece que fueran del todo exactos. Así por ejemplo, es de destacar que el abogado Agustín Abaás y Vives de Portes no aparece registrado en el libro de matrícula del colegio, a pesar de sus continuas afirmaciones de ser colegial. Ciertamente, consta su expediente de incorporación, pero no su juramento.⁹⁷⁸

Regidor

En el momento de la fundación del colegio de abogados, el ayuntamiento de Valencia se componía de 24 regidores. De ellos, 16 pertenecían a la clase de caballeros y 8 a la de ciudadanos. Desde 1765 hasta 1824 he contabilizado 27 vacantes, para las que se presentaron las correspondientes listas de aspirantes.⁹⁷⁹ De estas vacantes 13 pertenecen a la clase de ciudadanos y 14 a la de nobles. De los 137 memoriales que se presentaron para las vacantes de ciudadanos, 54 pertenecen a 31 abogados colegiados, lo que supone el 39'41 % de los memoriales. Así, mientras que unos colegiados sólo aspiraron en una ocasión, hay otros que lo hicieron hasta en cuatro y cinco ocasiones. Por lo que respecta a las vacantes de nobles, sólo fueron 14 los memoriales presentados —por 12 colegiados—, de los 129 memoriales en total, esto es, el 10'85 %.⁹⁸⁰

Cosa distinta fue el número de abogados que finalmente consiguieron la plaza. M^a del Carmen Irlés Vicente recoge una lista 136 regidores de ambas clases para el siglo XVIII —con algunos regidores del XIX—, de los cuales sólo nos consta con certeza que 12 fueran colegiados, esto es el 8'82 %.⁹⁸¹ De

⁹⁷⁸ A.I.C.A.V., caja 18, expediente 8.

⁹⁷⁹ A.M.V., *Elecciones*, 1^a B/I, cajas 1 a 9. Es muy probable que se produjeran algunas vacantes más de las que conocemos. Además, también es muy probable que se presentaran más aspirantes, cuyos informes tampoco conozco. Sobre este cargo véase M^a C. Irlés Vicente, *El régimen municipal valenciano en el siglo XVIII. Estudio institucional*, Alicante, 1995, págs. 131-195.

⁹⁸⁰ Hay tres colegiados que aspiraron a regidor tanto en la clase de ciudadanos como en la de caballeros: Antonio Pascual Pichó, Vicente Talens de la Riba y Pascual Ferrando Gil.

⁹⁸¹ M^a C. Irlés Vicente, *Al servicio de los borbones. Los regidores valencianos en el siglo XVIII*, Valencia, 1996, págs. 344-348.

ellos, cinco en la clase de caballeros y siete en la de ciudadanos.⁹⁸² Pero estas últimas cifras deberían modificarse al alza, entre otras razones porque el colegio se fundó en 1762, y nos consta que algunos de los regidores que fallecieron con anterioridad a la fundación fueron abogados.

Es sabido que en la Valencia foral no estaba permitido que los abogados obtuvieran cargos municipales. Se especula que el motivo fuera el general apoyo de los expertos en materias jurídicas al poder centralista y de tendencia absolutista del monarca.⁹⁸³ Con la legislación castellana, sin embargo, las cosas cambian. Además de todas las normas anteriores que reconocían privilegios de nobleza a los abogados, el decreto de 17 de noviembre de 1765 —dictado ante el recurso de un abogado de San Felipe, por el que pretendía su derecho a ser considerado como regidor noble— recordaba que los letrados gozaban, personalmente y por su profesión, de las mismas exenciones y privilegios que la nobleza de sangre. De ahí que pudieran tener asiento, no ya en la clase de ciudadanos, sino también en la de regidores nobles, y que prefirieran a los más modernos de esta clase.⁹⁸⁴ De cualquier manera, en estos momentos resultaba difícil de trazar la línea que distinguía a los ciudadanos de los caballeros en numerosas ocasiones. E igualmente difícil resultaba en otras ocasiones demostrar que se gozaba de uno de estos estados. Y, por otra parte, no significa, ni mucho menos, que los regidores de la clase de nobles que eran abogados habían obtenido su plaza gracias a su condición de letrados.

De lo que no hay duda es de la tendencia del ayuntamiento, al igual que del resto de las instituciones, a obviar la nobleza personal de los abogados. Además de exigir la nobleza o ciudadanía, la corporación estaba interesada en que los aspirantes cumplieran con otros requisitos, especialmente con el de la renta. En tiempos de *Furs* se exigía de todo regidor una renta mínima de 400 libras, sin contar los bienes dotales. Esta cantidad se

⁹⁸² Los caballeros son: Francisco Alborno y Cebriá, Francisco Benito Escuder y Segarra, Mariano Guinart y Torán, Ignacio Llopis Ferris y Salt, y Pedro Merita y Llácer. Y los ciudadanos: Miguel Gomis, Bernardo Insa, José Insa, Cipriano Mañes, Tadeo Millera y Aycart, Felipe Pascual Musoles y Jimeno, y Joaquín Saló

⁹⁸³ E. García Moneris, *La monarquía absoluta y el minicipio borbónico*, Madrid, 1991, pág. 224.

⁹⁸⁴ Véase apartado *Defensa de la nobleza de la abogacía*, así como el memorial de José Ferrando para la plaza en la clase de nobles vacante por el fallecimiento de Elfo Valeriola; A.M.V., *Elecciones*, 1ª B/I, caja 5, legajo 60, folio 6 B.

aumento en 1789 hasta las 1.000 libras.⁹⁸⁵ En 1792, y por parecerle a la ciudad corta esta cantidad, se acudió al Supremo Consejo para que la elevara hasta las 1.200 libras.⁹⁸⁶ Sin embargo, no nos consta que en ningún momento se accediera a esta petición.

Los 40 abogados que estudiamos se mueven entre las 300 libras de Pedro Quegles y las 2.292 de Manuel Clemente Luzán, no llegando la media a las 1.000 libras. No obstante, debemos considerar que las cifras aportadas por los pretendientes suelen ser rebajadas por los regidores en sus informes, y que, además, suelen variar en cada memorial que presentan. Así, Berní y Catalá —uno de los pretendientes más pobres—, manifiesta gozar de 244 libras propias y 365 en concepto de salario con que le contribuye el conde de Guevara. Sin embargo, los regidores desestiman esta última cantidad por considerar que queda al arbitrio del pagador. Tomás Yáñez, por su parte, manifiesta tener en 1769 una renta de 500 libras, en 1777 de 600 pesos y 120 de la dote de su mujer, y en 1784 de 1.150 libras más las 200 de su mujer.

Diputado del común

En virtud del auto acordado de 5 de mayo de 1766, el ayuntamiento de Valencia tendría cuatro diputados, que nombraría anualmente el “común” por parroquias, y que tendrían voto, entrada y asiento después de los regidores. Su misión era la de “tratar y conferir en punto de abastos, examinar los pliegos o propuestas que se hicieren, y establecer las demás reglas económicas tocantes a estos puntos, que pide el bien común”. La real provisión de 31 de enero de 1769 dispuso que sólo se nombrasen dos cada año, juntándose éstos con los dos elegidos el año anterior.⁹⁸⁷

⁹⁸⁵ A.M.V., *Elecciones*, 1ª B/I, caja 1, legajo 7, folio 5 B, en donde consta, además, que “para ser regidor en la plaza vacante, según la loable práctica antigua y leyes del Reyno, se requiere: que sea noble, generoso o cavallero, y que haga constar de esto, a no ser notoria y públicamente sea tenido por tal. Que tenga la renta suficiente para mantenerse con el honor correspondiente a su empleo. Que sea natural de esta ciudad o de su Reyno, y que no tenga otro empleo que sea inferior a dicho oficio, o que le embaraze la asistencia éste, y, finalmente, que sea persona hábil, varón prudente y de buen entendimiento, y temeroso de Dios.” Véase E. García Monerris, *La monarquía...*, pág. 234.

⁹⁸⁶ A.M.V., *Capitulares y Actas*, D-194, libro de instrumentos.

⁹⁸⁷ A.M.V., *Elecciones*, 1ª B/I, caja 1, legajos 9 y 23. Véase su estudio en Mª C. Irlés Vicente, *El régimen municipal...*, págs. 215 y ss.

De los 79 individuos de que tengo constancia que desempeñaron el cargo entre los años 1766 y 1833, 15 fueron abogados colegiados, es decir, el 18'98 %.⁹⁸⁸ Al igual que ocurrió con los regidores, la mayoría de estos diputados del común ejercieron el cargo en los últimos años del siglo XVIII. En concreto, de los 15 colegiados, 10 lo ejercieron durante la última década.

Síndico personero

El mismo auto por el que se crearon los anteriores diputados establecía que el “común” de la ciudad designara un procurador síndico personero del público, que tendría asiento en el ayuntamiento después del síndico procurador general. Su misión era la de “pedir y proponer todo lo que convenga al Público generalmente”.⁹⁸⁹

De los 45 individuos que ocuparon este cargo desde 1766 hasta 1833, 12 fueron abogados colegiados, es decir, el 26'66 %. Alguno de ellos lo ejerció en más de una ocasión.⁹⁹⁰ De nuevo destaca su presencia en los últimos años del XVIII y primeros del XIX.

Síndico procurador general

Aunque se trata de un oficio que existe desde la misma introducción del derecho municipal castellano en el ayuntamiento, es en 1766 cuando se redefine su carácter, al declararse cargo incompatible con el de regidor. Según la instrucción de 20 de marzo de 1709, “Ha de elegir también la Ciudad un Procurador General para los pleytos que se le ofrecieren en la misma forma; y éste ha de dar quenta todos los meses del estado en que están los pleytos, al

⁹⁸⁸ A.M.V., *Elecciones*, 1ª B/I, cajas 1 a 9. Estos diputados fueron: Antonio Pascual Pichó, Onofre Salelles, Patricio Cervera, Vicente Albors, Francisco de Paula Soler, Francisco Vilatela, José Soriano Nieto, Francisco Pallarés, Jaime Piles, Juan José Nogués, Bernardo Sulroca, Fernando Alfonso, José Ribera, Mariano Mateu y Vicente Gil del Castillo.

⁹⁸⁹ A.M.V., *Elecciones*, 1ª B/I, caja 1, legajos 9 y 23. Véase su estudio en Mª C., Irlés Vicente, *El régimen municipal...*, págs. 215 y sigs.

⁹⁹⁰ A. M. V., *Elecciones*, 1ª B/I, cajas 1 a 9. Estos personeros abogados fueron: Antonio Salavert —en una ocasión—, Juan Bautista Matas —en una—, Fernando Alfonso —en dos—, Manuel Cortés —en una—, Francisco Vilatela —en dos—, Pascual Ferrando Gil —en siete—, Bruno Martínez —en una—, Antonio Cremades —en una—, Francisco Castillo —en dos—, Manuel Chiva —en una—, Jaime Ronda —en una— y Francisco García —en una—. De los 67 años que transcurren entre 1766 y 1833 conocemos quién ocupó el cargo en 58 años; en 21 ocasiones lo ejerció un colegiado, es decir el 36'20 % del tiempo.

principio de cada mes, y se le señalará por la Ciudad un salario moderado”.⁹⁹¹ En 1803, se manda que al síndico procurador general “se le den poderes de estilo en la forma debida y acostumbrada para el seguimiento de los pleitos, causas y negocios de la Ilustre Ciudad, con facultad de poderse substituir en los subsíndicos”.⁹⁹² Se desconocen todavía sus relaciones y distribución de competencias con los abogados de la ciudad. Hasta la real provisión del Consejo de 11 de julio de 1778 —y a petición del propio ayuntamiento—, la ciudad disponía de cuatro abogados. A partir de ahora sólo dispondrá de dos, contratando a otros abogados si la acumulación de trabajo lo requiera.⁹⁹³

El ayuntamiento elegía anualmente —el primero de diciembre— la persona que iba a desempeñar el cargo de síndico procurador general. De los 17 individuos que ocuparon el puesto entre los años 1767 a 1793, 9 fueron abogados colegiados, desempeñando el cargo durante 15 de los 27 años.⁹⁹⁴ Del período comprendido entre 1800 y 1811, sólo uno de los seis síndicos —Joaquín Llorens, en 1804— fue colegiado.⁹⁹⁵

Como conclusión, podemos afirmar que la presencia de abogados en el gobierno municipal de la ciudad llegó a ser relevante en los cargos de elección popular —personero y diputado del común—, pero no así en los de designación regia —regidor—. Por otra parte, existe una cierta coincidencia entre estos abogados y los que ocupan los cargos de la Junta del colegio.

⁹⁹¹ B.U.V., *Instrucción que ha de observar la ciudad de Valencia, estando junta su ayuntamiento y fuera del*, Manuscritos 178, núm. 8. Véase M^a C. Irlés Vicente, *El régimen municipal...*, págs. 211-215.

⁹⁹² A.M.V., *Capitulares y Actas*, D-193, fol. 12.

⁹⁹³ A.I.C.A.V., libro 4, págs. 128 B-129 B y 177 B. Véase el apartado *Relación del colegio con otras instancias*.

⁹⁹⁴ Véase E. García Monerris, *La monarquía absoluta...*, pág. 420. Fueron los siguientes abogados: José Miñana, durante tres años; Vicente Ferrer Peralta, José María Alemany, Matías Perelló y Ferrando Císcar, durante dos; y Miguel Gomis, Vicente Alfonso, José Ferrando y Mariano Guinart —hijo—, duante uno cada uno de ellos.

⁹⁹⁵ A.M.V., *Capitulares y Actas*, D-187 a D-210. Datos cedidos por P. Hernando Serra, que está realizando en el presente la tesis sobre el ayuntamiento borbónico de Valencia.

Patrimonio de los abogados según el *Libro Padrón de Valencia*

A través del *Libro Padrón de Valencia* podemos aproximarnos a la situación patrimonial de los colegiados a principios del diecinueve,⁹⁹⁶ aunque sea con las limitaciones que este registro conlleva, y que veremos a lo largo de estas páginas. Por ello creo oportuno explicar, antes que nada, los problemas con los que me he encontrado, y algunos presupuestos metodológicos de los que me he tenido que servir, y que, evidentemente, deberán ser tenidos en cuenta a la hora de considerar la provisionalidad o relatividad de las conclusiones.

A) Por una parte he creído importante centrar este estudio en un momento concreto, dentro del período en el que el *Padrón* estuvo vigente: desde 1812 hasta poco después de febrero de 1828.⁹⁹⁷ Pues bien, analizaré la situación patrimonial de los abogados en el año 1813. He elegido esta fecha porque la Junta Municipal decidió, el uno de abril de este año, rebajar en un tercio la renta de los bienes inmuebles de la ciudad de Valencia, ya que el justiprecio de los mismos no era acorde a las circunstancias del momento, puesto que se había realizado con anterioridad a la entrada de las tropas francesas. De esta forma, los encargados del *Padrón* sumaron la renta de todos los bienes y restaron el tercio de la de los inmuebles. Con ello podemos conocer el total del capital y de la renta de los bienes de cada contribuyente en este momento.

Por la misma razón, he juzgado que aquellas inscripciones en las que no aparecen estas suma y resta son posteriores a 1813 —sobre todo aquellas en las que se recogen inmuebles urbanos—. Son nueve del total de los 114 abogados que estudiaremos, sin que conozcamos el año exacto en que se

⁹⁹⁶ A.M.V., *Libro Padrón Riqueza*, 16 vols., b2-1 a b2-14. Sobre las reglas que se siguieron en su realización véase A.M.V., *Capitulares y actas*, D-212, fols. 144-145.

⁹⁹⁷ J. L. Hernández Marco y J. Romero González, *Feudalidad, burguesía y campesinado en la Huerta de Valencia*, Valencia, 1980, págs. 29-39.

practicaron.⁹⁹⁸ Por otra parte, cinco contribuyentes de los que recojo se colegiaron con posterioridad a este año.⁹⁹⁹

Evidentemente, no todos los abogados tendrán la misma edad en 1813, con lo que su patrimonio podría aumentar más o menos, o disminuir hasta su muerte. No obstante, la media de edad es alta ya que, como sabemos, el colegio cerró sus puertas desde noviembre de 1794 hasta julio de 1811. De hecho, esta media se situaba alrededor de los 52 años y 3 meses.¹⁰⁰⁰

Cosa distinta era la media de edad de los colegiados que tenían despacho abierto en la ciudad, porque en 1810 era de 53 años y 4 meses, en 1811 de 48 años y 2 meses, y en 1812 de 48 años y 1 mes.¹⁰⁰¹ La disminución de la edad media operada entre 1810 y 1811 es fácilmente explicable debido a las numerosas incorporaciones de jóvenes que se produjeron durante estos dos años, recién abiertas las puertas del colegio. Por el contrario, entre 1811 y 1812 la media debería haber aumentado un año, ya que desde la redacción de la lista de 1811 hasta 1813 no se produjo ninguna incorporación. Sin embargo esto no fue así. Podemos encontrar la explicación en el hecho de que de los abogados que aparecen en la lista de 1811, 49 ya no lo hacen en la de 1812. Y la media de edad de estos abogados que dejan de ser ejercientes se situaría en más de un año por encima de los que continuaron ejerciendo, en concreto sería de 49 años y 9 meses en 1812.¹⁰⁰²

Pero, por lo visto, los desastres de la guerra no sólo determinaron el abandono de la profesión de viejos abogados, sino también de muchos de reciente incorporación.¹⁰⁰³ En general, y especialmente para estos últimos, se trataba de abogados con ingresos profesionales por debajo de la media. La

⁹⁹⁸ Antonio Cremades, José Gregorio Genovés, Ramón Gilabert, Mariano Gitart, Miguel Hernansaiz, Bartolomé López, Joaquín Pano, Juan Bautista Pla, Antonio Ramos.

⁹⁹⁹ Se trata de Estanislao Olorris (colegiado en 1819), Juan Bautista Pla (1820), Antonio Ramos Buch (1825), José Tomás Valentí (1817) y Manuel Ximénez (1817).

¹⁰⁰⁰ Han sido las partidas de bautismo de los expedientes de incorporación las que nos han proporcionado la fecha de nacimiento de 89 de los 114 abogados; A.I.C.A.V., cajas 11-31.

¹⁰⁰¹ Conocemos la edad de 61 de los 83 ejercientes de 1810, de 77 de los 101 del año siguiente, y de 41 de los 53 ejercientes de 1812. Para la identificación de estos ejercientes véase A.I.C.A.V., libro 5, págs. 120, 169 y 176, respectivamente.

¹⁰⁰² Conocemos la edad que tendrían en este año 36 de los 49 abogados que dejan de ejercer.

¹⁰⁰³ Así por ejemplo, de los nueve ejercientes incorporados en 1810 dejaron de abogar dos: Andrés López y Felipe Navarro; y de los dieciséis ejercientes que se incorporaron en 1811 dejaron de abogar diez: Tomás de Benavente, Peregrin Blat, Tomás Bru, Francisco Calbo, Patricio Cerdá, Joaquín Font, Vicente Gil del Castillo, Lorenzo Isern, Gabriel Montaner y Nicolás Puigcerver.

media para los ejercientes en 1811 se situaba en 3.215 reales. Mientras que para los que continuaron ejerciendo en 1812 la media llegaba a ser de 4.164 reales, esta cifra descendía hasta los 2.208 reales para los que dejaron de ejercer.

B) La segunda cuestión a destacar en la confección de este estudio es que uno de los problemas principales ha sido la identificación de los abogados, ya que el *Libro Padrón* tan sólo esporádicamente hace referencia al oficio del contribuyente. Del total de 114 contribuyentes que considero abogados, en la inscripción de 32 constan las ganancias anuales que obtenían en el ejercicio de la abogacía, según la relación que remitió el colegio al ayuntamiento en 12 de julio de 1810, a solicitud de este último para la elaboración del *Libro*.¹⁰⁰⁴ Para el caso de los 82 abogados restantes no parece haber dudas en su identificación, por la coincidencia de nombres y apellidos, cargos o incluso títulos.¹⁰⁰⁵

De todas las propiedades que poseían los abogados, de su capital y de la renta que les atribuía el *Libro*, he extraído una serie de conclusiones:

1. Del total de 83 colegiados que tenían despacho abierto en la capital en 1810, según consta en la comunicación que remitió el colegio al ayuntamiento, tan sólo 51 eran propietarios de inmuebles en lo que se conoce como la Particular Contribución de Valencia.¹⁰⁰⁶ Los 32 restantes no eran dueños, al parecer, de ninguna de estas propiedades. Aún el 19 de enero del

¹⁰⁰⁴ A.I.C.A.V., libro 5, pág. 120.

¹⁰⁰⁵ De estos 82 abogados, 21 coinciden en nombre y en ambos apellidos con los inscritos en el libro de matrícula. De los 61 restantes —para los que sólo conocemos el primer apellido—, en la inscripción de 11 consta, o que son abogados, o que han desempeñado algún oficio de la Junta del colegio, o que son presbíteros —lo que sabemos por las listas—. El resto los he considerado colegiados por tener un nombre y, sobre todo, un apellido poco usual, porque muchos de ellos aparecen con el título de "Dn." o de "Dr. Dn.", y, además, por no existir ningún otro sujeto en el *Libro Padrón* con igual identificación.

¹⁰⁰⁶ J. L. Hernández Marco, *Feudalidad, burguesía...*, págs. 41-48. De estos 51 abogados, en la inscripción de 32 aparecen las ganancias anuales que percibían como tales, mientras que éstas no aparecían, sin que se sepa el motivo, en las de los 19 restantes.

año siguiente, el colegio remitió nueva comunicación con otros 9 colegiados ejercientes, de los cuales sólo dos aparecerán como propietarios.¹⁰⁰⁷

Es cierto que, salvo alguna excepción, aquellos colegiados con menores ganancias como profesionales son los que suelen tener menos patrimonio. Así por ejemplo, de los 19 abogados con ganancias inferiores a los 1.000 reales de vellón en 1810, 11 no tenían inscripción en el *Libro* o, de tenerla, sólo constaba en ella esta ganancia. Pero también es cierto que esta conclusión se relativiza si tenemos en cuenta que hay indicios de que, en la relación de gananciales remitida al ayuntamiento por el colegio, éste había registrado las cantidades a la baja. En este sentido, en junta de 26 de septiembre de 1810 se leyó oficio remitido por la Junta de Comisión para la formación del *Padrón*, en el que manifiesta sus dudas acerca de la veracidad de las cifras. Estas dudas se basaban en la opinión de que las cantidades deberían ser superiores, al haber aumentado la demarcación de la Audiencia y ser más sus causas, así como al estimar que en esta graduación no se incluyeron las ganancias que los colegiados obtenían como abogados de algunas casas o corporaciones.

De hecho, la media de las ganancias de 1810 fue de 2.747 reales. En 1811, y a tenor de la nueva lista que remitió el colegio, la media llegaba a 3.215 reales, y ello a pesar de que los nuevos incorporados obtenían escasos beneficios. En 1812, y seguramente como consecuencia de la guerra, todos los abogados vieron drásticamente reducidos sus ingresos, de forma que la media se reducía a tan sólo 631 reales. Pero debemos tener en cuenta que, mientras que la graduación de ganancias realizada en los años 1810 y 1811 corrió a cargo de peritos nombrados por la Junta, la de 1812 se elaboró en base a las manifestaciones juradas de los propios abogados, de ahí que —

¹⁰⁰⁷ Esta primera conclusión la induzco del hecho de que en el asiento o inscripción que de la mayoría de los abogados no propietarios efectivamente encontramos en el *Libro Padrón*, no aparece ningún bien de ningún tipo, sino tan sólo la renta anual obtenida en el ejercicio profesional que había sido comunicada por el colegio. Al parecer, cuando los oficiales encargados de la redacción del *Libro* recibieron del colegio la comunicación con los ejercientes en la capital, anotaron sus nombres y sus rentas de abogados —dos en cada página—, a la espera de elaborar la completa inscripción de cada uno de ellos en otra página —casi siempre posterior— que, como hemos visto, no aparece en estas ocasiones.

seguramente— éstos graduaran sus ganancias a la baja. Por todo ello parece ser que los datos más fiables son los que corresponden al año 1811. El siguiente cuadro refleja la estratificación de los abogados por razón de sus beneficios profesionales, según la lista del colegio para este año:

<u>Ganancias (reales)</u>	<u>Nº de abogados</u>
200	1
500	2
600	23
1.000	13
1.500	6
2.000	2
3.750	1
3.000	14
4.000	11
5.000	4
6.000	15
7.000	2
8.000	3
9.000	1
10.000	1
12.000	1
15.000	1
Total: 324.750	101

2. En segundo lugar, y como opuesta a la anterior conclusión, hay que decir que numerosos colegiados propietarios de inmuebles en la Particular Contribución, no ejercían la profesión —al menos en la ciudad de Valencia—, ya que no aparecían en las listas de ejercientes que el colegio remitió al ayuntamiento durante estos años.

3. La media del capital de los bienes que en 1813 poseía cada abogado era de 6.506 libras, pero con unas diferencias muy acusadas entre unos abogados y otros. Veámoslo:

<u>Capital (libras)</u>	<u>Nº de abogados</u>
0 - 4.999	57
5.000 - 9.999	29
10.000 - 14.999	10
15.000 - 19.999	2

20.000 - 24.999	4
25.000 - 29.999	1
30.000 - 39.999	1
Más de 40.000	1
Total: 683.219	105

Entre los letrados más ricos destacan José Beneito, con 22.230 libras; Manuel Bernardo Clemente, con 28.326; Antonio Llorens, con 33.793; y, sobre todo, Pedro Luis Traver, con 40.277 libras y 10 sueldos.¹⁰⁰⁸

No parece que las fortunas de los mayores propietarios procedan del ejercicio profesional. Más bien pienso que provienen de herencias familiares. Si bien sí es cierto que existe una clara relación entre sus fortunas y los ingresos que perciben del ejercicio profesional, de forma que la gran mayoría de los que tienen un capital superior a la media también tienen unos ingresos profesionales superiores a la media. Lo que también se observa es que los abogados que desempeñaron el cargo de decano en los años cercanos a 1813 no eran poseedores de un capital relevante, ni siquiera solía ser superior a la media. Sin embargo, sí que tenían unos beneficios profesionales claramente superiores a la media. A la misma conclusión llegamos para los demás cargos integrantes de la Junta.

4. Paralelamente al capital, la media de la renta que se atribuía a los bienes de los abogados era de 200 libras por cada abogado. Y su porcentaje con respecto a aquel capital del 3.08 %.

Renta (libras)	Nº de abogados
0 - 99	40
100 - 199	32
200 - 299	12
300 - 399	7
400 - 499	7
500 - 999	5
Más de 1.000	2
Total: 21.050	105

¹⁰⁰⁸ Respecto a este último abogado le pertenecían 24.412 libras de capital y le correspondían 665'10 de renta por sí. A esto le he añadido la mitad del capital y de la renta que, junto con su hermana, le correspondía proindiviso por herencia, y que aparece en inscripción separada; 31.731 y 955 libras, respectivamente.

Obviamente, existe una correspondencia entre el capital y la renta. A mayor capital mayor renta, aunque, sin saber por qué, no siempre sea una correlación exacta. De los anteriores colegiados José Beneito contribuía con 800 libras y 15 sueldos, Manuel Bernardo Clemente con 743 libras y 10 sueldos, Pedro Luis Traver con 1.143 libras, y Antonio Llorens con 1.180 libras y 5 sueldos.

5. En cuanto a las propiedades rústicas he contabilizado un total de 2.781'5 hanegadas, de las cuales el 83'13 % era de huerta y el 16'87 % restante de secano o arroz.¹⁰⁰⁹ Es decir, 26'49 hanegadas de media por abogado según el siguiente cuadro. Si bien, de los 105 que consideramos, 56 no poseía nada de tierra, por lo que la media para los 49 propietarios subía a 56'76 hanegadas.

<u>Hanegadas</u>	<u>Nº abogados</u>
0	56
0 - 49	31
50 - 99	11
100 - 149	4
150 - 199	0
200 - 249	1
250 - 299	1
Más de 300	1
Total: 2.781'5	105

Desconocemos si la tierra de los mayores propietarios —más de 100 hanegadas— fue comprada por ellos mismos o heredada de sus antepasados. Se trata de familias pertenecientes, por lo general, a una clase social acomodada. Así por ejemplo, los padres y abuelos de Antonio Llorens —325 ha.—, Vicente Agulló —124— y Juan Bautista Sala —108—, habían sido labradores con cargos públicos municipales. El padre de Pedro Luis Traver —230'5 ha.— abogado; el de Manuel Bernardo Clemente —252—, noble hidalgo de Aragón; el de Ignacio Navarro —103—, había sido secretario del Consejo,

archivero mayor y regidor de la ciudad. Por contra, el padre de José Andrés Salelles —con 111 ha.—, había sido, simplemente, torcedor.

De ser estas propiedades de reciente adquisición, podríamos observar una cierta concordancia con la tesis de Joaquín Azagra, de que los mayores compradores de tierras en la desamortización de Godoy habían sido la burguesía comercial y los labradores, seguidos de los comerciantes, dones y profesionales, con escasa relevancia de la nobleza.¹⁰¹⁰

Al margen de las tierras he considerado como bienes rústicos, por su estrecha relación con el campo, cuatro tipos de construcciones: la alquería, la barraca, la balsa de curar cáñamo y la noria.¹⁰¹¹ Los cuatro tipos aparecen siempre dentro de una parcela del mismo propietario. En cuanto a las alquerías he contabilizado 18 y la mitad de otra, valoradas en 566 libras de media cada una, si bien las más y menos valoradas las poseen, respectivamente, Antonio Llorens —1.300 libras— y Fernando Císcar —100 (derruida)—. Para las barracas, el valor medio de las 10 contabilizadas es de 90 libras, oscilando entre las 120 libras de la de Antonio Llorens y las 70 de la de Vicente Ferrando. En cuanto a las balsas de curar cáñamo, me constan 4 y otras dos medias, con una valoración aproximada de 60 libras cada una.

6. Por lo que respecta a las propiedades urbanas podemos distinguir, de una parte, entre el número y la localización de los edificios o viviendas propiedad de los abogados, y, de otra, la ubicación de sus domicilios y despachos.

En cuanto a los edificios he contabilizado un total de 391.¹⁰¹² O lo que es lo mismo, 3'72 de media por abogado según el siguiente cuadro:

¹⁰⁰⁹ He englobado dentro del grupo de secano todas aquellas cahizadas y hanegadas de olivos, vid, "sin cultivo" o, simplemente, de "tierra".

¹⁰¹⁰ J. Azagra Ros, *La desamortización de Godoy en Valencia (1799-1807)*, Valencia, 1986, págs. 78-84.

¹⁰¹¹ Sólo existe una noria —en tierra de secano—, sin que conozcamos su valor por no aparecer valorada separadamente de la tierra.

¹⁰¹² En esta contabilización he seguido el criterio de considerar tantos edificios como asignaba el asiento —uno o, como máximo, dos—. Sin embargo, he contabilizado uno por cada uno de los diferentes tipos que aparecen en el mismo asiento (casa, casa alta, casa baja, escalerilla o, incluso, en algún, caso habitación). Todo ello independientemente de su valoración. En el total

<u>Nº de edificios</u>	<u>Nº de abogados</u>
0	10
1	26
2	18
3	15
4	10
5	5
6 - 10	13
11 - 15	5
16 - 20	1
21 - 25	1
Más de 25	1
Total: 391	105

Si bien gran parte de estos edificios se encuentran en las calles adyacentes a la catedral, hay una dispersión bastante clara de los demás a lo largo de todos los distritos de la ciudad, no siendo tampoco despreciable el número de edificios situados extramuros (véase el mapa nº 1 en apéndices).¹⁰¹³ Al igual que señalábamos para las fincas rústicas, en este caso tampoco hay una nítida adscripción de los mayores propietarios —más de 10 edificios— a ninguna clase social en especial. Abunda en general la clase media ciudadana en defecto de nobles y labradores. Así, el padre de Vicente María Vergara —con 27'5 edificios—, era el director decano de la Academia de San Carlos; el de Pedro Luis Traver —con 16 edificios—, abogado; el de Adriano Cerdá —con 13—, escribano; y los de Manuel Bernardo Clemente, Manuel Escolano y José Salelles Molina —los tres con 11 edificios—, hidalgo de Aragón, procurador y torcedor, respectivamente.

El valor de estos edificios era muy diverso. Iba desde las 60 libras de una casa de Manuel Bernardo Clemente hasta las 11.000 de otra de Carlos

de 391 se incluyen sumadas las partes de algunos edificios (media casa, un tercio...), hasta conformar números enteros. Sin embargo, en el cuadro he considerado como enteros las partes; por ejemplo, si Joaquín Melchor tiene 1'5 edificios ha sido incluido dentro del grupo de 2.

¹⁰¹³ El mapa se trata de una copia anónima del del Padre Tosca, realizada en 1774. Véase Ayuntamiento de Valencia, *Cartografía histórica de la ciudad de Valencia, 1704-1960*, Valencia, 1985. He contabilizado un total de 407 direcciones, 16 más que edificios, ya que aquí las partes las he considerado como unidades. De aquéllas 10 no he podido situar y 37 se emplazan extramuros —9 en Ruzafa, 7 en el Grao, 6 en la calle Murviedro, 4 en el cuartel de Campanar, 3 en el de Benimaclet, 3 en el de Patraix, 2 en Burjasot, 2 en el Lazareto y 1 en Vistabella—.

Andrés, sin relación aparente entre la riqueza total del abogado y la valoración de sus edificios.

También incluiríamos dentro de las propiedades urbanas a otro tipo de edificación: los molinos.¹⁰¹⁴ Son en total cuatro, en manos de abogados ricos: Antonio Llorens —33.793 libras de capital—, Carlos Andrés —20.230—, Francisco Isnart —9.720—, y Pablo Rincón —7.550—. El valor de estos molinos era elevado, pues estaban justipreciados, respectivamente, en 6.000, 1.000, 1.000 y 3.200 libras.

Cosa diferente era la ubicación de los domicilios y despachos.¹⁰¹⁵ Aquí podemos ver (mapas nº 2 y nº 3 respectivamente en apéndices) cómo en ambos casos la mayoría se encuentran en las calles cercanas a la Audiencia, en la parroquia de San Pedro, que era el distrito del que, proporcionalmente a su población, más abogados procedían de toda la ciudad. Si en unas ocasiones el despacho se ubicaba en la misma vivienda (Vicente Alfonso, Vicente Ferrando, José Lafuente, etc.), en otras muchas ocasiones no. En este último caso el despacho radicaba en otro edificio que tampoco solía ser de su propiedad, sino más bien alquilado e, incluso, compartido con otros compañeros. Es el caso de Tomás Ausina y Pedro Barredá, con despacho en la plaza Correo nº 13, que no era propiedad de ninguno de los dos. Andrés López, Vicente Picó y Eugenio Jordá, compartían despacho en la calle Caballeros nº 3, domicilio de este último. Las posibilidades son muy variadas. De la misma forma, era frecuente que la localización de estos despachos cambiase con los años. Manuel Chiva, por ejemplo, tiene su despacho en la calle Inquisición en el año 1800, en la calle de la Hierba en 1808, y en la calle Juristas en 1810.

7. Por último, y para finalizar, los movimientos de altas y bajas posteriores a 1813 fueron relativamente abundantes, especialmente en cuanto a las bajas, afectando por igual a todos los contribuyentes.

¹⁰¹⁴ Nos consta, además, un almacén y un solar.

Renta profesional de los colegiados (en reales de vellón)¹⁰¹⁶

Colegiado	1810	1811	1812
Adell, Juan Bautista	600	600	
Alfonso, Fernando Vicente	3.000	3.000	
Alfonso, Vicente	8.000	15.000	3.000
Algarra, Salvador	2.000	2.000	150
Almela, Manuel Antonio	1.500	1.500	300
Aparici, José	3.000	3.000 ¹⁰¹⁷	
Armengol, Vicente	2.000	3.000	300
Ausina, Tomás	6.000	6.000	300
Barreda Centelles, Pedro	3.000	4.000	300
Beltrán, Miguel	500		
Belluguera, José ¹⁰¹⁸		600	
Benavente, Tomás		600	
Beneyto, José	5.000	7.000	
Blat, Andrés	4.000	4.000	400
Blat, Peregrín		1.000	
Boigues, Tomás	1.500	1.500	
Boil, Manuel	600	600	100
Bravo, Vicente		600	300
Bru, Tomás		600	
Brugés, Pedro	5.000	6.000	500
Caballer, José	600	600	200
Cabezas, José	1.500	1.500	200
Cabrera, Alonso	6.000	4.000	
Calatayud, Félix Fermín	3.000	6.000	600
Calbo, Francisco		1.000	
Carrey, Vicente	1.000	1.500	
Casanovas, Antonio	3.000	6.000	800 ¹⁰¹⁹
Casanovas, Antonio		600	
Cebolla, Pedro	8.000	12.000	1.500
Cerdá, Adriano	4.000	6.000	500
Cerdá, Patricio		600	
Cervera, José	1.500	3.000	400
Chiva, Manuel	4.000	4.000	
Clemente, Manuel Bernardo	3.000	5.000	
Colomer, Juan Bautista	2.000	3.000	1.000
Cremades, Antonio	750	1.000	300

¹⁰¹⁵ La dirección de los despachos la he obtenido de la lista de colegiados de 1810-1811. La de las viviendas del A.M.V., *Contribuciones Particulares*, cajas 1.370 y 1.370 doble.

¹⁰¹⁶ Fuente: A.I.C.A.V., libro 5, págs. 120 (año 1810), 169 (año 1811), y 176 (año 1812).

¹⁰¹⁷ Se trata de sus herederos.

¹⁰¹⁸ Ni por el libro de matrículas ni por los expedientes de incorporación tenemos noticia alguna sobre este abogado.

¹⁰¹⁹ Antonio Casanovas e hijo.

Cueva, José Ignacio de la	600	600	
Disdier, Vicente	200		
Espí, Tomás Luis	600	600	
Esteve, José	2.000	3.000	200
Fernández Blasco, Joaquín	5.000	3.000	
Ferrandis, Joaquín	3.000	4.000	150
Ferrando, José	3.000	3.000	
Ferrando Segura, Vicente	4.000	4.000	650
Fita, José	750	1.000	
Font, Joaquín		600	
Font, Pablo	3.000	5.000	1.500
Fuertes, Joaquín	4.000	6.000	300
Gascó, Blas	1.500	1.500	450
Gascó, Mariano	3.000	3.000 ¹⁰²⁰	
Gil del Castillo, Vicente		600	
Gilabert, Ramón		600	150
González, José	4.000	6.000	600
Haro Serrano, Pascual	200	200	
Isern, Lorenzo		600	
Isnart, Franco. de Paula	600	1.000	300
Jordá, Eugenio	600	600	300
Jornet, Joaquín	2.000	4.000	250
Lafuente, José	4.000	6.000	1.000
López, Andrés	600	600	
Lorca, Policarpo	600	600	
Maldonado, Joaquín	1.000	2.000	
Máñez, Luis	6.000	6.000	
Maquinar, Fraco. Victe.	4.000		
Martín Cortés, José	2.000	3.000	300
Martínez, José	3.000		
Martínez Bonet, Vicente	4.000	6.000	400
Martinez Viciado, Man.	500	500	
Martínez Zamorano, Bartolomé	3.750	3.750	150
Matas, Camilo	4.000	6.000	
Medina del Pomar, Joaquín	500	1.000	
Melchor, Joaquín	6.000	10.000	1.500
Miele, José	1.000	1.000	
Montaner, Gabriel	4.000	4.000	
Montaner Lombart, Gabriel		600	
Moreno Chavarrieta, Manuel		600	300
Morera, Victoriano	600	1.000	
Morte, Carmelo	600	1.000	150
Navarro, Felipe	3.000	9.000 ¹⁰²¹	
Nogués, Antonio Gregorio	500	1.000	
Palos, Vicente ¹⁰²²		8.000	
Pallarés, Francisco	3.000	4.000	

¹⁰²⁰ Se trata de sus herederos.

¹⁰²¹ Por sí y como encargado de los negocios de Vicente Tomás Traver.

¹⁰²² Por sí y como encargado de los negocios de José Sombiola.

Pasqual, Cristóbal	4.000	5.000	500
Pérez Clemente, J. Ant.	600	500	
Peris, José	3.000	3.000	400
Pinazo, José	4.000	4.000	
Piamonte, Vicente	200		
Picó, Vicente	1.500	1.500	150
Pro, Manuel	4.000	4.000	
Puig, Vicente		600	300
Puigcerver, Nicolás		600	
Ramón, Agustín	600	600	200
Ribera, José	6.000	8.000	1.500
Riera, Vicente Salvador	1.000	1.000	
Sacristán, Pedro	6.000	6.000	3.000
Sala, Juan Bautista	4.000	6.000	1.500
Salazar, Estanislao Xavier	3.000	5.000	400
Salelles Palos, José	2.000	3.000	200
Sanchis, Marcelo	2.000	3.000	
Sancho, Francisco	1.000	1.000	
Seguí, Vicente Luis	500		
Sellés, Crisanto	1.000	1.000	
Sombiola, José Antonio	6.000		
Soriano Nieto, José	8.000	8.000	1.000
Sulroca, Bernardo	5.000	7.000	400
Traver, Vicente Tomás	4.000		
Valentí, José Pascual	600	3.000	400
Valor, Vicente			600
Ximénez, Vicente	6.000	6.000	1.500
Ximeno Planes, Mariano	4.000	6.000	1.600

Media	2.747	3.215	631
--------------	--------------	--------------	------------

TERCERA PARTE:
PLEITOS Y ALEGACIONES

CAPÍTULO VIII: DESARROLLO DEL PLEITO

En esta tercera parte de la tesis me propongo realizar un estudio sobre el método y el discurso que los abogados utilizaban en las alegaciones jurídicas del siglo XVIII. Por la exigua bibliografía que existe sobre esta materia no he pretendido hacer sino una sucinta aproximación, eminentemente archivística, al modo en que los letrados argumentaban y defendían sus postulados, y al Derecho en que éstos fundaban sus argumentaciones. Es mi intención completar y profundizar más en este tema en un futuro próximo.

Pero antes de entrar en materia, he considerado conveniente analizar algunos pleitos de esta época, con el fin de que nos proporcionen una idea sobre la estructura y el desarrollo ante los tribunales del juicio civil ordinario, especialmente en su tramitación ante la Real Audiencia en grado de apelación. Tanto en el análisis de los pleitos, como de las alegaciones, me he ceñido a sólo aquellos que versan sobre el tema de herencias y sucesiones. Con ello he pretendido una mayor claridad expositiva y, tal vez, una mayor homogeneidad en las conclusiones. Los pleitos que he estudiado son de la última década del XVIII, por corresponder a un período más o menos equidistante entre la fundación del colegio y los nuevos estatutos de 1838, y, además, por no haber encontrado ninguna alegación de la siguiente centuria.

Poderes del procurador. Bastanteo

Cuando hablamos del otorgamiento de poder que aparece al principio de todo pleito —o, mejor, de su legajo—, hacemos referencia tan sólo a su copia, ya que el original queda en manos del escribano ante el que se ha otorgado. Raramente se presenta en el tribunal este original. De ser así con la súplica de devolución, en cuyo caso es el mismo escribano de la sala el que realiza la copia que se une al legajo.¹⁰²³

¹⁰²³ A.R.V., *Escribanías de Cámara*, año 1790, nº 33, primer ramo, folio 33.

Casi siempre se trata de un poder *general*, otorgado para todos los pleitos y causas, así civiles como criminales, empezadas o por empezar, y para actuar tanto en calidad de demandante como de demandado. En este sentido vemos cómo en la misma escritura de poder se relatan minuciosamente — aunque se quiera a título de ejemplo—, todas las actuaciones para las que se faculta al procurador.¹⁰²⁴ Pero podemos encontrarnos, en medio de la tramitación de un pleito, con otro otorgamiento de poder, que, siendo también general, se presenta con el objetivo concreto de revocar los poderes otorgados al procurador que ha actuado hasta ese momento, designándose en el mismo poder a los nuevos procuradores.¹⁰²⁵

Con mucha menor frecuencia nos encontramos con otorgamientos de poder *especial*. Casi siempre para la tramitación de los recursos y —sobre todo— para su desistimiento, aunque también en ocasiones para sólo constituirse en parte.¹⁰²⁶ Debemos tener en cuenta que el procurador debe apelar la sentencia que le fuere contraria, aunque esta facultad no estuviera

¹⁰²⁴ En concreto, podría tratarse de las siguientes facultades: "...comparezcan ante S.M. y señores de su Real y Supremo Consejo, audiencias y demás tribunales, jueces y justicias ... poner demandas, defensas y alegaciones, saquen de poder de escribanos y demás personas escrituras, testimonios y otros papeles, y los presenten donde convengan, o pongan excepciones, declinen jurisdicción, pidan e imploren beneficios de restitución, presenten escritos, testigos y provanzas, tachen y contradigan las del contrario, recusen jueces, letrados, escribanos y otros que convenga, expresen las causas de las recusaciones y se aparten de ellas, hagan y presenten pedimentos, requerimientos y protestaciones, insten execuciones, prisiones, secuestros, embargos, desembargos, soltieras, trances y remates de bienes, tomando la posesión y amparo de ellos, pidan costas, las juren y cobren. Hagan y pidan se hagan por las contrarias juramentos de calumnias desisorio, supletorio y otros que convengan, hagan autos y sentencias interlocutorias y difinitivas, consientan las favorables y de las adversas y perjudiciales apelen y supliquen, y sigan las apelaciones y suplicaciones hasta su fenecimiento o conclusión, ganen reales despachos, baletos requisitorias y hagan intimar donde y a quien se dirigieren, y finalmente hagan y practiquen todas quantas diligencias judiciales y extrajudiciales el otorgante haría y hacer podría, siendo presente que el poder que se requiere el mismo les da y confiere sin limitación alguna." A.R.V., *Escribanías...*, año 1790, nº 33, ramo primero, folio 1.

¹⁰²⁵ A.R.V., *Escribanías...*, 1791, nº 141, ramo segundo, folio 103. En este caso, de los dos procuradores designados en un principio, se revoca expresamente sólo al que de hecho venía actuando, y se designan cuatro nuevos, dos de la Audiencia y dos de los tribunales inferiores de la ciudad.

¹⁰²⁶ J. Febrero, *Librería de escribanos e instrucción jurídica theórico práctica de principiantes*, Parte Segunda, tres tomos, Madrid, 1786, III, pág. 38; y L. Gómez y Negro, *Elementos de Práctica Forense*, Valladolid, tercera edición, 1830, pág. 55. Para la interposición del recurso de apelación véase A.R.V., *Escribanías...*, año 1790, nº 2, ramo de apelación, folio 1. Para la interposición del recurso de segunda suplicación véase año 1791, nº 141, segundo ramo, fol. 204. Para la renuncia a la apelación véase año 1791, nº 44, fol. 39. Para la renuncia a la suplicación véase año 1790, nº 117, ramo de sala, folio 121, o año 1792, nº 25, segundo ramo, fol. 207. No obstante, en el pleito 120 de este mismo año fue el mismo principal el que se

recogida expresamente en la escritura de poder. Sin embargo, no puede continuar la apelación sin nuevo poder del representado.¹⁰²⁷ En el recurso de suplicación no son necesarios nuevos poderes, ni para su interposición, ni para su tramitación,¹⁰²⁸ de modo que seguirán actuando los mismos procuradores, y con el mismo poder, salvo mandato expreso del principal de renuncia a la continuación del recurso.

También he encontrado poderes especiales en otros supuestos más específicos, como son los siguientes:

a) Para la práctica de la transacción y convenio extrajudicial con la otra parte, a fin de solicitar del tribunal su aprobación y, consiguientemente, la conclusión de los autos.¹⁰²⁹

b) Para la continuación y conclusión del pleito tras la muerte del principal y en nombre de su sucesor.¹⁰³⁰

c) O para la intervención en el pleito no como parte principal, sino como interesado en alguno de sus apartados. Es el caso de Blas Valor que, habiéndose constituido como fiador de Nicolás Sempere para la interposición del remedio de segunda suplicación, otorga poder especial en favor de un procurador para que solicitara la revocación de la fianza y, se le tuviera por libre de toda obligación que conllevara.¹⁰³¹

Incluso, nos consta que algunos individuos otorgaban un poder general que, al mismo tiempo, era especial para una actuación en concreto. Una especie de poder "mixto". Así, José Honrrubia otorgó su

...poder general y bastante a Francisco Honrrubia, su hermano, para todos los pleytos civiles y criminales, movidos y por mover, así demandando como defendiendo, y particularmente para el que estoy

separó de la suplicación, sin intervención del procurador, y con la sola firma del abogado. Véase fol. 106 del segundo legajo. Para la constitución como parte véase año 1792, nº 52, fol. 77.

¹⁰²⁷ J. Sala, *Ilustración del Derecho Real de España*, Madrid, segunda edición, 1820, págs. 170 y 231.

¹⁰²⁸ Como excepción, en el pleito nº 93 (folio 99) del año 1792, dictada sentencia de vista, se reitera el poder —de nuevo general— antes de presentar el escrito pidiendo su mejora en suplicación.

¹⁰²⁹ A.R.V., *Escribanías...*, 1790, nº 209, ramo segundo, folios 59, 61 y 63.

¹⁰³⁰ A.R.V., *Escribanías...*, 1791, nº 141, ramo segundo, fol. 86. En este caso el poder especial se otorga en favor de sólo el procurador que había actuado hasta ese momento, y no de los demás que junto a él habían sido designados.

¹⁰³¹ A.R.V., *Escribanías...*, 1791, nº 141, ramo segundo, fol. 246.

siguiendo en esta villa sobre, ... y asimismo se le doy para que pueda poner demanda sobre el mayorazgo...¹⁰³²

En cualquier caso, el poder se otorga ante testigos y estando ausentes los procuradores. Así es porque se podía otorgar en cualquier población en favor de los procuradores de la Audiencia, que en esos momentos se encontraban en la capital. Aparece escrito a lo largo de tres o cuatro páginas, con una media de 60 a 90 líneas, si es general, y normalmente algo menos si es especial.

El número de estos procuradores solía ser el de dos o tres para cada tribunal: ordinario y Real Audiencia. El poder se otorgaba a cada uno de por sí y a todos ellos solidariamente. Cuando los poderes se otorgaban para actuar en juzgados ordinarios, se hacía en favor de sólo procuradores de esta categoría, a no ser que esta primera instancia se desarrollara en juzgados de la ciudad de Valencia, en cuyo caso también se designaban procuradores de la Audiencia.¹⁰³³ Cuando la causa llegaba a la Audiencia en apelación, se designaban con las mismas facultades nuevos procuradores, o bien sólo para la Audiencia —que es lo más habitual—, o bien además para los juzgados ordinarios de la ciudad de Valencia, aunque la causa se hubiera conocido en primera instancia fuera de la capital. Raramente se vuelven a designar en esta segunda instancia procuradores de los juzgados ordinarios de la población de procedencia, y de hacerlo suelen ser los mismos que allí actuaron.¹⁰³⁴ Incluso, en algún pleito nos podemos encontrar, al mismo tiempo, con otorgamiento de poder para los juzgados ordinarios, para la Audiencia y para la Corte.¹⁰³⁵

Los procuradores de la Audiencia aparecen siempre designados como "del número", mientras que los de los juzgados inferiores tan sólo esporádicamente. En ocasiones, incluso, estos últimos aparecen designados

¹⁰³² A.R.V., *Escribanías...*, 1792, nº 52, fol. 1. En los folios 416 y 420 de este mismo pleito encontramos otros dos supuestos más de poder "mixto".

¹⁰³³ A.R.V., *Escribanías...*, 1791, nº 45, ramo primero, folio 21.

¹⁰³⁴ A.R.V., *Escribanías...*, 1790, nº 7, ramo segundo, folio 1. Se trata de procuradores numerarios del juzgado ordinario de San Felipe. O año 1792, nº 54, tercer legajo, sobre procuradores numerarios de los juzgados ordinarios de Alzira.

¹⁰³⁵ A.R.V., *Escribanías...*, año 1792, pleito 93, folios 1, 89 y 99. En el primer folio a los apoderados en Madrid se les designa con el nombre de "procuradores de los Reales Consejos en la Villa y Corte de Madrid". En los otros dos folios son nombrados como "pasantes de leyes".

por su oficio; labrador, maestro sangrante, jornalero..., sin hacer referencia alguna al término "procurador".

Aunque las dos partes nunca son representadas de hecho por el mismo procurador, lo normal es que entre los designados por ambas alguno de ellos lo sea de las dos.¹⁰³⁶

Junto con la entrega de la copia del poder, el procurador presentaba ante el tribunal escrito —breve, máximo una página—, solicitando se le tuviera por parte y se le comunicaran todas las diligencias. Si bien, este escrito con esta única finalidad sólo lo podía presentar la parte demandada, puesto que el demandante o recurrente incluía esta petición dentro del suplico de la demanda, o de cualquier otra primera pretensión que presentaba. El escrito de presentación se reiteraba cuando, mediando procedimiento, era otro de los procuradores designados el que iba a continuar la tramitación de los asuntos.¹⁰³⁷

En cuanto al bastanteo —declaración de un abogado sobre la suficiencia del poder general o especial otorgado—, siempre aparece en el ramo de la Sala, pero no en los juzgados inferiores.¹⁰³⁸ Se concreta con la firma de un abogado con su primer apellido en el margen izquierdo de la copia del poder, precedida de la palabra "bastante" o "bastante para pleitos". Este abogado será el que presentará el primer o los primeros escritos. El bastanteo aparece también en la copia que presenta el procurador renunciando y delegando su oficio y todas sus causas en favor de otro, que no tendrá por qué ser uno de los designados en el otorgamiento inicial, y que repetirá el escrito de presentación.¹⁰³⁹

¹⁰³⁶ Caso de Salvador Pallarés, *Escribanías...*, 1790, nº 2, ramo segundo, folios 1 y 18. En el pleito nº 25 del año 1794, en su tramitación en sala, una parte designó como procuradores de la Audiencia a José Vallés, Manuel Escolano, Luis Fita y Raimundo Sanchis, y de los juzgados ordinarios a Juan Bautista Lázaro, José Romero y Blas Lucas. La otra parte designó para la Audiencia a Francisco Teodoro Botella y Luis Fita, y para los juzgados ordinarios a Juan Bautista Lázaro y a Blas Lucas.

¹⁰³⁷ A.R.V., *Escribanías...*, 1790, nº 33, ramo segundo, folio 224, ó año 1792, pleito nº 54, tercer legajo, folio 45.

¹⁰³⁸ Tan sólo esporádicamente encontramos el bastanteo en primera instancia, al parecer si se tramitaba el pleito en algún juzgado de la ciudad de Valencia, A.R.V., *Escribanías...*, 1791, nº45, ramo primero, folio 21.

¹⁰³⁹ A.R.V., *Escribanías...*, 1790, nº 33, ramo segundo, folios 230 y 231.

El procurador siempre firmará en la parte derecha de todos los escritos que presente, en representación de su principal.

Todo lo que hemos dicho hasta ahora viene referido al poder otorgado al procurador. Pero en un pleito de 1792 —sobre la sucesión de un mayorazgo—, encontramos tres otorgamientos un tanto diferentes, en cuanto que el abogado aparece de una forma singular. En el primero, el principal, al llegar supuestamente a la mayoría de edad, confirma el poder no sólo del procurador, sino también del abogado que hasta ese momento se había ocupado del proceso. Ambos habían sido designados por su madre en su momento, como tutora y curadora. En el segundo otorgamiento, el nuevo principal concedía —o mejor dicho reiteraba— todo su poder especial y general al mismo abogado, pero a ningún procurador. Y en el tercero, era este abogado el que nombraba a los procuradores para que le substituyeran en los poderes que le había otorgado el principal, entre los cuales se encontraba la facultad de poderlos delegar. En el primer y tercer caso, además, la copia de la escritura aparecía bastantada por el mismo abogado al que se le reafirmaba en el poder.¹⁰⁴⁰

¹⁰⁴⁰ A.R.V., *Escribanías...*, 1792, nº 52, folios 204, 362 y 364, respectivamente. El caso es como sigue: Águeda Rodríguez, como tutora y curadora de su hijo Galcerán Pérez, había otorgado desde Guadix poder especial en favor de Tomás Ródenas de Ayora, el cual, en virtud de la facultad de substitución que le había sido otorgada, designó como procurador en la Real Audiencia a José Vallés, interviniendo como letrado Francisco de Paula Soler. Al llegar Galcerán a la mayoría de edad, fue cuando "otorga que da todo su poder cumplido, tan vastante y firme como para valer en derecho se requiere y es necesario, a Dn. Francisco Soler, abogado de los Reales Consejos en dicha ciudad de Valencia, y a Dn. Josef Ballés, Procurador en la misma y de dicha Real Audiencia, a los dos juntos y a cada uno de por sí ... en que se alle la referida demanda que sigan y fenezcan por todos los trámites de derecho, asta que por sentencia difinitiva se declare todo a su favor." Posteriormente, al fallecer Galcerán, Águeda Rodríguez, como tutora y curadora de su otro hijo Juan Pérez, nuevo sucesor en el mayorazgo, daría todo su poder a Francisco de Paula Soler "especial para el pleito pendiente en ella [Audiencia] a instancia de dicho Dn. Galcerán, defunto y general para que en él y en los demás que ocurran en dicha ciudad ayude y defienda al citado Dn. Juan". Finalmente, Francisco de Paula —abogado— designaría como procurador, entre otros, al que venía llevando el caso hasta el momento, José Vallés.

Abogados

Su firma aparecerá siempre al final de casi todos los escritos que presente el procurador, en su parte izquierda. Y digo casi todos por que hay algunos en los que nunca, o raramente, aparece. Según Gómez y Negro:

Los procuradores no pueden hacer por sí más que unos pedimentos que se llaman de cajón, es decir, los pequeños, como para acusar rebeldías, pedir prorogaciones, dar relaciones por concertadas y otros semejantes; fuera de éstos todos los demás deben estar firmados por los abogados.

Sólo, pues, los abogados tienen facultad para patrocinar a las partes exponiendo a los jueces sus derechos y defensas.¹⁰⁴¹

De un examen de los pleitos se pueden advertir una serie de pautas comunes sobre esta práctica. Por lo general, los abogados no firman los escritos en que se solicita el cumplimiento de algún término por la parte contraria, tras su incumplimiento.¹⁰⁴² Esto se convierte en norma casi absoluta cuando se insta del tribunal que requiera a la parte contraria para que restituya los autos, por haber pasado el término que se le concedió para su consulta. Se trata de una práctica abundantísima en todos los pleitos. Seguramente por ello es un escrito breve, conciso, y casi siempre idéntico.¹⁰⁴³ Tampoco suelen firmar los escritos en que se pide la ampliación del término probatorio y la publicación de probanzas.¹⁰⁴⁴ Sin embargo, sí suelen firmar el escrito en que se pide una ampliación del término que se le concedió a la propia parte para la presentación de cualquier escrito, o para la consulta de los autos.¹⁰⁴⁵ Aún así lo firmará sólo el procurador, lógicamente, cuando dicha ampliación se solicita

¹⁰⁴¹ L. Gómez y Negro, *Elementos de ...*, págs. 56 y 57.

¹⁰⁴² A.R.V., *Escribanías...*, año 1790, nº 6, segundo ramo, folios 14, 15, 16, 17 ó 19. Como excepción, folio 34 de la apelación del pleito nº3 del mismo año.

¹⁰⁴³ Por ejemplo "Salvador Pallarés, en nombre de Francisca Carbonell y otros con Lázaro Carbonell, ante V. Exa. parezco, y como mejor proceda digo: Que los tiene Manuel Escolano y es pasado el término. Suplico a V. Exa. mande se le apremie a su restitución. Que así es justicia." Pero aun en este supuesto nos podemos encontrar con excepciones, es decir, casos en los que aparece la firma del abogado: véase año 1791, nº 44, folios 17, 19 ó 23.

¹⁰⁴⁴ A.R.V., *Escribanías...*, año 1790, nº 117, ramo segundo, folios 52, 53, 58 y 59. Pero también encontramos excepciones; véase pleito nº 45 del año 1791, folios 166 y 168 del primer ramo y 128 del segundo, en donde el abogado sí firma la publicación de probanzas.

por la ausencia del abogado. Como vemos, se trata de normas de observancia más o menos generalizada, pero en ningún caso categóricas.

En otro orden de cosas, es interesante comprobar cómo a lo largo del mismo procedimiento raramente figura un único abogado para cada parte. En principio es diferente el abogado de la primera instancia al de la segunda, cuando aquélla se celebra fuera de la capital. Ello es debido a la conocida exigencia de colegiación cuando se pleiteaba en la Audiencia o juzgados dependientes de la ciudad de Valencia. Pero si durante la tramitación de la causa en los juzgados ordinarios ya es habitual el cambio de letrado, este cambio resulta mucho más frecuente dentro de la misma Audiencia, tanto en apelación como en suplicación, aunque no se produzca necesariamente este cambio cuando se pasa de instancia dentro de la misma sala. De esta forma, unos letrados continúan la tarea de otros, o bien se van alternando en la misma causa. También es habitual que dentro de las muchas peticiones firmadas por un mismo abogado se intercale una sola firmada por otro, y que puede ser o no de contenido meramente procedimental. Varias son las interpretaciones que podríamos dar a esta práctica, pero ninguna, vaya por delante, la explicaría en su totalidad. Lo más probable es que se trate de una combinación de todas ellas, sin que podamos considerar el fallecimiento del letrado o el paso del tiempo más que como una causa meramente accidental.

En primer lugar, es posible que estos abogados trabajaran conjuntamente. Tal vez compartían despacho. Sin embargo, no he podido distinguir todavía —si es que existe—, alguna práctica común sobre quiénes firman unos pedimentos y quiénes otros, o si existía un abogado principal al que contrataban las partes y para el que trabajaban los demás abogados de su despacho. Tan sólo está claro que el letrado que practica el bastanteo es casi siempre el que suele firmar el primer escrito: demanda, recurso o, simplemente, personación.

En muchos escritos nos encontramos con la expresión "abogado director" —en alguno incluso "patrono"—. El estudio de estos pleitos me lleva a la conclusión de que, en la mayoría de las ocasiones, se trata de una mera

¹⁰⁴⁵ A.R.V., *Escribanías...*, año 1791, nº 45, ramo segundo, folios 51 y 57. O nº 210, segundo legajo, fol. 181. Excepción sería el folio 24 del pleito nº 44 del mismo año.

denominación formal, sin ningún significado distinto al de simple abogado. Al menos en estos momentos. Esto se observa claramente al aparecer esta expresión en pleitos defendidos por un solo letrado,¹⁰⁴⁶ o cuando en la tasación de las costas del proceso, y en el apartado del "abogado director", se incluyen los pedimentos firmados por todos los abogados que han intervenido, sin distinción entre ellos.¹⁰⁴⁷ En la tasación de otros pleitos, y bajo el nombre de un abogado que aparece como director, se incluyen tanto las peticiones firmadas por él como las firmadas por sus colegas.¹⁰⁴⁸

Una segunda posibilidad es que fueran los procuradores los que designaran al abogado o abogados, entre los que usualmente trabajaban para cada uno de ellos. Hay que tener en cuenta que las partes podían residir en poblaciones muy alejadas de la capital, en donde, por exigencias del colegio, debían vivir los abogados que ejercían en la Audiencia. De esta manera difícilmente podrían conocer a quienes les iban a defender. Pero, por el mismo motivo, lo que es seguro es que las partes tampoco conocieran a los procuradores, con lo que éstos serían designados seguramente por el escribano. En definitiva, se supone que el cambio de procurador conllevaría al mismo tiempo un cambio de letrado. Pero en la práctica no siempre ocurría así.¹⁰⁴⁹

En tercer lugar, podría ser que los litigantes confiaran directamente su causa a varios abogados conjuntamente, o a unos a continuación de otros. Esta explicación podría ser la más convincente en un principio, si no fuera porque comparte el mismo inconveniente que el aludido en el punto anterior. De hecho, no he encontrado ninguna relación entre la procedencia de los principales y la de los abogados que los defienden en la Audiencia.

¹⁰⁴⁶ A.R.V., *Escribanías...*, año 1790, pleito nº 6, fol. 31 B, o año 1792, pleito nº 25, fol. 213.

¹⁰⁴⁷ A.R.V., *Escribanías...*, año 1791, pleito nº 141, segundo legajo, fol. 256 B, o año siguiente, pleito nº 52, fol. 496 B.

¹⁰⁴⁸ A.R.V., *Escribanías...*, año 1790, pleito nº 3, fol. 87 del tercer legajo; o pleito nº 28 del año siguiente, segundo legajo, fol. 80 B.

¹⁰⁴⁹ En el pleito 141 de 1791 vemos cómo la destitución del procurador y el nombramiento de uno nuevo lleva aparejado el cambio de abogado. Sin embargo, en los pleitos 10 y 54 del año siguiente se designa un nuevo procurador, por fallecimiento del anterior, sin cambio de letrado. En el nº 10 —folio 46— es interesante véase cómo es la parte contraria la que pone en conocimiento del tribunal dicho fallecimiento, solicitando del tribunal que se entiendan las notificaciones y diligencias con otro procurador de los nombrados en la escritura de poder, y que la misma parte contraria señale. Lo que se hace saber al principal, que designa a otros

En junta del colegio se vieron algunos decretos del Real Acuerdo que confirman como causa de esta variedad de firmas la combinación de las tres posibilidades expuestas. Por decreto de 19 de octubre de 1818, el Acuerdo mandaba al colegio que los abogados no firmaran unos por otros, para así evitar la duplicidad de derechos. En el informe que le remitió como contestación, la Junta manifestaba que

...sin embargo, podrá merecer la consideración de V. E. en este punto, el buen concepto y honor de varios abogados de este Colegio, quienes tienen en su estudio o despacho discípulos u otros abogados incorporados, los cuales por indisposición, encargo u ausencia de aquéllos trabajan y firman los pedimentos, y en estos casos positivamente notorios, parece que no deba entenderse la prohibición, pues se reputa una misma firma.¹⁰⁵⁰

Otro decreto de 24 de mayo de 1819, además de recordar a los abogados la prohibición de no firmar unos por otros, mandaba a los procuradores de la Audiencia y juzgados inferiores que no variaran de letrado en la dirección de los pleitos, sin orden expresa de los principales, ni pasaran los procesos a otro estudio, sino al del abogado que subscribía los escritos. Y todo ello bajo la multa de 50 libras.¹⁰⁵¹

A continuación voy a exponer, a título de ejemplo, algunos casos que reflejan claramente cómo varios letrados defienden una misma causa:

En un pleito tramitado en 1791 en primera instancia en los juzgados ordinarios de Valencia, sobre nulidad de testamento, tanto demandante como demandado sólo se valieron de un solo abogado —Antonio Urgelles y José Beneyto, respectivamente—. Ya en sala, y en grado de apelación, el recurrente se valió de Antonio Urgelles y después de José Gregorio Genovés, mientras que el recurrido continuó con José Beneyto. Y en grado de suplicación, el recurrente se valió sólo de José Gregorio Genovés, mientras que el recurrido de José Beneyto, de Pedro Quegles, de nuevo de José Beneyto, y de Joaquín Mascarós, por este orden, para finalizar, de nuevo, con José Beneyto.¹⁰⁵²

procuradores distintos. Posteriormente, el nuevo procurador, por marcharse a la corte, delega sus poderes en otros seis. A su regreso vuelve a asumir la representación.

¹⁰⁵⁰ A.I.C.A.V., libro 5, junta de 5 de noviembre de 1818, pág. 285.

¹⁰⁵¹ A.I.C.A.V., libro 6, junta de 5 de junio de 1819, pág. 1 B.

¹⁰⁵² A.R.V., *Escribanías...*, año 1791, pleito núm. 45.

En la primera instancia de otro pleito empezado a tramitar en Castellón de la Plana el año anterior, sobre restitución de bienes extraídos del inventario, el demandante nombró a un solo abogado —Vicente Vilar—, y el demandado a dos —Vicente Rocafort y José Cases—. En apelación, el recurrente se valió de nuevo de José Cases, por estar colegiado, con escritos intercalados firmados por Martín Chicano y por José Peris. Mientras, el recurrido fue defendido primero por Lorenzo Martínez, después por Vicente Alfonso y, finalmente y de nuevo, por Lorenzo Martínez.¹⁰⁵³

Otro ejemplo es la apelación de un pleito del mismo año 1790, esta vez sobre la validez de una donación, tramitado en primera instancia en la población de Quatretonda, en donde el recurrente se sirvió de dos abogados indistintamente —Antonio Casanovas y Ramón Sanchiz—, y el recurrido de cuatro, —Francisco de Paula Nebot, Antonio Gregorio Nogués, Manuel Bernardo Clemente, de nuevo Antonio Gregorio Nogués, y finalmente Gabriel Montaner—. ¹⁰⁵⁴

La mayoría de los restantes pleitos que he estudiado presentan una situación semejante, aunque no todos ellos se refieren a herencias o sucesiones.¹⁰⁵⁵

¹⁰⁵³ A.R.V., *Escribanías...*, año 1790, pleito núm. 117.

¹⁰⁵⁴ A.R.V., *Escribanías...*, año 1790, pleito núm. 3.

¹⁰⁵⁵ La intervención de los abogados en los restantes pleitos que he visto sería la siguiente:

Año 1790:

— En el pleito nº 2, en grado de apelación sobre sucesión de un mayorazgo, podemos encontrar tres partes, una defendida por un solo abogado, Francisco de Paula Soler, otra por dos, Pedro Aparici Ortiz y Manuel Pro, y la otra por tres, por orden de aparición, Francisco Vilatela, Agustín Borrás y Bartolomé Martínez Zamorano. En grado de suplicación siguen apareciendo, por una parte Francisco de Paula Soler, por la otra Manuel Pro, y por la otra Agustín Borrás.

— En el pleito nº 4, y en apelación sobre posible incumplimiento de promesa de matrimonio, ambas partes se sirven de un mismo abogado, Francisco de Paula Soler y Manuel Antonio Almela. Si bien, la parte de este último se vale de otro, Andrés Corones, para solicitar al final certificación de la sentencia definitiva.

— En el pleito nº 6, también en apelación y sobre reintegro de ciertos pedazos de tierra, hay un solo abogado por cada parte, Cristóbal Ojalde y Gabriel Pelechá.

— En el pleito nº 7 se presentan tres partes en apelación sobre delimitación de cierta senda. Una defendida sólo por Pablo Font. La otra por Joaquín Fuertes y Vicente Armengol. Y la otra, por orden de aparición, por José Povo Buzarán, José Clara y March (antes Salelles y Molina), de nuevo José Povo Buzarán, para después volver a aparecer José Clara y March, y, finalmente, Bernardo Sulroca. En suplicación, una parte es defendida por Pablo Font y la otra por Bernardo Sulroca.

— En el brevisimo pleito nº 22, caso de corte y sobre sucesión de vínculo, por una parte interviene Lorenzo Martínez y por la otra Fernández Blasco.

— En el pleito nº 33, en primera instancia, y en Tibi, sobre nulidad de testamento, intervienen dos partes, una defendida por Joaquín Soler Pérez y Assiain y José Bernabeu y Cortés, y la otra

por Tadeo Rico. En apelación, esta última parte será defendida por Andrés Blat, y aquélla por Martínez —que sólo bastanteará— y Gabriel Montaner. En suplicación, la primera continuará con Andrés Blat y la segunda —que es la que presenta el recurso— será defendida por Bartolomé Martínez Zamorano.

— En el pleito nº 99, extenso caso de corte sobre pertenencia de la baronía de Beniffalim, encontramos tres partes. Una defendida por Matías Perelló, Vicente Albors, y de nuevo Matías Perelló. La segunda, y por orden de aparición, por Cristóbal Tarazona, José Campos, Matías Pérez Cordovés, Vicente Ximénez, de nuevo Matías Pérez Cordovés, Cristóbal Tarazona, Matías Pérez Cordovés y Vicente Ximénez. Y en la tercera encontramos a cinco abogados, Tomás Bernardo Soriano, Pascual Cardona, Juan Bautista Alberola Sala, Joaquín Monserrat Barberá y José González.

— En el pleito nº 195, y en primera instancia en Gandía, sobre nulidad de disposición testamentaria y codicilar, una parte está defendida por Rafael Estevan y la otra por —sin estar demasiado claro— José García, Francisco Cebrián y José Just y Fuster. En apelación, esta última —el cabildo— tiene como abogado a sólo Manuel Pro, y la otra parte a sólo también Cristóbal Ojalde.

— En el pleito nº 209, en primera instancia en Xixona, y sobre los bienes recayentes en una herencia, los abogados de una parte son José Bernabeu y Cortés, Francisco Ignacio Soler y Francisco Miralles. Los de la otra José Francisco Pérez, Juan Bautista Carbonell, Antonio González Torrosella, Simón González Guzmán y, de nuevo, Antonio González Torrosella. En apelación, la primera parte se valdrá de José Ferrando y de Pedro Aparici y Ortiz, y la segunda de Antonio Casanovas. Otro abogado, Vicente Irúnzum, firmará una escritura de transacción y convenio entre ambas partes, y bastanteará poderes para acordar este convenio.

— En el cortísimo pleito nº 227, sobre sucesión de vínculo, en que por rebeldía de una parte sólo interviene la otra, ésta es defendida por un sólo abogado: Cristóbal Ojalde.

Año 1791:

— En el pleito nº 28, y en apelación sobre concurso de acreedores de una herencia, una parte se valió de Matías Perelló y la otra de Francisco de Paula Soler, Mariano Gascó, de nuevo Francisco de Paula Soler, Mariano Gascó y Francisco de Paula Soler.

— En el pleito nº 44, en apelación sobre nulidad de testamento, una parte se defenderá por José Pascual Valentí y Pedro Aparici y Ortiz (que sólo se encarga de tramitar la renuncia al recurso), y la otra por Tomás Luis Espí.

— En el pleito nº 141, caso de corte y al parecer sobre sucesión de vínculo (segundo legajo), el demandante de vale de Antonio Casanovas, Antonio Guerau, Vicente Ballester, de nuevo de Antonio Guerau, Vicente Ballester y de Vicente Alfonso. El demandado se vale de Cristóbal Ojalde, después de Félix Fermín Calatayud, de nuevo Ojalde, Calatayud y Ojalde. En grado de suplicación, y en los trámites de interposición del recurso de segunda suplicación, el recurrente en las dos ocasiones (anteriormente demandante) se sigue valiendo de Vicente Alfonso, y el recurrido de Cristóbal Ojalde.

— En el pleito nº 210, sobre variación de testamento, una parte es defendida durante todo el proceso por Joaquín Boil, mientras la otra por Joaquín Aparici y Bas, en grado de apelación, y por José Ribera Gilabert, Juan Bautista Ferrando, José Ferrando y Pedro Aparici y Ortiz, en grado de suplicación.

— En el corto pleito nº 253, sobre sucesión de vínculo, hay sólo un abogado por cada parte, José Ribera y Manuel Morató.

Año 1792:

— En el pleito nº 10, caso de corte sobre nulidad de testamento, tanto en primera instancia como en segunda, cada parte tiene un solo abogado, Francisco Pallarés y Juan Andrés Ibáñez.

— En el pleito nº 25, en primera instancia en Monóvar, y también sobre nulidad de testamento, el demandante es defendido por Jaime Botella, y el demandado por Vicente de Cañas. En apelación, aquél tiene por abogado a Gabriel Montaner, y éste a Juan Bautista Alberola y Sala.

— En el pleito nº 52, y en primera instancia en la Audiencia sobre mayorazgo, una parte es defendida por Cristóbal Ojalde, y la otra por Francisco de Paula Soler y José Beneito. En suplicación, el recurrente sigue con Cristóbal Ojalde, para después valerse de José Antonio Sombiola, mientras que el recurrido se vale de José Beneito y de Francisco de Paula Isnart.

— En el pleito nº 54, y en grado de apelación sobre facción de inventario, una parte se vale de los abogados José Pascual Valentí y Pablo Font, y la otra de Pascual Cardona.

— En el pleito nº 93, caso de corte sobre nulidad de testamento, una parte es defendida por Mariano Ballester, tanto en primera instancia como en suplicación. La otra parte es defendida

Escritos de las partes

Podemos distinguir tres partes en todo escrito presentado por los procuradores: la identificación del pleito, el "digo" y el "suplico".

En la primera —que no suele ocupar más que unas pocas líneas—, se trata de situar al juzgado o tribunal en el pleito, de individualizarlo. Se sigue casi siempre el mismo orden: identificación del procurador que presenta el escrito y de su representado, de la parte contraria y su procurador, y, finalmente, del objeto de los autos.

En el "digo" se expresa el motivo del escrito, haciendo además un repaso a lo actuado hasta el momento y una exposición de los hechos en los que se basará la súplica. Es, con mucho, la parte más extensa de las tres, y en ella se entrevé, o incluso se expresa claramente —que es lo más habitual—, la petición que se va a introducir. Por lo tanto, se suele dividir a su vez en dos apartados: en el primero se expone la actuación o decisión que se pretende del tribunal; y en el segundo se pretende justificar dicha actuación o decisión a través de los argumentos y antecedentes de hecho oportunos. Es también usual que en el primero de estos dos apartados, y antes de introducir la nueva petición, la parte que presenta el escrito se remita en bloque a la pretensión y fundamentos alegados en los escritos anteriores —especialmente demanda o apelación, así como sus contestaciones—, y que identifica por el número de hoja en que se encuentran en el ramo. Se trata de recordar e insistir, a lo largo de todos los escritos, en la pretensión inicial y principal.

Por último, en el "suplico" se pide muy brevemente una determinada actuación de la justicia. En la mayoría de las ocasiones ni siquiera se hace manifestación expresa de lo que se pide, sino que se insta al tribunal a que

por Manuel Antonio Almela, en primera instancia, y por Antonio Llorente en suplicación, como parte recurrida.

— Y finalmente en el pleito nº 120, en el juzgado de Benigánim sobre sucesión a una herencia, una parte es defendida por José Juan y Pla y Juan Francisco Baldoví de Laviña, para después volver a ser defendido por Juan y Pla y Baldoví de Laviña. La otra parte es defendida por Pascual Joaquín Navarro, José Torres, de nuevo Navarro, y, por último, Antonio Fuster Piquer. En apelación, aquella parte fue defendida por José Pajarón, y ésta por Juan Bautista Marau y Manuel Cortés Sans.

actúe de acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores. A este suplico se le suele acompañar algún "otrosí", solicitando el recibimiento del pleito a prueba, comisión a otro juzgado, conclusión para definitiva, etc. Como veremos, todas estas peticiones también pueden constituirse en el motivo central del escrito.

De todo escrito presentado se da traslado a la parte contraria —por medio de auto—, para que alegue lo que estime oportuno, proceda con el siguiente paso, o para su simple conocimiento. El traslado se practicaría en estrados si se constituyese la parte en rebeldía.

Veamos a continuación cuáles son los escritos más importantes que presentan las partes:

Demanda y contestación

La demanda es el escrito en el que el actor o demandante expone ante el juez todo lo que pretende en juicio.¹⁰⁵⁶ En la contestación, el demandado responde negativamente a la petición del actor. Tanto en uno como en otro escrito aparecen relatados, tal y como los entienden las respectivas partes, todos los hechos que han originado la contienda y en los que basan sus alegaciones y defensas. En el caso de la contestación, estos argumentos van destinados a contradecir los hechos y razonamientos del demandante. En ningún momento se hace referencia, ni en estos escritos ni en ningún otro del pleito, a fundamento de derecho alguno, sino que las pretensiones se intentan apoyar en los mismos antecedentes de hecho o, muy esporádicamente, en principios jurídicos generales. En los más de veinte pleitos vistos no encontramos alusión a ley alguna. La fundamentación jurídica, como veremos, es propia de las alegaciones.

Tanto la demanda como la contestación son escritos por lo general extensos —de cuatro a diez páginas, es decir, de unas 80 a 200 líneas—, en donde el suplico en ocasiones reviste una importancia más destacada que en otros escritos, en cuanto que sienta claramente la pretensión y las actuaciones

¹⁰⁵⁶ J. Febrero, *Librería de...*, págs. 39, 53 y 125-126; J. Sala, *Ilustración del...*, págs. 184 y 191; y L. Gómez y Negro, *Elementos de...*, págs. 75 y 83.

que se pretenden del tribunal. Por lo mismo, su extensión es más larga que en otros escritos —en los mismos supuestos de unas 10 a 35 líneas—. ¹⁰⁵⁷

Réplica y Contraréplica

Se trata de dos escritos con los que queda fijado definitivamente el estado de la contienda, aunque no necesariamente se presentan en todos los juicios. ¹⁰⁵⁸ Incluso, en algunos sólo se introduce el escrito de réplica. ¹⁰⁵⁹ En este escrito de réplica o replicación, el actor procura satisfacer las razones de defensa que se le opusieron en la contestación, al tiempo que se ratifica e insiste en las razones que expuso en la demanda. Lo propio, y con respecto a la réplica, manifiesta el demandado en su escrito de contraréplica, también llamado súplica o duplicación. Al igual que en cualquier otro escrito, aquí las partes tampoco basan sus pretensiones en precepto jurídico alguno.

La extensión de estos dos escritos suele ser similar a la de la demanda y contestación, y nada impide que sea superior. ¹⁰⁶⁰

Recibimiento del pleito a prueba

Por lo general, esta petición se presenta en un otrosí del escrito de réplica o contraréplica, o, en su caso, de la demanda o contestación. Se puede haber introducido en éstos e insistido en aquéllos. También puede introducirse mediante un escrito con este único motivo. En este caso se trata de un escrito breve, una página de poco más de 10 líneas. Raramente se abre el juicio a prueba de oficio.

Tras el auto en que se admite el recibimiento del pleito a prueba se solicita la práctica de las pruebas pertinentes, siendo la testifical la más propuesta, por cuanto que se le da mayor importancia. ¹⁰⁶¹

¹⁰⁵⁷ Estos dos escritos se presentan, salvo excepciones, en los juzgados ordinarios o inferiores. En el pleito nº 33 del año 1790, la contestación se presentó ante la Audiencia ya que, como consecuencia de artículo previo interpuesto por uno de los demandados, el alcalde mayor de Tibi declaró la contienda ser privilegio de caso de corte. En este supuesto no se repitió la demanda ante la Audiencia, puesto que la justicia de Tibi remitió a la Sala, a requerimiento de ésta, los autos originales.

¹⁰⁵⁸ J. Sala, *Ilustración del...*, págs. 288-289. L. Gómez y Negro, *Elementos de...*, pág. 85.

¹⁰⁵⁹ Primer ramo del pleito nº 45 del año 1791.

¹⁰⁶⁰ En el mismo pleito nº 45 del año 1791 la demanda tenía 178 líneas en 8 páginas, y la réplica 181 líneas en el mismo número de páginas. Folios 16 y 31, respectivamente, del primer ramo.

Publicación de probanzas

Finalizado el término de prueba, tanto en primera instancia como en apelación y suplicación —si ha habido práctica de pruebas—, pueden las partes pedir que los ramos de éstas se unan a los autos principales, y se les pasen por su orden, primero al actor y después a reo. Con estos traslados se persigue que los litigantes "puedan ver recíprocamente todo lo que han justificado con testigos, instrumentos y demás medios de que se han valido y en vista de ello aleguen lo conducente a su defensa".¹⁰⁶² Se trata de un escrito breve, presentado con este sólo motivo, de una única página con 12 ó 13 líneas.¹⁰⁶³

Alegación de bien probado y conclusión para definitiva

Tras la ilustración por los litigantes del resultado de las pruebas, podrán presentar hasta dos escritos cada parte en concepto de alegación de bien probado, con efecto de instrucción legal para el juez.¹⁰⁶⁴ Lo normal es que este trámite se cumpla por el orden de presentación de la demanda y su contestación. Muchas veces sólo se presenta un escrito, y, de presentarse el segundo, lo presenta la parte que primero alegó, limitándose a ratificarse en el escrito anterior, sin embargo de lo alegado por la contraria, y, en ocasiones también, a concluir para sentencia.¹⁰⁶⁵

Se trata de que cada parte demuestre la veracidad de los hechos que ha alegado, así como su comunicación con las peticiones introducidas a lo largo de los escritos anteriores. Por ello se convierte en un escrito largo, normalmente el más largo de todo el procedimiento, en el que se narra amplia y detalladamente, y desde el punto de vista de la parte en cuestión, todo lo actuado desde el inicio del pleito, defendiéndose los propios postulados y

¹⁰⁶¹ José Ferrero, *Librería de...*, pág. 230.

¹⁰⁶² José Febrero, *Librería de...*, págs. 228-231, y L. Gómez y Negro, *Elementos de...*, pág. 120.

¹⁰⁶³ A.R.V., *Escrib...*, pleito nº 33 del año 1790 fols. 91 y 92, del ramo de apelación. O en el mismo año y ramo, pleito nº 117, folio 58.

¹⁰⁶⁴ J. Febrero, *Librería de...*, págs. 230-231 y 246; J. Sala, *Ilustración del...*, pág. 290; y L. Gómez Negro, *Elementos de...*, pág. 120.

¹⁰⁶⁵ A.R.V., *Escribanías...*, pleito nº 3 de 1790, ramo de apelación, folio 79; o nº 33, del mismo año y ramo, folio 209.

atacando los contrarios, e intentando fundamentar todas estas posiciones mediante el resultado de las pruebas.

A título de ejemplo, en un pleito sobre nulidad de testamento del año 1790, la demanda y la contestación tenían 118 y 70 líneas respectivamente, mientras que las alegaciones de bien probado tenían 115 y 99 líneas en grado de apelación. En suplicación la alegación del recurrente tenía 75 y 198 líneas, en dos escritos, y la del recurrido 259. En los dos recursos el recurrente es el demandante.¹⁰⁶⁶ En otro pleito de 1791, también sobre nulidad de testamento, la demanda tiene 178 líneas y la contestación 107, mientras que las alegaciones de bien probado 614 y 167, en dos escritos, y 523 líneas, respectivamente. En este mismo pleito en grado de suplicación la extensión de los escritos llega a ser de 297 líneas para el recurrente y de 1.005 para el recurrido.¹⁰⁶⁷

Con el escrito de conclusión para definitiva, las partes manifiestan al juez que no les queda nada más que justificar ni alegar en autos, solicitándole que los declare conclusos. Esta petición en pocas ocasiones se constituye en escrito al efecto, sino que lo normal es que se introduzca en otro por medio de un otrosí. Y este otro escrito normalmente es el de alegación de bien probado. De esta forma, y aunque se trate de dos trámites diferentes, generalmente los encontraremos juntos en el mismo escrito. Sin embargo, en algunas ocasiones, y en grado de apelación o suplicación, las partes no solicitan el recibimiento del pleito a prueba, con lo que en el primer escrito ya pueden concluir.¹⁰⁶⁸

José Febrero dice que:

...siendo dos [partes] solas las que litigan, y concluyendo la una se ha el pleito por concluso legítimamente, y no se debe dar traslado de la conclusión a la otra, como en el fuero eclesiástico se practica, sino únicamente hacérsele saber para que le conste que ya está concluso y no para otro efecto...¹⁰⁶⁹

¹⁰⁶⁶ A.R.V., *Escribanías...*, pleito nº 33 de 1790, folios 12 del primer legajo, y 34, 202, 205, 248, 250 y 259 del segundo. En este caso no existen alegaciones de bien probado en primera instancia por tratarse de un caso de corte, J. Febrero, *Librería de...*, pág. 45.

¹⁰⁶⁷ A.R.V., *Escribanías...*, pleito nº45 de 1791, folios 16, 28, 212, 227 y 238, del primer ramo, y 175 y 183 del segundo.

¹⁰⁶⁸ A.R.V., *Escribanías...*, pleito nº 117, año 1790, folios 20 y 25 del ramo de sala.

¹⁰⁶⁹ J. Febrero, *Librería de...*, pág. 246. Véase también J. Sala, *Ilustración del...*, pág. 290.

Pero lo bien cierto es que es la misma parte que concluye en primer lugar la que solicita que se dé traslado de este trámite a la otra, para que haga lo propio dentro de tercer día. Así es que presentada la conclusión por una parte —y por ende la alegación de bien probado—, se dará traslado a la otra u otras, siendo la última la que, de adherirse a la conclusión, solicitará que pasen los autos al relator para que recaiga sentencia.¹⁰⁷⁰ De no adherirse ésta, la parte que haya concluido se ratificará en su conclusión, y será la que solicite que pasen los autos al relator.¹⁰⁷¹

*Escritos de apelación y suplicación*¹⁰⁷²

La segunda instancia se inicia con lo que se llama "mejora" de la sentencia en apelación. Se trata de la personación ante la Real Audiencia de la parte que se cree perjudicada por la resolución recaída en primera instancia. Con esta personación, el apelante entrega testimonio, librado por el escribano del juez inferior, de la demanda, y en su caso reconvención, contestación, sentencia, interposición de la apelación y del auto de su admisión.¹⁰⁷³ Es muy frecuente que, posteriormente y a petición normalmente del recurrente, la sala ordene al juzgado la remisión de todos los autos originales.¹⁰⁷⁴

El recurso de apelación, por lo tanto, se interpone ante el juez ordinario que ha dictado la sentencia, y por el mismo procurador que ha actuado hasta este momento. No obstante, para su tramitación en la Audiencia se requiere un nuevo otorgamiento de poder. Se trata de un escrito breve —el de la interposición de la apelación—, unas dos páginas con 20 ó 30 líneas, en el que se suplica la admisión del recurso, en uno o dos efectos, así como el libramiento del correspondiente testimonio de mejora. Tan sólo se dice que la

¹⁰⁷⁰ A.R.V., *Escribanías...*, pleito nº 209 del año 1790, fol. 52 del segundo legajo; y nº 2, del mismo año, fols. 44, 57 y 60, así como 66, 73 y 82, en apelación y suplicación respectivamente.

¹⁰⁷¹ A.R.V., *Escribanías...*, pleito nº 7 de 1790, fol. 515 del segundo ramo; y nº 117, del mismo año, fol. 114 del ramo de sala.

¹⁰⁷² J. Sala, *Ilustración del...*, págs. 170, 231 y 238; y L. Gómez y Negro, *Elementos de...*, págs. 130-134.

¹⁰⁷³ A.R.V., *Escribanías...*, pleitos nº 2, 4, 6 y 7 del año 1790, folios tercero del ramo de apelación de cada uno de ellos.

¹⁰⁷⁴ A.R.V., *Escribanías...*, pleito nº 2 del año 1790, folio 11 del ramo de apelación.

sentencia es gravosa para la parte, sin concretar en ningún caso en qué sentido.¹⁰⁷⁵

Junto con el testimonio de mejora y la copia de la escritura de poder, el nuevo procurador del recurrente presenta escrito en la sala solicitando se le tenga por parte, se le siga considerando como pobre, en su caso, y se emplace a la contraria. En este mismo escrito o, normalmente, en otro posterior, es cuando solicita que se revoque la sentencia del inferior, ratificándose en los escritos presentados en primera instancia, que identifica por el número en que aparecen en autos. Además, puede aportar nuevas argumentaciones deducidas de los resultados de las pruebas si, a su entender, no fueron tenidos en cuenta en la resolución. En esto último apenas se incide si se insta de nuevo la apertura del pleito a prueba. En este caso la extensión del escrito será mucho menor. Normalmente de 30 a 40 líneas frente a las 100 ó 200 en el primer supuesto.

La otra parte se limitará a suplicar que se desestime el recurso, se confirme la sentencia inferior y, en ocasiones, a pedir que no haya recibimiento de prueba. También puede ratificarse en sus razonamientos y remitirse a sus escritos anteriores, por lo que se tratará de un escrito de extensión muy variable.¹⁰⁷⁶ Si no hay prueba, pueden ambas partes concluir para definitiva ya en este primer escrito.

En cuanto a la suplicación, ya sabemos que es tramitada por el mismo procurador que el de la apelación, puesto que el tribunal ante el que se interpone el recurso y que lo conocerá es la misma Audiencia. Al igual que en la apelación, aquí el recurrente también presentará dos escritos: la "súplica general", en la que se manifiesta que la sentencia de vista le es perjudicial y se solicita su mejora; y la "súplica especial", en la que ya se determinan los motivos concretos, así como las reformas o enmiendas que se esperan de la sentencia de revista. Citada la parte recurrida, el procedimiento se desarrollará al igual que en la instancia de vista. Si bien, lo normal es que sea mucho más breve, ya que lo que el recurrente suele pretender es sólo una reinterpretación

¹⁰⁷⁵ A.R.V., *Escribanfas...*, pleito nº 117 del año 1790, fol. 25 B; y nº 45, de 1791, fol. 244.

¹⁰⁷⁶ El recurso del pleito nº 2 del año 1790 (fol. 23), consta de 102 líneas; el del pleito nº 117 del mismo año (fol. 20) de 193 líneas, y el del nº 45 del año siguiente (fol. 22) de 30. Las contestaciones constan de 502 (fol. 44), 158 (fol. 25) y 73 líneas (fol. 23), respectivamente.

de los hechos o del resultado de las pruebas. Aun así, también se puede abrir nueva práctica de prueba, ciñéndose ésta por lo general a puntos más concretos.¹⁰⁷⁷ También se suelen producir la renuncia y el allanamiento con mayor frecuencia que en apelación.¹⁰⁷⁸

Recurso o remedio de segunda suplicación

Se trata, según Gómez Negro, de una revisión del proceso que concede el monarca en aquellas causas en que no cabe otro remedio contra el supuesto agravio ocasionado en segunda instancia.¹⁰⁷⁹ El conocimiento de este recurso compete al Supremo Consejo, por lo que la Audiencia se limitará a su admisión o inadmisión.¹⁰⁸⁰

Tasación de costas

La tasación de las costas del pleito se practicaba normalmente al final del procedimiento, pero también es usual que aparezca a lo largo de su tramitación, bien al final de una instancia, bien por la designación de un nuevo procurador, etc. Con lo que perfectamente podemos encontrarnos con varias tasaciones en un mismo proceso.¹⁰⁸¹ La petición de tasación puede presentarse por varias personas:

a) Por el abogado o el procurador, para que su principal —haya obtenido resolución judicial satisfactoria o no—, abone las costas de las que tiene que hacerse cargo.

b) Por una parte, solicitando conocer los gastos que se han ocasionado hasta el momento, o que la otra parte, cuya pretensión ha sido finalmente desestimada, se haga cargo de ellos.

c) Por esta última parte, solicitando conocer su débito total.

Las partidas que podemos encontrar en cualquier tasación son, por orden en que aparecen, las siguientes:

¹⁰⁷⁷ A.R.V., *Escribanías...*, pleito nº 2, año 1790, fols. 155 y ss. del tercer ramo. La suplicación del pleito nº 45 del año 1791 es bastante extensa. Si la apelación se desarrolla a lo largo de 47 folios, la suplicación contiene más de 160.

¹⁰⁷⁸ A.R.V., *Escribanías...*, pleito nº 7 y nº 117 de 1790, fols. 524 y 121, respectivamente.

¹⁰⁷⁹ L. Gómez y Negro, *Elementos de...*, pág. 134.

¹⁰⁸⁰ A.R.V., *Escribanías...*, año 1791, nº 141, folios 204 y sigs.

¹⁰⁸¹ A.R.V., *Escribanías...*, año 1790, pleito nº 117; o año 1791, pleito nº 141.

- Honorarios del abogado.
- Honorarios del escribano de cámara.
- Honorarios del relator.
- Honorarios del procurador.
- Derechos por el repartimiento de los autos.
- Honorarios del portero de cámara.
- Honorarios de los escribanos del otros juzgados.
- Derechos de registro y sello de las reales provisiones.
- Derechos de tasación.

En las partidas de los abogados, escribanos y procuradores, las cantidades aparecen individualizadas para cada pedimento o diligencia firmada, junto con el papel utilizado. Y al final aparece la suma de todas las operaciones.

Con respecto a los abogados, si bien es cierto que no se conocen tablas sobre sus honorarios —aranceles—, no es menos cierto que las leyes continuamente establecían límites a la libre contratación, intentando evitar cantidades excesivamente onerosas para los clientes.¹⁰⁸² En todo caso, esta libertad de contratación estaría condicionada por la práctica y costumbre del lugar, y por el tipo de negocio y la fama del letrado. Además, todo abogado estaba obligado a informar a las partes sobre sus salarios antes de iniciar el pleito.¹⁰⁸³ Aunque la legislación castellana es variada en este asunto, en todo momento estuvieron prohibidos los pactos de *quota litis* y de *pro victoria*, es decir —respectivamente—, sobre cierta parte del objeto de la contienda o de su valor, y sobre una cantidad determinada en relación con la resolución favorable, si se dictara.¹⁰⁸⁴

Si en unas ocasiones los aranceles de los letrados los determinaba el tasador del tribunal, en otras ocasiones el juez autorizaba, a petición del

¹⁰⁸² P. Alonso Romero y C. Garriga Acosta, *El régimen jurídico de la abogacía en Castilla (siglos XIII-XVIII)*, XIV, *Recueils de la société Jean Bodin our l'histoire comparative des institutions*, Quatrième partie, L'Europe Médiévale et Moderne, 1998, 51-114, págs. 88 y sigs.

¹⁰⁸³ *Nueva Recopilación* 2, 16, 7.

¹⁰⁸⁴ Sobre el pacto *quota litis* véase *Partidas* 3, 6, 14. El *Fuero Real* (1, 9, 1) establecía como límite a la retribución del abogado la veinteava parte de la demanda. Véanse estas disposiciones en *Los códigos españoles...*, III, pág. 87, y I, pág. 356, respectivamente. Sobre el pacto *pro victoria* véase *Nueva Recopilación* 2, 16, 8.

abogado, que la tasación se practicara por otro abogado, con la posterior aprobación judicial.

Según manifestaciones del mismo Berní y Catalá y de la Junta del colegio, debía evitarse que la tasación se llevara a efecto por el número de hojas de los escritos, de ahí que la Junta propusiera que se practicara por abogados designados por el mismo colegio, y sin coste para los litigantes.¹⁰⁸⁵ Por lo que he podido observar en los pleitos estudiados, a finales del XVIII parece ser que la tasación ya no tenía en cuenta la extensión del escrito.

Para Berní, “tassa el Juez de la Causa *LL. 11. y 12. tit. 16. lib. 2. Rec.*, sin que los Tassadores tengan que ver en estas costas, pues sería abuso reprehensible que un Tassador lego midiesse los trabajos Jurídicos”. Las *Ordenanzas* de Medina del Campo de 1489 —integradas en las citadas leyes de la *Nueva Recopilación*—, confirmaban que en los honorarios de los abogados y procuradores “no se puede poner tassa cierta”, si bien, al finalizar el pleito el juez se informaría de lo que hubieran pagado las partes y, considerada la calidad de la causa y de las personas, confirmaría las cantidades u ordenaría devolver los excesos.

De todas las partidas de las costas, la del abogado suele ser la más importante. Según la *Nueva Recopilación*,¹⁰⁸⁶ este salario no podía exceder para los letrados del Consejo, su corte y chancillerías, la veinteava parte de lo que valía el objeto del pleito, ni ser superior a treinta mil maravedís. Para los demás letrados, sus salarios no podían ser superiores a la mitad de los referidos. Este salario debía ser tasado y contado según la cuantía contenida en la sentencia en que la parte era condenada o absuelta, sin entrar en la condenación de las costas.

En los pleitos que he visto, estos salarios suponen aproximadamente un tercio del total de las costas.¹⁰⁸⁷

En definitiva, a finales del XVIII los honorarios de los abogados se sometían al convenio que éstos pactaban con las partes y, sólo en su defecto o

¹⁰⁸⁵ J. Berní y Catalá, *Resumen de los privilegios...*, privilegio XXVIII, págs. 60-63. A.I.C.A.V., junta particular de 20 de julio de 1762, libro 4, págs. 17 B-21 B.

¹⁰⁸⁶ *N. R.*, 2, 16, leyes 18 y 19.

¹⁰⁸⁷ Como los 493 reales y 16 maravedís sobre 1.748 reales y 30 maravedís en el pleito nº 3 del año 1790, o los 210,21 de los 695,20 del pleito nº 6 del mismo año, los 488,8 de los

si lo reclaman las propias partes, al “Tasador o al Colegio de Abogados, o lo regulan los mismos Jueces en los casos graves”.¹⁰⁸⁸

1.468,11 del pleito nº 28 de 1791, los 335,2 de los 1.018.29 del pleito nº 10 de 1792, o los 737,10 de los 2.301,5 del pleito nº 25 también de 1792.

¹⁰⁸⁸ A. J. Pérez y López, *Teatro de la Legislación...*, I, pág. 29.

CAPÍTULO IX: UN ESTUDIO SOBRE LAS ALEGACIONES JURÍDICAS EN EL SIGLO XVIII

Poco sabemos sobre esta materia. Como dije, la bibliografía es más que escasa.¹⁰⁸⁹ Las alegaciones jurídicas eran un escrito que las partes presentaban ante el tribunal que tenía que resolver el litigio —al parecer, en el momento en que el pleito quedaba visto para sentencia—.¹⁰⁹⁰ En ellas se hacía una recopilación de los fundamentos jurídicos de que se servía el letrado para defender las posiciones de su parte, al tiempo que se rebatían las posiciones de la parte contraria, en busca de una resolución judicial satisfactoria. Todo lo cual iba precedido de un resumen de los hechos que habían originado la contienda, y en los que se basaban las argumentaciones. Raramente aparecían firmadas por más de un letrado.¹⁰⁹¹ Según P. Alonso y C. Garriga:

Era ésta la gran oportunidad para que el togado, al final del juicio, hiciera gala de su preparación jurídica y su habilidad en la fundamentación y defensa del derecho de su parte. Su intención, lógicamente, se dirigía a orientar el ánimo de los jueces hacia sus intereses, aunque tampoco olvidaba que era en estos informes

¹⁰⁸⁹ Sobre el Derecho común en Indias hay un estudio de J. Barrientos Grandón, "*Mos italicus y praxis judicial indiana*", *Revista Interdisciplinar de Estudios Histórico-Jurídicos* 5-6 (1996-1997) 357-428. En materia de Derecho penal podemos véase a F. Tomás y Valiente, *El Derecho Penal de la monarquía absoluta. (Siglos XVI-XVII-XVIII)*, Madrid, 1969. Véase también M. Peset Reig, "Derecho romano y Derecho real en las universidades del siglo XVIII", *Anuario de Historia del Derecho Español* 45 (1975) 273-339, págs. 296-302.

¹⁰⁹⁰ Es muy posible que se presentaran tras la conclusión de las partes para sentencia, al menos en los tribunales superiores. Así se induce de algunas manifestaciones, como la del abogado que, en segunda instancia, escribe: "De esta sentencia apeló Camps en lo perjudicial, admitiéndola en lo favorable, como también Prat; y por las partes se ha alegado y concluydo para sentencia; y vista la causa, por lo que de ella resulta..." Véase *In laudem et honorem totius SSma. Trinitatis, atque Deiparae Virginis Desertorum Matris. Alegación jurídica por Martín Camps, ciudadano, con Luis Prat. Sobre la pertinencia y dominio de los bienes y herencia intestada de Vicente Prat, ciudadano*, B.U.V., R-2/361, núm. 29, pág. 3, pár. 1.

¹⁰⁹¹ La alegación Jesús, María, Joseph. *Alegación en hecho y derecho por el convento y religiosos del Patriarca Santo Domingo de Guzmán de la ciudad de S. Felipe. En el pleyto con don Manuel Sánchiz, vecino de la misma, como padre y legal administrador de don Thomás, don Joaquín, don Vicente, don Joseph, don Mariano y doña Mariana Sánchiz, sobre pretendida sucesión en los bienes y universal herencia de la difunta doña Vicenta Navarro, viuda de don Félix Thomás Sancho, vecina que fue de la propia ciudad de San Felipe*, B.U.V., Varios 77, número 21, aparece firmada por dos letrados: Benito Delfi y Cristóbal Tarazona.

donde mejor podía impresionar a su cliente y justificar los honorarios.¹⁰⁹²

Dividiré este análisis en cuatro apartados: materia objeto de estudio, aspectos formales de la alegación, fundamentos jurídicos, y estilo y método del discurso.

Objeto de las alegaciones

Comentaba al principio de esta tercera parte de la tesis que, en busca de una mayor claridad expositiva y, posiblemente, de una mayor homogeneidad en los resultados, había decidido centrar este estudio en una materia concreta de la realidad jurídica: las sucesiones. Para ello he elegido aleatoriamente una serie de alegaciones jurídicas sobre esta materia, intentando en la medida de lo posible que se situaran en las últimas décadas del Antiguo Régimen, puesto que no tengo noticias de ninguna del siglo XIX. Ante todo, debo decir que se trata de un estudio basado, eminentemente, en el discurso y en los razonamientos de los letrados, y no en el sentido de las leyes ni de los tratados de los autores. De ahí, que el contenido de las siguientes páginas no aspira a mostrar la regulación jurídica de las sucesiones, puesto que no es éste el objeto de este estudio. Además, y por otra parte, ni siquiera los mismos letrados —como veremos— convenían en punto alguno.

Atendiendo al motivo central discutido, las alegaciones que he estudiado las podríamos incluir dentro de uno de los dos siguientes grupos:¹⁰⁹³

¹⁰⁹² P. Alonso Romero y C. Garriga Acosta, "El régimen jurídico...", pág. 81.

¹⁰⁹³ Además de las alegaciones que irán apareciendo a lo largo de este estudio, hay otras que también he tenido en consideración en la realización del mismo. Son las siguientes: 1) *Jesús, María, Joseph y San Miguel Arcángel. Breve resumen de los fundamentos que parece persuaden el derecho de doña Isabel y doña Luciana Villarasa y Ariño, hermanas, en el pleyto que siguen con doña Josepha Malonda, como heredera de don Pedro Malonda, su tío, que se ha discordado sobre la sucesión y pertinencia de los bienes de Gerónimo Ariño, ciudadano, transportados a doña Isabel Ariño y constituidos por su dote en el matrimonio que contraxo con don Pedro Malonda; eo más propiamente sobre si por la muerte sin hijos ni descendientes de dicha doña Isabel pertenecieron a aquéllas las utilidades y rentas de los tales bienes, con exclusión del dicho don Pedro, su marido y heredero*, B.U.V., R-2/361, núm. 31. 2) *Alegación por el Dr. Juan Cabrera, presbítero, en el pleyto que en su nombre sigue Alexandro Ripoll, en grado de apelación, con Josepha María Cabrera, su hermana, muger legítima de Carlos Benet, y en su nombre Joseph Royo. Sobre la validez de la escritura que a favor del dicho Dr. Juan Cabrera otorgó su hermana*, B.U.V., R-2/362, núm. 39. 3) *Informe en hecho y derecho por el*

A) Sobre reivindicación de una parte o del todo de una herencia.

Por lo que a nosotros nos interesa, hay que partir de la base de que el ordenamiento valenciano era substancialmente diferente al castellano en cuanto al sistema de legítimas. Dependiendo de la fecha en que se otorgó el testamento —antes o después del decreto de Nueva Planta de 29 de junio de 1707—,¹⁰⁹⁴ se le aplicaría *Furs* o las leyes castellanas. En un primer momento,

dotor Félix Matoses, médico, vezino de la villa de Alaquás. Contra Vicenta Segorbe, viuda de Salvador Gutiérrez. Sobre pretender la susodicha que se le adjudique la sexta parte de los bienes de la herencia de Francisco Ferrer, notario, y que de ellos dexe vacua la possessión el dicho dotor Matoses, B.U.V., Varios 60, núm. 9. 4) Jesús, María y Joseh. Addición jurídica al memorial en Hecho y Drecho, que presentaron a los señores de la Real Audiencia el Licenciado Joseph Rombau, Presbítero y el Dr. Francisco Rombau, hermanos, únicos hijos herederos sobrevivientes de Marcelo Rombau, mayor, Padre común. Contra los nietos de dicho padre común, e hijos y herederos de Thomás Rombau, Legatario. Aviéndose discordado este pleyto de vista y propiedad, se haze precisa la addición, para que con más claridad se vea la justicia que assiste en la presente causa a los citados Joseph y Francisco Tombau, añadiendo fuerça a fuerça, y sin perjuicio de lo deducido, y alegado en la misma, desde la foj. 56. hasta 61. y demás, y memorial que se formó, acreditado en dos discursos que sirven de norte para satisfacer las objeciones contrarias, B.U.V., R-2/360, núm. 7. 5) Jesús, María, Joseph y San Antonio de Padua. Alegación en drecho por el Dr. Miguel Redorat, abogado, vezino de la villa de Castellón de la Plana. En el pleyto que sigue en esta Real Audiencia con Joseph Mars, María Bernarda Mars y María Francisca Mars, vezinos de dicha villa. Sobre que se declare pertenecerle al Dr. Redorat en representación del Lic. Pedro Compte, su hermano materno, los bienes del fideicomisso dexado por Mathías Compte, y que deven las contrarias reintegrarle de todos ellos, B.U.V., R-2/360, núm. 24. 6) Jesús, María, Josep, San Francisco de Paula y San Antonio de Padua. Breve insinuación del drecho que assiste a D. Juan Bautista de Isasi como curador de Doña Eufrasia María de Verastegui, muger legítima de Don Pasqual Caro y Fontes, en el pleyto con los executores testamentarios de D. Manuel Matheo de Tordezillas, marqués que fue de S. Felices y por estos Felipe Matheu. Sobre que no obstante la sentencia de revista pronunciada en el pleyto con Don Joseph Mariano de Verastegui, antecessor posehedor de los vínculos, cuya successión se ha diferido a Doña Eufrasia, le pertenece en propiedad la del que fundó Don Francisco Luis Castellá Doris de Blanes, comendador de Perpuchent, en virtud de los nuevos intrumentos hallados y restitución in integrum implorada, y se le deven mandar restituyr sus bienes con los frutos, B.U.V., Varios 240, núm. 13. 7) Jesús, María y Joseph. Fundamentos jurídicos que ha tenido el Dr. Joseph Aparici, abogado, divisor y contador, nombrado por Joseph Belenguer, padre y curador de Vicente y Rosa Belenguer, sus hijos, hijos y herederos de Esperança Alexandre, por Vicente Belenguer, como marido de Thomasa Alexandre, y por Luis Castelló, hijo y heredero único de María Alexandre, para hazer por sí la división y partija de los bienes y herencia de Pedro Alexandre Dolader. Por aver discordado con el Dr. Thomás Vicente Ballester, también abogado divisor y contador, nombrado por Vicente Alexandre, otro de los herederos del dicho Pedro Alexandre Dolader, B.U.V., R-2/361, núm. 7. 8) Jesús, María, Joseph. Por Chistóval Pasqual, sastre, en el pleito en grado de apelación, con Mariano Pasqual y Vicenta Pasqual, consorte de Pedro Ifach, sobre que se haga división y partija de los bienes que quedaron por fin y muerte de Joseph Pasqual, padre común, B.U.V., R-2/361, núm. 8.

¹⁰⁹⁴ Sobre los decretos de Nueva Planta y sus consecuencias véanse los siguientes estudios: Peset Reig, M., "Notas sobre la abolición de los fueros de Valencia", *Anuario de Historia del Derecho Español* 42 (1972) 658-715; del mismo autor "Apuntes sobre la abolición de los Fueros y la Nueva Planta valenciana", *Primer Congreso de Historia del País Valenciano*, 4 vols., 1976, III, págs. 525-536; o Peset Reig, M., Graullera Sanz, V., y Mancebo Alonso, M. F., "La Nueva Planta y las instituciones borbónicas", *Nuestra Historia*, 7 vols., Valencia, V (1980), págs. 126-148.

en *Furs* se establecía la legítima de un tercio o de un medio de los bienes en favor de los hijos —dependiendo de si eran hasta cuatro o más hijos, respectivamente—, y, para el caso de no haber descendencia, de otro tercio en favor de los ascendientes. Posteriormente, el sistema evolucionó hacia una libertad absoluta de testar, quedando la legítima reducida a sólo la porción que designaba el testador. De manera que el régimen inicial quedaría relegado a aquellos supuestos en que no existía testamento. La mejora, como la parte de la legítima que se distribuye entre los descendientes a voluntad del testador, no existe como tal en el derecho valenciano.¹⁰⁹⁵ En el derecho castellano, sin embargo, tanto el sistema de legítimas como el de mejoras estaban bien determinados. Por una parte, todos los bienes de los padres son legítima de sus hijos, a excepción de la quinta parte de libre disposición. Por otra, de los padres son legítima todos los bienes del hijo que no tuviera descendencia, a excepción del tercio de libre disposición. En cuanto a las mejoras, los padres podrán mejorar a cualquiera de sus hijos o descendientes, y de la forma que quisieran, en un tercio del patrimonio relicto, una vez deducido aquel quinto.¹⁰⁹⁶ En definitiva, la diferencia principal entre ambos derechos radicaba en la libertad de testar, propia del sistema valenciano, y desconocida en Castilla.

Pese a que la reivindicación de una parte o de la totalidad de una herencia es el objeto central de muchas alegaciones, las diferencias aludidas apenas son tratadas en los memoriales que analizaremos. Por una parte, porque tanto autores como tribunales conocían perfectamente cuándo debía aplicarse una legislación y cuándo otra; y, por otra parte, porque, como veremos, las argumentaciones de los abogados se basarán,

¹⁰⁹⁵ P. Marzal Rodríguez, *El derecho de sucesiones en la Valencia foral y su tránsito a la Nueva Planta*, Valencia, 1998, pág. 281 y sigs; y A. Garcia i Sanz, *Institucions de Dret civil valencià*, Castelló de la Plana, 1996, pág. 159. Véase los fueros citados por ambos autores. El abogado José Guillem Buzarán decía —en 1776, y con respecto a un testamento otorgado en 1692—, que “Su Magestad declaró en el Cap. 26 de las Cortes de 1606 que en adelante en ningún caso la legítima se entendiese prohibida sino fuese *por palabras expresas, especiales y específicas; no por conjeturas por muy urgentes y evidentes que fuesen*”. A este efecto alegaba que “Tres fueron los hijos y por ello, según Fueros, tocó por legítima a cada uno de ellos la tercera parte de todos los bienes y herencia del padre”. Véase *J.M.J. Alegación en hecho y drecho por don Juan Fermín Sanz, vecino de la villa de Vinarós, en los autos que en grado de vista y por caso de Corte sigue con don Juan Bautista Febrer y sus hermanos sobre que se declare de libre disposición lo que perteneció a doña María Theresa Ferrá, consorte que fue de dicho don Juan Fermín Sanz, de los bienes y herencia de su padre don Jaime Ferra*, B.U.V., Varios 298, núm. 10, párs. 74 y 75.

fundamentalmente, en el Derecho romano y sus comentaristas, igualmente aplicables en ambos ordenamientos, mientras que las referencias al Derecho real serán poco más que testimoniales.

B) Sobre vínculos, mayorazgos o fideicomisos en general.

Se trata, este segundo, del grupo más numeroso de alegaciones, estrechamente ligado con el anterior, y del que sería una especie, aunque difícil de deslindar. Además, por la singularidad del tema, he considerado oportuno detenerme en algunos puntos.

La mayoría de estas alegaciones tienen como base testamentos otorgados en las últimas décadas del siglo XVII o, como mucho, en las dos primeras del XVIII. Como excepción más significativa, tenemos un memorial sobre un testamento otorgado en 1395.¹⁰⁹⁷

Como sabemos, los mayorazgos en el Reino de Valencia carecían de una legislación propia, al contrario que en Castilla con las *Leyes de Toro*.¹⁰⁹⁸ De ahí que los autores valencianos se impregnaran de la doctrina foránea, especialmente de la castellana, intentando desarrollar unos pocos *furs* que, en principio, no se habían dado con esta intención.¹⁰⁹⁹ De hecho, algunos abogados consideraban que "los mayorazgos de la Corona de Aragón se han gobernado siempre por las reglas de los de Castilla", apoyándose en autores como Crespí o Bedoya.¹¹⁰⁰ Se trata de una afirmación del abogado José Beneito a propósito de pretender en 1772 la aplicación, para un mayorazgo

¹⁰⁹⁶ J. Sala, *Ilustración del Derecho...*, I, págs. 176-177. Véase, también, las leyes recogidas por este autor, especialmente *Leyes de Toro y Partidas*.

¹⁰⁹⁷ Jesús, María y Joseph. *Por el Excmo. Señor don Diego de Fenollet, Grande de España Honorario, Marqués de Llanera, Conde de Olocau &c. Con D. Joseph Joaquín Frigola, Barón de Cortes; sobre pretenderse por éste la sucesión en propiedad del vínculo eo Fideicomiso temporal, dispuesto por Doña Francisca Ripoll, extinguido y caduco desde 10 de Octubre del año 1500, según la solemne executoria con votos del antiguo Sacro Supremo Consejo de Aragón, por la que quedó ya decidida la actual solicitud, y demanda contra los causantes del mismo Barón de Cortes*, B.U.V., Manuscritos 695, núm. 4.

¹⁰⁹⁸ B. Clavero, *Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla 1369-1836*, Madrid, 1989, págs. 221 y sigs.

¹⁰⁹⁹ P. Marzal Rodríguez, "Una visión jurídica de los mayorazgos valencianos entre la época foral y la nueva planta", *Anuario de Historia del Derecho Español* 66 (1996) 229-364, págs. 229-230.

¹¹⁰⁰ *Derecho que assiste a D.ª Pasquala Anteume y Salazar, consorte de don Joaquín Esteve, regidor perpétuo por su Magestad de esta ciudad. En los autos que sigue con don Juan Bautista Llópiz Férriz, sobre la sucesión del vínculo que fundó Francisco Salazar, mercader*, B.U.V., Varios 54, núm. 6, párrafo 16.

regular valenciano fundado en 1646, de una pragmática castellana de 1615. Con ello defendía la preferencia de las hembras de mejor línea o grado en defecto de varón de cualquier edad, no mediando la expresa exclusión de aquélla. Este letrado afirmaba que esta pragmática era general para todos los reinos, y entre ellos para el de Valencia, por aquellas fechas "ya unido a Castilla" —según él—. Sorprendente afirmación esta última, por cuanto todos los abogados mostraban tener un certero conocimiento del tiempo y consecuencias que acarreó la Nueva Planta.

Pero no todos los abogados pensaban igual. Según la pretensión defendida en cada pleito, la postura a mantener será diferente. Claramente lo comprobamos cuando Ignacio Llopis Ferris y Salt opinaba, en 1772, y en la alegación contraria a la del párrafo anterior, que en Valencia debían aplicarse, en defecto de *Furs*, las disposiciones del derecho común —como Derecho y razón natural— y las leyes y costumbres del reino de Aragón, como reino más inmediato. Opinión para la que se valía de Belluga, León y Bas. Como consecuencia, concluía afirmando que ni en el Reino de Valencia ni en el de Aragón cabía la aplicación de las *Leyes de Toro*.¹¹⁰¹ Defendía la preferencia de la mayoría de edad natural sobre la civil, ya que a pesar de aparecer el mayorazgo como regular, las expresiones "primogénito" y "de mayor edad", junto con la de "no habida consideración a masculinidad", demostraban que el fundador no tuvo aquellas dos expresiones por una misma cosa.

Hablando en concreto de los mayorazgos fundados con anterioridad al decreto de Nueva Planta, todos los abogados convenían expresamente en que en primer lugar se les debía aplicar la legislación valenciana;¹¹⁰² que ya hemos visto que no existía de manera expresa para esta materia. Sin embargo, y para

¹¹⁰¹ Jesús, María y Joseph. *Informe legal por don Juan Bautista Llopis Ferris y Salazar para el pleyto pendiente en esta Real Audiencia, en grado de vista, que ha interpuesto don Joaquín Esteve, regidor perpetuo de esta ciudad, como marido de doña Pascuala Anteume, sobre la sucesión en propiedad del mayorazgo fundado por Francisco Salazar en su testamento de 11 de marzo de 1646*, B.U.V., Varios 54, núm 7, párs. 42 y sigs.

¹¹⁰² Jesús, María y Joseph, Joaquín y Ana, y Santa Teresa de Jesús. *Informe jurídico que presenta a los señores de la Real Audiencia de la presente ciudad y Reyno el administrador de los bienes y universal herencia del Dr. D. Juan Bautista Artaza de Durango, dean que fue de la Santa Cathedral Iglesia de la ciudad de Segorbe, en el pleyto que siguen en grado de apelación Antonio, Carlos, Ángela y Teresa Genovés, hijos de Pedro. Sobre una casa alquería y siete cahizadas de tierra sitas en la vega de esta ciudad, partida del Cabañal, próximas a la hermita de Nuestra Señora de los Ángeles, pretendiendo estarían sujetas a fideicomiso perpetuo, en*

algunos letrados, también debían regularse por la sucesión a la Corona de Aragón y no a la de Castilla.¹¹⁰³ Por no existir legislación valenciana al efecto, de la lectura de los memoriales no parece que el recurrido cambio de legislación producido en 1707 influyera lo más mínimo en el discurso de estas alegaciones, con respecto a las alegaciones basadas en mayorazgos posteriores a dichos decretos, o en cualquier otra temática. Tanto en los mayorazgos fundados antes como después de 1707, en lo que más se apoyarán los letrados valencianos va a ser en la doctrina, e incluso en las leyes castellanas, pero no en *Furs*.

En ninguna de las alegaciones basadas en mayorazgos instituidos antes de 1707 se discute la fundación del vínculo, que es uno de los puntos en que se diferencia el mayorazgo valenciano del castellano; como tampoco se discute la enajenación de los bienes vinculados, que constituye la otra gran diferencia entre estos dos tipos de mayorazgos.

Los mayorazgos valencianos fundados en época foral podían constituirse sobre la totalidad, o sobre la parte que el fundador quisiera de su patrimonio, sin necesidad de especial autorización, y como consecuencia del principio de libertad de testar. Mientras, en los mayorazgos castellanos esta situación sólo cabía con respecto a los fundados sobre el tercio de mejora y el quinto de libre disposición, y, en general, en aquellos mayorazgos que no perjudicaran la legítima de los herederos forzosos. En caso contrario necesitarían de licencia real para constituirse.

Respecto a la enajenación de los bienes que integraban el patrimonio, y al margen de las justas causas, la diferencia fundamental entre ambas legislaciones residía, en que en Castilla se requería licencia real, mientras que en Valencia era suficiente la judicial. Ésta se concedería “por vía de interpretación y conjeturando verosímil y prudentemente que si el instituidor viviese la permitiría y aun practicaría”.¹¹⁰⁴ Además, se requería previa sumaria

que avrían sucedido según la disposición testamentaria de Vicente Genovés mayor, su abuelo, B.U.V., Varios 240, núm. 2, pág. 13, pár. 28.

¹¹⁰³ Jesús, María y Joseph, San Antonio de Padua y Santa Rita de Casia. Alegación jurídica por D. Luis de León y Sanz, con Doña Josepha de León y Mercader. Sobre la successión en el vínculo o mayorazgo fundado por Don Francisco Félix de León, B.U.V., Varios 240, núm. 27, pág. 17, pár. 27.

¹¹⁰⁴ Jesús, María y Joseph. Addición al discurso jurídico escrito por parte de Agustín Navarro, antes Bonet, como sucessor en el vínculo fundado por el Dr. Antonio Navarro, su segundo

información de utilidad suministrada por dos testigos, en la que se acreditara el provecho de la enajenación.

De cualquier manera, ni la autorización para la constitución del vínculo, ni la licencia para la enajenación de alguno de sus bienes, eran cuestiones objeto de discusión en las alegaciones que he visto. Lo que siempre se discutía era la aspiración a suceder como poseedor, y la inclusión de determinados bienes en el vínculo, puesto que, como decían los autores Molina, Gutiérrez, Mieres o Castillo, por boca del letrado Antonio Albert de Esparça,

...la presunción legal está por la libertad de los bienes, y porque el que aspira a la successión de algunos como sujetos a fideicomiso debe concluyentemente probarlo.¹¹⁰⁵

Todo pretendiente a la sucesión de un vínculo se constituía en la indispensable obligación de probar tres cosas: su inclusión dentro de los llamamientos previstos; el haber llegado su caso; y que gozaba de las cualidades que el fundador requería.¹¹⁰⁶

En tiempos de *Furs*, la diversidad de denominaciones para referir los patrimonios vinculados no parecía ocasionar ningún problema a los juristas, que, independientemente del vocablo utilizado, conocían el sentido y el alcance de la institución fundada en cada disposición de última voluntad. Es más, eran comunes entre la doctrina ideas, como la del abogado Tomás Ros, de que podía fundarse un mayorazgo sin que su fundador hiciera uso expreso de esta palabra, si se inducía por conjeturas: substituciones dentro de la familia y parentela, prohibición de enajenar, privación de las detracciones de legítima,

abuelo: en el pleyto sobre vindicación de onze cahizadas y media de tierra, o lo que fuere, en término del Lugar de Albalat dels Sorells, partida de la Hútena, como recayentes en dicho vínculo. Contra el clero y capellanes de la parroquial de los Santos Juanes Bautista y Evangelista de esta ciudad, posehedores de ellas, B.U.V., Varios 298, núm. 13, párs. 3-7 y 16. Esta alegación data de 1761, pero tiene su origen en un codicilo otorgado en 1678, por lo que el abogado José Guillem Buzarán supone la necesidad de decreto judicial, lo que apoya en las doctrinas de Bas, Mateu y Crespí. La autorización de enajenación y venta se concedió en 1694 por "el justicia de lo civil de esta ciudad".

¹¹⁰⁵ *Jesús, María y Joseph, Joaquín y Ana, y Santa Teresa de Jesús. Informe jurídico que presenta...*, B.U.V., Varios 240, núm. 2, pág. 7, pág. 13.

¹¹⁰⁶ *Jesús, María y Joseph. Por don Vicente Luis León y Pallarés, en la causa con doña Francisca Antonia Pallarés y Roca, sobre la successión en propiedad del vínculo y mayorazgo que erigió y fundó don Miguel Juliá y agregación de doña Beatriz Ana Bernegal, su mujer. B.U.V., Manuscritos 623, núm. 5, pág. 29; y Jesús, María y Joseph, San Antonio de Padua y Santa Rita de Casia. Alegación jurídica por...*, B.U.V., Varios 240, núm. 27, pág. 6, pág. 1.

cuarta falcidia, trebeliánica u otro cualquier derecho, o —y sobre todo— la utilización del término vínculo.¹¹⁰⁷ Podríamos interpretar que, posteriormente, y una vez asentado firmemente el derecho castellano, dicha diversidad empezó a ocasionar algunos problemas de interpretación, que, por otra parte, han llegado hasta nosotros. No obstante, después de la lectura de las alegaciones me inclino a pensar, que estos últimos abogados aún tenían suficientemente claros los conceptos, al margen, es posible, de una creciente confusión terminológica.¹¹⁰⁸

Un ejemplo de esto último es la alegación firmada por el abogado José Nebot y Sanz, en 1748, que logra erigirse a manera de un bueno y breve compendio sobre el concepto y naturaleza del fideicomiso, a través del cual se explica, casi pedagógicamente, cada una de las figuras que comprende.¹¹⁰⁹ Nebot y Sanz interpreta, que con la última voluntad de Felipe Guitart, otorgada en testamento de 1703 y previas donaciones de 1686 y 1698, lo que se estaba fundando era un fideicomiso familiar, en contra de la consideración de la parte contraria que lo veía como un mayorazgo. Las consecuencias serían muy diferentes. De resolverse en favor de la primera interpretación, los bienes dejados por el testador se repartirían entre todos los sucesores del mismo grado; del grado más cercano. Mientras que de resolverse en favor del mayorazgo, todos los bienes pasarían íntegros a un único sucesor: el más cercano. Sobre la diversidad terminológica, Nebot y Sanz demuestra conocer a

¹¹⁰⁷ Jesús, María, Joseph, San Joaquín y Santa Ana. Breve y ceñido informe en hecho y derecho por don Félix Sisternes de Boteller, generoso. Con don Félix Torres y Reus, sobre la confirmación que solicita don Félix sisternes de las sentencias, así dada por el alcalde mayor de Castellón de la Plana, en la que fue declarado aver sucedido en el vínculo fundado por Francisco Sisternes, ciudadano, como de la de vista, confirmatoria de aquélla, pronunciada por algunos señores de la Sala, B.U.V., R-2/360, núm. 23, pár. 7.

¹¹⁰⁸ P. Marzal Rodríguez, "Una visión...", pág. 235 y sigs. Cristóbal Tarazona en 1791 hablaba tanto de "mayorazgos y fideicomisos perpetuos y de tracto sucesivo", como e inmediatamente de "mayorazgo o perpetuo absoluto fideicomiso", utilizando indistintamente el nexos copulativo y el disyuntivo, cuando párrafos atrás razonaba sobre el significado preciso del término "Y" (lo subrayado es mío). Puede que no tenga mayor importancia, pero la relevancia que en la época se concedía a estos detalles —como vamos a ver—, es posible que ya denotara cierta confusión en la materia. Véase Jesús, María y Joseph. Por el Exmo. Señor don Diego de Fenollet, Grande de España Honorario..., B.U.V., Manuscritos 695, núm. 4, párs. 26, 69 y 70.

¹¹⁰⁹ Jesús, María, Joseph, y S. Francisco de Paula. Alegación del derecho que assiste a Da. Antonia Agulló, y Cebrián, legítima consorte de D. Gaspar Prima, Sanz, y Cebrián; Doña Vicenta Agulló, y Cebrián, legítima consorte de D. Juan Berenguer; y demás que hazen parte en el pleyto que siguen contra Don Francisco Agulló, y Don Antonio Cebrián su Curador. Sobre si se debe juzgar fideicomisso familiar, o Mayorazgo la disposición de Don Felipe Guitart, B.U.V., R-2/360, núm. 22.

la perfección las diferentes consecuencias que se derivan del fideicomiso temporal y del mayorazgo. Sin embargo, podemos encontrar algunas manifestaciones que no se corresponden con la práctica corriente en época de *Furs*. En ocasiones contrapone los términos fideicomiso perpetuo a mayorazgo, cuando para la doctrina foralista el adjetivo *perpetuo* atribuido al fideicomiso lo equiparaba con el mayorazgo. En otros momentos habla de cierto “fideicomiso y mayorazgo temporal”, cuando el adjetivo *temporal* sólo podía ser atribuible a los fideicomisos. En otra ocasión, y oponiéndose en esto a la otra parte, afirma que la palabra *vinde* en el Reino de Valencia estaba muy lejos de importar mayorazgo, cuando no siempre era así. Son, en definitiva, ejemplos que nos inducen a pensar en la existencia ya de una cierta confusión de vocablos.

Entre las influencias que podemos observar de la doctrina castellana sobre los abogados valencianos, podría referirme en concreto, y por ejemplo, a la consideración o no del mayorazgo como institución “odiosa”. Calificar a una figura jurídica como odiosa suponía interpretarla restrictivamente, en caso de que la voluntad del testador no hubiera quedado suficientemente clara, mientras que calificarla como “favorable” conllevaba una interpretación extensiva. En Castilla, el mayorazgo quedaba constituido como odioso en tanto perjudicara el derecho de legítima, dote o alimentos, lo que era posible puesto que la utilidad pública que se atribuía al mayorazgo podía primar sobre aquellos derechos. En Valencia, por el contrario, no era lógico que la plena libertad de testar reconocida por la legislación foral diera cabida, en principio, a la consideración del mayorazgo como odioso.¹¹¹⁰ Sin embargo, encontramos alegaciones basadas en testamentos otorgados con anterioridad al decreto de Nueva Planta, en las que se discute este carácter, a pesar de que debían resolverse según *Furs*. La utilidad pública que se le atribuía a los mayorazgos, y que en la Valencia foral no tenía trabas para superponerse a los derechos individuales, vemos cómo se pone así en entredicho.

Cuando me he referido arriba al término *influencias* quiero matizar que, independientemente de cualquier consideración doctrinal, el motivo principal de la aplicación en Valencia de estos principios, que inicialmente pudieran ser

¹¹¹⁰ P. Marzal Rodríguez, “Una visión...”, pág. 232.

foráneos, no era una simple reproducción por parte de los autores valencianos de la doctrina castellana —basada en normas diferentes—, sino un recurso interesado de defensa del que todo abogado hacía uso. Es decir, el planteamiento y la discusión sobre la naturaleza —odiosa o no— del mayorazgo, será aceptado o simplemente eludido, en virtud del interés del letrado en el pleito. Igualmente, lo que en principio también podría aparecer como una confusión conceptual de los abogados de la época, originada por la aplicación de una nueva legislación, obedecería sin embargo a eso: a la simple asunción interesada de unos principios inicialmente ajenos.

Nebot y Sanz creyó interesante introducir esta discusión en un pleito, y calificar al mayorazgo como odioso —así como al fideicomiso, aunque menos—:

...la otra parte trata de excluir a los descendientes de don Felipe, excepto uno, y estas partes de incluir a todos. Véanse juntas todas las palabras, si denotan más inclusión que exclusión, y aun en caso de duda se debe estar por el llamamiento de todos, que denotan las palabras, pues comprendiendo éstas a todos, a la otra parte toca la prueba de lo contrario; y más quando no es tan fácil admitir la introducción o institución de el mayorazgo quando de ellos se duda, como su extensión, porque se debe probar concluyentemente. Luego, no habiendo duda que a lo menos ha de ser fideicomiso, y pudiéndola haver, en que si este fideicomiso es mayorazgo, que es más odioso, porque excluye más, debe probarse concluyentemente su existencia, e introducción.¹¹¹¹

Igualmente, Joaquín Esteve consideraba odioso el fideicomiso en general, por contener en sí gravamen, de manera que en caso de duda cualquier substitución debía presumirse vulgar y no fideicomisaria. Según él, ésta era la razón por la que la substitución fideicomisaria no admitía la menor extensión. Curiosamente, en esta afirmación tan necesitada de apoyo, Esteve no aportó ninguna cita, limitándose a manifestar, genéricamente, que así era “según los autores”.¹¹¹²

¹¹¹¹ Jesús, María, Joseph, y S. Francisco de Paula. *Alegación del derecho que assiste a...*, B.U.V., R-2/360, núm. 22, pág. 11.

¹¹¹² Jesús, María, Joseh, Joachín y Anna y Santa Catarina Mártir. *Demonstración del derecho que assiste a Juan Bautista López, como haviente los derechos de Inés Blay, su tía, parienta más próxima del Dr. Joseph Funes, que sobrevivió a éste y a Catarina Bordes, su hemana, gravada que murió sin disponer de los bienes de aquél, según la encargó. En el pleyto que continúa suscitado por la referida Inés Blay, contra el licenciado Thimoteo Ferrer, los DD.*

El abogado José Guillem Buzarán, sin embargo, sólo califica de odioso el fideicomiso cuando es instituido sobre la legítima de los hijos, por deberse considerar esta porción libre de todo cargo y obligación, con lo que arguye en favor de una interpretación restrictiva de la cláusula testamentaria en cuestión. De nuevo, el testamento se otorga en tiempos de *Furs* —en 1692—, vigente el principio de libre disposición de todos los bienes de la herencia. Lo que, no obstante, es capaz de admitir más adelante, aportando incluso el capítulo 26 de las Cortes de 1604. Esto es, admite la privación de la legítima, pero no así el que sobre ella se pueda imponer gravamen alguno.¹¹¹³

Para el letrado José Vicente Nogués Escrivá y Castellví, de existir alguna razón para dudar sobre la fundación de fideicomiso, quedaría bajo la conciencia del juez, quien podría fallar en favor de esta institución resultando evidentes las conjeturas. Apoyándose de las correspondientes citas doctrinales, afirma que el juez podría fallar, incluso,

...contra la opinión de los intérpretes y glosadores. Pues el fideicomiso no se entiende revocado en caso de duda.¹¹¹⁴

José Gisbert y Sánchiz también nos deja bien planteado el embrollo de toda alegación sobre este asunto cuando, en clara oposición al anterior letrado, dice que

...dogma legal es que el fideicomiso, como odioso y opuesto a la libertad, no se presume si concluyentemente no se prueba con directas y expresas palabras del testador, o con vehementes presunciones que manifiesten clara su voluntad, debiendo siempre en duda declararse contra el fideicomiso, mayormente quando se trata de gravar a un hijo y heredero del testador...¹¹¹⁵

Gaspar y Pedro Vicente Traver, abogados, y otros parientes del citado Dr. Funes. Sobre que se declare aver sucedido, solide, en todos los bienes, derechos y acciones recayentes en la herencia del dicho Dr. Funes, B.U.V., R-2/360, núm. 17, pár. 21.

¹¹¹³ J. M. J. *Alegación en hecho y derecho por don Juan Fermín Sanz...*, B. U. V., Varios 298, núm. 10, párs. 5 y sigs., y 75 y sigs.

¹¹¹⁴ *Jesús, María, Joseph y Santa Ana, San Joaquín y San Antonio de Padua. Por el Dr. Joseph Vicente Nogués, marido y legítimo administrador de Ángela María Vidal con los herederos ab intestato de Ángela Ferrer, viuda de Andrés Vida, Escrivano, ya difunta. Sobre la sucession en parte del legado y fideicomiso que dexó Josepha de Siria, viuda de Joseph Ferrer, Notario, B.U.V., Varios 77, núm. 17, pár. 51.*

¹¹¹⁵ *Jesús, María, Joseph. Alegación por María Magdalena Bru, doncella, heredera vitalicia de el dotor y pavorde Estevan Bru, presbítero, contra Josepha María Bru, legítima muger de Juan Bautista Lop, escrivano. En el pleyto que en grado de apelación pende ante los señores de la*

Finalmente, Antonio Albert de Esparça diferencia claramente entre mayorazgo y fideicomiso en un sentido bastante inusual:

Notable es la diferencia que se advierte por los escritores entre los mayorazgos y fideicomisos, de ser aquéllos favorables y establecidos por el bien público, y para perpetua conservación del lustre de las familias, y éstos odiosos y gravativos, y como tales se deven restringir, al passo que aquellos ampliar. De lo que nace que el fideicomiso no se prueba si las palabras de la disposición no son claras, ciertas y evidentes, y tales que necessariamente le induzgan, deviéndose en qualesquier caso de duda juzgar siempre por la libertad de los bienes y contra el fideicomiso, y admitirse la interpretación que le excluye.¹¹¹⁶

Se trataba, en definitiva, de buscar la pretendida voluntad del testador, para lo que se debía interpretar y resolver las dudas que planteaban las presunciones y conjeturas que había en las disposiciones de última voluntad. Como vamos a ver a lo largo de todo el estudio, éste será el centro de toda alegación jurídica en materia de sucesiones.

Forma de las alegaciones

Nos encontramos ante unos escritos impresos,¹¹¹⁷ que de mano de sus autores podían recibir distintas denominaciones: *alegación*, *memorial*, *demonstración* o *exposición de —o del— derecho*, *manifiesto*, *apuntamiento* o *discurso legal*, *informe* o *fundamentos jurídicos...*, o simplemente no tomaban en su título ninguna de estas formas. En algunas ocasiones el sólo título es tan largo que por sí mismo deja planteado el estado de la cuestión. Son escritos de extensión varia, normalmente de 20 a 40 páginas enumeradas, desarrollados a lo largo de párrafos también enumerados y separados sin ningún criterio

Real Audiencia sobre pretender dicha Josepha María Bru, jure fideicommissi, la mitad de el legado de el tercio y remanente de el quinto de los bienes y herencia de don Joseph Bru, su padre, que éste dexó a dicho pavorde, B.U.V., R-2/360, núm. 25, pár. 12.

¹¹¹⁶ *Jesús, María y Joseph, Joaquín y Ana, y Santa Teresa de Jesús. Informe jurídico que presenta a los señores...*, B.U.V., Varios 240, núm. 2, pág. 8, pár. 14.

¹¹¹⁷ También los hay manuscritos, pero todos los que he estudiado para la realización de este trabajo son impresos.

temático aparente.¹¹¹⁸ Todo ello agrupado en dos grandes partes: el *Hecho* y el *Derecho*.

1. En el *Hecho* —que suele abarcar las primeras páginas—,¹¹¹⁹ se hace un resumen de los eventos que configuran la base de la controversia y, en algunas ocasiones, de lo practicado en esa misma instancia y/o en instancias anteriores, "siguiendo el estilo observado y precepto legal de deberse entender ante todo los términos de la cuestión".¹¹²⁰ También suele incluir la transcripción de parte de las disposiciones de última voluntad. Para mejor entendimiento de los términos de la cuestión, y tratándose de derechos sucesorios, en muchas alegaciones se aporta un árbol genealógico en el que aparecen los litigantes y todos los familiares relacionados con tal cuestión.

2. El *Derecho* —o "*Drecho*" como normalmente aparece—, se extiende a lo largo de las demás páginas, y es la parte en la que se aportan los razonamientos jurídicos en defensa de la postura de la propia parte y/o en contra de la oponente, o bien de los dos tipos.

En el último párrafo de algunas alegaciones, a modo de resumen en pocas líneas, y antes de suplicar al tribunal resolución satisfactoria, se insiste en la pretensión central de la parte, y en los hechos y fundamentos básicos

¹¹¹⁸ Pasando a datos más concretos, de las 55 alegaciones estudiadas, 6 no llegan a las 10 páginas: tres *adiciones*, un *breve resumen*, una *satisfacción* y un *apuntamiento legal*. En cuanto a la extensión de las 49 alegaciones restantes, la media se sitúa en algo más de 27 páginas redactadas (27'26 en concreto). Por otra parte, de aquellas 55 alegaciones 10 no distinguen entre *Hecho* y *Derecho*, siendo la mayoría de ellas *adiciones*. En las 45 alegaciones restantes, el *Hecho* viene a ocupar unas 5 páginas, mientras que el *Derecho* unas 21'88, es decir, el 18'63 % y el 81'37 % de la extensión de la alegación, respectivamente. Debemos tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, que en la enumeración que consta en los memoriales se contabilizan la portada y la contraportada, aquélla con algún dibujo religioso y el título de la alegación, y ésta en blanco, por lo que ninguna de las dos páginas han entrado en el cómputo. Y en segundo lugar, que la página en la que finaliza la parte del *Hecho* y empieza la del *Derecho* ha sido contabilizada, habitualmente, como de *Hecho*, en compensación a la última de *Derecho*, que en muchas ocasiones consta de sólo unas pocas líneas.

¹¹¹⁹ Hablamos —como siempre en esta materia—, en términos generales, ya que en una alegación los hechos llegan hasta la página 14 de un total de 24; véase *Jesús, María, Joseph. Alegación en derecho que presenta a los señores de la Real Audiencia don Joseph Borrás y Goya, en la causa con D.ª Jacinta Domingo, legítima consorte de don Juan de Perea, Oficial Mayor de la Contaduría de esta ciudad, sobre que a ésta se la ponga en possession pro indiviso como haviente de los drechos de D.ª Antonia Borrás, su madre, de los bienes y herencia de Vicente Vidal, abuelo de ésta, hasta que se adjudique la quarta parte de ellos con sus frutos. En cuya causa han sido emplazadas doña Jacinta Borrás, legítima consorte de don Vicente Falcó, señor del Lugar de Benifairó y doña Vicenta Borrás, muger de don Carlos Aloz*, B.U.V., R-2/361, núm. 12.

¹¹²⁰ *In laudem et honorem totius Ssma. Trinitatis...*, B.U.V., R-2/361, núm. 29, pág. 6, párrafo 10.

que la acompañan. Puede aparecer bajo la denominación de *reflexión* y constituirse en una parte individualizada.¹¹²¹

En otras ocasiones no se diferencian tan claramente aquellas dos partes, pero su existencia se induce a través de la simple lectura. Asimismo, hay algún caso en que las dos partes van siendo desarrolladas conjuntamente, incluso bajo un mismo epígrafe.¹¹²²

A la extensión arriba señalada podríamos exceptuar las *adiciones*, que eran mucho más breves —no solían superar las diez páginas—.¹¹²³ Como su nombre indica, se añadían a modo de anexo a una alegación anterior, a la que completaban por diversos motivos: por aparecer en el pleito nuevos medios de prueba de los que no se tenía noticia en el momento de redactar el informe principal, por encontrarse la contienda en una nueva instancia y querer el autor reafirmarse o insistir en determinados postulados, o simplemente por conocer el letrado la alegación de la parte contraria y querer fortalecer su defensa. El abogado Luciano Sulroca presentó una alegación el 23 de junio de 1745, el 28 del mismo mes le añadió una primera adición, y el 22 de julio una segunda; escritos con 19, 4 y 8 páginas respectivamente.¹¹²⁴ Hay otras alegaciones en

¹¹²¹ *In laudem et honorem totius Ssma Trinitatis...*, B.U.V., R-2/361, núm. 29, pág. 23, pár. 51.

¹¹²² En el caso de la alegación *Informe que a los señores de la Real Audiencia de esta ciudad hace don Pedro Infante y Abarca, oidor de la Real Audiencia, colateral de Santa Clara de Nápoles, en el pleyto que en aquélla sigue con María Ignacia Infante, herederos del doctor Juan Bautista Arnau y otros; sobre reintegración de el fideicomiso fundado por Vicente Infante, ciudadano, su padre*, B.U.V., R-2/360, núm. 1, las 16 páginas aparecen sin ningún título ni separación entre *Hecho* y *Derecho* más que la que el lector encuentre de su lectura. Mientras, en la alegación *Discurso legal por don Damián Merita y don Juan Merita con la iglesia parroquial de la villa de Pego. Sobre las sucesiones de Ana María Palomino y Gerónimo Síscar, consortes*, B.U.V., Varios 54, núm. 1, pasa lo mismo en sus 15 páginas, si bien en este caso todas ellas aparecen bajo un único epígrafe de *Hecho y Derecho*.

¹¹²³ A todas estas reglas podemos presentar sus excepciones. Así por ejemplo, hay una adición que se compone de 22 páginas y todas ellas de *Derecho*; véase *Jesús, María, Joseph, San Joaquín y Santa Ana, y las benditas almas del purgatorio. Addición a la demostración en hecho y derecho de los administradores y executores testamentarios de los bienes y herencia que dexó Don Manuel Matheo de Tordecillas y Vallterra, marqués que fue de Sanfelices, en exclusión de la demanda puesta por Don Joseph Manuel de Verastegui, que por su muerte continúa el curador de Don Joseph Mariano su hijo, pretendiendo en propiedad los bienes que vinculó D. Francisco Luis Castellar Doris y Blanes, comendador de Perpuchent, que legítimamente poseen dichos administradores*, B.U.V., Varios 240, núm. 15.

¹¹²⁴ Respectivamente, son las tres alegaciones siguientes: 1) *Jesús, María Joseph y S. Francisco de Paula. Breve apuntamiento de los motivos legales que asisten a la pretensión de doña Jacinta Domingo, legítima consorte de don Juan de Perea y Acutegui, Oficial Mayor por su Mag. de la Contaduría principal de este Reyno, en el pleyto que como heredera de doña Antonia Borrás, su madre, continúa con D. Diego y D. Joseph Borrás, hermanos, sobre juicio de división de los bienes y herencia de Vicente Vidal, abuelo de dicha doña Antonia*, B.U.V., R-2/361, núm. 13. 2) *Addición al papel impreso por doña Jacinta Domingo, heredera de doña Antonia*

las que el letrado se limita a contestar las excepciones presentadas por la otra parte, de ahí que se llamen *satisfacción*.

Por lo general, la extensión de las alegaciones —y también de los escritos de los pleitos— no se corresponde con su contenido. La concisión no era una de sus características. Es decir, la explicación del litigio y su argumentación no requerían la amplitud que el abogado les dedicaba, como vamos a ver a lo largo de las siguientes páginas.¹¹²⁵ Esta innecesaria dilatación obedecía a diversos motivos: la necesidad que tenía el abogado de demostrar ante el juez el dominio del pleito y el profundo conocimiento de las leyes que lo dirimían; los intereses pecuniarios del propio letrado; su prestigio profesional; y, como no, la imprecisión del derecho.

Por lo que respecta a la forma del escrito, la lectura de las 55 alegaciones me ha permitido llegar a unas sencillas conclusiones que, aunque pueden admitir cualquier excepción, son comúnmente seguidas:

El idioma utilizado es siempre el castellano, con tan sólo dos excepciones: el valenciano, cuando se alude a disposiciones forales o testamentarias nacidas con anterioridad a 1707,¹¹²⁶ —no obstante, muchas de

Borrás, legítima consorte de don Juan de Perea y Achutegui, Oficial Mayor por su Mag. de la Contaduría principal de este Reyno. En el pleyto con D. Diego y D. Joseph Borrás, hermanos, sobre la sucesión de los bienes y herencia de Vicente Vidal, abuelo de dicha doña Antonia, B.U.V., R-2/361, núm. 13 ter. Y 3) Addición II. En corroboración del drecho que assiste a doña Jacinta Domingo, legítima consorte de don Juan de Perea, en el pleyto con don Joseph y don Diego Borrás. B.U.V., R-2/361, núm. 13 bis.

¹¹²⁵ Incluso, se dictaron algunas disposiciones en Castilla dirigidas a restringir la extensión de las informaciones en derecho, como el auto acordado de 5 de febrero de 1594, la pragmática de Felipe III de 1617 u otro auto acordado de 19 de enero de 1624. Véanse en *Nueva Recopilación* 2, 16, leyes 2 y, especialmente, 34; y en *Autos Acordados* 2, 16, leyes 1 y 7, edición de 1775.

¹¹²⁶ Véase, por ejemplo, *Derecho que assiste a D.^a Pascuala anteume...*, B.U.V., *Varios* 54, núm. 6, en donde en la cita 8 se transcribe el *fur* 39; *Jesús, María y Joseph. Por el Excmo. Señor don Diego de Fenollet, Grande de España Honorario...*, B.U.V., *Manuscritos* 695, núm. 4, párrafo 106, en donde se transcribe el *fur* 30; o *Jesús, María y Joseph. Addición al discurso...*, B.U.V., *Varios* 298, núm. 13, en donde, en los párrafos 8 y 22, se transcriben fragmentos de un decreto otorgado por la justicia civil de la ciudad de Valencia en 1694. Fragmentos todos ellos en valenciano. En cuanto a disposiciones testamentarias, hay una alegación en la que se incluyen al principio, también en valenciano, tres cláusulas objeto de controversia; véase *Jesús, María, Joseph, Joaquín y Ana. Informe jurídico en Hecho y Drecho que presentan a los señores de la Real Audiencia el Lic. Joseph Rombau, Presbítero y el Dr. Francisco Rombau, hermanos y vezinos de la presente ciudad. En el pleyto que por apelación siguen los hijos y herederos de Thomás Rombau, vezinos de la misma, de la sentencia pronunciada por el Señor Don Gaspar Cebrián de Cebrián, Alcalde del Crimen de la citad Real Audiencia, en favor de los expressados Joseph y Francisco Rombau. Sobre el juizio y successión propietaria jure vinculi & fedecommissi, de todos los bienes que por la muerte sin hijos ni descendientes poseía el Dr. D. Salvador Dean que fue de la Cathedral Iglesia de la Ciudad de Segorbe, de la herencia de*

ellas ya aparecen traducidas directamente al castellano, lo que así se hace constar—;¹¹²⁷ y el latín, especialmente en las citas de autores, pero también cuando se acude a principios generales del Derecho o a axiomas vulgares, o se argumenta sobre la semántica de alguna palabra castellana o valenciana.¹¹²⁸ Las leyes castellanas evidentemente se alegarán, tanto en el discurso como en las citas, en castellano.

En cuanto a las citas, casi exclusivas de la parte del *Derecho*, pueden aparecer de dos maneras diferentes, que no se dan nunca al mismo tiempo: incluidas en el propio texto, o fuera de él mediante notas enumeradas — ocasionalmente se individualizan mediante letras—, y situadas o bien a pie de página o bien en su margen: derecho si se trata del recto del folio, izquierdo si se trata del verso. También hay alegaciones, las menos, en las que el nombre del autor y la determinación de su cita se incluye en el texto del discurso, remitiendo el contenido de la cita al margen. O bien al contrario, que el contenido de la cita aparezca en el texto, y su autor y la obra en la que se encuentra en el margen.¹¹²⁹ En unas ocasiones la cita transcribirá el contenido

Marcelo Rombau, mayor, Padre común, fideicomissados por éste a los sobrevivientes hijos y herederos suyos, y en su defecto a los hijos de éstos, B.U.V., R-2/360, núm. 6.

¹¹²⁷ Véase, por ejemplo, testamentos de las alegaciones *Jesús, María, Joseph. Alegación en derecho que presenta a los señores...*, B.U.V., R-2/361, núm. 12, párrafo 1; y *Derecho que assiste a D.ª Pascuala Anteume y Salazar...*, B.U.V., Varios 54, núm. 6, cláusula XII del Hecho. Estos testamentos datan, respectivamente, de 1678 y 1646. En cuanto a *furs* es poco usual que se traduzcan; véase *Satisfacción de don Pedro Infant y Alcarca, oidor de la Real Audiencia, colatral de Santa Clara de Nápoles, a las excepciones en grado de suplicación alegadas por María Ignacia Infant, herederos del doctor Juan Bautista Arnau y otros. En el pleyto que entre ambas partes pende en esta Real Audiencia sobre reintegración al fideicomisso fundado por Vicente Infant, ciudadano*, B.U.V., R-2/360, núm. 2, en donde al principio se traduce el capítulo 36 de las cortes de 1604; o la alegación *Por Dn. Gabriel Milán y Aragón, Doña Francisca Antonia Milán y Aragón, hijos y herederos de doña Leonarda Cubelles y por Gerónima Cubelles, viuda de Pedro Torró, Ciudadano, vecinos de la villa de Ontiniente. En el pleito que siguen en esta Real Audiencia con don Manuel Colomer, vecino de la misma villa, hijo y heredero de doña Josepha Cubelles. Sobre deberse mejorar la sentencia pronunciada por la passada Real Audiencia de esta ciudad en 13 de agosto 1705 en que se declaró que Gaspar Cubelles en su último testamento no pudo dexar más cantidad a doña Josepha Alzamora, su segunda consorte, que la que legó y mandó a dicha doña Josepha Cubelles, su hija del primer matrimonio con María Roger*, B.U.V., R-2/361, núm. 32, en donde en el párrafo 16 se traduce el *fur* 31.

¹¹²⁸ Aunque la transcripción de las citas de autores se hace prácticamente siempre en latín, encontramos algún caso en que se hace en castellano, como la cita 16 —de Molina—, de la alegación *Derecho que assiste a D.ª Pascuala Anteume y Salazar...*, B.U.V., Varios 54, núm. 6. En otros casos, también escasos, dentro de la misma cita se entremezclan frases en latín y en castellano, como en las citas de la misma alegación números 122 —véase Flores de Mena y Águila ad Roxas—, y 123 y 126 —véase Águila ad Roxas—.

¹¹²⁹ Véase, respectivamente, alegación *Jesús, María y Joseph. Addición al discurso jurídico escrito por parte de Agustín Navarro...*, B.U.V., Varios 298, núm. 13; y alegación *Dirige Domine*

de la ley o del pasaje del doctor citado, en otras tan sólo lo señalará. En otros informes las citas contienen, además del texto del autor, su paralelismo con el caso que se está tratando. Incluso hay una alegación con los árboles genealógicos de la sucesión de las coronas de Portugal y Aragón.¹¹³⁰ En otras, y sobre este mismo tema, se cita también a historiadores.¹¹³¹

Todas estas citas se escriben en letra cursiva, salvo el nombre de sus autores que es en letra redonda y, de darse, aquella parte de la cita escrita en castellano —comentarios del letrado, pasajes del testamento o de la ley—. Igualmente, se escriben en cursiva o en mayúsculas —o de ambas formas—, pero nunca entrecomilladas, aquellas palabras o frases que se pretenden resaltar en el texto del discurso, las escritas en valenciano o latín, o la transcripción de las cláusulas del testamento o de alguna ley, caso este último muy esporádico —especialmente en cuanto a la ley real—.

También podemos encontrar remisiones a lo practicado en autos o a disposiciones recogidas en la parte del *Hecho*, que suelen ser mucho más escasas. En este caso la remisión se suele efectuar, no mediante número de nota, sino mediante letra o asterisco.

Fundamentos jurídicos

La *Nueva Recopilación* (2,1,3) fijaba en 1567 la prelación de fuentes del Derecho castellano, que es confirmada en sus posteriores ediciones y por Felipe V en un auto acordado del Consejo de Castilla de 4 de diciembre de 1713 (2,1,1). El origen de aquella disposición hay que buscarlo en la ley primera del título XXVIII del *Ordenamiento de Alcalá* de 1348, que pasó a ser la

verba mea in viam veritatis et justitiae. Alegación jurídica en hecho y derecho por Francisco Castell y Aguir, como heredero de Antonia Aguir, en la causa con Juan y Vicente Aguir, avientes de causa de Juan, Joseph, Pedro Aguir y demás avientes causa de Joseph y Miguel, Vicenta Sanchis y demás avientes causa de Merina Aguir, sobre la sucesión de dos tercias partes de los bienes de la herencia de Vicente Aguir, por muerte de dicha Antonia, hija de éste, última sobreviviente. B.U.V., R-2/361, núm. 28.

¹¹³⁰ *Jesús, María, Joseph. Alegación por María Magdalena Bru, doncella..., B.U.V., R-2/360, núm. 25; y Jesús, María y Joseph. Informe legal por Juan Bautista Llopis Ferris y Salazar..., B.U.V., Varios 54, núm. 7; respectivamente.*

primera de las 83 *Leyes de Toro* de 1505. En estas normas se establecía el orden entre los distintos tipos de Derecho que existían en Castilla, en cuanto a la ordenación, decisión y determinación de los pleitos y demás causas. En primer lugar, se estaría a lo dispuesto en las leyes reales contenidas en la *Recopilación* o en leyes posteriores, no obstante se alegara su falta de aplicación e inobservancia. En su defecto, se atendería a los fueros municipales, en aquello que efectivamente estuvieren en uso, no fueren contrarios a aquellas leyes, ni fueran “contra Dios e contra razón”.¹¹³² Hay que tener en cuenta, además, que el rey podía modificar el contenido de estos fueros. Finalmente, se aplicarían las leyes de *Partidas*, a través de las cuales se introduce legalmente en Castilla el *ius commune* que en ellas se contiene. Aún en última instancia, y no habiendo norma o siendo ésta dudosa, se debería acudir a la interpretación del monarca, y no a las opiniones de los doctores.

El fundador del colegio de abogados de Valencia, José Berní y Catalá, gran conocedor de los códigos españoles y gran crítico a sus comentadores, formulaba a esta prelación tres interesantes aclaraciones.¹¹³³ En primer lugar, contestaba a la posibilidad de que la práctica estuviera en contra de lo establecido en la ley. Berní distinguía aquí si esta práctica se producía en los tribunales supremos, y a vista del legislador, en cuyo caso cesaba la ley anticuada, o si se producía en los tribunales inferiores, sin conocimiento del legislador, en cuyo caso la práctica no derogaba la ley. En segundo lugar, decía que procedía la declaración del monarca cuando la duda no podía aclararse por otro real decreto. La interpretación del soberano legislador comprendía todos los casos “universalmente”, mientras que la interpretación particular para aplicar la ley al caso del pleito era propia de los tribunales. Y en tercer lugar, aclaraba Berní, que si no hubiera ley sobre el asunto los oidores

¹¹³¹ Jesús, María y Joseph, *San Antonio de Padua y Santa Rita de Casia. Alegación jurídica por D. Luis de León y Sanz...*, B.U.V., Varios 240, núm. 27, pág. 17. Se trata de los historiadores Surit, Diago, Blanc., Garibay, Rub. y Marian.

¹¹³² *El Ordenamiento de Leyes que D. Alfonso XI hizo en las Cortes de Alcalá de Henares el año de mil trescientos y quarenta y ocho*, Madrid, 1774, pág. 70.

¹¹³³ J. Berní y Catalá, *El abogado penitente y el pleyto más importante*, Valencia, 1747, págs. 11 y 17; y del mismo autor, *Disertación sobre la llave de la jurisprudencia española, que escribe a sus pasantes el doctor D. Josef Berní y Catalá, abogado de los Reales Consejos*, Valencia, 1774, pág. 32.

tendrían que hacer relación al rey de las leyes que se tendrían que hacer para que cesaran los pleitos. Lo que complementaba afirmando que al Derecho real, por su perfección, había poco que añadir.

Pero en la fundamentación jurídica de lo alegado por cada parte, los letrados no seguían, ni mucho menos, esta jerarquía de fuentes, como así lo reconocía el auto acordado señalado de 4 de diciembre de 1713. Vaya por delante que los letrados esencialmente se servían del Derecho común, y en concreto de la doctrina de los autores. Y muy secundariamente de las otras fuentes del derecho: legislación patria, e, incluso, sentencias judiciales. De manera que, como iremos viendo, fueron muchos los juristas que levantaron sus voces contra esta práctica general.

La materia de herencia y sucesiones, en tanto que derecho privado, es más proclive a la alegación de doctrina y Derecho romano que otras materias de Derecho público, asuntos penales o fiscales. Pero, y por otra parte, parece ser que conforme van pasando los años los juristas en general, y los abogados en particular, se van haciendo a la idea de que el proceso de fortalecimiento del Derecho real es un camino sin vuelta atrás. En algunos escritos, tal vez más frecuentes cuanto más nos acercamos al final del siglo, podemos comprobar cómo la jerarquía de fuentes válida en la práctica hasta estos momentos empieza a ponerse en entredicho, aunque sea muy tímidamente. Como dice Tomás y Valiente, desde los años centrales del siglo XVIII los juristas teóricos y prácticos castellanos radicalizan su posición de lucha creciente contra el Derecho romano y en defensa del real.¹¹³⁴ De cualquier manera, este cambio, tan claro para los juristas, no es nada fácil comprobarlo para los abogados, al menos a través de las alegaciones y si es que efectivamente sucede.

Veamos a continuación, por orden de importancia, en qué medida y sentido se alegan en los memoriales los distintos tipos del Derecho.

Doctrina

El mencionado auto acordado 2, 1, 1, además de reiterar la prelación de fuentes ordenada por la *Recopilación*, obedecía a los muchos pleitos que se

¹¹³⁴ F. Tomás y Valiente, *El Derecho penal...*, pág. 145.

substanciaban y determinaban al margen de esta prelación, y valiéndose de la doctrina de los autores. De alguna manera, eran dos las pretensiones que este auto tenía con respecto a esta práctica tan extendida. En primer lugar, recordaba la nula validez de la doctrina como fuente del Derecho. Pero, paradójicamente y en segundo lugar, reconocía y sancionaba su presencia en los tribunales, al anteponer el valor y supremacía de los autores patrios frente a los foráneos. Realmente, el Consejo no podía obviar su monumental presencia en los tribunales —sobre todo con el carácter interpretativo que se le atribuía—, al no poderse acudir constantemente al monarca en los casos de duda. Pero lo que sí podía hacer el Consejo era otorgar preferencia a los comentadores de las leyes patrias, frente a los comentadores del Derecho romano-canónico.

Como antecedente de este auto podríamos señalar para Castilla la pragmática de Juan II de 8 de febrero de 1427. En ella, además de recordar anteriores preceptos sobre la brevedad de los pleitos, la prelación de fuentes establecida por Alfonso XI, y la discreción de los abogados en la cita de leyes y decretales ordenada por Juan I, establecía, por lo que a nosotros respecta, la prohibición de los abogados de aportar opiniones de autores, canonistas o legistas, posteriores a Bártolo o Juan Andrés. Lo que se completó con el capítulo 37 de las *Ordenanzas de Madrid* de los Reyes Católicos de 1499, en el que se establecía el orden a seguir en las opiniones de Bártolo y Baldo —en materia civil—, y de Juan Andrés y el abad Panormitano —en materia canónica—, reconociéndoles autoridad en caso de duda a falta de ley.¹¹³⁵ Pero, por lo visto, fueron mayores los inconvenientes que los avances de esta última ley, de ahí que poco después fuera derogada por la primera de las *Leyes de Toro*, negándose toda autoridad a las opiniones de cualquier jurisconsulto.

Por lo tanto, y teóricamente, los abogados sólo podían aportar las citas de los autores con una de estas tres finalidades: para ayudar en la comprensión de alguna ley real; para, simplemente, reafirmar la existencia y aplicación de esta ley; o bien para ofrecer una solución, cuando se cree que la ley real es insuficiente. Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que la doctrina

¹¹³⁵ M. A. Pérez de la Canal, "La pragmática de Juan II, de 8 de febrero de 1427", *Anuario de Historia del Derecho Español* 26 (1956) 659-668. Véase la transcripción de la pragmática en las páginas 664-668.

de los doctores presupone la existencia de unas normas con fuerza jurídica vinculante por sí mismas, con respecto a las que no puede ocupar sino un papel secundario. Sin embargo, el abuso interpretativo convirtió en dudosas la casi totalidad de estas normas.

En cuanto a los mismos juristas, podemos encontrar opiniones tanto en contra, como a favor de la alegación de doctrina.

Berní y Catalá arremetía contra aquellos abogados que sólo se guiaban por los autores, y que argumentaban en contra de la aplicación de determinadas leyes reales por creer que iban en contra de la práctica y estilo de los tribunales. Berní consideraba que aun así estas leyes tenían vigencia y debían aplicarse. Según este autor, la alegación de la doctrina podía presentarse en un pleito de tres formas diferentes: como exclusiva fuente en la que fundamentar la pretensión; combinándose la doctrina basada en el Derecho común con la basada en el Derecho real; y en tercer lugar, alegando autores que sólo comentan la ley real. La primera posibilidad no era válida, por cuanto se requería la alegación de Derecho nacional, ya que una sola ley real invalidaba toda la doctrina. La segunda tampoco, por cuanto el Derecho común no se podía alegar, y "los Autores por lo común tienen citas falsas, y apoyan sus doctrinas con Leyes Reales, que no dicen palabra de su assumpto". Berní y Catalá tan sólo admitía la tercera posibilidad, pero aun así consideraba que toda alegación de doctrina era por completo superflua, ya que la sola alegación del Derecho real era suficiente para fundamentar posiciones. Tan sólo serviría como refuerzo del Derecho nacional.¹¹³⁶ En resumen: rechazo absoluto a la posible fuerza vinculante de la doctrina.

Meléndez Valdés también creía perniciosa la influencia de los doctores en la interpretación de las leyes civiles, al manifestar, sobre estas últimas, lo siguiente:

Por desgracia, es esta parte la más imperfecta, la más oscura, la menos combinada en todas las naciones, donde quiera que volvamos los ojos, alumbrados de la antorcha [segura de la filosofía]

¹¹³⁶ J. Berní y Catalá, *El abogado instruido en la práctica civil de España*, Valencia, 1763, págs. 28-31. Véase también el mismo autor en *El abogado penitente...*, págs. 15 y 16. Cuando habla de citas falsas se refiere también a que "los impressores han equivocado palabras y citas en algún número"; véase *Carta que el Dr. Don Joseph Berní y Catalá escribe a sus passantes*, Valencia 1772, pág. 10.

de la razón, no hallaremos sino [continuos tropiezos y peligros] errores e irregularidades. Casos en lugar de principios, raciocinios falsos autorizados como dogmas legales, opiniones particulares erigidas malamente en leyes, doctores y pragmáticos en continua contradicción, y el enredo y el litigio burlándose a su sombra de la sencilla buena fe con descarada impunidad.

.....
¿por qué triste necesidad han de ocupar volúmenes sobre volúmenes de errores y tinieblas, revueltos más y más, y confundidos por [esa serie bárbara de] los glosadores y [eternos] tratadistas, y no habrán de reducirse [ya, después de tantas luces y experiencias,] a pocas leyes, claras, [breves,] y sencillas...?¹¹³⁷

En parecido sentido, pero desde el aprendizaje del Derecho real, se manifestaba Tomás Manuel Fernández de Messa, en 1752, en su *Oración que exorta a estudiar las leyes de España por ellas mismas*, cuando decía lo siguiente:

De la misma voz del Príncipe dixo Justiniano que avía de proceder el fin y principio de la enseñanza del Drecho. De manera que no basta que se estudie su sentencia sino con sus mismas voces, pues se puede con las ajenas voces fácilmente confundir su sentencia ... Doy que en los intérpretes, como regularmente juzgamos, se halle lo mismo que en las leyes con la declaración de sus dudas, la ilación de sus premissas y el suplemento de sus defectos; pero no por esso es mejor estudiarlas en éstos que en ellas mismas, pues aunque ellos digan lo que dizen las leyes, no de la misma suerte, y juntamente llevan lo que las leyes no dizen, añaden dudas donde no las ay y ponen defectos donde ay perfecciones. Unos vemos que fueron de un dictamen porque les pareció ingenioso y se pagaron de la agudeza más que de la verdad. Otros siguieron una solución porque ellos fueron los inventores y el amor propio les arrastró el juicio, y los más porque assí lo enseñaron sus maestros, ... Pues cómo podemos saber quando acertaron o erraron sino es sabiendo el Drecho por el Drecho?¹¹³⁸

¹¹³⁷ J. Meléndez Valdés, *Discurso de apertura de la Real Audiencia de Extremadura (27 de abril de 1791)*, edición, introducción y notas de M. Á. Lama, Badajoz, 1991, págs. 112-113. José del Campillo viene a decir lo mismo con las siguientes palabras: "No admite duda en que algunas [leyes] de las que hoy nos gobiernan tienen más traza de confusión que señales de leyes, y no porque no sean tan literales como justos sus sentidos y preceptos, sino por verlas tan alteradas y sin su nativo nervio, con tanta innumerable multitud de dictámenes opuestos, interpretaciones contrarias y opiniones de extremo a extremo en un mismo particular. ... A lo que decía Barbosa, contradice Sánchez; lo que los dos produjeron, corrige Olea y lo que los tres pensaron, refuta Bobadilla. A cada uno de éstos ... siguen infinitos, y dando cada cual sus razones, se queda últimamente el particular cuestionado hecho un punto controversible y oponible..."; véase su obra *Lo que hay de más y de menos en España para que sea lo que debe ser y no lo que es*, edición y estudio preliminar de A. Elorza, Madrid, 1969, pág. 94.

¹¹³⁸ T. M. Fernández de Messa, *Oración que exorta a estudiar las leyes de España por ellas mismas*, Valencia, 1752, págs. 6 y 7.

No obstante estas manifestaciones, Fernández de Messa recurre a la doctrina de los autores en la misma medida que lo hacen los otros abogados. De hecho, de las dos alegaciones suyas que he visto, las citas de autores suponen el 88'49 y el 75'91 % del total —en base al criterio que después explicaré—, mientras que las de Derecho real tan sólo el 2'65 y el 10'94 %, respectivamente.¹¹³⁹

Juan Francisco de Castro, al contrario que Berní y Fernández de Messa, argumentaba en favor de la alegación de doctrina, manifestando que

Quando hay decisión expresa de ley y su autoridad es conocida, cessando el motivo de grandes controversias, cessa también el recurso a los intérpretes; pero son muy raros estos casos: apenas se decide alguno en la práctica sin el recurso a los doctores. Su autoridad es tan grande, que tiene veces de ley. Apartarnos de la doctrina común de los doctores es apartarnos de la ley misma: y decidir contra esta doctrina, es como decidir contra la ley.¹¹⁴⁰

Igualmente, Francisco Carrasco del Saz opinaba que era bueno que, además de la ley, se aportara la decisión de algún doctor sobre los mismos términos. Pero matizaba esta opinión diciendo que, para evitar con esta práctica posibles excesos, debían alegarse solamente aquellas opiniones relacionadas expresamente con el caso y no cualquier otra general.¹¹⁴¹

Mucho más favorable a la aportación al pleito de doctrina se mostraba Antonio Gómez, quien, interpretando arbitrariamente la primera de las *Leyes de Toro*, decía que la doctrina de los autores era fuente tanto indirecta como directa del Derecho español. Indirecta por cuanto los autores —incluso extranjeros— interpretaban el *Ius commune*, que se constituía como derecho supletorio del aplicable en primer grado: Derecho real propiamente dicho,

¹¹³⁹ Véase alegación Jesús, María y Joseph, *San Joaquín y San Felipe Neri. Alegación jurídica por D. Joaquín Villaraza, antes Descals, en el pleyto de propiedad con el conde de Faura sobre la successión del mayorazgo fundado por Don Lorenzo Villaraza*, B.U.V., Varios 240, núm. 26; y alegación Jesús, María, Joseph y San Felipe Neri. *Alegación por don Pedro Císcar, marido de doña Rosa Císcar, en los autos con don Andrés Císcar, sobre la revocación y nulidad pretendida por éste del laudo dado por el doctor Bautista Monseny, y possession tomada en su virtud de ciertos bienes sitios en la ciudad de Denia*, B.U.V., R-2/361, núm. 9.

¹¹⁴⁰ J. F. de Castro, *Discursos críticos sobre las leyes y sus intérpretes*, Madrid, 1765, Lib. III, disc. 2. Véase también en A. García-Gallo, *Antología de fuentes del antiguo Derecho. Manual de Historia del derecho Español II*, Madrid, 1982, pág. 108.

¹¹⁴¹ J. Barrientos Grandón, "*Mos italicus...*", notas a pie de página nº 70 y 71, con respecto a los textos de F. Carrasco del Saz, *Exhordium huius operis*, núms. 14, 18, 20-22.

Partidas y fueros, conjuntamente. Y fuente directa, aunque supletoria, por cuanto la doctrina se aplicaba, además, en defecto de ley —del reino, canónica o civil de los romanos—, de la costumbre y de la razón natural.¹¹⁴² No obstante, parece que ésta no era la opinión general. Gregorio López, en sus glosas a *Partidas*, equiparaba razón natural y Derecho romano, incluyendo en esta equiparación la doctrina de los autores del Derecho romano. Castillo de Bovadilla admitía expresamente que la doctrina tenía fuerza de ley. Sin embargo, la sentencia judicial dada en contra de ella no era nula.

La discusión sobre la fuerza de la doctrina entronca con otro problema diferente, pero a la vez complementario, como es, no ya el de la vigencia del Derecho real —cuestión superada afirmativamente—, sino el de su suficiencia para resolver todas las discordias a dirimir en el foro. Mientras que De Castro hemos visto que suponía su insuficiencia, Berní y Catalá opinaba que

...no tienen los Abogados en España necesidad de gastar mucho en libros, porque gracias a Dios tenemos las Leyes Reales tan recogidas y puestas en orden, que con poco trabajo se halla Ley terminante para cada cosa ... el Derecho común en España por sí solo, no hace fuerza en práctica, si no va junto con Ley Real, o a lo menos se demuestra no aver disposición Real acerca del assumpto, ni costumbre; lo que tengo por dificultoso.¹¹⁴³

En otro momento, y en el mismo sentido, expresaba que

Los que están poco instruidos en las leyes del Reyno piensan que a cada passo se deberá acudir al Rey [en busca de interpretación], pero no es así porque las leyes del Reyno tienen tanto prevenido que poco ay que añadir; quanto más se estudia, más extenso parece. Vistas todas las leyes del Reyno se hallará una total prohibicion de opiniones en práctica, L. 6. tít. 4. lib. 1. *ordinam.*, y aunque una ley

¹¹⁴² Por lo tanto, para Antonio Gómez el juez debía atenerse en el momento de resolver a las siguientes fuentes, por este orden: las *Leyes de Toro*, las del *Ordenamiento*, las pragmáticas del reino y *Partidas*; después a los fueros municipales; en su defecto al Derecho romano; en defecto de éste debe acudir a la costumbre "legítimamente inducida por el tiempo de 10. años, y pluralidad de actos que a este fin se hayan practicado"; y en defecto de la costumbre el juez debe acudir a las reglas naturales, a las opiniones de los autores y a la analogía; finalmente, a la interpretación del soberano. A. Gómez, *Ad Leges Tauri commentarium absolutissimum*, Madrid, 1780, pág. 4. Esta anteposición de *Partidas* a las leyes del *Fuero* la atribuye Pedro Nolasco a una equivocación de A. Gómez. Véase P. Nolasco de Llano, *Compendio de los comentarios extendidos por el maestro Antonio Gómez a las ochenta y tres leyes de Toro*, Madrid, 1785, págs. 8-9. Véase también para este autor y los demás citados F. Tomás y Valiente, *El Derecho penal...*, págs. 135-136.

¹¹⁴³ J. Berní y Catalá, *El abogado instruido...*, pág. 30.

de Madrid permitió opiniones a falta de ley, quedó derogada por la *Ley 3. tit. 1. lib. 2. recop.* El uso de los intérpretes en la práctica Real es destinado para los Estudios Generales, *L. 3. tit. 1. lib. 2. recop.* y se permiten alegar en los papeles en Derecho e informes, en quanto comprobantes del Real Derecho y natural.¹¹⁴⁴

Pero a pesar de todo, Berní y Catalá terminaba aceptando la posibilidad de que para algún supuesto pudiera no haber ley *ex profeso*, en cuyo caso, y apoyándose en *Partidas*, opinaba que "donde ay una misma causa o razón se aplique el mismo Derecho".¹¹⁴⁵

Hecho este escueto repaso a la opinión de algunos juristas sobre el papel de la doctrina como fuente del Derecho, no pretendo realizar aquí un estudio sobre la literatura jurídica presente en las alegaciones, sino limitarme a observar en qué medida los doctores influyeron en el discurso jurídico de los letrados, y en qué medida éstos amparaban sus posturas en sus opiniones.

Varias son las posibilidades o formas que el abogado tiene de alegar doctrina.¹¹⁴⁶ Lo normal es que la aporte directamente, esto es, que se sirva inmediatamente del pasaje de algún autor o autores, citando sus nombres — normalmente abreviados, incluso la primera vez que los nombra—. En algunas ocasiones se transcribe este pasaje, y en otras tan sólo se señala el lugar de la

¹¹⁴⁴ J. Berní y Catalá, *El abogado penitente...*, Valencia, págs. 11 y sigs. Véase también, en la obra del mismo autor, *Disertación sobre...*, pág. 31.

¹¹⁴⁵ J. Berní y Catalá, *El abogado penitente...*, Valencia, pág. 14. *Partidas*, 7, 34, 36.

¹¹⁴⁶ En este punto creo necesario explicar las pautas que me he fijado y he seguido en la distinción y contabilización de las citas:

— En cuando a los autores, no he contabilizado los que aparecen meramente nombrados, sino sólo aquéllos para los que se determina la cita en concreto dentro de la obra en que se incluye. Caso de designarse varios capítulos o partes de la misma obra, sólo se han contabilizado como una cita. También he contabilizado como cita de doctrina y no legal los comentarios de los autores a las leyes, sean o no clásicos; como Antonio Gómez a *Leyes de Toro* o los distintos jurisprudencias romanos. O cuando un autor fundamenta su opinión en varias disposiciones legales. De la misma manera he contabilizado como cita de doctrina y no jurisprudencial las referencias de los autores a sentencias judiciales, a no ser que éstas aparezcan individualizadas y explicadas, en cuyo caso la he contabilizado como cita de jurisprudencia.

— Para la legislación romana he contabilizado tantas leyes como aparecen en una misma nota, aunque procedan todas del mismo cuerpo; *Digesto* o *Código*.

— Para la legislación real he considerado la ley original a que se refiere la cita, y no la *Nueva Recopilación* cuando en ella se incluye y así lo aclara el abogado.

— Para las citas jurisprudenciales he contabilizado tantas sentencias y tantas decisiones de la Sagrada Rota como el abogado aporta, aunque aparezcan en la misma nota.

— Cuando una nota se remite a los autores o a las leyes que aparecen en otra nota anterior he contabilizado en aquélla todo lo que se incluye en ésta.

— No he contabilizado, aunque aparecieran formalmente como citas, las referencias a los evangelios y a los evangelistas, pero sí a los historiadores. Ambos tipos de citas aparecen en muy escasas ocasiones.

obra donde se recoge. Pero hay otros medios. Son comunes, por ejemplo, las referencias a autores que, a su vez, se remiten a otros, para lo que el abogado se sirve de expresiones genéricas del tipo "fundándolo con varias leyes y autores", "quien aporta más de una columna de autores", o "quien numera en su apoyo 36 autores, y aún después añade siete". En otras ocasiones las referencias son más explícitas, como cuando Luciano Sulroca alega a los doctores León, Fontanella, Ciríaco y De Luca por medio de Bas.¹¹⁴⁷ Normalmente, en estos casos sólo aparecen los nombres de los autores, sin referencia a su obra. Téngase en cuenta que el auto acordado de 5 de febrero de 1594, en su intento por abreviar las informaciones, obligaba a que "se aleguen solamente la Lei o Doctor que principalmente tocara al punto, i al que refiere a los otros, sin decir los referidos por él, so pena de 200. mrs. para la Cámara i pobres por mitad".¹¹⁴⁸ Es curioso, pero representativo, el comentario del letrado Juan Bautista Navarro Tormo cuando cita a Alfonso Olea y dice que, "habiendo juntado este autor los que han escrito sobre el asunto, juzgo ocioso el entretenerme en amontonar citas".¹¹⁴⁹

En otras ocasiones el abogado incluye citas de autores que sostienen puntos de vista contrarios a la postura que él mismo defiende, para a continuación atacarlos y rebatirlos con la opinión de otros autores. Pienso que se trata de una táctica defensiva, que lo que pretende es destruir *a priori* los planteamientos de la parte contraria y demostrar al tribunal su dominio del tema, así como la debilidad de los posibles argumentos de los contrincantes.

En este sentido, el abogado Pascual Yáñez reconocía que era asunto reñido entre los autores la situación que se originaba cuando en un fideicomiso caducaba el grado medio. Es decir, Donato Sánchez había instituido heredero

¹¹⁴⁷ Jesús, María y Joseph. Por el Excmo. Señor don Diego de Fenollet, Grande de España Honorario..., B.U.V., Manuscritos 695, núm. 4, nota 129; y alegación Jesús, María y Joseph. Demostración del derecho que assiste a Don Juan Bautista de Isassi, como curador testamentario de Don Joseph Mariano de Verastegui y Tallada, en el pleyto que continúa suscitado por Don Joseph Manuel de Verastegui, padre de Don Joseph Mariano. Sobre que pertenece la successión en propiedad en el vínculo o fideicomisso que por vía de legado universal fundó de todos sus bienes Don Francisco Luis Castellá Doris de Blanes, comendador que fue de Perpuchent, con los executores testamentarios nombrados por don Manuel Matheo de Tordecillas, marqués que fue de Sanfelizes, último detenedor de dichos bienes, y que absolutamente no le tienen para resistir la que pretende dicho curador, B.U.V., Varios 240, núm. 12, cita núm. 6.

¹¹⁴⁸ Autos Acordados 2, 16, 1, edición de 1775.

a su sobrino. Para después de sus días, y a falta de descendientes, había instituido a sus dos sobrinas, y tras la muerte de éstas, y a falta también de descendientes, al clero de San Bartolomé. Premuriendo las sobrinas sin descendencia al sobrino, que tampoco tenía descendencia, pretendía éste que el tribunal declarara haber caducado la substitución y de libre disposición en su favor los bienes. Pascual Yáñez, como abogado del clero, alegaba que la doctrina que podría aportar el abogado del sobrino tan sólo sería discutible en el supuesto de que el que hubiera premuerto tuviese hijos, por causa de la mayor predilección que se considera en el testador a favor de los hijos; lo que no era el caso. Posteriormente se vale de Fusario para atacar la postura de Peregrino, según la cual caducaba la substitución si no había habido posesión en el grado medio. Fusario argumentaba que ello sólo se podía dar en el caso de que el testador lo hubiera expresado terminantemente y como condición imprescindible; lo que no se dio, al haber supuesto el testador una posesión que creía segura, y al no haber previsto la posibilidad de la premoriencia de ambas sobrinas. El abogado se vale de nuevo de esta técnica cuando reconoce que los autores dudan, sobre si la substitución hecha bajo la condición *si presbyter factus fuerit haeres institutus* tendría lugar no cumpliéndose en la forma específica y según la "corteza" de las palabras. Resuelve, finalmente, en que el testador tomó en consideración con esta condición el efecto, y su voluntad fue llamar al substituto para el caso de no tener hijos el heredero, con lo que aunque no se verifique lo formal de la condición tiene lugar y no caduca la substitución.¹¹⁵⁰

En otras ocasiones, la fijación por la acumulación de citas hace que algunas de ellas no tengan nada que ver con el tema que se discute, sino con principios procesales o materiales de carácter general, actuando como mero relleno y embellecimiento de la alegación. Caso de expresiones como "los

¹¹⁴⁹ Jesús, María y Joseph. Por don Vicente Luis León y Pallarés, en la causa con..., B.U.V., Manuscritos 623, núm. 5, pár. 26.

¹¹⁵⁰ Jesús, María, Joseph, San Bartholomé y Santo Tomás de Villanueva. Por el rector, clero y beneficiados de la Iglesia Parroquial de San Bartholomé de esta ciudad en el pleyto en grado de apelación que siguen con Donato Sánchez del Castella, ciudadano, heredero del señor D. Donato Sánchez del Castellar, regente que fue de la passada Real Audiencia de este Reyno. Sobre la successión en los bienes y herencia de dicho señor regente, y cumplimiento de las obras pías que previno, como muera dicho heredero sin hijos u otros descendientes, y deverse revocar la sentencia que pronunció el inferior en 7 de mayo de 1740, B.U.V., R-2/361, núm. 27, pág. 18, párs. 24 y sigs.; 29 y sigs.; y 46 y sigs.

negocios deven mirarse en los términos que ocurren, para que las disposiciones jurídicas sean aplicables; Cardinal. de Luc. *de jur. patr. disc. 4. n. 9.*", o la muy parecida "los negocios deven mirarse en los términos que ocurren, para ver si las reglas y doctrinas se ajustan a las circunstancias, pues de otra forma no son aplicables", también del cardenal de Luca *de jure patron. disc. 4 n. 9 & de regalib. disc. 160. n. 6.*¹¹⁵¹ Como se ve, hay ciertas diferencias entre ambas sentencias, que podrían ser debidas, o bien a una libre traducción de la obra, o bien, en la segunda sentencia, a una particular unión de ambos pasajes. Si bien en este caso no revisten mayor importancia las diferencias, sí la podrían tener en otros. De ahí se entiende la oposición de Berní y Catalá a la alegación de doctrina, por cuanto los autores contienen por lo común en sus obras citas falsas.¹¹⁵²

Como iremos comprobando a lo largo de esta exposición, una de las pretensiones básicas de todo abogado era la acumulación del máximo posible de citas, especialmente de autores. De esta manera, la doctrina se constituye en la primera fuente jurídica a la que acudían los abogados, según el número de citas que aportaban. Pasando a la realidad práctica, y en busca de datos cuantitativos concretos para demostrarlo, de las 55 alegaciones vistas he sumado un total de 7.656 citas; de ellas 6.096 corresponden a autores, lo que equivale al 79'62 %. De todos los memoriales, el que más citas contiene es aquél firmado por Cristóbal Tarazona, que data de 1791 —uno de los más recientes—, y que tiene su origen en un fideicomiso temporal dispuesto en 1395.¹¹⁵³ Son 426 las citas, distribuidas en 215 notas a pie de página. De aquellas citas, 384 —es decir, el 84'03 %— corresponden a autores. Algunas notas comprenden hasta más de diez citas, y en otros casos unos autores se remiten a otros.

Es fácil darse cuenta de que cualquier abogado, independientemente de que estuviera instruido en estos autores —103 en el memorial de Cristóbal

¹¹⁵¹ Por Dn. Gabriel Milán y Aragón, Doña Francisca Antonia Milán y Aragón, hijos y herederos de..., B.U.V., R-2/361, núm. 32, pág. 9, párrafo, 13; y Jesús, María, Joseph, San Bartholomé y Santo Tomás de Villanueva. Por el rector, clero y beneficiados..., B.U.V., R-2/361, núm. 27, párrafo 25, respectivamente.

¹¹⁵² J. Berní y Catalá, *El abogado instruido...*, págs. 30 y 37.

¹¹⁵³ Jesús, María y Joseph. Por el Excmo. Señor don Diego de Fenollet, Grande de España Honorario..., B.U.V., Manuscritos 695, núm. 4.

Tarazona—, no los podía haber estudiado todos *ex profeso* para cada caso. Es posible que ni siquiera los pudiera consultar. Ello nos hace pensar en la importancia de los apuntes o recopilaciones que existían de citas — especialmente doctrinales—, según materias, y que debían circular entre los abogados para la consulta de los distintos supuestos a defender. Berní y Catalá, a pesar de su defensa a ultranza del estudio directo del Derecho real, no deja de recomendar alguna de estas obras, como las *Concordancias de don Sebastián Ximénez*, donde, según sus palabras, se advierte una combinación de textos canónicos y civiles con leyes de *Partidas* y *Recopilación*, apuntando autores antiguos y clásicos; o el prontuario de don *Santiago Magno*, en el que por medio de 1.500 voces se anota el contenido de la *Recopilación* y autos acordados con muchos autores; o el *Hugo de Celso*, que es un prontuario del *Fuero Juzgo*, *Fuero Real*, *Ordenamiento Real*, *Leyes del Estilo* y *Partidas*, en el que por medio de 844 voces alfabéticas se traen a la memoria el contenido de estos cuerpos legales. También señala el *Alfabeto de Castejón*,¹¹⁵⁴ similar al anterior, en el que por medio de 2.239 voces da noticias de libros y leyes sobre los diversos tipos de Derecho.¹¹⁵⁵ Otros prontuarios conocidos eran los de Gerónimo de Cevallos, Agustín Barbosa o Lucio Ferraris Soler Alexandrinis.¹¹⁵⁶

* * *

Hablando de todo tipo de citas, y no sólo doctrinales, si tenemos en cuenta que la media de páginas dedicadas al discurso jurídico de las 45 alegaciones que referimos al principio es de 21'88 páginas; y si tenemos en cuenta que las citas de la parte del *Hecho* son casi inexistentes, ello nos da una media de 7'78 citas en cada página de *Derecho*, y un total de 170'22 citas en cada una de estas alegaciones. De cualquier manera, se trata ésta de una afirmación muy relativa, pues todo depende del formato de la página, del

¹¹⁵⁴ Gil de Castejón, *Alphabetum iuridicum canonicum, civile, theoricum, practicum, morali, atque politicum*, Lyon, 1730.

¹¹⁵⁵ J. Berní y Catalá, *Carta que el Dr. Don Joseph...*, págs. 7 a 9.

¹¹⁵⁶ Gerónimo de Cevallos, *Speculum aureum. Opinionum communium contra communes*; Agustín Barbosa, *Collectanea in Codicem Iustiniani ex doctoribus tum priscis, tum neotheoricis*; Lucio Ferraris Soler Alexandrinis, *Prompta bibliotheca canonica, iuridica, moralis, theologica, nec non ascetica, polemica, rubricistica, historica*.

tamaño de la letra, del discurso propio de cada letrado, etc. Así por ejemplo, en una alegación de Tomás Ecuriola de 1737, sobre la posesión de unos bienes supuestamente vinculados, cada una de las 15 páginas de discurso jurídico salen a 13'26 citas.¹¹⁵⁷ Por el contrario, en otra alegación de Ignacio Llopis de 1772, sobre la sucesión en propiedad de un mayorazgo, cada una de las 40 páginas salen a sólo 3'4 citas.¹¹⁵⁸

Volviendo a las citas sólo doctrinales, hay algunas alegaciones en que su porcentaje aumenta aún más de la media. La *adición II* supone un caso especial, ya que de tan sólo diez citas las diez son doctrinales. Lo que también se observa es que en las alegaciones cuya discusión principal gira eminentemente en torno al tema de los fideicomisos o mayorazgos, estas citas suelen darse en mayor abundancia. Así, de los 23 memoriales con este tema central, 16 superan el 79'62 % de citas de autores, alcanzándose entre los 23 el 84'98 %. Como ya sabemos se trata éste de un tema en el que la doctrina tiene especial relevancia y, posiblemente, más todavía en el reino de Valencia, por cuanto que no tenía legislación específica al respecto.

A lo largo de las alegaciones vistas los abogados han citado a más de 200 autores. Son autores que se dedican a comentar tanto el derecho patrio como, y en mayor medida, el común. También las decisiones judiciales. Evidentemente, no todos se alegan con la misma profusión, ni en todas las alegaciones se alegan en la misma medida, si bien hay una nítida relación proporcional entre la extensión del memorial y el número de autores. De las 45 alegaciones en que se distingue el *Hecho* del *Derecho*, y éste comprende una media de 21'88 páginas, la media de autores diferentes para cada una de estas alegaciones es de 45'64 autores, lo que viene a suponer unos 2'08 autores nuevos de media por cada página de *Derecho*.

¹¹⁵⁷ *Alegación en derecho por doña Manuela Ebri y Alreus contra don Aurelio Félix Peñarroja, sobre que deve ser puesta en possessión de todos los bienes que quedaron por fin y muerte de doña Blanca María Peñarroja, su hija, de quien es heredera, no obstante la contradición de dicho don Aurelio, que les supone vinculados. Y sobre que deve preceder examen de las pretensiones de ambas partes bajo una misma instancia, acumulando las quatro que éste propone a la principal de missión en possessión que antecedentemente presentó doña Manuela*, B.U.V., R-2/361, núm 47.

¹¹⁵⁸ *Jesús, María y Joseph. Informe legal por don Juan Bautista Llopis Ferris y Salazar...*, B.U.V., Varios 54, núm. 7.

Se trata de autores tanto patrios como extranjeros, alegados en la misma medida. Dentro de los primeros destacan por su profusión los castellanos, especialmente Juan del Castillo y Luis de Molina cuando el objeto del pleito es la sucesión en el mayorazgo.¹¹⁵⁹ También Antonio Gómez, Roxas de Almansa, Pegás, José de Vela y Juan Bautista Larrea. Entre los aragoneses destacan Luis de Casanate y, sobre todo, José Sessé. Entre los catalanes Tomás Mieres, Jaime Cáncer y, sobre todo, Juan Pedro de Fontanella. Y entre los extranjeros el portugués Pedro Barbosa y, especialmente, los italianos Cardenal de Luca, Vicente Fusario, Peregrino, Juan de Torre, Menochio y Carlos Antonio de Luca. Como comentarista aparece Acevedo con respecto a la *Nueva Recopilación* y, por encima de todos, Gregorio López con sus glosas a las *Partidas*. Las adiciones no son muy frecuentes. Destacan las adiciones ad Molina y, especialmente, Águila ad Roxas. Dentro de los autores valencianos se alegan en igual medida Francisco Jerónimo de León, Nicolás Bas, Crespí de Valldaura, y Matheu y Sanz. Con mucha menor frecuencia Belluga. Suelen alegarse varios de ellos en la misma nota sobre una misma cuestión y, normalmente, como comentaristas de algún

¹¹⁵⁹ Así por ejemplo, en la alegación *Jesús, María, Joseph y S. Francisco de Paula. Breve apuntamiento de los motivos legales...*, B.U.V., R-2/361, núm. 13, Castillo se cita en 19 ocasiones, mientras que el segundo autor más nombrado, Barbosa, tan sólo en 4. En la alegación *Exposición del derecho que asiste a D. Joseph Salelles y Molina, abogado de los Reales Consejos del Colegio de esta ciudad* (núm. 37). En los autos que sigue en grado de revista con D. Felicio Antonio March (núm. 26), D. Francisco Muro y Dolz (núm. 36) y la Real Casa Congregación de S. Felipe Neri (núm. 38). Sobre la respectiva sucesión en los vínculos mayorazgos fundados por D. Antonio Clara (núm. 9) y Clara Funes (núm. 8), B.U.V., Varios F/18, núm. 8, Castillo se cita en 15 ocasiones y el segundo más citado, Juan de Solorzano, sólo en 7. En la alegación *Jesús, María, Joseph, San Joaquín y Santa Ana. Alegación en derecho por D. Nicolás Bas y Borrull (casa 11) por sí y como curador testamentario a la demencia de don Ignacio Bas, su hermano (casa 10). En los autos en grado de suplicación con Bernardo Roca, Vicente Llopis, panadero, y Joseph Dolz, labrador, vecinos de la Villa de Alzira (casas 12, 13 y 14). Sobre reivindicación de dos piezas de tierra situadas en el término de Alzira, la una de 14 hanegadas en la partida de la Alquerencia y la otra de 26 hanegadas en la partida de Trulell, como recayentes en el vínculo o fideicomiso fundado por doña Clara María Bas (casa 4) en su último testamento ante Joseph Bru de 31 de octubre del año 1734*, B.U.V., Varios 298, núm. 6, Molina aparece 16 veces, Castillo 13, y el siguiente más citado, Peregrín, 6. En la alegación *Derecho que asiste a D.ª Pasquala Anteume y Salazar...*, B.U.V., Varios 54, núm. 6, Molina se alega en 31 ocasiones y Castillo en 20 —Pegás en 24—. El resto de autores se cita menos de 14 veces (Torre, Roxas de Almansa...). Y en la alegación *Jesús, María y Josef. Alegación en derecho por don Salvador Pascual y Bas, sucesor de don Juan Bas, contra quien principió el pleyto por la Real Audiencia de esta ciudad de Valencia don Joaquín Gavilá, y ahora continúa don Josef Gavilá. Sobre la sucesión en propiedad del vínculo o mayorazgo que fundaron el Dr. D. Antonio Pascual, presbítero, arcediano de Alicante y canónigo de la Iglesia Cathedral de Orihuela, y su hermana doña Isabel Pascual, en sus respectivos testamentos*, B.U.V., Varios F/18, núm. 5, Molina se alega 28 veces, Castillo 22, y el resto menos de 14 (Rosa, Pegás, Larrea...).

fur. Si bien, muchas veces se alegan éstos sin los comentarios de aquéllos, y viceversa. Hay una alegación de 1780 en la que se trae una carta de Gregorio Mayans impresa en La Haya en 1767. Pero se trata de una aportación, la del ilustrado, más bien histórica que jurídica, por cuanto trataba sobre la cuestión de la publicación de los *Furs* de Valencia el mismo año de la conquista de la ciudad.¹¹⁶⁰ De cualquier manera, los valencianos son los autores que menos se alegan. Ni siquiera destacan de forma especial en los memoriales sobre fideicomisos fundados en época foral, pues era la doctrina castellana la que primaba en esta materia. Como veremos más adelante, sí que destacan cuando se discute el derecho de sucesión y de amortización de una comunidad eclesiástica, por ser en esta materia relevante la legislación valenciana, incluso tras la derogación de los *Furs*.

Derecho romano y canónico

Con anterioridad a la *Nueva Recopilación*, distintos cuerpos legales ya habían rechazado la aplicación y la alegación del Derecho romano-canónico: el *Fuero Juzgo*, el *Fuero Real* o las *Partidas*.¹¹⁶¹ Incluso, en el *Breviario de Alarico* se prohibía bajo la pena de muerte. El auto acordado 2, 1, 1 de 1713 establecía que las leyes civiles no se podían considerar en España como verdaderas leyes, sino como sentencias de sabios:

...que sólo pueden seguirse en defecto de lei, i en quanto se ayudan por el Derecho Natural, i confirman el Real, que propiamente es el

¹¹⁶⁰ Por Dña. Esperanza María Vilanova, vecina de la ciudad de Valencia..., B.U.V., Varios 298, núm. 8, pár. 26, cita 34.

¹¹⁶¹ Con respecto al *Fuero Juzgo*: "El Rey don Flavio Recisiundo. Que los iuezes nos oyan nengún pleyto, si non aquel que es contenido en las leyes. Ningún iuez non oya pleytos, sino los que son contenidos en las leyes. Más el sennor de la cipdad, o el iuez por sí mismo, o por su mandadero faga presentar sea tractado antel, e sea acabado más aina, e que fagan ende ley" (2, 1, 11). Edición de la Real Academia Española, Madrid, 1815, págs. 12-14. En el *Fuero Real*: "Mandamos que todos los Alcaldes que fueren puestos, juren en el Consejo: que guarden los derechos del Rey, y del Pueblo, y a todos los que a su juicio vinieren, que juzguen por estas leyes, que en este libro son escriptas, e non por otras: e si Pleyto acaesciere que por este libro no se pueda deminar, enbíenlo a decir al Rey que les dé sobre aquello ley, por que juzguen, e la ley que el Rey les diere métanla en este libro" (1, 7, 1). *Los códigos españoles concordados y anotados*, I, pág. 354. Con respecto a las *Siete Partidas*: "Todos aquellos que son del Señorío del facedor de las leyes, sobre que las él pone, son tenudos de las obedescer e guardar, e juzgarse por ellas, e no por otro escrito de otra ley fecha en ninguna manera..." (1, 1, 15); y "...que los pleitos que vinieren ante ellos (los jueces), que los libren bien e lealmente, lo más ayna e mejor que supieren, e por las leyes deste libro, e non por otras" (3, 4, 6). *Los códigos españoles concordados y anotados*, tomos II y III, Madrid, 1848.

Derecho Común, i no el de los Romanos, cuyas leyes, ni las demás estrañas no deven ser usadas, ni guardadas...

No obstante, y al igual que ocurría con la doctrina, los abogados y juristas en general del siglo XVIII continuaban sintiendo el mismo aprecio y respeto por las leyes romanas que se había sentido en los siglos anteriores. Entre otras cosas porque la propia legislación que ahora prohibía su alegación, había aprobado su estudio y sancionado su prestigio. El mismo *Fuero Real* (1,6,5), después de establecer que "todos los pleitos sean judgados por las leyes deste libro", permitía que "si alguno razonare ley que acuerde con las deste libro, e las ayude, puédalo facer e non haya pena". Es decir, no se prohibía la alegación de derechos ajenos sino en el único caso de que no concordaran con las leyes reales. Lo que supuso, de hecho, una verdadera invasión de derecho romano y doctrina que tuvo que ser detenida por el desplazamiento que produjo sobre las leyes reales.¹¹⁶² El *Ordenamiento de Alcalá*, por su parte, después de establecer el sistema de fuentes ya conocido —derecho Real, municipal y *Partidas*—, reconocía el crédito del Derecho romano cuando decía lo siguiente:

...bien queremos e sofrimos que los libros de los derechos que los Sabios antiguos ficieron que se lean en los Estudios generales de nuestro Sennorío, porque ha en ellos mucha sabiduría, e queremos dar logar que nuestros naturales sean sabidores, e sean por ende más onrados.¹¹⁶³

Vemos, pues, que si bien había quedado prohibida definitivamente la aplicación del Derecho romano, e incluso su simple alegación, se permitía y recomendaba, sin embargo, su estudio en las universidades.

Los juristas eran conscientes de que, aunque las leyes reales eran las únicas válidas, en la práctica era indudable la eficacia del Derecho romano, y por lo tanto era imprescindible su alegación y presencia en los tribunales. El Derecho romano se nos muestra como la legislación a seguir. Son numerosos los juristas que dejan constancia de esta realidad. Es más, incluso algunos la

¹¹⁶² R. Gibert, "La tradición científica del derecho español", *Atlántida. Revista del pensamiento actual*, Vol. IV, núm. 15, mayo-junio 1965, pág. 6 [228].

¹¹⁶³ *Ordenamiento de Alcalá* de 1348, Título XXVIII, ley 1ª, edición de Jordán de Asso y Miguel de Manuel, Madrid, 1774.

reconocen como ajustada a la ley, puesto que a pesar del orden de prelación establecido, la interpretación de numerosos de estos autores posibilitaba la aplicación tanto del Derecho romano como del canónico, aunque en diferente medida, y aunque los mismos autores tampoco se pusieran de acuerdo.

Destaca la postura de Juan López de Palacios Rubios, recogida en su obra *Commentaria, et repetitio rubricae, et capituli, per vestras de donationibus inter virum & uxorem*, de 1503, en donde distingue la aplicabilidad del Derecho romano entre las causas civiles y las canónicas. Según este jurista, en las causas civiles debía fallarse con arreglo al Derecho real, en su defecto con arreglo al Derecho canónico, y, finalmente, con arreglo al Derecho civil. En esto seguía la doctrina de Baldo de Ubaldis en sus *Commentaria in Codicem*, para quien el Derecho divino, base del canónico, era el origen de todos los demás. En las causas canónicas, no obstante, y siguiendo también a Baldo de Ubaldis, el Derecho romano debía aplicarse en defecto del canónico y, en segundo lugar, del Derecho real y consuetudinario de cada reino. De cualquier manera, Palacios Rubios terminaba diciendo que el Derecho romano no podía alegarse en las causas civiles como derecho imperativo, sino sólo como razón y procedimiento a través del cual argumentar. Aunque se trata de una opinión enunciada en 1503, la exigua evolución del Derecho y de la prelación de fuentes en el sentido que estamos tratando hacían de ella una postura plenamente vigente también en el siglo XVIII. Prácticamente las mismas ideas adoptaron, entre otros, Gregorio López o Juan de Hevia Bolaños.¹¹⁶⁴

Otras opiniones interesantes fueron las de Antonio Gómez y Juan Francisco de Castro.¹¹⁶⁵ Para el primero, a falta de ley real —entiéndase las *Leyes de Toro*, ordenamientos, pragmáticas, fueros y *Siete Partidas*, por este orden—, y Derecho común, se debía apelar a la costumbre y, a falta de ésta, a la razón natural. En su defecto, a la opinión común o, si no es posible, probable de los autores y, finalmente, a la interpretación del monarca. Por consiguiente, tanto en la interpretación de *Partidas* y demás leyes reales, como en la interpretación del Derecho natural, la presencia del Derecho romano sería

¹¹⁶⁴ G. López, gl. 2 ad *Partidas*, 5, 14, 8; y J. de Hevia Bolaños, *Curia Filípica*, 1, 8, 14, Madrid, 1825.

¹¹⁶⁵ A. Gómez, *Ad leges Tauri commentarium absolutissimum*, Madrid, 1780, págs. 4-8; y J. F. Castro, *Discursos...*, I, pág. 59.

inevitable. Y ello además de la importancia que también le otorga a la doctrina, como hemos visto. Para De Castro, el Derecho romano sólo tendría aplicación como razón natural y en defecto de ley particular.

En las argumentaciones de los abogados se reflejaba, interesadamente, cualquiera de estas opiniones, puesto que, a pesar del paso de los años, la situación apenas había variado. José Beneyto, por ejemplo, apoyándose en Bas, consideraba en 1772 que el Derecho natural no era sino el Derecho común.¹¹⁶⁶

En lo que sí están todos de acuerdo es en el reconocimiento de su perfección y de su carácter inspirador de la legislación patria. Mariano Peset afirma en este sentido que

La práctica entre leyes reales se considera una realidad más baja, sin alturas intelectuales. Ella misma está impregnada en gran parte por las sutilezas y soluciones romanas y su estudio no alcanza los recintos del saber. La distancia entre teóricos y prácticos se mantiene; aquéllos son los más prestigiosos juristas, éstos —con su orientación— se dedican a los pleitos y realidades de los conflictos entre las personas. El Derecho patrio es insuficiente, es menos perfecto, posee menos cultivadores. O mejor, quienes escriben tienen siempre en cuenta, aun cuando traten de resolver realidades de la práctica, las verdades y dogmas del Derecho romano.¹¹⁶⁷

Hasta los últimos años del siglo XVIII, el Derecho romano-canónico continuaba siendo el único que se estudiaba en las universidades españolas. Y ello a pesar de que muchos autores —como Berní y Catalá— consideraban difícil la posibilidad de que ante un caso concreto no hubiera ley real ni fuero municipal aplicable, por lo que opinaban que las leyes romanas sólo podrían alegarse como complemento de las nacionales. Atacando al Derecho romano se atacaba, además, a la doctrina de los autores extranjeros que lo comentaban, que era la mayoría.

Adentrándonos en las alegaciones, el abogado José Ignacio Alfonso argumentaba, en 1772, en favor de considerar como no escrita la cláusula testamentaria que condicionaba el legado del tercio y quinto de mejora a contraer matrimonio a gusto y voluntad de un tercero, por constituir esta

¹¹⁶⁶ *Derecho que assiste a D.^a Pasquala Anteume y Salazar...*, B.U.V., *Varios* 54, núm. 6, pág. 55.

cláusula un impedimento a la libertad de matrimonio, como así recogía la ley 72 del *Digesto*. Ante el ataque efectuado por la parte oponente al Derecho romano, aquel abogado decía así:

Y se estraña no poco que trate con tan poco respeto la ley de los romanos, conceptuándola de dévil espíritu, siendo así que la razón es alma de la Ley, y que para juzgar sirven de gobierno en primer lugar las leyes reales, y en lo que no está prevenido por las mismas y se halla establecido en las del Derecho Común, se deve recurrir subsidiariamente a éstas para el acierto del juicio. Y esta circunstancia basta para que se trate como poderosa y robusta la autoridad de dicha Ley de los romanos.¹¹⁶⁸

Esta defensa del Derecho romano no es, sino, una excepción. Su autoridad apenas se ponía en entredicho en el foro, sino que se daba por supuesta. De hecho, José Ignacio Alfonso hace girar su discurso alrededor de la aludida ley del *Digesto*, a la que intenta reforzar con legislación real y doctrina. Lo que sí es cierto es que nos encontramos ante una de las escasas ocasiones —que con el tiempo posiblemente fueron aumentando—, en que se recordaba expresamente a los tribunales la preferencia de las leyes reales. Es posible que se debiera a la influencia de los tratados sobre práctica forense, que empezaban a tomar relevancia por aquellas fechas, o a las obras de los ilustrados que alzaban sus voces contra la perenne hegemonía del Derecho romano. En definitiva, este texto refleja nítidamente el continuo dilema con el que se enfrentaba todo letrado. Por una parte, eran conscientes de la aplicabilidad preferente del derecho nacional por imperativo del monarca, pero, por otra parte, habían sido instruidos exclusivamente en el Derecho romano, en el que, gracias a la doctrina de los doctores, podían encontrar soporte a cualquier defensa que mantuviesen. Pero, y volviendo a la excepcionalidad de este ataque al Derecho romano, he encontrado dos alegaciones en las que manifiestamente se propugna su inaplicabilidad. Una es del abogado Antonio Sánchez Santiago, que decía lo siguiente:

¹¹⁶⁷ M. Peset Reig, "Derecho romano...", págs. 325-326.

¹¹⁶⁸ *Jesús, María y Joseph, S. Joaquín y Santa Ana. Alegación en derecho por Dn. Bernardo Lasala, como marido de doña Dionisia Beltrán, con don Juan Lamarque, como marido de doña Margarita Beltrán. Sobre pretender ésta se declare pertenecerle la mejora de tercio y quinto de todos los bienes de la herencia de D. Joseph Beltrán, padre común*, B.U.V., Varios 54, núm. 8, párrafo. 9.

Porque las leyes de los romanos no lograron autoridad alguna en el Reyno de Valencia quando se gobernaba por sus fueros, ni tampoco en el resto de España. El señor don Jayme el Conquistador prohibió en 1264 se juzgase por ellas en los pleitos que ocurriesen. Los reyes godos y castellanos establecieron lo mismo; así podrán tener fuerza únicamente en lo que proponen dictado por la razón o por el Derecho natural.¹¹⁶⁹

Todavía llega más lejos el abogado Pascual Yáñez, a propósito de la aplicación del *fur* 44 en un testamento otorgado en 1703, cuando pone en entredicho, incluso, la función hermenéutica del Derecho común:

...considerándose los Fueros de este Reyno derecho común para los habitantes de él, y entenderse a la letra sin interpretación alguna del derecho Civil o Canónico.¹¹⁷⁰

No obstante, ambos letrados no dejan de citar este Derecho. De las 134 citas de la primera alegación, 20 son de *Digesto*, 4 de *Código* y 2 de *Instituta*. Y de las 236 de la segunda, 39 pertenecen al *Digesto* y 10 al *Código*.

Vemos pues, que el foro se nos presenta como otra de las instancias o registros jurídicos en que la cuestión sobre la prelación de los distintos tipos de Derecho, y la vigencia del Derecho común se plantea y discute continuamente, sin sólidos planteamientos ni claras pretensiones, más que el del interés por ganar el pleito en cuestión. Es decir, las opiniones de los letrados sobre este dilema son irrelevantes, ya que mantendrán la postura que consideren más oportuna en la defensa de su pretensión. Y todo ello, en última instancia, auspiciado por la falta de una decidida actuación real, que no se dará sino a principios del siglo siguiente.

¹¹⁶⁹ Por Dña. Esperanza María Vilanova, vecina de la ciudad de Valencia, viuda de don Vicente Borull, oidor que fue de la Audiencia de aquel Reyno, heredera de doña Josefa Marimón. Con los cleros de las villas de Cáliz, Vinaroz y Benicarló, del mismo Reyno. Sobre que se declare que por la muerte sin hijos y descendientes de doña María Antonia Cerdá, antes Mas, sucedió la doña Esperanza en todos los bienes, derechos y acciones que fueron propios de Casimiro Cerdá, de los que tocaron a María Cardona, su madre, en la partición que hizo su hermana Esperanza Cardona de los del difunto mosén Gabriel Cardona y asimismo que le han pertenecido por derecho de sucesión intestada todos los demás bienes raíces de la herencia del Casimiro Cerdá, B.U.V., Varios 298, núm. 8, pár. 15.

¹¹⁷⁰ Jesús, María, Joseph, San Bartholomé y Santo Tomás de Villanueva. Por el rector, clero y beneficiados de la Iglesia..., B.U.V., R-2/361, núm. 27, pár. 16, pár. 22.

En la práctica, las leyes romano-canónicas se citarán por igual en cualquier tipo de alegación. Cuando son de distinta procedencia los fundamentos jurídicos de una misma cita, en primer lugar siempre se citarán las leyes romanas, y a continuación los autores. La legislación real, de alegarse, suele aparecer al final de la nota. De todas las alegaciones estudiadas, tan sólo en una, en forma de *adición*, no aparecen citas de Derecho romano-canónico. Esta citas suponen el 14'68 % del total, esto es, 1.124 de las 7.656 citas. Desde otro punto de vista, aquellas 1.124 citas supondrían el 78 % de todas las 1.441 citas legales, contabilizando el Derecho real. De aquéllas 1.124, 785 corresponden al *Digesto*, es decir el 69'83 %; 295 al *Código*, esto es, el 26'24 %; y 44, esto es, el 3'91 % a otros cuerpos: *Auténticas*, *Novelas*, *Instituciones* o *Decretales*.

Derecho real

Como ya sabemos, el motivo central del auto acordado 2, 1, 1, de 1713, era reafirmarse en la primacía en los tribunales de la legislación patria frente a los demás tipos del Derecho, especialmente frente al romano-canónico. Pretendía el auto la preferencia de las leyes nacionales, incluyendo las no recopiladas y aquellas otras que, habiéndolo estado, se habían revocado o suspendido, cuando no hubiera otra ley que, de forma clara, decidiera la duda plantada en el pleito. Por decisión de 12 de junio de 1714 — auto acordado 2, 1, 2—, Felipe V se ratificaba en la vigencia del anterior auto.

Para Berní y Catalá, el cuerpo del Derecho real se componía de los siguientes libros: el *Fuero Juzgo*, el *Fuero Real*, el *Ordenamiento Real*, las *Leyes del Estilo*, las *Siete Partidas*, la *Nueva Recopilación* y los *Autos Acordados*. Todo lo cual sumaba un total de 8.679 leyes “que es menester estudiarlas y saberlas”.¹¹⁷¹

Los letrados eran conscientes de la suficiencia, al menos teórica, del Derecho real para poder ganar los pleitos, pero evidentemente no la ponían en práctica. Caso de José Manuel Bas, que manifestaba la suficiencia de la ley 4, 13, 2 de la *Recopilación* para declarar la nulidad de la posesión dada a la parte contraria, por haberla llevado a efecto el alcalde mayor de Cullera sin

¹¹⁷¹ J. Berní y Catalá, *Carta qe el Dr. Don Joseph...*, pág. 9.

conocimiento de causa ni citación de partes, sino sólo a petición de aquélla.¹¹⁷² A pesar de lo cual, la alegación contiene 44 citas más, 31 de autores, 11 de Derecho romano-canónico y 2 de jurisprudencia. Ya hemos visto que Antonio Sánchez Santiago adopta parecida postura en 1780, sobre un testamento otorgado en 1692. Si por una parte dice que Jaime I formó un código legal, tomando lo que mejor le pareció del Derecho civil de los romanos y "escluyendo éste", por otra parte las referencias al *Código* y al *Digesto* ocupan casi el 20 % de las citas.¹¹⁷³ Se trataba, en definitiva, de un conocimiento no asumido, pues también son comunes expresiones como la José Nebot y Sanz que en aquel pleito visto sobre mayorazgo decía que "son propias de los derechos común y municipal, por los que se debe gobernar este pleyto",¹¹⁷⁴ poniéndose en igualdad ambos ordenamientos.

La alegación presentada en 1761 por los religiosos de Santo Domingo de Guzmán de la ciudad de San Felipe, contra Manuel Sánchiz —en representación de sus hijos—,¹¹⁷⁵ sobre el derecho del convento a suceder en la universal herencia de los bienes de la cuñada de éste, Vicenta Navarro, se abre con la transcripción literal y completa del auto acordado 3, libro 5, título 10, del que se pretende valer Manuel Sánchiz, para solicitar la nulidad del testamento de su cuñada. Según este auto, se tienen por nulas las mandas que los fieles dejaren a sus confesores, sus iglesias o conventos, durante la enfermedad de que murieran, al no considerarse libre la voluntad del testador y causar perjuicio a sus parientes. El abogado del convento pasará a continuación a demostrar, paso por paso, y a lo largo de los dos primeros apartados en que se divide la parte de *Derecho*, que ninguno de los supuestos contemplados por el auto acordado se dan en este caso concreto. Que la testadora no murió a consecuencia de la enfermedad durante la cual testó, ni hubo persuasiones ni engaños por parte del confesor, sino plena y absoluta

¹¹⁷² *Manifiesto jurídico por don Vicente Falcó de Belaochaga y don Carlos Alós y Vaciero, como legales administradores de doña Jacinta y doña Vicenta Borrás, hermanas, sus respective consortes. Sobre pretender éstas el reintegro en la posesión de los bienes de que han sido despojadas por don Joseph Borrás, su tío*, B.U.V., R-2/361, núm. 14, párs. 17 y 18.

¹¹⁷³ *Por Dña. Esperanza María Vilanova, vecina de...*, B.U.V., Varios 298, núm. 8, pár. 26.

¹¹⁷⁴ *Jesús, María, Joseph, y S. Francisco de Paula. Alegación del derecho que assiste a...*, B.U.V., R-2/360, núm. 22, pág. 5, pár. 7.

¹¹⁷⁵ *Jesús, María, Joseph. Alegación en hecho y derecho por el convento y religiosos del...*, B.U.V., Varios 77, núm. 21.

libertad, y que en ningún momento había manifestado la testadora intención alguna de dejar su herencia a sus sobrinos. En el tercer apartado del *Derecho* el convento intentará demostrar, a través de una larga lista de cuentas, que, en contra de lo que decía la otra parte, todavía podía usar del real privilegio concedido por Carlos II, en 22 de noviembre de 1689, para adquirir bienes de realengo hasta la cantidad de doce mil libras. Y que este privilegio cumplía los requisitos exigidos por el privilegio 30 del rey Fernando II y de la pragmática sanción, llamada del derecho del sello, de 17 de abril de 1610. Evidentemente, cada uno de todos estos puntos serán defendidos a través de numerosas citas de autores y de legislación común.

Pero lo importante de esta alegación es su inusualidad, en cuanto que la doctrina de los autores y las citas de derecho romano giran alrededor de estas disposiciones de derecho real castellano, que se constituyen como centro y base de toda la argumentación jurídica, adoptando aquellas citas un indudable sentido de apoyo y complemento. A su favor se alegan, además, las *Partidas* en dos ocasiones, un *fur* y dos privilegios reales valencianos. Nos encontramos así ante uno de los pocos casos de claro predominio y superioridad del Derecho real. Y ello a pesar de que sus citas sólo suponen el 8 % de las 125 que hay en total; mientras que las doctrinales suponen el 74'4 %, y las del Derecho romano-canónico el 17'6 %.

Si la invocación al Derecho real castellano es escasa, menos todavía se invoca el valenciano —*Furs y privilegis*—, al estar derogado por el decreto de Nueva Planta de 29 de junio de 1707. Normalmente, sólo se alega con ocasión de testamentos nacidos con anterioridad a esta fecha. Y suele ser el mismo abogado el que manifiesta que, si bien ya no está vigente, sí lo estaba cuando se otorgó aquella disposición, por lo que debe tenerse en cuenta.¹¹⁷⁶

¹¹⁷⁶ Véase Jesús, María, Joseph y S. Francisco de Paula. *Breve apuntamiento de los motivos...*, B.U.V., R-2/361, núm. 13, párrafos 31 y 32 (notas 29, 30 y 31); o J.M.J., *Alegación en hecho y derecho por...*, B.U.V., Varios 298, núm. 10, párrafos 68 y 74; así como el completo desarrollo de la alegación *Derecho que assiste a D.^a Pasquala Anteume y Salazar...*, B.U.V., Varios 54, núm. 6. Véase también P. Marzal Rodríguez, *El Derecho de sucesiones...*, págs. 156-176. En un primer momento se discutió si los testamentos otorgados con anterioridad al decreto de Nueva Planta debían regirse por *Furs*, o, por contra, por las leyes castellanas, cuando el otorgante sobrevivía al cambio de legislación. Este asunto se resolvió en favor del derecho valenciano porque incluso la misma legislación castellana —ley 200 de *Estilo*— mantenía que todo acto jurídico debía regirse por la ley vigente en el momento de su redacción; véase la misma obra, págs. 172-176. Semejante situación se da con el privilegio militar, para el que M^a D. Guillot Aliaga ha demostrado que continúa vigente tras el decreto de Nueva Planta para los

En otras ocasiones se invoca como un ordenamiento más, junto con los otros; el Derecho común, el Derecho real castellano o el Derecho divino o costumbre universal y, sobre todo, la opinión de los autores.¹¹⁷⁷ En sentido contrario, nada impide que el Derecho real castellano se alegue en memoriales basados en disposiciones testamentarias nacidas en tiempos de *Furs*.

No obstante, debemos tener en cuenta que la Nueva Planta no derogó la jurisdicción eclesiástica, por lo que para la Iglesia seguiría vigente la misma normativa, los mismos fueros, incluso para los derechos nacidos con posterioridad a 1707, pues así lo reconocía la real cédula de 7 de septiembre de 1707.¹¹⁷⁸ Es por ello que en los pleitos en que aparecen involucradas parroquias, cleros, conventos, etc., los *Furs*, y también los doctores valencianos, se alegarán con especial profusión. Y así lo explicaba claramente el abogado Lorenzo Merita, en un memorial de 1745, en el que, sin dudar el haber llegado la vocación de la iglesia parroquial de Pego, se manifestaba en contra de su capacidad para adquirir una herencia, porque al diferírsela se encontraba al descubierto en 683 libras, según la última visita general de amortización. Sabiendo que se encontraba ante un tema discutido, en su defensa hacía un resumen de cómo entendía que había quedado la situación tras la abolición de *Furs*. Según él, los *furs* en que basaba su pretensión (5, 6, 7, 8, 9, 12, 22 y 25 de la rúbrica *De rebus non alienandis*, 47 de la rúbrica *De testamentis*, y capítulo 129 de las cortes de 1626), no habían sido abolidos el 29 de junio de 1707, ya que por la real cédula de 7 de septiembre Felipe V

matrimonios celebrados con anterioridad. Este privilegio —*furs* 5,5,24; 5,5,25; y 5,5,26— constituye una excepción a la regla de que la dote debe restituirse tras la disolución del matrimonio por muerte de la esposa. Los nobles y ciudadanos honrados continuarán disfrutando de los bienes de la dote hasta su defunción, mientras no contraigan nuevo matrimonio. Véase *Régimen económico-matrimonial en el Derecho foral valenciano* (tesis doctoral inédita), Universitat de València, 1997, págs. 362-386, en concreto 184-385.

¹¹⁷⁷ *Derecho que assiste a D.^a Pasquala Anteume y Salazar...*, B.U.V., *Varios* 54, núm. 6, párrafos 8, 40, 45 ó 52.

¹¹⁷⁸ De hecho, el cabildo de Valencia, al tiempo que se negaba a contribuir con el impuesto de alcabalas y demás tributos nuevos, en base a que la abolición de los *Furs* no afectaba a los derechos de la Iglesia ni de los eclesiásticos, pretendía, contrariamente, adquirir bienes raíces sin necesidad de los correspondientes privilegios de amortización; lo que, evidentemente, no consiguió. El Juzgado de Amortización continuaría vigente, con pocas modificaciones. Véase Fco. J. Palao Gil, *La Amortización Eclesiástica en la Ciudad de Valencia en el Siglo XVIII: El Juzgado de Amortización* (tesis doctoral inédita), Universitat de València, 1992, págs. 111 y sigs.; y C. Pérez Aparicio, "El clero valenciano a principios del siglo XVIII: la cuestión sucesoria", *Estudios de Historia de Valencia*. Valencia, págs. 247-278, en concreto págs. 270-271. Véase también Peset Reig, M., "Apuntes sobre la Iglesia Valenciana en los años de la Nueva Planta", *Anales Valencinos* 2 (1975) 245-258.

mandó que no era su ánimo comprenderlos en aquella derogación. El 9 de julio de 1739 el monarca confirmaba la misma providencia, mandando que en los contratos de los seculares, después de la cláusula *ad habendum tenendum*, precisamente se prosiguiesen con la otra *exceptis clericis*. Seguía diciendo que, habiéndose dudado de si en virtud del concordato con la Santa Sede del año 1737 estaría derogado el derecho de amortización, en otro decreto de 12 de noviembre de 1743 se resolvió que se

sobreseyese, en el uso y ejercicio, el capítulo 8 del citado concordato por lo tocante a los reinos de Mallorca y Valencia, con la condición de que pagasen los derechos de amortización y sello sin moderación alguna, y todas las cargas reales y vecinales, otorgando también las demás obligaciones y precauciones que concerniesen a conservar sin decadencia esta regalía. Y para que en el futuro no recibiesen los vasallos legos de Su Magestad, en el paso de sus haciendas a manos muertas más perjuicio del que experimentaban, se sirvió mandar igualmente prevenir a la Cámara que se evitase por medio de la denegación de las licencias para adquirir a las iglesias, comunidades y lugares píos.¹¹⁷⁹

Por lo reciente de este discutido asunto y de las disposiciones alegadas, parece que el discurso del abogado Lorenzo Merita se basa en sus propias opiniones; al menos no las fundaba en ningún autor de la época. Finalmente, concluía el abogado manifestando que los autores valencianos, en base a las normas que él mismo había explicado, establecían claramente que desde los tiempos de Jaime I las comunidades eclesiásticas eran incapaces de adquirir bienes de realengo, a menos que tuvieran real facultad por privilegio de amortización, y pagando los correspondientes derechos. Por ello, al no gozar la iglesia de Pego de este suficiente privilegio, debían pasar los bienes del causante a los sucesores inmediatos ex testamento. Y todo esto a pesar de que, a tenor del testamento, fuera la voluntad del testador que sucediera la referida iglesia.¹¹⁸⁰

¹¹⁷⁹ *Discurso legal por don Damián Merita y don Juan Merita...*, B.U.V., *Varios* 54, núm. 1, párf. 10.

¹¹⁸⁰ Según Lorenzo Merita, el único caso en el que había variedad de dictámenes se daba cuando la iglesia conseguía el privilegio *reintegra*, es decir, antes de la adición de los herederos pero después de haberse diferido. Como en este intermedio nadie tenía el derecho adquirido, resuelve que podía obtener la iglesia. *Discurso legal por don Damián Merita y don Juan Merita...*, B.U.V., *Varios* 54, núm. 1, párs. 11 y sigs. y notas 6, 8 y 11.

Caso parecido es el de la alegación vista párrafos atrás que presentó el convento de Santo Domingo de Guzmán, en donde se defiende tener el referido convento capacidad y suficiente privilegio real para suceder en la universalidad de la herencia. Por este privilegio, que databa de 22 de noviembre de 1689, el convento podía adquirir bienes raíces de realengo hasta la cantidad de 12.000 libras. Si con la última visita general de amortización del año 1742 el cargo de estos bienes había ascendido a 16.193 libras, y el descargo a 25.629, todavía le sobraba al convento privilegio hasta la cantidad de 9.435 libras, que se reducía a 3.385 libras con la adquisición de la referida herencia. Por otra parte, el convento alegaba no corresponderle el pago del equivalente, por introducirse en el mismo siglo XVIII y por no considerarse carga real, —pues de serlo deberían contribuir a él todos los eclesiásticos—. Para lo que el abogado aporta, además de a todos los autores valencianos —Crespí, León, Mateu y Bas—, el *fur* 15 de *rebus non alienandis* y dos privilegios, el 74 de Jaime II y el 78 de Pedro II.¹¹⁸¹

El memorial en el que más se prodiga la legislación valenciana es otro en el que se litiga contra los albaceas testamentarios del causante, el clero de la parroquial de Cálig, y el abogado fiscal del tribunal de amortización.¹¹⁸² Por ser el asunto muy parecido al de la parroquia de Pego, visto párrafos arriba, el centro de la controversia gira alrededor de los mismos *furs*. Pero aquí se introduce la discusión sobre la universalidad o particularidad de estas disposiciones cuando emplean el verbo "lexar". Mientras en aquella alegación se incluía sin ningún problema en el artículo 5 de *rebus non alienandis* la totalidad de la herencia, en la alegación presente, sin embargo, se considera

¹¹⁸¹ Jesús, María, Joseph. *Alegación en hecho y derecho por el convento...*, B.U.V., Varios 77, núm. 21, párrafo 54-63.

¹¹⁸² Jesús, María y Josef. *Memorial en Derecho del que assistía a doña Josefa Marimón, como a parienta más propinqua de Casimiro Cerdá, i aora se ha radicado i compette a doña Esperanza Vilanova i Marimón, viuda del señor don Vicente Borrull, sobrina de la expressada doña Josefa, por haverla nombrado ésta heredera en su último testamento. En el pleito que principió la referida doña Josefa i por su muerte ha continuado la expressada doña Seguridad, su heredera contra los albaceas testamentarios de doña María Antonia Mas i Cerdá i el clero de la parroquial de Cálig i el abogado fiscal de este tribunal de amortización. Sobre la successión ab intestato como a tal parienta más próxima de Casimiro Cerdá en los bienes raíces o sitios que recayeron en su herencia i por la successión ex testamento en los que tenía adquiridos de Mariana Cardona, su madre, que tocaron a ésta en la división que hizo con Esperanza Cardona, su hermana de los bienes de mosén Gabriel Cardona, Dr. en theología, vecino de la villa de Cervera*, B.U.V., Varios 298, núm. 7, párs. 24 y sigs. La alegación *Por Dña. Esperanza María*

que la expresión "lexara" equivale al castellano "legara", y por lo tanto en todos estos *furs* se hablaría a título particular. Para tratar de la prohibición de suceder en la totalidad de una herencia se debía acudir al *fur 47 de testamentis* y *5 de intestatis*.

En definitiva y por regla general, la legislación real no es comentada. Tampoco se discute nunca la inclusión o no del caso en cuestión en la ley que se alega. Sencillamente se alega, pues los comentarios se reservan —en su caso— para las citas de los autores. Y valga lo dicho para las normas romano-canónicas.

Resumiendo, las citas basadas en legislación real suponen el 4'14 % del total de citas —317 de 7.656— y el 21'99 % de la legislación, junto con el Derecho romano-canónico —1.124 citas—. Pero en todas las alegaciones no se aportan leyes reales. En nuestro caso, no se aportan en 9 de las 55. De las 317 citas 190 pertenecen al derecho castellano, esto es el 59'93 %, y 127 al valenciano, esto es el 40'06 %.

Para la legislación castellana, de las 190 citas destaca *Partidas*, con 101; *Nueva Recopilación*, con 50; y *Leyes de Toro*, con 23. Las otras 16 citas corresponden a leyes residuales: 3 pragmáticas, 3 leyes del *Breviario de Alarico*, 2 privilegios, 2 normas del *fori legum*, 1 auto, 1 norma del *Fuero Juzgo*, 1 del *Ordenamiento de Montalvo*, 2 de las *Leyes del Estilo* y 1 de un tratado de amortización. Las *Siete Partidas* se alzan como la obra más citada por un sencillo motivo: su carácter eminentemente romanista.

Sentencias judiciales

Lo que hoy entendemos por jurisprudencia se configura en estos momentos como la fuente de derecho que menos aparece en las alegaciones. Con la recepción del derecho justiniano se había producido una fuerte reacción contra el valor que hasta esos momentos se había concedido a las sentencias, por considerar que, al dictarse al arbitrio del juez, podían faltar a la autoridad

Vilanova, vecina de la ciudad de..., B.U.V., *Varios* 298, núm. 8, es la segunda instancia de la anterior; véase párs. 22 y sigs.

de las leyes o, incluso, a la costumbre.¹¹⁸³ En Castilla, Alfonso X había ordenado a los jueces aplicar las leyes o el *Fuero Real* y, en el caso de no haber disposición al efecto, que se acudiera al rey para que decidiera, insertándose su decisión en el libro del Fuero (*Fuero Real* 1, 7, 1). En Aragón, Jaime I obligaba a los jueces a resolver según el sentido natural o la equidad, lo que venía a ser el Derecho común.

Consecuencia de todo esto es que ninguna de las disposiciones vistas hasta ahora hacen referencia a la fuerza de las sentencias. Tampoco los autores de la época les prestaban atención en tratados y manuales. Y de aquí su escaso conocimiento e interés mostrado por los abogados. Pero, paradójicamente, tanto los abogados como los doctores reconocen en numerosas ocasiones el valor de ley de determinadas sentencias. Veamos a continuación algunas y diferentes opiniones que los abogados mantenían sobre este tema.

Opinaba Ignacio Llopis Ferris y Salt que las decisiones de los tribunales eran muy peligrosas para que se decidiera por ellas en cuestiones de hecho, tal y como, según él, decía Nathen. Además, y citando a Roxas de Almansa, manifestaba que para poder aportar jurisprudencia no era suficiente alegar el caso y el tribunal en que se hubiera ventilado; se requería también conocer las personas entre las que se había suscitado la disputa.¹¹⁸⁴ Cosa que no se va a dar en las sentencias que veremos, sino que más bien son comunes los casos en los que se cita un autor con su correspondiente obra, y al que se le añade alguna frase como “y lo comprueba con sentencia de la pasada Real Audiencia”,¹¹⁸⁵ sin concreción alguna.

¹¹⁸³ En el ámbito del Derecho penal había muchos delitos a los que la ley dejaba la pena indeterminada, dependiendo del arbitrio del juez; F. Tomás y Valiente, *El Derecho penal...*, pág. 376.

¹¹⁸⁴ Jesús, María y Joseph. *Informe legal por don Juan Bautista Llopis Ferris y Salazar...*, B.U.V., Varios 54, núm. 7, pág. 24.

¹¹⁸⁵ Jesús, María, Joseph, y las benditas almas del purgatorio. *Demonstración en hecho y derecho por los administradores y executores testamentarios de los bienes y última voluntad de Don Manuel Matheo de Tordecillas, Marqués que fue de San Felices en exclusión de la demanda puesta contra dichos administradores, por Don Joseph Manuel Velastegui, la que por su muerte continua Don Juan Bautista Izazi, curador de Don Joseph Mariano Velastegui, pretendiendo, como descendientes que suponen ser de Doña Eufrasia Vallterra, la successión en propiedad de los bienes recayentes en el vínculo que fundó Don Francisco Luis Castellar Doris y Blanes, comendador de Perpuigent, que legítimamente posehen dichos administradores*, B.U.V., Varios 240, núm. 14, pág. 12, nota nº 21.

La confusión y el desconocimiento de la jurisprudencia como Derecho vinculante lo evidenciaba, por ejemplo, el letrado Francisco Ferrer. En una misma alegación se contradecía manifiestamente. Primeramente decía que los senados que defendían la postura contraria no se basaban en razones tan sólidas y convincentes como los que apoyaban la suya. Debido a que los tribunales podían diferir, opinaba que "es constante que de las decisiones de algunos tribunales no se puede hacer concepto para seguir", por lo que debía estarse al caso especial y a la mente del testador. Pero, pocos párrafos después y olvidando lo dicho, le concedía a los tribunales, y en especial al de Amortización, mucha mayor consideración, al decir que muchas sentencias pronunciadas en el mismo sentido inducían costumbre, y había que estar a ella. E incluso —y lo que es más significativo—, por encima de la doctrina.

De tal forma que aunque la común opinión de los doctores fuese contraria o hubiese estatuto que dispusiera que no se atendiese la costumbre, aun en estos términos estaría obligado el juez a juzgar por la observancia subseguida, ... de tal suerte que con dos actos de haver juzgado en la dicha forma basta para deverse juzgar en adelante por dicha costumbre.¹¹⁸⁶

Lo que probablemente Francisco Ferrer intentaba defender era la fuerza, más que de las decisiones judiciales en sí, de la costumbre a la que se llegaba con varias sentencias dictadas en el mismo sentido, como así lo defendían los doctores Accursio y Juan Basiano.

El letrado Antonio Albert de Esparça parece que también le otorga a los tribunales mayor importancia de la que lo hace el común de los abogados. Así, reconociendo que es dudosa entre los autores la cuestión sobre si los hijos puestos en condición se entienden o no substituidos y llamados al fideicomiso perpetuo, se inclina por no entenderlos llamados, pues así lo seguían y calificaban comúnmente los "superiores tribunales". A pesar de ello no es capaz de refrendar esta opinión con ninguna sentencia, sino sólo con citas de autores.¹¹⁸⁷

¹¹⁸⁶ *Jesús, María y Josef. Memorial en Derecho del que assistía a doña Josefa Marimón...*, B.U.V., Varios 298, núm. 7, párs. 5 y 66.

¹¹⁸⁷ *Jesús, María y Joseph, Joaquín y Ana, y Santa Teresa de Jesús. Informe jurídico que presenta a los señores...*, B.U.V., Varios 240, núm. 2, pág. 12 y 13, pár. 27.

Más explícito es Tomás Fernández de Messa. En una alegación sobre la preferencia en el orden a suceder de un mayorazgo de las hijas y hermanas del último poseedor, frente a las hijas de la línea primogénita postergada, dice que

lo que más hace sobresalir la certesa de la opinión que defendemos es la multiplicidad de sentencias que por varios tribunales se han pronunciado.¹¹⁸⁸

A este efecto aporta en primer lugar los autores que tratan la sentencia sobre la sucesión a la corona del reino de Aragón, disputada entre don Fernando, hijo de la hermana del fallecido monarca don Martín, y don Luis, nieto del rey don Juan, quien sólo tuvo de hija a doña Violante. Sentencia que resolvió en favor del primer litigante, y que fue aprobada por el papa Benedicto. Además, se refiere a los adicionadores de Molina y otros autores que tratan de sentencias pronunciadas en el mismo sentido: tres por el Consejo de Castilla, otras tres por la Chancillería de Granada, y otra por la Audiencia de Zaragoza. También es cierto que en algún momento se consideró que las causas decididas en juicio por el Sumo Pontífice sentaban precedente.¹¹⁸⁹ Al respecto de todas estas sentencias, Fernández de Messa hace los dos siguientes comentarios:

Las decisiones de tribunales tan superiores merecen alto concepto, y no sólo deven mirar con respeto, sino que la profunda circunspección del derecho les da fuerza de executoria como si fuessen ley viva proferida por el oráculo del Príncipe.

.....
Y las opiniones [de los doctores] que merecen la aprobación de los tribunales para la pronunciación de las sentencias deven tenerse por las más seguras.¹¹⁹⁰

También era muy explícito el abogado Pascual Yáñez. Reconocía fuerza de ley a las sentencias dictadas por el Consejo Supremo de Aragón,

¹¹⁸⁸ *Jesús, María y Joseph, San Joaquín y San Felipe Neri. Alegación jurídica por D. Joaquín Villaraza...*, B.U.V., Varios 240, núm. 26, pág. 15, pár. 35.

¹¹⁸⁹ *Decretales de Gregorio IX* 2, 27, 19. Véase en A. García Gallo, *Manual de Historia...*, pág. 74, núm. 104.

¹¹⁹⁰ *Jesús, María y Joseph, San Joaquín y San Felipe Neri. Alegación jurídica por D. Joaquín Villaraza...*, B.U.V., Varios 240, núm. 26, pág. 17, pár. 40, y pág. 18, pár. 41.

“por pronunciarse por el Príncipe con conocimiento de causa”, de manera que “devía por el Senado de Valencia y demás Tribunales del Reyno juzgarse conforme a ellas”. Además, añadía que, según Bas, quien a su vez se apoyaba en un gran número de autores, “parece, que siendo uniformes las circunstancias de aquel pleito con el que ocurre, debe ser igual el pro *Jesús, María y Joseph, San Joaquín y San Felipe Neri. Alegación jurídica por D. Joaquín Villaraza...*, B.U.V., Varios 240, núm. 26, pág. 15, pár. 35.nunciamento”.¹¹⁹¹ Este abogado no hacía sino expresar una idea bastante extendida según la cual, y al igual que ocurría con las sentencias dictadas por el Papa, también se consideraba que las dictadas por el rey o el tribunal de la corte tenían valor normativo y sentaban precedente. Por este motivo, a las sentencias dictadas por la Audiencia de Valencia, sin embargo, ya no les otorgaba tanta importancia. Más bien les venía a dar un valor similar al de la doctrina:

Siendo, pues, grande la atención que merecen las sentencias de los señores oidores de la Real Audiencia de esta ciudad, como lo dixo Raudens... Y aunque se tiene presente no deverse juzgar por exemplares *l. 12. De officio Praesid. l. Nemo 13. C. de de sent. & Interloc. Omn. judic*, con todo, por proferirse con intervención de doctos ministros, premeditación y expresión de los fundamentos legales respectivos a lo determinado en ellas, parece vencen el entendimiento para juzgar en la forma ya sentenciado; el señor León... Y nadie podrá negar aprovechan mucho para determinar lo dudoso; Cortiad..., lo que se comprueba con los textos en la *l. Filius 14. In fin. Ff. Ad leg. Cornel. De fals...*; *l. Nam Imperator 38. Ff. De legib. Rovit...*¹¹⁹²

¹¹⁹¹ *Addición al memorial en drecho que se escribió por el rector, clero y beneficiados de la iglesia parroquial de San Bartholomé de esta ciudad, en el pleito que en grado de apelación siguieron con Donato Sánchez del Castellar, heredero del señor doctor don Donato Sánchez del Castellar, regente de la Real Audiencia de este Reyno: en que se fundó no aver caducado la substitución del beneficiado de Nuestra Señora del Sepulcro, y cumplimiento de las obras pías que ordenó, por la premoriencia de Mariana Ambrosia y Teresa Sánchez al heredero, y dever suceder dicho beneficiado en los bienes y herencia del señor regente, fallecido sin hijos u otros descendientes el heredero*, B.U.V., R-2/361, núm. 27 bis. 11, pár. 18. El abogado Vicente Ignacio de Tormos también reconoce fuerza de ley en el reino de Valencia a lo dispuesto por el Consejo de Aragón; véase *J. M. J. Informe breve y jurídico por Antonio, Carlos, Ángela y Teresa Genovés, hermanos, vecinos de esta ciudad, en el pleito con la administración que fundó D. Juan Bautista Artasa de Durango, canónigo de Segorbe. Sobre el recobro de la casa, alquería y tierras sitas junto al camino del Cabañal, frente y cerca la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, con los frutos desde que murió Pedro Genovés*, B.U.V., Varios 240, núm. 1, pág. 13, pár. 27.

Pocas manifestaciones más encontramos en los memoriales sobre el valor de las sentencias, y ninguna concediéndoles tanta importancia y a través de palabras tan inequívocas.

En otro orden de cosas, y según el abogado Cristóbal Tarazona, los autores consideraban que para que una sentencia fuera notoria o manifiestamente injusta o nula, se hacía indispensable que "de tal modo ha de aparecer la injusticia, que no pueda ocultarse ni ofuscarse por tergiversación alguna".¹¹⁹³ Para el doctor Farinachio, la notoriedad de la injusticia siempre tenía que resultar de los mismos autos, y no cabía cuando lo deducido en ellos se impugnaba por la parte con algún pretexto o motivo capaz de volverlo dudoso, pues entonces cesaba y se transformaba en duda positiva. El autor Salgado añadía, además, que

...basta qualquier probable ofuscación para quitarles esta notoriedad, pues la que sufre duda o contradicción y disputa de derecho no es verdaderamente notoria, ni evidente, indubitable, ni cierta, que es lo que necesariamente se necessita para caracterizar de manifiestamente injusta una sentencia.¹¹⁹⁴

Vemos que la mayor parte de las referencias a sentencias se articulaban a través de citas de autores que las trataban en sus obras, con lo que el abogado se limitaba a trasladar a su discurso lo que aquéllos habían dicho. No he considerado tales citas como de sentencias, ya que los abogados no las habían consultado directamente. Tampoco he contabilizado las muchas expresiones del tipo "como lo ha acreditado la Rota (o cualquier otro tribunal) en innumerables ocasiones." En el memorial visto en el párrafo antecedente el abogado aportaba en su defensa, y por medio de autores, decisiones de la "Rota Florentina, de la Bononiense, de la Romana, de la Curia Tolosana, Pedamontina, Senado de Venecia, París y de otros, de Aragón, del de

¹¹⁹² *Addición al memorial en drecho que se escribió por el rector, clero y beneficiados de...*, B.U.V., R-2/361, núm. 27 bis, pág. 10-11, pár 17.

¹¹⁹³ *Jesús, María y Joseph. Por el Excmo. Señor don Diego de Fenollet, Grande de España Honorario...*, B.U.V., *Manuscritos* 695, núm. 4, pár. 48.

¹¹⁹⁴ *Jesús, María y Joseph. Por el Excmo. Señor don Diego de Fenollet, Grande de España Honorario...*, B.U.V., *Manuscritos* 695, num. 4, pár. 50. Véase pár. 49 para la manifestación del doctor Farinachio.

Cataluña, del nuestro de Valencia y del antes Supremo Consejo de Aragón."¹¹⁹⁵

Lo que sí que parece claro es que al no motivarse las sentencias resultaba muy difícil interpretar su sentido, es decir, averiguar qué derecho o qué norma en concreto se había tenido en cuenta, y cómo se había aplicado al caso en cuestión. De ahí que no haya interés en recoger los fallos, puesto que el interés de las colecciones jurisprudenciales radica, precisamente, en la fundamentación jurídica de aquéllos. Por ello, las colecciones jurisprudenciales sólo eran concebibles en los territorios de la Corona de Aragón —y con anterioridad a los decretos de Nueva Planta—, en donde los jueces sí estaban obligados a fundar sus sentencias, al contrario que en Castilla, en donde se consideraba que el secreto de las deliberaciones jurídicas que concluían con la sentencia obligaba desde el momento de la votación, bajo pena de perder el puesto. Y así se venía observando, al menos desde 1489, para las chancillerías de Granada y Valladolid. Por contra, en la Corona de Aragón se consideraba que la fundamentación de las sentencias era un medio eficaz para la correcta administración de justicia, pues contribuía a ahorrar a las partes los costosos y, posiblemente innecesarios, trámites de las apelaciones. En el caso de la Audiencia de Valencia, las cortes generales de Monzón de 1564 establecieron la prescripción de recoger en el “libre de vots” sus votos motivados o “motius jurídichs”. Además, las partes tenían derecho a exigir una copia de los mismos. Lo que quedó derogado por el decreto de 29 de junio de 1707.¹¹⁹⁶

Por todo ello, la forma más útil de aportar decisiones judiciales en las alegaciones era a través de los comentarios que sobre ellas hacían los doctores, con lo que la jurisprudencia de los tribunales terminará adoptando las mismas formas e importancia que la doctrina de los autores. Por una parte,

¹¹⁹⁵ Jesús, María y Joseph. *Por el Excmo. Señor don Diego de Fenollet, Grande de España Honorario...*, B.U.V., *Manuscritos* 695, núm. 4, pár. 44.

¹¹⁹⁶ No obstante los decretos de Nueva Planta, parece que algunos tribunales continuaron motivando sus sentencias; de ahí la real carta de Carlos III de 23 de julio de 1778 en la que prohibía a la Audiencia de Mallorca continuar dando en sus sentencias los fundamentos de derecho y de hecho, por considerar una pérdida de tiempo y dinero el volver a empezar un nuevo pleito. En 1809 el ayuntamiento de esta ciudad solicitó a las Cortes de Cádiz el volver al antiguo uso judicial. Véase A. Pérez Martín y J. M. Scholz, *Legislación y Jurisprudencia en la España del Antiguo Régimen*, Valencia, 1978, págs. 297-301.

porque serán los autores los que, casi con exclusividad, las den a conocer, y, por otra, porque su alegabilidad dependerá de la racionalidad que en relación al pleito planteado le atribuyan los mismos autores.

En una alegación de 1799 José Beneyto aporta 10 sentencias. Dos de la Rota Romana, otra de la de Florencia, y las otras 7 de la antigua audiencia de Valencia, dos de las cuales confirmadas por el Consejo de Aragón. El contenido de tres de estas últimas era demostrar que, en tiempo de *Furs*, las palabras de los testamentos se debían entender como suenan, sin separarse de su expresión literal, y sin extensión ni interpretación alguna. Con estas sentencias se pretendía reforzar la doctrina de León, Crespí, Casanate y Menochio, al tiempo que dejar constancia de la aplicación del *fur* 51. El contenido de las cuatro restantes versaba sobre la ilegitimidad como vicio real y perpetuo que pasa a todos los descendientes, de forma que no pueden ser de mejor condición los descendientes del natural legitimado que lo es éste. De la misma manera, el abogado ya había apoyado esta idea en suficientes autores, reafirmando con las sentencias. Uno de estos autores era Larrea, quien citaba una decisión de Granada, y otro Fusario, que aportaba, sin concretar, decisiones de los "senados de Europa". Todas estas sentencias, según la misma alegación, tenían valor de ley de observancia general para el Reino, como preveía el privilegio segundo del rey Juan II y la doctrina de León, Matheu y Crespí. Las decisiones de los tribunales o rotas venían referidas a la necesidad de probar primero la filiación antes que la legitimidad, y a la forma en que los párrocos debían extender las partidas de bautismo y los desposorios.¹¹⁹⁷

En otra alegación, el abogado Juan Bautista Navarro Tormo aporta cinco decisiones de la Rota, a las que añade, pero ahora por medio de autores, otras decisiones de la chancillería de Granada, de la audiencia de Cataluña y de la de Valencia, tanto foral como castellana. Todo ello para demostrar que un tercero no podía ser oído cuando el pleito se hallaba sentenciado en vista y concluso y visto para revista.¹¹⁹⁸

¹¹⁹⁷ *Exposición del derecho que asiste a D. Joseph Salelles y Molina...*, B.U.V., Varios F/18, núm. 8, párrafos 24, 31-33.

¹¹⁹⁸ *Jesús, María y Joseph. Adición a la alegación del derecho que asiste a D. Vicente Luis de León y Pallarés. En la causa con doña Francisca Antonia Pallarés y Roca. Sobre la successión*

En datos prácticos, la jurisprudencia como fuente de Derecho vista directamente por el letrado se alega en 33 de las 55 alegaciones, sin que compartan estas alegaciones especiales puntos en común. Son 119 citas de 7.656, lo que supone tan sólo el 1'55 % del total de citas. Desde el 0'46 % en la alegación que menos se aporta, al 9'45 % en la que más. De aquéllas 119 citas 88 corresponden a decisiones de la Sagrada Rota Romana. De las restantes, 16 son de la audiencia de Valencia, 4 del Consejo de Aragón, 3 del de Castilla, otras 3 de la chancillería de Granada, 2 de la de la audiencia de Barcelona, una de la de Zaragoza, otra de la de Nápoles y otra de la Rota florentina.

Este bajo índice que supone la jurisprudencia encuentra su explicación lógica en su difícil consulta con respecto a los demás tipos de Derecho. Tal vez deberíamos aumentarlo ligeramente si también consideráramos en este cómputo las sentencias referidas por la doctrina. De cualquier forma y en última instancia, lo más probable es que la gran mayoría de las sentencias fueran aportadas a través de los comentarios que de ellas hacían los doctores, independientemente de que los letrados así lo hicieran constar o no.

Costumbre

El recurso a la costumbre es prácticamente inexistente. Tan sólo se presenta en el sentido visto cuando hablábamos de las sentencias judiciales: como precedente que, según el abogado, obliga a adoptar una resolución en la misma dirección. Y todo ello a pesar de que algunos autores, como Antonio Gómez, consideraban a la costumbre como fuente de aplicación directa. Para este autor, en concreto, se aplicaría en defecto de ley —real, canónica o romana—, fuero y *Partidas*.¹¹⁹⁹

en propiedad del vínculo y mayorazgo que erigió y fundó don Miguel Juliá, y agregación de doña Beatriz Ana Bernegal, su muger. Y artículo formado por dicho don Vicente Luis de León y Pallarés, de que no debe admitirse en esta instancia de revista a Antonio de Luz y Soriano, curador ad litem de D. Joseph Ignacio de Loyola Carroz, hijo primogénito de dicha doña Francisca Antonia Pallarés y Roca, B.U.V., Manuscritos 623, núm. 4, párs. 8 y 9 del "artículo visto y reservado para definitiva" y nota 20.

¹¹⁹⁹ A. Gómez, *Ad Leges Tauri*, Madrid, 1780, pág. 6.

Estilo y método del discurso

La parte del *Hecho* se limita propiamente a la narración de los acontecimientos que han originado la contienda y, en ocasiones, a la inclusión literal de algún fragmento de alguna disposición testamentaria. También es habitual empezar la alegación con una breve apología a la justicia, incluyendo la sentencia de algún clásico o la cita de algún autor sobre la forma de resolver las controversias, como la que sigue:

Tan frecuentes como antiguos son los pleitos en el mundo, por manera que aun lo cierto y claro corre expuesto a la controversia (1): lo que parece no ser ageno del assumpto. Y consistiendo el medio de excluirla, en exponer los fundamentos jurídicos que convenzan su insubsistencia, proporcionándoles con los hechos resultantes de los autos (2), lo que assí también explica la Glosa (3), se passa a proponerle.¹²⁰⁰

En otras ocasiones, simplemente hay una remisión a lo que consta en el ramo del pleito o en otras alegaciones anteriores, en la misma o en anterior instancia. Por todo ello es prácticamente nulo aquí el discurso jurídico del abogado. Me centraré, pues, en la parte del *Derecho*, en donde el abogado realmente deja constancia de su labor como jurista, de su modo de exponer, argumentar, defender y atacar posiciones. En esta empresa el letrado trabajará —formalmente— a través del planteamiento de sentencias o enunciados de hecho, que tratará de defender o refutar utilizando todos los medios y argumentos que tenga a su alcance, y que se cimentarán, fundamentalmente, en la interpretación de la voluntad del testador y en la letra del testamento. Paralelamente, apoyará todos estos postulados en razonamientos jurídicos: legales y, sobre todo, doctrinales.

Cada uno de estos enunciados de hecho se configurarán como diferentes partes del memorial, claramente individualizadas. Se pueden presentar tanto como proposiciones de defensa de sus propios derechos,

¹²⁰⁰ *Jesús, María, Joseph, San Bartholomé y Santo Tomás de Villanueva. Por el rector, clero y beneficiados de...*, B.U.V., R-2/361, núm. 27, párrafo 1. Las tres citas son las siguientes: 1) *Rosa consult. 1. in princip.* 2) *L. 52. §.2. in fine, ff. ad leg. Aquil.* Y 3) *Glos. Gotofred. lit. B. Id est in facto, & facti contingentia positum.*

como de ataque a los pretendidos por la parte contraria. En unas ocasiones sólo se dan de un tipo, y en otras de los dos. Para este último caso lo habitual es que el abogado presente y defienda primero aquéllas proposiciones en las que basará sus derechos, para posteriormente exponer y desvirtuar las presentadas por la otra parte. Veamos los tres supuestos a través de casos concretos:

A) En la alegación que presentan los religiosos del convento de Santo Domingo de Guzmán de la ciudad de San Felipe, para que se confirmara, con costas, la sentencia de vista, en la que se les absolvía de la demanda presentada por Manuel Sánchez, tres son los fundamentos por los que el convento intenta basar su derecho a la sucesión en los bienes de Vicenta Navarro. 1) Porque la disposición testamentaria de Vicenta Navarro es válida y subsistente sin embargo del auto acordado 3, lib. 5, tít. 10, en el que se declaraban nulas las mandas otorgadas en favor del confesor durante la enfermedad que ocasionaba la muerte. 2) Porque la testadora dispuso y ordenó con absoluta libertad el testamento y posteriores codicilos, sin concurrir en ellos ajenas sugerencias. 3) Porque el convento se hallaba capacitado por real privilegio para suceder a Vicenta Navarro al tiempo de su muerte, por tener competente y sobrado privilegio.¹²⁰¹

No obstante, el convento, al tratar de reivindicar derechos que considera pertenecerle, no hace sino argumentarlos y defenderlos de los ataques que previamente había inferido la parte contraria en escritos previos, y a los que expresamente se refiere en la misma alegación. Por lo que, realmente, este tipo de alegaciones y las del ejemplo siguiente, lejos de contraponerse, se complementan.

B) Como ejemplo del supuesto en que todas las proposiciones aportadas por el letrado se destinan a atacar los argumentos de la parte contraria, tenemos la alegación presentada por Josefa María Bru en 1749. En este escrito Josefa María Bru reivindica contra su tía, María Magdalena Bru, su

¹²⁰¹ *Jesús, María, Joseph. Alegación en hecho y derecho por el convento y religiosos del..., B.U.V., Varios 77, núm. 21.*

sucesión en la mitad de los bienes de las mejoras de tercio y quinto de la herencia de su padre, Joseph Bru. Para ello presenta las cinco *excepciones* alegadas por María Magdalena, para a continuación replicarlas con sus respectivas *satisfacciones*. Según las excepciones, las cláusulas testamentarias no contenían ningún gravamen expreso ni tácito que obligaran al hijo del causante —Esteban Bru— a la restitución de los bienes por fideicomiso en favor de sus hermanas, sino que podía disponer de ellos libremente, como así hizo en favor de su tía. Además, así se consideraba como más justo por la dedicación que le prestó María Magdalena a su hermano José e hijos cuando aquél enviudó. Y según las satisfacciones, tal voluntad de fideicomiso sí que existía, pues así se observaba, mediante conjeturas, de la interpretación y significado de las palabras utilizadas en el testamento.¹²⁰²

De nuevo, este segundo supuesto nunca lo encontramos en estado puro, ya que ninguna alegación se limita a contestar las proposiciones contrarias sin hacer una defensa de las propias. En este caso, y previamente a la primera *excepción*, el abogado ya había efectuado una defensa general de sus postulados, aunque esta defensa no se situara bajo ninguna proposición explícita. Además, las *satisfacciones* indudablemente se constituyen como medios de defensa propia.

C) El tercer supuesto, aquel en el que aparecen al mismo tiempo ambos tipos de proposiciones, es, sin duda, el que se da con mayor frecuencia. Ya ha quedado claro que en un sentido amplio y no formal todas las alegaciones se incluirían en este grupo. Como la alegación que en 1772 presentó Pascuala Anteume Salazar, en los autos que seguía contra Juan Bautista Llópiz Férriz, sobre la sucesión del vínculo que fundó Francisco Salazar.¹²⁰³ El abogado de Pascuala Anteume pretendía demostrar, primeramente y a través de dos *inspecciones*, que, en primer lugar, Francisco Salazar había fundado un mayorazgo regular, y que, en segundo lugar, a

¹²⁰² Jesús, María, Joseph y Santa Caterina de Sena. Alegación en Hecho y Derecho por Josepha María Bru, legítima muger de Juan Bautista Lop, contra María Magdalena Bru, doncella, sobre la sucesión en la mitad de los bienes de las mejoras de tercio y quinto de la herencia de don Joseph Bru, Secretario de Su Mag., B.U.V., R-2/361, núm. 30.

aquella le correspondía continuar en su posesión, en defecto de la parte contraria como perteneciente a inferior línea. Posteriormente procedía a dar *satisfacción* a los tres *argumentos* contrarios presentados por la otra parte, que pretendían demostrar la preferencia de Juan Bautista Llopiz Ferriz, y que se basaban en la irregularidad del vínculo fundado, en mayoría de edad natural de Juan Bautista, y en el deseo del fundador de que los poseedores del vínculo tomasen su nombre y armas.

También es muy representativa la alegación del letrado Pascual Mas de Pelayo, en donde, en la primera parte, aporta hasta nueve fundamentos para la defensa de los derechos sucesorios de su cliente sobre la totalidad de la herencia intestada de Vicente Prat.¹²⁰⁴ Pero también es cierto que los nueve fundamentos podrían reducirse a tres: a) que su defendido Martín Camps es más cercano en grado que el litigante contrario, Luis Prat, que reclama la mitad de los bienes, y que ni siquiera ha demostrado su parentesco con el intestado; b) que se ha superado para su parte, con creces, la prescripción en la posesión de los bienes que por concordia se le habían otorgado más de cuarenta años atrás; c) y, que en última instancia, no se ha demostrado que los bienes objeto de litigio no pertenecieran realmente a la esposa del causante, ascendiente tan sólo de Martín Camps. Es el segundo punto el que más fundamentos abarca, al describirse las distintas prescripciones acontecidas desde la muerte de Vicente Prat.

En la segunda parte de la alegación, Pascual Mas aporta hasta diez razones en las que se apoya la parte contraria, para presentar ante cada una de ellas su satisfacción. De nuevo, tanto las razones como sus satisfacciones podrían reducirse en pocas sentencias. Más aún cuando versan sobre los mismos temas tratados en los anteriores fundamentos.

La ya vista alegación de José Nebot y Sanz de 1748 es bastante singular en cuanto a su estructura. La podemos dividir en dos grandes apartados, dentro de cada uno de los cuales podemos encontrar a su vez otros dos. El primero contiene una primera parte dedicada a los hechos —más que nada transcripción de las disposiciones testamentarias que interesan—, y una

¹²⁰³ *Derecho que assiste a D.ª Pasquala Anteume y Salazar...*, B.U.V., Varios 54, núm. 6.

¹²⁰⁴ *In laudem et nonorem totius Ssma. Trinitatis...*, B.U.V., R-2/361, núm. 29.

segunda dedicada, conjuntamente, a la defensa jurídica de los derechos de su parte y al ataque de los pretendidos por la contraria. El segundo apartado, que es el más original, contiene, por un lado, las objeciones del adversario, transcritas en el texto en toda su extensión y literalmente, y por otro lado, las satisfacciones que Nebot y Sanz ofrece a cada punto de la alegación contraria con el que no está de acuerdo, y que se desarrollan a través de notas a pie de página, numerosas y dilatadas, e individualizadas mediante letras y manecillas. A través de estas notas el letrado mantiene una especie de diálogo con la otra parte, en el que destacan las continuas preguntas que vierte y cuya esperada y evidente respuesta no hacen sino ratificar sus postulados. Por otra parte, también es interesante esta alegación por que podemos conocer a ciencia cierta las posturas originales de cada una de las partes, aunque no conozcamos las citas jurídicas en que se apoya la contraria. Sin lugar a dudas, este discurso tan insólito muestra la seguridad con que el letrado Nebot y Sanz actuaba en esta causa.

Pero profundicemos algo más en la forma del discurso. Hemos quedado en que el punto de partida era un enunciado o supuesto de hecho. Por ejemplo "que todos los hijos sucedieron por partes iguales en los bienes y herencia de...", "que la cláusula en donde fueron dejadas las mejoras no contiene ningún gravamen", "que el legado del tercio y quinto en favor de... bajo la condición de... es inútil por deberse estimar como no escrita la condición...", "que el mayorazgo dispuesto por... es irregular y en la vacante por muerte de... debió preferirle...", etc. A continuación, el abogado procede a su defensa o ataque —según este supuesto haya sido aportado por él mismo o por la parte contraria—, a través de dos tipos de argumentaciones inseparables que, por cuestiones metodológicas, he preferido distinguir: una argumentación fáctica y otra jurídica. Desde esta difícil separación no debemos olvidar en ningún momento que, como decía Francisco Bermúdez de Pedraza (Granada, 1585-1655):

Todo el derecho consiste en hecho, y cualquier pequeña variedad de hecho varía también el derecho.¹²⁰⁵

Argumentación fáctica

En la argumentación fáctica, cualquier hecho que contribuya a sustentar el postulado defendido será aportado al discurso. Será un discurso basado, fundamentalmente, en la búsqueda de la pretendida voluntad del testador, que se convertirá, ciertamente, en la voluntad más favorable para la parte defendida, según la interpretación de cada letrado. Tanto la legislación castellana como la valenciana recogen este punto de partida, propio de toda alegación basada en herencias o sucesiones.

Para la castellana, la ley 5 del título 33 de la séptima partida:

Las palabras del fazedor del testamento deuen ser entendidas llanamente, assí como ellas suenan, e non se deue el Judgador partir del entendimiento dellas, fueras ende quando pareciera ciertamente que la voluntad del testador fuera otra que non como suenan las palabras que están escritas.

Para la valenciana, el *fur* 5 de la rúbrica *de testamentis*:

E gens perçò los dits fills, filles, parents o altres qualsevol persones no puxen contradir o annullar lo dit testament, codicil o altra darrera voluntat: ans les coses en aquélls contengudes sien extinguides e complides segons que en aquélls a la letra será contengut e ordenat.

Y la importancia del sentido de la voluntad del testador es especialmente destacable en las substituciones y los fideicomisos, ya que, como dice Diego del Castillo, en esta materia la voluntad del testador es ley.¹²⁰⁶ Desde muchos puntos de vista podemos observar esta idea en el

¹²⁰⁵ R. Gibert, *El arte para estudiar jurisprudencia de Bermúdez de Pedraza*, pág. VI.

¹²⁰⁶ Esta cita aparece en muchas alegaciones, como en *Jesús, María, Joseph, San Bartholomé y Santo Tomás de Villanueva. Por el rectpr, Clero y beneficiados...*, B.U.V., R-2/361, núm. 27, pár. 7. En la misma nota se cita *Código y Digesto*. Idéntica idea se recoge en la nota 41 de la misma alegación, aportando el *fur* 44, rúbrica *de testamentos*. Y en igual sentido "Que la voluntad de el testador debe ser atendida, es la cantinela común de los autores, por lo que dixo Ramón consil. 100. a n. 161. ad 163"; véase *Jesús, María, Joseph, y S. Francisco de Paula. Alegación del derecho...*, B.U.V., R-2/360, núm. 22, pág. 29, letra M a pie de página.

discurso de muchos abogados, como en las siguientes frases de Antonio Sánchez y Santiago:

Suelen a veces los esfuerzos mismos que se emplean para descubrir la voluntad del testador y legisladores conducir a un término muy distante de ella, si se quiere atender única y escrupulosamente a las palabras, que no siempre manifiestan con claridad el ánimo, o se presenta alguna opinión nueva que a modo de un repentino golpe de luz deslumbra y precisa a seguir rumbos muy diversos de los que aquellos deseaban y se propusieron.¹²⁰⁷

O en estas otras palabras más contundentes de José Nebot y Sanz :

E igualmente las disposiciones de los hombres y testamentos, que son ley particular, también se deben entender literalmente, según la ley de Partida, municipal y común.¹²⁰⁸

Igual de claro era Tomás Ferrandis de Messa cuando sentenciaba directamente que,

...antes que a la propiedad de las palabras se ha de estar a la voluntad del testador explicada, o por conjeturas, o por enunciativas, o de otra suerte.¹²⁰⁹

Y por lo mismo Vicente Alfonso, citando a Castillo y a Molina, decía que

la voluntad, aun conjeturada de los testadores, se debe observar categóricamente.¹²¹⁰

Continuaba este autor diciendo que las palabras de las disposiciones testamentarias debían entenderse en su propio y natural significado, y que no debíamos separarnos de éste sino en el caso de que con toda claridad constara que quiso otra cosa el testador, o cuando pareciera ciertamente que

¹²⁰⁷ Por Dña. Esperanza Maria Vilanova, vecina de..., B.U.V., Varios 298, núm. 8, pár. 1.

¹²⁰⁸ El subrayado es mío. Se trata de *Partidas*, 7, 33, 5; *fur* 51, rúbrica *De testament*, y *Dict. l.25. §.l.69. de Leg.3*. Véase *Jesús, María, Joseph, y S. Francisco de Paula. Alegación del derecho que assiste...*, B.U.V., R-2/360, núm. 22, pág. 7, pár. 12.

¹²⁰⁹ *Jesús, María Joseph y San Felipe Neri. Alegación por don...*, B.U.V., R-2/361, núm. 9, pág. 8. El subrayado es mío.

su voluntad era otra. Para todo lo cual se apoyaba de cinco leyes del *Digesto* y de la ya referida ley de *Partidas*.

Ampliando el ámbito material de aplicación de la voluntad del testador, el abogado Pascual Yáñez decía que

...en assumpto de cumplimiento y purificación de condiciones se debe atender más a la voluntad del testador y a lo que tuvo principalmente intento de hacer, que a la figura y corteza de las palabras con que hizo la disposición.¹²¹¹

O lo que es lo mismo, y en definitiva, que para apartarnos de la propiedad de las palabras del testamento o codicilo es menester que fuera cosa *claríssima*, y *manifiesta* que el testador quisiera *ciertamente* otra cosa. Así lo opinaba el jurisconsulto Marcelo y lo decía *Partidas*, según Nebot y Sanz.¹²¹² Ideas semejantes, que pretenden seguir la verdadera voluntad del testador, las encontraremos en prácticamente todas las alegaciones con temática semejante, si bien en cada una de ellas se incidirá más en la letra del testamento o en la supuesta voluntad del testador, según propias conveniencias.

Con todo este tipo de manifestaciones lo que se consigue de hecho es ampliar los horizontes del litigio. Es decir, si el problema principal era descubrir la voluntad del testador, a ello se añade ahora la averiguación de cuándo las palabras utilizadas por el testador reflejan o se apartan, inequívocamente, de su pretendida voluntad.

Hablar de la voluntad del testador es, por regla general, hablar de los motivos o intenciones que tenía para decir lo que dijo. Pero no siempre será así. Al abogado Cristóbal Tarazona no le interesaban, o al menos intentaba eludir, las posibles pretensiones del testador, pues decía que

Ni debemos inmorar en examinar el motivo y causa que pudo tener la testadora para poner pendiente de dicha condición: *y si hijos*

¹²¹⁰ Jesús, María, Joseph, San Joaquín y Santa Ana. Alegación en derecho por..., B.U.V., Varios 298, núm. 6. párrafo 10.

¹²¹¹ Jesús, María, Joseph, San Bartholomé y Santo Tomás de Villanueva. Por el rector, clero y beneficiados de..., B.U.V., R-2/361, núm. 27, pág. 26, pár. 43.

¹²¹² Jesús, María, Joseph, y S. Francisco de Paula. Alegación del derecho que assiste a..., B.U.V., R-2/360, núm. 22, pág. 8, pár. 14.

varones no habrá. Tal vez sea por el amor que tuvo a su nieto Bernardo, que le crió en su casa y el deseo de dejar de libre disposición los bienes a sus hijos varones, u otras causas que ignoramos. En las condiciones voluntarias, qual lo es la de morir D. Bernardo sin hijos varones es por demás apurar el motivo y fin porque lo quiso el testador, bastando el serlo para que se desvanezca la disposición si faltan.¹²¹³

En similares palabras se manifestaba Benito Delfí.

...en las últimas disposiciones no se debe buscar la razón de lo dispuesto por el testador... Y por esto no se puede decir absurdo lo dispuesto por el testador; pues no se deve entrar a discurrir qué es lo que debía disponer, si sólo se deve observar y atender lo que hizo y dispuso, y en esta forma excluyen el supuesto absurdo.¹²¹⁴

Para el supuesto de existir disposiciones de última voluntad, cada una de las partes considerará siempre que la voluntad del testador ha quedado lo suficientemente clara y manifiesta en su favor como para evitar el pleito, haciéndose innecesaria cualquier tipo de interpretación. Pero, para mayor redundancia y convencimiento del tribunal, añadirán su propia interpretación — siempre interesada— a las cláusulas que claramente les favorecen, y también a las que pudieran acogerse la parte contraria. En otro estadio más profundo de la interpretación se aportará como favorable cualquier indicio o suposición. Y es aquí donde entra en juego la importante cuestión de las conjeturas, omnipresentes en todas las alegaciones, de forma que son multitud las manifestaciones de los letrados que vienen a expresar lo que la siguiente:

El asunto de los fideicomisos es de tal manera fundado en la voluntad de los testadores, de qualquiera palabra, congetura o presunción pueda constar de la voluntad, es bastante para inducirle y por tal se juzgue. Porque las palabras son las que sirven para denotar la intención y no ésta para aquéllas. Bien que las congeturas deben ser urgentes, necesarias y regladas a las disposiciones de derecho y autoridades de escritores clásicos. Como también deducidas y dimanadas de las mismas palabras de la disposición.¹²¹⁵

¹²¹³ *Jesús, María y Joseph. Por el Excmo. Señor don diego de Fenollet, Grande de España Honorario...*, B.U.V., *Manuscritos* 695, núm. 4, pág. 22.

¹²¹⁴ *Jesús, María y Joseph, San antonio de Padua y Santa Rita de Casia. Alegación jurídica por...*, B.U.V., *Varios* 240, núm. 27, pág. 26, pág. 48.

¹²¹⁵ *Jesús, María, Joseph y Santa Caterina de Sena. Alegación en Hecho y Derecho por...*, B.U.V., *R-2/361*, núm. 30, párrafo 9. Los autores en que se basa para afirmar que las

Por lo que vemos, las conjeturas servían, incluso, para presuponer los fideicomisos. En este caso el abogado suponía el fideicomiso sobre los bienes del tercio de mejora y quinto remanente en base a algunas expresiones del testador, fundamentalmente “pues no duda sabrá usar de ellos y repartirles a su voluntad, acudiendo a la mayor necesidad de mis hijas y nietos”. Además, también se inducía del hecho de que el causante concediera a sus herederos facultad expresa para disponer de los bienes en la porción de legítima, no diciendo nada para los bienes de mejora, “siendo en éstos preciso y en aquella voluntario y superfluo”; es decir, que el diverso modo de hablar y explicarse el testador manifestaba diversa voluntad.¹²¹⁶

El recurso a la autoridad era uno de los más utilizados para legitimar las suficiencia de las conjeturas. En otros momentos se dirá que estas conjeturas debían ser concluyentes y no contradichas por otras. Como dice el letrado Vicente Ignacio de Tormos,

...basta una conjetura sola *dummodo sit urgens, & necessaria, ita tu animo judicantis contrarium persuaderis non possit.*¹²¹⁷

En definitiva, ya no sólo es el problema de las conjeturas, sino el de su suficiencia. Dependiendo del supuesto, el abogado defenderá, bien la suficiencia de una o unas conjetura —por leves que sean—, o bien la necesidad de una más “urgente” o la concurrencia de varias. El mismo Ignacio de Tormos decía en la misma alegación, que el afecto no era suficiente conjetura por sí sola como para inducir vocación de los hijos puestos en condición, sino que era preciso buscar razón más concluyente.

A la par que las conjeturas, y con el mismo propósito, el letrado acudiría o no —según le interesase— a la interpretación literal o gramatical de las palabras, de la que trataremos más adelante. Lo que sí está claro es que se ponen en régimen de igualdad dos principios difícilmente compaginables entre

conjeturas debían estar refrendadas por autores clásicos son Fusario, Menochio, Peregrín, Gratian y Castillo —cita 4—.

¹²¹⁶ Jesús, María, Joseph y Santa Caterina de Sena. *Alegación en Hecho y Derecho por...*, B.U.V., R-2/361, núm. 30, párrs. 2 y 10-23.

¹²¹⁷ J.M.J., *Informe breve y jurídico por...*, B.U.V., Varios 240, núm. 1, pág. 15, pár. 30.

sí, y con la seguridad jurídica. Por una parte el que deba estarse al literal significado de las palabras, y por otra el que deba dejarse la puerta abierta a que esta literalidad pueda o deba esquivarse, cuando con claridad o toda claridad constara ser otra la voluntad del testador. Como resultado ineludible, nos vamos a encontrar con una situación en la que los abogados podían llegar a poner en duda la totalidad de la letra del testamento en el sentido que más les interesara. Ya no se discutirá solamente la razón de la parte, sino además el sentido buscado de cada palabra o conjetura que sustente esa razón.

Además, el problema de las conjeturas no aparece sólo en la interpretación de la voluntad del testador, sino que lo podemos encontrar en cualquier otro asunto. Luciano Sulroca, alegando a Menochio y a Crespí, decía que para acreditar como falso y nulo cualquier documento no bastaba con leves conjeturas, sino que se requería que éstas fueran graves. De nuevo vemos peligrar el principio de la seguridad jurídica, por cuanto que ni en este caso ni en la mayoría de los demás los abogados precisan dónde reside la diferencia entre conjetura leve y grave. Lo más lógico es pensar que resida en el arbitrio del juez. Así lo opinaba el mismo abogado en la misma alegación, cuando decía que, por la imposibilidad manifestada por los autores de probar la filiación bastaban para su justificación conjeturas al arbitrio del juez.¹²¹⁸ En la alegación contraria, José Gisbert y Sánchiz manifiesta que “quando se recurre a prueba de presunciones deve justificarse cada una de ellas”, de forma que para demostrar, por ejemplo, la existencia de matrimonio, debía presentarse y probarse el contenido de los cuatro instrumentos de constitución dotal, desposorios, pago y restitución de dote. Evidentemente, si no se demostraba el matrimonio tampoco se podía demostrar la legitimidad del supuesto hijo.¹²¹⁹

De todo ello se concluye como evidente el hecho de que los abogados siempre eludirán aquellas cláusulas del testamento –o de cualquier disposición en general, que les pudieran ocasionar problemas–. De ahí que nos resulte imposible conocer su entero contenido y verdadero sentido. Formalmente, la sensación que en muchas ocasiones nos ocasiona esta ausencia, es la de que

¹²¹⁸ *Jesús, María y Joseph. Demostración del drecho que assiste a...*, B.U.V., Varios 240, núm. 12, pág. 6, pár. 6; y pág. 25, pár. 28.

¹²¹⁹ *Jesús, María, Joseph, y las benditas almas del purgatorio. Demonstración en hecho y derecho por...*, B.U.V., Varios 240, núm. 14, pág. 21, pár. 47.

la interpretación que realiza la parte cuya alegación estudiamos es la más conforme con la voluntad del testador. Nebot y Sanz, en el pleito en que defendía la postura de que el testador había fundado fideicomiso familiar y no mayorazgo, acusaba al abogado contrario de omitir en su alegación cierta condición que el causante impuso en una donación y no le favorecía. Mencionaba este abogado la cláusula por la que en caso de morir el donatario sin hijos los bienes retornarían al donador, omitiendo aquella otra en la que se ordenaba que de morir con hijos dispusiera de los bienes entre ellos. Al parecer, este abogado justificaba la omisión diciendo que era más apropiado atender *in jure* a la evidencia de la disposición entendida en su totalidad, sin necesidad de detenerse en cláusulas particulares ni palabras ambiguas.¹²²⁰

Resumiendo: todos los abogados están de acuerdo en que debe estarse a la intención del testador y, en su defecto, a la literalidad de sus disposiciones testamentarias. Pero, dependiendo del interés, para unos aquella voluntad se encontrará en lo que dice la letra del testamento, mientras que para otros se encontrará en lo que quiere decir. A toda esta regla por la que se considera la voluntad del testador como ley particular podemos establecer una sola excepción: cuando el heredero o legatario es una comunidad religiosa sin privilegio de amortización.

Argumentación jurídica

Al mismo tiempo que se desarrolla la argumentación fáctica, lo hace la jurídica, donde el abogado explica la institución o figura jurídica en cuestión, acudiendo a su regulación legal y doctrinal. Así como la argumentación fáctica giraba en torno a la interpretación de la voluntad del testador, raramente encontramos memoriales en donde se pretenda interpretar la voluntad del legislador. Antonio Albert de Esparça decía, con respecto a *Furs*, que “se han de entender a la letra y sin alguna alegación e interpretación”.¹²²¹ No obstante, esta afirmación no la acompañaba de ninguna cita doctrinal. Sin embargo, el abogado Antonio Sánchez y Santiago, al respecto de la ley *generaliter* 6, título

¹²²⁰ *Jesús, María, Joseph, y S. Francisco de Paula. Alegación del derecho que assiste a...*, B.U.V., R-2/360, núm. 22, págs. 25 y sigs., y letra C a pie de página.

¹²²¹ *Jesús, María y Joseph, Joaquín y Ana, y Santa Teresa de Jesús. Informe jurídico que presenta a los señores...*, B.U.V., Varios 240, núm. 2, pág. 20, pár. 51.

25 de la rúbrica *de institutionibus vel substitutionibus* del *Código*, afirmaba, que el sentido de la misma no era tan general como indicaban sus palabras, sino que se debía conformar a la voluntad del testador y a los principios del Derecho natural. Para lo que se apoyaba, además, en el *Digesto* y en Matienzo. En concreto, decía lo siguiente:

...no puede comprehenderse el verdadero sentido de las leyes quien únicamente atiende a sus palabras, sino el que examina con particular cuidado la mente del legislador y descubre la razón que le motivó a establecerlas. Ésta es la que le aparta del Derecho o costumbre hasta entonces recibidas, y le precisa a buscar nuevos caminos para el bien de los súbditos. Ésta la que domina las palabras, restringe a veces las generales a casos particulares y en otras extiende la ley a especies que no comprehenden las palabras.¹²²²

Y todo ello para terminar afirmando que ni en Valencia ni en el resto de España tuvo autoridad el Derecho romano. En parecido sentido se había manifestado la misma parte en la primera instancia por medio del abogado Francisco Ferrer, si bien resaltando que con una correcta interpretación de la voluntad del legislador se anulaba la aparente contradicción que en ocasiones parecía existir entre las normas.

...es común sentir i como axioma cierto entre los autores que en el Derecho no ai antinomia ni puede haver cosa superflua ni contraria a otra, de forma que la lei civil o canónica no consiste en las palabras, sino en la mente del legislador, en tanto grado que es permitido interpretar las palabras impropia i abusivamente.¹²²³

Tal vez los abogados consideraban la interpretación de la ley como tarea propia de los doctores, o tal vez —que es lo más probable—, sus conocimientos sobre la materia no les permitían indagar en este campo. Más aún cuando no concedían tanto valor a las leyes en sí, sino a los comentarios que de ellas hacían los autores.

Lo que hacía el abogado era incluir los hechos motivo de controversia en aquella norma que mejor le convenía para apoyar su planteamiento. De

¹²²² Por Dña. Esperanza María Vilanova, vecina de..., B.U.V., Varios 298, núm. 8, pár. 12.

¹²²³ Jesús, María y Josef. Memorial en Derecho del que assistía a doña Josefa Marimón..., B.U.V., Varios 298, núm. 7, pár. 23.

esta manera, se entiende fácilmente que sea la doctrina el Derecho más invocado, ya que es tan abundante y prolífica, son tantas y tan extensas las obras de los numerosísimos autores, que en ellas se pueden encontrar respuestas satisfactorias a todo problema planteado. Es como si existiera la seguridad de que en la doctrina se va a encontrar el sentido o la interpretación pretendida para toda norma y para todo hecho, cualquiera que éstos sean. Evidentemente, las distintas opiniones de los autores, puestas en plano de igualdad, se pueden llegar a contradecir, a pesar de que en su contexto todas ellas pueden ser igualmente válidas.

El abogado José Ignacio Alfonso intenta demostrar la nulidad de la condición impuesta por el testador, por la que se obligaba a su parte a casarse bajo consentimiento de su hermana para tener derecho al tercio de mejora y al remanente del quinto de libre disposición. Para convencer de que la condición limitativa de la libertad para contraer matrimonio se debía tener por no puesta, invoca en primer lugar el *Digesto* —ley 72, párrafo 4 de *conditionibus & demonstrationibus*—. A continuación invoca el Derecho canónico y una disposición del Concilio de Trento; y, por último, el Derecho real. Y todas estas citas acompañadas de las correspondientes citas de autores. El orden en la alegación de los distintos derechos es demostrativo de la preferencia que se otorgaba a cada uno de ellos, lo que además se corrobora con expresiones tales como que

...[la condición] se debe concebir por no escrita y estimarse por pura su institución no sólo por la disposición del Derecho común de los romanos, si que también por las leyes canónicas y reales.¹²²⁴

Y todo ello no obstante haber reconocido previamente el mismo abogado, y ante los ataques de la parte contraria, que el Derecho común se aplicaba en defecto de las leyes reales. Además, el abogado demuestra tener o bien un escaso conocimiento del Derecho real, o bien un cierto desinterés por el mismo, en cuanto que para este asunto no hace más que invocar este Derecho en general y alegar tan sólo una ley concreta de *Partidas* (6.4.3). Vagamente y sin mencionarla, alega también la siguiente ley de *Partidas*, por la

que se tienen por no puestas las condiciones imposibles, lo que ciertamente no viene al caso.

No obstante, el orden de aportación de los distintos tipos de Derecho también puede obedecer al simple pragmatismo del letrado. En este caso, como en muchos otros, el Derecho real no disponía de disposición concreta tan clara y rotunda como la del *Digesto*. Esta extendida opinión hacía que los letrados acudieran directamente y en primer lugar a la doctrina y a las leyes romanas. De cualquier manera, cuando coinciden varios derechos lo normal es que se aleguen por este orden: Derecho romano, doctrina y, finalmente, Derecho real.

A lo largo de toda la argumentación o discurso, el abogado se sirve de una serie de técnicas y recursos estilísticos que ya venían siendo utilizados, desde siglos atrás, por todo tipo de juristas en general. Las distintas corrientes doctrinales que con el tiempo se sucedieron influyeron decisivamente en la forma de argumentar de los abogados del XVIII, de manera que claramente podemos observar cómo éstos estaban empapados de sus mismas pericias y procedimientos discursivos. Salvando las muchas distancias, podemos afirmar que las huellas del método de los glosadores, y sobre todo del *mos italicus*, son más que evidentes.

Nos encontramos ante un discurso en absoluto original, que ya era utilizado desde siglos anteriores, y que en nada cambió a lo largo de todo el XVIII; resultado de un estilo argumentativo y dialéctico basado en un razonamiento lógico y enteramente inductivo a través del cual, y partiendo del máximo posible de supuestos fácticos y jurídicos, se formulan los enunciados que se pretende defender —y que son los enunciados que encabezaran las distintas partes del *Derecho*—. Con todo ello se obtiene un discurso casuístico, de resultados concretos y poco o nada sistemático, en claro paralelismo —según Tomás y Valiente o Theodor Viehweg— con la jurisprudencia propia del *mos italicus*.¹²²⁵

¹²²⁴ Jesús, María y Joseph, S. Joaquín y Santa Ana. *Alegación en derecho por...*, B.U.V., Varios 54, núm. 8, párrafos 4 a 11, especialmente este último. El subrayado es mío.

¹²²⁵ F. Tomás y Valiente, *El Derecho penal...*, pág. 117; y T. Viehweg, *Tópica y Jurisprudencia*, Madrid, 1986, pág. 98.

Pero la falta de originalidad ya no residía solamente en la forma del discurso en general, sino además en el discurso de cada abogado en particular, por cuanto que no se observa diferencia alguna entre el discurso de los distintos abogados. Más que una creación propia semeja una copia y recopilación de enunciados ajenos adaptados al supuesto concreto. No se observan diferentes tipos de discursos. Todas las alegaciones están redactadas sobre el mismo esquema.

Si bien el carácter argumentativo del discurso es apreciable con la simple lectura de toda alegación, el dialéctico normalmente se nos muestra recubierto por aquél, del que se presenta como accesorio, a la vez que inseparable. Esta forma dialéctica supone el previo conocimiento por parte del letrado de la alegación de la parte contraria, o al menos la sospecha e intuición de cuáles van a ser los argumentos en que basará su defensa. Es más, esta dialéctica no sólo se manifiesta desde la argumentación de una alegación frente a la otra, sino también, y por ejemplo, con respecto a las dos posibles direcciones doctrinales que pueden existir sobre un mismo punto y que, como hemos visto, las puede aportar un mismo letrado con la intención de defender la suya a través del ataque de la otra. En otras ocasiones el abogado se sirve de un método dialéctico puro en el sentido literal de la palabra. Es el caso de la alegación de Nebot y Sanz de 1748, en la que continuamente se vale de preguntas formales dirigidas a la otra parte e incluso a sí mismo, respondiéndose o dejando en el aire la respuesta, por considerarla suficientemente esclarecedora.

En toda esta empresa los abogados se valían de las siguientes técnicas:

A) Técnica analítica. A través de esta técnica se busca el significado y el alcance de los términos y expresiones que aparecen en las disposiciones de última voluntad, especialmente de aquellos vocablos que pudieran ser más controvertidos, con el fin de relacionarlos e incluirlos dentro, tanto de los conceptos o figuras jurídicas aportadas, como de las normas que los regulan. En cierta manera, se trata de generalizar situaciones específicas y reconducirlas a ideas básicas o comunes. Ya he dicho que el análisis de las mismas normas era, sin embargo, más propio de los autores —de ahí la

abundancia de citas doctrinales—, de forma que los abogados sólo lo hacían ocasionalmente.

B) Los abogados complementaban este análisis conceptual con otro exegético sobre los mismos términos, en el sentido de búsqueda gramatical y semántica de las palabras. En esta interpretación se recurre tanto a fuentes internas —derivadas de la misma alegación—, como externas —principios generales del derecho, citas de clásicos, diccionarios, etc—.

En este sentido, son ideas comunes la de que "las palabras, oraciones o cláusulas indefinidas ni contienen universalidades, ni a ellas equivalen en fuerza de su propia natural significación, si sólo por conjetura y benigna interpretación", o la más importante y repetida de que "las palabras no sólo anteriores sino también posteriores, siendo claras, determinan las siguientes, precedentes o intermedias dudosas y ambiguas",¹²²⁶ esto es, "que una parte del testamento declara la otra".¹²²⁷ Pero en busca de la interpretación más favorable de las cláusulas testamentarias, los abogados llegan a expresar ideas tan vagas y confusas como las siguientes —con respecto al alcance de la "voluntad expresa"—:

Para demostrar la notoria injusticia del laudo ... se hace preciso manifestar que es notorio el que don Antonio Síscar no quiso ... Esta notoriedad se prueba por el expreso de la disposición de don Antonio. Dícese expreso no sólo lo literal, sino también lo que se infiere con legítima consecuencia de lo que se lee, o lo que se encierra en la naturaleza de las palabras.

.....
y que en caso de obscuridad tiene lugar la interpretación declarativa en quanto la exposición sea congrua y conveniente a las mismas palabras, entendiéndolas en el común uso de hablar y del que las profiere, se va aora a demostrar que por las palabras de la cláusula y según la naturaleza de la disposición testamentaria, es igualmente expresa...¹²²⁸

¹²²⁶ J.M.J., *Alegación en hecho y drecho por don Juan Fermín Sanz...*, B.U.V., Varios 298, núm. 10, párrafos 56 y 11, respectivamente. Sobre esta segunda frase véase también la alegación *Jesús, María y Joseph. Por el Excmo. Señor don Diego de Fenollet, Grande de España Honorario...*, B.U.V., R-2/360, núm. 6, pár. 18, cuando dice que "la mente del que dispone se regula por las cláusulas antecedentes y subsecuentes".

¹²²⁷ *Jesús, María y Joseph, San Antonio de Padua y Santa Rita de Casia. Alegación jurídica por...*, B.U.V., Varios 240, núm. 27, pág. 16, pár. 25.

¹²²⁸ *Jesús, María y Joseph, y San Antonio de Padua. Demostración del drecho que assiste a D. Andrés Síscar, en la causa que sigue en la Real Audiencia con Don Pedro Síscar, como marido y conjunta persona de Doña Rosa Síscar. Sobre que se repongan los autos de possessión*

Mientras que la técnica exegética es más propia de la argumentación fáctica, la analítica lo es de la jurídica. Infinitos son los ejemplos que podríamos aportar sobre la utilización de estas dos técnicas, que, eso sí, las encontraremos siempre inseparables.

Así por ejemplo, uno de los vocablos que más se discutirá es el de *hijos*; si viene referido tan sólo a los varones, o si incluye también a las hembras. Los abogados José Beneyto y Benito Delfí convienen en que bajo la expresión *filiorum* se comprenden tanto varones como hembras, especialmente en materia de mayorazgos, en donde se busca la perpetuidad del vínculo, y más cuando a esta expresión se le une la de *descendientes*. Pero no así cuando el vocablo es el de *hijo* o *nieto* en singular, que excluye terminantemente a las hembras.¹²²⁹ También, y sobre todo, se discute si el vocablo *hijos* es utilizado o no de forma genérica, esto es, comprendiendo sólo a los verdaderos hijos, o también a los nietos y demás descendientes. El abogado José Musoles reconocía ser esta "questión tan vaga y difusa, que sola una decisión no lo termina, si que atendidas las circunstancias, o bien se afirma el llamamiento, o del todo se les niega ... y que todo esto pende de la voluntad del testador, discurriendo siempre por conjeturas". En este sentido aportaba hasta seis conjeturas, tomando como base el que, si bien en los fideicomisos hechos por transversales o extraños esta cuestión era realmente dudosa, cuando la disposición era de ascendientes en favor de descendientes se resolvía generalmente en favor de la inclusión de los nietos. Sin embargo, el mismo abogado se había manifestado en contra de este tipo de razonamiento, cuando en la página anterior había dicho, que "para tener lugar los efectos de aquella substitución recíproca se necessita de formal expresión, no bastando las conjeturas".¹²³⁰ Juan Bautista Navarro Tormo generalizaba diciendo, que

hechos por el gobernador de Oliva en ejecución de un laudo arbitral, B.U.V., R-2/361, núm. 10, pág. 7 y 11.

¹²²⁹ Derecho que assiste a D.^a Pasquala Anteume y Salazar..., B.U.V., Varios 54, núm. 6, párs. 4 y sigs.; y alegación Jesús, María y Joseph, San Antonio de Padua y Santa Rita de Casia. Alegación jurídica por..., B.U.V., Varios 240, núm. 27, párs. 42 y 43, respectivamente para cada letrado.

¹²³⁰ J. M. J. Manifiesto legal, que proponen a los señores de la Real Sala el Dr. Juan Antonio Rumbau, Isabel María, Josepha María, y María Antonia Rumbau, hijos, y herederos de Thomás Rumbau su padre. En razón del drecho que les favorece en la causa que siguen con Mosén Joseph, y el Dr. Francisco Rumbau sus tíos. Sobre La successión de los bienes que quedaron

cuando se trataba de fundación de mayorazgos o fideicomisos la palabra "hijos" o "hijas" siempre comprendía a los nietos, nietas y demás descendientes.¹²³¹

De igual forma, fue cuestión muy debatida si por el absoluto e indefinido llamamiento de *varones* se entendían solamente los agnados, o también los cognados. El mismo Navarro Tormo, después de aportar autores defensores de ambas posturas, termina diciendo —como siempre se hacía—, que la resolución dependía de las presunciones y circunstancias que concurrían en cada uno de los casos, sin poderse dar determinada ni universal regla. En este caso se decantaba por la agnación, al ser el fundador varón y llamar a todos los varones con exclusión de hembra, entendiendo que la palabra "varones" en el más excelente y legal significado debía tomarse no por el sexo, sino por la línea masculina. Según él, hubiera sido de cognación si se hubiera fundado por hembra o el primer llamado hubiera sido de línea femenina.¹²³²

Tomás Ferrandis de Messa se extiende en explicar la diferencia entre *urbs* y *ciudad*, ya que el hermano de su defendida, Rosa Císcar, le había dejado a ésta todos los bienes sitos en la ciudad de Denia, con lo que bajo el significado de ciudad interesaba comprender no sólo los bienes que estuvieran dentro de sus muros, sino en todo su término. Además de alegar que esta interpretación era la más conforme con la voluntad del testador, aportaba en su razón varios textos de Derecho romano, según los cuales *urbs* era un concepto que se definía con el arado, mientras que *ciudad* comprendía el cuerpo civil de los ciudadanos que vivían bajo un gobierno y leyes, así como el territorio al que llegaba la potestad del magistrado urbano. Es interesante observar la contradicción en que incurría aquí este abogado. Además del anterior razonamiento, alegaba otros muchos para convencer de que bajo la expresión de *ciudad* se comprendía todo su término, no habiéndose equivocado el testador en la utilización de este término. No obstante, anteriormente se había

por la fin, y muerte del Dr. D. Salvador Rumbau, Dean que fue de la Iglesia Cathedral de la Ciudad de Segorbe, propios de Marcelo Rumbau su padre, B.U.V., R-2/361, núm. 26., pág. 10, pár. 28, y pág. 9, pár. 24, respectivamente. El subrayado es propio del texto.

¹²³¹ Jesús, María, Joseph. Por don Vicente Luis León y Pallarés..., B.U.V., Manuscritos 623, núm. 5, párs. 83 y sigs.

manifestado en el sentido de que se debía observar sólo la verdadera voluntad del testador, "porque tratamos del significado de una expresión dicha, no por un hombre que vivió en tiempo de los romanos o godos, ni que fue perito de sus costumbres y estilos, sino de un sugeto que murió el otro día en este Reyno, no inteligente en letras, y que devió hablar en aquel sentido natural que regularmente hablan todos los de este país". Es decir, que si el testador desconocía el verdadero y originario significado técnico de la palabra *ciudad*, el abogado tan sólo podía defender su postura basándose en la voluntad del testador, debiendo obviar en este caso tan extensa alusión a los textos romanos. Parece que en este caso el letrado intentaba demostrar el dominio no sólo del Derecho romano, sino además de sus conceptos. Debido a la inconsistencia de toda argumentación lingüística, Ferrandis de Messa recurre a la hipotética —e igualmente inconsistente— intención del testador, al hacerse la siguiente pregunta:

...qué cosa más favorable y correspondiente a las reglas de derecho, que se dé aquella interpretación por la qual dos herederos se entiendan instituidos con más igualdad?.¹²³³

Antonio Jáudenes y Amad, letrado de la parte contraria, no necesitaba enzarzarse en esta discusión terminológica. Si bien acepta la distinta concepción que los romanos establecían entre *civitas* y *urbs*, también decía que en estos reinos la voz *ciudad* englobaba ambas realidades; es decir, lo comprendido en el recinto de las murallas y, como mucho y en un sentido amplio, los arrabales. Lo que sí hace este abogado es apoyar su postura a través de la explicación detenida de casos parecidos, tratados por los jurisconsultos Paulo y Scévola, acontecidos en las ciudades de Roma y Cádiz, respectivamente.¹²³⁴

¹²³² Jesús, María y Joseph. Por don Vicente Luis León y Pallarés..., B.U.V., Manuscritos 623, núm. 5, párs. 32 y sigs.

¹²³³ Jesús, María, Joseph y San Felipe Neri. Alegación por don Pedro Císcar..., B.U.V., R-2/361, núm. 9, pág. 9, pár. 10 y pág. 13, pár. 18, respectivamente para los dos entrecomillados.

¹²³⁴ Jesús, María y Joseph, y San Antonio de Padua. Demostración del drecho..., B.U.V., R-2/361, núm. 10, págs. 8 y sigs., y 23.

Muchas más serían las palabras que se convertían en el centro de las disputas: *desde y hasta*,¹²³⁵ *dicho y en tal caso*,¹²³⁶ *entre y et*¹²³⁷...

En otras ocasiones se discute el alcance de toda una expresión. Es el caso de *aviendo entrado a poseer los sobredichos bienes*; si conllevaba o no la condición de haber poseído.¹²³⁸ En este cometido el letrado busca a menudo la pretendida acepción latina del vocablo castellano o valenciano utilizado. En este caso equipara esta expresión a la latina *si heredes fuerint*, vel *si hereditatem adierint*, concluyendo que el testador tan sólo expresó lo que creyó que acontecería, sin exigir ninguna posesión.

También será muy discutido el carácter, bien copulativo, bien disyuntivo o alternativo —según conveniencias—, de aquellas condiciones que aparecen juntas, y cuyo cumplimiento exige el causante para que tenga lugar lo dispuesto. Así, los albaceas testamentarios consideran que cuando entre las diferentes condiciones disyuntivas bajo las cuales se hacen en los testamentos algunas substituciones, una de ellas es morir sin hijos, en tal caso las disyuntivas se convierten *a jure* en copulativas, y es preciso que se cumplan todas las condiciones de la disposición para que tenga lugar la substitución, lo que basan en la ley *generaliter* 6, título 25 de *insist. & substit.* del Código. El abogado de la parte contraria opinaba que aun los tribunales diferían en casos semejantes, por lo que se debía estar al supuesto particular y a la mente del testador, que en este caso, evidentemente, favorecían la interpretación de que, cuando entre las condiciones alternativas se hallaba la de *sine filiis*, verificándose ésta, no se convertían en copulativas. Para lo que aportaba las opiniones —entre otros—, de Mainardo, Brunneman o Fontanella que, además, rebatían e interpretaban dicha ley en su favor. Además, el mismo abogado aducía, que en el caso de que el destinatario fuera la iglesia o

¹²³⁵ Jesús, María, Joseph y San Felipe Neri. *Alegación por don Pedro Císcar...*, B.U.V., R-2/361, núm. 9, párs. 26 y sigs.

¹²³⁶ Jesús, María Joseph. *Por el deán y cabildo de la santa iglesia de la ciudad de Orihuela. Con Ángela Quadra, donzella, y doctor Ignacio Adam, assí en nombre de padre y legítimo administrador de Joseph y Isabel Adam y doña Agustina Quadra. Sobre los bienes recayentes en la herencia de Mónica Colom, muger que fue del doctor Diego Quadra, y si todos vienen en la memorial perpetua que mandó en su último testamento, por la celebración de dos doblas en dicha santa iglesia*, B.U.V., R-2/361, núm. 34, párs. 36 y 43, respectivamente.

¹²³⁷ Jesús, María, Joseph y Santa Ana, San Joaquín y San Antonio de Padua. *Por el Dr. Joseph Vicente Nogués...*, B.U.V., Varios 77, núm. 17, párs. 45 y 87.

cualquier otra obra pía en beneficio del alma del testador, las condiciones disyuntivas no se convertían en copulativas, lo que no estaba previsto en la ley *generaliter*.¹²³⁹ En definitiva, que siendo el ánimo del testador establecer condiciones disyuntivas, los términos dudosos del testamento se deben a la falta de inteligencia de aquél o a la impericia del escribano.¹²⁴⁰

Pero de todas las alegaciones hay una que especialmente llama la atención. Se trata de la pretensión del abogado José Nebot y Sanz de interpretar los términos "como él quiera y le parezca", no como una concesión de libre y absoluta voluntad, sino regulada y equiparable a la no menos insegura condición del "arbitrio de buen varón".¹²⁴¹ Gaspar José instituyó heredero a su hijo Gaspar Miguel José, con pacto, vínculo y condición de que dejando hijos tendría que dejarles esa herencia a su libre voluntad, como si fueran suyos y en los términos dichos. Tuvo este último cinco hijos, entre los cuales repartió el patrimonio de la herencia valorado en 15970 libras, de las cuales a Rosendo Sánchiz sólo dejó 40 de alimentos. La completa alegación se fundamenta, además de en las comparaciones arriba vistas, en interesadas interpretaciones, así de la voluntad del primer testador, como del significado de aquéllos vocablos. Se rechaza tajantemente la equiparación de aquellos términos con los de libre albedrío y elección voluntaria, y entiende que aquél que en nombre de otro dispone siempre debe hacerlo a arbitrio de buen varón, aunque se le diera libre facultad para ello. Además, opina que la palabra "entre", utilizada en este caso, tiene un carácter distributivo que emana de la verdadera voluntad del primer testador, y de ninguna manera se entrevé en la distribución hecha por su hijo, y que si realmente aquél hubiera querido concederle semejante libertad, lo hubiera hecho utilizando los términos que en los testamentos otorgados en tiempos de *Furs* siempre se usaban, como eran "dando a uno más, a otro menos y a otro nada". Por lo que lo más equitativo y

¹²³⁸ *Jesús, María, Joseph, San Bartholomé y Santo Tomás de Villanueva. Por el rector, clero y beneficiados...*, B.U.V., R-2/361, núm. 27, pág. 19, pár. 26.

¹²³⁹ *Jesús, María y Josef. Memorial en Derecho del que assistía a doña Josefa Marimón...*, B.U.V., Varios 298, núm. 7, pár. 1 y sigs.

¹²⁴⁰ *Por Dña. Esperanza María Vilanova, vecina de...*, B.U.V., Varios 298, núm. 8, pár. 7.

¹²⁴¹ *Jesús, María y Josep, y San Francisco de Paula. Apuntamiento legal del derecho que assiste a Rosendo Sanchis, ciudadano, en la causa que éste sigue en grado de apelación en esta Real Audiencia, contra María Inés Franch, como tutora y curadora de Domingo Thadeo Sánchiz*, B.U.V., R-2/361, núm. 33.

conforme a la voluntad del abuelo sería la partición en iguales porciones. Finalmente, Nebot y Sanz aporta una muy libre interpretación de las —según él—, fraudulentas intenciones del segundo testador que explicarían esta desproporcionada distribución. Se trataba de que, no pudiendo disponer en favor de su consorte lo hizo en favor del hijo menor, y para el caso de fallecer éste sin legítimos descendientes pasaran los bienes al menor de los restantes, para que mientras tanto pudiera aquélla disfrutarlos.

Hay ocasiones en que simplemente se busca la definición de un vocablo. Incluso se acude a la ayuda del diccionario de la Real Academia y a la traducción de palabras del valenciano al castellano, o de cualquiera de estos dos idiomas al latín.¹²⁴²

C) Tanto en la inclusión de cada uno de los enunciados o sentencias que aporta el letrado dentro de la normas jurídicas alegadas, como en la interpretación de las palabras del testador, los argumentos de la *communis opinio doctorum* y, sobretodo, de la autoridad eran imprescindibles.

De la práctica seguida por los abogados se observa que, cuanto más estuviera generalizada entre los autores una opinión, mayor probabilidad tendría de ser cierta, enlazándose así con el criterio de la probabilidad. Cuanto más estuviera generalizado el recurso a un doctor, mayor razón para seguir recurriendo a él. Con lo que el interés por acumular citas, más que de leyes de autores, llega a ser un abuso, a convertirse casi en una obsesión. Todo esto configurará un derecho de juristas en el que cualquier argumento, por obvio que fuera, necesitaba ser apoyado por el mayor número posible de citas, buscando así un mayor convencimiento del juzgador.¹²⁴³ Además, el recurso a la autoridad también servía para solucionar las contradicciones que pudieran existir entre las distintas fuentes jurídicas, que se dirimían en favor de la

¹²⁴² En el párrafo 15 de la alegación *Jesús, María y Josef. Alegación en derecho por don Salvador Pascual y Bas...*, B.U.V., *Varios F/18*, núm. 5, el abogado se remite al *Diccionario Castellano de la Real Academia Española* y a "otros muchos", para explicar el significado de las palabras —utilizadas por el fundador del vínculo—, *todo*, que interpreta como "entera y absolutamente o con todas las circunstancias" y *disponer*, que le da el significado de "despotismo y libertad". Véase en la alegación *Jesús, María y Joseph, Joaquín y Ana, y Santa Teresa de Jesús. Informe jurídico que presenta...*, B.U.V., *Varios 240*, núm. 2, párs. 37 y sigs. la conjunción disyuntiva *ne*, en valenciano, *ni*, en castellano, y *nec* en latín.

¹²⁴³ J. Barrientos Grandón, "*Mos italicus* y praxis...", pág. 380-381.

opinión del autor con más prestigio,¹²⁴⁴ así como para dar autoridad a las conjeturas. Solórzano Pereyra manifestaba lo siguiente:

Y esto será más cierto si siguiéremos la doctrina de los que enseñan, que estamos obligados a seguir quando juzgamos o aconsejamos las opiniones comunes y más probadas o probables, y que pecan los que hacen lo contrario, como ponderando para ello algunos textos y doctrinas de Santo Tomás y de muchos teólogos y juristas, lo dicen Navarro, Covarrubias y otros infinitos que refieren Cateliano Cota, Zevallos y Torreblanca. Aunque Mastrillo viene a resolver que podría tener excusa el juez que juzgase contra alguna opinión común cuando hallase ley o razón contraria que manifestamente la convenciese. Y Juan Sánchez, después de haber disputado bien este punto de las opiniones comunes y probables, también concluye que estará seguro en conciencia el que reduce y sigue en práctica opiniones escolásticas y teóricas, si siente con juicio cierto y especulativo que son probables, pero no si este juicio no fuese cierto y firme, porque en esa duda más se debe arrimar a la común opinión.¹²⁴⁵

A lo que en otro apartado de la misma obra añadía:

...el que sigue [refiriéndose al juez] una opinión probable de uno u otro autor, queda seguro en conciencia, según dicen todos.¹²⁴⁶

Berní y Catalá, muy escéptico en este sentido, reflejó claramente en su obra *El abogado penitente y el pleyto más importante* cómo los abogados utilizaban el criterio de la probabilidad. En contestación al confesor en un figurado diálogo, el letrado manifestaba lo siguiente:

Mi facultad es de abogado, procuro las defensas, siguiendo lo *más probable*, y a veces lo *menos probable*, según viene, y al tenor de lo que enseñan los autores.¹²⁴⁷

Párrafos más adelante de la misma obra, Berní exponía la distinción que establecían los letrados entre opinión *probable* y opinión *más probable*. Según éstos, la probable era la defendida por algún autor, y la más probable la que defendían más autores. Pero Berní replicaba con otra distinción diferente:

¹²⁴⁴ P. Nolasco de Llano, *Compendio de los comentarios...*, pág. 10.

¹²⁴⁵ J. de Solórzano Pereyra, *Política*, T. II, 5, 8, 29, fol. 323.

¹²⁴⁶ J. de Solórzano Pereyra, *Política*, T. II, 4, 1, 35, fol 7.

¹²⁴⁷ J. Berní y Catalá, *El abogado penitente...*, pág. 5.

La probable es la que un autor sigue con fundamentos ajustados a razón; y la más probable es la que tiene fundamentos más ajustados. Y esta razón ha de ser al tenor de la mente del propio legislador, no del extraño. Y así, el número de los autores no es del caso, pues la multitud de autores por sí sólo prueba que unos siguen a otros, y así se ha de atender a los fundamentos, no al número de autores.¹²⁴⁸

A pesar de todo, Berní no deja de aceptar la validez del criterio de la probabilidad —o al menos lo consentía—, cuando distinguía su distinta influencia entre moralistas y jueces. Para aquéllos se podía defender "por opinión probable", para éstos se debía sentenciar "por la más probable". Siempre, claro, de no haber "punto fijo", pues en ese caso cesaban las opiniones y todos estaban obligados a seguir lo cierto.¹²⁴⁹ De forma parecida se expresaba Antonio Gómez, para el que se debía seguir la opinión común salvo cuando ésta era evidentemente falsa, pues entonces debía atenderse al criterio individual, aunque fuera propio de un solo autor. Justo lo contrario de lo que decía Castillo, quien desconfiaba de la opinión sustentada por un sólo jurista, por muy prestigioso que éste fuera.¹²⁵⁰ Ciertamente, ésta era la opinión que predominaba entre letrados y juristas en general, lo que conllevaba, sin duda, la anulación del propio criterio de la probabilidad.

Al mismo tiempo que la probabilidad *jurídica*, nos encontramos con la siempre presente probabilidad *fáctica* o "intrínseca", que es la que se refiere a la opinión más probable y segura dentro de las diversas que se pueden extraer de la lectura de una disposición testamentaria, y que es a la que se debe atender en juzgar, según Justiniano (ley *Deo authore* 1 del *Código*).¹²⁵¹ Así lo expresaba el letrado José Vicente Nogués Escrivá y Castellví al decir que

...si cada una de las razones expressadas no fuesen suficientes, todas juntas dexarán sin cuestión la pretensión de mi parte, por quoadiuvarse a este efecto unas de otras. Sin embargo que algunos

¹²⁴⁸ J. Berní y Catalá, *El abogado penitente...*, pág. 13.

¹²⁴⁹ J. Berní y Catalá, *El abogado penitente...*, pág. 18.

¹²⁵⁰ F. Tomás y Valiente, *El Derecho penal...*, pág. 136.

¹²⁵¹ Jesús, María y Josef. *Memorial en Derecho del que assistía a doña Josefa Marimón...*, B.U.V., Varios 298, núm. 7, pár. 14.

doctores quieren que cada una de ellas sea perfecta en su género y aprobación por el derecho.¹²⁵²

Pero en la siempre presente búsqueda de autoridad, hasta los mismos abogados reconocen que algunos juristas de prestigio no terminaban por resolver claramente alguna cuestión. Luis de Molina, por ejemplo, no terminaba de decidirse si, fenecidos los agnados y debiendo hacer tránsito la sucesión a las hembras, debían preferirse las de la línea del último poseedor o bien las de la línea primogénita. En este caso, el abogado Tomás Fernández de Mesa aporta toda una serie de doctores en favor de la primera opción, para terminar diciendo que el mismo Molina opinaba que, si bien la hembra una vez excluida debía presumirse perpetuamente excluida, aunque cesara la cláusula de la exclusión, esto se limitaba en los mayorazgos, puesto que la hembra excluida debía admitirse siempre que falleciera la persona que la excluyó y sus descendientes. En la aportación de los doctores, y de forma parecida a como decían otros abogados, manifestaba lo siguiente:

Lo grave de la dificultad y el assumpto del pleyto me franqueavan un hanchuroso campo para extender la pluma, pero siguiendo mi costumbre de ceñir mis alegaciones a lo preciso de la dificultad, me contentaré en proponer brevemente los autores que exprofesso han escrito sobre le assumpto, y las razones que *ab intrinseco* hacen más segura su opinión.¹²⁵³

Con esto enlazamos directamente con las conjeturas y las comparaciones, que veremos a continuación. En una disputa sobre fieicomiso se pueden aportar defensas como esta:

Hay muchas cosas que por sí solas, esto es, por estar desnudas de circunstancias, no pruevan. Si a estas tales se añaden otras, y por añadidura se circunstanancias, ya prueban. Y así lo que se ha de advertir es si aquella unión contribuye o no a circunstanciar. Una espada por sí nada significa, la turbación por sí nada prueba. Pero póngase que haya sucedido una muerte, que uno salga turbado del lugar donde está el difunto, y que salga con la espada ensangrentada, y se verá lo que arguye. Porque toda esta unión de

¹²⁵² Jesús, María, Joseph y Santa Ana, San Joaquín y San Antonio de Padua. Por el Dr. Joseph Vicente Nogués..., B.U.V., Varios 77, núm. 17, pár. 50.

¹²⁵³ Jesús, María y Joseph, San Joaquín y San Felipe Neri. Alegación jurídica por D. Joaquín Villaraza..., B.U.V., Varios 240, núm. 26, pár. 17.

circunstancias no suele concurrir en otro acto que el de una muerte violenta.¹²⁵⁴

D) Como ya hemos visto, abundaba el recurso a la comparación o analogía. Antonio Gómez consideraba que el juzgador debía resolver según analogía en defecto de ley —real, canónica o romana—, fuero, *Partidas*, costumbre y autores.¹²⁵⁵ Pero los letrados no se sirven tanto de la analogía legal, como de supuestos de hecho similares tratados por la doctrina o por los tribunales —nunca creación de los mismos letrados—, de manera que se establezcan paralelismos entre ellos y el caso en cuestión. Se trataría, más bien, de una comparación de situaciones. Y de nuevo nos encontramos con el criterio de la autoridad: cuanta más autoridad tenga el autor del caso que se compara, mayor posibilidades de éxito. En muchas otras ocasiones estos casos se extraen de ejemplos originarios de los clásicos, o modelo Ticio-Cayo.¹²⁵⁶

José Nebot y Sanz redactaba en 1742 una alegación, en segunda instancia, que por su contenido parece tener poco fundamento jurídico. Se basa esencialmente en la pretensión de equiparar el verbo "querer" al arbitrio regulado del buen varón, especialmente cuando va acompañado del verbo "parecer", lo que fundaba en numerosas citas doctrinales. Pero debido a sus exiguos razonamientos jurídicos, es por lo que creo que en las escasas siete páginas dedicadas al *Derecho* se describen hasta cuatro casos que, pretende, semejantes.¹²⁵⁷ Rosendo Sanchis impugnaba el testamento de su padre, Gaspar Miguel Sanchis, por haber distribuido de manera desigual entre él y sus otros cuatro hermanos la herencia que provenía de su abuelo, Gaspar José Sanchis. Según Rosendo Sanchis, de la facultad que concedió su abuelo a su padre para que distribuyera entre sus hijos los bienes que le había dejado, "como de cosa suya propia y como él quiera y le parezca", no podía derivarse,

¹²⁵⁴ Jesús, María, Joseph, y S. Francisco de Paula. *Alegación del derecho que assiste a Da. Antonia Agulló...*, B.U.V., R-2/360, núm. 22, pág. 14, pár. 26.

¹²⁵⁵ P. Nolasco de Llano, *Compendio de los comentarios...*, págs. 8-10.

¹²⁵⁶ Jesús, María, Joseph. *Alegación en derecho que presenta a los señores...*, B.U.V., R-2/361, núm. 12, pár. 21; *Addición II. En corroboración del drecho que assiste a doña Jacinta Domingo...*, B.U.V., R-2/361, núm. 13 bis; o Jesús, María, Joseph y Santa Anta, *San Joaquín y San Antonio de Padua. Por el Dr. Joseph vicente Nogués...*, B.U.V., Varios 77, núm. 17, pár. 87.

¹²⁵⁷ Jesús, María, Joseph, y San Francisco de Paula. *Apuntamiento legal del derecho que assiste a Rosendo Sanchis...*, B.U.V., R-2/361, núm. 33, págs. 6-8.

sino, la división de los bienes en partes iguales. El nieto, creyéndose perjudicado, apoyaba esta tesis, además, por el hecho de que su abuelo no había incluido en su testamento la expresión "dando a uno más, a otro menos, y a otro nada". Ésta era la cláusula, según Nebot y Sanz, que en tiempo de *Furs* denotaba claramente el arbitrio absoluto, por lo que su no aparición en el testamento otorgado por Gaspar José en 1683 implicaba la división equitativa de sus bienes.

Pero no todas las comparaciones se establecen en términos jurídicos. Ignacio Llopis Ferris y Salt, defendiendo en su pleito la preferencia de la mayoría de edad natural sobre la primogenitura civil, se despliega en una curiosa comparación artística:

del mismo modo que si a un perito en la escultura se le mandase dar graduación entre dos imágenes sin tener respeto al material de que estarán formadas, debería anteponer aquella que estuviese más ajustada a las perfecciones de la naturaleza, por más que la otra, siendo formada de oro, la excediese en el valor...¹²⁵⁸

E) También es constante la aportación de argumentos de equidad, principios generales del derecho, axiomas vulgares, o lugares comunes de la jurisprudencia, esto es, *tópicos*. Ciertamente, no aportan nada por sí solos a la resolución de la controversia, al menos en un principio. Más bien, parece que actúan a modo de embellecimiento del discurso o simple relleno. Sin embargo, su eficacia en los tribunales está asegurada; así lo interpreto de su profusión.

Son multitud los *loci communes* que podríamos aportar. De nuevo, su legitimidad y categoría vendrán determinadas por la autoridad de que procedían. El abogado José Guillem Buzarán dice, que "es innegable que el complejo de circunstancias que juntas constituyen verosimilitud en la cosa o pensamiento, conducen a una certeza moral".¹²⁵⁹ O Llopis Ferris y Salt que manifiesta, que "toda disposición general o particular no sólo admite extensión y restricción por su causa final, si que también faltando ésta, falta del todo la disposición", o que "en derecho tiene más fuerza la negación para contradecir,

¹²⁵⁸ Jesús, María y Joseph. Informe legal por don Juan Bautista Llopis Ferris y Salazar..., B.U.V., Varios 54, núm. 7, pars. 7 y sigs.

¹²⁵⁹ J.M.J. Alegación en hecho y derecho por don Juan Fermín Sanz..., B.U.V., Varios 298, núm. 10, pár. 29.

que la afirmación para destinar".¹²⁶⁰ Vicente Ignacio de Tormos, decía que "lo que está puesto en la condición no se entiende puesto en la disposición".¹²⁶¹ O el letrado Carlos Sancho, que exponía que D^a Antonia Borrás no tenía derecho a reclamar cosa alguna de la herencia de don Vicente Vidal por haber aceptado el legado que se le dejó en pago. Y esto en base al principio de Papiniano por el cual el legatario que acepta un legado con algún cargo que exceda su utilidad, no tiene regreso para pedir el exceso, por cuanto teniendo aceptado el legado no puede rehusar sus calidades y cargas como a parte del legado.¹²⁶² Evidentemente, cada uno de estos principios vendrían acompañados de sus respectivos doctores.

Los ejemplos serían innumerables, ya que, en definitiva, todas las alegaciones son, en su totalidad, una apelación constante a los tópicos. Lo que hace que, en palabras de Viehweg:

La tópica ha prestado, como hemos visto, grandes servicios a la jurisprudencia, pero, como hemos visto también, hace que la jurisprudencia no pueda convertirse en un método, pues sólo puede llamarse método a un procedimiento que sea comparable por medio de una lógica rigurosa y cree un unívoco nexo de fundamentos, es decir, un sistema deductivo.

La jurisprudencia, que hasta aquí hemos descrito, no es un método, sino un estilo, que tiene, como cualquier otro estilo, mucho de arbitrio amorfo y muy poco de comprobabilidad rigurosa. Con alguna aptitud se puede imitar y practicar. Puede incluso alcanzar, como actitud espiritual que se ejercita, un alto grado de perfección. Pero sólo el proyecto de un sistema deductivo puede hacer de este estilo un auténtico método.¹²⁶³

Como resultado de la utilización de todas estas técnicas, se obtiene un discurso eminentemente casuístico en todos los sentidos, tanto en los hechos como en el derecho, que utiliza un lenguaje sencillo pero eminentemente reiterativo y frecuentemente farragoso aunque, por lo general, fácilmente comprensible. Esta reiteración, por la que una misma idea se repite hasta la

¹²⁶⁰ *Jesús, María y Joseph. Informe legal por don Juan Bautista Llopis Ferris y Salazar...*, B.U.V., Varios 54, núm. 7, párs. 5 y 7, respectivamente.

¹²⁶¹ *J.M.J. Informe breve y jurídico por Antonio, Carlos, Ángela y Teresa Genovés...*, B.U.V., Varios 240, núm. 1, pág. 11, pár. 24.

¹²⁶² Párrafo 23 de la alegación *Jesús, María, Joseph. Alegación en derecho que presenta a los señores...*, B.U.V., R-2/361, núm. 12.

¹²⁶³ T. Viehweg, *Tópica y...*, pág. 115.

saciedad, la apreciábamos también en el contenido de cada uno de los escritos que interponía cada parte en el pleito, en los que primeramente se hacía una recopilación de todo lo actuado hasta el momento y se recordaban las pretensiones planteadas. El letrado pretende no dejar ningún cabo suelto, dejar las cosas bien sentadas y hacerlas lo más fáciles y comprensibles posibles, enfocando sus ideas desde todos los puntos de vista posibles, de manera que dé la impresión de que la razón está de su parte. Pero esta reiteración no se da sólo dentro de una misma alegación. En dos memoriales de la misma parte y sobre el mismo tema, una en primera instancia y otra en segunda, esta última puede llegar a ser prácticamente una copia de la anterior, aunque no aparezcan firmadas por el mismo abogado.¹²⁶⁴

Consideraciones finales

1. El centro de toda discusión y argumentación fáctica, y por derivación jurídica, radica en la búsqueda de la pretendida voluntad del testador. En esta tarea, los letrados interpretarán los hechos y las expresiones utilizadas en las disposiciones testamentarias según sus intereses.

2. Aunque los abogados conocían perfectamente la prelación de las fuentes del Derecho, raramente se reflejaba en el momento de apoyar sus pretensiones, a pesar del reciente auto acordado de 4 de diciembre de 1713. Las razones podían ser variadas. Desde el mayor prestigio del Derecho común, considerado como razón natural, a la dificultad de conocer el Derecho real —que no se estudiaba en las universidades—, pasando por una mayor facilidad con que podían manejarse los abogados en los textos doctrinales. No podemos olvidar que los jueces también habían sido instruidos, como los letrados, esencialmente en Derecho romano, y aunque en el momento de sentenciar lo hicieran conforme al Derecho real, la abultada alegación de aquel derecho y de la doctrina creemos que condicionaría en gran medida la

¹²⁶⁴ Alegaciones *Jesús, María y Josef. Memorial en Derecho del que assistía a doña Josefa Marimón...*; y *Por Dña. Esperanza María Vilanova, vecina de la ciudad de Valencia...*, B.U.V., Varios 298, números 7 y 8; primera y segunda instancia, respectivamente.

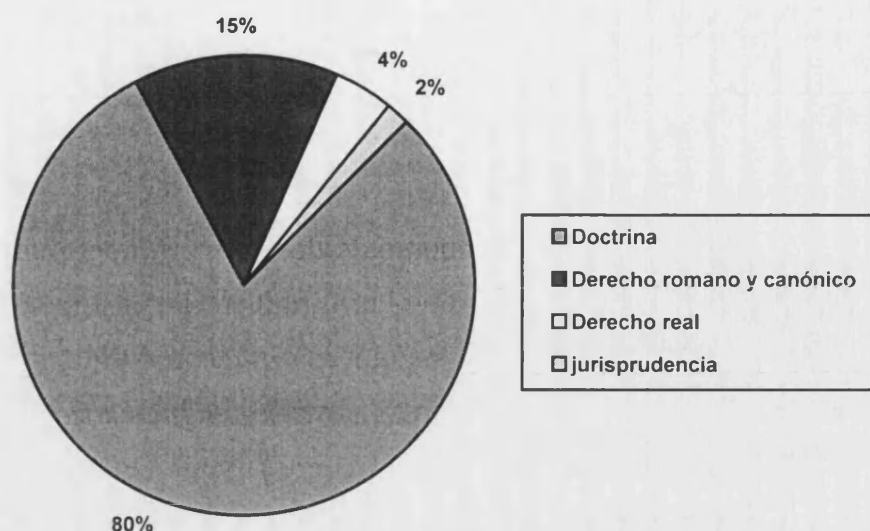
resolución del conflicto.¹²⁶⁵ De lo contrario las alegaciones hubieran sido diferentes. Es decir, que tal y como estaban redactadas surtían efecto.

Por otra parte, el Derecho romano no sólo está presente en los memoriales cuando se alegan sus disposiciones directamente, sino que también constituye el objeto de gran parte de los comentarios de los autores. Además, conforma el contenido de la mayoría de las reglas o principios de derecho.

Con los datos que tenemos obtendríamos el siguiente cuadro: el 80'26 % de las citas jurídicas serían de doctrina, el 14'89 % de Derecho romano-canónico, el 3'80 % de Derecho real, y el 0'98 % de jurisprudencia. Más detalladamente quedaría así:

Citas	Número	(% del total)
Autores	6.096	(79'62 %)
Leyes	1.441	(18'82 %)
Romano-canónicas	1.124	(14'68 %)
<i>Digesto</i>	785	(10'25 %)
<i>Código</i>	295	(3'85 %)
Otros	44	(0'57 %)
Reales	317	(4'14 %)
Castellanas	190	(2'48 %)
<i>Partidas</i>	101	(1'31 %)
<i>Recopilación</i>	50	(0'65 %)
<i>Leyes de Toro</i>	23	(0'30 %)
Otras	16	(0'20 %)
Valencianas	127	(1'65 %)
Sentencias	119	(1'55 %)
Total	7.656	(99'99 %)

¹²⁶⁵ J. Barrientos Grandón, "*Mos italicus* y praxis...", págs. 380-381.



3. En cuanto al discurso y sus formas, hay que destacar que se hallaban totalmente anquilosados en el tiempo. Si en el siglo anterior el tipo de razonamiento que se utilizaba ya se había demostrado reiterativo y acabado, a finales del XVIII se nos presenta obsoleto y decadente. Y ello a pesar del número creciente de juristas e ilustrados en general que luchaban contra tanta vulgarización y acumulación de doctrina. De esta manera podemos decir, en sentido figurativo, que los abogados no *crean* en absoluto Derecho; sencillamente se limitan a *aplicarlo*. Su discurso jurídico se limita a alegar los autores y las leyes que, según ellos, tratan sobre el asunto discutido, sin ningún tipo de valoración o aportación personal. De la misma manera que se servían de los formularios de Alonso de Villadiego, Gabriel Monterroso y Alvarado, o de las prácticas civil y criminal de Berní y Catalá, para hacer demandas, contestaciones, réplicas, contraréplicas, apelaciones, etc., de la misma manera *acoplaban* o *encajaban* a la postura defendida los pasajes de los prontuarios o alfabetos de citas que manejaban. Donde sí parece que se desarrolla ciertamente el trabajo del abogado es en el discurso o narración de los hechos, por cuanto que es aquí en donde el abogado debe interpretar por sí mismo los acontecimientos, ya que cada situación será diferente a las demás. Además, debía darles el enfoque más favorable para su parte. Pero ni aun así su labor se nos presenta, en absoluto, original. En última instancia todas las cuestiones de hecho guardarán mucha similitud entre sí, de manera

que el común recurso a las conjeturas y a las inducciones en general reconducirán todas las alegaciones a un mismo y único esquema argumentativo y discursivo.

4. Como ha quedado demostrado, es obvio que todo este discurso no es, sino, el fiel reflejo de la literatura jurídica de la época. Existe una gran conexión entre esta realidad y la del foro. El hecho de que los autores del siglo XVIII se limitaran a continuar con la tradición del *mos italicus* tardío, totalmente estancado desde el siglo anterior, corre paralelo a que los abogados continuaran sirviéndose de doctores que escribieron en los siglos anteriores. Aunque ya no se cultivaran en la misma medida los primitivos géneros literarios del *mos italicus*, como eran la *lectura* o el *commentarium* —sino que ahora destacaban sobre todo el *consilium* y las *allegationes*, las *decisiones* y las *quaestiones*, en donde el autor ofrecía respuesta a todo problema que se le pudiera plantear a un abogado en la práctica—, a pesar de ello ni la forma ni el contenido de las alegaciones variaron lo más mínimo.

También es cierto que a estas alturas empezaba a destacar la literatura jurídica a cargo de profesionales del foro —abogados y jueces—, que escribían para los letrados con un sentido eminentemente práctico. De cualquier manera, la mayoría de los autores facilitaban —me atrevo a decir determinaban— la continuidad del método visto, en cuanto que los abogados encontraban en él un estilo firmemente asentado, gracias al prestigio y a la seguridad que le concedía su eficacia lograda durante tanto tiempo.

5. No podemos olvidar tampoco la realidad de la Universidad. Al continuismo del discurso debido a la razón arriba expuesta se le unía otra igualmente determinante: la total ausencia del Derecho nacional en las aulas, y su consiguiente escaso conocimiento por parte de los graduados —que lo obtenían principalmente en las pasantías—. Si bien, esta deficiencia incidiría más en el tipo de derecho alegado que en la propia forma del discurso. En mi opinión, el fin de este discurso irá netamente ligado a la aparición de los manuales universitarios de Derecho real, y tratados de práctica forense desligados del romanismo de que habían bebido los anteriores tratados, con los que los graduados pudieran salir de las universidades más instruidos en el

Derecho nacional que sus antecesores. Entre los nuevos manuales destacarán las *Instituciones del Derecho civil de Castilla*, de Ignacio Jordán de Asso y del Río y Miguel de Manuel y Rodríguez en 1771, y la *Ilustración del Derecho Real de España*, de Juan Sala en 1803. Y entre los tratados el de Elizondo (1780), José Febrero (1786), Vizcaíno Pérez (1797), Álvarez Posadilla (1802)...

Con la liquidación de este discurso desaparecerán las alegaciones jurídicas. Al parecer, el posible valor divulgativo e instructivo que pudieran suponer para los abogados, deja de tener sentido en el momento en que el Derecho real va a ser el único que se estudiará en las universidades, y el único que se aplicará definitivamente en los tribunales.

6. Finalmente, seguimos sin conocer la finalidad exacta de las alegaciones, o al menos el por qué de la impresión de algunas de ellas. Ante una fundamentación jurídica tan reiterativa y tan pendiente de la acumulación de citas —especialmente de autores—, posiblemente servirían para una mejor instrucción de los abogados, al tiempo que les facilitaría su trabajo, en cuanto que la búsqueda de la fundamentación jurídica sería mucho más rápida. Quien sabe si, incluso, el abogado autor las pondría a la venta como medio de incrementar sus ingresos, o simplemente para contribuir a su mayor prestigio y fama. Pero todo esto no son más que suposiciones.

CONCLUSIONES

Terminado el trabajo —muchas veces hasta donde me ha permitido la documentación—, y con el fin de ofrecer una valoración de lo que supuso el colegio de abogados de Valencia durante la vigencia de sus primeros estatutos, desde el Antiguo Régimen a la época liberal, presento las siguientes conclusiones:

1. La fundación del colegio de abogados de Valencia se enmarca en el interés que los letrados de muchas ciudades españolas mostraron en el siglo XVIII —fundamentalmente en su segunda mitad— por agruparse en corporación. El motivo era procurarse una mejor defensa de sus intereses en todos los sentidos frente a las instancias públicas y, especialmente, frente a los tribunales. El colegio de Madrid sirvió de referencia para muchos de ellos, al considerar los abogados los beneficios que éste había reportado para sus colegiados. De esta manera, los estatutos del colegio de la corte son trasladados, casi literalmente, a la mayoría de los colegios que se le incorporaron por filiación, con el objetivo de que se les aplicasen las mismas disposiciones que para él había dictado el Consejo de Castilla. El que el colegio de Valencia se erigiera también como congregación, no parece que desviara el interés corporativista de su fundación, aunque la mayor partida de gastos correspondiera a las fiestas religiosas.

2. Aunque la ayuda mutua fuera la intención inmediata de la fundación de todo colegio, no cabe duda de que la obligatoriedad del ingreso, en las ciudades en que existía, se convirtió de hecho en otra de las medidas que en este período intentaron frenar el creciente número de abogados. Algunas de estas medidas fueron ordenadas por el Supremo Consejo —planes de estudio, pasantías y recibimiento ante los tribunales—; otras, como la colegiación, fueron solicitadas por los mismos abogados. No obstante, no parece que la pretensión del colegio de Valencia fuera reducir el número de letrados, sino más bien controlar y mejorar su situación. En este sentido, la Real Audiencia le

reprende en más de una ocasión por su excesiva benignidad en el examen que hacía a los graduados que pretendían recibirse en ella.

El establecimiento del montepío de abogados, a imitación también del de Madrid, es la manifestación más perfecta del espíritu mutualista con que se fundó el colegio. Si bien, el optimismo inicial y la generosidad con que eran reguladas las pensiones pronto se vieron truncados por la escasa respuesta que tuvo entre los colegiados. El gobierno del montepío estaba asignado a una junta propia que era la misma que la del colegio —aumentada con un secretario—, y que funcionaba de la misma manera. La afiliación era obligatoria para todos los abogados que se colegiasen tras su fundación. Pero las pocas esperanzas que guardaban los abogados de cobrar las pensiones llegado el momento, y las difíciles circunstancias de aquellos tiempos, hicieron que la mayoría de ellos se limitasen a pagar sólo las cuotas de entrada, desentendiéndose a continuación, a pesar de las posteriores rebajas de estas cantidades.

3. En cuanto a la formación de los abogados, hay que destacar dos cosas de los numerosos planes de estudios que estuvieron vigentes durante los años que estudiamos: en primer lugar que, por regla general, cada vez eran más largos y complicados —desde las constituciones de la universidad de Valencia de 1733 hasta los antecedentes al plan Pidal de 1845—; y, en segundo lugar, que el contenido de los planes irá evolucionando desde el estudio exclusivo del Derecho romano-canónico hasta la práctica desaparición de éste y su substitución por el Derecho nacional. La primera nota obedece al interés tácito de disuadir del estudio de la Jurisprudencia y, consiguientemente, del ejercicio de esta profesión, mientras que la segunda es el reflejo del cambio del Derecho y, en general, de la sociedad que supone la irrupción del estado liberal y la codificación. Otras características de estos nuevos planes fueron la progresiva desaparición de la facultad de Cánones, y la consiguiente integración de sus estudios en la de Leyes; y la también progresiva centralización de la dirección de las universidades desde el gobierno central, en defecto, en el caso de Valencia, del municipio.

La duración de la pasantía evolucionará en un principio en consonancia con el contenido de los planes: a mayor estudio del Derecho real

y de la práctica forense, menor insistencia en la práctica privada, desde los cuatro años que duraba en un principio, hasta su práctica desaparición. No obstante, las pasantías continuarán existiendo a pesar del estudio del Derecho real; de lo que se deriva el insuficiente aprendizaje en las aulas de este último.

En cuanto al recibimiento de abogado en los tribunales, no parece que esta medida cumpliera la misión de restringir su número. De hecho, de la misma manera que ocurre en la Universidad, el número de reprobados es insignificante. A partir de 1770, todo pretendiente debía examinarse, además y previamente, ante tres examinadores designados por la Junta del colegio. No tengo constancia de que nadie suspendiera esta prueba. Lo que unido al importante número de abogados que se recibían anualmente, hacía que fueran pocas las reuniones del Real Acuerdo en las que no se examinara a ningún pretendiente.

4. La defensa de los intereses de los abogados suponía, por una parte, una lucha por el mantenimiento de los privilegios y exenciones que los abogados consideraban propios de la nobleza personal en la que pretendían mantenerse. Ante las dudas que las instancias públicas mostraban en este sentido, gran parte de las decisiones que la Junta del colegio adoptaba tenían este objetivo. Pero, por otra parte, el colegio también luchaba contra el no siempre correcto trato que los abogados recibían de la Audiencia, y, en concreto, para que ésta señalase día para la vista de los pleitos. El que la resolución de esta causa, iniciada en 1783, se demorara hasta 1831 —en favor de los abogados—, nos muestra hasta qué punto el proceder del colegio estaba sometido a las decisiones de la Audiencia.

Las decisiones de la Junta podían ser supervisadas, e incluso anuladas en cualquier momento por este tribunal. Por lo que se desprende de los libros de deliberaciones, las relaciones del colegio con la Audiencia nunca fueron buenas. La restringida capacidad de actuación de la Junta posibilitaba que todo individuo que se opusiera a alguna de sus decisiones acudiera a la Audiencia, la que, habitualmente, decidía en favor del recurrente. Como ocurría con la negativa inicial de la Junta a admitir como colegiales a los individuos que por su ascendencia no creía suficientemente dignos de acceder a tan respetable y *limpia* institución. Negativa que siempre fue revocada por la

Audiencia. O cuando la Junta pretendía que las expulsiones del montepío por falta de pago llevaran aparejada a su vez la expulsión del colegio, lo que no ocurría por no contar con el asentimiento de la Audiencia.

5. El asunto más tratado por la Junta tal vez fue el de la incorporación de individuos —de hecho, es el más regulado en los estatutos—. Por dos motivos: en primer lugar, por la relevancia que se otorgaba a la ascendencia del pretendiente con el propósito de formar un cuerpo colegial lo más noble posible; y, en segundo lugar, porque durante muchos de los 76 años en que estuvieron vigentes los estatutos, las puertas del colegio estuvieron cerradas a nuevas incorporaciones, como consecuencia del deseo de reducir el número de letrados, lo que obligó a la Junta a manifestarse en multitud de ocasiones ante las pretensiones de los abogados de incorporarse en calidad de supernumerarios. Además, en casi todas las juntas se trataban incidencias derivadas de los expedientes probatorios —alrededor de 640—, pertenecientes a otros tantos individuos. Si hasta 1794 los escasos impedimentos en la colegiación provenían de los reparos que ponía el colegio a la admisión de ciertos individuos, a partir de ahora será el Supremo Consejo el que prohíba dicha colegiación, alegando los males que el exceso de letrados conllevaba. La literatura jurídica de la época también apoyaba esta medida. A partir de las Cortes de Cádiz el colegio abrirá o cerrará sus puertas en cada período liberal o absolutista, respectivamente, hasta que en 1832 se establece definitivamente la libre incorporación.

El cierre de las puertas del colegio a nuevas incorporaciones es una cuestión en la que claramente se refleja la imprecisión que caracterizaba las normas del Antiguo Régimen. No hablamos de los estatutos —también imprecisos—, sino del decreto por el que se reducía el número de abogados. En ningún momento se expresa de manera inequívoca si la cifra de cien se refería a los individuos que efectivamente ejercían de abogados en la ciudad de Valencia, o si se refería a los que aparecían en las listas que anualmente se repartían, y en la que aparecían todos los colegiados residentes en la capital, ejercieran o no. En numerosas ocasiones son diferentes las interpretaciones de la Audiencia y el colegio. En otras ocasiones, incluso, es el mismo colegio el que se contradice con manifestaciones anteriores.

6. El perfil de los colegiados es muy variado. En líneas generales pertenecen a la clase social media de la ciudad de Valencia —especialmente de la parroquia de san Pedro—, siendo pocos los que gozan de ascendencia noble. Pero la mitad de los colegiados eran oriundos de otros lugares, lo que indica la fuerte atracción que la capital ejercía como lugar de promoción y ascenso, tanto social como profesional. Tampoco parece que pertenecieran a la oligarquía ciudadana de Valencia, aunque es destacable su participación en los asuntos municipales, sobre todo en los cargos de designación popular, y no así en el de regidor. La mayoría provienen de familias dedicadas a la justicia y la administración, sin despreciar las que se dedican a la medicina y, sobre todo, a la agricultura; para estos últimos cuando provienen de otras poblaciones. Con el tiempo parece que aumentan los abogados procedentes de familias comerciantes, mientras que los títulos nobiliarios o cargos honoríficos disminuyen; su consideración por parte del Colegio ya no era la misma que antes. De hecho, ya no se exigen las pruebas de limpieza de sangre.

7. La Junta era el órgano colegial que dirigía la corporación. Aunque no se exigía ningún mérito para formar parte de ella, el sistema de designación de oficiales previsto en los estatutos aseguraba la rotación de los mismos individuos entre los diversos cargos, de manera que sólo dos de los ocho puestos debían elegirse entre individuos que no hubieran pertenecido a la Junta en los años anteriores. Además, sólo intervenían en la elección los componentes de la Junta, lo que favorecía una continuidad muy propia de las instituciones del Antiguo Régimen. Este inmovilismo se acentuaba, además, por el hecho de que las decisiones se adoptaban de común acuerdo, es decir, se trata de un órgano realmente colegial, donde el decano no destacaba en la toma de decisiones. Como cabeza visible de la congregación que era, la relevancia del decano era más bien protocolaria, con toda la importancia que el protocolo tenía en estos momentos.

El funcionamiento de la Junta venía previsto en los estatutos de manera muy exigua. Además, su ambigua redacción hizo que tuvieran que ser reinterpretados continuamente, solicitando en algunas ocasiones la opinión de

otros colegios. Salvo con el de Madrid, las relaciones que mantenía el colegio de Valencia con los otros colegios no parece que fueran prolíficas.

8. A través de las actas se observan muy tímidamente los cambios y las transiciones de todo tipo que se produjeron en el siglo XIX. De una monarquía absoluta a un estado liberal, de una sociedad estamental y gremial a otra en la que la incipiente burguesía y la libertad de ejercicio profesional terminarían por imponerse. No parece que los revolucionarios cambios que se estaban produciendo repercutieran lo más mínimo en la vida corporativa. De hecho, el colegio conservaría los mismos estatutos hasta 1838. La única modificación data de 1836, cuando se substituyeron las exigencias de limpieza de sangre y de no haberse ejercido oficio vil o mecánico, por la de no haber sido condenado con pena que causara infamia, y la acreditación de buena conducta. Los estatutos se nos presentan más o menos acordes con los tiempos en el momento de la fundación del colegio, salvo en la regulación de las calidades que se exigían de los colegiados, ciertamente vetusta. Sin embargo, en el siglo XIX ya aparecen inoperantes e incluso desfasados. Pero el colegio se había fundado con la única finalidad de servir a la abogacía y a los abogados. Ni siquiera los cambios políticos o la ocupación francesa se dejaron sentir en sus juntas más que, con respecto a la ocupación, las inevitables consecuencias derivadas de la guerra. Tampoco hay constancia de que hubiera depuraciones por ninguna de las partes, al contrario de lo que ocurrió en los colegios de otras ciudades.

9. El colegio desarrolla su actividad entre, por una parte, el Supremo Consejo y la Audiencia, y, por otra, el cuerpo de colegiados. En realidad, es el medio de comunicación entre aquellos órganos resolutorios y los abogados, y así lo asume la Junta. Y esto ocurre en un doble sentido. Por un lado, la Audiencia se sirve del colegio para dar a conocer sus resoluciones y las del Consejo entre el cuerpo de abogados; y en sentido contrario, el Supremo Consejo requiere la opinión de los colegios y, a través de ellos, de los abogados, en, por ejemplo, la redacción de las obras legislativas más importantes del momento —*Novísima, Código Civil y Penal...*—. De alguna manera, el colegio actúa como órgano administrativo o ejecutivo que aplica

para Valencia las disposiciones que se adoptan desde Madrid para todos los colegios de abogados, o incluso para sólo el de la corte.

Por la dependencia aludida respecto de los dos tribunales, el colegio pasa, de hecho, a cumplir la única misión de evitar que el número de abogados de la ciudad excediera del establecido en cien. En este sentido, el colegio actuará como un verdadero gremio —con la capacidad de decisión muy limitada—, en un momento en que el incipiente liberalismo pretende la libertad de ejercicio profesional. El carácter gremial de la corporación siempre estará presente en la mente de sus individuos. De ahí que en los períodos liberales se propusiera en alguna ocasión, si no su supresión, sí la derogación de la colegiación como requisito imprescindible para ejercer en la audiencia y tribunales de ella dependientes de la ciudad. Los estatutos de 1838 supondrían la solución de continuidad del colegio, gracias a su adaptación a los tiempos.

Como consecuencia de este estudio, me ha resultado interesante comprobar cómo en momentos tan lejanos y distantes a nosotros —que no lo son tanto—, ya se contemplaban los mismos problemas o preocupaciones que afectan al colegio y a la abogacía de la actualidad. Hablamos, por ejemplo, del exceso de letrados y de la posibilidad de establecer un límite en su número, de la posibilidad de tener que superar un examen para poder ejercer la abogacía, de las academias y las pasantías, su obligatoriedad, o también, y en otro orden de cosas, de los planes de estudio y su aplicación, etc. Las soluciones, me permito aventurar, no creo que pudieran ser muy diferentes.

10. Por lo que respecta a la actuación en los tribunales, a través de las alegaciones jurídicas podemos conocer la argumentación fáctica y la fundamentación jurídica que los abogados del siglo XVIII utilizaban en la defensa de sus causas. Evidentemente se trata de un discurso que proviene de siglos atrás; hunde sus raíces en el *mos italicus*. Un estilo reiterativo que en el caso de los pleitos basados en herencias y testamentos gira alrededor de dos ejes: en cuanto a los hechos, en la búsqueda de la presunta voluntad del testador y del significado de las palabras utilizadas en el testamento; y en cuanto al Derecho, en la obsesión por la acumulación de citas —*auctoritas*— que sustenten la postura defendida. Este interés por acumular fundamentos jurídicos determina que la fuente a la que más se acuda sea, con diferencia, la

doctrina de los autores, ya que la ingente obra de los doctores posibilita que a través de sus tratados se pueda encontrar apoyo a cualquier pretensión planteada.

También es importante la alegación de Derecho romano. Por dos motivos fundamentales: en primer lugar, porque era el único que se estudiaba en la universidad, mientras que en las pasantías lo que se aprendía fundamentalmente era la práctica forense; y, en segundo lugar, porque era la base principal de los comentarios de los autores. Por contra, la presencia del Derecho real es poco más que testimonial. Lo que demuestra que las continuas disposiciones del monarca y la abundante literatura jurídica en favor del este derecho no fructificarán hasta el siglo XIX. La tradicional prelación de las fuentes del derecho sigue sin observarse. Posiblemente, la mayor sencillez de los pleitos de este siglo, debida a la irrupción definitiva de la Ley como fuente indiscutible de derecho, es la causa de que los memoriales en que se contenían las alegaciones dejaran de imprimirse.

La utilidad de este discurso quedaba demostrada en la práctica. Aunque las sentencias no se funden, de manera que no podamos conocer las disposiciones que se tenían en cuenta para resolver los pleitos, el que los letrados no modificasen su discurso a lo largo del tiempo evidencia que les resultaba provechoso. Es más, el prestigio del Derecho romano continuaba intacto, y en él se habían formado los magistrados.

Las alegaciones jurídicas suelen ir firmadas por un sólo abogado. Pero el hecho de que los escritos de la mayoría de los pleitos aparezcan firmados por distintos abogados, nos induce a pensar que existía una cierta colaboración profesional, es posible que incluso despachos colectivos.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Fuentes manuscritas

Archivo Histórico Nacional

- *Consejos*, legajos 6.861 núm. 11, y 49.075.

Archivo del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

LIBROS

- Libros de matrícula del Colegio: libros 1 y 2.
- Libro de deliberaciones del Colegio: libros 4 a 7.
- Libro de acuerdos de la Junta del Montepío: libro 8.
- Libros de matrículas del Montepío: libros 9 y 10.
- Registro de viudas, hijos e hijas de abogados: libro 12.
- Listas de abogados del Colegio: libros 85-88.

CAJAS

- Documentos fundacionales del Colegio: caja 1.
- Fondos antiguos varios: cajas 2 y 3 (recibos de limosnas para misas), y cajas 4 a 8 (28 expedientes)
- Documentos antiguos varios: caja 9.
- Impresos varios: caja 10.
- Expedientes pruebas de ingreso: cajas 11 a 31.
- Expedientes de incorporación: cajas 32 a 36.
- Cuentas y facturas del Colegio: cajas 285-289 (años 1762-1855).
- Documentos fundacionales del Montepío, memoriales varios y reglamento: caja 387.
- Expedientes de viudas admitidas: cajas 389 y 390.
- Expedientes de viudas no admitidas, abogados impedidos y fes de vida: caja 391.
- Escritura de donación de doña Cecilia Barber: caja 392.
- Solicitudes de socorros: caja 393.

- Cuentas del Montepío: cajas 396 a 398.

Archivo Municipal de Valencia

- *Elecciones*, 1ª B/I, cajas 1 a 9.
- *Capitulares y Actas*, D-193, D-194, D-203 y D-212.
- *Contribuciones Particulares*, cajas 1.370 y 1.370 doble.
- *Libros de grados de la universidad de Gandía*: números g-1 a g-8.
- *Libro Padrón Riqueza*: libros b2-1 a b2-14.

Archivo del Reino de Valencia

- Sección *Real Audiencia*: libros I-D 6 a I-D 12, y 1 a 130 del Real Acuerdo.
- Sección *Escribanías de Cámara*, pleitos:
 - Año 1790: núms. 2, 3, 4, 6, 7, 22, 33, 99, 117, 195, 209 y 227.
 - Año 1791: núms. 28, 44, 45, 141, 210 y 253.
 - Año 1792: núms. 10, 25, 52, 54, 93 y 120.
 - Año 1994: núm. 25.

Archivo de la Universidad de Valencia

- *Libros de grados en Leyes y Cánones*: libros 66-77.
- *Libro Priorales*: libros 89 y 90.
- *Documentos de Claustros*, 1800-1808, legajo 60.

Biblioteca Universitaria de Valencia

- *Manuscritos 76*.
- *Manuscritos 178*, núm. 8.
- *Manuscritos 179*, núm. 64.
- *Manuscritos 623*, núms. 4 y 5.
- *Manuscritos 695*, núm. 4
- *Manuscritos 702*, núm. 3.
- *Manuscritos 859*, núm. 14.
- *R-2/360*, núms. 1, 2, 6, 7, 17, 22, 23, 24 y 25.

- *R-2/361*, núms. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13 bis, 13 ter, 14, 26, 27, 27 bis, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 47.
- *R-2/362*, núm. 39.
- *Varios 54*, núms. 1, 6, 7 y 8.
- *Varios 60*, núm. 9.
- *Varios 77*, núms. 17 y 21.
- *Varios 102*, núm. 8.
- *Varios 129*, núm. 13.
- *Varios 130*, núm. 7.
- *Varios 143*, núm. 13.
- *Varios 234*, núm. 60.
- *Varios 240*, núms. 1, 2, 12, 13, 14, 15, 26 y 27.
- *Varios 296*, núm. 18.
- *Varios 298*, núms. 6, 7, 8, 10, 12 y 13.
- *Varios 432*, núm. 17.
- *Varios 69/7*, núm. 7.
- *Varios 382/5*.
- *Varios F/10*, núms. 6, 8 y 9.
- *Varios F/18*, núms. 5 y 8.

Fuentes impresas

AGUIRRE, S., *Prontuario Alfabético y Cronológico por Orden de Materias*, 6 vols., Madrid, 1799-1802.

Autos Acordados, ediciones de 1745 y 1775.

BERNÍ Y CATALÁ, J., *El abogado instruido en la práctica civil de España*, Valencia, 1763.

-----, *Manual de testar, dividir y partir, y discurso contra la instrucción de escribanos de Joseph Juan y Colom*, tercera edición, Madrid, 1768.

-----, *Resumen de los Privilegios, Gracias y Prerrogativas de los Abogados Españoles*, Valencia, 1764.

-----, *Práctica criminal*, Valencia, 1765.

-----, *Carta que el Dr. Don Joseph Berní y Catalá escribe a sus passantes*, Valencia, 1772.

-----, *Disertación sobre la llave de la Jurisprudencia española, que escribe a sus pasantes el doctor D. Josef Berní y Catalá, abogado de los Reales Consejos*, Valencia, 1774.

-----, *El abogado penitente y el pleito más importante*, Valencia, 1747.

CABRERA Y NÚÑEZ DE GUZMÁN, M. DE, *Idea de un abogado perfecto*, Madrid, 1683.

CAMPILLO, J. DEL, *Lo que hay de más y de menos en España para que sea lo que debe ser y no lo que es*, edición y estudio preliminar de A. Elorza, Madrid, 1969.

CANELLA SECADES, F., "El Derecho español en 1744", *Revista General de Legislación y Jurisprudencia* LII (1878) 353-367 y 481-495.

CASTRO, J. F. DE, *Discursos críticos sobre las leyes y sus intérpretes*, 2ª edición, 2 vols., Madrid, 1829.

Censo de la población de España, según el recuento verificado en 25 de diciembre de 1860 por la Junta General de Estadística, Madrid (Imprenta Nacional), 1863.

Censo español executado de orden del rey comunicada por el excelentísimo señor conde de Floridablanca, primer secretario de estado y del despacho, en el año de 1787.

Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, XXII-XXXVIII (1837-1846).

Colección de los Decretos y Órdenes de las Cortes, I-X (1810-1823).

Constituciones de la insigne Universidad Literaria de la Ciudad de Valencia, hechas por el Claustro Mayor de aquélla en el año de 1733. En Valencia en la imprenta de Antonio Bordazar de Artazu, impressor del Santo Oficio y de la Ilustre Ciudad. Valencia. 1733.

Constitucions del Estudi General de la insigne Ciutat de València. En València. Estampades en casa de Claudi Macé, junt al colegi del senyor Patriarca. Any 1652.

Constitucions del Estudi General de València, fetes en diferents juntes del Claustro, segons los Chalendaris de cascuna. Manades imprimir per los Ilustres, Egregis, Nobles, Magnífichs S. s. Nicandro Assio Generós, lurat en Cap per los Nobles y Cavallers, Severino Ginart Ciudadà, lurat en Cap dels Ciudadans, Don Luis Lloris y Périz, Ciudadà Racional, Iusep Gil de Torres Ciudadà, Síndich de la Cambra e Insigne Consell general. En València per Vilagrasa, impressor de la Ciutat y de la Santa Inquisició, junt al molí de Rovella, Any MDCLXXIV.

CONDE DE CABARRÚS, *Cartas (1795). Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la felicidad pública*, edición al cuidado de José Esteban, Madrid, 1990.

COVARRUBIAS, J. DE, *Discurso sobre el estado actual de la abogacía en los tribunales de la nación. Dirígelo a los ilustres y perfectos abogados españoles, el licenciado...*, Madrid, 1789.

Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, XIX-XXI (1834-1836).

Decretos del Rey Don Fernando VII, I-XVI (1814-1831).

Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII, y de la Reina su Augusta Esposa, XVII-XVIII (1832-1833).

Diario de las sesiones de Cortes 1810-1813, II.

- DUPIN, *Manual del legista*, traducida al castellano con varias adiciones y correcciones, acomodadas a nuestras leyes por D. Gregorio Morales Pantoja, Madrid, 1829.
- ESCRICHE, J., *Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia*, 4 vols., Madrid, 1874-76.
- FEBRERO, J., *Librería de Escribanos, Abogados y Jueces*, 5 vols., quinta edición, Madrid, 1819.
- FERNÁNDEZ DE MESSA, T. M., *Arte de conocer y de interpretar el Derecho*, 1747.
- , *Arte histórica y legal de conocer la fuerza y uso de los Derechos Nacional y Romano en España*, Valencia, 1747.
- , *Oración que exorta a estudiar las leyes de España por ellas mismas*, Valencia, 1752.
- Fuero Juzgo*, edición de la Real Academia Española, Madrid, 1815.
- Fuero Real*, Madrid (Imprenta Real), 1836.
- Furs de València*, edición de 1547.
- GÓMEZ, A., *Ad Leges Tauri commentarium absolutissimum*, Madrid, 1780.
- GÓMEZ Y NEGRO, L., *Elementos de Práctica Forense*, tercera edición, Valladolid, 1830.
- GUEVARA, G. DE, *Discurso legal de un perfecto y christiano abogado*,
- HEVIA BOLAÑOS, J. DE, *Curia Philipica*, 2 vols., Madrid, 1797.
- JORDAN DE ASSO Y DEL RÍO, I., y MANUEL Y RODRÍGUEZ, M. DE, *Instituciones del derecho civil de Castilla*, quinta edición, Madrid, 1742.
- Leyes de Toro*, Los códigos españoles, concordados y anotados, IV, Madrid, 1849.
- MACANAZ, M. DE, "Auxilios para bien gobernar una monarquía católica o documentos que dicta la experiencia y aprueba la razón para que el monarca merezca justamente el nombre de grande. Obra que escribió y remitió desde París al Rey Nuestro Señor Don Felipe Quinto". *Semanario erudito que comprende varias obras inéditas, críticas, morales, políticas, históricas, satíricas y jocosas de nuestros mejores autores antiguos y modernos*. Publicados por D. Antonio Valladares de Sotomayor, Madrid, 1787, V, págs. 238 y ss.

-----, "Avisos políticos, máximas prudentes y remedios universales que dicta la experiencia y remite al Señor Rey D. Fernando el VI en el principio de su reinado, para que su práctica restablezca la decadencia de la Monarquía española de los innumerables males que padece", *Seminario Erudito*, Madrid, 1788, VIII, págs. 233 y ss.

MADOZ, P., *Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar*, 16 tomos en 11 vols., Madrid, 1848-1850.

MADRAMANY CALATAYUD, M., *Tratado de la Nobleza de la Corona de Aragón, especialmente del Reyno de Valencia, comparada con la de Castilla, para ilustración de la Real Cédula del Sr. Dn. Luis I de 14 de agosto de 1724*, cuarta edición, Valencia, 1788.

MARQUÉS DE CRUILLES, *Los gremios de Valencia*, Valencia, 1883.

MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., *Diccionario de la Administración Española*, 8 vols., Madrid, 1886-87.

MELÉNDEZ VALDÉS, J., *Discurso de apertura de la Real Audiencia de Extremadura (27 de abril de 1791)*, edición, introducción y notas de M. A. Lama, Badajoz, 1991.

MORA Y JARABA, P., *Tratado crítico. Los errores del Derecho civil y abusos de los jurisperitos*, Madrid, 1748.

NOLASCO DE LLANO, P., *Compendio de los comentarios extendidos por el maestro Antonio Gómez a las ochenta y tres leyes de Toro*, Madrid, 1785.

NOUGUÉS SECALL, M., *La moral del abogado*, Zaragoza, 1848.

Novísima Recopilación, Madrid, 1805.

Nueva Recopilación, Madrid, 1640.

Ordenamiento de Alcalá, Madrid, 1774.

Ordenanzas Reales de Castilla, Los códigos españoles, concordados y anotados, VI, 1849.

Partidas, Los códigos españoles, concordados y anotados, II-V, 1848.

PÉREZ Y LÓPEZ, A. J., *Teatro de la legislación universal de España e Indias*, 28 vols., Madrid, 1791-98.

PÉREZ VILLAMIL, J., *Disertación sobre la libre multitud de abogados, si es útil al Estado o si fuera conveniente reducir el número de estos profesores, con qué medios y oportunas providencias capaces de conseguir su efectivo*

- cumplimiento. Lo leyó en la Real Academia de Derecho patrio y público, titulada de Ntra. Señora del Carmen... en 16 de octubre de 1782. Madrid, 1782.*
- Plan de estudios aprobado por S. M. y mandado observar en la Universidad de Valencia, Madrid. En la imprenta de la viuda de Ibarra. Año MDCCLXXXII.*
- Prontuario de las Leyes y Decretos del Rey Nuestro Señor Don José Napoleón I, I-II (1808-1810).*
- RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, J., *Apéndice a la Educación popular*, 4 vols., Madrid, 1775-1777.
- SALA, J., *Ilustración del Derecho Real de España*, 2ª edición, 2 vols., Madrid, 1820.
- SÁNCHEZ, S., *Suplemento a la colección de pragmáticas, cédulas, provisiones, circulares y otras providencias publicadas en el actual reinado del Señor Don Carlos IV*, Madrid, 1803.
- SEMPERE Y GUARINOS, J., *Historia del Derecho Español*, Barcelona, 1847.
- YANGUAS Y MIRANDA, J., *Diccionarios de los fueros del Reino de Navarra, y de las leyes promulgadas hasta las cortes de los años 1817 y 18 inclusive*, San Sebastián, 1828.
- Valencia en la mano. O sea, manual de forasteros. Guía cierta y segura*, Valencia, 1852.

Bibliografía

- AGUILAR PIÑAL, F., *Los comienzos de la crisis universitaria en España. Antología de textos*, Madrid, 1967.
- AGULLÓ BENEDI, C., *Pequeña y verídica historia del Colegio de Abogados de Cartagena*, Cartagena, 1986.
- AJO G. Y SÁINZ DE ZÚÑIGA, C. M^a, *Historia de las universidades hispánicas. Orígenes y desarrollo desde su aparición a nuestros días*, 11 vols., Madrid, 1957-1979.
- ALBIOL VIDAL, S., *El Colegio de Abogados de Castellón*, Castellón de la Plana, 1994.
- ALONSO ROMERO, P., "Del «amor» a las leyes patrias y su «verdadera inteligencia»: a propósito del trato con el Derecho regio en la universidad de Salamanca durante los siglos modernos", *Anuario de Historia del Derecho Español* 67 vol. I (1997) 529-549.
- y GARRIGA ACOSTA, C., "El régimen jurídico de la abogacía en Castilla (siglos XIII-XVIII)", *Recueils de la société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions*, LXV, *L'assistance dans la résolution des conflicts*, Quatrième partie, L'Europe Médiévale et Moderne, (1998) 51-114.
- ALZOLA GONZÁLEZ, J. M., *Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas*, Las Palmas de Gran Canaria, 1986.
- ALBIÑANA, S., *Universidad e Ilustración. Valencia en la época de Carlos III*, Valencia, 1988.
- ARDIT LUCAS, M., *Revolución liberal y revuelta campesina*, Esplugues de Llobregat (Barcelona), 1977.
- AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, *Cartografía histórica de la ciudad de Valencia 1704-1960*, Valencia, 1985.
- AZAGRA ROS, J., *La desamortización de Godoy en Valencia (1799-1807)*, Valencia, 1986.
- BAENA DE ALCÁZAR, M., *Los colegios profesionales en el Derecho administrativo español*, Madrid, 1968.

- BALDÓ LACOMBA, M., "Los años liberales", *Universidades valencianas*, Valencia, 1987, págs. 69-75.
- BARBADILLO DELGADO, P., *Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, 3 vols., Madrid, 1956-1960.
- BARRIENTOS GRANDÓN, J., "Mos italicus y praxis judicial indiana", *Revista Interdisciplinar de Estudios Histórico-Jurídicos* 5-6 (1996-1997) 357-428.
- BASTERRA, A., y OTROS, *El Colegio de Abogados de Álava. 150 años de historia*, Vitoria, 1989.
- BERMEJO CABRERO, J. L., *Derecho y Administración Pública en la España del Antiguo Régimen*, Madrid, 1985.
- BERMÚDEZ AZNAR, A., *Contribución al Corporativismo Curial. El Colegio de Abogados de Murcia*, Murcia, 1969.
- BORAO, J., *Historia de la Universidad de Zaragoza*, Zaragoza, 1987.
- CANNATA, C. A., *Historia de la Ciencia Jurídica Europea*, Madrid, 1996.
- CASABÓ RUIZ, J. R., *El Código Penal de 1822* (tesis doctoral inédita), Universidad de Valencia.
- CASTAÑEDA, V., "El Dr. D. José Berní y Catalá, jurisconsulto valenciano", *Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales* 1 (1918) 187-235, 353-437 y 548-596, y 2 (1919) 101-144.
- CASTELLÓ TRAVER, J. E., *El País Valenciano en el Censo de Floridablanca (1787). Análisis demográfico, organización y presentación de los datos locales*, Valencia, 1789.
- , "La estructura demográfica urbana en la demografía preindustrial: la ciudad de Valencia en el Censo de Floridablanca (1787)", *Estudis d'Història Contemporània*, 0, págs. 79 y ss.
- , "Contribución al estudio de la evolución de la población valenciana del siglo XVIII", *Actas III Congreso Historia de la Medicina* 2, págs. 235 y ss.
- CLAVERO, B., *Temas de Historia del Derecho: Derecho Común*, Sevilla, 1977.
- , *Mayorazgo: propiedad feudal en Castilla. 1369-1836*, Madrid, 1989.
- CORES TRASMONTE, B., *Historia do Colexio de Avogados de Santiago*, Santiago de Compostela, 1990.
- CORRIPIO RIVERO, M., *Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo*, Oviedo, 1974.

- CORTÉS, J., *Un formulari de juristes. Sueca: Col.legi d'Advocats*, Sueca, 1991.
- CRUZ ROMÁN, N., *Valencia napoleónica*, Valencia, 1968.
- CUÉLLAR GRAGERA, A., *Asociaciones y sociedades profesionales e interprofesionales de abogados*, Badajoz, 1967.
- DE LAPRESA MOLINA, E., *Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Granada (1726-1850)*, Granada, 1876
- DEL CAMPO ARMIJO, L., *El Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (1546-1952)*, Zaragoza, 1952.
- DELGADO RODRÍGUEZ, M., *La biblioteca del Colegio de Abogados de Valencia. Historia y selección de sus fondos*, Valencia, 1992.
- DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., *La sociedad española en el siglo XVIII*, Madrid, 1995.
- , *Las clases privilegiadas en la España del Antiguo Régimen*, Madrid, 1973.
- , *Sociedad y Estado en el siglo XVIII español*, Esplugues de Llobregat (Barcelona), 1976.
- , "La nobleza en la España del siglo XVIII", *Señores y campesinos en la península ibérica, siglos XVIII-XX*, 2 vols, Barcelona, 1991, II, págs. 1-15.
- El Archivo Histórico del Colegio de Abogados de Valencia. Inventario de sus fondos y listado de sus abogados (1762-1997)*, Valencia, 1997.
- ESTEBAN Y MATEO, L., El Rector Blasco y la reforma universitaria de 1787 en Valencia, *Saibabi* 23 (1973) 89-102.
- ESTEBAN Y MATEO, L, y OTROS, *Plan de estudios aprobado por S. M. y mandado observar en la Universidad de Valencia*, Valencia, 1984.
- FELIPO ORTS, A., *La Universidad de Valencia durante el siglo XVII (1611-1707)*, Valencia, 1991.
- FERNÁNDEZ BARRERO, A., *La tradición romanística en la cultura jurídica europea*, Madrid, 1992.
- FERNÁNDEZ SERRANO, A., *La abogacía en España y en el mundo*, 3 vols., Madrid, 1955.
- GALWEY MONGRAND, F., *De la muchedumbre de abogados*, Málaga, 1900.
- GARCÍA CARRERO, H., *El abogado*, Barcelona, 1955.
- GARCÍA GALLO, A., *Manual de Historia del Derecho*, 2 vols., Madrid, 1982.

- GARCÍA MARROQUÍN, F., *Reseña histórica del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid*, Valladolid, 1881.
- GARCÍA MONERRIS, E., *La monarquía absoluta y el municipio borbónico*, Madrid, 1991.
- GARCIA I SANZ, A., *Institucions de Dret Civil Valencià*, Castelló de la Plana, 1996.
- GARCÍA TROBAT, P., "Los grados de la Universidad de Gandía (1630-1772)", *Universidades españolas y americanas*, Valencia, 1987, págs. 175-186.
- , "Un modelo colegial", *Universidades valencianas*, Valencia, 1987, págs. 107-111.
- , *El naixement d'una universitat: Gandia*, Gandía, 1989.
- , "La Universidad de Gandía. ¿Fuga académica?", *Doctores y escolares. II Congreso internacional de historia de las universidades hispánicas*, 2 vols., Valencia, 1995, II, págs. 183-193.
- , "Libertad de cátedra y manuales en la facultad de Derecho (1845-1868)", *Colegios y universidades, del Antiguo Régimen al Liberalismo. IV Congreso internacional de Historia de las universidades hispánicas* (en prensa), 1997, México.
- GARCÍA VENERO, M., *Orígenes y vida del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, Madrid, 1971.
- GENOVÉS AMORÓS, V., *València contra Napoleó*, Valencia, 1967.
- GIBERT, R., "La tradición científica del derecho español", *Atlántida*, vol. IV, núm. 15, mayo-junio 1965.
- , *La ciencia jurídica española*, Granada, 1971.
- , "El arte para estudiar jurisprudencia de Bermúdez de Pedraza". *Homenaje al profesor y decano Antonio Mesa-Moles Segura en su veinticinco año de cátedra*.
- GRAULLERA SANZ, V., "La enseñanza y práctica del derecho en la Valencia foral", *Claustros y estudiantes*, 2 vols., Valencia, 1989, I, págs. 279-293.
- GUILLOT ALIAGA, M^a D., *Régimen conómico-matrimonial en el Derecho foral valenciano* (tesis doctoral inédita), Universitat de València, 1997.
- HERNÁNDEZ MARCO, J. L. y ROMERO GONZÁLEZ, J., *Feudalidad, burguesía y campesinado en la huerta de Valencia*, Valencia, 1980.

- HURTADO, P., *Tribunales y abogados cacereños*, Cáceres, 1910.
- ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA, *Segundo Centenario de su Fundación 1776-1976*, Málaga, 1983.
- IRLES VICENTE, M^a C., *El régimen municipal valenciano en el siglo XVIII. Estudio institucional*, Alicante, 1995.
- , *Al servicio de los borbones. Los regidores valencianos en el siglo XVIII*, Valencia, 1996.
- KAGAN, R. L., *Universidad y sociedad en la España moderna*, Madrid, 1981.
- , *Pleitos y pleiteantes en Castilla. 1500-1700*, Valladolid, 1991.
- La Biblioteca del Colegio de Abogados de Valencia. Historia y selección de sus fondos*, Valencia, 1992.
- LASSO GAITE, J. F., *Crónica de la codificación española 5. Codificación penal*, 2 vols., Madrid, 1970.
- LLACH Y COSTA, E., *Reseña histórica del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla*, 2 vols., Sevilla, 1928.
- LLUCH, M^a A., "Grados de la Universidad de Valencia durante el siglo XVIII. Universidades españolas y americanas", Valencia, 1987, págs. 351-360.
- MARTÍNEZ GOMIS, M., "Gandía ante la reforma carolina: el proyecto de plan de estudios de 1767", *Claustros y estudiantes*, 2 vols., Valencia, 1989, II, págs. 45-68.
- , *La Universidad de Orihuela 1610-1807*, 2 vols., Alicante, 1987.
- , "Los orígenes de la Universidad de Orihuela", *Universidades valencianas*, Valencia, 1987, págs. 113-120.
- MARTÍNEZ PEÑALVER, D., *Historia del Colegio de Abogados de Murcia*, Murcia, 1969.
- MARTÍNEZ-BARBEITO Y MORÁS, C., *La fundación del Ilustre Colegio de Abogados de La Coruña*, La Coruña, 1974.
- MARZAL RODRÍGUEZ, P., "Una visión jurídica de los mayorazgos valencianos entre la época foral y la Nueva Planta", *Anuario de Historia del Derecho Español* 66 (1996) 229-236.
- , "Perfil de los catedráticos de Leyes y Cánones en Valencia (1707-1733)", *Anuario de Historia del Derecho español* 67 vol. I (1997) 551-571.

- , "Docencia y pugnas en Leyes y Cánones (Valencia 1707-1741)", *Colegios y universidades, del Antiguo Régimen al Liberalismo. IV Congreso internacional de Historia de las universidades hispánicas*, México, 1997.
- , *El derecho de sucesiones en la Valencia foral y su tránsito a la Nueva Planta*, Valencia, 1998.
- , "La organización claustral en la universidad de Valencia", *V Congreso internacional sobre las universidades hispánicas* (en prensa), Salamanca, 1998.
- MATEU Y LLOPIS, F., *Aportación a la Historia Monetaria del Reino de Valencia en el siglo XVIII*, Valencia, 1955.
- , "La Moneda del Reino de Valencia. III. De la Guerra de Sucesión a la de por la Independencia. (1700-1808)", *Temas valencianos* 31, 1977.
- , "La Moneda del Reino de Valencia. IV. Los reinados de Fernando VII e Isabel. (1808-1833-1868)", *Temas valencianos* 42, 1977.
- MOMBLANCH Y GONZÁLBIZ, F., *Cien abogados ilustres del Colegio de Valencia*, Valencia, 1961.
- MODESTO ALAPONT, J. R., *Las paradojas del arrendamiento rústico valenciano. Un análisis de la evolución del arriendo en l'Horta, 1780-1860* (tesis de licenciatura), Valencia, curso 96/97.
- MOLAS RIBALTA, P., "Las audiencias borbónicas de la Corona de Aragón. Aportación a su estudio", *Estudis* 5 (1976) 59-124.
- MORALES ARRIZABALAGA, J., "Procedimientos para el ejercicio gubernativo y contencioso de la jurisdicción de la Real Audiencia de Aragón en el siglo XVIII", *Anuario de Historia del Derecho Español* 60 (1990) 509-550.
- NÁCHER HERNÁNDEZ, P., *Historia y organización de la Abogacía en Valencia desde la Reconquista hasta nuestros días*, Valencia, 1952.
- , *El Doctor José Berní y Catalá, su vida y su obra*, Valencia, 1961.
- , *Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia*, Valencia, 1962.
- NADAL, F., *Burgueses, burócratas y territorio*, Madrid, 1987.
- NADAL, J., *La población española (siglos XVI a XX)*, Barcelona, 1984.
- NAVAS, J. M., *La abogacía en el Siglo de Oro*, edición especial IV centenario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Madrid, 1996.
- ORELLANA, M. A. DE, *Valencia antigua y moderna*, 3 vols., Valencia, 1923-24.

- OSSORIO Y GALLARDO, A., *El alma de la Toga*, Madrid, 1920
- PALAO GIL, F. J., *La Amortización Eclesiástica en la Ciudad de Valencia en el Siglo XVIII: El Juzgado de Amortización* (tesis doctoral inédita), 2 vols., Universitat de València, 1992.
- PALOP RAMOS, J. M., *Fluctuaciones de precios y abastecimientos en la Valencia del siglo XVIII*, Valencia, 1977.
- PELORSON, J. M., *Les letrados. Juristes castillans sous Philippe III. Recherches sur leur place dans la société, la culture et l'état*, Poitiers, 1980.
- PÉREZ APARICIO, C., "El clero valenciano a principios del siglo XVIII: la cuestión sucesoria", *Estudios de Historia de Valencia*, Valencia, 1978, págs. 247-278.
- , *Estudis sobre la població del País Valencià*, Valencia, 1988.
- PÉREZ BUSTAMANTE, R. e ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID, *El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 1596-1996* (IV Centenario), Madrid, 1996.
- PÉREZ DE LA CANAL, M. A., "La pragmática de Juan II, de 8 de febrero de 1427", *Anuario de Historia del Derecho Español* 26 (1956) 656-668.
- PÉREZ MARTÍN, A. y SCHOLZ, J. M., *Legislación y Jurisprudencia en la España del Antiguo Régimen*, Valencia, 1978.
- PÉREZ PUCHALT, P., *Geografía de la población valenciana*, Valencia, 1967.
- PESET REIG, M., "La enseñanza del Derecho y la legislación sobre universidades durante el reinado de Fernando VII (1808-33)", *Anuario de Historia del Derecho Español* 38 (1968) 229-375.
- , "La recepción de las órdenes del Marqués de Caballero de 1802 en la Universidad de Valencia. Exceso de abogados y reforma en los planes de estudio de leyes", *Saitabi* 19 (1969) 119-148.
- , "Universidades y enseñanza del Derecho durante las regencias de Isabel II (1833-1843)", *Anuario de Historia del Derecho Español* 39 (1969) 481-544.
- , *El reformismo de Carlos III y la Universidad de Salamanca. Plan general de estudios dirigido a la Universidad de Salamanca por el Real y Supremo Consejo de Castilla en 1771*, Salamanca, 1969.

- , "El plan Pidal de 1845 y la enseñanza en las facultades de Derecho", *Anuario de Historia del Derecho Español* 40 (1970) 613-651.
- , "La formación de los juristas y su acceso al foro en el tránsito de los siglos XVIII a XX ", *Revista General de Legislación y Jurisprudencia* 2 (1971) 297-337.
- , "La primera codificación liberal en España (1808-1823)", *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario* (1972) 125-157.
- , "Notas sobre la abolición de los fueros de Valencia", *Anuario de Historia del Derecho Español* 42 (1972) 658-715.
- , "Una propuesta de Código romano-hispano, inspirada en Ludovico Antonio Muratori", *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Santa Cruz Tejeiro*, 2 vols., Valencia, 1974, II, págs. 217-260.
- , "Apuntes sobre la Iglesia valenciana en los años de la Nueva Planta", *Anales Valentinus* 2 (1975) 245-258.
- , "Derecho romano y Derecho real en las universidades del siglo XVIII", *Anuario de Historia del Derecho Español* 45 (1975) 273-339.
- , "Apuntes sobre la abolición de los Fueros y la Nueva Planta valenciana", *Primer Congreso de Historia del País Valenciano*, 4 vols., 1976, III, págs. 525-536.
- , "La creación de la Chancillería de Valencia y su reducción a Audiencia en los años de la Nueva Planta", *Estudios de Historia de Valencia*, 1978, págs. 309-334.
- , "Estudiantes en la Universidad de Valencia en el siglo XVIII", *Actes du 1^{er} Colloque sur le Pays Valencien a l'Epoque Moderne*, 1980, págs. 187-207.
- , *Plan de estudios aprobado por S. M. y mandado observar en la Universidad de Valencia*, Valencia, 1984.
- , "Sobre los tribunales de justicia en Valencia durante los siglos XVIII y XIX", *Dels furs a l'estatut. Actes del 1er. Congr s d'Administraci  Valenciana. De la hist ria a la modernitat*, Valencia, 1991, págs. 635-666.
- PESET, M. y J. L., "Legislaci n contra liberales en los comienzos de la d cada absolutista (1823-1825)", *Anuario de Historia del Derecho Espa ol* 37 (1967) 437-485.

- , *El reformismo de Carlos III y la Universidad de Salamanca*, Salamanca, 1969.
- , "El plan de estudios de 22 de diciembre de 1786 y la enseñanza universitaria en Valencia", *Actas del III Congreso de historia de la medicina*, 3 vols., Valencia, 1969, II, págs. 295-315.
- , "La enseñanza de la medicina en España durante el siglo XIX", *Medicina Española* 60 (julio-agosto 1968) 27-35 y 98-105.
- , "Felipe V y la Universidad de Valencia. Las constituciones de 1733", *Anuario de Historia del Derecho Español* 43 (1973) 467-480
- PESET, M. y OTROS, *Bulas, constituciones y documentos de la universidad de Valencia (1707-1724). La nueva planta y la devolución del patronato*, Valencia, 1977.
- , *Bulas, constituciones y documentos de la Universidad de Valencia (1725-1733). Conflictos con los jesuitas y las nuevas constituciones*, Valencia, 1978.
- , "La Nueva Planta y las instituciones borbónicas", *Nuestra Historia*, 7 vols., Valencia, V (1980), págs. 126-148.
- , *Cinc segles de la Universitat de València*, Valencia, 1994.
- , *Historia de las universidades valencianas*, 2 vols., Alicante, 1994.
- , "El plan de estudios de 22 de diciembre de 1786 y la enseñanza universitaria en Valencia", *Actas III Congreso Historia de la Medicina*, 3 vols., Valencia, 1969, II, págs. 295-315.
- PESET, V., "Un ensayo sobre Mayans (1699-1781)", *Primer Congreso de Historia del País Valenciano*, Valencia, 1973, I, págs. 119-147.
- , *Gregori Mayans i la cultura de la Il.lustració*, Valencia, 1975.
- PRATS I CUEVAS, J., *La Universitat de Cervera i el reformisme borbònic*, Lleida, 1993.
- RIAZA MARTÍNEZ-OSORIO, R., *Historia de la literatura jurídica española (Notas de un curso)*, Madrid, 1930.
- RISCO, A., *La Real Academia de Santa Bárbara de Madrid (1730-1808). Naissance et formation d'une élite dans l'Espagne du XVIIIème siècle* (tesis doctoral inédita en castellano), 2 vols., Toulouse, 1979.

- , "Los trabajos y los días de un pasante letrado en Madrid, hacia 1756", *Revista crítica de Derecho Inmobiliario* 1983-II, 1517-1527.
- ROBERT, H., *El Abogado*, versión española de Jesús Ibrán Rodrigo, Madrid, 1926.
- RUMEU DE ARMAS, A., *Historia de la Previsión Social en España. Cofradías, gremios, hermandades, montepíos*, Barcelona, 1981.
- SALINAS QUIJADA, F., "La abogacía foral", *Navarra. Temas de cultura popular* 54 (1981).
- SÁNCHEZ GARCÍA, J. L., *El Colegio de Abogados de Palencia (1844-1994)*, Palencia, 1994.
- SANZ DÍAZ, F., *El alumnado de la Universidad de Valladolid en el siglo XIX*, Valladolid, 1978.
- SANTOS TORRES, J., *Apuntes para la Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla*, Sevilla, 1994.
- SIMÓ SANTONJA, V. L., *Valencia en la época de los corregidores*, Valencia, 1975.
- TOMÁS Y VALIENTE, F., *El Derecho penal de la monarquía absoluta (siglos XVI-XVII-XVIII)*, Madrid, 1996.
- TORREMOCHA HERNÁNDEZ, M., "La formación de los letrados en el Antiguo Régimen", *Iª Jornadas sobre formas de organização e exercicio dos poderes na Europa do Sul, séc. XIII-XVIII*, II, Lisboa, 1988, págs. 509-536.
- , "Las actividades benéfico-asistenciales del Colegio de Abogados de Valladolid en el Antiguo Régimen", *Investigaciones Históricas* 16 (1996) 61-75.
- UBIETO ARTETA, A., *Historia de la Universidad de Zaragoza*, Madrid, 1983.
- VALLS-TABERNER, F., "Los abogados en Cataluña durante la Edad Media", *Obras selectas*, 4 vols., Madrid-Barcelona, 1954-1961, II, págs. 281-318.
- VIEHWEG, T., *Tópica y Jurisprudencia*, Madrid, 1986.
- VILLACORTA BAÑOS, F., *Profesionales y burócratas. Estado y poder corporativo en la España del siglo XX. 1890-1923*, Madrid, 1989.

APÉNDICES

REAL PROVISIÓN DE CARLOS III DE 6 DE FEBRERO DE 1762 POR LA QUE SE APRUEBAN LOS ESTATUTOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA¹²⁶⁶

ESTATUTOS

Originales del Ilustre Colegio de Abogados de esta Ciudad.

Y certificación de la resolución del Consejo, por la que se dispensa de lo prevenido en el estatuto 19, a todos los graduados que estuviesen ejerciendo la abogacía en sus pasantías y tribunales no dependientes de la Real Audiencia, al tiempo de la erección del Ilustre Colegio.

Don Carlos, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sizilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córzega, de Murcia, de Jaén, Señor de Vizcaya y de Molina, &c: Por quanto por parte del Colegio de Abogados de la nuestra Audiencia de Valencia se acudió al nuestro Consexo, en quatro de septiembre del año pasado de mil setecientos cincuenta y nueve, con una petición diciendo que, deseando que brillase en sus individuos, que al presente son y en adelante fueren, el honor correspondiente a lo distinguido de su profesión, a solicitud y conforme el savio

¹²⁶⁶ A.I.C.A.V., caja 1, expediente 7. Para la transcripción he seguido las siguientes reglas: puntuación, acentuación y mayúsculas según las normas actuales, separación de las palabras que aparecen unidas y conversión de todas las "t" dobles en sencillas. El estatuto XXXVIII

colegio de esta corte, incorporándose por filiación, y que en su conformidad comunicándole las constituciones y demás reglas por las cuales había de gobernarse, elixiendo los mismos oficios y oficiales que se practicava en el de esta corte, con la aprobación de el nuestro Consexo, como más por menor resultava de la certificación dada por el secretario de el que presentaba. En esta atención, y a consecuencia de lo últimamente resuelto para con el de las ciudades de Granada, Valladolid y otras, nos suplicó que, en vista de sus loales deseos, fuésemos servido aprovar dicha incorporación por filiación, y a su consecuencia declarar que todos los decretos, autos acordados y providencias promulgadas, expedidas a favor de el colegio de esta corte, fuesen y se entendiesen comprehensivos al de Valencia, su decano e individuos, de el mismo modo que si para él se huviesen librado, obrando igual efecto en aquella nuestra audiencia y su jurisdicción, sin diferencia alguna. Y la certificación que presentó, dada por el colegio de abogados de esta corte es como se sigue: El licenciado don Thomás Sanz de Velasco, abogado de los reales consexos y secretario del ilustre colegio de los de esta corte, certifico que en el libro titulado de Acuerdos y Juntas que existe en mi poder, y tuvo principio en el año pasado de mil setecientos cincuenta y siete, siendo decano el señor don Joseph Cayetano de Lindoso, se halla al folio veinte y nueve buelta y treinta de él, un acuerdo firmado de los señores notados al margen [señores Mendibil, diputado 1º; Lindoso, diputado 2º; Zuñiga, maestro de zeremonias; Barrós, diputado 4º; Coronada, thesorero; secretario], y su thenor es como sigue: En la Villa de Madrid a treinta y un días de el mes de julio año de mil setecientos cincuenta y nueve, y junta que en él se tuvo en la posada del señor don Francisco Fernández de Mendivil, diputado primero, por ausencia de el señor don Miguel de la Higuera, actual decano, y a que asistieron los demás señores oficiales, a excepción de el señor don Ignacio de Santa Clara, diputado terzero, que se escusó por emfermo, volví a hazer presente la instancia que los señores abogados de la Real Audiencia de Valencia tenían promovida, de que en la misma conformidad que el nuestro collegio había dispensado la incorporación por filiación al colegio de señores

ordenaba la impresión de los estatutos y la entrega de un ejemplar a cada abogado congregante; véanse en B.U.V., *Varios* 298, núm. 12.

abogados de las reales chancillerías de Valladolid y Granada, se les hiciese el honor de incorporar el suyo en el nuestro, y mandar se les comunicase copia de sus constituciones con todos los decretos e instrucciones que se habían dado a los de Valladolid y Granada y demás que se contemplasen necesarias para que, arreglándose a ellas, formasen cuerpo y comunidad con los oficiales que hera estilo en nuestro ilustre colegio, quedando siempre por sí y sus venideros obligados al reconocimiento y obsequio de filiación del nuestro, imitando en el modo posible en quantos asuntos ocurriesen el acertado método con que había hecho brillar el honor de la carrera, y mantenido con la maior estimación el de sus profesores. Y al propio tiempo di cuenta que este asunto se había conferenciado en la junta antezedente de veinte de mayo próximo pasado. Y para resolver sobre ello se había dado comisión a los señores don Ignacio de Santa Clara, diputado tercero, y don Joseph Antonio Coronada, thesorero, para que lo consultasen con los señores ministros del Consejo que habían sido individuos de nuestro colegio. Y habiendo con este motivo expuesto el señor Coronada que había, con el señor Santa Clara, visitado y manifestado la pretensión de los abogados de la Real Audiencia de Valencia al señor don Isidro Gil de Jaz, de el Consexo de Castilla y Guerra; al señor don Pedro Díaz de Mendoza, del Consexo de Castilla y Hacienda; a los señores don Julián de Hermosilla y don Joseph Manuel Domínguez de Vicente, de el de Hacienda; al señor don Juan Antonio de Albala Iñigo, del Consexo de Castilla y fiscal de el de Hacienda; y al señor don Manuel Saturio Castejón, alcalde de casa y corte, todos individuos de nuestro colegio, y que unánimes y conformes habían respondido, con expresiones de la maior demostración, que su parecer hera se les diese la incorporación por filiación, vaxo del supuesto de governarse por los extablecimientos y reglas de nuestro colegio, se acordó, de conformidad, que en atención a estar nuestro colegio inmediatamente sugeto al Real y Supremo Consexo de Castilla, precediendo licencia y aprobación de los señores de él, se admita al colegio de abogados de la Real Audiencia de Valencia la incorporación por filiación que han solicitado por sus cartas, poderes y memoriales con nuestro colegio. Y para efecto de governarse en todo conforme a sus constituciones, se les comuniquen, remitiéndoles un tanto impreso de ellas y certificación del modo de recibir sus individuos, y juntamente con las demás reglas que se observan, para que a imitación de nuestro colegio

formen cuerpo de comunidad, eligiendo los mismos oficios y oficiales que se eligen en esta corte, y exhiendo Real aprobación para que se ponga la nota correspondiente el Secretario de las certificaciones y despachos necesarios, firmados y sellados en la forma regular: licenciado don Francisco Fernández de Menvil, licenciado don Joseph Cayetano de Lindoso, licenciado don Joaquín de Zúñiga, licenciado don Joseph Benito Barros y Puga, licenciado don Joseph Antonio Coronada, licenciado don Tomás Sanz de Velasco, secretario. Y para que conste de pedimento del apoderado del mencionado colegio de abogados de la Real Audiencia de Valencia doy la presente certificación, firmada y sellada con el sello de nuestro colegio. Madrid a veinte y siete de agosto año de mil setecientos cincuenta y nueve. Licenciado don Thomás Sanz de Velasco, secretario. Y visto por las de el nuestro Consexo, teniendo presente el informe executado en esta razón por la nuestra Audiencia de Valencia en cinco de octubre de el año pasado de mil setecientos sesenta y uno, y lo expuesto en su inteligencia por el nuestro fiscal por auto que preveieron en catorze de diciembre de el mismo, hemos tenido por bien de dar al referido colegio de abogados de la ciudad de Valencia la incorporación que ha solicitado por filiación del de esta corte, y declarar que todos los decretos, autos acordados y providencias promulgadas y expedidas a su favor, sean y se entiendan comprehensibas a el de Valencia, su decano e individuos de el mismo modo que si para él si huviesen librado, obrando igual efecto en la referida nuestra audiencia de Valencia y su jurisdicción, sin diferencia alguna governándose, como mandamos se gobiernen, por los estatutos de el de esta corte que hemos tenido por bien de correxir y limitar, arreglándolos como corresponde a las circunstancias y estado de dicha ciudad, la nuestra audiencia y sus abogados, que es en la forma siguiente:

- 1º. Primeramente, extatuimos y ordenamos, que para la salud espiritual de los presentes, y que haian de hir a incorporarse en la fraternal unión de la congregación y colegio de abogados de la ciudad de Valencia, tenga por su patrona y abogada de la soberana reyna de los cielos, María Santíssima Virgen y Madre de Dios de la Asumpción. Y que su festividad se zelebre el día quinze de agosto de cada año, haciendo commemoración del glorioso

San Ibo, que fue de la misma profesión, para tenerle también por su abogado, cuia fiesta, como la de el misterio de la Puríssima Conzepción, se tengan por botivas y se zelebren ambas en el citado día quinze de agosto, juntando los dos extremos de principio y fin en el sermón. Y que todos los abogados, antes de sentarse en los libros del Colegio por individuos de él, hagan juramento de defender que la Virgen María, nuestra señora y su patrona, fue preservada de la orixinal culpa.

2. Item, ordenamos que la festividad de Nuestra Señora de la Asunción se celebre en la capilla mayor de la casa profesa de la Compañía de Jesús de la ciudad de Valencia, y que se haga con la música y con toda la solemnidad posible, pero sin almazón de altar, ni proponer cosa alguna de la varandilla a fuera, escusando gastos supérfluos y reduciéndola a lo que practican los padres en la fiesta de su maior respecto y veneración.
3. Item, mandamos que a la referida fiesta asistan todos los abogados congregantes, assí a las primeras vísperas como a la missa maior el día siguiente. Y que predique el sermón el padre prefecto de la cassa professa, i en su defecto el que eligiere el decano de el Colegio con acuerdo de el dicho padre prefecto, uniendo a él los dos gloriosos misterios de Concepción y Asunción, como queda prevenido en el estatuto primero. Y respecto de no poder comulgar todos los abogados en la misa mayor, por no detener a la dicha nuestra audiencia, que en forma de tal como a protectora de el referido colegio ha de autorizar esta fiesta con su asistencia, establecemos que en el mismo día se diga una misa rezada en el altar mayor a la hora que pareciere, en la que comulguen todos.
4. Item, estituimos y ordenamos que en los días de Pasqua de Navidad se junten todos los congregantes, sin aparato, en la bóveda de la casa profesa, o en la iglesia donde estuviere sita la congregación el día de Nuestra Señora de la Concepción, por ser una de las fiestas votadas, donde se digan algunas misas y en la última comulguen. Y que después de ella les haga una pláctica espiritual el padre prefecto.

5. Item, ordenamos que el decano haga a su costa la fiesta principal de Nuestra Señora de la Asunción, y la de Nuestra Señora de la Concepción, interín que el Colegio tenga caudales suficientes para costear estos gastos. Y los decanos escusen superfluidades.
6. Item, mandamos que para que la Congregación y Colegio sea bien gobernado, haya en él un decano que sea la caveza a quien todos en el año de su oficio respeten y obedezcan, quatro diputados que asistan con él, un thesorero en cuio poder entre todo el dinero, así de lo que se mande por los abogados congregantes, como todo lo demás que en qualquiera manera le pertenezca, y un secretario que escriba todo lo que en juntas generales y particulares se acordare. Y que todos sean de los abogados congregantes, cuio secretario tenga voz y voto en las juntas, y que como a tal se dé entera fee y crédito a sus assientos y certificaciones, sellando las que diere en virtud de decreto de la Junta o a lo menos del decano, y no de otra suerte, para lo qual tenga el sello y libros corrientes en su poder.
7. Item, estatuimos que assí mismo se ha de nombrar un maestro de ceremonias. Y que siempre lo sea el que en el año antecedente hubiese sido diputado segundo, para que en las fiestas, juntas y demás concurrencias cuide de la observancia de precedencia de asientos entre los abogados congregantes, sin permitir que concurra a acto ninguno el que no lo sea actual, y entienda en todo lo ceremonial conforme a la instrucción siguiente:
 - 1.º El primer cuidado de el maestro de ceremonias ha de ser que en la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción se sienten los abogados por su orden, precediendo los oficiales actuales, como se previene en el estatuto diez y seis, después los decanos que hubieren sido por la antigüedad de sus oficios, luego los demás abogados congregantes por las suias, regulándolas por los asientos que tuvieren en los libros de entrada de la Congregación, para lo qual le dará el secretario nómina de todos los actuales por sus antigüedades, o por el medio que le pareciere la noticia puntual necesaria para esta materia.

2. Ha de atender a que en la referida fiesta no se siente ni tome gorra el que no fuere abogado actual en la ciudad de Valencia, aunque lo haya sido y tenga asiento en los libros, en lo qual procurará portarse con la prudencia que se requiere. Pero demuestre que de ningún modo se admita en esto novedad.
3. En la fiesta o congregación que se ha de hazer en la bóveda el día de Nuestra Señora de la Concepción, cuidará que se observe lo mismo, guardándose las antigüedades en los asientos, y también, en quanto fuere posible, que no se admitan en ella los abogados congregantes que no estuvieren en actual exercicio de la abogacía en dicha ciudad de Valencia, o que por lo menos no se mezclen en el cuerpo de la Congregación.
4. En las demás fiestas y congregaciones tendrá el mismo cuidado en orden a dichos asientos y observancia de todo lo demás referido. Y que en las comuniones se guarde tamvién el mismo orden, llegando a comulgar primero los antiguos.
5. Para comvidar a la Audiencia en la fiesta de Nuestra Señora de la Asumpción, dispondrá con el secretario que fuere las cédulas de los comvites y repartimentos de compañeros en esta forma: que el decano actual, junto con el padre prefecto, comviden al presidente, y a cada dos ministros, dos abogados, uno antiguo y otro moderno, de suerte que los más antiguos comviden a los ministros más antiguos, previniéndoles que vaian con gorra, y hechas las cédulas las repartirá el secretario.
6. Assí mismo tendrá cuidado que los abogados estén prontos el día de la fiesta de Nuestra Señora de la Assumpción y su víspera, para recibir y acompañar a los ministros de la Audiencia como fueren llegando desde la puerta hasta la sacristía, donde se juntarán y aguardarán. Y que quando vaya el presidente salga el decano a recibirle y acompañarle, desde la silla hasta el circo, y a la salida desde el circo hasta que tome la silla.
7. También ha de cuidar generalmente de la observancia de todos los estatutos y acuerdos, y de todo lo que fuesse ceremonial, como también de lo que en casos y ocurrencias paraticulares se le encargare por la Congregación.

8. Item, determinamos que para continuar el culto y alentar la devoción, haia siempre en dicha Congregación y Colegio un prefecto para que predique los sermones y pláticas, reparta los ramilletes a los ministros de la Audiencia y abogados congregantes, y asista a las juntas de elecciones, con quien comuniquen los oficiales para asegurar los aciertos, el qual sea uno de los padres más graves que residan en la casa profesa de la Compañía de Jesús de la referida ciudad de Valencia. Y que quando se ofrezca elección de prefecto se haga por todos los oficiales del Colegio, como las demás elecciones, y se remita para su aprobación al padre provincial de la Compañía de Jesús y a el superior que fuere de la Iglesia o convento donde si situare la Congregación.
9. Item, establecemos que para las elecciones de los referidos ocho oficios se junten los ocho oficiales, junto con el padre prefecto, el día de San Agustín de cada año, o en otro que el decano señale como sea antes de el de Nuestra Señora de septiembre, en la librería de la cassa professa de dicha ciudad de Valencia, o en otra pieza apropósito que por el padre rector se señale. Y proponiendo primero el decano tres sugetos para que de ellos se elija uno que le succeda, pasen a elegir ante todas cosas decano por votos para el año siguiente, empezando a votar el secretario, luego el thesorero, a quien se siga el diputado quarto, después el tercero, luego el maestro de ceremonias, los diputados segundo y primero, y el último el decano que sale, quien en caso de igualdad de votos haia de tener siempre, en todas las elecciones de oficios y casos que ocurran, voto de calidad, para que prevalezca y salga electo el suxeto por quien votare o la parte o quien se aplicare. Y que executada la elección de decano en la forma referida, se le dé la posesión y assiento de el que sale, continuando después en las demás elecciones. Y que lo votado por la maior parte lo firmen siempre los demás, aunque sus votos hayan sido contrarios.
10. Item, mandamos que después de executada la elección de decano, y de darle posesión en la forma referida en el estatuto antecedente, hayan de quedar y queden el decano que sale por diputado primero para el año

siguiente, el que acabade ser primero por segundo, el que deja de ser segundo por maestro de ceremonias, y el que sale de secretario por diputado quarto. De suerte que para estos quatro oficios no haia elección, sino obción, para que assí esté siempre el gobierno entre sugetos de authoridad y prácticos en las cosas del Colegio. Y que supuestas las quatro obciones se passe por dicho decano y oficiales a las elecciones de diputado tercero, thesorero y secretario, por votos, y en la misma forma que en la de decano, atendiendo siempre a la maior antigüedad y a que con ella concurren en los que se haian de elegir las demás circunstancias que aseguren el desempeño de sus oficios. Y expecialmente en el diputado tercero, que éste ha de haver tenido el de thesorero o secretario, mediante que para el año siguiente en que deja de ser diputado tercero puede nombrársele decano, como se acostumbra en esta corte. Cuias elecciones assí hechas se senterán por el secretario en los libros, participándolas por papel a los electos, y certificando de su aceptación para que todo conste y para que si por justo motivo alguno no aceptare se elija otro en su lugar.

11. Item, queremos que el decano en sus ausencias y enfermedades pueda nombrar quien le sobstituia y preceda en las juntas y fiestas y demás actos, con tal que elija uno de los que haian sido decanos, si lo huviere, y sino otro que haya tenido algún oficio. Y que en caso de muerte o promoción se elija otro por los oficiales para que continúe lo restante de el año. Y que lo mismo se obserbe quando faltare o fuere promovido otro qualquiera oficial, para que siempre esté completo el número, cuias elecciones se hagan tamvién por votos, como queda prevenido en los capítulos antecedentes, Y que por enfermedad o ausencia del secretario le sobstituirá el diputado quarto, y a falta de éste lo execute el que lo fue el año próximo antecedente. Y lo mismo se obserbe con el empleo de thesorero.
12. Item, ordenamos que ninguno de los mencionados oficiales pueda ser reelegido en alguno de dichos oficios, sino haviendo pasado seis años de hueco, o a lo menos dos en caso preciso.

13. Item, mandamos que sin embargo de los dos abogados de pobres que nombra el Real Acuerdo de la nuestra Audiencia de Valencia, y sin perjuicio del salario que les satisface anualmente, y demás regalías que les competan, se nombre por dicho Colegio, el día de las elecciones de decano y oficiales, dos abogados; el uno antiguo y el otro moderno, para que sin salario alguno defiendan los negocios y pleytos civiles y criminales de los pobres, constando primero serlo. Sin que ninguno se pueda excusar, sino por enfermedad, a defender el pleyto o pleytos que por el decano se les repartiere, alternando entre los dos todo su año. Y que en cada uno se nombren los que se vaian siguiendo, de suerte que todos los del Colegio participen deste cargo. Y si acabado el año quedaren pendientes algunos pleitos, sea de la obligación de los que empezaron a defenderlos en continuarlos hasta la última sentencia. Y que el decano ponga especial cuidado en que sean bien defendidos, y aun en dar acompañado si el negocio fuere tan grave que lo pida.
14. Item, establecemos que en las elecciones y juntas haya mucha quietud, silencio y modo. De suerte que si alguno antes de votar quisiere advertir alguna cosa, pida licencia al decano para hablar, y sin ella no hable, pues quando llegare a votar podrá decir todo lo que se le ofreciere. Ni tampoco se interrumpa al que estuviere votando, ni mientras tanto conversen unos con otros, sino que estén con toda atención para enterarse de las razones en que funda cada uno su voto y poder si le haze fuerza reformar el suyo, pues de esta suerte se consigue el acierto.
15. Item, estatuímos que en todas las congregaciones generales y particulares haia de preceder y tener mexor lugar el decano, después se sigan el diputado primero y segundo, luego el maestro de ceremonias, diputado tercero y quarto, thesorero y secretario. Después los que huviesen sido decanos, guardando sus antigüedades de tales, y luego prosigan sentándose los demás individuos del Collegio según las suias, regulándolas por la entrada de cada uno en él. Y que la misma orden se guarde en las fiestas sobre que zece el maestro de ceremonias, y con especial cuidado en la de Nuestra Señora de la Asunción, por que como en ella ha de concurrir

la Audiencia en forma de tal, formando un cuerpo en circo que empieze por el presidente de ella, a quien siguen por sus antigüedades los ministros y fiscales, luego los alcaldes del crimen con el suio, y después el decano, oficiales actuales, decanos que han sido y demás abogados del Colegio, se deve esmerar en que no haia reparo ni nota alguna.

16. Item, ordenamos que assí los oficiales, como todos los abogados del Colegio, tengan la devida ovediencia y devido respecto que corresponde al decano, como su caveza y superior, asistiendo a las juntas a que convocare y executando las órdenes que les diere. Y que todos sean mui modestos, como su trage y profesión lo requiere, evitando entre si qualesquiera discordias y juramentos, y dando buen exemplo a los demás compañeros congregantes y a todos los de fuera.

17. Item, siendo uno de los primeros cuidados de dicho Colegio atender a que los que se haian de recibir en él tengan las calidades que refieren las leies reales y corresponden a comunidad tan decorosa, y que no se reciva sugeto en quien no concurren todas las prerrogativas necesarias para su maior lustre y puro exercicio de la abogacía; estatuimos y mandamos que, para ser recibidos qualesquiera abogados en el dicho Colegio, haian de ser de buena vida y costumbres, hixos lexítimos o naturales, de padres conocidos y no vastardos, ni expúreos. Que assí los pretendientes como sus padres y abuelos paternos y maternos sean y haian sido christianos viejos limpios de toda mala infección y raza, sin nota alguna de moros, judíos ni recien convertidos a nuestra santa feé cathólica. Y que a lo menos los pretendientes y sus padres no tengan ni haian tenido oficios o ministerio vil ni mecánico público, lo qual se observe indispensablemente, entendiéndose esto con equidad y prudencia y sin calumniosa cavilación y dolosa emulación, y con calidad de que no por ello se admitan sin las regulares circunstancias que deven tener, y que siendo tales que se dude de su admisión por el Colegio, lo deva consultar con la referida nuestra Audiencia para que resuelva lo que estime.

18. Item, ordenamos que todas las calidades referidas en el estatuto antecedente las ha de justificar el pretendiente con seis testigos maiores de toda excepción, para que entre ellos haia algunos de conocimiento tamvién de los abuelos paternos y maternos, con las feés de baptismo del pretendiente y sus padres que son tres, todas legalizadas de tres escrivanos o notarios o, a lo menos, de dos sino huviere copia; cuias pruebas hagan dos informantes individuos de el referido Colegio en dicha ciudad de Valencia y sin costa alguna del pretendiente. Los que nombre el decano, ante quién harán primero juramento de las que ejecutarán vien y fielmente, sin atender a humanos respectos, poniendo por diligencia al principio de ellas que assí lo hicieron y juraron, y que después de haver juramentado los examinen al thenor de el interrogatorio siguiente:

Por las preguntas siguientes se examinarán los testigos que se presentaren por parte del licenciado don N^o, abogado de los reales consejos, que pretende entrar en nuestro colegio de abogados de esta ciudad, y que se le sienta en los libros para la información que se debe hazer de la filiación, limpieza y oficios, en execución y observancia de los estatutos de dicho Colegio.

- 1.^o Primeramente se les preguntará por el conocimiento del dicho don N., y si le tienen de sus padres y abuelos paternos y maternos, y de su naturaleza y vecindad, domicilio de unos y otros, dando razón individual.
2. Si saven que el dicho don N. es hixo lexítimo de don J. y de doña N., su muger, naturales de N., nieto legítimo de don N. y de doña N., su muger, naturales de N., Y los mismos que el pretendiente expresa en su genealogía digan lo que supieren y por qué lo saben.
3. Si saven que assí el dicho don N., pretendiente, como los dichos sus padres y abuelos paternos y maternos han sido christianos viexos, limpios de toda mala raza de moros, judíos, penitenciados por el Santo Oficio de la Inquisición, ni de los nuevamente convertidos a nuestra santa feé, y que no descíendan de ninguno que tenga ni haya tenido semejante nota ni han sido castigados por otro tribunal alguno con pena que irroque infamia, y que siempre todos estubieron, están y han estado en reputación de christianos viejos en las partes y lugares de sus naturalezas, residencias, vecindad y domicilio, y en todas sus comarcas,

sin que jamás en una ni otra parte se haya ohído ni entendido cosa en contrario. Y que assí es público y notorio, pública voz y fama, expresando la razón que tubieren para saberlo y que a no ser assí no dejaran de tener noticia fixa.

4. Si saven que el dicho don N., pretendiente, ni el dicho don N., su padre, ni la dicha doña N., su madre, hayan tenido ni exercido en tiempo alguno, ni actualmente exercen, oficio, ni ministerio, ni empleo vil ni mecánico y menos decente, y que se oponga o pueda oponer a el lustre de tan decorosa profesión como la de la abogacía. Y en caso de que sepan o tengan noticia de haver tenido o exercido alguno de los oficios menos decentes, expresen el que huviere sido, dando razón de todo.
19. Item, queremos que queden eximidos de esta prueba todos los abogados recibidos hasta el presente, y los que se recibieren y huvieren comenzado a exercer abogacía en la Audiencia o alguno de los tribunales de la expresada ciudad de Valencia hasta el día de la fecha de esta nuestra carta, a cuyo fin mandamos que luego se zelebre junta, con convocación previa, para manifestarse en ella los que huvieren principiado a exercer la abogacía y de los que en lo succesivo pretendieren ser admitidos.
20. Item, determinamos que el abogado que pretenda entrar en dicho Colegio ha de dar para ello memorial al secretario, con la certificación de hallarse recibido por el nuestro Consexo o la referida nuestra Audiencia, para que lo anote y certifique al margen de él, y se le buelva memoria de su naturaleza y la de sus padres y abuelos, con expresión individual de sus nombres y apellidos, y con ella las tres feés de baptismo, las que reconocerá con todo duidado el secretario si vienen en forma. Y reconocidas dará cuenta al decano para que, precediendo informe secreto de la calidad del pretendiente, le nombre informantes que han de ser del Collegio, uno antiguo y otro moderno, rubricando el nombramiento el decano y secretario, quienes si antes supieren que el pretendiente tiene alguna nota o defecto que le obste para ser rezivido, le procurarán disuadir de la pretensión.

21. Item, ordenamos que después de nombrados informantes haga el secretario interrogatorio arreglado al que queda referido, y al thenor de la genealogía presentada por el pretendiente, el qual rubricado junto con el memorial, nombramiento de informantes, feés de baptismo y genealogía todo cerrado, lo remitirá al más antiguo con papel para que executen las pruebas, se informen secretamente de las calidades de el pretendiente, si son o no tales como requieren los estatutos y previene el interrogatorio. Y que al pie de ellas pongan su informe, las quales con todos los instrumentos presentados enviarán cerradas al secretario, para que en la primera junta dé cuenta de ellas, y antes aviso al pretendiente para que visite al decano y oficiales por precisa ceremonia, y para que le conozcan.
22. Item, mandamos que reconocidas y examinadas las pruebas de los que pretendan entrar en el Colegio por el decano y oficiales de él en junta particular, de las que dará quenta y hará relación el secretario, si hallaren que corresponde a lo prevenido por los estatutos, las aprobarán, y en caso de tener algún reparo substancial las suspenderán y procurarán disuadir, por los medios más prudenciales, a el pretendiente para que desista de la pretensión y se separe de abogar en la referida Audiencia y tribunales de aquella ciudad, dándole a entender se procurará executar lo mismo que se le persuade. Y en caso de que no lo practique assí, queriendo mantenerse abogando, se dará cuenta a la Audiencia para que dé la providencia conbeniente.
23. Item, ordenamos que aprovadas que sean qualesquiera pruebas en la forma expresada en el estatuto antezedente, ponga el secretario en ellas la aprovación, y avise al pretendiente que entregue al thesorero quatro pesos por la propina de entrada aplicada para los gastos que se ofrezcan. Y llevando papel del thesorero de haverlo recibido para hazerle de ello cargo, y haciendo juramente ante el decano o, de su orden, ante el secretario de defender que Nuestra Señora la Virgen María fue preservada y exempta de la orixinal culpa, lo sentará el secretario en el libro de entradas para que se le tenga por congregante e individuo, y regule su antigüedad por el día de

este assiento. Y en el de acuerdos pondrá el en que se vieron y aprobaron sus pruebas.

24. Item, mandamos no se admita en la dicha Congregación y Colegio sugeto alguno que no sea abogado, salvo si fuere de letras que esté en servicio de N. R. P. u otro preheminente, que entonzes se le admita con rehelevancia de todas cargas y oficios.

25. Item, estatuímos y mandamos que los abogados recibidos en dicho Colegio que se encontraren en pleytos con otros que no estén incorporados en él, pidan por un otro sí de el alegato que hagan: que no se admita otro pedimento de aquel abogado, ni permita continuar en su defensa por no estar rezivido en el Colegio, y que de otra suerte no los despache, lo qual se execute sin disculpa ni respecto alguno por todos los abogados del referido Colegio, para cuio puntual cumplimiento tenga cada uno nómina de los rezividos en él que se le dará por el secretario. Y que si algún abogado congregante no cumpliere con este estatuto sea apercevido y multado por el decano, dando las demás providencias convenientes en caso de reincidencia.

26. Item, por quanto los colegios de abogados de las ciudades de Sevilla, Valladolid y Granada se hallan en virtud de filiación, que se les ha conzedido como al de Valencia, incorporados con el de esta nuestra corte, y governándose por sus mismos acuerdos y estatutos, mandamos que si algunos individuos de ellos pretendieren extablecerse en Valencia, hayan de llevar certificación dada en consecuencia de decreto de su decano y sellada en forma por el secretario, en que conste que dichos tres colegios se gobiernan por los estatutos de el de esta corte, principalmente en quanto a las calidades que han detener los que se haian de recibir, y que en esta conformidad se les hicieron sus pruebas y fueron rezividos. Y dando cuenta de ella en junta de decano y oficiales se les mandará sentar en los libros sin hacer nuevas pruebas, regulándoles la antigüedad desde el día del assiento en ellos. Y de otra suerte no sean rezividos ni sentados. Pero si algunos abogados de dichas chancillerías y audiencias o de qualquiera de estos

reynos fueren a Valencia a defender algún pleyto, y pidieren lizencia al decano para poderlo hazer, se la conceda.

27. Item, ordenamos y mandamos que quando muriere algún abogado u otro individuo de el Colegio en Valencia, sea de la obligación del secretario avisar a todos los individuos de él para que asistan a su entierro, sin faltar alguno sino por enfermedad u otra lexítima causa. Y que acompañen el cuerpo yendo detrás de él sin cera, desde que sale de su cassa hasta la iglesia si fuere en público. Y si se enterrase en día de audiencia se dispondrá que salga a hora correspondiente, tomando el cuerpo desde la cassa a la puerta de la calle los abogados que el decano nombrase, donde le entregarán a los que por la calle le huvieren de llevar, y en la iglesia desde la puerta hasta la tumba, y desde ésta hasta la bóveda o sepultura donde se haia de enterrar. Y si huviese sido decano que tomen el cuerpo los que tamvién lo huviesen sido, y no bastando entren los más antiguos del Colegio.

28. Item, estatuimos que si algunos de los abogados que murieren fueren tan pobres que no dexasen vienes para costear sus entierros ni parientes que lo puedan hazer, informado el decano o algún diputado que nombre de ser esta urgente nezesidad, la procure por el medio más pronto y posible socorrer, librando lo que le pareciere preciso para que se le haga un entierro decente, con intervención de los dos primeros diputados.

29. Item, establecemos que todos y cada uno de los individuos del Colegio tengan obligación de dar al secretario la limosna de una misa por el ánima de cada congregante que muriere y, que sin dilación alguna, las mande decir y las anote en los libros, como tamvién el día que huviere muerto y empleos que haya tenido. Y que todo lo dispuesto en este estatuto y el veinte y siete referido se entienda y observe tamvién con los que huvieren sido promovidos a plazas o dignidades.

30. Item, ordenamos que, en lugar de un aniversario general, mande el decano decir cien misas rezadas, dando la limosna de ellas de su propio

dinero, sacando recibo y anotándolo en los libros el secretario. Y que esto se cumpla assí mientras no tenga el Colegio caudales o rentas suficientes, por que en haviéndolas se ha de hazer de ellas el aniversario general.

31. Item, mandamos que si algún abogado de el dicho Colegio y Congregación enfermase, o por algún caso fuere preso, se dé luego noticia al decano para que disponga sea visitado, favorecido y patrocinado en su negocio. Y que si la enfermedad o trabajo lo pusiere en necesidad de ser socorrido, el decano se informe, y constándole ser urgente, le haga el socorro que sea posible del caudal que huviere en poder del thesorero, dando para ello libramiento que le sirba de justificación para su cuenta, intervenido de los diputados primeros. Y que en caso de no haver caudal prompto para éste y otros socorros precisos y demás gastos extraordinarios que se ofrezcan, dé la providencia conveniente el decano.

32. Item, ordenamos que las viudas y huérfanos de los abogados congregantes, aunque queden con algunas conveniencias, sean visitadas de parte de el Colegio. Y que si se les ofrezcan pleytos y trabajos, como de ordinario llueven sobre las viudas y huérfanos que Dios y el derecho encomienda tan particularmente, se les ofrezca el patrocinio del abogado o abogados que huvieren menester, señalándolos el decano, como no sean de los dos nombrados en aquel año para los pobres y de los otros dos asalariados para el mismo efecto. Y que si la tal viuda o huérfanos lo quedaren tanto que necesiten de preziso socorro, informado el decano no sólo disponga que se les dé el patrocinio referido, sino tamvién el socorro posible.

33. Item, estatuímos que el secretario no sólo tenga las obligaciones de avisar para los entierros, como queda prevenido en el estatuto veinte y siete, sino tamvién para las juntas y demás funciones que se ofrezcan, con lo que se escusan dos ministros que se devían nombrar y el salario que se les había de asignar hasta tanto que el Colegio tenga rentas suficientes.

34. Item, deliveramos que el decano y diputados nuevamente electos tomen cuentas solamente al thesorero que lo huviere sido en el año antezedente, pues el decano y diputados no manexan caudales algunos. Y que se las tomen de todos los que constare haver entrado en su poder, admitiéndole en data las partidas que huviere pagado en virtud de libranzas del decano intervenidas por el diputado primero y segundo, que serán los recados lexítimos de justificación.
35. Item, determinamos que los decanos no distribuian en limosnas todo lo que en el año de cada uno se recoge de las entradas de abogados y demás efectos, sino que se vaya juntando y reteniendo hasta que haya algún caudal para socorrer algunas necesidades urgentes de las que quedan expresadas en los estatutos treinta y uno y treinta y dos, y poder costear los precisos gastos extraordinarios que al Colegio se ofrezcan. Y aun en qualesquiera de estos casos intervengan siempre con el decano los dos diputados primeros, sin que por sí solo pueda distribuir ni librar maravedís algunos, ni se le pasen al thesorero en su cuenta, no yendo los libramientos intervenidos de dichos dos diputados.
36. Item, estatuimos que haya una arca de tres llaves que sirva de archivo para los libros, pruebas y papeles pertenecientes al Colegio, la qual esté siempre en poder del decano más antiguo quien tenga una llave, otra el actual y otra el secretario, concurriendo todos tres para abrirla quando se ofrezca. Y que en poder del secretario no estén más libros que los corrientes de entradas, acuerdos y fiestas para hir sentando las partidas en ellos. Y que cumplido su año los entregue al que succeda en el oficio, poniendo rezivo en uno de ellos firmado de los dos, de los que se entreguen y de qualesquiera papeles con toda individualidad para que conste los que cada uno rezive y ninguno se extravíe, en que se tendrá especial cuidado como en que las pruebas se pongan luego en el archivo.
37. Item, estatuimos y ordenamos que si por la variedad de los tiempos pareciere añadir o quitar algo de estos estatutos para el mexor gobierno de

la Congregación o Colegio, lo pueda hacer por todos los individuos de ella, y que se impriman éstos.

38. Y últimamente deliveramos y determinamos que se impriman estos estatutos y dé un volumen a cada abogado congregante, para que tenga individual noticia de ellos y los execute puntualmte.

Y para que se cumpla, se acordó expedir esta nuestra carta por la qual, y teniendo por bien de dar, como damos, al referido colegio de abogados de la ciudad de Valencia la incorporación que ha solicitado por filiación de el de esta corte, y declarar que todos los decretos, autos acordados y providencias promulgadas y expedidas a su favor sean y se entiendan comprehensivas a el de Valencia, su decano e individuos, del mismo modo que si para él se huvieren librado, obrando igual efecto en la referida *nuestra* Audiencia y su jurisdiccíózn sin *diferencia* alguna, mandamos que todos sus individuos se gobiernen por los estatutos que van insertos, y *que* estos se obserben y guarden en la conformidad que en ellos se contiene. Y en su *consequencia* ordenamos al *nuestro* *governador* capitán *general*, presidente de la dicha *nuestra* Audiencia, regente y ohidores de ella, y demás *nuestros* juezes, *xusticias*, ministros, y personas a quien en *qualquiera* manera tocara la observancia y cumplimiento de lo contenido en esta *nuestra* carta, que siéndoles presentada, o con ella requeridos, la vean, guarden, cumplan y executen y hagan guardar, cumplir y executar en todo y por todo como en ella se contiene, sin contravenirla ni permitirse contravenga en manera *alguna*. Que assí es *nuestra* voluntad. Dada en Madrid a seis de febrero demil setecientos sesenta y dos.

[Firmas de:]

Diego Obispo de Cartagena; D. Thomás Pinto Miguel; D. Francisco de la Mata Linares; D. Pedro Martínez Feijoó; D. Pedro de Cantos.

Yo, D. Juan de Peñuelas, *secretario* de camara del Rey *nuestro Señor* la hize escribir por su *mandato*, con acuerdo de los de su Consejo.

Rexistrada

Thenientete de chanziller mayor

Nicolás Berdugo

Lugar del sello

Nicolás Berdugo

derechos treinta y zinco reales de
plata nueva.

[Al margen izquierdo del párrafo siguiente:]

Derechos sesenta y seis reales de plata nueva.

Secretario.

S. Peñuelas

V. A. tiene por bien de dar al colegio de abogados de la ciudad de Valencia la incorporación que ha solicitado por filiación de el de esta corte, y manda que se govieme por los estatutos que aquí ban insertos.

Govno. 1ª

Correxda.

Don Pedro Luis Sánchez, del Consejo de su Magestad, su secretario, y del Real Acuerdo de la Audiencia de esta ciudad y Reyno de Valencia, y regidor perpétuo de esta misma ciudad, certifico: que haviéndose presentado y visto en el Real Acuerdo celebrado oy día de la fecha la real provisión de Su Magestad y señores de su Real Consejo de Castilla que antecede: se acordó su obedecimiento y cumplimiento, y mandó que dexando copia se buelva original. Como es de ver por el libro de dicho Real Acuerdo, que está en su archivo de mi cargo a que me remito. Y para que conste doy la presente que firmo en Valencia a los quinze días del mes de febrero de mil setecientos sesenta y dos años.

Don Pedor Luis Sánchez.

Imprímase caro.

**REAL PROVISIÓN DE CARLOS III DE 20 DE MARZO DE 1778 POR LA QUE
SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL MONTEPÍO DEL COLEGIO DE
ABOGADOS DE VALENCIA¹²⁶⁷**

**REGLAMENTO
PARA EL GOBIERNO
DEL MONTEPIO DE VIUDAS
Y PUPILLOS
DE LOS ABOGADOS
DEL ILUSTRE COLEGIO
DE LA CIUDAD DE VALENCIA,
Y PARA SOCORRER A LOS INDIVIDUOS QUE PADEZCAN**

alguna enfermedad temporal, o habitual, que absolutamente les imposibilite la aplicación a la tarea literaria de la facultad, y no tengan otro modo de mantenerse con decencia; como también para costear los gastos de entierro de abogados pobres.

**APROBADO
POR LOS SEÑORES
DEL REAL Y SUPREMO
CONSEJO DE CASTILLA.**

En 20 de Marzo de 1778.

DON CARLOS, POR LA GRACIA DE DIOS Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén; Señor de Vizcaya, y de Molina etc. Por quanto por el colegio de abogados de la ciudad de Valencia se representó al nuestro Consejo que, estimulado de su propio honor, y a egemplo del Monte-Pío establecido para el colegio de abogados de esta corte, habían obligado a los individuos de su junta particular, después de tratado el asunto entre los que habían sido decanos y la mayor parte de sus individuos, a la ejecución de un Monte-Pío, a cuyo efecto presentó el reglamento firmado de la mayor parte de

¹²⁶⁷ A.I.C.A.V., caja 387, legajo sin número.

sus individuos, exponiendo que en sólo dos cosas variaba del de el colegio de esta corte. La primera, en el tanto de la contribución de los individuos que entren en el Monte-Pío, pues la absoluta falta de fondos en el colegio de Valencia exigía de necesidad el apronto de seiscientos reales vellón, por lo que hace a los actuales individuos del Colegio, para que de esta manera pudiera subsistir un pensamiento tan útil y beneficioso. La segunda, en que en el capítulo tercero sesión primera del reglamento del Monte-Pío de abogados de esta corte se consignan tres mil doscientos ochenta y siete reales vellón a los abogados que padezcan accidente continuo o enfermedad habitual, que absolutamente les impida la aplicación a la tarea literaria de la abogacía, quando no tengan otro modo ni medio alguno que les sufrague para la decente manutención suya y de su familia. Y en el que presentaba se señalaba este tanto anual prescindiendo de que el individuo del Colegio tenga de donde mantenerse. Lo que ha pareciendo variar al Colegio, así por evitar dudas, que precisamente havían de organizarse para averiguar si los caudales del individuo imposibilitado sufragaban para su decente manutención y la de su familia, como por la razón de que parece que no deben ser de peor condición los abogados inhabilitados que su viuda e hijos, quando a éstos se les concidera la pensión anual, aun en el caso de ser ricos. Que por estas consideraciones esperaba el colegio de abogados de Valencia que la autoridad y protección del nuestro Consejo aprobaría dicho reglamento, por cuyo medio se mantendría el referido Colegio en el honor y lustre que corresponde a la nobleza de su profesión, se socorrerían las necesidades de las viudas y huérfanos, y las de los mismos abogados imposibilitados por su edad, o accidentes, y se cortarían las menos propias operaciones en que la estrechez y miseria ponen a algunos individuos, etc. Y visto por los del nuestro Consejo, con lo expuesto por el nuestro fiscal, teniendo presente el reglamento formado para el colegio de abogados de esta corte, hemos tenido por combeniente arreglar los estatutos para el del citado colegio de abogados de Valencia en la forma siguiente:

CAPÍTULO PRIMERO.

Fondos y caudales del Monte-Pío.

§. I.

La falta absoluta de fondos en el Colegio pide de necesidad, que se suplan por los individuos de él que se hayan de incorporar en el Monte-Pío en el modo más equitativo. Para este fin deberán aprontar cada uno de los que sean admitidos la cantidad de seiscientos reales vellón por una vez, para fondo del Monte-Pío. Cuya cantidad se ha de pagar en los tres primeros años, a doscientos en cada uno, previniéndose que si algún individuo muriese antes de cumplirse los tres años, no por eso se le prive de la participacion del Monte-Pío. Y se cobrará lo que falte reteniéndoselo de la pensión con que se les deba contribuir.

§. II.

Será también de obligación de los admitidos e incorporados en el Monte-Pío, contribuir cada uno doscientos y quarenta reales vellón por año, que deberá aprontar, los ochenta de contado, otros tantos al cumplir los quatro meses inmediatos siguientes, y los restantes de allí a otro tanto tiempo. Con apercivimiento que si, requerido primera vez por el secretario del Monte-Pío, quien lo certificará después de pasados ocho días, y segunda de allí a otros ocho, no aprontase la respectiva cantidad de cada plazo, no tendrá derecho al Monte-Pío ni su viuda e hijos, y se le escluirá de la lista. Cuya exclusión de ésta no se entenderá con el individuo que por su absoluta pobreza se hallare notoriamente imposibilitado de aprontar dichas cantidades. Pero tampoco tendrán derecho al Monte-Pío su viuda e hijos.

§. III.

Por quanto puede suceder que algunos individuos, de los que en el día son del Colegio, degen de entrar aora en el Monte-Pío, y quieran incluirse en él después de algún tiempo, serán admitidos entonces pagando novecientos reales vellón por una vez, y los doscientos y quarenta reales anuales que van expresados. Con inteligencia de que estos doscientos y quarenta reales les han de pagar no sólo desde el día de su admisión al Monte-Pío, sino desde el tiempo en que éste quede formado.

§. IV.

Como esta obra tan piadosa tenga por obgeto socorrer las necesidades de los abogados, sus viudas e hijos, y el lustre y honor del Colegio, y considerando por otra parte que las diligencias y pruebas para su ingreso ningún gasto causan al que le logra, quando en las que se hacen aún con menos circunstancias para el de otros cuerpos se ocasionan los de crecidas sumas de maravedís, es equitativo y justo que todos y cada uno de los que después de publicado este reglamento pretendan ser admitidos en el Colegio, precedidas las diligencias y pruebas de estatuto y verificada su admisión, se hayan de incorporar en el Monte-Pío, y aprontar, en lugar de lo que antes aprontaban, novecientos reales vellón por una vez para fondo del Monte-Pío. Y esta cantidad se ha de pagar en los tres primeros años a trescientos en cada uno, satisfaciendo además de lo referido los doscientos y quarenta reales anuales, todo en el modo expresado en los párrafos primero y segundo.

§. V.

Si sucediese que con las cantidades que pagan por sus entradas y contribuciones anuales los individuos del Monte-Pío, no huviere fondo que sufrague al apronto del tercio inmediato de pensiones, para el qual y demás urgencias que puedan ocurrir se considera deber existir siempre en arcas veinte mil reales vellón; en qualquier caso que se verifique este defecto se

aumentará a cada uno de los individuos la cantidad que se considere necesaria y se acordare en Junta del Monte-Pío, haciéndolo presente al Consejo.

§. VI.

Todos los comprendidos en los referidos aprontos para dicho fondo deberán egecutarlos en poder del tesorero o persona que destine la Junta para la cobranza, recogiendo recibo del mismo y pasándolo al contador para que éste lo anote en su libro, y por él se pueda ver el estado de los pagos, como también hacer cargo al tesorero.

CAPÍTULO SEGUNDO.

Pensiones del Monte-Pío, y los casos y circunstancias en que tienen lugar.

§. I.

Considera el Colegio, por aora, y hasta que el tiempo ofrezca mayores proporciones y otros arbitrios, que, según las viudas o pupilos que por una prudente congetura habrá que alimentar, necesitarán para no perecer ni vivir con lastimosa indecencia el goze indistinto por cada pensión de viudedad de nueve reales diarios, que cada una hace al año la cantidad de tres mil doscientos ochenta y siete reales y siete maravedís, pagadera por tercios.

§. II.

Tendrán obción, respectivamente a dichas pensiones, las viudas y pupilos cuyos maridos y padres fallecieren desde el día que se publique este reglamento en adelante, después de haber aprontado la cantidad que en él se

señala. Pero no la tendrán las viudas e hijos de aquellos que hubieren fallecido antes de la publicación de este reglamento, o de haber aprontado la cantidad que en él se prefine.

§. III.

Si la viuda quedare sin hijos, gozará ella sola la pensión mientras no tome nuevo estado. Y lo mismo será aunque los tenga de otro matrimonio anterior a el del abogado del Colegio.

§. IV.

Quando quedare la viuda con hijos havidos del abogado del Colegio, o con otros que éste hubiere tenido en matrimonio anterior, percibirá ella sola la pensión, pero estará obligada a educar y sustentar a todos hasta que los varones cumplan la edad de veinte años o antes de ella profesen en religión, y las hembras hasta que tomen estado o mueran.

§. V.

Siempre que la viuda con hijos habidos en el matrimonio del abogado del Colegio, o con los que éste huviese tenido en otro anterior, muera o tome estado, recaerá la pensión por entero, a partes iguales, en los dichos hijos que no hayan cumplido los veinte años o profesado antes en alguna religión, y en las hijas que no hayan tomado estado. Y del mismo modo les corresponderá toda la pensión desde el principio si su padre muriese sin dejar viuda.

§. VI.

Según vayan falleciendo los hijos, o profesando en alguna religión, o llegando a la edad de veinte años los varones, o tomando estado o falleciendo las hembras, irá cayendo en los demás hijos o hijas la parte de pensión que correspondía a aquéllos y aquéllas, aunque se reduzca a uno sólo el

sobreviviente o calificado para la percepción, en cuyo caso la gozará por entero hasta que cumpla la edad de veinte años o antes profese en alguna religión si fuese hijo, o hasta que tome estado o fallezca si fuese hija.

§. VII.

Los abogados del Colegio que en adelante hayan de contraer matrimonio, para tener derecho al Monte-Pío pedirán licencia al decano, explicando las circunstancias de la familia de la novia y las de ésta. Y si las estimase correspondientes concederá dicha licencia y se presentará en la Junta para que se tome razón por la contaduría del Monte-Pío, con apercibimiento de que los que se casaren sin estos requisitos no tendrán derecho a los beneficios de él.

§. VIII.

No gozarán de pensión alguna las viudas, hijos, e hijas de los abogados que declaren los matrimonios al tiempo de su muerte, aunque hayan contribuido para el fondo del Monte-Pío con quanto queda expresado.

§. IX.

Quando la pensión pertenezca a los huérfanos desde el principio, o después haya recaído en ellos, corresponderá su cobranza y consumo a la persona que para ello hubiese nombrado en su última disposición el padre de dichos huérfanos. Y no habiéndolo hecho, o por qualquier otro defecto, corresponderá al tutor o curador que nombrare la justicia, sino es que la Junta del Monte-Pío disponga otra cosa, como podrá hacerlo quando lo tenga por conveniente y útil a los huérfanos.

§. X.

Las viudas, hijos e hijas de los que hayan sido abogados del Colegio y después ascendido al ministerio u otro empleo honorífico por qualquiera carrera, como también los hijos e hijas de aquellos abogados del Colegio que después de haverlos tenido en legítimo consorcio fuesen promovidos al estado eclesiástico, gozarán asimismo de la pensión del Monte-Pío en el caso de que sus maridos o padres, respectivamente, huvieren contribuido para él hasta su muerte, con iguales porciones de repartimientos que todos los demás abogados del Colegio, sin embargo de dichos ascensos y promociones.

CAPÍTULO TERCERO.

Socorro de los abogados enfermos del Monte-Pío del Colegio.

§. I.

Si alguno padeciese accidente continuo o enfermedad habitual, que absolutamente le impidiese la aplicación a la tarea literaria de la abogacía, y por otra parte no tubiese modo ni medio alguno que le sufrague para la decente manutención suya y de su familia, se le socorrerá, mientras se verifique esta necesidad, con la anual pensión de tres mil doscientos ochenta y siete reales vellón, que corresponden a nueve reales diarios, pagaderos indistintamente por tercios anticipados.

§. II.

Quando algún individuo del Monte-Pío fuese insultado de qualquier accidente repetino o padeciere enfermedad temporal, sin hallar con que subvenir a los gastos que ocurren, constándole al decano la urgencia e informándose de las circunstancias de la enfermedad, podrá mandar librar de pronto hasta la cantidad de seiscientos reales para atender a la tal urgencia, cuidando de convocar, si la estima digna de mayor socorro, para Junta de este Monte-Pío el

día que se proporcionare más cercano, a fin de tomar las demás convenientes providencias de asistir al enfermo de todo lo preciso, mantener la familia, y procurar que no se inviertan las cantidades que se libraren en otros fines que los referidos.

§. III.

Si el abogado a quien se hubiese socorrido saliese del accidente o enfermedad, y prosiguiese trabajando en la facultad, se le manifestará, por los recibos puestos al pie de los libramientos, el importe de los socorros, para que le reintegre al fondo del Monte-Pío dentro de un año, con apercibimiento de que, si pasado éste y ocho días más no lo hubiese hecho, no gozarán de la pensión su viuda e hijos.

§. IV.

En el caso de fallecer el abogado individuo del Monte-Pío del referido accidente o enfermedad, o en el año prefinido para la reintegración al fondo del Monte-Pío, deberán egecutarla su viuda o hijos, si hubiesen quedado del difundo librería y bienes suficientes después de satisfecho el funeral y entierro, por el medio de ir dejando en el Monte-Pío y su fondo, las pensiones que deberían percibir desde la muerte de su marido o padre respectivo hasta la extinción de la deuda, sin que pretenda la viuda escusar esta calidad de reintegro y paga a pretexto del preferente de su dote o arras, ni de otro crédito suyo alguno. En cuya forma evaquados que sean la extinción y reintegro, se les continuará el pago y entrega, desde entonces en adelante, de las demás pensiones que fueren devengando anuales. Esto en el caso de quedar viuda e hijos. Pero si fallecen antes de acabar de reintegrarse el Monte-Pío por el otro medio, se deberá verificar el cobro con los bienes que dejasen. Pero quando no quedasen viuda ni hijos permanecerá expedita la acción de repetir directamente, y desde luego, contra los bienes suficientes que dejó el abogado difunto. Para lo qual la junta del Monte-Pío acordará que se tomen las más eficaces providencias.

CAPÍTULO CUARTO.

De los entierros de abogados individuos de este Monte-Pío, que carecen de medios para costearlos, aunque degen bienes, pero no caudales efectivos.

§. I.

Quando muera algún abogado del Colegio y Monte-Pío tan pobre y destituido de medios que no haya con que costear lo preciso para hábito, cera, entierro y demás que se ofrezca, mientras está de cuerpo presente podrá librar el decano, previamente informado de la necesidad, hasta la cantidad de seiscientos reales vellón con que puedan salir de la urgencia del día, reservando para la Junta del Monte-Pío, en que dará cuenta y que mandará convocar quando convenga la resolución y acuerdo sobre el pago y apronto de lo demás que se averigüe haver sido necesario para aquel caso.

§. II.

La misma facultad tendrá el decano, con igual obligación de dar cuenta de lo ocurrido, en la primera junta del Monte-Pío, quando fallezca algún individuo del Colegio y Monte-Pío que, aunque deje bienes, (que si fuesen vendidos serían suficientes para los dichos gastos), carezca de dinero efectivo con que hacerlos y pagarlos con la prontitud urgente que traen de suyo. Pero en tal caso deberá darse el insinuado libramiento con calidad de reintegro al fondo del Monte-Pío, de cuya verificación se cuidará por la Junta, providenciando se haga por el medio y del modo que ya queda estatuido para el otro caso del socorro interino y provisional del capítulo tercero en su párrafo quarto.

ADVERTENCIA.

Sin embargo de que el piadoso ánimo del Colegio se dirige al socorro de quantas necesidades padezcan sus individuos, es imposible ocurrir a todas, siendo tantas y tan continuas en el sistema presente, que siguen muchos de permanecer en Valencia con el nombre de abogados del Colegio, sin desengañarse como debieran a los quatro o cinco años de la ninguna esperanza que pueden tener de hacer en la abogacía el progreso que los demás, ni aún el necesario para una reducidísima manutención, y así consumen su vida con urgencias y estrecheces separadas del egercicio de la facultad, de las que pudieran eximirse y ser útiles a la república, aplicándose a otro honroso destino, luego que les haya desengañado el transcurso de dichos quatro o cinco años del ningún progreso que pueden esperar en el egercicio de la abogacía de Valencia. Y por no hacerlo y vivir ociosos padecen voluntariamente las insinuadas estrecheces y urgencias, viéndose acaso obligados por ellas a egecutar lo que no corresponde al honor del Colegio que les admitió, en la inteligencia de que podrían mantenerse con él. Atendiendo a todo lo expresado, y considerando otras muchas razones, se previene en este reglamento que con el caudal o fondo del Monte-Pío ninguna urgencia que provenga de semejantes causas puede socorrerse, aunque sea en cortísima cantidad. Pero sí (conforme el prudente arbitrio de los individuos de la Junta del Monte-Pío) a los abogados que por su abanzada edad hayan decaído de aquel concepto que adquirieron y conservaron mientras pudieron egercitarse en la abogacía con eficacia, y por lo mismo se vean después pobres y necesitados al fin de su vida.

CAPÍTULO QUINTO.

De la Junta del Monte-Pío y de los protectores de viudas y pupilos.

La Junta del colegio de abogados será también la del Monte-Pío, aumentándose para ésta un secretario, la que dirigirá todos los asuntos del

presente reglamento, y para evacuarlos se celebrará una cada mes distinta de la ordinaria del Colegio, según y como se egecutan éstas, y así será en casa del decano el día y hora que mande citar.

§. I.

Los quatro diputados oficiales de la Junta se encargarán de la protección de las viudas y pupilos dividida en esta forma: el diputado primero tendrá la de las de los que sean o hayan sido decanos; el segundo la de las de los que sean o hayan sido oficiales de la Junta, sin haber llegado al decanato; el tercero la de las de los que sean o hayan sido examinadores o abogados de pobres; y el quarto la de las de los que aún no hayan sido elegidos por tales.

§. II.

Luego que el protector de la correspondiente clase tenga noticia de la muerte de individuo del Monte, ofrecerá a la viuda e hijos que dege todos los oficios de protección y amparo, y dispondrá que le entreguen un memorial pidiendo la pensión, si hay viuda con hijos. En él se hará expresión del día en que murió su marido, los hijos que han dejado de legítimos matrimonios, sus nombres, edades y situación. Se presentará la fee de casamiento, y si ha sido después de la publicación de este reglamento le acompañará una copia de habilitación para el goce de la pensión y las fees de bautismo de los hijos. El protector, assegurándose de todo por medios extrajudiciales, remitirá el memorial y documentos al decano. Si quedare sola la viuda no se necesitarán más expresiones ni otros documentos que los correspondientes al casamiento.

§. III.

Quando el abogado dege hijos y no muger se formará el memorial a nombre de ellos, ya sea por su tutor o curador, ya por qualquier estraño, o ya por el mismo protector. Y recogiénose las fees de bautismo y de matrimonio, con copia de la licencia y toma de razón de la contaduría de la Junta, si se contrajo

después de publicado este reglamento, le remitirá el protector con dichos papeles y su informe al decano.

§. IV.

De cargo de éste será practicar todo lo referido en quanto a las viudas y huérfanos cuyos maridos y padres, respectivamente, hubieran ascendido al ministerio o a otro empleo honorífico por cualquier carrera, como también con los hijos de abogado que hubiere sido promovido al estado eclesiástico, y unos y otros concurrido hasta su muerte para el fondo del Monte-Pío, con iguales contribuciones que la de los abogados del Colegio. Y si las viudas e hijos se hallaren fuera de esta ciudad evacuará el decano su encargo por escrito, advirtiéndole que las de ministros togados no necesitarán presentar otro documento para el goce de la pensión que una certificación de estar disfrutando la que les corresponde por el ministerio, pues en el Monte-Pío de él se han dado las más oportunas, justificadas y prudentes reglas. Pero si acudiesen antes al del Colegio, en tal caso deberán presentar todos los documentos que quedan expresados, por que a sus maridos o padres obligó como a todos los demás que quieran tener derecho al Monte-Pío quanto queda referido en este reglamento.

§. V.

Puestos dichos memoriales, documentos e informes en poder del decano, y recogidos por éste los correspondientes a su cargo, los embiará al secretario de la Junta para que, instruido de sus contextos, dé cuenta en ella. La que tendrá facultad de declarar el caso en que haya o no lugar a la pensión y su cuota, y en el que proceda la extinción.

§. VI.

Declarada la pensión a la viuda o hijos, y dado aviso al respectivo protector, deberá éste vigilar si mueren o toman estado, y dará cuenta inmediatamente al

decano, remitiéndole fee de ello con su informe, y si de algún matrimonio no pudiese sacar fee recogerá y remitirá la justificación que fuese factible. Y consiguiente a lo que ya queda prevenido en diferentes párrafos del capítulo segundo, se advierte que no se ha de tener por estado en los hijos, hijas y viudas si entran en religión hasta que profesen.

§. VII.

Para que de quatro en quatro meses se hagan los pagos de las pensiones, será cargo de los protectores embiar al decano, y éste formará por lo que a sí toca, una relación de las pensiones correspondientes a la clase de cada protector, expresando la viuda, hijos, o hijas, que estén en goce de cada una, y recordando la edad de los hijos, y que las viudas o las hijas prosiguen sin tomar estado. Pero si viviesen fuera de Valencia deberán remitir las fees de vida y de no haber tomado estado.

§. VIII.

Cuidarán los protectores de que los interesados pongan en sus manos el poder suficiente para la cobranza de la pensión, el que remitirán al decano junto con la citada relación. Y lo mismo egecutarán siempre que los interesados otorguen nuevo poder. Pero si no lo hicieren deberán los protectores repetir en la relación el nombre y apellido del mismo apoderado. En caso de que los interesados quieran hacer por su mano las cobranzas, lo anotarán así los protectores con dicha relación, para que aquéllos no tengan otros pasos que dar, ni la Junta más que saber para librar.

CAPÍTULO SEXTO.

De la Secretaría, Contaduría, y Tesorería del Monte-Pío.

§. I.

Ya queda prevenido que los oficiales de la Junta del Colegio lo han de ser también del Monte-Pío, con aumento de un secretario que se elegirá quando los demás oficios, atendiendo al sumo trabajo con que se gravaría a el del Colegio si huviere de desempeñar uno y otro encargo. Y el del Monte-Pío tendrá en las juntas de él igual voto que los demás oficiales, y servir al mismo tiempo el empleo de celador.

§. II.

Será del cargo del secretario dar cuenta en las juntas de los papeles que le haya pasado o pasare el decano, y dar los avisos y respuestas que ocurriesen.

§. III.

También será cargo suyo colocar con orden y claridad en el archivo (que cerrado tendrá en su casa el secretario), los papeles y documentos que se exhivan en las juntas, poner todos los acuerdos en un libro destinado para ello, leerlos en la junta inmediata del Monte-Pío, para que, estando conformes, se rubriquen por el decano, o quien la presida, y los firme el secretario. Estender y firmar los libramientos que se despachen por la Junta y los repartimientos, quando se hagan a los individuos, anotando el importe de ellos y personas contribuyentes en el libro destinado a este fin. Y en otro pondrá con toda separación el día en que fallezcan, y los nombres y apellidos de las viudas, hijos e hijas que tengan derecho al goce de las pensiones.

§. IV.

No tendrá facultad para dar certificación alguna de lo que conste de los libros o papeles sin orden de la Junta, la que deberá expresar citando el día en la misma certificación que diere.

§. V.

El secretario del Colegio servirá de contador en los asuntos del Monte-Pío, y ocupará en sus juntas el asiento a la izquierda del tesorero. Será de su cargo llevar la razón de la entrada y salida de caudales del Monte-Pío. Y así deberá tener un libro de cargo y data, donde sentará todos los caudales que se introduzcan y extraigan del arca de tres llaves. Otro del haber de los pensionistas, donde formará a cada uno su asiento, expresando el derecho a la pensión (según lo que conste de los documentos que lo prueben), el día que empezó a gozarla y la cuota con lo demás que convenga a la claridad del asunto. Tendrá otro libro de repartimientos, si se hiciesen, para anotarlos en él. Otro de socorros y funerales, para escribir los gastos que en estas razones se hicieren, como también las reintegraciones que se efectuaren, según lo establecido en el presente reglamento.

§. VI.

En los quince días siguientes al de la elección de oficios de la Junta del Colegio y Monte-Pío, deberá el contador tener liquidada la cuenta del tesorero, por los asientos de los libros de aquél, para que al tiempo de presentar éste la suya pueda el contador reconocerla con más facilidad y exponer su dictamen dentro de ocho días.

§. VII.

Por todo el mes de setiembre, que es inmediato después de la elección de oficios, dará al decano una relación o estado por mayor de las entradas y salidas de caudales en aquel año y los que quedan existentes, firmado de su mano y la del tesorero, cuyo estado pasara el decano al secretario a fin de que en la Junta del Monte-Pío la lea y se instruyan los demás individuos de ella.

§. VIII.

Ninguna partida, por leve que sea, de entrada y salida de caudales en el arca de tres llaves, deberá hacerse sin intervención del contador, quien estará obligado a dar razón del estado de ellos y el de la cobranza y haber de cada pensión, siempre que se la pida el decano o la Junta del Monte-Pío.

§. IX.

El contador tendrá una de las tres llaves del arca, la que por su indisposición deberá pasar al celador (que será el secretario del Monte-Pío), y por la de éste al diputado quarto.

§. X.

Para que el contador pueda cumplir exactamente con lo que queda prevenido, deberá intervenir y tomar la razón de todos los recibos que diese el tesorero a los sujetos que entregasen caudales pertenecientes al Monte-Pío, como también de todos los libramientos de pensiones y demás que se expidieren contra el tesorero. Y en un libro separado anotará con distinción unas y otras partidas de toma de razón, lo que expresará al pie de los recibos y libramientos haver executado y constar a tal folio, sin cuya circunstancia no deben producir efecto alguno.

§. XI.

El tesorero tendrá iguales libros que el contador, para sentar en el uno las partidas de entrada y salida de caudales, y así se titulará de cargo y data. Otro del haver de los pensionistas, donde notará el derecho que cada uno tiene a la pensión, según lo que resulte de los documentos a que debe remitirse y expresar el día en que empezó a gozarla, como también su quota. A continuación de ésto sentará los pagos que fuere haciendo, en virtud de los libramientos que contra él expidiese la Junta y, en su caso, el decano.

Asimismo tendrá otro libro de repartimientos, si se hicieren, para anotarlos en él según los que le pase el secretario. También tendrá otro de los socorros y funerales, donde sentará las partidas de gastos que en estas razones se hicieren, como también en las reintegraciones que se efectuasen por las reglas que quedan establecidas.

§. XII.

De cargo del tesorero será recibir todos los caudales pertenecientes al Monte-Pío, extender y formar los recibos, previniendo en ellos la circunstancia de haverse de tomar la razón por el contador, pues sin que conste por nota de éste, puesta y rubricada al pie de los mismos recibos y de los libramientos y demás papeles de asuntos que deba intervenir, no se les dará curso. Y quando suceda, no servirán de resguardo los que sin dicha circunstancia se presenten por quienes hayan entregado caudales al tesorero, como tampoco servirán a éste de legítimo abono en sus cuentas los pagos que hiciere con dicho defecto.

§. XIII.

Siempre que la Junta del Monte-Pío quiera cerciorarse del caudal existente en el arca, deberá dar el tesorero la competente razón de su estado, quien tendrá una de las tres llaves de aquélla, la que por su indisposición pasará al diputado tercero y por la de éste al segundo.

§. XIV.

El tesorero pagará puntualmente todos los libramientos que contra él se expidieren a nombre de la Junta del Monte-Pío, y, en sus respectivos casos según las urgencias insinuadas, de sólo el decano, firmados unos y otros de éste y el secretario, e intervenidos por el contador, anotando éste al pie de los libramientos, como ya queda prevenido, haver tomado la razón, y en su libro

del haver de los pensionistas el día en que se expidieron, a favor de quien y la cantidad de su importe.

§. XV.

Por todo el mes de setiembre presentará su cuenta con pago en la Junta del Monte-Pío el tesorero que acaba de serlo, y reconocida dentro de ocho días por el contador que fue en el mismo tiempo de ella, la aprobará o reprovará la Junta, y en el primer caso dará al tesorero el resguardo correspondiente, firmado de los otros individuos de la Junta, o de la mayor parte de ellos, y puesta al pie de la cuenta una nota firmada de los mismos, en que se exprese estar vista y aprobada por la Junta del Monte-Pío, se archivará con los recados de justificación.

§. XVI.

El celador del Monte-Pío (cuyo oficio a un mismo tiempo ha de ser de cargo de su secretario, como queda advertido), cuidará de la puntual y exacta observancia de todas y cada una de las providencias establecidas en el reglamento, para evitar hasta el menor fraude y perjuicio del Monte-Pío. Y tendrá el mayor desvelo en que sus libros como secretario y los del contador y tesorero, igualmente que los papeles del archivo, no se extravíen, y que así unos y otros, como el dinero, estén con la formalidad y puntualidad que queda prevenida.

§. XVII.

No sólo deberá el celador dar cuenta en la Junta del Monte-Pío de las contravenciones a lo establecido en este reglamento, sino también de las omisiones en su puntual y exacta observancia, para que en uno y otro caso provea aquélla de remedio.

CAPÍTULO SÉPTIMO.

Del arca en que han de estar los caudales del Monte-Pío.

§. I.

Todos los de éste se pondrán en dicha arca de tres llaves. La una tendrá el decano, la otra el contador, y la otra el tesorero como queda prevenido, cuya arca deberá estar en casa del decano. Y para la introducción o extracción de caudales y recuento de los existentes, deberán asistir precisamente los tres o los que, por su indisposición, tubieren sus respectivas llaves.

§. II.

Consiguiente a lo prevenido sobre el asunto del párrafo anterior, es la responsabilidad del decano, contador y tesorero mancomunadamente, así en la omisión de no poner a su tiempo los caudales en el arca, como en el extravío de los que debían existir en ella, por qualquier causa que sea, o en los gastos indebidos u otra mala versación que haya hecho el decano, abusando de sus facultades. Lo que no se espera de su prudencia.

§. III.

Al fin de los meses de diciembre, abril y agosto se harán en el arca las entradas de caudales que apronte el tesorero, en cuyo poder sólo han de quedar los precisos para satisfacer el tercio de las pensiones que se vencerán en dichos respectivos tiempos y alguna cantidad más, por si ocurre otro gasto necesario. Y la partida que se introdugere en el arca se anotará en un libro que debe existir siempre dentro de ella, poniendo al pie de la nota sus medias firmas todos los que intervengan en el acto de la introducción. Y lo propio se ejecutará quando se extraiga alguna partida.

§. IV.

Siempre que por indisposición de alguno de los tres, que han de tener sus respectivas llaves del arca, haya de entregar la suya a otro, como queda prevenido, se hará recuento de caudales a presencia del que recibe la llave y

de los otros dos, que han de concurrir con las suyas, para que de esta suerte la responsabilidad de mancomún que tenía el que entregó la llave recaiga en quien la recibe mientras esté en su poder. Y quando la buelva se practicará igual diligencia, a fin de que se liberte de dicha responsabilidad y convalezca la de quien se la había entregado.

§. V.

Respecto de que el arca, libros, papeles y archivos del Monte-Pío han de ir pasando de unos en otros sucesores en los respectivos empleos, se hará recuento de caudales al tiempo de entregarse el arca al nuevo decano, a presencia de éste y del que finalizó en dicho empleo, como asimismo de la de los demás que deban intervenir en las entradas y salidas de caudales, no sólo los nuevamente electos, sino también los que acaban de servir los empleos de ellos. Y puesta la nota correspondiente de esta diligencia en el citado libro, que debe haver dentro del arca, la firmarán todos los que se hallen en aquel acto, para el que deberá cada uno llevar los libros de su cargo, donde tienen obligación de notar lo correspondiente a entradas y salidas en el arca, para tenerlo presente. Y concluido el acto los entregará al sucesor en el empleo, dándole éste el recibo correspondiente.

CAPÍTULO VIII.

En caso de que, por la variedad de circunstancias o por lo que la experiencia demostrase, pareciese conveniente en lo sucesivo añadir, reformar o corregir algo de lo establecido en este reglamento, o aumentar (si hubiese fondos para ello), o disminuir (si faltasen o por no alcanzar los expresados) las cantidades de las pensiones, tendrá facultad para uno y otro la Junta del Monte-Pío. Y lo que acordasen las dos terceras partes de todos sus individuos será de igual fuerza y vigor que lo demás del reglamento. Y para que lo contenido en el reglamento antecedente tenga puntual y debida observancia se acordó expedir esta nuestra carta, por la qual aprovamos en todo y por todo en la forma ordinaria el citado reglamento que va inserto, formado para el gobierno de un Monte-Pío de viudas y pupilos de los abogados del colegio de la ciudad de Valencia, y para socorrer a los individuos que padezcan alguna enfermedad temporal o habitual, que absolutamente les imposibilite la aplicación a la tarea

literaria de la facultad y no tengan otro modo de mantenerse con decencia, como también para costear los gastos de entierro de abogadoss pobres. Y en su consecuencia mandamos al nuestro governador capitán general del Reyno de Valencia, presidente de la nuestra Audiencia de él, regente y ohidores de ella, y a los demás jueces y justicias, ministros y personas de estos nuestros reinos y señoríos, a quienes corresponda la observancia y cumplimiento de lo contenido en esta nuestra carta, la vean, guarden y cumplan y hagan guardar, cumplir y ejecutar, según y como en ella se contiene, ordena y manda, sin contravenirla ni permitir su contravención en manera alguna. Que así es nuestra voluntad. Dada en Madrid a veinte de marzo de mil setecientos setenta y ocho. Don Manuel Ventura Figueroa. = Don Pablo Ferandiz Bendicho. = Don Manuel Dolz = El Conde de Balazote. = Don Manuel de Villafañe. = Yo Don Pedro Escolano de Arrieta, secretario de cámara del Rey nuestro Señor, la hice escribir por su mandado con acuerdo de los de su Consejo. = Registrada. = Don Nicolás Verdugo. = Lugar del Sello. = Teniente de canceller mayor don Nicolás Verdugo. = Secretario Escolano. = V. A. aprueba el reglamento que va inserto, formado para el gobierno de un Monte-Pío de viudas y pupilos de los abogados del Colegio de la Ciudad de Valencia. = Gobierno. = Corregida.

Don Pedro Thomás Febrer, secretario de cámara del Rey, nuestro Señor, y del acuerdo y gobierno de esta su corte y audiencia, que reside en la ciudad de Valencia. = Certifico: que haviéndose presentado y visto en el Real Acuerdo celebrado oy día de la fecha la real provisión de su magestad y señores de su Cosejo de Castilla que antecede, se acordó su obedecimiento y cumplimiento, y mandó que, dexando copia, se debuelva original con certificación. Como es de ver del libro de dicho Real Acuerdo, que está en su secretaría de mi cargo, a que me remito. Y para que conste doy la presente que firmo en la ciudad de Valencia a los tres días del mes de abril de mil setecientos setenta y ocho.= Don. Pedro Thomás Febrer.

Como Secretario del Monte-Pío del Ilustre Colegio de Abogados de esta Ciudad, certifico: Que esta copia concuerda fielmente con su original, que por aora para en el archivo de mi cargo, a que me refiero. Y para que conste, la firmo en Valencia a los 29 días del mes de abril de 1778.

Dr. D. Joseph Villarroya.

Imprímase. *Figueroa.*

COLEGIADOS

Abogado	Año Colegiación	Nº Matrícula
Abaás, Pedro	1762	22
Abaás Vives, José Pascual	1772	335
Adell Puig, Juan Bautista	1766	262
Adell Sacristán, Juan Inocencio	1811	661
Adell Sacristán, Juan Inocencio	1833	810
Agramunt, Pascual	1762	205
Agramunt Albesa, Felipe	1762	50
Agramunt Meseguer, Felipe	1762	52
Agulló González, Vicente	1787	529
Ainat Sala, Rafael	1785	511
Aixó Mateu, Salvador	1833	808
Alagón, Vicente	1762	191
Alarcón, Joaquín	1773	342
Albero, Francisco Antonio	1762	127
Alberola, Maximiano	1762	146
Alberola Sala, Juan Bautista	1770	320
Albert, Joaquín Tomás	1762	197
Albert, Manuel	1762	23
Albert Carbonell, Joaquín María	1762	775
Albiñana Valor, Vicente	1781	459
Albornoz Cebrián, Francisco	1766	267
Albors Rodrigo, Vicente	1779	439
Albuixech, Andrés	1762	144
Albuixech, José	1783	491
Alegre, José Ramón	1783	490
Alemaný, José María	1762	156
Alfonso, José Ignacio	1762	37
Alfonso Gisbert, José	1774	361
Alfonso Martínez, Vicente	1772	323
Alfonso Soler, Fernando Vicente	1779	432
Algarra Avella, Salvador	1810	646
Almansa Taula, Manuel	1776	388
Almela, Francisco Luis	1762	82
Almela Nieto, Manuel Antonio	1788	548
Almerich Higón, Francisco	1765	254
Almiñana Díez, Telmo	1770	307
Almorrich Leonés, Gregorio	1777	403
Alonso Larrea, Luis	1817	714
Altavella Moradas, José	1772	324
Alverola Antequera, Juan Bautista Antonio	1824	750
Amat Peiró, Miguel Gerónimo	1826	776
Amer Miralles, José Francisco	1775	368
Andrés Gómez, Juan Bautista	1784	505

Andrés Morell, Carlos	1776	386
Ansaldo Ferraro, Bernardo	1833	802
Ansaldo Ferraro, Domingo	1829	787
Antoni Martí, Juan Bautista	1792	591
Aparici, José	1762	86
Aparici, Juan Bautista	1762	192
Aparici Bas, Joaquín	1762	161
Aparici García, Antonio	1835	843
Aparici García, Mariano	1833	811
Aparici Ortiz, Pedro	1787	531
Armengol, Manuel	1762	61
Armengol, Vicente	1783	483
Armengol Gresa, Gaspar	1779	436
Armengol López, Francisco de Paula	1826	774
Asensi Climent, Francisco María	1788	788
Asensi Colomer, José Antonio	1794	619
Asensi Mira, Joaquín	1776	398
Aucina Chisvert, Tomás	1773	344
Aucina Pichó, Tomás Agustín	1820	734
Avargues Feliu, Joaquín	1813	683
Ayuso Larragoyti, Pedro	1821	741
Aznar, José	1762	100
Aznar Villanueva, Antonio	1823	747
Bachiller Rosillo, Lorenzo	1762	135
Badía Navarro, Miguel	1773	341
Baeza Escrig, Antonio	1764	238
Baeza Ramos, Abdón	1781	462
Baeza Varo, José	1776	394
Bague, Juan Bautista	1762	164
Ballester, Bernardo	1762	78
Ballester, Vicente	1762	167
Ballester Aliaga, Mariano	1788	541
Barbastro Castellod, Peregrín	1791	577
Barberá Perales, Antonio	1780	450
Barberá Simó, Marcos	1776	385
Bargas, Ignacio de	1762	174
Barrachina, Francisco Germán	1829	786
Barreda Centelles, Pedro	1794	614
Bas, Joaquín	1762	149
Bas, José Manuel	1762	63
Bas Bornell, Nicolás	1762	207
Basco Sombiola, Francisco M ^a	1769	297
Batifora Sarrió, Juan Bautista	1777	399
Beixier Vela, Mariano	1782	473
Belda Garrigues, José	1762	216
Beltrán Ferrer, Miguel	1792	595
Beltrán Pérez, José	1833	815
Bell Matoses, Julián	1774	363
Bellido Box, Francisco Antonio	1771	322
Bellmonte, José	1783	485

Benavente Sanz, Tomás	1811	674
Beneito, José	1765	251
Benlloch Bruc, Esteban	1766	259
Berenguer, Antonio	1762	99
Berenguer, Gabriel	1762	136
Berenguer, José	1762	180
Berenguer de Entenza Martí, Ramón	1769	294
Bernabé, Francisco	1774	352
Bernard, Tomás Vicente	1762	66
Bernat Baldoví, José	1833	826
Bernat Cerdá, Vicente	1834	838
Berní Catalá, José	1762	29
Bertet, José	1762	137
Bertet Porcar, Luis	1762	187
Besols, Gregorio	1763	227
Besols Aliaga, Diego	1790	569
Blanch Caballero, Joaquín	1794	638
Blanch Rubio, Manuel	1780	448
Blanquells Rascón-Cornejo, José	1833	825
Blasco Conca, Antonio	1794	630
Blasco Domingo, Joaquín	1766	265
Blasco, José	1791	578
Blat Pascual, Andrés Feliciano	1772	334
Blat Llorens, Peregrín	1811	653
Boigues Suárez, Tomás	1773	343
Boígues Sulroca, Pedro	1817	718
Boil, José	1762	33
Boil Barco, Joaquín Mariano	1769	284
Boil Alapont, Antonio	1772	338
Boil Vidal, Manuel	1810	649
Bolaño Cuevas, Pedro Tomás	1762	224
Bolea Nicolás, José	1833	793
Bonet Cubero, Clemente	1833	816
Borrás, Agustín	1762	91
Borrás Goya, Luis	1762	126
Botella, José Teodoro	1762	16
Botella, Francisco Ignacio	1783	488
Botella, Francisco Javier	1762	102
Botella Sanjuán, Teodoro	1789	556
Bou, Diego	1762	55
Bou Franco, Agustín Ceferín	1835	847
Bou Montés, Feliciano Diego	1766	261
Branchat, Vicente	1762	185
Bravo Sellés, Juan	1811	668
Bru Salelles, Tomás	1811	658
Brugés Perera, Pedro	1794	613
Brugués Aparicio, Mariano	1836	859
Bruno Sebastián, Francisco	1762	32
Burgos de Ballabriga, Pedro	1819	729
Burló Camilleri, José	1836	857

Caballer Muñoz, José	1810	645
Cabellos Rincón, José Antonio	1833	831
Cabero Ballester, Juan	1836	858
Cabezas Gil, José	1786	516
Cabrera Castany, Carlos	1778	428
Cabrera González, Alonso Pedro	1787	532
Cabrera Angulo, Gabriel	1825	759
Caciano Pérez, Francisco	1775	379
Cadena Cortés, José	1833	804
Calabuig Aparici, Juan Bautista	1764	239
Calabuig Calabuig, Agustín	1835	842
Calabuig Calabuig, José María	1817	710
Calabuig Calabuig, Pedro	1829	791
Calabuig Monpó, Juan Bautista	1792	593
Calatayud Sempere, Félix	1794	637
Calvo, Vicente	1762	34
Calvo López, Antonio	1777	413
Calvo Marco, Francisco	1811	670
Calvo Navarro, Mariano	1791	576
Caller, Mariano	1762	20
Campo, Vicente del	1762	114
Campos Palomero, José	1782	467
Campos, Mariano	1762	196
Campos Urgelles, Saturnino	1835	844
Canemas Franqueza, José	1785	512
Canet Sales, Pascual	1835	850
Cantó, Blas Mariano	1762	60
Capou, Tomás	1762	202
Carbonell, Juan Bautista	1778	424
Carbonell García, José	1779	434
Carbonell Miñana, Antonio	1791	581
Carbonell Vidal, Vicente	1780	443
Cardona Serra, Pascual	1780	449
Caro Briones, Teodomiro	1762	6
Carrey Cabanes, Vicente	1774	351
Carsi Carrasco, Rafael María	1833	805
Carsi Diego, José	1825	763
Casador Bernat, Patricio	1762	226
Casamayor, José	1762	87
Casanovas, Antonio	1783	493
Casanovas Ravanals, Antonio	1811	660
Casaus Baylo, Joaquín	1822	742
Casaván, Jaime Vicente	1767	277
Cases, José	1762	69
Castelló Bernabeu, Tomás	1786	513
Castillo Carrús, Francisco Antonio	1783	478
Castillo Carrús, Juan Francisco	1783	479
Castro, Jacinto Javier de	1762	209
Castro, Jacinto Miguel de	1762	5
Catalá, Felipe	1778	421

Catalá, Vicente	1762	115
Cebolla Fita, Pedro	1775	382
Cebrián Bordes, Pedro	1763	229
Cebrián de Cebrián, Gaspar	1762	2
Cerdá Hernández, Patricio	1811	665
Cerdá Richart, Adriano	1784	503
Cerdá Rico, José	1762	133
Cervera, José	1788	549
Cervera, Patricio	1762	208
Cervera Ferreres, Vicente	1773	340
Císcar Císcar, Fernando	1774	360
Cháudenes, Antonio	1762	38
Checa Roa, Atanasio	1821	740
Chicano Vicente, Martín	1889	550
Chicola, Juan Bautista	1762	54
Chiva Marín, Manuel	1793	605
Chornet, Juan Bautista	1762	153
Clemente Luzón, Manuel Bernardo	1772	328
Clergues Martínez, Alejos	1766	260
Clergues Martínez, Cristóbal	1772	329
Climent Micó, Vicente	1817	697
Codina, José	1778	427
Coloma, Luis	1764	244
Colomer, Pedro	1778	423
Colomer Jordá, Juan Bautista	1786	521
Company Estellés, Jacinto	1818	726
Corones, Andrés	1762	221
Corones Alberola, Esteban	1789	554
Cortell, Xavier	1781	456
Cortés Sanz, Manuel	1793	607
Coussinier Martínez, Antonio	1783	476
Cremades Cerdán, Antonio	1793	608
Crespí, Juan	1762	112
Cristófol, Pedro Luis	1762	140
Cubertorer, Francisco	1762	44
Cubertorer, Luis	1782	470
Cucarella, José	1762	113
Cueva, Ignacio de la	1771	313
Cuevas Doménech, José	1778	430
Cuevas Rubio, José	1817	721
Cuñat Morelló, Juan Bautista	1792	590
Dámbila, Bernardo Joaquín	1774	355
Daroqui Orenga, Pascual María	1833	828
Dasí Flames, José Antonio	1764	243
Debesa, José	1762	89
Delfí, Benito	1762	11
Delviso Año, Vicente	1836	851
Díez Bono, José	1777	411
Disdier, José	1776	392
Disdier, Vicente	1766	266

Doménech, Francisco	1762	214
Domínguez Campos, Nicolás	1836	856
Domínguez Lascano, Manuel	1762	120
Domínguez Pavía, Mateo	1834	832
Dualde Llopis, José Francisco	1833	795
Durá Moreno, José	1776	384
Durán, Francisco	1762	24
Escaso, Vicente	1762	217
Escolá Echevarría, Salvador	1788	546
Escolano, Juan Bautista	1762	212
Escolano González, Manuel	1811	678
Escoriola, Tomás Joaquín	1762	152
Escoriola Guerau, Vicente	1763	231
Escrich Pabordre, José	1762	175
Escrivá Barberá, José	1833	799
Escuder, Benito	1762	158
Escuriola, Tomás	1762	12
Esno de Bas, Felipe	1837	862
Espí Martínez, Tomás Luis	1787	530
Esteve Alemany, Juan Vicente	1776	397
Esteve Monac, José	1777	406
Esteve Monraual, Ignacio	1769	296
Estopiñá Ros, Francisco	1762	31
Estruch Armengol, José	1817	711
Eximeno, Francisco Tomás	1770	305
Eximeno, Pedro Pascual	1762	104
Facha Erdozain, Mariano	1783	477
Fajarnés Ferrer, José	1833	798
Falcó Marco, Pascual	1825	755
Faus Menor, Francisco	1770	308
Faus Menor, José	1762	123
Fernández Blasco, Joaquín	1784	501
Fernández de Mesa, Tomás	1762	76
Ferrán, Juan Bautista	1762	172
Ferrandis Sánchez, José Pascual	1811	671
Ferrándiz Chiniesta, Joaquín	1788	536
Ferrando, José	1771	312
Ferrando, Juan Bautista	1762	79
Ferrando Oltra, Fernando	1833	812
Ferrando Gil, Pascual Antonio	1774	362
Ferrando Segura, Vicente	1789	557
Ferrer, Francisco	1762	110
Ferrer, Raimundo	1762	219
Ferrer, Raimundo	1774	358
Ferrer, Vicente	1762	68
Ferrer Cardona, Julián	1826	771
Ferrer Gombau, José	1762	90
Ferrer Olmos, Carlos	1784	507
Ferrer Poyo, Pedro Juan	1777	405
Ferrer Salvador, Vicente María	1766	257

Ferrer Soler, Manuel	1833	822
Fita Capella, José	1787	526
Font Delgado, Pablo	1770	306
Font, Tomás	1762	59
Font Ferris, Joaquín	1811	654
Fontanelles, Joaquín	1762	71
Fos Soler, Francisco	1779	440
Francés Romeu, Roque	1828	782
Franch, Antonio	1762	121
Franch, José	1762	190
Franch Lluçia, José	1783	481
Franco Tormo, Luis	1778	431
Franco Vives, Manuel	1817	719
Franco Noguera, Antonio	1793	603
Franco Pagán, Juan de la Mata	1794	618
Frayle Furió, Vicente	1768	281
Fuertes Amer, Joaquín	1778	429
Fuertes Carsi, Juan Antonio	1836	855
Furió Muñoz, Vicente	1777	409
Fusell Gil, Joaquín	1817	717
Fuster Pons, Remigio	1767	272
Fuster Zalón, Pedro	1817	713
Galán Sánchez, Francisco	1833	829
Galmes, Mariano	1762	195
Gallé Sanchis, José Felipe	1788	537
Gamborino Sierra, Pascual	1785	509
Ganga, Bernardino	1783	492
Garcés Miralles, Juan Bautista	1786	517
García, Luis Pascual	1767	275
García, Simón Tadeo	1777	417
García Albors, Francisco	1786	527
García de Alcaraz, Antonio María	1813	684
García de Almunia, Pedro Pascual	1770	310
García Doménech, José Ignacio	1788	542
García Gomis, Vicente Pedro	1786	519
García Marín, Lucas	1818	724
García Mínguez, Manuel	1828	783
García Romo, Joaquín	1762	138
Gardell, Gaspar	1762	47
Garro, Manuel	1762	203
Gascó Orbera, Blas	1789	558
Gascó Orbera, Mariano	1789	555
Gascó Pérez, Vicente	1780	446
Gascón Portell, Eusebio	1784	502
Gasén Giner, José	1768	291
Gasó Gasó, Timoteo	1788	538
Gavilá Mur, Antonio	1776	390
Genovés Calvo, José	1775	373
Genovés Cause, Basilio	1834	834
Genovés Cortina, Juan Bautista	1817	704

Genovés Fuster, José Gregorio	1786	518
Genovés Morera, Juan Vicente	1817	702
Gil Maragut, José	1791	573
Gil Agut, Juan Bautista	1822	746
Gil del Castillo, Francisco Pascual	1762	15
Gil del Castillo Villalonga, Vicente	1811	667
Gil Esbrí, Joaquín	1833	806
Gilabert Gargallo, Ramón	1811	659
Ginart Torán, Mariano	1792	597
Gisbert, José	1762	19
Gisbert Cortés, José	1762	122
Gisbert Giner, Alejandro	1769	286
Gómez Devesa, Antonio	1818	725
Gómez Devesa, José Rafael	1817	715
Gómez de Bustamante Gisbert, Bernardo	1774	354
Gómez Pau, José	1784	495
Gómez Polop, Pedro	1822	745
Gomis, Juan Bautista	1784	499
Gomis, Miguel	1762	198
Gomis Rusafa, Tomás	1768	290
González Aguilar, Fernando Enrique	1784	506
González Meseguer, José	1775	378
González Roig, Manuel	1817	694
González de Villaventín Tribes, Rafael	1822	743
Gordo Garneria, Miguel	1785	510
Gramage Delgado de Molina, Salvador	1815	693
Granado, Antonio	1767	279
Granado, Félix	1762	173
Grande Ribagorza, Bernabé Antonio	1775	376
Grau, Pablo	1762	184
Guardia Menor, Félix	1762	57
Guardiola Gasull, Joaquín	1777	400
Guerau, Antonio	1762	215
Guill Palomares, Lorenzo	1762	18
Guillem Busarán, José	1762	148
Guillén Gras, José	1825	754
Guinot, Miguel	1762	193
Guiralt Blasco, Antonio	1817	716
Guitart; José	1762	160
Guitart Ricard, Juan Bautista	1819	731
Gutiérrez Ripollés, Francisco	1769	285
Haro Serrano, Pascual de	1784	494
Heraud Cavanilles, Pascual	1780	455
Heraud Cavanilles, Tomás	1780	454
Hernández Macías, Tomás	1813	680
Hernando, Miguel	1762	143
Hernansaiz González, Miguel	1788	553
Herrero, Vicente	1765	253
Hervás Balader, Juan Bautista	1783	480
Huguet Aparisi, José Nicolás	1783	482

Ibáñez Morant, Juan Andrés	1765	256
Ibarra Castell, José	1794	615
Insa Bello, José	1789	551
Iranzo Español, Vicente	1811	673
Irles, Vicente	1762	43
Irles Pérez de Sauli, Ignacio	1787	535
Irúnzum, Vicente	1788	539
Isern Lombart, Lorenzo	1811	662
Isnart, Antonio	1762	1
Isnart Blanes, Francisco de Paula	1790	564
Jaldero, Francisco	1817	699
Jordá Furió, Eugenio	1792	599
Jornet Calatayud, Joaquín	1781	465
Jover Carrasco, José Antonio	1767	273
Jover Amat, Juan	1833	794
Jover Carrasco, Francisco Damián	1781	461
Juanes Navarro, José	1834	836
Labayla Soler, Francisco de Paula	1825	761
Lafora Giner, Estanislao	1825	758
Lafuente Cebrián, Salvador	1837	863
Lafuente Francia, José	1794	527
Lasala Borrell, José	1772	330
Lecussán Calabuig, Benito Pascual	1775	371
Linares Rodríguez, F. Javier	1833	818
Liñán Morelló, Tomás	1817	707
Liñana, José	1778	418
Llácer Cortés, Joaquín Antonio	1775	375
Llerena Balls, Antonio	1769	304
Llopis Escoto, Rafael	1813	681
Llopis Ferris, Ignacio	1775	366
Llorca, José	1762	85
Llorca, Vicente	1763	230
Lloréns Martínez, Antonio	1773	349
Llorens Chiva, Joaquín	1772	332
Llorente Ferrando, Salvador	1833	830
Lloret Martí, Antonio	1779	437
Loarre Vinet, Pedro Vicente	1782	468
Longas Vento, Juan Francisco	1766	269
Longavila, Bernardo	1762	139
López, José	1762	98
López Abad, Bartolomé	1794	625
López Bueno Tuero, Nemecio	1778	426
López Escrig, Vicente María	1817	696
López Espinosa, Andrés	1810	650
López Fernández de la Magdalena, Pedro	1794	617
López Ibáñez, Joaquín María	1835	846
Lorca Alonso, Policarpo	1786	523
Lorente, Antonio	1762	218
Lorente Gil, Francisco	1771	319
Losela, Francisco	1762	4

Losella Chindemi, Manuel	1769	295
Lozada Temes, Juan de	1762	7
Ludeña, Raimundo	1762	154
Luz, Pedro de	1762	151
Macías Pérez, Manuel	1794	640
Madramany Calatayud, Mariano	1774	353
Magraner, José	1762	169
Magraner, José	1775	365
Malatesta, Tomás	1762	111
Malatesta Mayor, Nicolás	1794	632
Maldonado Maldonado, Joaquín	1814	692
Máñez, Cipriano	1762	118
Máñez Rocafort, Luis	1777	404
Maquivar Salort, Francisco Vicente	1787	528
Marau, José	1774	364
Marau, Juan Bautista	1762	183
Marco, Jaime	1762	80
Marco, Jaime	1762	188
Marco de Alegría, José Luis	1783	474
Marco Layrach, José	1793	604
Marco Renau, Alberto	1792	587
Marco Riera, Francisco	1762	67
Margarit, Vicente	1763	234
Margarit Pujasons, Francisco	1792	598
Marín, Vicente	1762	14
Marín, José	1762	25
Marín Peronier, José Mariano	1769	301
Marín Traviesa, José Mariano	1817	703
Marín Canet, José Xavier	1786	514
Marín Navarro, José	1762	124
Marín Peronier, Carlos Cipriano	1777	414
Marín Sánchez, Francisco	1791	585
Marqués, Luis Pascual	1829	790
Marqués Ferrando, Mariano	1817	706
Marqués Ferrer, Luis María	1825	757
Marqués Guerau, Joaquín	1833	823
Martí de Veces Lloria, Antonio	1820	738
Martín Cortés, José	1810	648
Martín Murciano, José María	1828	785
Martínez, Francisco	1762	125
Martínez, José	1784	496
Martínez Baset, Mariano	1833	801
Martínez Bonet, Vicente	1791	574
Martínez Murciano, Miguel María	1833	807
Martínez Pajarón, Bruno	1791	579
Martínez Peris, Vicente	1826	769
Martínez Rodríguez, Manuel	1811	672
Martínez Rodrigo, Lorenzo	1788	540
Martínez Sánchez, Juan F. M.	1820	737
Martínez Tortosa, Vicente	1828	784

Martínez de Viciado Alfonso, Carlos	1814	691
Martínez de Viciado Soriano, Manuel	1769	293
Martínez Zamorano, Bartolomé	1790	566
Marzal, José	1762	75
Marzo Martínez, Vicente	1820	735
Mascarós Segarra, Joaquín	1792	602
Masot García, Antonio Eduardo	1779	441
Matas Sulroca, Camilo	1792	592
Matas, Juan Bautista	1762	211
Mateo Vilches, Luis	1762	35
Mateu Dasi, Mariano	1817	722
Mateu Giner, Francisco	1825	753
Mayans Pascual, José	1777	408
Mayor, Pascual	1783	487
Mayor Sellés, Simeón	1776	395
Medina, Joaquín María	1762	155
Medino del Pumar, Joaquín María	1784	500
Melchor Pinazo, Joaquín María	1825	751
Melchor Silvestre, Joaquín	1793	610
Mendiolagoitia Bou, Luis	1820	732
Merita, Pedro	1762	206
Mesa, Diego de	1762	94
Mesquita, Miguel Mariano	1762	165
Micó, Juan	1762	119
Micó Castelló, Vicente Tadeo	1726	764
Miele Lereira, José	1794	621
Miguel Peiró, Carmelo	1836	852
Millera, Vicente Nicolás	1762	49
Millera Aycart, Tadeo	1766	263
Millera Claver, Luis	1765	252
Miñana Pérez, José	1762	223
Mira Vélez, José	1834	837
Miralles, Jaime	1762	117
Miralles Anglesola, Pedro	1791	572
Molla, Luis Vicente	1762	108
Moltó Miralles, Francisco	1825	756
Monares Cebrián, Rafael	1836	861
Monge Ibarra, José Félix	1835	839
Monleón Broguer, Gaspar	1728	781
Monseny, Juan Bautista	1762	10
Montserrat Barberá, Joaquín	1784	504
Montserrat Pi, Baltasar	1782	472
Montserrat Riutort, Bernardo	1833	819
Montaner Signes, Gabriel	1780	452
Montaner Lombart, Gabriel	1811	656
Montero, Mateo	1762	157
Montoliu Cros, Tomás	1726	772
Monzó Álvarez, José	1792	594
Mora, Miguel	1772	327
Mora, Vicente	1762	46

Morales, José Joaquín	1817	723
Morales Gallel, Joaquín María	1833	800
Morant, José	1762	199
Morant Segarra, José Rafael	1811	676
Morata Gascó, Vicente	1771	321
Morató, Manuel	1783	484
Moreno Albarado, José	1762	1
Moreno Chavarrieta, Manuel	1811	675
Morera, Tomás	1762	51
Morera, Nicolás	1762	64
Morera Canet, Bernardo	1833	809
Morera Rubio, Pascual	1767	274
Morera de la Vall, Victoriano	1810	652
Morera de la Vall Calvo, Vicente	1833	820
Morón, Vicente	1762	130
Morón Lloréns, Rafael Vicente	1786	520
Morte Hernández, Carmelo	1810	647
Muñoz Martí, Vicente	1771	317
Muro Clara, Francisco	1762	70
Musoles, Felipe	1762	8
Musoles, Salvador	1762	132
Mustieles Malanca, Felipe	1818	728
Nadal, Francisco	1762	40
Nadal Moros, Vicente	1762	134
Naudín Orduña, Tomás	1784	497
Navarro Pujasons, Ignacio	1794	641
Navarro, Juan Bautista	1762	65
Navarro, Pascual	1782	469
Navarro Aliguer, Felipe Benicio	1810	644
Navarro Álvarez, Vicente	1817	720
Navarro Castillo, Joaquín	1777	410
Navarro Ferrer, Vicente	1775	377
Navarro Gavilá, Antonio	1770	311
Navarro Vidal, José	1776	387
Nebot Villanueva, Fermín	1762	179
Nebot Peronier, Fermín	1780	444
Nebot, Francisco de Paula	1789	552
Nebot, Juan Bautista	1762	88
Nebot Gil, José	1762	93
Nebot Peronier, Juan Bautista	1777	416
Nieto Musacula, Gerónimo Francisco	1762	225
Nieto, Miguel Gerónimo	1762	13
Nogués Sauquillo, Antonio Gregorio	1881	457
Nogués Rimbaus, Juan José	1787	533
Ojalde, Cristóbal	1778	425
Olano, Joaquín	1762	177
Olivares, Antonio de	1762	128
Oloris, Estanislao	1819	730
Oller Alfonso, José	1817	698
Oller Borja, José Antonio	1763	232

Orellana, Marcos Antonio de	1762	147
Ortells, Luis Antonio	1762	150
Ortuño Sepe, José Antonio	1777	412
Osca Chornet, José	1829	789
Pajarón Álbarez, José	1786	515
Pajarón Ibáñez, Luis	1833	813
Palau, Dimas	1762	162
Palau, Francisco	1762	77
Palau Ferra, Francisco	1826	773
Palomares Valera, Lorenzo	1762	210
Pallardó, Vicente	1762	58
Pallares, Francisco	1783	486
Pallares Lloret, Eugenio	1813	688
Pano Malbech, Joaquín Tomás	1766	270
Pardo, Manuel	1817	708
París Quirós, Carlos	1785	508
Parra Blat, Mariano	1813	685
Pascual, Cristóbal	1783	475
Pastor Pastor, Tomás	1786	524
Pavía, Valentín	1762	42
Peirón Tremosa, Miguel	1791	584
Pelecha Montoro, Gabriel	1763	233
Pelecha Pont, Gabriel	1794	620
Peleguer Miralles, Miguel	1826	766
Perelló Jáudenes, Matías	1764	242
Pérez, Francisco	1762	56
Pérez Clemente, Juan Antonio	1764	241
Pérez de los Cobos Company, S. Tomás	1834	833
Pérez Cordobés, Matías	1775	372
Pérez Martínez, Juan Antonio	1827	778
Pérez de Rico Guillem, Miguel	1780	445
Peris, Baltasar	1762	189
Peris, José Antonio	1783	489
Peris Duart, Antonio	1822	744
Peronier, Fernando	1762	142
Petit Pelegrín, Pascual	1781	464
Piamonte, Vicente	1763	235
Picó Esteller, Vicente	1770	309
Pichó, Antonio Pascual	1762	62
Piera Aguilar, Pablo	1773	346
Piera Galbis, Francisco Pascual	1779	438
Piera Minguet, Honorato	1824	749
Piles Baquer, Jaime	1791	580
Pinazo Gómez, José	1773	350
Pinedo Gutiérrez, Francisco Ventura	1794	639
Piñana Figueres, Antonio	1772	337
Pitarch Forest, José	1837	864
Pizcueta Donday, Manuel	1827	777
Pla Juan, Juan Bautista	1820	739
Poch, José	1764	245

Polart Clemente, Manuel	1811	664
Polo, Mariano Joaquín	1781	458
Polo, Vicente	1762	72
Polop Antigau, Francisco Antonio	1790	568
Pons Saló, Blas	1763	236
Pont Martínez, Francisco	1762	27
Portilla, Juan de la	1762	213
Povo Guillén, José	1768	288
Presencia, Ignacio	1762	106
Pro de Bayona Pavía, Manuel	1774	357
Puchalt Pellicer, Andrés	1765	249
Puértolas, Juan	1762	159
Puig Doménech, José María	1777	407
Puig Miquel, Vicente	1811	669
Puigcerver Cerdá, Nicolás	1811	666
Pujasons Gómez, Ignacio	1771	315
Quebedo, Vicente	1762	92
Quegles Meliá, Pedro	1786	525
Querol Caselles, Pascual	1780	451
Quilis Guerrero, Antonio	1836	860
Quirós, Andrés	1762	39
Ramada Vela, Juan Francisco	1779	433
Ramírez Llombart, Ramón	1820	733
Ramo Alonso, Mariano	1764	246
Ramón, Miguel Gerónimo	1762	97
Ramón Bondía, Agustín	1786	322
Ramos Bug, Antonio	1825	760
Ramos García, Vicente	1794	643
Rausell Sancho, Bartolomé	1836	854
Ravanals, Juan Bautista	1762	53
Redorat, Bartolomé	1762	116
Redorat, Miguel	1762	48
Reguart Lacruz, Juan	1826	768
Reig Ferré, Francisco	1789	560
Reig Mas, Baltasar	1828	779
Rendón, Diego Mateo	1769	303
Ribelles Pla, José	1794	642
Ribera Milanés, José	1764	247
Ribera Gilabert, José	1792	596
Richart Pérez, Juan Raimundo	1811	657
Rico Rico, Félix	1766	258
Riera Miguel, Vicente Salvador	1775	369
Rincón Grus, Pablo	1794	628
Rius, Tomás	1762	182
Rius, Vicente	1762	41
Rius, Vicente	1817	695
Rius Gisbert, Francisco	1771	318
Riutort, Francisco	1762	176
Roca Albert, Cipriano	1776	391
Rocafort, Vicente	1762	45

Rochano, Cristóbal	1780	453
Rodrigo, Tomás	1765	255
Roig Aguirre, Juan Bautista	1762	30
Roig Benet, Félix	1768	289
Romaguera Romaguera, Joaquín	1813	682
Román, Manuel	1762	145
Romero, Pedro	1782	471
Romero Mollá, Manuel Pablo	1788	543
Ronda Saval, Jaime	1773	339
Ronda Saval, José	1772	336
Ros Boxó, Juan Bautista	1818	727
Rovira, Gaspar	1762	168
Rovira Martí, Vicente	1767	278
Roxer, Joaquín	1762	194
Royo Sanjuán, Carlos	1794	634
Rubio, Felipe	1774	356
Rubio, Mariano Manuel	1794	612
Rubio Lloret, Fernando	1833	827
Ruiz Ferrer, Francisco de Paula	1794	633
Ruiz de Asín Cuadrado, José	1793	606
Saboya, Franciso Gerónimo	1762	9
Sacristán Sarrió, Carlos	1765	250
Sacristán Pedro, Pedro	1779	435
Sáiz Martínez, Tomás	1813	679
Sala Giner, Juan Bautista	1794	611
Sala Corones, José María	1834	835
Sala España, José	1794	622
Salabert, Antonio	1762	109
Salabert Cases, Manuel	1777	402
Salabert Tatay, José	1766	264
Salazar, Luis Vicente	1762	95
Salazar Gisbert, Estanislao Xavier	1791	575
Salelles, Tomás	1762	21
Salelles Cases, Francisco	1762	200
Salelles Jaló, Onofre	1762	107
Salelles Molina, José Andrés	1769	282
Salelles Montesinos, Manuel	1772	333
Salelles Palos, José	1810	651
Salelles Villar, Joaquín	1762	222
Salón, Joaquín Antonio	1762	103
Salom Palau, Álvaro	1794	635
Salvachuna Alapont, Ignacio	1772	331
Salvachuna Layrach, Jaime Vicente	1764	237
Salvador, Pedro	1762	74
Salvador Gombau, Juan	1762	178
Sanahuja Mey, Vicente	1792	588
Sánchez Caurín, José	1817	709
Sánchez Ferris, Fermín	1811	663
Sánchez Gil, Ignacio	1774	359
Sánchez Gil, Miguel	1825	752

Sanchis Gil, Luis Pedro	1776	396
Sanchis Llinares, Marcelo	1794	636
Sanchis Martí, José	1833	796
Sanchis Savall, Jaime	1775	381
Sanchis Useres, Antonio	1835	845
Sanchis Vendrell, Carlos	1769	299
Sanchis Vendrell, Ramón	1769	300
Sancho Trilles, Francisco	1790	571
Sanjuán, Domingo	1762	181
Sanjuán Máñez, Francisco	1814	690
Sanz López, José	1813	686
Sastre Mascarell, Mariano	1790	570
Sebasco, Gerónimo	1762	73
Sebastiá Marín, José Félix	1794	629
Segrelles Bernabeu, Vicente	1771	314
Seguí Rodríguez, Vicente Luis	1777	401
Sellés Monpó, Crisanto	1794	624
Sellés Martínez, Nicolás José	1833	817
Serrano Belesar, Miguel	1768	292
Serrano Conejos, Martín	1817	712
Serrano Gascó, José	1833	797
Servent Rico, Gerónimo	1775	367
Simó Vilanova, Joaquín	1775	370
Simó Gil, Salvador	1781	466
Simó de la Lanza Izquierdo, José	1765	248
Sirugeda, Joaquín	1762	83
Sisternes, Manuel	1762	141
Soler Borres, Francisco Javier	1780	447
Soler Mira, Francisco Pascual	1776	389
Soler Mira, Francisco de Paula	1781	460
Soler Olmo, José	1788	547
Soler Pérez de Assiaín, Agustín	1787	534
Soler Pérez de Assiaín, Francisco	1789	561
Soler Ferreyro, Juan Antonio	1835	848
Solsona, Joaquín	1762	96
Solves Reig, Simeón	1813	687
Sombiola Mestre, José Antonio	1790	563
Soriano de Casimiro, Antonio	1778	420
Soriano de Casimiro Romero, Jaime	1792	601
Soriano de Casimiro Romero, José	1792	600
Soriano de Casimiro Palanques, Manuel	1769	283
Soriano Nieto, José	1762	220
Soriano Requena, Tomás B.	1793	609
Soucase Sanchis, Jaime	1833	792
Suay Beltrán, Simón	1817	701
Sulroca, Bernardo	1766	271
Sulroca, Luciano	1762	36
Taguenga, Francisco	1762	186
Talens de la Riba Matoses, Vicente	1771	316
Tarazona, Cristóbal	1762	105

Ten Matamoros, Vicente Antonio	1811	677
Tinajero de la Escalera Borrás, Andrés M.	1769	298
Tinajero de la Escalera Borrás, Manuel M.	1762	228
Tío Genovés, Federico	1833	824
Tomás, Francisco	1762	17
Tomás Catalá, José	1773	347
Torner Canals, Juan Bautista Antonio	1764	240
Torner Barbarín, José	1778	422
Torner de Torner, Pedro	1826	767
Tortajada García, Antonio	1791	586
Tortosa Tudela, Mariano	1794	616
Torres, Alejandro	1762	28
Torruella Mulleras, Ramón	1833	814
Tovía Esplugues, Francisco	1769	302
Traver, Matías	1762	171
Traver, Pedro Vicente	1762	26
Traver Llorca, Pedro Luis	1788	545
Traver Lloria, Vicente Tomás	1791	582
Traviesa Tatay, Bartolomé	1790	562
Trives Galant, Jaime	1776	393
Trobat Ferris, Ginés	1762	163
Uberos Bella, Joaquín	1794	626
Urgelles Belloch, Antonio Bibiano	1775	380
Usurralde, Tomás	1762	84
Valdenóchez, Agustín de	1762	3
Valentí, José Pascual	1784	498
Valentí Llach, José Tomás	1817	700
Valero, Francisco	1762	129
Valor Barco, Antonio	1767	276
Valor Seguer, Vicente	1811	655
Vallo Carbonell, Miguel	1789	559
Varón del Castillo, Pedro	1762	166
Vélez Yanguas, Anselmo Eloy	1833	803
Vendrell, Diego	1762	204
Vercher, José Antonio	1762	101
Vercher, Manuel	1766	268
Vercher Gascó, José Pascual	1790	565
Vercher Orlandini, Joaquín Esteban	1794	631
Vercher Orlandini, Nicolás Pedro	1794	623
Verdejo Montañana, F. Xavier	1836	853
Verdejo Montañana, Miguel	1835	841
Verdú Mirambell, Silvestre	1728	780
Vergara Ballester, Vicente María	1791	583
Vergara Laguía, Juan Bautista	1769	287
Vidal Loustau, José	1773	348
Vila Moratalla, Francisco Luciano	1835	849
Vilache Ombiela, Francisco Antonio	1772	325
Vilache Ombiela, Vicente Isidoro	1772	326
Vilatela Laborda, Francisco	1781	463
Vilella Crespo, Andrés	1824	748

Villacampa Calpe, Salvador	1835	840
Villarroya, José	1762	131
Viñals Mauri, José Antonio	1777	415
Viñas Linares, Vicente	1833	821
Vivas Povo, Manuel	1768	280
Vives Crespo, Vicente	1788	544
Vives Pascual, Florencio	1820	736
Ximénez, Fermín	1778	419
Ximénez, José	1762	201
Ximénez Cabot, Manuel	1817	705
Ximénez Aliaga, Vicente	1992	589
Ximénez Pastor, Buenaventura	1814	689
Ximeno García, José	1773	345
Ximeno Franco, Juan José	1779	442
Ximeno Planes, Mariano	1775	383
Ximeno Martínez, Juan Bautista	1825	762
Ximeno Sanchiz, José	1826	765
Yánes, Tomás	1762	170
Zacarés Velázquez, José	1826	770
Zaragozá Sales, Gaspar	1775	374
Zaragozí Puerto, Francisco	1790	567

Resumen

<u>Año</u>	<u>Nº de Ingresos</u>
1762	227 ¹²⁶⁸
1763	7
1764	13
1765	9
1766	15
1767	8
1768	7
1769	18
1770	8
1771	10
1772	16
1773	12
1774	14
1775	19
1776	15
1777	19
1778	14
1779	11
1780	13
1781	11
1782	8
1783	19
1784	14
1785	5
1786	13
1787	10
1788	14
1789	12
1890	10
1791	15
1792	16
1793	8
1794	32
1795	-
1796	-
1797	-
1798	1
1799	-
1800	-

¹²⁶⁸ De estos 227 abogados 6 ingresaron en el Colegio mediante expedientes de incorporación. El resto lo hizo por mediación del estatuto XIX.

1801	-
1802	-
1803	-
1804	-
1805	-
1806	-
1807	-
1808	-
1809	-
1810	9
1811	26
1812	-
1813	10
1814	4
1815	1
1816	-
1817	30
1818	5
1819	3
1820	8
1821	2
1822	5
1823	1
1824	3
1825	13
1826	13
1827	2
1828	7
1829	6
1830	-
1831	-
1832	-
1833	40
1834	7
1835	12
1836	11
1837	3
1838	-

Total	864
--------------	------------

DECANOS

- 1759: Juan Bautista Monseny.
- 1763: Francisco Jerónimo de Saboya.
- 1764: Pedro Vicente Traver.
- 1765: Pedro Abaás.
- 1766: Vicente Rius.
- 1767: Ignacio Alfonso.
- 1768: Francisco Nadal.
- 1769: Vicente Ferrer.
- 1770: Juan Bautista Navarro.
- 1771: Juan Bautista Ferrando.
- 1772: Pedro Salvador.
- 1773: Cristóbal Tarazona.
- 1774: José Cases.
- 1775: José Ignacio Alfonso.
- 1776: Francisco Nadal.
- 1777: Tomás Villena (antes Salelles).
- 1778: José Villarroya.
- 1779: Joaquín Solsona.
- 1780: José María Alemany.
- 1781: Vicente Branchat.
- 1782: Joaquín Aparici Bas.
- 1783: Cristóbal Tarazona.
- 1784: Francisco Valero.
- 1785: Francisco Nadal.
- 1786: Juan Bautista Marau.
- 1787: Cipriano Máñez.
- 1788: Juan Bautista Calabuig.
- 1789: Francisco Bruno Sebastián.
- 1790: Joaquín Aparici Bas.
- 1791: Vicente Alagón.
- 1792: Juan Bautista Marau.
- 1793: Juan Andrés Ibáñez.
- 1794: Joaquín Boil.
- 1795: Juan Bautista Adell.
- 1796: Vicente Alfonso.
- 1797: Juan Antonio Pérez Clemente.
- 1798: Manuel Pro.
- 1799: Vicente Morata.
- 1800: José Soriano Nieto.
- 1801: José Pinazo Gómez.
- 1802: Joaquín Asensi.
- 1803: Pedro Sacristán.
- 1804: José Martínez.
- 1805: José Soriano Nieto.

1806: Pedro Cebolla.
1807: Andrés Feliciano Blat.
1808: Alonso Cabrera.
1809: Manuel Pro.
1810: José Antonio Sombiola. José Pinazo Nieto.¹²⁶⁹
1811: Vicente Martínez Bonet.
1814: Vicente Ximénez.
1814: Eugenio Jordá.
1815: Adriano Cerdá.
1816: Vicente Ferrando Segura.
1817: José González.
1818: José Antonio Sombiola.
1819: Pablo Font.
1820: Vicente Martínez Bonet.
1821: Victoriano Morera.
1822: Francisco Calbo Marco.
1823: Vicente Ferrando Segura.
1824: José González.
1825: Juan Bautista Sala.
1826: Esteban Cornes.
1827: Vicente Ferrando Segura.
1828: Joaquín Font.
1829: Ramón Gilabert.
1830: José Mariano Marín.
1831: Vicente Iranzo.
1832: Vicente Valor.
1833: Joaquín Font.
1834: Francisco Jaldero.
1835: Manuel Pardo.
1836: Francisco Moltó Miralles.
1837: Francisco Sanjuán.

¹²⁶⁹ Por marcharse de diputado a las Cortes el primero se nombra, el 25 de abril de 1811, a José Pinazo Nieto.

DIPUTADOS

- 1859: Diputado Primero: Benito Delfí. Francisco Saboya.¹²⁷⁰
Diputado Segundo: Francisco de Saboya. José Teodoro Botella.¹²⁷¹
Diputado Tercero: Pascual Yáñez. José Teodoro Botella. Tomás Salelles.¹²⁷²
Diputado Cuarto: Tomás Salelles. Juan Bautista Navarro.¹²⁷³
- 1763: Juan Bautista Monseny.
Vicente Ruiz.
Vicente Traver.
José Berní.
- 1764: Francisco Jerónimo Saboya.
Juan Bautista Monseny.
Mariano Caller.
Vicente Traver.
- 1765: Pedro Vicente Traver.
Francisco Jerónimo Saboya.
Ignacio Alfonso.
Francisco Nadal.
- 1766: Pedro Abaás.
Pedro Vicente Traver.
Vicente Ferrer.
José Cases.
- 1767: Vicente Rius.
Pedro Abaás.
Francisco Nadal.
José Vicente Quevedo.
- 1768: José Ignacio Alfonso.
Vicente Rius. Pedro Vicente Traver.¹²⁷⁴
Juan Bautista Navarro.
José Devesa.
- 1769: Francisco Nadal.
José Ignacio Alfonso.
Juan Bautista Ferrando.
Pedro Salvador.

¹²⁷⁰ No hay constancia en los libros de deliberaciones de que el primero asistiera a ninguna junta. En la de 13 de febrero de 1760 ya aparece en su lugar Francisco de Saboya, diputado primero hasta este momento.

¹²⁷¹ A partir de la junta de 13 de febrero de 1760 aparece ocupando este cargo José Teodoro Botella.

¹²⁷² Por fallecimiento del primero se eligió el 19 de noviembre de 1559 al segundo, sin que conste su aceptación ni renuncia, puesto que la siguiente junta que se celebró fue la de 13 de febrero de 1760, en la que aparece desempeñando este cargo el tercero.

¹²⁷³ El 13 de febrero de 1760 ya aparece al frente de este cargo Juan Bautista Navarro.

¹²⁷⁴ Por fallecimiento del primero se elige en su lugar, el 7 de enero de 1769, al segundo.

- 1770: Vicente Ferrer Peralta.
Francisco Nadal.
Diego de Mesa.
José Marín Navarro.
- 1771: Juan Bautista Navarro. Pedro Abaás.¹²⁷⁵
Vicente Ferrer Peralta.
José Cases.
José Villarroya.
- 1772: Juan Bautista Ferrando.
Pedro Abaás.
Cristóbal Tarazona.
Joaquín Fontanelles.
- 1773: Pedro Salvador.
Juan Bautista Ferrando.
José Vicente Quevedo.
Joaquín Aparici Bas.
- 1774: Cristóbal Tarazona.
Pedro Salvador.
Francisco Luis Almela.
Manuel Román.
- 1775: José Cases.
Cristóbal Tarazona.
Luis Vicente Moya.
Vicente Branchat.
- 1776: José Ignacio Alfonso.
José Case.
José Villarroya.
Francisco Ferrer.
- 1777: Francisco Nadal.
José Ignacio Alfonso.
Joaquín Solsona.
José María Alemany.
- 1778: Tomás de Villena (antes Salelles).
Francisco Nadal.
Vicente Branchat.
Joaquín Olano.
- 1779: José Villarroya.
Tomás Villena (antes Salelles).
José María Alemany.
Francisco Valero.
- 1780: Joaquín Solsona.
José Villarroya.
Joaquín Aparisi Bas.
Juan Bautista Marau.
- 1781: José María Alemany.
Joaquín Solsona.
Cristóbal Tarazona.

¹²⁷⁵ Por promoción del primero a alcalde del crimen de la Real Audiencia se nombró a Pedro Abaás.

- Carlos Sacristán.
- 1782: Vicente Branchat.
José María Alemany.
Juan Bautista Ferrando.
Juan Bautista Calabuig.
- 1783: Joaquín Aparici Bas.
Vicente Branchat.
Francisco Valero.
Joaquín Boyl.
- 1784: Cristóbal Tarazona.
Joaquín Aparici Bas.
Juan Bautista Marau.
José Ribera.
- 1785: Francisco Valero.
Cristóbal Tarazona.
Cipriano Máñez.
Antonio Valor.
- 1786: Francisco Nadal.
Francisco Valero.
José Soriano Nieto.
Matías Perelló.
- 1787: Juan Bautista Marau.
Francisco Nadal.
Juan Bautista Calabuig.
Vicente Alfonso.
- 1788: Cipriano Máñez.
Juan Bautista Marau.
Joaquín Mariano Boil.
Juan Bautista Adell Puig.
- 1789: Juan Bautista Calabuig.
Cipriano Máñez.
Pedro Cebrián Bordes.
Vicente Morata.
- 1790: Francisco Bruno Sebastián.
Juan Bautista Calabuig.
Matías Perelló.
José Pinazo.
- 1791: Joaquín Aparici Bas.
Francisco Bruno Sebastián.
José Ribera.
Juan Andrés Ibáñez.
- 1792: Vicente Alagón.
Joaquín Aparici Bas.
Juan Andrés Ibáñez.
Pedro Cebolla.
- 1793: Juan Bautista Marau.
Vicente Alagón.
Juan Bautista Adell.
Vicente Cervera.
- 1794: Juan Andrés Ibáñez.

- Juan Bautista marau.
Vicente Alfonso Martínez.
Pedro Sacristán.
- 1795: Joaquín Boil. Vicente Alagón.¹²⁷⁶
Juan Andrés Ibáñez.
Juan Antonio Pérez Clemente.
Andrés Blat.
- 1796: Juan Bautista Adell Puig.
Vicente Alagón.
Vicente Cervera.
Pascual Cardona.
- 1797: Vicente Alfonso Martínez.
Juan Bautista Adell Puig.
Juan Bautista Batifora.
José Martínez.
- 1798: Juan Antonio Pérez Clemente.
Vicente Alfonso Martínez.
Vicente Morata.
Juan Francisco Ramada.
- 1799: Manuel Pro.
Juan Antonio Pérez Clemente.
Pedro Cebolla.
Joaquín Asensi.
- 1800: Vicente Morata.
Manuel Pro.
Pedro Sacristán.
Vicente Ferrando Segura.
- 1801: José Soriano Nieto.
Vicente Morata.
Joaquín Asensi.
José Antonio Sombiola.
- 1802: José Pinazo Gómez.
José Soriano Nieto.
Vicente Ferrando.
Juan Bautista Calabuig.
- 1803: Joaquín Asensi.
José Pinazo.
José Antonio Sombiola.
Vicente Picó.
- 1804: Pedro Sacristán.
Joaquín Asensi.
Andrés Feliciano Blat.
Juan Francisco Ramada.
- 1805: José Martínez.
Pedro Sacristán.
Juan Bautista Alberola.
José González.
- 1806: José Soriano Nieto.

¹²⁷⁶ El 3 de diciembre del mismo año se nombra al segundo por fallecimiento del primero.

- José Martínez.
Manuel Pro.
Vicente Martínez Bonet.
- 1807: Pedro Cebolla.
José Soriano Nieto.
Alonso Cabrera.
Joaquín Fernández Blasco.
- 1808: Andrés Blat.
Pedro Cebolla.
José Martínez. José González.¹²⁷⁷
Bartolomé Martínez Zamorano.
- 1809: Alonso Cabrera.
Andrés Blat.
José Soriano Nieto.
Vicente Ximénez.
- 1810: Manuel Pro.
Alonso Cabrera.
Vicente Martínez Bonet.
Manuel Chiva.
- 1811: José Antonio Sombiola.
Manuel Pro. Andrés Blat.¹²⁷⁸
Vicente Ximénez.
Eugenio Jordá.
- 1814: Vicente Martínez Bonet.
José Antonio Sombiola.
Eugenio Jordá.
Vicente María Vergara.
- 1814: Vicente Ximénez.
Vicente Martínez Bonet.
Adriano Cerdá.
Juan Inocencio Adell.
- 1815: Eugenio Jordá.
Vicente Ximénez.
Vicente María Vergara.
Juan Bautista Sala.
- 1816: Adriano Cerdá.
Eugenio Jordá.
Juan Inocencio Adell.
Francisco de Paula Isnart.
- 1817: Vicente Ferrando Segura.
Adriano Cerdá.
Juan Bautista Sala.
Antonio Casanovas.
- 1818: José González.
Vicente Ferrando Segura.
Pablo Font.
José Antonio Peris.

¹²⁷⁷ El 7 de octubre se le acepta la renuncia del primero y se nombra al segundo.

¹²⁷⁸ Por fallecimiento del primero se nombra el 12 de agosto de 1812 a Andrés Blat.

- 1819: José Antonio Sombiola.
José González.
José Martínez.
Camilo Matas.
- 1820: Pablo Font.
José Antonio Sombiola.
Victoriano Morera.
Francisco Calvo Marco.
- 1821: Vicente Martínez Bonet.
Pablo Font.
Francisco Calvo Marco.
Pedro Barreda Centelles.
- 1822: Victoriano Morera.
Vicente Martínez Bonet.
Pedro Barreda Centelles. Vicente Ferrando Segura.¹²⁷⁹
Joaquín Font.
- 1823: Francisco Calvo Marco.
Victoriano Morera.
Ramón Gilabert.
Manuel Escolano.
- 1824: Vicente Ferrando Segura.
Francisco Calvo Marco.
Victoriano Morera.
Manuel Pardo.
- 1825: José González. Vicente Martínez Bonet.¹²⁸⁰
Vicente Ferrando Segura.
Esteban Corones.
José Mariano Marín.
- 1826: Juan Bautista Sala.
Vicente Martínez Bonet.
José Mariano Marín.
Francisco Jaldero.
- 1827: Esteban Corones.
Juan Bautista Berenguer (antes Sala).
Francisco Jaldero.
Juan Bautista Alberola.
- 1728: Vicente Ferrando Segura.
Esteban Corones.
Vicente Gil del Castillo.
Vicente Marco.
- 1829: Joaquín Font.
Vicente Ferrando Segura. Vicente Martínez Bonet.¹²⁸¹
Vicente Marzo.
Tomás Bru.

¹²⁷⁹ Por falta y ausencia notoria de Pedro Barreda Centelles se nombró el 12 de julio de 1823 al segundo.

¹²⁸⁰ Por fallecimiento del primero, el 30 de abril de 1826, se nombró al segundo.

¹²⁸¹ El 21 de enero de 1830 se eligió para este cargo a Vicente Martínez Bonet, al estar "vacante" la plaza.

- 1830: Ramón Gilabert.
Joaquín Font.
Vicente Iranzo.
Vicente Valor.
- 1831: José Mariano Marín.
Ramón Gilabert.
Vicente Valor.
Joaquín Romaguera.
- 1832: Vicente Iranzo.
José Mariano Marín.
Joaquín Romaguera.
Baltasar Reig.
- 1833: Vicente Valor.
Vicente Iranzo.
Tomás Bru.
Francisco Moltó Miralles.
- 1834: Joaquín Font.
Vicente Valor.
Manuel Pardo.
Francisco Moltó Miralles.
- 1835: Francisco Jaldero.
Joaquín Font.
Francisco Moltó Miralles.
Francisco Sanjuán.
- 1836: Manuel Pardo.
Francisco Jaldero.
Francisco Sanjuán.
Mariano Parra.
- 1837: Francisco Moltó Miralles.
Manuel Pardo.
Mariano Parra.
Vicente Tadeo Micó.

MAESTROS DE CEREMONIAS

- 1759: Pedro Abaás.
1763: José Teodoro Botella.
1764: Vicente Rius.
1765: Juan Bautista Monseny. Vicente Ferrer.¹²⁸²
1766: José Ignacio Alfonso.
1767: Pedro Vicente Traver.
1768: Pedro Abaás.
1769: Pedro Traver.
1770: José Ignacio Alfonso.
1771: Francisco Nadal.
1772: Vicente Ferrer Peralta.
1773: Pedro Abaás.
1774: Juan Bautista Ferrando.
1775: Pedro Salvador.
1776: Cristóbal Tarazona.
1777: José Cases.
1778: José Ignacio Alfonso.
1779: Francisco Nadal.
1780: Tomás Billena (antes Salelles).
1781: José Villarroya.
1782: Joaquín Solsona.
1783: José María Alemany.
1784: Vicente Branchat.
1785: Joaquín Aparici Bas.
1786: Cristóbal Tarazona.
1787: Francisco Valero.
1788: Francisco Nadal.
1789: Juan Bautista Marau.
1790: Ciriano Mániz.
1791: Juan Bautista Calabuig.
1792: Francisco Bruno Sebastián. Juan Andrés Ibáñez.¹²⁸³
1793: Joaquín Aparici Bas.
1794: Vicente Alagón.
1795: Juan Bautista Marau.
1796: Juan Andrés Ibáñez.
1797: Vicente Alagón.
1798: Juan Bautista Adell Puig.
1799: Vicente Alfonso.
1800: Juan Antonio Pérez.

¹²⁸² El 31 de mayo de 1766 se relevó del cargo, "por floxedad de sus piernas", a Juan Bautista Monseny, y se nombró en su lugar a Vicente Ferrer.

¹²⁸³ El 7 de agosto de 1793 se relevó del cargo al primero por su avanzada edad, nombrándose en su lugar al segundo, diputado segundo en esos momentos.

1801: Manuel Pro.
1802: Vicente Morata.
1803: José Soriano Nieto.
1804: José Pinazo.
1805: Joaquín Asensi.
1806: Pedro Sacristán.
1807: José Martínez.
1808: José Soriano.
1809: Pedro Cebolla.
1810: Andrés Blat.
1811: Alonso Cabrera. Juan Bautista Adell.¹²⁸⁴
1814: Andrés Blat.
1814: José Antonio Sombiola.
1815: Vicente Martínez Bonet.
1816: Vicente Ximénez.
1817: Andrés Blat.
1818: Adriano Jordá.
1819: Vicente Ferrando Segura.
1820: José González.
1821: José Antonio Sombiola.
1822: Pablo Font.
1823: Vicente Martínez Bonet.
1824: Joaquín Font.
1825: Francisco Calvo Marco.
1826: Vicente Ferrando Segura.
1827: Vicente Martínez Bonet.
1828: Juan Bautista Berenguer (antes Sala).
1829: Estevan Corones.
1830: Vicente Martínez Bonet.
1831: Joaquín Font.
1832: Ramón Gilabert.
1833: José Marco Marín.
1834: José Marí Marín.
1835: José Marí Marín.
1836: Joaquín Font.
1837: Francisco Jaldero.

¹²⁸⁴ Por fallecimiento del primero se nombra, el 12 de agosto de 1812, a Juan Bautista Adell.

TESOREROS

1759: Vicente Salvanchuna. Mariano Caller.¹²⁸⁵

1763: José Ignacio Alfonso.

1764: Diego de Mesa.

1765: Juan Bautista Navarro.

1766: Cristóbal Tarazona.

1767: Juan Bautista Ferrando.

1768: Juan Bautista Ravanals.

1769: Francisco Luis Almela.

1770: Vicente Luis Moya.

1771: Juan Crespí.

1772: José Marzal Marco.

1773: Antonio Berenguer.

1774: Juan Bautista Ferrán.

1775: Vicente del Campo.

1776: Joaquín Solsona.

1777: Joaquín Antonio Salón.

1778: Francisco Bruno Sebastián.

1779: Cristóbal Tarazona.

1780: José Ignacio Alfonso.

1781: Francisco Nadal.

1782: José Villarroya.

1783: Pedro Salvador.

1784: Cipriano Máñez.

1785: José Soriano Nieto.

1786: Juan Bautista Vergara.

1787: Esteban Benlloch.

1788: Pedro Cebrián.

1789: José Rivera.

1790: Vicente Alagón.

1791: José Pinazo.

1792: Manuel Pro. Vicente Alagón.¹²⁸⁶

1793: Juan Bautista Batifora.

1794: Juan Bautista Adell.

1795: Pedro Cebolla.

1796: Vicente Alagón.

1797: Manuel Pro.

1798: José Martínez.

1799: Pedro Sacristán.

1800: Joaquín Asensi.

¹²⁸⁵ Desde la junta de 13 de febrero de 1760 aparecerá desempeñando este cargo el segundo.

¹²⁸⁶ El 22 de enero de 1793 se nombró a Vicente Alagón por serle a Manuel Pro el cargo "embarazoso, y no poder continuar por otros motivos".

- 1801: Vicente Ferrando.
1802: José Antonio Sombiola.
1803: Juan Antonio Pérez Clemente.
1804: Juan Bautista Alverola.
1805: Alonso Cabrera.
1806: Cristóbal Ojalde. Alonso Cabrera.¹²⁸⁷
1807: Pedro Sacristán.
1808: Vicente Martínez Bonet.
1809: Pedro Sacristán.
1810: Vicente Ximénez.
1811: José Ribera Gilabert.¹²⁸⁸
1814: Adriano Cerdá
1814: Vicente María Vergara.
1815: Juan Inocencio Adell.
1816: Juan Bautista Sala.
1817: Francisco de Paula Isnart. Pablo Font.¹²⁸⁹
1818: Vicente Martínez Bonet.
1819: Pedro Sacristán.
1820: Pedro Sacristán. Francisco Jaldero.¹²⁹⁰
1821: Vicente Ferrando Segura.
1822: Ramón Gilabert.
1823: Joaquín Font.
1824: Esteban Corones.
1825: Vicente Gil del Castillo.
1826: Vicente Gil del Castillo.
1827: Vicente Gil del Castillo.
1828: Vicente Iranzo.
1829: Vicente Iranzo.
1830: Fermín Sánchez.
1831: Fermín Sánchez.
1832. Fermín Sánchez.
1833. Francisco Jaldero.
1834: Vicente Gil del Castillo.
1835: Vicente Gil del Castillo.
1836: Vicente Gil del Castillo.
1837: José Carsi de Diego.

¹²⁸⁷ Por haber sido excluido del Montepío el primero, el 5 de noviembre del mismo año se nombra en su lugar a Alonso Cabrera.

¹²⁸⁸ Debido a su ausencia, el 18 de agosto de 1813 se declaró este cargo vacante, a la espera de nueva designación, que ya no se produjo.

¹²⁸⁹ Por haber sido nombrado el primero relator del Consejo de Castilla, el 22 de noviembre se nombró en su lugar al segundo.

¹²⁹⁰ Por fallecimiento del primero se nombró el 27 de julio de 1821 a Francisco Jaldero.

SECRETARIOS DEL COLEGIO

1759: José Berní Catalá.
1763: Vicente Ferrer.
1764: Francisco Nadal.
1765: José Cases.
1766: José Vicente Quevedo.
1767: José Devesa.
1768: Pedro Salvador.
1769: José Marín Navarro.
1770: José Villarroya.
1771: Joaquín Fontanelles.
1772: Joaquín Aparici Bas.
1773: Manuel Román.
1774: Vicente Branchat.
1775: Francisco Ferrer.
1776: José María Alemany.
1777: Joaquín Olano.
1778: Francisco Valero.
1779: Juan Bautista Marau.
1780: Carlos Sacristán.
1781: Juan Bautista Calabuig.
1782: Joaquín Mariano Boil
1783: José Ribera.
1784: Antonio Valor.
1785: Matías Perelló.
1786: Vicente Alfonso Martínez.
1787: Juan Bautista Adell.
1788: Vicente Morata.
1789: José Pinazo.
1790: Juan Andrés Ibáñez.
1791: Pedro Cebolla Fita.
1792: Vicente Cervera.
1793: Pedro Sacristán.
1794: Andrés Blat.
1795: Pascual Cardona.
1796: José Martínez.
1797: Juan Francisco Ramada.
1798: Joaquín Asensi.
1799: Vicente Ferrando Segura.
1800: José Antonio Sombiola.
1801: Juan Bautista Calabuig.
1802: Vicente Picó.
1803: Juan Francisco Ramada.
1804: José González.
1805: Vicente Martínez Bonet.

1806: Joaquín Fernández Blasco.
1807: Bartolomé Martínez Zamorano.
1808: Vicente Ximénez.
1809: Manuel Chiva.
1810: Eugenio Jordá.
1811: Salvador Algarra.¹²⁹¹
1814: Juan Inocencio Adell.
1814: Victoriano Morera. Juan Bautista Sala.¹²⁹²
1815: Francisco de Paula Isnart.
1816: Antonio Casanovas Mayor.
1817: José Antonio Pérez.
1818: Camilo Matas.
1819: Francisco Calbo Marco.
1820: Pedro Barreda Centelles.
1821: Joaquín Font.
1822: Manuel Escolano.
1823: Manuel Pardo.
1824: José Ignacio Marín.
1825: Francisco Jaldero.
1826: Juan Bautista Alberola.
1727: Vicente Marzo.
1728: Tomás Bru.
1729: Vicente Valor.
1730: Joaquín Romaguera.
1731: Baltasar Reig.
1732: Francisco Moltó.
1733: Antonio Casanovas.
1734: Francisco Sanjuán.
1735: Mariano Parra.
1736: Vicente Tadeo Micó.
1737: Atanasio Checa.

¹²⁹¹ Debido a su enfermedad, el día 18 de agosto de 1813 se acordó declarar vacante este cargo, a la espera de nueva designación, que no se produjo. No obstante, Eugenio Jordá, diputado cuarto, desempeñó, de hecho, este oficio al mismo tiempo desde la junta de 11 de agosto, como establecía el estatuto XI.

¹²⁹² El 12 de diciembre se nombra en lugar del primero, por haber dimitido, a Juan Bautista Sala.

SECRETARIOS DEL MONTEPIÓ

- 1778: José Villarroya. José María alemany.¹²⁹³
1779: Joaquín Aparici y Bas.
1780: Manuel Román.
1781: Manuel Román.
1782: Ignacio Llopis Ferris.
1783: Carlos Sacristán.
1784: José Miñana.
1785: José Miñana.
1786: Vicente Morata.
1787: Juan Antonio Pérez Clemente.
1788: Juan Antonio Pérez Clemente.
1789: Juan Antonio Pérez Clemente.
1790: Juan Antonio Pérez Clemente.
1791: Juan Antonio Pérez Clemente.
1792: Juan Antonio Pérez Clemente.
1793: Juan Antonio Pérez Clemente.
1794: Juan Antonio Pérez Clemente.
1795: Juan Antonio Pérez Clemente.
1796: Juan Antonio Pérez Clemente.
1797: José Pinazo Gómez.
1798: Juan Antonio Pérez Clemente.
1799: Juan Antonio Pérez Clemente.
1800: Juan Antonio Pérez Clemente.
1801: Juan Antonio Pérez Clemente.
1802: Juan Antonio Pérez Clemente.
1803: Vicente Ferrando Segura.
1804: Alonso Cabrera.
1805: Juan Francisco Ramada.
1806: Manuel Chiva.
1807: Vicente Martínez Bonet.
1808: Juan Bautista Adell.
1809: Eugenio Jordá.
1810: José Ribera.
1811: José Martín Cortés.
1814: Pedro Bragues. Francisco de Paula Isnart.¹²⁹⁴
1815: Antonio Casanova Ravanals.
1816: Pedro Barreda Centelles.
1817: Pedro Barreda Centelles.
1818: Pedro Barreda Centelles.

¹²⁹³ El primero fue secretario desde la fundación del Montepío, el 11 de abril, hasta la elección de cargos de 28 de agosto, en que pasó a ocupar el cargo el segundo.

¹²⁹⁴ El primero fue nombrado en la elección de 22 de febrero, y el segundo en la de 28 de agosto.

1819: Pedro Barreda Centelles.
1820: Vicente Climent.
1821: Vicente Climent.
1822: Salvador Algarra.
1823: Vicente Gil del Castillo.
1824: Nicolás Puigcerver.
1825: Nicolás Puigcerver.

PROCEDENCIA DE GEOGRÁFICA LOS COLEGIADOS

	<u>S. XVIII</u>	<u>1800-37</u>	<u>38-61</u>	<u>Total</u>
<u>Ciudad de Valencia</u>	210	127	341	678

<u>Provincia de Valencia.</u>	<u>S. XVIII</u>	<u>1800-37</u>	<u>38-61</u>	<u>Total</u>
Ademuz	1			1
Adzaneta		1		1
Agullent		1	1	2
Alacuás	1			1
Albaida	5	1	7	13
Albalat dels Sorells	1		1	2
Alberique	1		5	6
Alcudia	3			3
Alcudia de Carlet		1	4	5
Alfara del Patriarca			1	1
Alfarrasí			1	1
Algar		1		1
Algemesí	1		2	3
Almoines			1	1
Alzira	4	1	5	10
Anna	1		1	2
Antella			1	1
Ayelo de Malferit	3			3
Ayora	2		3	5
Bélgida	2			2
Benaguacil			1	1
Beniarjó			1	1
Beniatjar		1		1
Benicalaf	1			1
Benifairó			1	1
Benifayó de Espioca			1	1
Benifayó de Falcó	1			1
Benigánim	1		3	4
Benimaclet			1	1
Benimasot			2	2
Benisuera			1	1
Bocairente		3	1	4
Bonrepós			2	2
Buñol			1	1
Burjasot			1	1
Campanar	1			1

Canals	2			2
Carcagente	4		2	6
Carlet	1	1	1	3
Castellón de Rugat			1	1
Catarroja			1	1
Caudiel		1		1
Chella			1	1
Chelva	2	2	1	5
Cheste			1	1
Chiva	1		1	2
Cogullada	1			1
Cortes de Arenoso	1			1
Cuatrecorda			3	3
Cullera	5	1	15	21
Enguera	1	1	2	4
Énova			1	1
Faura	1		3	4
Fuente de Encarroz	1		1	2
Fuente la Higuera	1			1
Gandía	3	2	12	17
Gestalgar			1	1
Godella			1	1
Grao de Valencia	2	2	4	8
Guadasuar	3			3
Játiva	6	1	21	28
Liria	1	2	6	9
Llaurí	1			1
Llosa de Ranes			1	1
Macastre	1	1		2
Manuel			1	1
Mogente	2		3	5
Montserrat		1	1	2
Oliva	5	2	2	9
Ollería	4	2	1	7
Onteniente	4	2	4	10
Palomar			1	1
Pedralba			1	1
Picasent		1	1	2
Piles	2			2
Pobla de Vallbona			1	1
Potríes			1	1
Puebla Larga		1		1
Puebla de San Miguel	1			1
Puzol	1			1
Requena			4	4
Ruzafa	2	2	4	8
Sagunto	5		8	13
Silla			2	2
Simat de Valldigna	1			1
Sinarcas	1			1

Sollana			1	1
Sueca	3	4	7	14
Sumacárcel	1		1	2
Tavernes de Valldigna	2		4	6
Torrella	1			1
Turís	1	1	1	3
Utiel			1	1
Villagordo del Cabriel			1	1
Villalonga	1			1
Villamarchante		1		1
Villanueva de Castellón	1		5	6
Villar del Arzobispo		1		1
Total	105	42	185	332

<u>Provincia de Alicante.</u>	<u>S. XVIII</u>	<u>1800-37</u>	<u>38-61</u>	<u>Total</u>
Agost	1			1
Agres	1			1
Alcoleja	1		1	2
Alcoy	2		12	14
Alfafara	1			1
Alicante	7	1	11	19
Altea			8	8
Aspe	1		1	2
Beniarbeig	1			1
Beniardá	1			1
Benidorm			1	1
Benigembla			1	1
Benilloba	1		1	2
Benimantell	1			1
Benisa	1	1		2
Biar	1	1	4	6
Calpe		1	1	2
Callosa de Ensarriá	3	2	5	10
Callosa del Segura	2	1	1	4
Castalla	2			2
Cocentaina	5	4	6	15
Crevillente	1			1
Denia	2			2
Elche	4	1	2	7
Elda		1	1	2
Finestrat			1	1
Gorga		1		1
Guadalest			1	1
Ibi	5			5
Jalón	1			1
Jijona	2		4	6
Monforte		1	1	2

Monóvar		1	1	2
Muchamiel	6		2	8
Muro de Alcoy			2	2
Novelda			1	1
Ondara	1			1
Onil	1		2	3
Orihuela	4	1	7	12
Pego	3		3	6
Penáguila	1			1
Petrel		1	1	2
Planes	2			2
Polop	1			1
Relleu	1		1	2
San Juan	2			2
Sella	2			2
Tárbena			1	1
Teulada			2	2
Tibi	1		3	4
Villajoyosa	1		4	5
Villena			7	7
Total	73	18	100	191

<u>Provincia de Castellón.</u>	<u>S. XVIII</u>	<u>1800-37</u>	<u>38-61</u>	<u>Total</u>
Alcalá de Chivert	3			3
Alcanar			1	1
Alcora	2	1		3
Almenara	1			1
Altura	4	1	2	7
Artana			1	1
Bechí	1			1
Bejís	1			1
Benasal		1		1
Benicarló	1	1	1	2
Burriana			3	3
Cabanes			1	1
Calig			1	1
Castellfort	1			1
Castellón	4	1	11	16
Catí	1	2		3
Chisbert			1	1
Chiva de Morella	1			1
Forcall			1	1
Gaybriel			1	1
Jana, La	1			1
Jérica	1	1	3	5
Lucena			1	1
Morella	1		1	2

Nules	1		2	3
Onda	1	2	2	5
San Mateo	2			2
Segorbe	6	1	4	11
Soneja	1			1
Traiguera	1			1
Vall de Uxó	1			1
Vilafamés	1			1
Villarreal	5		2	7
Vinaroz	7		2	9
Vistabella	1			1
Viver	1			1
Total	51	11	41	103

<u>Otros.</u>	<u>S. XVIII</u>	<u>1800-37</u>	<u>38-61</u>	<u>Total</u>
Albacete			1	1
Albalate (Aragón)	1			1
Alboloduy (Almería)			1	1
Alborca (Albacete)			1	1
Alcahudete (Jaén)		1		1
Alcalá del Río (Sevilla)			1	1
Alconchel (Zaragoza)			1	1
Almonte (Huelva)	1			1
Alfaro (La Rioja)			1	1
Andorra (Teruel)	1			1
Arcos (Teruel)	1		1	2
Bada			1	1
Balaguer (Lérida)	1			1
Baños de Molgas (Orense)			1	1
Barcelona	3	1	7	11
Bayona			1	1
Beade (Pontevedra)			1	1
Berbinzana (Navarra)	1			1
Buenache (Cuenca)	1			1
Calig (Tarragona)		1		1
Camarillas (Madrid)			1	1
Cañada del Hoyo, La (Cuenca)		1		1
Cañete (Cuenca)		1		1
Cartagena	1	1	2	4
Casas de Ves (Albacete)			1	1
Caspe (Zaragoza)			1	1
Caudete (Albacete)			2	2
Cervera de Pisuerga (Palencia)			1	1
Cherta (Tarragona)			1	1
Cinco Alquerías (Murcia)	1			1
Ciudadela (Baleares)			1	1
Coín (Málaga)	1			1

Collado (Aragón)	1		1
Cuenca	1		1
Egea de los Caballeros (Zaragoza)		1	1
Ferrol (La Coruña)		1	1
Fuentealbilla (Albacete)		1	1
Gascueña (Cuenca)		1	1
Granada		2	2
Guardia	1		1
Habana, La (Cuba)		2	2
Hellín (Albacete)	1	2	3
Huesca		1	1
Ibiza		2	2
Jaén		1	1
Javaloyas (Teruel)		2	2
Jumilla (Murcia)		1	1
Laperdiguera (Huesca)		1	1
Liétor (Albacete)	1		1
Lorca (Murcia)	1	1	2
Luzas (Huesca)	1		1
Madrid		1	7
Mahón (Balears)			1
Manresa (Barcelona)	1		1
Málaga		1	1
Mesina (Italia)	1		1
Montiel (Ciudad Real)		1	1
Mora de Rubielos (Teruel)		1	1
Motilla del Palancar (Cuenca)		1	1
Motrico (Guipúzcoa)		1	1
Mula (Murcia)		1	1
Murcia	1	5	6
Navés (Lérida)		1	1
Osagre (Cáceres)		1	1
Oviedo		2	2
Palma de Mallorca		1	4
Pamplona		3	3
Peraleja (Cuenca)	1		1
Peralejos (Teruel)	1		1
Petrén		1	1
Pitarque (Teruel)	1		1
Provencio, El (Cuenca)	1		1
Puerto Mingalbo (Aragón)	1		1
Reus (Tarragona)		1	1
Riaza (Segovia)	1		1
Roa (Burgos)	1		1
Salamanca	1	1	2
San Feliu de Payarols (Gerona)		1	1
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)		1	1
Santa María del Campo (Burgos)		1	1
Santo Domingo (América)	1		1
Sarrión (Teruel)		1	1

Segovia			1	1
Sevilla	1		1	2
Soto (Santander)			1	1
Talavera de la Reina (Toledo)			2	2
Tebar (Cuenca)			1	1
Teruel		1		1
Terzaga (Guadalajara)			1	1
Tortosa (Tarragona)	1		2	3
Totana (Murcia)			1	1
Ulldecona (Tarragona)	2			2
Vahalobre			1	1
Valhermoso (Guadalajara)		1		1
Valladolid	1		3	4
Velez (Málaga)			1	1
Vélez-Málaga (Málaga)			1	1
Villafranca del Campo (Zaragoza)		1		1
Villamayor de Santiago (Cuenca)		1		1
Villarrobledo (Ciudad Real)		1	1	2
Villarroya de los Pinares (Teruel) 1				1
Villel (Teruel)			1	1
Yecla (Murcia)			1	1
Zaragoza		1	3	4
Total	32	22	104	158

Total colegiados	471	220	771	1.462
-------------------------	------------	------------	------------	--------------

Sibram^{to} de 128108

6

Q

Enor^{de} Dn Juan Bautista Ferrando
Thesoroero de nuestro Il^{mo} Colegio, se
servirá V^m pagar á Francisco
cantidad fran^{ca} Guilelmo Macipe doce Sibras y diez
sueldos por el medio año de su situa-
do, q^{ue} ovenció en el día de S^{to} Juan
de Junio de este año; que con su re-
cibo se le hará á V^m el abono cor-
respondiente en las cuentas, q^{ue} dize
de su thesoreria. Valencia, y Junio 28.
de 1768

D. D. Joseph Ignacio Moya

D. D. Vicente Luis de C. Pedro Aba

D. D. Joseph Penes
S. p. o.

4

Recibi del S.^o D.ⁿ Adriano Cordá, como Tesorero del
YH.^o Colegio de Abogados de esta Ciudad la can-
tidad de noventa y quatro reales vellon por la
impresion y papel de 200. Cartas de Pago, y 200 es-
quelas de convocacion a la Misa y de Devon sobre la
llegada a esta Capital el S.^o D.ⁿ Fernando 7.^o

Valencia 5. de Abril de 1814.

Con V. A. V. ^{vu} # Pagare

Martin Peris

Pimenez
Tome xaron.
Adell

15

Confieso yo D.^a Antonia Alfonso Viuda del D.ⁿ D.ⁿ Rafael
Moron Abogado que fue de este YH.^o Colegio, haver recivi-
do por manos del S.^o Tesorero del mismo Cuarenta rea-
les vellon los mismos que se han deliberado entregar a ca-
da Viuda sobre por los S.^{os} componentes la Junta del
propio YH.^o Colegio, en celebridad de la venida a esta Ca-
pital de Nuestro suspirado Monarca el S.ⁿ Fernando
7.^o = Val.^a y Mayo 3 de 1814 e D.^a Antonia Alfonso

Pagare
Pimenez

Tome xaron.
Adell

+

Muy Sr.

Valencia y Mayo
21 de 1764.

El Sr. D. Joseph Igua-
cio Alfaro Teronero
del H. Colegio se ex-
pone en esta
parte veinte D.
Valencianos, por via
de limosna que
se le abonara en
quenta

Sabido

Da D.ª D.ª meina Chot, viuda
del D.ª D.ª Antonio Taudenes;
Sup.^{te}, con la mas profunda bene-
racion dice: Que se halla consti-
tuida en miserable estado, con tan-
tos hijos, q.^e causa la mayor com-
pacion; puer aunque parece una
alqueria, carece de renta, por
estar empeñada para siete años,
a causa de unas obras, segun
es publico, y notorio; y no quedandole en el dia otro recurso, q.^e
el de la piedad de V. como a
Decano del H.^e Colegio, del q.^e
fue uno de los Individuos el ma-
nido de la Sup.^{te}

Por tanto =

A D.ª suplica, se viva como a D.ª

cano del Il.^o Colegio de Abogados,
aprobare de la Sup.^{te} con una
uniforme. Piedad, y Gracia q^e es
peza de Dr. M. H.^c

✱ LISTA

DE LOS ABOGADOS DEL COLEGIO DE LA CIUDAD DE VALENCIA,
que residen en ella para el año 1794.

El numero marginal denota la antigüedad de cada uno.

INDIVIDUOS QUE EN ESTE AÑO COMPONEN LA JUNTA,
que baxo la proteccion del Real y Supremo Consejo, y de esta Real Audiencia tiene el gobierno economico del Colegio, y Monte Pio.

DECANO.

48 D. Juan Andrés Ivañes.

- | | |
|---|--|
| <p>23 D. Juan Bautista Marau, <i>Diputado primero.</i></p> <p>27 D. Vicente de Alagón, <i>Diputado segundo.</i></p> <p>19 D. Joaquín Aparici y Bas, <i>Maestro de Ceremonias.</i></p> <p>49 D. Juan Bautista Adell y Puig, <i>Diputado tercero.</i></p> | <p>82 D. Vicente Cervera, <i>Diputado quarto.</i></p> <p>103 D. Juan Bautista Battifora, <i>Tesorero.</i></p> <p>116 D. Pedro Sacristán, <i>Secretario del Colegio, y Contador del Monte Pio.</i></p> <p>43 D. Juan Antonio Perez Clemente, <i>Secretario del Monte Pio.</i></p> |
|---|--|

EX-DECANOS.

- | | |
|---|--|
| <p>2 D. Josef Ignacio Alfonso.</p> <p>4 D. Juan Bautista Ferrando.</p> <p>9 D. Christoval Tarazona.</p> <p>3 D. Josef Cases.</p> <p>D. Joaquín Aparici y Bas.</p> | <p>D. Juan Bautista Marau.</p> <p>12 D. Cipriano Mañes.</p> <p>42 D. Juan Bautista Calabuig.</p> <p>1 D. Francisco Bruno Sebastian.</p> <p>D. Vicente de Alagón.</p> |
|---|--|

ABOGADOS DE POBRES.

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 164 D. Thomàs Luis Espí. | 217 D. Manuel Cortes y Sanz. |
|--------------------------|------------------------------|

EXAMINADORES.

- | Terna primera. | Terna segunda. | Terna tercera. |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| El Señor Decano. | D. Juan Bautista Marau. | D. Vicente de Alagón. |
| D. Vicente Cervera. | 86 D. Josef Ximeno. | 119 D. Antonio Eduardo Masó. |
| 127 D. Francisco Vilatela. | 165 D. Pedro Aparici y Ortiz. | 187 D. Josef Pasqual Verchér y Gascó. |

SIGUEN LOS ABOGADOS DEL COLEGIO POR ORDEN
alfabetico de sus apellidos.

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <p>A</p> <p>80 Abás D. Pasqual.</p> | <p>73 Alberola D. Juan Bautista.</p> | <p>52 Albornóz D. Francisco.</p> <p>118 Albors D. Vicente.</p> |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|

- 75 Alfonso y Martinez D. Vicente.
114 Alfonso D. Vicente Fernandez.
100 Almansa D. Manuel.
176 Almela D. Manuel Antonio.
5 Aparici D. Josef.
28 Aparici D. Juan Bautista.
135 Armengol D. Vicente.
142 De Ato D. Pasqual.
102 Asensi D. Joaquin.
85 Aúšina D. Thomás.
202 Antoni y Martí D. Juan Bautista.
163 Agulló D. Vicente.
B
83 Badia D. Miguel.
20 Ballester D. Vicente.
171 Ballester D. Mariano.
99 Barberá D. Marcos.
101 Baeza D. Josef.
47 Beneyto D. Josef.
89 Bernabé D. Francisco.
15 Bertet D. Josef.
25 Bertet y Porcár D. Luis, *Presbitero*.
50 Bou D. Feliciano.
193 Blasco D. Josef, *Presbitero*.
84 Boígues D. Thomás.
58 Boíl D. Joaquin.
181 Borella D. Theodoro.
206 Beltran D. Miguel.
79 Blat D. Andrés Feliciano.
24 Borrás D. Agustin.
137 Belmonte D. Josef.
C
156 Cabezas D. Josef.
166 Cabrera D. Alonso.
29 Campos D. Mariano.
130 Campos D. Josef.
31 Capou D. Thomás.
115 Carbonell y García D. Josef.
196 Carbonell D. Antonio.
88 Carrei D. Vicente.
122 Cardona D. Pasqual.
141 Casanovas D. Antonio.
204 Calabuig y Mompó D. Juan Bautista.
38 Cazador D. Patricio.
97 Cebolla D. Pedro.
151 Cerdá D. Adriano.
215 Chiva D. Manuel.
76 Clément D. Manuel Bernardo.
45 Coloma D. Luis.
158 Colomé y Jordá D. Juan Bautista.
36 Corones D. Andrés.
179 Corones D. Esteyan.
124 Cortell D. Xavier.
218 Cremades D. Antonio.
71 De la Cueva D. Josef Ignacio.
201 Cuñat D. Juan Bautista.
D
44 Dasí D. Josef Antonio.
E
175 Escolá D. Salvador.
18 Escudé D. Francisco Benito.
39 Eскурriola y Grau D. Vicente.
107 Esteve D. Josef.
F
149 Fernandez Blasco D. Joaquin.
70 Ferrando D. Josef.
93 Ferrando y Gil D. Pasqual Antonio.
182 Ferrando y Segura D. Vicente.
168 Ferrandis D. Joaquin.
106 Ferrer D. Pedro Juan.
153 Ferrer y Olmos D. Carlos.
161 Fita y Capella D. Josef.
67 Font D. Pablo.
55 Fraylé y Furió D. Vicente.
26 Franch D. Josef.
133 Franch y Lluçia D. Josef.
113 Fuertes D. Joaquin.
108 Furió D. Vicente.
G
169 Gallel D. Josef Felipe.
154 Gamborino D. Pasqual.
140 Ganga D. Bernardino.
121 Gascó D. Vicente.
180 Gascó D. Mariano.
150 Gascon D. Eusebio.
157 Genovés D. Josef Gregorio.
90 Gomez de Bustamante D. Bernardo.
143 Gómez y Pau D. Josef.
30 Gomis D. Miguel.
147 Gomis D. Juan Bautista.
96 Gonzalez Meseguér D. Josef.
33 Guerau D. Antonio.
208 Ginart y Torán D. Mariano.
H
132 Herbás D. Juan Bautista.
180 Hernan Saiz D. Miguel.
I
186 Isnart D. Francisco de Paula.
177 Insa D. Josef.
170 Iruñzun D. Vicente.
J
128 Jornét D. Joaquin.
54 Jover D. Josef Antonio, *Presbitero*.
126 Jover D. Francisco Damian.
210 Jordá y Furió D. Eugenio.
L
77 Lasala D. Josef.
66 Llerena y Valls D. Antonio.
34 Llorente D. Antonio.
160 Llorca D. Policarpio.
61 Locela D. Manuel.
17 Luz D. Pedro Pablo.
M
11 Malatesta D. Nicolás.
105 Mañes D. Luis.
162 Maquivar D. Francisco Vicente.
214 Marco y Layrach D. Josef.
64 Marin D. Josef Mariano.
110 Marin D. Carlos Cipriano, *Presbitero*, y *Pavordre*.
60 Martinez de Viciedo D. Manuel.
144 Martinez D. Josef.
194 Martinez D. Bruno.
188 Martinez Zamorano D. Bartholomé.

- 209 Margarit y Pujasóns D. Francisco.
32 Matas D. Juan Bautista.
203 Matas D. Camilo.
213 Mascarós D. Joaquín.
148 Medina del Pomar D. Joaquín María.
219 Melchor D. Joaquín.
37 Miñana D. Josef.
191 Miralles de Anglesola D. Pedro.
123 Montanér D. Gabriel.
152 Monserrat y Barberá D. Joaquín.
136 Morató D. Manuel.
74 Morata D. Vicente.
13 Morón D. Vicente.
205 Monzó D. Josef.
N
14 Nadal D. Vicente.
145 Naudin D. Tomás.
120 Nebot y Villanueva D. Fermín.
111 Nebot y Perunier D. Juan Bautista.
178 Nebot D. Francisco de Paula.
167 Nogués y Rimbaut D. Juan Josef.
O
112 Ojalde D. Christoval.
16 Orellana D. Marcos Antonio.
22 Olano D. Joaquín.
109 Ortuño D. Josef Antonio.
P
138 Pallarés D. Francisco.
69 Pasqual D. Pedro.
134 Pasqual D. Christoval.
40 Pelechá D. Gabriel.
139 Peris D. Josef Antonio.
94 Perez Cordovés D. Matías.
41 Piamonte D. Vicente.
68 Picó D. Vicente.
117 Piera D. Pasqual.
190 Polop D. Francisco Antonio.
59 Poyo D. Josef.
92 Pró D. Manuel.
155 Pajaron y Alvarez D. Josef.
87 Pinazo D. Josef.
R
159 Ramon y Bondia D. Agustín.
183 Reig D. Francisco.
95 Riera D. Vicente Salvador.
46 Ribera D. Josef.
207 Ribera y Gilabert D. Josef.
172 Romero y Mollá D. Manuel Pablo.
131 Romero D. Pedro, *Presbitero*.
81 Ronda D. Jayme.
91 Rubio D. Felipe.
216 Ruiz de Asin D. Josef.
S
104 Salabert D. Manuel.
10 Salabert D. Antonio.
51 Salabert D. Josef, *Presbitero*.
6 Salazar D. Luis Vicente.
192 Salazar D. Estanislao Xavier.
78 Salelles de Berenguer D. Manuel.
56 Salelles y Molina D. Josef.
8 Salon D. Joaquín Antonio.
62 Sanchis D. Carlos.
63 Sanchis D. Ramon.
199 Sanahuja y Mei D. Vicente.
129 Simó D. Salvador.
125 Soler D. Francisco de Paula.
35 Soriano y Nieto D. Josef.
185 Sombiola D. Josef Antonio.
57 Soriano de Casimiro D. Manuel, *Presbitero*.
212 Soriano de Casimiro D. Jayme.
211 Soriano de Casimiro D. Josef.
220 Soriano y Requena D. Tomás.
53 Sulroca D. Bernardo.
T
72 Talens de la Riba D. Vicente.
65 Tobia y Esplugues D. Francisco.
198 Tortajada D. Antonio.
174 Traver D. Pedro Luis.
195 Traver D. Vicente Tomás.
184 Traviesa D. Bartholomé.
V
146 Valentí D. Josef Pasqual.
7 Vercher D. Josef Antonio.
197 Vergara D. Vicente María.
173 Vives Crespo D. Vicente.
X
98 Ximeno D. Mariano.
200 Ximenez D. Vicente.
Y
21 Yañes D. Tomás.
Z
189 Zaragoz D. Francisco.

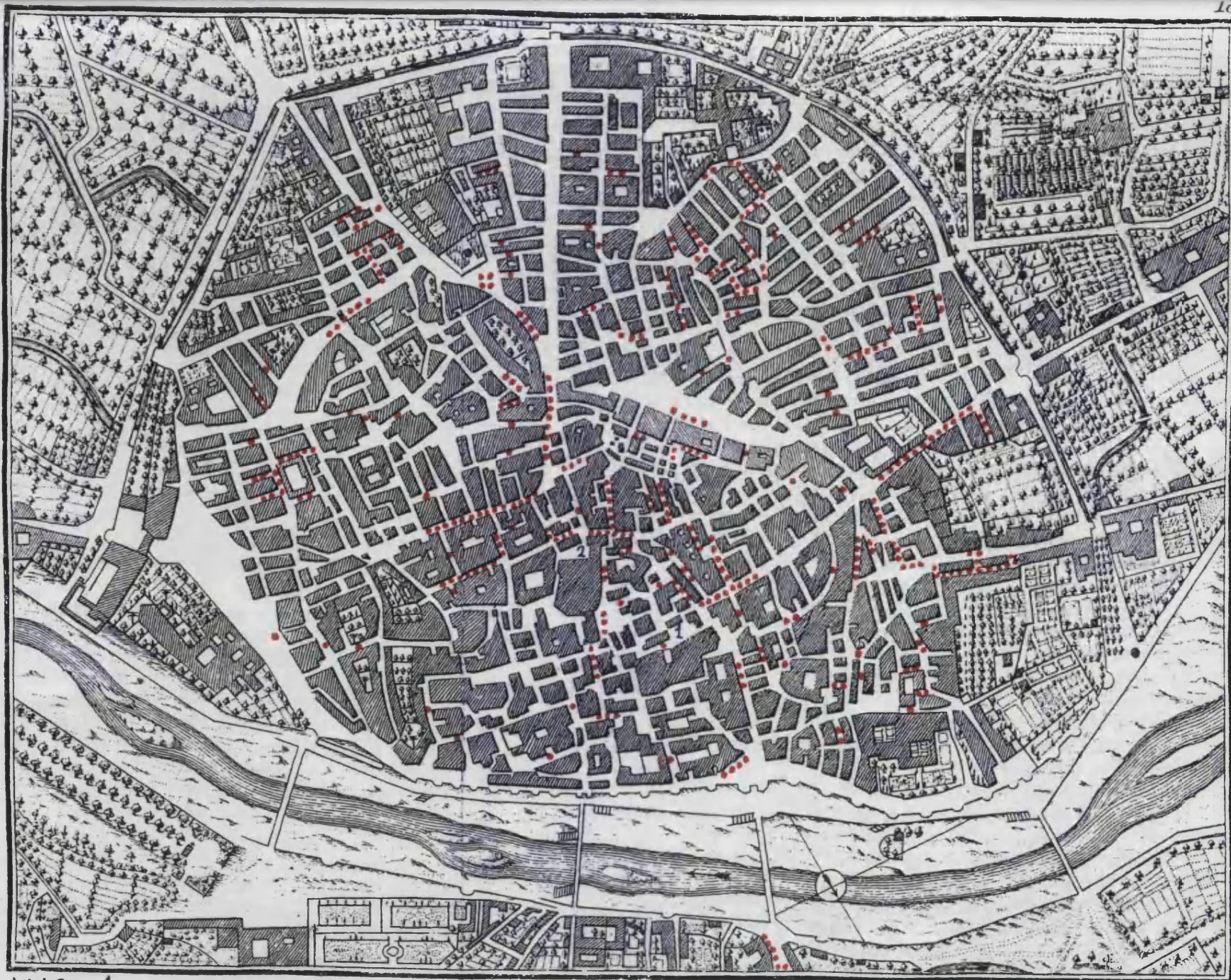
ADVERTENCIA.

Por Decreto de los Señores del Real y Supremo Consejo de Castilla de 21 de Mayo 1737 (es el Auto acordado 13. tit. 16. lib. 2. de la Nov. Recop.) está mandado : Que los Escribanos de Cámara de los Consejos, Juntas, y Tribunales Eclesiásticos, y Seculares, Escribanos de Provincia, Número, y Comisiones, no admitan en sus respectivos oficios, ni los Procuradores firmen pedimento, que no lo esté de alguno de los Individuos del Colegio de Abogados de la Villa, y Corte de Madrid; pena por la primera vez de 50 ducados; por la segunda de 6 meses de suspension de oficio; y por la tercera de privacion de él.

Por otro Decreto del Real Consejo de 16 de Julio 1737 (es el Auto acordado 14. tit. 16. lib. 2. de la Novísima Recopil.) se manda : Que cada uno de los Individuos del Colegio reconozca, si en los pleytos que despachare, se halla algun pedimento firmado de Abogado no comprendido en la lista, que anualmente se reparte; y que habiendole, tenga obligacion de dar cuenta al Secretario que fuere del Colegio, para que haciendolo presente á la Junta, ésta lo ponga en noticia del Consejo para la execucion de las penas, que sea servido imponer á los contraventores; con apercibimiento, de que si no lo hicieren, dará el Colegio cuenta al Consejo para que tome la condigna providencia. Y por el Estatuto 25 de este Colegio se manda : Que los Abogados recibidos en él, si se encontraren en pleytos con otros Abogados, que no estuvieren incorporados en él, pidan por un otrosí del Alegato que hagan; que no se admita otro pedimento de aquel Abogado, ni permita continuar en su defensa por no estar recibido en el Colegio, y que de otra suerte no los despache, lo qual se execute sin disculpa, ni respeto alguno por todos los Abogados del referido Colegio, para cuyo puntual cumplimiento, tenga cada uno una nomina de los recibidos en él, que se le dará por el Secretario; y que si algun Abogado Congregante no cumpliere con este Estatuto, sea apercibido, y multado por el Decano, dando las demás providencias convenientes en caso de reincidencia.

Y por otro Decreto del Real Consejo de 13 de Diciembre de 1761 (segun consta de la Real Cedula de 6 de Febrero de 1762, que contiene los Estatutos de nuestro Ilustre Colegio) se concedió, y aprobó la incorporacion por filiacion de este Colegio con el de la Corte; y se declaró, que todos los Decretos, Autos acordados, y Providencias promulgadas, y expedidas á favor del Colegio de Abogados de la Corte, fuesen, y se entendiesen comprensivas al Colegio de esta Ciudad, su Decano, é Individuos, del mismo modo que si para él se huviesen librado, obrando igual efecto en la Real Audiencia de este Reyno, y su Jurisdiccion sin diferencia alguna, gobernandose por los Estatutos de la Corte, corregidos, limitados, y arreglados como corresponde á las circunstancias, y estado de la Ciudad, Real Audiencia, y Abogados; lo que certificó como Secretario del Ilustre Colegio de los de esta Ciudad de Valencia, en ella á los 4 de Enero 1794.

Don Pedro Sacristán,
Secretario.



MAPA 1 • PROPIEDADES DE LOS

VALENCIA

1 Real Audiencia





MAPA 3 • DESPACHOS DE LOS VALENCIA

1 Real Audiencia